



**LAS POLITICAS LINGÜÍSTICAS Y LA INSERCIÓN DE LAS
LENGUAS MINORITARIAS EN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN
DE EUROPA**



Tesis para la Obtención del Grado de Doctor
por

JOSE M. SANMARTI ROSET

Se recuerda al lector no hacer más
uso de esta obra que el que
permiten las disposiciones Vigentes
sobre los Derechos de Propiedad
Intelectual del autor. La Biblioteca
queda exenta de toda responsabilidad.

Director:

Dr. D. Santiago Petschen Verdaguer

Madrid, Diciembre 1995

Dado de Baja
en la
Biblioteca

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
DE MADRID

FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA INFORMACION

REGISTROS DE LIBROS

BIBLIOTECA GENERAL

Nº Registro T.D. 372

h.a X-53-217914-4

Departamento de Derecho Público y Relaciones Internacionales de
la Facultad de Ciencias de la Información

Universidad Complutense de Madrid

LAS POLITICAS LINGÜISTICAS Y LA INSERCIÓN DE LAS LENGUAS
MINORITARIAS EN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE EUROPA

VOLUMEN I

A mis padres, que en tiempos difíciles me educaron en una lengua minoritaria

A mis hermanos y a mis hijos, con los que la he compartido

A mi esposa Manuela, con la que hablo en una lengua universal

"The European family contains diverse personalities. In this and in its need for tolerance and mutual support, it is like any family. The founders of the European Community wanted to draw strength from that diversity. They sought to manage and channel differences, to bind nations and peoples together in a common endeavour, as free partners.

You are part of an effort which is unique in the world's history. We are trying to preserve the rich diversity of European countries because, if that diversity is suppressed, we shall weaken Europe not strengthen it".

Fragmento del discurso de la Reina Isabel II de Inglaterra ante el Parlamento Europeo el 12 de Mayo de 1992

AGRADECIMIENTOS

Quiero agradecer en primer y principal lugar al Profesor Santiago Petschen Verdaguer, director de este trabajo, sus buenos consejos, su permanente disponibilidad para cualquier consulta y la confianza que ha mantenido siempre en el resultado final. Además, sus publicaciones e investigaciones en temas similares o relacionados con éste han resultado fundamentales para la realización de esta tesis doctoral.

También quiero dar las gracias a todas aquellas personas que de una forma u otra me han ayudado a lo largo de estos años. A Lluís María de Puig, miembro del Congreso de los Diputados y vicepresidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, quien me sugirió inicialmente el tema, me asesoró como experto en minorías lingüísticas y asuntos europeos y me proporcionó valiosísimos documentos. Al personal de los respectivos Servicios de Documentación de la Oficina de la Unión Europea y de la Delegación del Parlamento Europeo en Madrid que me abrieron sin reservas sus archivos en los que he podido encontrar gran parte del material citado en las páginas siguientes. A Félix Santos y Francesc X. Ferrer que me consiguieron importantes declaraciones del Consejo de Europa. Al personal del European Bureau for Lesser Used Languages de Dublín, y muy especialmente a Ricarda Jenniges, con quien sostuve interesantes conversaciones, y donde obtuve mucho material de consulta actualizado.

Mi agradecimiento también a Jordi Bañeres del Centro de Documentación de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya por sus interesantes sugerencias y su amable colaboración en la búsqueda de datos. A Aureli Argemí y a Oriol Ramon del CIEMEN de Barcelona, sin los cuales este trabajo hubiese sufrido importantes carencias. A Josep Maria Puigjaner, subdirector general del Servei de Publicacions de la Generalitat de Catalunya. A Josep Ribera, director del CIDOB, quien nunca puso límites a su ayuda personal, ni a la del fondo documental de la organización que dirige. A Ramón Berriozabal, Secretario General de Política Lingüística del Gobierno Vasco, y a José Arizmendi que me facilitaron enormemente la búsqueda de documentación en la sede del Gobierno Vasco en Vitoria. A Jesús Atienza y Manuel Cacho, director y subdirector de la Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores, quienes me consiguieron toda la documentación precisa sobre la CSCE. Al personal del Centro de Estudios y Documentación Europea en Madrid, quién me solventó el vacío documental sobre la UNESCO.

Muchas otras personas en mayor o menor medida han colaborado en la preparación de esta tesis: la señorita Giovanna Bombardieri de la Fundación Encuentro, muy atenta a los problemas de las minorías lingüísticas; Allison Kelly, agregada de prensa de la Embajada de Irlanda; Marga Moreno, filóloga; mis hermanas Montserrat, Pilar, Roser y Carme, que me aliviaron muchos trabajos de logística. Mi gratitud también para Jaume

Riba, Joan Sanmartí, Lluís Forn, M^a Pura Badenes, Eulalia Amat, Jordi Ludevid, Xavier Sanmartí, Narcís Carulla y los hermanos Xavier e Ignasi Aballí por los apasionados, pero clarificadores debates sobre estos temas y otros colaterales que tantas ideas han aportado a la tesis. Mil gracias a José Luis Torres Murillo por sus sabios consejos y sus prudentes puntos de vista.

En los momentos clave mucho me ayudaron la dirección y mis compañeros del diario barcelonés AVUI. Mi más sincero agradecimiento a Josep Maria Torrent, Jordi Capdevila, Josep Capella, Enric Bruguera y Enric Hernández que en más de una ocasión suplieron con su esfuerzo adicional el tiempo que no pude dedicar a mis tareas profesionales. Y mucho también tengo que agradecer a mi familia, empezando por mi esposa Manuela, a quienes les sustraje tantos y tantos ratos "libres" que se consumieron en la redacción de la tesis.

Por último, quiero dar las gracias más expresivas al Programa d'Estudis Catalans "Joan Maragall" de la Fundació José Ortega y Gasset y la Fundació "La Caixa" por la beca de investigación que me concedió en 1994.

ABREVIATURAS

CAHRL = Comité Ad Hoc para las Lenguas Regionales
C. de E. = Consejo de Europa
CE = Comunidad Europea
CEE = Comunidad Económica Europea
CEI = Comunidad de Estados Independientes
CELRM = Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias
CH = Confederación Helvética
CPPLRE = Conferencia Permanente de Poderes Locales y Regionales
de Europa
CSCE = Conferencia de Seguridad y Cooperación de Europa
EBLUL = European Bureau for Lesser Used Languages
EEE = Espacio Económico Europeo
EEUU = Estados Unidos de América
ONU = Organización de Naciones Unidas
OSCE = Organización de Seguridad y Cooperación de Europa
PE = Parlamento Europeo
PCUS = Partido Comunista de la Unión Soviética
RDA = República Democrática Alemana
RFA = República Federal Alemana
TIJ = Tribunal Internacional de Justicia
UE = Unión Europea
UEO = Unión Europea Occidental
URSS = Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
US = Unión Soviética

INTRODUCCION

Este trabajo trata de estudiar la evolución de las distintas políticas lingüísticas y el papel desarrollado por las minorías lingüísticas durante los cerca de 50 años de construcción de una Europa unida. Dada la estructura del proceso, dichas políticas se refieren tanto a las de los Estados que forman la actual Unión Europea, como a las de las correspondientes instituciones pan-europeas. La ordenación lingüística de Europa representa sin duda uno de los retos más importantes en su camino hacia la unión, tanto por las complicaciones substantivas a cualquier proyecto de este orden, como por el creciente significado que tienen las lenguas de cara a definir la identidad de los pueblos que participan directa o indirectamente en esta comunidad de naciones. Las grandes lenguas de Estado deben convivir en un armónico equilibrio entre ellas y con las minoritarias, sin que ello signifique la renuncia definitiva a buscar la mítica lengua común que permita una relación más fluida entre todos los ciudadanos europeos.

En este caso, no parece que se trate de una, sino de varias lenguas, pero el fondo de la cuestión consiste todavía en asegurar la participación viva y activa de todas las culturas y las lenguas en la andadura hacia la construcción de Europa, de tal modo que ninguna comunidad lingüística, por pequeña o

atrasada que sea, se sienta postergada o marginada de ella. Las lenguas de Estado con el poder de éste detrás suyo, parecen tener garantizada algún tipo de presencia en las instituciones supraestatales, pero no es ésta la misma situación de las lenguas minoritarias, muchas de las cuales viven aún en precario dentro de su propio Estado. Dotar a estas comunidades del peso suficiente como para permitirles representar el papel que le toca a cada una en una Europa unida, plurilingüe y pluricultural es una de las misiones en las que están empeñadas las principales instituciones pan-europeas, como el Parlamento Europeo, el Consejo de Europa o la Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa (CSCE)¹.

Conviene señalar que en más de una ocasión esta política europea de integración tropieza con el desinterés e incluso la hostilidad de algunos Estados, mayoritariamente decantados en su interior hacia políticas monolingüísticas o, por lo menos, de lengua de Estado predominante. Se establece así una contradicción entre la conducta real de los Estados y la declarativa de las instituciones europeas, origen con frecuencia de tensiones y fricciones entre ambas fuentes de legitimidad. Hay que tener presente que en toda Europa la cuestión de las minorías posee una larga tradición de conflictos, circunstancia que añade a la ya de por sí complicada situación, toda una carga político-histórica susceptible de endurecer y mucho las polémicas en curso.

Una vez esté asegurado en la teoría y en la práctica el uso democrático de las lenguas minoritarias no de Estado, las instituciones europeas deberán entrar sin duda en algún tipo de ordenación interna, que sustituya la actual política de ir sumando las lenguas oficiales y de trabajo de la UE. Este método, que pudo ser un acierto a la hora de predicar con el ejemplo una Europa pluricultural y plurilingüe, puede llevar a la larga a la Unión a un verdadero caos de lenguas, que sin ningún género de dudas desencadenaría otros muchos conflictos subsidiarios. Pero esta ordenación no puede ser unilateral: debe reflejar un gran pacto lingüístico entre las distintas poblaciones, por el momento muy indeterminado aún.

Sea como sea, hay dos hechos evidentes: que la polémica sobre las lenguas aparece viva y actual en los medios políticos, educativos, culturales, administrativos, judiciales, informativos, e incluso militares de Europa, y que los organismos europeos se han ocupado largamente de este tema. Baste una simple ojeada a los periódicos españoles y continentales para comprobar que se trata de una cuestión reiterativa, sobre todo entre los intelectuales y los responsables políticos. Es más, tanto la una como lo otro se han intensificado en los últimos años, e incluso varios Estados han revisado su legislación lingüística, no siempre para adaptarla progresivamente a la nueva normativa europea.

En efecto, los sucesivos documentos y declaraciones aprobados por las distintas organizaciones pan-europeas, sobre todo desde 1979, conforman ya un cuerpo doctrinal en materia lingüística suficientemente asentado, al que deben sujetarse los Estados.

Elementos a considerar:

Para que la investigación resultara útil había que analizar el máximo número de elementos de política lingüística que intervienen por distintos caminos en la construcción de Europa.

Nosotros abordaremos los siguientes en los capítulos posteriores:

- a) análisis de la normativa en materia lingüística vigente en las instituciones europeas;
- b) evolución lingüística desde la II Guerra Mundial de cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea, así como de los países candidatos a su ingreso;
- c) evolución general lingüística de los países de Europa Central y Oriental desde el restablecimiento de la democracia;

- d) las relaciones de los Estados con sus minorías lingüísticas a partir de la II Guerra Mundial, es decir a partir de los inicios del proceso de unión;
- e) las relaciones entre las instituciones pan-europeas y las minorías lingüísticas en el contexto de los derechos humanos y de la política regional;
- f) los principales documentos emitidos por dichas instituciones, en particular el Parlamento Europeo, el Consejo de Europa y la CSCE;
- g) las posiciones comunes y permanentes que se derivan del análisis de dichos documentos.

Límites del trabajo:

El hecho de que la política lingüística se halle relacionada con muchas otras disciplinas (sociología, lingüística, historia, etc) obliga a establecer un primer límite metodológico a esta investigación. Se trata de dar una visión exclusivamente política, institucional y jurídica del problema. En ningún caso nos creemos autorizados para entrar en cuestiones de estructura lingüística, como por ejemplo la diferencia entre lenguas y dialectos, su origen, su fonética,

etc. Las lenguas citadas son las que tienen algún tipo de reconocimiento en los documentos oficiales, sin menoscabo de las polémicas propiamente lingüísticas que puedan relacionarse con ellas. Esto no afecta solamente a las lenguas minoritarias, sino también a las mayoritarias. Así, por ejemplo, aceptando el criterio político más generalizado tratamos el idioma alemán como uno sólo, sin distinguir el "bajo alemán" y el "alto alemán", tal como hacen legítimamente algunos expertos. Ello no obsta para que se señale su dialectización cuando es hablado por ciertas minorías fuera de Alemania.

El segundo límite se refiere al ámbito geográfico e institucional del trabajo. En principio, éste se circunscribe a la Unión Europea por ser indiscutiblemente la institución originaria y más completa surgida del proceso de construcción política y económica de Europa. El Consejo de Europa y la CSCE conservan un carácter más de asociación de países, aunque es innegable su papel creciente en el mismo proceso. Es preciso subrayar, por otra parte, que los países miembros de la Comunidad Europea han formado a su vez el núcleo del Consejo de Europa y hasta cierto punto también de la CSCE. No es de extrañar, pues, que las declaraciones lingüísticas se superpongan y se entrelacen, apoyándose las unas en las otras. El marco general es el mismo.

La participación de las tres instituciones, cada una en su medida, en la construcción de una Europa unida desde los Urales hasta el Atlántico, y su inicial preocupación común y compartida por las minorías lingüísticas imposibilitan una compartimentación estricta, limitada a la Unión Europea y obligan a dar paso a las otras dos instituciones comprometidas desde sus competencias y su óptica en las dos cuestiones que constituyen la base de partida de esta tesis (la política lingüística y la unión europea). Ello no obsta para que el centro de gravedad de la tesis permanezca en la Unión Europea y que en términos generales la profundización en el examen del problema se diluya a medida que éste se traslada de Oeste a Este. Al igual que en muchos otros asuntos, la década de los años 1990 ha producido un acercamiento y a medio plazo una uniformización de ciertos problemas lingüísticos, que en muchos casos se hallaban vinculados simplemente al proceso de normalización democrática. Hoy día muchas de las declaraciones elegidas son válidas y operativas para prácticamente todos los países europeos hasta hace pocos años separados por irreductibles barreras ideológicas, políticas e institucionales. Otra cosa es que sólo sean vinculantes para los países miembros de la correspondiente institución que los hayan aceptado.

Por ello este trabajo establece algunas excepciones, especialmente con los países candidatos al ingreso en la Unión

Europea y con algunos de Europa Central y Oriental más ilustrativos en la materia que tratamos, como pueden ser Rusia o Hungría.

Como tercera limitación conviene señalar que este trabajo no pretende ser exhaustivo, ni en la descripción de la situación actual de las grandes lenguas de Estado y de las minoritarias, ni en la recopilación de los grandes documentos. Por su complejidad y su coste en tiempo y recursos esta misión sólo puede ser encomendada a organismos oficiales o privados, algunos de los cuales, como el propio Consejo de Europa², están llevando a cabo con gran eficacia y dignidad esta empresa. El rigor, en cambio, ha sido extremo en la selección y actualización de los datos y de los documentos básicos con el fin de dar una visión lo más ajustada posible a la realidad y para establecer unas conclusiones bien contrastadas.

Por último, no es objetivo de este trabajo descubrir las posibles intenciones ocultas de los signatarios de las declaraciones institucionales, ni hacer el seguimiento de su aplicación en cada país, en cada minoría concreta. Recogemos la literalidad de estas declaraciones y los motivos que en su momento se adujeron públicamente para apoyarlos u oponerse, y señalamos su contexto para poder establecer la doctrina europea sobre la política lingüística a la que deben atenerse unos y otros con el fin de alcanzar una ordenación lingüística acorde

con el proceso de unión. Para unos se trata simplemente de un reparto de poder en el que los grandes salen sistemáticamente beneficiados, para otros se trata de una nueva visión multicultural y plurilingüe de la sociedad europea como conjunto.

Estructura del trabajo:

Establecida la hipótesis de trabajo, la primera tarea a realizar fue la de reunir, clasificar y analizar la bibliografía y la documentación de trabajo. Es preciso señalar desde el principio que existe una cantidad enorme de material de trabajo y que su producción se ha acelerado considerablemente durante los últimos años. Una vez determinado el plan de trabajo y ordenados los documentos y la bibliografía, la tesis fue estructurada en cuatro bloques divididos en seis capítulos expositivos y uno de conclusiones.

El primer bloque abarca los Capítulos Primero y Segundo y se refiere a la política lingüística interna de los Estados europeos. El Capítulo Primero se refiere a las lenguas de Estado, que en definitiva serán las protagonistas también de las instituciones europeas. En este repaso se observa como cada Estado cuenta con una lengua hegemónica y normalmente única.

Sólo Bélgica constituye un caso aparte en el sentido de que el necesario equilibrio entre sus dos lenguas de Estado, el francés y el flamenco, ha incidido abiertamente en sus estructuras estatales y ha acabado por el reparto lingüístico. En todos los demás casos de oficialidad compartida el desequilibrio sigue siendo muy grande a favor de alguna de las lenguas, como sucede con el inglés en Irlanda o incluso con el francés en Luxemburgo. Fuera de la Unión Suiza aparece como otro ejemplo claro de Estado plurilingüe, aunque con una evidente ventaja a favor del alemán.

En este Capítulo se examinan también los países que han sido candidatos al ingreso a la UE, como Noruega, que están a punto de adherirse, como Chipre y Malta, o que por su características iniden abiertamente en el tema tratado, como es el caso de Suiza.

La entrada de varios países del antiguo bloque soviético en el Consejo de Europa y el pronunciamiento de la CSCE sobre temas lingüísticos ha hecho que los Estados de la Europa Central y Oriental participen desde 1990-91 de muchos de estos planteamientos. Por ello este Capítulo incluye una visión de las distintas políticas lingüísticas llevadas a cabo en esta zona durante estos últimos cinco años, con una atención especial a Rusia y Hungría, por la magnitud de sus cambios, las repercusiones en otros países y la presencia de minorías

propias en los Estados vecinos. Se trata de resituar las nuevas lenguas de Estado en el nuevo mapa político surgido con la desaparición de la URSS y del bloque soviético.

Sin embargo, en los Estados occidentales examinados en el Capítulo I aparecen registradas unas 58 minorías lingüísticas cuyo idioma no es oficial del Estado en que viven, aunque puede serlo de otro. El **Capítulo Segundo** se ocupa de las relaciones entre estos Estados y sus minorías lingüísticas. Aparece entonces un panorama complejo y en parte confuso aún, en el que las distintas políticas lingüísticas siguen caminos muy dispares. Incluso un mismo Estado puede tratar de forma diferente a las minorías lingüísticas presentes en su territorio. En todo caso, la tradición histórica hacia el unilingüismo y la lengua hegemónica ha creado un cuerpo legislativo y unos hábitos tendentes en general a marginar, si no a perseguir, dichas minorías, consideradas como elementos disgregadores del Estado-nación, sobre todo frente a los enemigos de éste.

En este Capítulo II se sigue el mismo esquema que en el anterior, incluyéndose a los países candidatos a la UE, a Suiza y a los de la Europa Central y Oriental.

El segundo bloque se circunscribe a las políticas lingüísticas de las instituciones europeas. Abarca el **Capítulo Tercero**, aunque repartido a su vez en dos partes. En la primera

se analiza el régimen lingüístico de las instituciones europeas, principalmente de la UE por ser el más complejo y al mismo tiempo el más indicativo. La adopción del "multilingüismo integral" referido sólo a las lenguas de Estado rompe en cierto modo el modelo seguido hasta entonces por los Estados que componen la Unión, originando una contradicción de ley y de hecho. Muchos Estados reticentes o contrarios al plurilingüismo interno, lo aceptan en las instituciones aunque sólo sea como mal menor. A medida que la Comunidad se va fortaleciendo y ampliando esta contradicción va aumentando y exigiendo una salida consensuada que hoy por hoy no se vislumbra.

La adopción del multilingüismo integral por parte de las instituciones hace más flagrante si cabe la marginación, ahora doble, de las lenguas minoritarias. La evolución político-institucional vivida por Europa en aspectos tan distintos como la profundización de los derechos humanos o la política regional, hizo que las instituciones entraran en contacto con las reivindicaciones de las minorías lingüísticas y las atendieran, no tanto desde la perspectiva tradicional de los Estado, como desde la suya propia, sin duda influida poco o mucho por los gobiernos estatales de turno.

Este exámen desde las instituciones originó una secuencia de declaraciones, recomendaciones y convenciones por parte de la UE y su Parlamento, del Consejo de Europa y de la CSCE, especialmente entre 1979 y 1994. En el tercer bloque, compuesto

por el Capítulo Cuarto y el Capítulo Quinto, se da una visión de las principales declaraciones, todas las cuales van conformando sin pretenderlo de una forma expresa y ordenada un verdadero cuerpo doctrinal. En el Capítulo IV cada institución se va pronunciando según sus características y sus objetivos, pero hay sin duda una simetría en las distintas posiciones que conduce a numerosas coincidencias y a la larga un mínimo común denominador para todos. Al fin y al cabo, los redactores y especialmente los que aprueban dichos documentos son muchas veces los mismos en los tres organismos europeos, y en último término la sombra por no decir que la mano de los Estados aparece en la firma final de muchas, aunque no todas, estas declaraciones. En este Capítulo se presta una atención especial a la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, la declaración de mayor alcance hasta ahora y, por ende, la que sufrió un proceso de preparación más turbulento y polémico. Se trata hasta ahora del compromiso más amplio y concreto suscrito entre las tres partes concernidas, es decir las instituciones europeas, los Estados y las minorías lingüísticas, por más que éstas no participaran formalmente en su elaboración.

Dicho cuerpo doctrinal es expuesto en el Capítulo V. Consiste en señalar los puntos de coincidencia positivos y de poner en blanco sobre negro determinadas conclusiones que automáticamente se desprenden de los documentos examinados, sin necesidad de ser formulados de una manera explícita. Se comprueba que el panorama lingüístico se mueve en toda Europa,

y que no es el mismo que el dominante hace tan sólo 15 años. No deja de ser importante comprobar que además estos principios y estos acuerdos sean hoy día válidos para toda Europa desde los Urales hasta el Atlántico en la búsqueda de una unión basada también en la democracia lingüística.

El cuarto bloque, compuesto por el **Capítulo Sexto** y las **Conclusiones**, plantea una visión de futuro del problema en un doble sentido, el gran debate abierto en la sociedad europea sobre la mejor política lingüística y el interrogante sobre la forma en que hay que conducir la necesaria ordenación lingüística en las instituciones y entre los europeos en general. Dicho de otro modo, ¿es compatible un proceso de unión continental con la permanencia y el respeto al plurilingüismo? Y en caso afirmativo, ¿cuál debe ser la fórmula a adoptar? Adelantamos aquí que las instituciones se pronuncian claramente a favor del multilingüismo integral, contando con todas las lenguas existentes en la actualidad, y que la fórmula debe ser el plurilingüismo general a través de la educación y los intercambios. La rotundidad de esta aspiración no oculta los problemas y las resistencias que origina en distintos sectores. El tema no queda, pues, cerrado, sino que se incardina en una sociedad y en unas instituciones estatales y europeas vivas, en constante evolución e influidas por numerosos factores que a su vez inciden en el porvenir lingüístico de la gran Unión Europea en ciernes.

Las características específicas de esta tesis

Sería una osadía incomprensible tratar de competir con los grandes trabajos efectuados por expertos tan acreditados como Salvi o Pogarell, si no fuera porque este trabajo pretende simplemente actualizar los análisis efectuados con anterioridad. No es nuestra intención revisar dichos estudios o los de instituciones, como la Comisión Europea, de sus posibles errores o lagunas, sino completarlos y ponerlos al día hasta primeros de 1995. Se incluyen, por ejemplo, la Declaración Killilea del Parlamento Europeo, aprobada unos días antes de la última disolución de este órgano comunitario, o el Protocolo Adicional a la Carta de Europea de los Derechos Humanos, aprobado también a finales de junio de 1994.

Un marco político-legal todavía inestable e inacabado

Es preciso señalar que la construcción europea sigue sufriendo distintas vicisitudes internas y externas, algunas de ellas previstas o programadas y otras no, aunque dispone ya de un "núcleo duro" representado por la UE. No existe una estructura política y jurídica interna que pueda ser considerada definitiva, por lo que el resultado final (utilizando esta fórmula en comparación con las estructuras estatales mucho más consolidadas) es aún incierto. Las nuevas adhesiones y las solicitudes de ingreso pendientes (Chipre,

Malta, Polonia, Hungría, Eslovenia, República Checa, etc.) son el signo más visible, y quizá el más destacado de esta evolución.

Por ello, es importante tener en cuenta que las políticas lingüísticas en curso se desarrollan en un marco institucional, jurídico y político todavía de gran movilidad, que las afecta directamente. Así, la inscripción de nuevos países ha comportado hasta ahora la incorporación automática de nuevas lenguas de Estado y al mismo tiempo de nuevas minorías lingüísticas dentro de la UE. Pero al mismo tiempo aportan fórmulas estatales distintas y nuevas situaciones a tener en cuenta a la hora de elaborar una doctrina y unas normas lingüísticas comunes y válidas para todos.

Tres instituciones para la construcción de Europa

Teniendo en cuenta que la UE es el proyecto europeo más completo y consolidado, no puede pasarse por alto que el Consejo de Europa (C. de E.) y la Conferencia para la Seguridad y Cooperación en Europa (CSCE) participan también en el proceso de construcción, cada una en el ámbito de sus fines y competencias. No sólo muchos Estados participan en dos o en incluso en las tres instituciones, sino que las interconexiones entre ellas son múltiples y expresas. Esto conlleva un "trasvase" de los problemas y, por lo mismo, de los enfoques

lingüísticos. Sería un grave error considerar cada una de las tres instituciones como un campo cerrado e impermeable a las cuestiones lingüísticas, como a las otras. De ahí, la atención que prestamos al Consejo de Europa y a la CSCE en la páginas siguientes.

Las fuentes documentales

Mucho se ha avanzado en los últimos años en la recopilación y catalogación de la abundante documentación relativa a la política lingüística y a las minorías lingüísticas en Europa Occidental. Y nos apresuramos a reconocer el enorme esfuerzo que distintos organismos españoles, públicos y privados, han realizado desde finales de los años 1970 no sólo para ponerse al día, sino incluso en los puestos de cabeza a la hora de disponer de los fondos indispensables. Es justo señalar que algunos de estos centros no oficiales realizaron una meritoria labor desde antes de la restauración de la democracia en nuestro país. Fruto de estas iniciativas es, por ejemplo, la obra del Profesor Santiago Petschen Las Minorías Lingüísticas de Europa Occidental: Documentos (1492-1989), valiosísima recopilación documental que, dicho sea de paso, ya requiere una actualización hasta nuestros tiempos. Con otra metodología también Lluís María de Puig desbrozó el terreno con su Les Llengües Minoritàries d'Europa: Estat de la Qüestió. En el exterior S. Salvi, R. Pogarell y M. Stephens entre otros ya

habían hecho recapitulaciones absolutamente claves.

Las aportaciones de los organismos europeos se han hecho esperar algo más. En 1985 la Comisión Europea hacía público un informe lingüístico muy irregular, pero base para otros trabajos. El Consejo de Europa publicó otro mucho más riguroso en 1994. Entre estas dos fechas han aparecido varios resúmenes de las lenguas en Europa a cargo de centros como el EBLUL de Dublín o el CIEMEN de Barcelona, habiéndolo hecho éste último incluso con soporte informatizado.

A ello hay que sumar los documentos de apoyo elaborados por los ponentes de las distintas declaraciones europeas desde Cirici y Arfé hasta nuestros días. En septiembre de 1994 se anunciaba como inminente la publicación del Euromosaic a cargo conjuntamente del Institut de Sociolingüística Catalana de Barcelona y del Centre de Recherche sur le Multilinguisme de Bruselas con financiación de la CE y asesoramiento del EBLUL. Esta obra, cuyos trabajos empezaron en 1993, debería constituir el análisis definitivo de la reproducción, el prestigio, la institucionalización, el uso y la legitimación de 46 lenguas consideradas minoritarias o regionales de la Unión Europea, ante las once consideradas oficiales o de trabajo.

Los documentos públicos emitidos por la Comisión Europea y el Consejo Europeo son fácilmente asequibles en la Oficina que la Unión Europea mantiene en Madrid y que dispone de un

eficiente servicio de documentación. Existen ciertas dificultades, sin embargo, para obtener documentos anteriores al 1 de enero de 1986, fecha de ingreso de España en la Comunidad Europea. Lo mismo puede decirse para la documentación relativa al Parlamento Europeo, organismo que dispone de una delegación y un servicio de documentación en Madrid hoy día bajo la dirección de Fernando Carbajo. Ni que decir tiene que existe la alternativa de recurrir directamente a los centros de documentación de ambos organismos en Bruselas, Estrasburgo y Luxemburgo, gestiones que a veces requieren varios meses.

Por lo que respecta al Consejo de Europa las dificultades se acrecientan dado que no consta ninguna delegación oficial y estable en Madrid. Existe una librería, **Mundi-Libro**, especializada en publicaciones de organismos europeos, pero con importantes carencias y limitaciones. La buena voluntad del delegado de prensa del Consejo de Europa en España, actualmente Félix Santos, suple este vacío en la medida de sus posibilidades. Es preciso señalar en este punto que encargar el envío de documentos desde organismos europeos a España sigue siendo todavía un proceso fundamentalmente lento. El recurso a las embajadas dió escasos frutos.

Ciertamente los documentos principales suelen ser publicados por las revistas especializadas, como "Política Exterior" o "Afers Internacionals", pero no siempre es posible obtenerlos por esta vía, y en no pocos casos se trata de versiones

resumidas o de traducciones muy defectuosas.

La documentación relativa a la CSCE fue muy laboriosa de reunir. Hubo que recurrir a la Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores, así como a las citadas revistas especializadas.

Otros organismos internacionales, como la ONU o la UNESCO, disponen también de delegaciones en Madrid y suelen proporcionar los documentos habituales sin mayores dificultades.

Para las lenguas minoritarias en Europa no consta ningún archivo público accesible en Madrid. La información precisa para este trabajo fue obtenida en cuatro fuentes distintas: el European Bureau for Lesser Used Languages (EBLUL) en Dublín, el Centre de Documentació de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya en Barcelona, el Servicio de Documentación de Política Lingüística del Gobierno Vasco en Vitoria, y el Centre Internacional Escarré per a les Minories Etniques i les Nacions (CIEMEN) en Barcelona. Las revistas "Contact Bulletin" del EBLUL y "Europa de les Nacions" del CIEMEN han resultado fundamentales a la hora de actualizar los datos recogidos.

También lo fue la base de datos informatizada "MERCATOR. DROIT ET LEGISLATION LINGUISTIQUES", gestionada y editada desde

cuatro sedes: el University College of Wales, Aberystwyth, (País de Gales) para todo lo referente a medios de comunicación; el Comité Français du EBLUL (Francia) para los datos referentes a estudios generales; el CIEMEN (Barcelona) para la legislación; y la Fryske Akademy (Países Bajos) para los temas educativos. Funciona bajo la coordinación general del EBLUL y con el apoyo de la Comisión Europea y de distintos organismos regionales.

Por lo demás, hemos encontrado datos interesantes aunque dispersos en centros menos especializados. Así, por ejemplo, la Fundación José Ortega y Gasset de Madrid ha celebrado últimamente varios seminarios y coloquios relacionados con estos temas, lo mismo que la Fundación Encuentro también de Madrid, quien ha editado muchos de los documentos básicos. El Centre de Informació i Documentació de Barcelona (CIDOB) dispone asimismo de un completísimo archivo particularmente útil para las minorías en Europa central y oriental. Ya con carácter muy asistemático es posible encontrar documentación y bibliografía en las Bibliotecas de las Facultades de Ciencias de la Información y de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid y de la Universidad de Barcelona, así como en la Biblioteca del Col·legi de Periodistas de Barcelona y en la del Ateneo de Barcelona. En la Universidad de Girona existe un importantísimo centro documental en fase de catalogación y todavía no abierto al público, que, de vencer ciertos problemas financieros, podría convertirse en el más

importante de Europa.

Por último, no son en absoluto desdeñables los archivos privados, que durante muchos años han suplido en España la carencia de otros institucionales. Hay que señalar en primer lugar los fondos documentales reunidos por los profesores Santiago Petschen y Lluís Maria de Puig, en los cuales se encuentran auténticas "joyas" relacionadas con estos temas que nos ocupan. También durante nuestra actividad profesional hemos tenido ocasión de reunir, muchas veces con intenciones muy distintas a la redacción de esta tesis, ciertos documentos que han resultado francamente útiles para ella.

NOTAS A LA INTRODUCCION

1. El punto 3 de la Declaración Final de la Cumbre de Budapest de esta institución celebrada el 6 de diciembre de 1994 indica que "la CSCE será conocida en adelante con el nombre de Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE)"

2. COMMITTEE OF EXPERTS ON REGIONAL OR MINORITY LANGUAGES IN EUROPE (CAHLR): The situation of Regional or Minority Languages in Europe, Council of Europe, Strasbourg 1994

CAPITULO I

LA CREACION DE UNA UNION EUROPEA PLURILINGÜE

POR UNOS ESTADOS TENDENTES AL MONOLINGÜISMO

1.1: Objetivos y estructura del capítulo

El proceso de construcción europea ha sido protagonizado casi en exclusividad por los Estados y está ya muy asentada la doctrina de que la unión europea no debe significar la disolución de los Estados miembros en favor de un poder europeo central¹. Los Estados están en el origen u en la base de las instituciones europeas actuales y, a lo sumo, ceden competencias suyas en favor de las instancias comunitarias, pero de ninguna manera se cuestiona su viabilidad, su estructura jurídico-político-administrativa interna, ni su territorio. Su progresiva incorporación al proceso europeo se ha realizado aportando su personalidad íntegra, incluyendo la(s) lengua(s) que lo definen como tal.

Por esta razón, el peso de las lenguas de Estado sigue siendo decisivo en cada uno de los Estados miembros y como consecuencia en todas las instituciones europeas. La realidad demuestra que la pugna lingüístico-política entre los Estados, dentro de los Estados y en las instituciones europeas afecta principalmente a las lenguas de Estado y en mucho menor grado a las lenguas minoritarias, cuyo ámbito de acción raramente sobrepasa el de su Estado.

El cuadro lingüístico actual es el fruto de la larga evolución histórica experimentada por cada Estado, en la que han participado distintos elementos desde militares hasta

culturales, pasando por los legislativos y religiosos. En casi todos los casos, la lengua ha constituido un factor clave en la formación del Estado, ha servido para definirlo y distinguirlo de los otros, y se ha convertido finalmente en una de las bases de los nacionalismos de Estado contemporáneos. Estas lenguas son las que a lo largo de la unificación europea se trasladaron automáticamente a sus instituciones, creando un modelo nuevo y distinto de relación institucional, política y lingüística.

En este Capítulo se da una perspectiva de estas lenguas de Estado con las que opera la UE. En la primera parte se analiza la implantación de cada una de ellas y las relaciones entre ellas, mientras que en la segunda parte se observa su papel país por país.

Se incluyen en esta panorámica los casos de Chipre y Malta por ser los dos próximos países miembros de la Unión, así como los de Noruega y Suiza, Estados que disponen de un sistema lingüístico homologable a los de los Estados comunitarios. También se añade una visión general de la evolución lingüística en los Estados de Europa Central y Oriental que empezaron a participar en el proceso de unión a partir de los años 1990-91, con una atención más detenida en Rusia y Hungría.

1.2.: Las lenguas de Estado oficiales

En los 15 Estados miembros de la UE existen 13 lenguas que gozan del estatuto de oficialidad, o por lo menos del rango de lengua de Estado en uno o en varios de ellos. Son el alemán, el danés, el español, el finlandés, el francés, el griego, el inglés, el irlandés, el italiano, el luxemburgués, el neerlandés, el portugués, el sueco.

El alemán es el único idioma declarado oficial en solitario en más de un Estado miembro (RFA y Austria), y hay 5 declarados de oficialidad única en al menos un Estado comunitario y a la vez co-oficial en otros(s) Estado(s), en todo o parte de su territorio (inglés, francés, sueco, alemán y neerlandés).

El francés es la única lengua oficial de Francia y de la parte valona de Bélgica y co-oficial en situación predominante en la región de Bruselas y en el Gran Ducado de Luxemburgo. También es co-oficial en la región del Valle de Aosta en Italia. El inglés es oficial en todo el Reino Unido y es co-oficial, junto al gaélico o irlandés, en situación predominante en la República de Irlanda. El neerlandés es oficial en los Países Bajos y en la parte flamenca de Bélgica y es co-oficial en la región de Bruselas. El alemán es oficial en la RFA y en Austria y en la zona germanófono de Bélgica, así como co-oficial en Luxemburgo, junto con el francés y el luxemburgués.

El sueco es oficial en toda Suecia y co-oficial en algunas comunas de Finlandia.

Hay otras 6 lenguas oficiales en un sólo Estado comunitario: el castellano o español en España, el portugués en Portugal, el danés en Dinamarca, el griego en Grecia, el finlandés en Finlandia y el italiano en Italia.

Todos los Estados comunitarios han logrado que todos sus ciudadanos conozcan la lengua oficial. Según datos de la Comisión Europea anteriores a la ampliación de 1995², con el 24% de hablantes el alemán es la lengua materna más hablada dentro de la Unión. (A partir de 1995 hay que añadirle la población de Austria). El italiano y el inglés se sitúan en segundo lugar con el 17% de la población comunitaria cada uno, mientras que el francés les sigue de cerca con el 16%.

Si no se distingue entre la lengua materna y una segunda lengua, resulta que el 42% de los ciudadanos comunitarios se consideran capacitados para hablar inglés, el 31% alemán y el 29% francés. La población comunitaria que habla alemán, inglés y francés suma más que la que utiliza las otras 11 lenguas. El inglés es la única lengua que puede ser utilizada por más europeos que no la tienen por lengua materna (25%) que por aquéllos que la usan como primera lengua (17%). El 41% de los ciudadanos de la UE han realizado estudios de inglés como segunda lengua, mientras que el 28% lo han hecho de francés y

el 15% de alemán.

El 14% de los españoles declara que su lengua materna no es la oficial del Estado, es decir el catalán, el euskera, o el gallego. También en Irlanda el gaélico es la lengua materna del 10% de la población estatal. El 94% de los luxemburgueses declaran tener como lengua materna una distinta de las 11 lenguas de trabajo de la UE, el luxemburgués. En ningún otro Estado la población que declara tener como lengua materna otra que no sea la oficial del Estado sobrepasa el 10%³.

1.3: ~~Las lenguas de Estado dentro de la Unión Europea~~

Es necesario, pues, conocer la real implantación de las lenguas de Estado en cada uno de los países miembros de la UE, a partir de los inicios del actual proceso de unión. Ellas son las protagonistas de la política lingüística en las instituciones europeas, aunque a partir de los años 1980 las lenguas regionales, minoritarias o simplemente no de Estado reclamarán un reconocimiento propio.

1.3.1: Alemania

Lengua de Estado: Alemán

Población que la usa: 81.100.000

Población bilingüe: 150.000

Rango en la UE: Oficial y de trabajo desde 1958

Después de la I Guerra Mundial la Constitución de Weimar de 1919, muy inspirada en la de 1871, estableció que "los grupos minoritarios que hablan otra lengua dentro del Reich no pueden sufrir limitaciones en su desarrollo nacional, por leyes y administración, sobre todo en su lengua, en la administración interna y en los tribunales"⁴. La República reconocía así el fracaso de la política de germanización aplicada por el Reich y se distanciaba de la represión anterior. El régimen nazi, de acuerdo con su ideología, llevó el proceso de germanización hasta sus extremos.

La vigente Ley Fundamental para la República Federal de Alemania de 23 de mayo de 1949, refrendada el 23 de mayo de 1964, además de crear un Estado federal, dice en su artículo 3.3 que "nadie podrá ser perjudicado, ni privilegiado en consideración a su sexo, ascendencia, raza, idioma, patria y origen, creencias o concepciones religiosas o filosóficas"⁵,

pero no establece la lengua alemana como oficial del Estado. Fuera de esta declaración no existe una ley específica en la RFA para las minorías lingüísticas.

Entre 1990 y 1993 a raíz de la revisión constitucional motivada por la reunificación de Alemania, los Parlamentos de Sajonia, Brandenburgo y Schleswig-Holstein intentaron introducir una cláusula que decía que "el Estado respeta la identidad de las minorías étnicas, culturales y lingüísticas", pero el 6 de septiembre de 1994 el Bundestag la rechazó, manteniéndose como una de las pocas Constituciones europeas sin ninguna referencia a las minorías propias⁶.

El idioma alemán posee aún numerosos dialectos, siendo los más importantes el bajo-sajón y el bávaro. Es la lengua más hablada en Europa: unos 90 millones de personas la tienen como lengua materna, frente a los 60 del inglés o del francés. Sin embargo, las instituciones democráticas alemanas consideran que en general el peso de su lengua en Europa no se corresponde ni con el de su demografía, su política y su economía, ni con el de su cultura, siendo sobrepasado con mucho por el inglés como lengua internacional. La situación empezó a cambiar a principios de los años 90 con los procesos democratizadores en la Europa Central y Oriental, donde se extendió el uso del alemán como primera lengua extranjera.

Actualmente de los 20 millones de estudiantes de alemán en todo el mundo, unos 13 se encuentran en los países de la Europa Central y Oriental. No es de extrañar, pues, que el gobierno alemán iniciara en 1993 una fuerte ofensiva lingüística en esta área, a través fundamentalmente del Instituto Goethe, fundado en 1951 como una dependencia del ministerio de Asuntos Exteriores. El presupuesto previsto para 1995 era de 45 millones de marcos para levantar sedes del Instituto en ciudades como San Petersburgo, Kiev, Minsk o Alma Atá⁷.

1.3.2: Austria

Lengua de Estado: Alemán

Población que la usa: 7.900.000

Población bilingüe: 91.000

Rango en la UE: Oficial y de trabajo desde 1958

El sistema de tratados internacionales impuesto por las potencias vencedoras después de los Tratados de Versalles y de Saint Germain en 1919 para ayudar a resolver la cuestión de las minorías, afectó de una manera muy especial a Austria. El 7 de junio de 1920, por ejemplo, firmó el Tratado de Brno, por el que se comprometía a respetar los derechos culturales, lingüísticos y educativos de los ciudadanos checos residentes

en su territorio, mientras que Checoslovaquia asumía idénticos compromisos para con su población de lengua alemana. La Constitución de 1920, inspirada en la de Suiza, creó un Estado con una estructura federal e impuso el alemán como lengua oficial de la República (*Staatssprache*), "sin perjuicio de los derechos que se concedan por ley federal a las minorías lingüísticas", reserva que afectaba especialmente a los Estados de Burgenland y Carintia⁹.

Tras el desastre de la II Guerra Mundial y el restablecimiento de la Constitución de 1920, Austria recurrió de nuevo a los tratados internacionales para regular a sus minorías, especialmente la del Tirol del Sur, desprovista de sus derechos por el régimen fascista de Musolini. El Acuerdo De Gasperi-Gruber de 10 de febrero de 1947 intentó solventar el pleito, pero la escasa voluntad del gobierno italiano hizo que las reclamaciones austríacas se alargaran hasta 1969. Mientras tanto, el Tratado de 15 de mayo de 1955 firmado con los aliados para devolver la soberanía a Austria, permitió a través de su artículo 7 que las minorías croata y eslovena de los Estados de Carintia, Burgenland y Estiria vieran reconocidos sus derechos lingüísticos⁹ al ordenar que "gozarán de los mismos derechos que los demás ciudadanos austríacos, comprendido el derecho de tener sus propias organizaciones, de tener sus reuniones y de poseer una prensa en su propia lengua"¹⁰.

También tienen derecho a la enseñanza primaria en la lengua eslovena o croata y a un número proporcional de centros propios de enseñanza secundaria. A este efecto, añade el Tratado, los programas escolares serán revisados, y se creó una sección de la inspección de la enseñanza para las escuelas eslovena y croata. Curiosamente este Tratado no menciona otras minorías, como la húngara, quizá porque se pretendía satisfacer específicamente a Yugoslavia, Estado de origen de las dos minorías reconocidas y que figuraba entre los países vencedores de la II Guerra Mundial.

El esloveno y el croata son reconocidos como lenguas oficiales, junto al alemán¹¹, en las circunscripciones administrativas y judiciales de los tres Estados donde reside una población eslovena, croata o mixta. En estos municipios la toponimia debe hacerse en ambas lenguas minoritarias, además de en alemán.

Por último, el Tratado permite a los croatas y eslovenos de Carintia, Burgenland y Estiria participar libremente "en las actividades de los organismos culturales, administrativos y judiciales, y se prohibirán las actividades tendentes a privar a las poblaciones croata o eslovena de sus caracteres y de sus derechos de minoría"¹².

Pero no fue hasta 1976 (21 años después del Tratado de 1955) que el Parlamento austríaco acometió la elaboración de una ley

general de protección de sus minorías lingüísticas. Yugoslavia respondió inmediatamente con un memorándum, denunciando distintos aspectos del proyecto de ley, como por ejemplo que no identificara las minorías o que creara unos Consejos Consultivos Etnicos a costa de las organizaciones legítimas de las propias minorías".

A pesar de las presiones exteriores e internas, la ley fue aprobada el 7 de julio de 1976 y según el gobierno federal ningún país de Europa garantiza a sus minorías un nivel tan alto de protección. Sin embargo, la ley todavía respondió más a la situación internacional y específicamente a las relaciones entre Austria y Yugoslavia, que a una política lingüística propiamente dicha y de acuerdo con los cánones de las instituciones europeas, que tardarían unos años en llegar. A pesar de ello, resultó un punto de referencia importante y, de hecho, Austria se alineó entre los países pioneros en la protección de sus minorías.

La ley de 1976 es en realidad un texto muy genérico, que efectivamente no cita a las minorías afectadas, pero que compromete al gobierno a realizar censos periódicos y discretos para orientar a los poderes públicos sobre la composición étnica y lingüística de la población. Se crea un Consejo Consultivo Etnico por cada minoría, consejos que "no pretenden marginar las organizaciones de los grupos étnicos existentes, sino todo lo contrario". Las lenguas minoritarias tienen un

carácter "adicional" o "auxiliar", aunque con carácter co-oficial con el alemán en algunos territorios pudiéndoselas limitar a ciertas personas y a ciertos usos. Esta ley originó una serie de decretos más específicos, que no variaron substancialmente el panorama lingüístico.

1.3.3: Bélgica

Lenguas de Estado: Francés, Neerlandés y Alemán

Población que los usa: Francés: 2.750.000

Neerlandés: 6.856.000

Alemán: 100.000

Rango en la UE: Oficial y de trabajo desde 1958

Aunque Bélgica no es el Estado europeo con mayor número de minorías lingüísticas, posee una larga historia de enfrentamientos lingüísticos, "quizá la más dura de Europa"¹³, entre las dos lenguas de Estado mayoritarias. Es el único caso en que dos lenguas de Estado compiten en igualdad de condiciones dentro del aparato estatal, que no en sus respectivos territorios con algunas excepciones señaladamente Bruselas. De hecho, la base constitucional y política belga se ha referido tradicionalmente tanto a los necesarios equilibrios

socio-políticos, como a los lingüísticos entre el francés, el flamenco y desde 1919 el alemán, este último el único idioma propiamente minoritario. Desde las sucesivas reformas de la Constitución de 1831 hasta las numerosas leyes y disposiciones específicas, Bélgica ha tenido que dictar una prolija normativa para preservar la convivencia lingüística en el aparato de Estado¹⁴.

En general, esta legislación se refiere más a la ordenación de las tres lenguas que a la propia protección o impulso de las minorías, sobre todo desde que el flamenco fue reconocido en 1980 como una variante del neerlandés, lengua oficial de los Países Bajos. En cualquier caso, "los partidos políticos están literalmente atravesados por contradicciones derivadas de la conflictividad entre flamencos y valones: algunos de ellos están considerablemente divididos por esta razón, otros tienen una influencia enormemente desigual en una zona y en otra... El problema real del debate político es el del conflicto nacional, por más que los gobiernos se esfuercen constantemente en buscar "treguas lingüísticas" para resolver problemas más urgentes...", afirma Josep Ramoneda¹⁵.

Una aplicación estricta del principio de territorialidad desde 1932 no fue suficiente para resolver los problemas surgidos en las zonas donde la mayoría lingüística no se correspondía con la lengua oficial del territorio, muy particularmente en Bruselas, y en las instituciones y servicios

del Estado comunes a francófonos y flamencos. El reparto lingüístico del Estado entre ambas comunidades hegemónicas condujo a una progresiva descentralización hasta alcanzar un nivel federal muy participado por los organismos de segundo nivel monolingües, y a una proliferación de instituciones para cada comunidad lingüística en un difícil pero efectivo equilibrio de lenguas.

Dentro de la UE Bélgica es el único caso, con la excepción de Luxemburgo, con dos lenguas de Estado y ninguna de las dos es minoritaria. Además estas dos lenguas de Estado, así como la alemana minoritaria, lo son a su vez de otros Estados comunitarios, concretamente Francia, Países Bajos, la RFA y Austria.

Bélgica, uno de los países fundadores de la CEE, ha aportado a la construcción de Europa un desgarrador conflicto lingüístico, pero también una sensibilidad especial para la ordenación lingüística de Europa y un fuerte espíritu de pacto que supere las discrepancias. Buena prueba de ello es la abundancia de iniciativas presentadas, negociadas y hechas aprobar por políticos y expertos belgas a lo largo de los últimos 25 años.

1.3.3.1: Un Estado a la medida de su conflicto lingüístico

El rápido ascenso económico y demográfico de las regiones flamencas hizo que a finales de la década de 1950 se exacerbara de nuevo el problema lingüístico, coincidiendo con una reivindicación valona de autonomía absoluta por parte del **Movimiento Popular Valón** dirigido por André Renard y el intento de los nacionalistas flamencos de excluir el idioma francés de su área lingüística. El polémico censo de 1961 demostró que los flamencos se habían convertido en mayoría dentro del Estado belga y que por consiguiente había que proceder a una redistribución del reparto lingüístico-territorial de 1932. En Bruselas, por el contrario, los flamencos pasaron del 60% en 1846 al 24% en 1947, y al 20% en 1970¹⁶.

Un nuevo paquete legislativo entre 1961 y 1963 (apenas fundada la CEE) se encargó de esta renovación, de asentar el principio de territorialidad y de fijar las fronteras lingüísticas. El 31 de mayo de 1961 se aprobó la ley relativa al empleo de las lenguas en materia legislativa, a la presentación, publicación y entrada en vigor de los textos legales y reglamentarios, según la cual los proyectos de ley del gobierno serían presentados en las dos lenguas y las leyes serían votadas, sancionadas y promulgadas en lengua francesa y neerlandesa.

Mediante la ley de 8 de noviembre de 1962 el parlamento belga aprobó una nueva división lingüística del país, a la que se opusieron los valones que insistían en un Estado federal. Estos últimos obtuvieron algunos progresos en las áreas bilingües, como la villa de Mouscron, aunque cedieron cinco ayuntamientos del valle de Fournon, vinculados al obispado de Lieja.

La ley concerniente al empleo de las lenguas en materia administrativa de 2 de agosto de 1963 comportó nuevos avances en relación a la de 1932. Además de fortalecer el principio de que la población debe ser administrada en su propia lengua, es decir la de la región, precisó mucho más exactamente a quienes eran aplicables las disposiciones legales de la lengua. Así, por ejemplo, se reconoció el derecho de los administrados a dirigirse a la Administración en la lengua que prefirieran, pero el Consejo comunitario francés y el Consejo flamenco fueron autorizados a dictar normas restrictivas. Se definieron mejor las regiones lingüísticas y se creó por primera vez la Región de Bruselas-Capital sobre la aglomeración anterior. En seis comunas de la periferia bruselense los francófonos obtuvieron facilidades en la enseñanza primaria y en los servicios municipales. Este régimen lingüístico especial se extendió en 1966 a otras seis comunas flamencas y a cuatro francófonas más. Así, el principio de territorialidad se combinaba aquí con el de personalidad. En la zona alemana nueve comunas otorgaron las mismas facilidades a la minoría

francófona, y en los ayuntamientos de mayoría francesa. En Malmédy y Waismes las obtuvieron los alemanes. Se marcó de una manera más rígida el principio territorial-regional y se fijaron normas muy precisas para los funcionarios.

En este texto se basó el Real Decreto de 18 de julio de 1966 sobre coordinación de las leyes para el empleo de las lenguas en materia administrativa, de modo que estas leyes son conocidas como "las leyes coordinadas de 18 de julio de 1966". El Real Decreto de 30 de noviembre de 1966 fijaba las condiciones de entrega de certificados de conocimientos lingüísticos previstos en el artículo 53 del Decreto de 18 de julio de 1966.

Las leyes lingüísticas de 1932, 1962 y 1963 constituyeron el eje central de la política lingüística del Estado belga, pero la evolución de una administración que al principio utilizaba exclusivamente el francés, hacia el uso de las dos lenguas nacionales en igualdad de condiciones no resultó fácil. La misma ley de 1932 dejaba cierto margen discrecional a las autoridades, a lo que se sumaban determinadas lagunas legales y una notable inercia del funcionariado. "Por todo ello no alcanzó los objetivos previstos", sostiene el profesor Robert Senelle¹⁷.

Entre 1970 y 1980 se produjeron dos de las seis revisiones constitucionales que ha vivido el Estado belga, esta vez

básicamente por la iniciativa de los socialcristianos flamencos. Mientras que las dos primeras, en 1892-93 y en 1919-21, se circunscribían al derecho de voto, la tercera realizada en 1970 por una coalición de socialcristianos y socialistas modificó las estructuras estatales para la armonización de las relaciones entre las dos principales comunidades culturales, fuertemente enfrentadas en aquellos años por el creciente desequilibrio económico y el estallido de los principales partidos tradicionales.

La nueva revisión constitucional en 1980, siguiendo el Plan Egmont de 1977, concretó los conceptos desarrollados diez años antes, de tal manera que Bélgica pasó a ser un Estado regional y luego casi federal, sistema que se completó a raíz de la sexta reforma en febrero de 1993.

La reforma constitucional de 20 de julio de 1970 fortaleció el papel de los consejos provinciales y municipales, verdadero instrumento y cauce institucional de la estructura lingüística belga. Se les permitió federarse y asociarse, pero no deliberar en común (art. 108). El 24 de diciembre del mismo año un nuevo retoque constitucional permitió a la ley cambiar las delimitaciones de las 10 provincias. Para ello se necesitaba una complicada mayoría en cada grupo lingüístico de cada Cámara parlamentaria (art. 1).

Ahora bien, por primera vez el reino era dividido en cuatro regiones lingüísticas: la de lengua francesa (provincias de Hainaut, Brabante valón, Lieja, Luxemburgo y Namur), la de lengua flamenca (provincias de Anvers, Brabante flamenco, Flandes Occidental, Flandes Oriental y Limburg), la región bilingüe de Bruselas (municipios de Anderlecht, Audergham, Berchem-Ste. Agathe, Bruselas, Esterbeek, Evere, Forest, Ganshoren, Ixelles, Jette, Koekelberg, Moleenbeek-St. Jean, St. Gilles, St. Josse-ten-Noode, Scharbeek, Uccle, Watermael-Boitsfort, Woluwe-St.Lambert y Woluwe-St. Pierre) y la de lengua alemana (municipios de Eupen, Lontzen, Raeren, Bütgenbach, Bullange, Amblève, Saint-Vith, Burg-Reuland y La Calamine) (art. 3 bis).

Por lo mismo, Bélgica comprendía tres comunidades culturales (francesa, neerlandesa y alemana) (art. 3 ter). Las dos primeras pasaban a disponer de un Consejo cultural, formado por los miembros del correspondiente grupo lingüístico en las dos Cámaras, con capacidad para regular prácticamente todas las materias culturales, educativas y de cooperación cultural incluso internacional, amén de numerosas materias administrativas personalizables. El Consejo Cultural de la minoría alemana tenía una formación y unas competencias (consultivas hasta 1983) algo distintas y reguladas por ley. Sin embargo, la reforma excluía del ámbito de aplicación de los decretos de cada Consejo cultural los municipios fronterizos, 27 en total, donde fuera obligatorio usar la otra lengua, los

servicios comunes con regiones de la otra lengua y las instituciones nacionales e internacionales. Estos gozarían de "facilidades lingüísticas".

Las fuertes implicaciones socio-económicas superpuestas a las étnico-lingüísticas quedaron patentes en el artículo 107.4 de la Constitución que creaba tres zonas socio-económicas: la valona, la flamenca y la región bruselense. Una ley de 25 de diciembre fijaba los límites de las cuatro regiones lingüísticas siguiendo las pautas de la citada ley de 1963 sobre uso de las lenguas en la Administración. El 3 de julio de 1971 se estableció también por ley el reparto de los parlamentarios en un grupo lingüístico francés y otro flamenco, cuestión de gran importancia en un país cultural y lingüísticamente tan heterogéneo.

El 17 de julio de 1980 se completó la reforma constitucional retocando los artículos 3 ter y 59 bis. Las comunidades dejaron de llamarse culturales y se convirtieron en comunidades simplemente: la neerlandesa pasó a denominarse "flamenca" y la alemana "germanófona". Las competencias de las comunidades se ampliaron a las materias personalizadas que luego serían determinadas por la ley. En ellas quedarían comprendidas la salud, la ayuda a las personas y la investigación científica. Los gobiernos regionales y los de las comunidades fueron asociados al central en aquellas negociaciones internacionales que afectaran a sus competencias. Otro aspecto de la reforma es

que los decretos de las comunidades tendrían fuerza de ley.

Este nuevo paquete de medidas consagró la existencia de regiones lingüísticas homogéneas, excepto la bilingüe de Bruselas, en las cuales los servicios públicos utilizaban en principio solamente la lengua de la región en su funcionamiento interno y en sus relaciones con los otros servicios y con los ciudadanos.

Por otra parte, el poder constituyente belga se preocupó de incluir en estas reformas las medidas necesarias para evitar la supremacía de una comunidad sobre la otra. Así, por ejemplo, el Consejo de Ministros debía tener tantos miembros de habla francesa como de habla flamenca, al margen del primer ministro (art. 86 bis). Un procedimiento llamado "timbre de alarma" tenía la función de impedir que fuera aprobada una ley nacional por la mayoría neerlandesa en contra de la mayoría de los parlamentarios francoparlantes (art. 38 bis). Garantías idénticas fueron establecidas para proteger a la minoría neerlandesa en la región de Bruselas-Capital (art. 108 ter). Todo ello, sumado a la técnica jurídica de la mayoría especial, es decir que para aprobar una ley hacía falta obtener la mayoría simple de cada uno de los grupos lingüísticos y una mayoría de dos tercios de los votos emitidos en el conjunto de cada una de las Cámaras, hacía que cada grupo lingüístico dispusiera de un verdadero derecho de veto en determinadas materias fundamentales.

La principal consecuencia de este delicado equilibrio constitucional fue que para respetar el principio de territorialidad al máximo, el Constituyente dejó fuera del campo de aplicación de estas disposiciones a las minorías lingüísticas, concretamente la alemana, así como a las existentes en la región bruselense. Las leyes especial y ordinaria de 8 y 9 de agosto de 1980 respectivamente completaron el proceso institucional. La segunda fue modificada por la ley de 8 de agosto de 1988 y por la de 16 de enero de 1989 sobre financiación de las Comunidades y de las Regiones.

La política lingüística del Estado belga dió un paso decisivo con el Tratado de 1980 entre el Reino de Bélgica y el Reino de los Países Bajos, que establecía la Unión de la Lengua Neerlandesa (la Taalunie), llamada más tarde la Unión Lingüística, entre el idioma flamenco utilizado en Bélgica y el holandés. Este Tratado seguía a una reforma de la Constitución belga y a una ley especial de 8 de agosto, las dos del mismo año, y sustituyó al Tratado de 1946 sobre relaciones culturales e intelectuales entre los dos países. La Secretaría General fue instalada en La Haya¹⁸.

En 1990 un primer balance decenal del Tratado resultó abiertamente positivo, por cuanto se habían podido fijar neologismos y extranjerismos de común acuerdo entre holandeses y belgas de habla flamenca, se habían instalado cátedras de lengua, literatura y cultura neerlandesas en el extranjero, y

se había unificado y ampliado la enseñanza del neerlandés a los Estados vecinos.

En cualquier caso, la expansión del neerlandés corresponde también, según señala el profesor Petschen, al crecimiento económico de los Países Bajos y de las regiones flamencas que empezaron a gozar de un status jurídico y político más fluido dentro del Estado belga, y al aumento del turismo. La Unión lingüística tendía hacia objetivos más ambiciosos en asuntos culturales. Esto suscitó una reacción de los francófonos que una vez más se reflejó en el enfrentamiento lingüístico.

La minuciosidad de la legislación lingüística belga se evidenció una vez más con el Decreto de 19 de julio de 1973 del Consejo cultural neerlandés que regula las relaciones lingüísticas entre empresarios y trabajadores. Asimismo el 30 de junio de 1982 el Consejo de la Comunidad francesa fijó el uso del francés entre las empresas y sus trabajadores.

Ahora bien, la reforma concluida en 1980 ponía definitivamente en vías de solución la convivencia lingüística en las dos comunidades flamenca y valona, pero dejaba todavía muchos cabos sueltos en la región bilingüe de Bruselas, y en los municipios con un régimen especial dentro de las regiones de lengua francesa y neerlandesa, así como en las comunas alemanas, donde se mantenía el statu quo.

En la región de lengua francesa seis municipios de la frontera lingüística se encontraban en este caso: Comines, Mouscron, Flobecq, Enghien, Malmédy y Waimes¹⁹. En la parte neerlandesa el régimen especial afecta a seis municipios periféricos que rodean a la región bilingüe de Bruselas capital: Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel y Wezembeek-Oppem, y seis municipios de la frontera lingüística: Fouron, Biévène, Renaix, Espierres-Helchin, Messines y Herstappe. Los habitantes de estos municipios vieron garantizado por ley su derecho al uso por parte de las autoridades de una lengua distinta a la oficial de la región. Así, por ejemplo, los anuncios, comunicados y formularios dirigidos al público se redactaron en dos lenguas. Los servicios se dirigieron a los particulares en la lengua en que éstos se expresasen o solicitaran. Los certificados se emitieron en la lengua elegida por el particular. Los documentos que afectaban a los particulares se redactaron en la lengua de la región. Los funcionarios de los servicios locales que estaban en contacto con el público tuvieron que tener un conocimiento suficiente o elemental de la segunda lengua según el nivel de su función.

En Bruselas capital la norma que se dispuso fue la del bilingüismo. Se aplicó como principio la lengua de la región, pero la ley reguló las distintas situaciones administrativas. Así, por ejemplo, los anuncios, comunicados y formularios estaban redactados en las dos lenguas, mientras que los

particulares elegían la lengua con la que se relacionaban con la Administración.

A finales de 1983, es decir una vez completada la cuarta reforma constitucional y antes de la quinta, Pierre de Vos hacía el siguiente balance de las instituciones de gobierno belgas: gobierno central (15 ministros y 10 secretarios de Estado); ejecutivo flamenco (9 ministros); ejecutivo de la comunidad francesa (3 ministros); ejecutivo de la región valona (6 ministros); ejecutivo provisional de la región de Bruselas (3 ministros); y futuro ejecutivo de la región de habla alemana. Por lo que respecta a las instituciones parlamentarias enumera a la Cámara de Representantes y al Senado en el plano estatal; el Consejo flamenco (diputados y senadores neerlandeses elegidos en las provincias flamencas y en Bruselas); el Consejo francófono (diputados y senadores valones elegidos en las provincias valonas y en Bruselas); el Consejo valón (diputados y senadores valones, excepto los elegidos en Bruselas); el Consejo bruselense de próxima creación; y el Consejo Cultural para la minoría alemana. No es de extrañar que uno de los muchos problemas a resolver fuera la coordinación de las fechas de las sesiones de las distintas asambleas, ya que muchos de sus miembros, especialmente los valones, participaban en varias al mismo tiempo²⁰.

La ley de 15 de junio de 1935 reguló a su vez el uso de las tres lenguas en la Administración de Justicia, y la de 22 y 23

de agosto de 1938, que posteriormente fue dividida en cuatro leyes (30 de julio de 1955, la de 27 de diciembre de 1961, el real decreto de 15 de octubre de 1963 y la ley de 10 de junio de 1970), hizo lo mismo para el Ejército. Esta ordenación era especialmente necesaria tras la dura experiencia de la I Guerra Mundial que provocó numerosas tensiones entre los soldados flamencos y los oficiales francófonos. Así, dicha ley organizó el agrupamiento de los soldados en unidades lingüísticas de expresión francesa, neerlandesa o alemana para que toda la instrucción pudiera ser realizada en la lengua materna. La ley también exigía a todos los oficiales de cualquier graduación el conocimiento de la segunda lengua nacional, o del alemán en el caso de las unidades germanoparlantes.

Para las relaciones entre las Fuerzas Armadas y el poder civil se aplicó la legislación sobre el uso de las lenguas en la Administración y el Real Decreto de 2 de agosto de 1966. El Real Decreto de 30 de julio de 1971 reguló el uso de las lenguas en la jurisdicción militar. El orden lingüístico en este caso era el neerlandés, el francés y el alemán de acuerdo con el número de hablantes de mayor a menor. Las posteriores leyes de 13 de noviembre de 1974 y del 13 de julio de 1976 retocaron algunos aspectos distintos de la ley de 1938.

La comunidad alemana dispuso de un Consejo compuesto de miembros directamente elegidos con competencias legales sólo para las actividades culturales y educativas, pero no tenía

poder ejecutivo propio y dependía del primer ministro. En febrero de 1984 los tres cantones de habla alemana obtuvieron las mismas competencias que las otras dos regiones, un ejecutivo de tres miembros (Enseñanza, Cultura y Asuntos Sociales), y una asamblea de 25 miembros. Para las otras funciones dependía de la región valona o de la Administración central.

La región bruselense formada por las comunas de Bullange, Reuland, Butgenbach, Eupen, Kelmí, Lontzem, Rearen y Sankt Vith, no disponía, en cambio, de un consejo propio, pero sí de un ejecutivo salido del gobierno nacional y compuesto por un ministro y dos secretarios de Estado, de los cuales por lo menos uno debía pertenecer al grupo lingüístico distinto del primer ministro. No tenía poder legislativo, sólo reglamentario y en caso de desacuerdo se sometía el asunto al Consejo de Ministros.

El 14 de enero de 1989 entró en vigor el estatuto que convertía Bruselas en la tercera región de Bélgica merced a la "Ley especial relativa a las instituciones bruselenses" aprobada por la Cámara de Diputados el 5 de agosto de 1988 por 147 votos a favor y 48 en contra. Las elecciones de junio de 1989 cubrieron los 75 escaños de la Asamblea Regional, en la cual la representación flamenca era proporcionalmente superior a la población de esta lengua en los 19 ayuntamientos que integran la región (12%). El gobierno pasó a ser de cinco

miembros y tres secretarios de Estado.

El desfase cronológico de casi 20 años con las otras dos regiones era debido a la resistencia de los partidos nacionalistas flamencos a que se formara una tercera región francófona, a pesar de hallarse en la parte de habla neerlandesa de la provincia flamenca de Brabante, y desequilibrase el país entero a favor de los valones. En el conjunto del Estado los flamencos eran mayoría y, sin embargo, el gobierno central estaba repartido al 50% entre ambas comunidades, modelo que en su opinión había que trasladar al ejecutivo de la región de Bruselas-Capital, aunque había una mayoría francófona de entre el 70% y el 80%. Por ello, después de las elecciones generales de 1987 hubo que negociar compensaciones y garantías suplementarias para unos y otros.

La estructura resultante no era, por lo tanto, simétrica para ambas comunidades. Los flamencos tenían un sólo consejo y un sólo ejecutivo para su región y su comunidad con sede a la vez en Bruselas, mientras que había un consejo y un ejecutivo diferentes para la comunidad francesa con sede en Bruselas y para la región valona con sede en Namur manteniendo la distinción entre región y comunidad, aunque también pueden unificarse.

Los consejos comunitarios francés y regional valón y flamenco estaban compuestos por miembros de la Cámara de

Representantes y del Senado elegidos directamente por el electorado, tanto si eran miembros del grupo lingüístico francés como del neerlandés. Los senadores cooptados y los senadores provinciales no formaban parte de estos Consejos.

Cada Consejo elegía un ejecutivo, que hasta 1985 o sea durante un período transitorio, se repartió proporcionalmente entre los partidos políticos. Después se aplicó el principio de mayorías. El ejecutivo flamenco tenía nueve miembros y el de la comunidad francesa tenía tres, pero un miembro de ambas instituciones debía proceder de la región de Bruselas. El ejecutivo regional valón tenía seis miembros. Nadie podía ser a la vez miembro de un ejecutivo y del gobierno estatal. Los Consejos adoptaban decretos con valor de ley. Los conflictos entre el Estado, las comunidades y las regiones son sometidos a un comité de concertación, formado de acuerdo con el equilibrio lingüístico por un número igual de miembros del gobierno central y del ejecutivo regional afectado. Una ley debatida a principios de la década de 1980 preveía la creación de un tribunal de arbitraje en caso de conflicto entre la ley y algún decreto.

La tendencia federalista que había ido adoptando el Estado belga hizo pensar en una fase ulterior, completada en 1993, en la que los consejos estarían compuestos solamente por elegidos directamente. Esto convertiría el Senado en una verdadera Cámara de las Regiones, mientras que la Cámara de

Representantes seguiría representando a toda la nación belga. Ya el 19 de julio de 1988 se promulgó el nuevo artículo 59 bis de la Constitución, que se refiere a la comunitarización de la enseñanza, a la competencia de las Regiones y las Comunidades en materia de conclusión de tratados, al régimen de facilidades en los municipios de régimen lingüístico especial y a la financiación de las comunidades, y el artículo 108 bis relativo a la creación de las instituciones de la Región de Bruselas-Capital. También se reformó profundamente el sistema de financiación. A pesar de ello, el entonces primer ministro Wilfred Martens advirtió a la Cámara de Representantes el 28 de julio de 1988 que quedaban pendientes aún cuestiones como las competencias residuales y las concurrentes o el funcionamiento de la Cámara y del Senado.

Por un acuerdo de noviembre de 1992, o Pacto de Saint Michel, socialistas, democristianos flamencos y francófonos, ecologistas y nacionalistas flamencos bajo la dirección del primer ministro Jean Luc Dehaene (democristiano flamenco) decidieron, en efecto, proceder a una nueva reforma constitucional, aprobada por el Parlamento en febrero de 1993. El 6 de febrero de 1993 144 miembros de la Cámara de Representantes votaron a favor de la reforma del artículo 1 de la Constitución y 36 lo hicieron en contra. La reforma definía a Bélgica como un Estado federal.

En total fueron modificados 33 artículos entre ellos los relativos al Senado que se convirtió simplemente en una Cámara de reflexión y pasó de 184 a 71 senadores, y a la Cámara de Representantes que pasó de 212 a 150 diputados. Los Consejos de las Regiones y de las Comunidades asumieron nuevas e importantes competencias en medio ambiente, comercio exterior, agricultura, o política científica, hasta entonces reservadas al gobierno central. Pasaron a ser elegidos por sufragio universal y se puso fin a la compaginación de los cargos de diputado al Parlamento estatal y a alguna de las asambleas regionales o de comunidad, con lo que se democratizó, se reforzó y se profesionalizó a la vez todo el poder de las regiones y comunidades. La Administración local pasó a depender totalmente de las regiones, excepto en los municipios bilingües con minorías que gozaban de derechos reconocidos.

La provincia de Brabante fue por fin dividida en dos partes, una flamenca y otra valona, con lo que se pasó a diez provincias. A la parte flamenca se le asignó un gobernador con la única misión de salvaguardar los derechos de los habitantes de los municipios bilingües, en los que los ciudadanos de habla francesa no están obligados a conocer el flamenco y a dirigirse a la Administración en la lengua oficial y única en la región.

La región de Bruselas quedó con menos competencias que las otras dos y los asuntos culturales y lingüísticos son coordinados con los consejos de las otras dos comunidades. La

Administración central detenta allí algunas que no posee fuera. Sus ciudadanos pueden formar parte de las instituciones de autogobierno flamenco o valón (6 diputados flamencos y 19 valones de Bruselas tienen escaño en sus respectivas asambleas) y no es posible lo contrario, ni que ciudadanos de una región o comunidad participen en la vida institucional de la otra, cosa que sucedía anteriormente.

Sin embargo, no se modificó gran cosa la política lingüística propiamente dicha. Se reforzaron, por ejemplo, los equilibrios político-lingüísticos y así el poder ejecutivo central estuvo integrado por siete ministros de cada fonía y un primer ministro imparcial o no definido según la lengua.

Lo que se pretendía sobre todo era solucionar definitivamente los conflictos producidos por las minorías francófonas en las provincias flamencas. Mientras que los flamencos pretendían que la elección a los Consejos respetara escrupulosamente el principio de territorialidad, los valones defendían que es la lengua materna la que determina la pertenencia a una de las comunidades lingüísticas²¹.

Esto conllevaba que los francófonos residentes en provincias flamencas pudiesen votar y/o ser elegidos o bien por Flandes o bien por Valonia. Esta última solución preveía también dividir la provincia flamenca de Brabante, que incluye Bruselas, en dos provincias, una flamenca al Norte y otra valona al Sur, y

posibilitar la participación asociada a las instituciones francófonas de las minorías que viven en la zona de los Fourons, situada en la frontera lingüística oriental, pero dentro del territorio flamenco²².

En efecto, la crisis del gobierno de coalición democristiano-liberal presidido por Wilfried Martens en octubre de 1986 demostró que, pese a la reformas constitucionales y legislativas, la confrontación lingüística en estas zonas fronterizas arrastraba aún a todo el Estado. El 30 de septiembre el Consejo de Estado belga destituyó al alcalde de Fourons, donde la nueva mayoría francófona desde 1947 había elegido a José Happart, un vecino de la población que no había acreditado suficientes conocimientos de neerlandés tal como exigía la ley. Por complicados motivos electorales los seis pueblos que formaban el municipio habían sido transferidos en 1963 de la provincia francófona de Lieja a la neerlandesa de Limburgo.

La pacificación lingüística total no llegó tampoco con la reforma de 1993. "Desde hace años las mayores crisis de gobierno en Bélgica han tenido motivos lingüísticos", subrayaba con este motivo Miquel Siguán²³. En octubre de 1994 el ministro de Investigación, el socialista francófono Jean Maurice Dehousse pronunció en Ostende (Flandes) un discurso oficial en inglés en lugar de hacerlo en neerlandés. Este hecho estuvo a punto de provocar una crisis de gobierno, a causa de la

reacción de los ministros y la prensa flamencos²⁴.

En enero de 1995 la alcaldía de Fourons volvió a amenazar gravemente el equilibrio gubernamental. Después de que el Consejo de Estado dictaminara que el francófono José Happart no podía ser alcalde por no conocer el neerlandés, fue substituído por José Smeets, también francófono aunque bilingüe. Los flamencos exigieron entonces que el gobierno federal renunciara a mandar funcionarios francófonos a la localidad para reforzar a la población valona. Finalmente el 10 de enero el gobierno federal llegó a un acuerdo para evitar una nueva guerra lingüística.

El permanente enfrentamiento intercomunitario, sobre todo a partir de los años 1960, dió pues como resultado final no sólo un Estado federal, sino una multiplicación de instancias de decisión²⁵. No sin cierta ironía Bernard Brigouleix decía que hay que ser un buen especialista para no confundir el Parlamento francófono con la Asamblea valona o para comprender como el ejecutivo valón tiene competencias sobre zonas germanofónas del Este, que por otra parte tienen su propio Parlamento. "El régimen de protección de las minorías lingüísticas provocaría auténticas pesadillas al jurista más puntilloso, como también el estatuto de Bruselas y su aglomeración... Y es que en Bélgica no hay nada sencillo"²⁶.

Por el contrario, Lapierre escribe que "tanto en Bruselas como a veces en París es de buen tono mofarse de esta complicada descentralización. Cuando la realidad es compleja, unas instituciones demasiado simples acaso no la violentan?..."²⁷. O, como dice el profesor Alen, "todo sistema federal es una construcción *sui generis*. En efecto, es imposible disociar las estructuras federales de los factores de orden geográfico, económico, histórico e incluso ideológico que constituyen su base"²⁸.

Lo cierto es que en Bélgica los censos de población informan sobre el número de habitantes pero no sobre su lengua. Indican los habitantes de Bruselas, pero no la lengua que hablan. Los censos no incluyen esta pregunta y no sólo no la formulan, sino que está prohibido hacerlo, tanto a las autoridades como a quien privadamente quisiese realizar un censo lingüístico. Es literalmente un secreto de Estado. Y la razón es simple: publicar cifras sobre habitantes de una u otra lengua en un lugar determinado pondría en cuestión las actuales fronteras lingüísticas y con ello el equilibrio conseguido.

Para el profesor M. Siguán la gran paradoja de Bélgica, y muy especialmente de Bruselas, es que el lugar de Europa donde las tensiones lingüísticas son más fuertes, sea al mismo tiempo el más cosmopolita y donde más lenguas resuenan y se usan. Todo un símbolo de la Europa que nos espera...²⁹.

1.3.3.2: La organización de la enseñanza en Bélgica

La ley de 1932, que había introducido el principio de territorialidad lingüística, fue derogada por la de 30 de julio de 1963, que si bien consagraba los mismos principios básicos de la primera, se apartaba de ella en algunos puntos. En seis municipios de la periferia de Bruselas, dotados de estatuto propio, la enseñanza se dispensaba en neerlandés, aunque la enseñanza preescolar y primaria podían ser dadas en francés, si era solicitado por un determinado número de padres. En las escuelas neerlandesas de estos municipios el francés era facultativo, en tanto que el neerlandés, como lengua de la provincia, era obligatorio en las escuelas francesas.

En consecuencia, los niños de cualquier región belga podían recibir en ella una enseñanza en cualquiera de las tres lenguas escogida por sus padres o preceptores, o por una escuela no subvencionada con fondos estatales. El cabeza de familia que hiciera uso de esta facultad no podía incurrir en ninguna pena y cumplía su obligación escolar siempre que la enseñanza se sujetara a las normas técnicas fijadas por la ley.

La aplicación de la ley de 1963 trajo entre otras consecuencias seis demandas presentadas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por los padres de más de 800 escolares francófonos, procedentes de los municipios de Alsenberg, Beersel, Amberes, Gante, Lovaina, Vilvorde (dentro

de la región neerlandesa) y Kraainem, circunscripción administrativa separada. En conjunto las seis demandas reprochan al Estado belga:

a) no haber organizado ninguna enseñanza en lengua francesa en los municipios donde residen los demandantes, o en en el caso de Kraainem el haber organizado una red de enseñanza insuficiente;

b) privar de subvenciones a los centros que no cumplían con la legislación escolar en materia lingüística;

c) negarse a homologar los certificados de estudios expedidos por dichos centros;

d) no permitir el acceso de los hijos de los demandantes a las clases en francés existentes en otros lugares;

e) haber obligado a los demandantes bien a inscribir a sus hijos en una escuela local, solución que estiman contraria a sus aspiraciones, o bien enviarlos a estudiar al distrito bilingüe de "Bruselas-capital" o a alguna provincia valona. Tal "emigración escolar" podría llevar aparejados graves riesgos e inconvenientes de diverso orden.

Los demandantes, que consideraban violado el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las

Libertades Fundamentales de 1950, se basaban en el carácter positivo o negativo que el Convenio otorgaba a la acción del Estado. Según ellos, la Administración tenía "obligación de hacer", mientras que el gobierno belga aducía que la libertad individual implicaba para el poder público una simple abstención de actuar, es decir un estatuto negativo.

El dictamen de la Comisión recordaba que no todos los derechos reconocidos por el Convenio son negativos y que el artículo 2 del Protocolo Adicional al Convenio prohíbe a los Estados cualquier medida que tenga por efecto impedir la instrucción a las personas sometidas a su jurisdicción. Aunque esta formulación es negativa, en realidad consagra el derecho de todos a la instrucción "conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas"³⁰. Por su parte, el artículo 14 afirma que "el goce de los derechos y libertades reconocidos en este Convenio ha de ser asegurado sin distinción alguna especialmente por razones de sexo, raza, color, lengua, religión, opiniones políticas u otras, origen nacional o social, pertenencia a una minoría nacional, fortuna, nacimiento o cualquier otra situación"³¹.

En sentencia de 23 de julio de 1968 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos estimó que el artículo 7.3 de la ley de 2 de agosto de 1963 no se conformaba a las exigencias del artículo 14 del Convenio de 1950 en relación con la primera frase del artículo 2 del Protocolo Adicional, en la medida en que impide

a ciertos niños, con el sólo fundamento de la residencia de sus padres, acceder a las escuelas de lengua francesa existentes en los seis municipios de la periferia de Bruselas dotados de un estatuto especial, comprendido Kraainem. Por ello, reconoce el derecho de los demandantes a recibir una indemnización equitativa. El Tribunal no reconoció ninguna otra violación al Convenio al no apreciar más elementos discriminatorios que el citado.

Por lo que respecta a la enseñanza universitaria, la ley de 15 de abril de 1930 flamenquizó la Universidad del Estado en Gante, equiparándola con la Universidad del Estado de Lieja, situada en la región valona y de lengua francesa. Las universidades libres (Católica de Lovaina y de libre exámen de Bruselas), siguieron la misma evolución de respeto al derecho de enseñanza en todos los niveles educativos para las dos comunidades, sobre todo desde que la ayuda financiera del Estado creció en una proporción muy importante.

La división de la provincia de Brabante arrastró a la Universidad de Lovaina, hasta entonces bilingüe. La localización de la Universidad Católica de Lovaina, de régimen francés, está regulada por el artículo 132 de la Constitución por el hecho de estar situada la ciudad de Lovaina en una región de lengua neerlandesa. La Katholieke Universiteit Leuven (KUL) se quedó, pues, en la ciudad de Lovaina, mientras que la Université Catholique de Louvain (UCL) abandonó en 1968 esta

ciudad flamenca y se fue instalando progresivamente en Louvain-la-Neuve, en el territorio valón de Ottignies y también en el territorio bilingüe de Bruselas, en Woluwe-Saint-Lambert, por lo que se refiere a la facultad de Medicina. Esta escisión universitaria provocó otra crisis gubernamental y elecciones generales anticipadas.

La Universidad Libre de Bruselas (ULB) abrió la Facultad de Derecho en lengua flamenca en 1935. En 1969 se desdobló completamente en ULB y en Vrije Universiteit Brussel (VUB), hecho consagrado por la ley de 25 de mayo de 1970. Las escuelas europeas de Uccle-Bruselas y de Mol-Limburg para el personal extranjero al servicio de la Comunidad Europea, se rigen por el acuerdo de 13 de abril de 1962 firmado por los entonces seis países miembros. Sus alumnos se acogen, por lo tanto, a las normas del tratado, excepto los de nacionalidad belga a los que se les aplica las leyes nacionales³².

1.3.4: Dinamarca

Lengua de Estado: Danés

Población que la usa: 5.200.000

Población bilingüe: 121.000

Rango en la UE: Oficial y de trabajo desde 1973

Dinamarca es uno de los países comunitarios lingüísticamente más europeos y al mismo tiempo uno de los que mejor y más antiguamente ha resuelto la convivencia y el desarrollo de sus tres minorías lingüísticas: el feroés en las Islas Feroe, el groenlandés en Groenlandia y el alemán en el Schleswig, en la frontera con Alemania. En los dos primeros casos la política lingüística se contempla en sendos estatutos de autonomía, que en algunos círculos nacionalistas y regionalistas europeos han sido puestos como modelos por su amplitud y estabilidad³³.

1.3.5: España

Lengua de Estado: español o castellano

Población que la usa: 39.100.000

Población bilingüe: 9.796.522

Rango en la UE: Oficial y de trabajo desde 1986

La victoria militar del general Francisco Franco en 1939 significó el regreso a un radical monolingüismo castellano y el encierro de las lenguas minoritarias al ámbito estrictamente privado, quedando prohibido y penalizado su uso en todos los estamentos administrativos, políticos, educativos, judiciales, etc. A pesar de ello, se mantuvieron distintos núcleos activos

contrarios a esta política de asimilación, tanto de orden político como de orden cultural y lingüístico. El bajo clero católico tuvo un papel decisivo en estos años de resistencia de las lenguas minoritarias.

El panorama dió un vuelco con la aprobación de la Constitución democrática de 1978, cuyo artículo 3.2 reconoce el derecho a usar las lenguas minoritarias en régimen de co-oficialidad con el castellano³⁴. Lenguas co-oficiales en sus respectivas Comunidades Autónomas, el catalán, el euskera y el gallego se beneficiaron no sólo de una legislación y de unas medidas protectoras e impulsoras a escala regional, sino también del nuevo clima creado por las instituciones europeas en esta materia. No se olvide que 1979 es el año en que el Parlamento Europeo aprobó la Resolución Hume y que en 1981 el Consejo de Europa aprobó la Resolución 928, cuyo ponente fue el senador por Barcelona Alexandre Cirici, punto de partida de los trabajos que conducirían a la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias

Los gobiernos autónomos son los encargados de legislar en esta materia (art. 148.17), mientras que los poderes públicos en general están obligados a respetar y amparar el plurilingüismo estatal, por ejemplo en los medios de comunicación públicos. El cambio en la legalidad lingüística ya quedaba reflejado en el Real Decreto de 20 de abril de 1979, es decir anterior a la aprobación de los Estatutos de Autonomía,

que regulaba la incorporación de la lengua vasca al sistema de enseñanza del País Vasco³⁵.

A partir de entonces en la mayoría de estos territorios bilingües el proceso de normalización lingüística ha resultado uno de los más dinámicos de toda Europa Occidental dentro de la década de los años 1980, al mismo tiempo que se instauraba una autonomía política y administrativa en 17 regiones españolas que la pidieron. Posteriormente el Tribunal Constitucional sentenció en 1986 que así como el conocimiento del castellano es obligatorio para todos los españoles, el de las lenguas co-oficiales no lo es en sus territorios respectivos³⁶.

De todos modos, según el profesor Miquel Siguán, "existe un claro paralelismo entre las opiniones y actitudes expresadas mayoritariamente en las distintas comunidades y las políticas lingüísticas aplicadas por los gobiernos respectivos. En Cataluña y en el País Vasco, donde las opiniones en favor del uso de la lengua son más frecuentes o más significativas, las políticas que se aplican son también más enérgicas"³⁷.

La Administración periférica del Estado ha ido adoptando con lentitud el bilingüismo en los territorios con lenguas co-oficiales, tendencia que se intentó acelerar en 1988 con una proposición de ley presentada por el Partido Nacionalista Vasco en el Congreso de los Diputados³⁸. Según la Ley de Bases del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo de 1992, los ciudadanos pueden dirigirse a la Administración del Estado con sede en una Comunidad Autónoma bilingüe en la lengua co-oficial y en este caso el procedimiento se tramitará en la lengua elegida por el interesado. De todos modos, la ley precisa claramente que la lengua de la Administración del Estado es el castellano³⁹. En enero de 1994 el Senado español aprobó el uso muy restringido de estas lenguas en su Comisión General de Autonomías y en el primer pleno de cada legislatura⁴⁰.

1.3.6: Finlandia

Lengua de Estado: Finés o finlandés

Población que usa: 5.100.000

Población bilingüe: 305.700

Rango en la UE: Oficial y de trabajo desde 1995

Habiendo proclamado su independencia en 1917, Finlandia aprobó en 1919 una Constitución democrática que declaraba al finlandés y al sueco como lenguas oficiales de la República (art. 14). La disputa de las Islas Aland, que Suecia ocupó temporalmente en 1918 argumentando que su población era de

habla sueca, se resolvió con su devolución a la soberanía finlandesa y la adopción en 1921 de un Estatuto de Autonomía, que resultó modélico para otros casos parecidos⁴¹.

En 1947 el Parlamento finlandés aprobó una modificación de una ley de 1923 sobre el uso del finlandés en la Universidad de Helsinki, uno de los reductos del sueco. Aunque el finlandés y el sueco eran declarados lenguas oficiales de la institución se concedía una cierta preferencia para el primero en todas las asignaturas que condujeran a un grado⁴². Hasta 1973 no se declaró el finlandés como lengua oficial de la Universidad de Turku, una de las principales ciudades de la minoría sueca, lo cual prueba que el sueco seguía siendo la lengua de importantes núcleos culturales del país. En dicha Universidad se reguló por decreto el uso del sueco y la necesidad de su conocimiento por parte de los profesores⁴³.

Después de la II Guerra Mundial se produjo una fuerte emigración de sueco-parlantes hacia Suecia, quedando reducida esta minoría a unas 300.000 personas. En cambio, la minoría finlandesa en Suecia aumentó hasta las 60.000 personas. Este movimiento migratorio terminó de asentar la política lingüística del gobierno finlandés, interesado en acrecentar sus lazos culturales con Suecia frente a la presión de la Unión Soviética. En 1962 se reformó la Ley de la Lengua, para proteger a la minoría sueca y así se permitió que los municipios con cinco mil sueco-hablantes fueran declarados

bilingües. A finales de la década de 1960 se contabilizaban 456 municipalidades finlandesas, 13 bilingües de mayoría sueca y 44 suecas⁴⁴. En las elecciones legislativas de 19 de marzo de 1995 la minoría sueca, el Partido Liberal Sueco, obtuvo el 5'5% de los votos y 11 escaños, perdiendo uno en comparación con la legislatura anterior⁴⁵.

El finlandés es lengua de tratado, pero no es lengua oficial en el Consejo Nórdico. Esto quiere decir que los tratados de esta institución se redactan oficialmente en lengua finesa, así como en las otras lenguas y tiene el mismo valor y efecto. En cambio, las lenguas de trabajo del Consejo Nórdico son el danés, el noruego y el sueco, que permiten una cierta comprensión mutua gracias al común origen escandinavo. El finés goza de un servicio de traducción simultánea desde 1977.

1.3.7: Francia

Lengua de Estado: francés

Población que la usa: 57.700.000

Población bilingüe: 4.587.300

Rango en la UE: Oficial y de trabajo desde 1958

La I Guerra Mundial demostró que en Francia el peligro de secesionismo basado en las diferencias lingüísticas apenas existía. Millones de corsos, flamencos, catalanes, alsacianos, gascones, vascos, bretones, etc, combatieron lealmente bajo la bandera francesa y en francés y a su regreso del frente se convirtieron en unos inesperados agentes del afrancesamiento. Las iniciativas políticas y culturales del regionalismo surgidas en el último cuarto del siglo XIX entraron en decadencia y la III República aparecía por fin, como una fuerte unidad cultural y lingüística.

Tres factores determinaron, según J. W. Lapierre, un resurgimiento regional al término de la II Guerra Mundial⁴⁶: el aislamiento y la fragmentación de Francia entre 1940 y 1944, las guerras de descolonización (1947-1962) y los desequilibrios económicos interterritoriales (1955-1975). Los nazis y los colaboracionistas alentaron los movimientos regionalistas bretones para romper la unidad francesa y posteriormente las guerras descolonizadoras dieron a muchas minorías la sensación de que existía una colonización interior y de que el Estado favorecía mucho más a los repatriados francófonos de ultramar que a sus propias minorías.

La situación se mantuvo casi invariable hasta la ley "Maurice Deixonne" (diputado socialista por Tarn) de 11 de enero de 1951, sobre la enseñanza voluntaria de las lenguas y

los dialectos locales. Era la primera vez que el Parlamento francés reconocía la existencia de estas minorías y regulaba su uso en el ámbito educativo. El estudio de dichas lenguas no tenía un fin en sí mismo, sino que en gran parte debía servir para que los niños franceses tuvieran un instrumento adecuado "para el estudio de la lengua francesa" (art. 2º). Era un estudio facultativo y con una dedicación de sólo una hora a la semana, centrada sobre todo en los aspectos folklóricos de la minoría, aunque es cierto que facilitó la entrada de algunas lenguas, como la vasca, en la Universidad. Se encargó al Consejo Superior de Educación Nacional la búsqueda de los medios más adecuados para favorecer el estudio de las lenguas y los dialectos locales. Esta ley, que ignoraba lenguas como el alsaciano (añadida en 1952), el corso (añadido en 1974) o el flamenco, apenas tuvo repercusiones prácticas por falta de medios y por su carácter estrictamente voluntario. Por ello, fue considerada más bien una declaración de buenas intenciones, e incluso como un intento de impedir el desarrollo de manifestaciones lingüísticas internas, cuando el gobierno empezaba a lanzar la idea internacional de la "francofonía"⁴⁷.

Así pues, Francia entró en la CEE con "ley Deixonne" en vigor y sin más política lingüística en la práctica que la marginación de las lenguas minoritarias y el impulso internacional del francés. No fue hasta 1982 en que a petición del Ministro de Cultura, Jacques Lang, se elaboró por parte de Henri Giordan un informe titulado Democracia cultural y

~~derecho a la diferencia~~, con la intención de implantar una más decidida política de defensa de las culturas regionales y minoritarias. En esta fecha la presión desde las instituciones europeas en pro de las lenguas minoritarias empezaba a dejarse sentir, hecho que coincidía además con un importante renacimiento interno de las principales minorías lingüísticas, como la bretona, apoyada en ocasiones por movimientos político-culturales de ámbito regional que solían arrancar de los años 1960. Varias minorías periféricas, como el catalán y el euskera, se estaban beneficiando asimismo del renacimiento lingüístico al otro lado de la frontera, en estos dos casos la española.

La aparición del "Informe Giordan" coincidió además con una amplia reforma administrativa⁴⁸, que dotó a las regiones de ciertos poderes para el desarrollo de la cultura propia. Lo cierto es que entre 1982 y 1983 varias circulares del ministro de Educación A. Savary reconocieron tres modalidades de enseñanza con una hora de iniciación semanal de las lenguas regionales, tres horas semanales o una enseñanza bilingüe, según los casos.

Sin embargo, el Consejo Constitucional de la República señaló dos límites estrictos para aplicar estas leves mejoras: la indivisibilidad del Estado y la igualdad de condiciones en la enseñanza en todo el territorio nacional⁴⁹, condiciones que sólo podían ser variadas por el gobierno central. De este modo,

en realidad las competencias en materia cultural eran siempre concurrentes entre los diversos niveles administrativos, según el análisis de François Luchaire⁵⁰. Los poderes regionales y locales pueden financiar la enseñanza de las lenguas locales, pero siempre bajo la tutela de la Administración central, a pesar de que el Consejo Constitucional proclamó la libertad de enseñanza⁵¹.

Como primer fruto de la nueva situación, por un decreto de 23 de septiembre de 1985 fue creado un órgano gubernamental, el Consejo Nacional de las Lenguas y las Culturas Regionales, que con carácter consultivo y no vinculante, pasó a asesorar al primer ministro en materia de minorías lingüísticas⁵². No obstante, cada vez que se ha reunido, sus conclusiones han levantado voces en contra, voces que proclaman indefectiblemente que la unidad nacional francesa está en peligro.

La tímida apertura de 1982-85, que no otorgó ningún estatuto especial a ninguna de las minorías lingüísticas del Estado francés, no fue óbice para que en alguna ocasión las instancias europeas hayan llamado la atención al gobierno francés por las limitaciones legales que sufren estas minorías en su territorio. Este el caso del documento presentado por los eurodiputados Kuijpers y Vandemeulebroucke al Parlamento Europeo en abril de 1985. A finales de los años ochenta, decía Lapierre que "en Francia se pueden oír y leer muchos bellos

discursos sobre la sociedad multicultural que viene. Las resistencias a este proyecto son aún mayoritarias. El modelo de Estado-Nación resiste bien"⁵³.

Además, la descentralización regional iniciada en 1972 y completada diez años más tarde no ha ayudado a las minorías lingüísticas de Francia en tanto que conservó la división administrativa en departamentos y que éstos no coinciden con el territorio de las distintas minorías étnicas y lingüísticas. Así, los vascos son minoritarios en Aquitania y los catalanes en el Lenguadoc-Rosellón; Occitania está dividida en cuatro regiones; Nantes no pertenece administrativamente a Bretaña, pese a ser su capital; y la Lorena "Thioise" está separada de Alsacia. La falta de progresos legales y administrativos ha ido radicalizando algunos movimientos regionales, como Iparretarrak en el País Vasco, el Ejército Revolucionario en Bretaña o el Frente Nacional de Liberación de Córcega que en los años 1960 emprendieron acciones terroristas, lo cual provocó nuevas medidas represoras.

La escasa repercusión de la "Ley Deixonne" quedó demostrada por el hecho de que durante 30 años no se legislara en materia lingüística. Y diez años después la Administración central francesa pasó de nuevo a la ofensiva pero para proteger la lengua francesa, no las minoritarias. El 23 de Junio de 1992 la Asamblea Nacional francesa declaró por primera vez al idioma francés como lengua oficial de todo el Estado (artículo 2),

como consecuencia de la reforma de la Constitución de 1958, reforma derivada del Tratado de Maastricht⁵⁴. Lo notable del caso es que la sentencia del Consejo Constitucional de 9 de abril que exigía cambios en la Constitución para adaptarla al Tratado de la Unión, no hacía ninguna mención a la lengua francesa, de tal manera que este punto no aparecía en los primeros proyectos de ley elaborados por el Gobierno. La consagración constitucional del francés como lengua de Estado fue, por lo tanto, una iniciativa parlamentaria a propuesta de los diputados Toubon, Hyst y Lamassoure⁵⁵. "Francia se convirtió así muy explícitamente en el único país de la CE, cuya Constitución reserva una posición privilegiada a un sólo idioma oficial, sin reconocer un status a las otras lenguas que históricamente se han hablado en su territorio", escribió en esta ocasión Henri Giordan⁵⁶.

En el transcurso del debate en la Asamblea Nacional el diputado Yves Dollo, portavoz del Partido Socialista, pidió el 12 de mayo que la misma lógica que se aplicaba en aquellos momentos con la lengua francesa, como expresión de la identidad de Francia, se hiciera con las lenguas regionales "en un espacio común enriquecido por la diversidad"⁵⁷. Las distintas interpelaciones de parlamentarios franceses para que esta reforma constitucional abriera un proceso de revisión del status legal de las lenguas minoritarias francesas, quedaron sin respuesta por parte del gobierno central, a pesar de que se revivieron las promesas del entonces presidente de la

República, François Mitterrand, en Lorient (Bretaña) el 14 de marzo de 1981, anunciando un estatuto legal para todas las lenguas y culturas presentes en el Estado⁵⁸. Algunos parlamentarios, especialmente R. Pandraud (RPR) volvieron a anunciar su oposición a favorecer las lenguas regionales: "Yo no soy de los que consideran que los dialectos han sido una fuente de enriquecimiento para nuestro país... Si hay que obligar a nuestros hijos a aprender otra lengua, no les hagamos perder el tiempo con dialectos que no hablarán más que en su pueblo"⁵⁹. Ante esta doble actitud Olivesi y Pastorel concluyen que en Francia "el derecho de las lenguas minoritarias está por crear"⁶⁰.

Aunque la "ley Toubon" de 1994 estuvo especialmente dirigida a evitar la penetración de extranjerismos, preferentemente ingleses, en sectores como la publicidad o los congresos, su aplicación tendió a fortalecer la hegemonía del francés frente a las lenguas minoritarias. Con todo, su artículo 19 establece que "las disposiciones de la presente ley se aplicarán sin perjuicio de la legislación y la reglamentación relativas a las lenguas regionales" y que "no se opone a su uso"⁶¹. Durante su tramitación parlamentaria se pudo cambiar también el artículo 9, el cual afirma que "la lengua de la enseñanza... es el francés", añadiéndosele la fórmula "salvo en las excepciones justificadas para las necesidades de la enseñanza de las lenguas y las culturas regionales". Las reformas del proyecto contaron con el apoyo del entonces ministro de Educación,

François Bayrou, diputado y presidente del Consejo General de los Pirineos Atlánticos, que hablaba gascón y que había promocionado algunas acciones en favor de las lenguas minoritarias en Francia.

Posteriormente el 30 de junio de 1994 la Asamblea Nacional francesa aprobó definitivamente un proyecto de ley ("ley Jacques Toubon") sobre el uso de la lengua francesa con el voto a favor de la mayoría de centro derecha y la abstención de socialistas y comunistas⁶². Aunque la ley está dirigida en especial a evitar la penetración de extranjerismos, preferentemente ingleses, en sectores como la publicidad o los congresos, su aplicación tiende a fortalecer la hegemonía del francés también frente a las lenguas minoritarias.

La "ley Toubon" sufrió, sin embargo, un importante recorte por parte del Consejo Constitucional francés, que derogó dos de sus disposiciones más controvertidas a consecuencia de un recurso presentado por el grupo socialista de la Asamblea Nacional, presidido por Martin Malvy. Las disposiciones anuladas hacían referencia a la prohibición de utilizar palabras extranjeras "en las relaciones entre personas privadas" y por parte de "los organismos y servicios de radio y televisión, tanto públicos como privados". Regular la lengua en los ámbitos privados resulta, en opinión del Consejo Constitucional, contrario a los principios constitucionales de "la libertad de expresión y de comunicación de las ideas y de

las opiniones", proclamados en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. El Consejo también derogó la subordinación de las subvenciones públicas al uso de un francés gramaticalmente correcto. La sentencia sostiene que si bien es cierto que hay que defender la lengua para preservar la cultura, también es verdad que el francés es una lengua viva y que sólo sus hablantes tienen el poder de hacerla evolucionar. Por lo tanto, se niega al Estado la facultad de decidir qué palabras deben ser consideradas francesas y de imponer un idioma.

1.3.8: Gran Bretaña

Lengua de Estado: Inglés

Población que la usa: 58.000.000

Población bilingüe: 586.000

Rango en la UE: Oficial y de trabajo desde 1973

Tras la II Guerra Mundial el inglés mantuvo su preeminencia legal y de hecho sobre las lenguas gaélicas en toda la vida pública y la enseñanza, hegemonía que arrancaba del siglo XIV, aunque se suavizaron las formas. La "Welsh Court Act" de 1942 fue la primera de una serie de medidas que mejoraron algo la situación del galés e incluso le proporcionaron una cierta

oficialidad, que contrastaba con la severidad tradicional con que eran tratados el escocés y el irlandés. Todavía en 1969, por ejemplo, se prohibió rotular las calles de Irlanda del Norte en lengua gaélica, lo cual equivalía a expulsarla definitivamente de la vida pública.

Todo ello llevó a analistas como Charles W. J. Withers y Jacques Maurais a concluir que si bien fenómenos como la industrialización y el urbanismo influyeron en el retroceso de las lenguas celtas en Gran Bretaña, la legislación punitiva a partir del siglo XVI y sobre todo del XVII fue la causa principal⁶³. "A partir de finales del siglo XVII la historia del gaélico se resume en un retroceso, que se manifiesta desde finales del siglo XIV, a causa de una serie de procesos de cambio, el origen de los cuales se remonta a la legislación del siglo XVII", escribe Withers⁶⁴.

1.3.9: Grecia

Lengua de Estado: griego

Población que la usa: 10.500.000

Población bilingüe: 223.000

Rango en la UE: Oficial y ~~de trabajo desde 1981~~

La I Guerra Mundial dió pie a que los griegos trataran de reconquistar la antigua Jonia griega en poder de Turquía, pero el intento fracasó. El intercambio de poblaciones entre Grecia y Bulgaria en virtud del Tratado de Neuilly de 1919 y entre Grecia y Turquía de acuerdo con la Convención de Lausana de 1923, constituyó una "solución" radical para los problemas que los búlgaros y los griegos en el primer caso y los musulmanes y los greco-ortodoxos en el segundo, podían provocar en tanto que minorías en el interior de estos Estados. El procedimiento de intercambiar poblaciones de forma voluntaria u obligatoria, contrario a cualquier derecho de las minorías e incluso a su existencia tendía a establecer una homogeneización en el interior de los Estados balcánicos. Sin embargo, el Tratado de Sèvres sobre la protección de las minorías en Grecia, en vigor desde 1924 hasta el fin de la II Guerra Mundial, concedía algunos derechos a cualquier individuo perteneciente a una minoría, pero al mismo tiempo reconocía derechos específicos para los musulmanes, los valacos y los judíos. Las diferencias de orden político y jurídico referidas a las minorías suscitó serios problemas entre Grecia y sus vecinos⁶⁵.

En 1923 el Tratado de Lausana reguló un nuevo trasvase de poblaciones: entre 1 millón y 1'5 millones de griegos abandonaron las ciudades jónicas, mientras que medio millón de turcos se trasladaron de Grecia a Turquía. Estos movimientos dieron un carácter étnica y lingüísticamente más homogéneo a Grecia, aunque en su interior permanecieron algunas minorías

lingüísticas recogidas en el censo de 1951. Desde entonces las autoridades griegas han negado sistemáticamente la existencia de estas minorías, de modo que no han quedado reflejadas en los censos posteriores. En el informe elaborado por la Comisión Europea en 1985 tampoco figuran, por lo que en 1987 se encargó al profesor español Miquel Siguán que completara dicho informe con los datos de Grecia.

Las tensas relaciones que la Grecia moderna ha mantenido con todos los países vecinos ha venido a complicar esta situación, ya que algunas de estas minorías, particularmente la turca, están étnica, religiosa y lingüísticamente vinculadas a la población de estos países fronterizos. Y en cualquier caso, los artículos 37 a 44 del Tratado de Lausana garantizan los derechos de la minoría greco-ortodoxa en Turquía, mientras que el 45 hace lo mismo con los derechos de la minoría musulmana en Grecia⁶⁶.

Conviene resaltar que en este caso el elemento fundamental para definir ambas minorías étnicas fue la religión y no la lengua, y que el Tratado reguló primero los derechos de la minoría greco-ortodoxa en Turquía, posiblemente porque Estambul (ex-Constantinopla), es la sede del patriarcado de la Iglesia Ortodoxa. El artículo 45 se convirtió así claramente en una contrapartida para la minoría turco-musulmana en Grecia.

El Tratado de Lausana definió y garantizó la existencia de una minoría mayoritariamente turca, dotada de unos derechos y de un status propio. En este sentido, y a pesar de que son jurídicamente ciudadanos griegos, no son considerados como miembros de la cultura y de la etnia griega, sino como extraños, e incluso como adversarios a ella y nadie se ha planteado nunca su helenización colectiva. Por el contrario, los miembros del resto de minorías lingüísticas son vistos como griegos, y en consecuencia se minimizan o se niegan las diferencias lingüísticas. En este caso, la etnia y la religión imponen la lengua.

En los últimos años se ha observado una cierta flexibilización del gobierno griego hacia sus minorías lingüísticas. Así, por ejemplo, en la encuesta elaborada por el CAHRL del Consejo de Europa para determinar la situación de las lenguas regionales o minoritarias en Europa en 1994⁶⁷, las autoridades griegas reconocieron tres minorías lingüísticas: la turca, la pomaca y la tsigana. En cambio, no admitieron la existencia de las minorías arbanita, aroumaka y eslavo-macedonia⁶⁸.

Tradicionalmente los griegos han utilizado distintos y variados dialectos de la lengua griega. El hablado en Atica se convirtió en el más prestigioso y en el usado como lengua culta. Al propio tiempo, surgió un griego común para las necesidades comerciales y las relaciones intercomunitarias. La

Iglesia Ortodoxa adaptó el griego culto y lo mantuvo durante los siglos de ocupación turca. En el momento de la independencia se convirtió en el idioma oficial del nuevo Estado, dada la identificación nacional entre Iglesia y Estado.

Sin embargo, había evolucionado mucho en comparación al hablado por el pueblo. Escritores y políticos empezaron a utilizar el griego popular, con lo que la reivindicación lingüística se politizó. En los años 1960 esta sustitución era un hecho, pero el "régimen de los coroneles" (1967-74) la detuvo hasta que en 1977 el griego popular fue declarado lengua oficial de Grecia. El uso del griego culto no desapareció del todo, por lo que la polémica entre lengua culta ("katewasa") y griego popular ("demotici") permaneció irresuelta⁶⁹.

1.3.10: Irlanda

Lenguas de Estado: Inglés y Gaélico-irlandés

Población que usa el inglés: 3.443.000

Población bilingüe: 1.043.000

Rango en la UE: inglés: oficial y de trabajo desde 1973

irlandés: oficial desde 1973

Al término de la II Guerra Mundial los sucesivos gobiernos irlandeses persistieron en los esfuerzos normalizadores del gaélico emprendidos a raíz de la independencia nacional en 1922. En efecto, la creación de la República de Irlanda elevó al gaélico al rango de lengua oficial de los 26 condados. La primera Constitución decía que "el idioma nacional del Estado Libre de Irlanda (*Saustat Eireann*) es el idioma irlandés, pero la lengua inglesa será igualmente reconocida como idioma oficial. Nada en este artículo impedirá que especiales medidas sean adoptadas por el parlamento del Estado Libre de Irlanda (llamado de otra forma *Oireachtas* y a partir de ahora será generalmente citado así) para distritos o áreas en las que sólo un idioma sea de uso general"⁷⁰.

Continuando las medidas legales anteriores, la Ley de Transporte de 1950 ordenó que todos los letreros, carteles, y nombres de estaciones, así como los billetes de los pasajeros, tenían que estar en irlandés, aunque podían ser bilingües. La Ley de Ministros y Secretarios de 1956 dispuso que las áreas *Gaeltacht*, o gaélicoparlantes, serían fijadas por ley, si bien podían ser variadas en virtud de las necesidades de la política lingüística. También se creó un Departamento de Estado exclusivo para la *Gaeltacht*, la función del cual era "promover el bienestar cultural, social y económico de la *Gaeltacht*, impulsar la conservación y expansión del uso del irlandés como lengua vernácula", y asesorar a los otros departamentos por lo que respecta a la consecución conjunta de ambos objetivos.

Incluso la sesiones del Senado republicano se realizan, según su reglamento, en cualquiera de los idiomas, y en ambos son publicados asimismo el diario de sesiones y el resto de documentos⁷¹.

Esta política lingüística conoció éxitos importantes en tanto que implantó núcleos gaélicoparlantes en las ciudades, pero no impidió que en el conjunto del país la población de habla irlandesa continuara retrocediendo. En 1946 había registrados 193.000 gaélicoparlantes y en 1951 se censaron 190.000, aunque el profesor Brian O'Cuiv redujo a 35.000 los irlandeses que usaban corrientemente el gaélico⁷².

Un informe elaborado en 1963 por la Comisión Nacional para el Restablecimiento de la Lengua Irlandesa subrayó la apatía de la población y los distintos errores cometidos, como por ejemplo, una excesiva insistencia en el aprendizaje escolar del irlandés y poca para un mayor uso social. En 1983 el Bord Na Gaeilge (Academia de la Lengua Gaélica) editó un plan de acción para 4 años. Esta institución creía factible una sociedad bilingüe para finales del siglo XX, a pesar de reconocer que el uso comunitario del irlandés retrocede. A favor de su extensión cuenta con un 25-30% de la población que es gaélicoparlante y con un 30-40% que tiene conocimientos de este idioma. En Dublín, por ejemplo, se pasó del 1% de habitantes con conocimientos del Gaélico en 1981 a un 25% en 1983. El plan resalta el declive de los Gaeltacht que han pasado de un 19% de

irlandeses en 1891 a un 1% en 1981⁷³. Se trata, por tanto, de preservar y fortalecer estas comunidades gaélicoparlantes, consolidar su presencia en los núcleos urbanos, y, al mismo tiempo, dar las condiciones para hacer posible la elección bilingüe en los distritos de habla inglesa. En este sentido el informe de la Comisión Nacional subraya que es preciso que la sociedad asuma y protagonice este proceso y que el Estado no sea neutral en un sistema en el que predomina ampliamente el idioma inglés⁷⁴.

El Tratado anglo-irlandés de 1985 habla de cooperación cultural entre ambos países por lo que respecta a Irlanda del Norte, pero no menciona el gaélico que se considera totalmente perdido en los condados de soberanía británica⁷⁵.

En cualquier caso, la República de Irlanda es el único caso, con las relativas excepciones de Luxemburgo y Finlandia, en que una lengua minoritaria ha sido elevada a la máxima categoría constitucional y legal, y goza de una amplia protección por parte de los poderes públicos. Ello no ha sido obstáculo para que los gaélicoparlantes hayan ido retrocediendo en número, hecho que ha sido aducido en numerosas ocasiones por los adversarios de una normalización de las lenguas minoritarias europeas.

Sin embargo, el ligero aumento de gaélicohablantes observado en la década de los años 1980 parece reflejar en la población

irlandesa la nueva preocupación de las instituciones europeas y sus recomendaciones para que se fomente su uso. En cualquier caso, los gaélicos irlandeses se han mostrado muy activos no sólo en la defensa de su lengua en las instancias comunitarias, sino también en la elaboración de una doctrina pan-europea sobre este tema.

1.3.11: Italia

Lengua de Estado: Italiano

Población que lo usa: 57.800.000

Población bilingüe: 2.330.000

Rango en la UE: Oficial y de trabajo desde 1958

Al final de II Guerra Mundial en Italia se planteó de nuevo el encaje inmediato de las minorías lingüísticas, especialmente la alemana, en el nuevo Estado democrático. El Acuerdo De Gasperi-Gruber de 5 de septiembre de 1946 entre Italia y Austria encomendó al Estado italiano una serie de obligaciones y tutelas sobre los germanófonos de Italia. Estas no fueron cumplidas a satisfacción de Austria y de los italo-germanos y se registraron fuertes protestas, que condujeron a la

negociación de un paquete de medidas para aplicar el acuerdo de 1946. En 1972 el Estatuto de la Región de Trentino-Alto Adigio fué modificado para adaptarlo a dichos cambios.

Un anexo al acuerdo de 1954 con Yugoslavia estableció una serie de normas para la tutela de las respectivas minorías, pero el Tratado de Osimo de 1975 dejó esta protección a los respectivos ordenamientos nacionales con ciertas condiciones. De este modo, las minorías alemana y eslovena en Italia están sujetas a garantías derivadas de tratados internacionales.

La reacción anti-fascista posterior a la II Guerra Mundial hizo potenciar una política descentralizadora a escala municipal y provincial, pero también regional de acuerdo con los principios federalistas imperantes bajo el Risorgimento y olvidados posteriormente. Ya la Resistencia elaboró la "Declaración de Chivasso" el 19 de diciembre de 1943, que afirmaba el valor de las hablas de los valles alpinos occidentales. Por ello, la Constitución de 1947 no sólo preveía un sistema de autonomías regionales y locales, sino que su artículo 6º comprometía a la nueva República a proteger a las minorías lingüísticas con normas pertinentes⁷⁶.

Sin embargo, la concreción de este principio tardó. En los debates constituyentes de 1946 (en la Comisión Forti y en la Asamblea Constituyente) prevaleció el punto de vista de que la protección del Estado sólo debía afectar a aquellas minorías

lingüísticas que además fueran nacionales y estuvieran vinculadas a otros Estados, es decir la francesa del Valle de Aosta, la alemana del Tirol del Sur y la eslovena de Venecia Júlia. A las otras "débiles minorías de griegos, albaneses y catalanes... no parece conveniente, ni posible, concederles los derechos relativos al respeto a su lengua o sus costumbres"⁷⁷.

De este modo, sólo obtuvieron cierto reconocimiento legal las 'minorías implicadas en tratados internacionales o citadas en los cinco Estatutos de Autonomía regionales especiales (Sicilia, Cerdeña, Valle de Aosta, Trentino-Alto Adigio y Friul-Venecia Julia) fijados por la Constitución⁷⁸. Así como el fascismo había seguido la táctica de transferir masas de emigrantes italo parlantes (trabajadores y funcionarios) a las regiones bilingües, la Constitución de 1948 juntó una provincia italo fóna, como el Trentino o Venecia Julia, con otra bilingüe, como Bolzano o Udine. La proporción de italianos en el Tirol del Sur pasó del 3% al 35%.

Por otra parte, los sucesivos gobiernos centrales consideraron que la protección de las minorías lingüísticas era competencia suya e impugnaron varias leyes regionales aprobadas al socaire de los Estatutos regionales ordinarios (Piamonte, Véneto, Molise, Lucca y Calabria). Únicamente en Bolzano y en el Friul-Venecia Julia se llevó a cabo una política más abierta. A finales de los años 1980 el parlamento italiano estudió distintas iniciativas legislativas para dar

competencias a la Administración regional y local en materia lingüística⁷⁹.

Para desarrollar el citado artículo 6º de la Constitución, en noviembre de 1991 la Cámara de los Diputados empezó, pero no concluyó por disolución anticipada de las Cámaras, el debate de un proyecto de ley de protección de las minorías lingüísticas, 10 en total más el cingaro. El proyecto había sido ya presentado en 1985. La ley, presentada por el diputado socialista Silvano Labriola, preveía la enseñanza de las lenguas locales en los niveles de preescolar y escuela primaria (y también en la media previa explícita solicitud de los interesados), además de algunas nociones sobre tradiciones regionales. También confirmaba los poderes de las Regiones en materia de regulación lingüística⁸⁰. En medio de un fuerte debate en el mundo político y cultural, esta ley provocó un manifiesto de cinco intelectuales pidiendo el voto en contra. "Os pedimos que votéis en contra de una ley que representaría un verdadero y real atentado a la unidad cultural de la nación italiana y que precipitaría al país en aquell municipalismo que ha acompañado siempre los momentos más oscuros de nuestra historia plurisecular"⁸¹.

Por todo ello, Sergio Salvi acusó a la clase política italiana de "ser incapaz de aplicar un artículo constitucional, el sexto, aprobado hace más de 50 años... Esta clase política a la que me refiero dispuso de un tiempo más que suficiente,

pero no tuvo la voluntad política de enfrentarse a la realidad plurinacional de Italia", declaraba en 1994. Los cambios políticos sucedidos en este país a raíz de las elecciones generales de marzo de 1994 con la irrupción en el poder de partidos como la Liga Lombarda, le hacía añadir que "en el gobierno central hay una nueva clase política u otra clase política en ascenso, que ya ha dicho y repetido que el Estado italiano no puede seguir, tal como ha funcionado hasta ahora. De otro modo, la situación acabaría siendo cada vez más catastrófica... Tenemos que esperar que la sensibilidad por las distintas lenguas y culturas, que bajo los gobiernos anteriores había sido muy leve, sea uno de los puntos a discutir y a resolver en el marco de las reformas a fondo que los nuevos gobernantes quieren garantizar"⁸². El uso de las lenguas minoritarias ocasiona también problemas en el derecho privado, tal como demuestra la profesora Daniela Memmo⁸³.

En 1994 el Ministerio del Interior italiano dió a conocer un informe de casi 600 páginas sobre la situación de las minorías en aquel país y en 25 países más, aportando datos sobre su nombre, las regiones a las cuales pertenecen y la legislación que les protege⁸⁴.

1.3.12: Luxemburgo

Lenguas de Estado: Francés, Alemán y Luxemburgués

Población que las usa: 366.000

Población bilingüe/trilingüe: 270.000

Rango en la UE: francés y alemán: oficial y de trabajo (1958)

luxemburgués: oficial desde 1984

La Constitución de 1868 declaró el francés y el alemán como lenguas oficiales del nuevo Estado⁸⁵, puesto bajo la autoridad del rey de los Países Bajos. Las leyes eran elaboradas y publicadas en francés y su texto, en caso de discrepancia, prevalecía sobre el alemán.

La revisión constitucional de 1948 mantuvo este esquema lingüístico, pero introdujo un nuevo artículo 29, según el cual la ley regularía el uso de las lenguas en materia administrativa y judicial. El cambio más notable se produjo en 1984 con la ley sobre el régimen de lenguas en el Gran Ducado, la cual declaró el luxemburgués como "lengua nacional", pero mantenía la preeminencia del francés como lengua legislativa.

Situado en la franja de contacto entre las lenguas germánicas y las latinas, su población ha utilizado

tradicionalmente el luxemburgués (un dialecto germánico) para las actividades cotidianas y las comunicaciones orales e informales, el alemán en la Administración y los negocios y el francés para la cultura y las relaciones exteriores. La proclamación del luxemburgués en 1984 como lengua nacional le dió una mayor presencia en la enseñanza y en la vida pública.

Desde entonces el luxemburgués predomina en la enseñanza preescolar, pero a partir de los seis años la educación se recibe en alemán y francés, aunque se sigue aprendiendo el luxemburgués unas horas a la semana. La enseñanza superior debe realizarse en alguno de los países vecinos. El 80% de la prensa escrita local se publica en alemán, el 20% en francés y el 2% en luxemburgués.

Según el profesor Miquel Siguán, "los luxemburgueses ofrecen un ejemplo bien poco frecuente de que es posible defender con pasión la propia lengua y al mismo tiempo conocer y utilizar a fondo otras lenguas. Y ofrecen un ejemplo de que con una pedagogía adecuada un sistema educativo en tres lenguas puede funcionar eficazmente e incluso alcanzar resultados brillantes"⁸⁶.

1.3.13: Países Bajos

Lengua de Estado: Neerlandés

Población que la usa: 15.200.000

Población bilingüe: 400.000

Rango en la UE: Oficial y de trabajo desde 1958

En 1938 la Ley de la Lengua convirtió al flamenco en lengua oficial de las provincias belgas del Norte. Hubo numerosos intentos por parte de instituciones y personalidades flamencas de convertirlo en una lengua distinta del holandés, pero finalmente en 1980 los Países Bajos y Bélgica firmaron un tratado reconociendo la unidad de ambas lenguas (*Neerlandse Taalunie*) y estableciendo mecanismos de colaboración cultural y lingüística. El auge económico experimentado por Holanda y las provincias de habla flamenca de Bélgica, el nuevo status constitucional de estas últimas y la fluidez fronteriza en el marco del Benelux y de la Unión Europea proporcionaron una amplia base socio-política a dicho tratado⁸⁷.

1.3.14: Portugal

Lengua de Estado: Portugués

Población que la usa: 9.800.000

Población bilingüe: 3.000

Rango en la UE: Oficial y de trabajo desde 1986

Desde el punto de vista lingüístico Portugal es sin duda el país más uniforme de toda la Unión Europea, e incluso de toda la Europa Occidental. La expansión geográfica y literaria del portugués (América Latina, Africa y puntos de Asia) no afectó su unidad interna, especialmente en la metrópolis, a pesar de que algunos lingüistas hablan de cuatro dialectos. Las diferencias entre el portugués septentrional y el meridional consisten más en cuestiones fonéticas que estructurales, por lo que no se consideran ni siquiera formas dialectales.

Probablemente su situación geográfica "protegida" ha sido decisiva para la conservación lingüística, ya que desde el siglo VIII no ha sufrido ninguna invasión permanente, ni ha sido lugar de paso o frontera de pueblos distintos. Incluso sus relaciones comerciales, políticas y culturales con España, con la relativa excepción de la frontera con Galicia, han sido más bien escasas hasta hace unos pocos años, todo lo cual ha coadyuvado para mantener su excepcional cohesión lingüística⁸⁸.

1.3.15: Suecia

Lengua de Estado: Sueco

Población que la usa: 8.700.000

Población bilingüe: 70.000

Rango en la UE: Oficial y de trabajo desde 1995

La ruptura de Gustavo Vasa con Dinamarca en 1525 permitió, en cambio, depurar la fuerte influencia que el danés había ejercido hasta entonces sobre la lengua sueca⁸⁹. El nuevo gobierno alentó la codificación de una sola lengua nacional, basada en las normas elaboradas por el monasterio de Vadstena y en dialecto usado en la zona central entre Estocolmo y Uppsala. Esta identificación del sueco como signo de identidad sueca culminó en 1786 con la creación de una Academia Sueca fundada por el rey Gustavo III. Por otra parte, durante los siglos XVII y XVIII el sueco se impuso en algunas provincias de habla danesa o noruega a remolque de los éxitos militares y de la expansión económica de Suecia, pero entre los siglos XIX y XX la lengua sueca se replegó dentro de sus fronteras políticas, con la única excepción de una importante minoría suecoparlante en Finlandia⁹⁰.

1.4: Chipre y Malta, próximos países a ingresar en la UE

Completada la ampliación de la UE a 15 países, la declaración final del Consejo Europeo de Corfú de 25 junio de 1994 señaló con toda claridad que los dos próximos países que ingresarán en la Unión serán Chipre y Malta. El Consejo saludó "los importantes avances en relación con la solicitud de Chipre y Malta de adhesión a la Unión Europea" y estimó que "puede darse por concluída una fase fundamental del proceso preparatorio". En consecuencia, pidió al Consejo y a la Comisión que pusieran su máximo empeño en conseguir "una rápida conclusión de las negociaciones con Malta y Chipre para la celebración de los cuartos protocolos financieros, cuyo objetivo consiste, en particular, en apoyar los esfuerzos de dichos países en el proceso de integración en la Unión Europea.

Ahora bien, el Consejo Europeo reiteró, de acuerdo con sus resoluciones de 4 de octubre de 1993, de 18 de abril de 1994 y de 13 de junio de 1994, que cualquier solución al problema de Chipre "deberá respetar la soberanía, la independencia, la integridad territorial y la unidad del país, de conformidad con las correspondientes resoluciones de las Naciones Unidas y los acuerdos de alto nivel pertinentes"⁹¹.

La UE exige la reunificación de ambas repúblicas para poder proceder a su adhesión a la Unión, para lo cual se abrieron negociaciones a principios de 1994⁹². Actualmente hay en Chipre

600.000 greco-chipriotas y 156.000 turco-chipriotas (186.000, según las fuentes turcas).

1.4.1: La lengua en la Constitución de Chipre

Lenguas de Estado: Griego y Turco

Población que las usa: Griego: 600.000

Turco: 156.000

La Constitución de la República de Chipre de 6 de agosto de 1960⁹³ distingue entre una comunidad de lengua y cultura griegas y de religión greco-ortodoxa y una comunidad de lengua y cultura turca y de religión musulmana (art.2). Como consecuencia, el artículo 3.1 proclama como lenguas oficiales de la República el griego y el turco. Se prohíbe cualquier discriminación "por razón de comunidad, raza, religión, lengua, sexo, convicción política u otra, nacionalidad, ascendencia social, nacimiento, color, riqueza, clase social o por cualquier otra causa" (art. 28.2).

Los actos y los documentos legislativos, ejecutivos y administrativos deben ser redactados en las dos lenguas y promulgados así en el Diario Oficial (art. 3.2). Un tribunal

competente resuelve sobre las posibles divergencias entre ambos textos. Las decisiones comunales son publicadas en la lengua utilizada en la asamblea, pero cuando existan divergencias con otros textos, éstas son resueltas por un tribunal competente. Del mismo modo, la moneda y los sellos son bilingües (art.3.7). Los ciudadanos pueden dirigirse a las autoridades en cualquiera de las dos lenguas oficiales (art. 3.8).

Los procedimientos judiciales se realizan en la lengua de las partes y el Tribunal Supremo es el encargado de dictar los reglamentos para regular los otros casos (art. 3.4). Las detenciones deben ser hechas en una lengua comprensible para el afectado, que puede reclamar un abogado a su elección (art. 11.4). El juez de instrucción debe utilizar asimismo una lengua comprensible para el detenido o recurrir a un intérprete, si el acusado no entendiére la lengua del tribunal (art.11 y 12).

El artículo 171 regula el uso de las dos lenguas en las emisiones de radio y televisión, de tal modo que los espacios radiofónicos en turco no pueden ser inferiores a 75 horas semanales repartidas entre los siete días y las televisivas deben ocupar tres días de cada siete. El artículo 189 dejaba un período de 5 años de co-oficialidad para el inglés (lengua colonial) en materia legislativa y judicial.

Tanto el Estado Federado Turco de 1975, como la República Turca de Chipre del Norte de 1983 proclamaron el idioma turco

como lengua única oficial, pero conservaron el esquema lingüístico de 1960 para los tribunales.

1.4.2: La lengua en la Constitución de Malta

Lenguas de Estado: Maltés e Inglés

Población que las usa: 360.000

La Constitución de Malta de 1961, modificada el 26 de abril de 1964⁹⁴, proclama el maltés como "la lengua nacional de Malta" (art.1). Sin embargo, el maltés, el inglés "y cualquier otra lengua prevista por el Parlamento en virtud de una ley adoptada por lo menos por los dos tercios de la Cámara de Representantes" son declaradas lenguas oficiales y la Administración puede utilizar cualquiera de ellas (art. 2).

La lengua de los tribunales es el maltés, aunque el Parlamento puede tomar las disposiciones necesarias para que el inglés sea utilizado en ciertos casos y bajo ciertas condiciones (art. 3). La Cámara de Representantes es el órgano que decide la(s) lengua(s) parlamentaria(s) (art. 4). En virtud del art. 35 cualquier detención debe realizarse en una lengua comprensible para el arrestado o con un intérprete. Todas las

leyes son publicadas en maltés e inglés, "salvo que el Parlamento disponga otra cosa", y en caso de conflicto entre ambos textos, predomina el redactado en lengua maltesa.

1.5: Noruega

Lengua de Estado: Noruego

Población que la usa: 4.300.000

Población bilingüe: 40.000

Aunque en el referéndum celebrado el 28 de noviembre de 1994, Noruega rechazó por segunda vez su entrada en la Unión Europea, conserva numerosos lazos institucionales con el resto de países escandinavos y de Europa Occidental, por lo que hemos considerado conveniente exponer aquí su estructura lingüística. Noruega es miembro del Consejo Nórdico, del Espacio Económico Europeo (EEE), de la OTAN, del Consejo de Europa y de la OSCE, por lo que puede aplicársele con toda propiedad la teoría de los "vasos comunicantes" en materia lingüística.

1.5.1: Noruego frente a danés

Noruega es un país lingüísticamente homogéneo, con la única

excepción de la minoría lapona o sami al norte, en la región de Trondheim. En 1907, dos años después de su separación de Suecia, se dió carácter oficial a los dos grandes dialectos noruegos, el **bokmål**, o lengua noruega modernizada, y el **nynorsk**, o lengua noruega antigua con fuertes influencias danesas. Todos los esfuerzos para unificar los dos dialectos y crear una lengua única standard, especialmente entre 1938 y 1959 fracasaron, a pesar de la creación en 1972 de la **Norsk Sprakiad**, o academia de la lengua noruega con representantes de ambas formas. Actualmente el **bokmål** es hablada por el 75% de la población, lengua predominante también en los medios de comunicación. En cambio, la Iglesia utiliza más el **nynorsk**. Precisamente la defensa de la lengua noruega, sometida durante 500 años al danés, fue uno de los argumentos más utilizados en el referéndum de noviembre de 1994 para rechazar el ingreso en la UE.

1.6: Suiza

Lenguas de Estado: Alemán, Francés, Italiano y Romanche

Población que las usa: Alemán: 5.000.000

Francés: 1.250.000

Italiano: 325.000

Romanche: 65.000

Aunque Suiza no es país miembro de la UE, ni es candidato a serlo, forma parte de otras instituciones europeas, como el Consejo de Europa. Además, su peculiar estructura lingüística no sólo constituye un caso especial dentro de Europa Oc., sino que sus soluciones constitucionales han resultado paradigmáticas para otros países, como Austria o Finlandia.

1.6.1: El peso de las lenguas en el Estado suizo

Bajo la amenaza de la Alemania nazi Suiza aprobó en 1938 una nueva Constitución que reforzara su espíritu de unidad. Entre otras cosas, introdujo la lengua romanche o retorromana como cuarta lengua nacional, aunque sólo el alemán, el francés y el italiano eran elevadas a la categoría de lenguas oficiales⁹⁵. "Si el romanche fue reconocido como cuarta lengua nacional en febrero de 1938, fue para subrayar con toda claridad que Suiza se considera una y diversa, que desea proteger sus minorías lingüísticas y que nada le es más extraño que la doctrina de las etnias", explica Pierre Béguin⁹⁶. "En el siglo XX el anterior elemento de identidad, la religión -como ha acontecido también en otros pueblos-, fue sustituido por el de la lengua. Una cuestión lingüística puso a flor de piel: la exigencia jurasiana de que su identidad fuese reconocida y respetada", afirma sobre este punto el profesor Petschen⁹⁷.

El resultado final es un Estado con cuatro lenguas nacionales, de las cuales tres son además oficiales, repartidas muy desigualmente. De los 27 cantones que constituyen la actual Confederación Helvética, 17 son de lengua alemana, cuatro de lengua francesa (Ginebra, Jura, Neuchâtel y Vaux), uno de lengua italiana (Ticino), y cuatro son plurilingües de los que tres (Berna, Friburgo y Valais) tienen dos lenguas: francés y alemán y un cuarto (Grisones) es trilingüe: alemán, romanche e italiano. En cada cantón se aplica el principio de territorialidad.

El 65% de la población suiza es germanoparlante, un 18'5% es francófona, un 10% utiliza el italiano y un 7'8% el romanche. El italiano se beneficia de la fuerte inmigración procedente de Italia, ya que los ciudadanos italoparlantes de origen suizo se reduce a un 5%.

El problema reside especialmente en los órganos confederales. El Consejo Federal o poder ejecutivo, por ejemplo, se compone de siete ministros elegidos con criterios de representatividad de los diferentes partidos políticos y zonas lingüísticas. En el parlamento federal los diputados pueden expresarse en cualquiera de las tres lenguas, pero sólo hay una traducción simultánea al francés y al alemán, pues el italiano prácticamente no se utiliza y en el Senado los senadores pueden expresarse en cualquiera de las tres lenguas, pero no hay traducción y la mayoría de las intervenciones se

hace en alemán. Y por lo que respecta a la administración federal las leyes y las reglamentaciones se publican en las tres lenguas y en las relaciones con los cantones se utiliza la lengua del cantón, pero el sistema administrativo federal funciona mayoritariamente en alemán. Un conjunto de disposiciones determinan cuáles son los puestos de trabajo en los que es obligatorio conocer dos o tres lenguas oficiales.

Muchos expertos subrayan que el alemán hablado en Suiza no es el alemán standard, aunque sí lo es el escrito, el oficial y el de la cultura. J.W. Lapierre llega a hablar de una situación de diglosia entre los germanófonos suizos⁹⁸. Con la idea de oponerse al pangermanismo y al nazismo las autoridades suizas han sostenido frecuentemente la existencia de un dialecto suizo puro y literario que bajo el nombre de "Schwyzertütsch" se opone al "Hochdeutsch" de Alemania. Favorecido por algunos medios de comunicación, el uso del primero ha avanzado considerablemente, por lo que podría acabar imponiéndose del todo. Por otra parte, el alemán suizo está muy fragmentado en sub-dialectos. El cantón de Turgovia, por ejemplo, cuenta con una veintena de variedades dialectales. En cambio, los cantones francófonos han avanzado mucho más en la unificación lingüística.

La imagen ofrecida por el sistema lingüístico suizo es muy positiva en el resto de Europa. "El respeto mutuo han venido practicándolo sus habitantes en todas y cada una de las

manifestaciones culturales en que la lengua es el principal vehículo de comunicación. La enseñanza en la escuela y en la Iglesia mantiene la autonomía lingüística propia de cada cantón....", afirma Rosa Vilá⁹⁹. Denis de Rougemont ha sido uno de los mayores propagandistas del modelo suizo: "Después de cinco siglos de existencia a la vez comunal e imperial, después cantonal y en último término anárquica, Suiza ha tomado conciencia de sí misma en tanto que unidad federal. Y esto significa en concreto que ve las ventajas de su fuerza y de su cohesión cívica en esta diversidad, que precisamente todos los grandes Estados vecinos han considerado desde siempre como causa de debilidad material, de divisiones morales y de guerras civiles..."¹⁰⁰. Para Miguel Siguán el hecho más importante es que la sólida fidelidad lingüística de los suizos resulta, sin embargo, independiente de la identidad nacional, de manera que su plurilingüismo no afecta al fuerte nacionalismo suizo. Justo lo contrario del caso belga¹⁰¹.

A pesar de ello, la influencia cada vez mayor de la población germanófono en el terreno económico, político y cultural se traduce en una hegemonía de hecho del alemán. Este progresivo desequilibrio lingüístico provocó en 1984 un manifiesto de los francófonos para "luchar con fuerza contra la germanización directa e indirecta". Entre otras reformas estructurales proponían que el Jura bernés deje de estar "bajo la dominación de un Estado de habla alemana". También reivindicaban una Asamblea de Representantes de la Romandía,

que entre otras misiones elaboraría una ley de uso del francés en toda la Suiza francófona.

Asimismo se pedía una reforma de la organización federal "de forma que las comunidades lingüísticas sean institucionalizadas y conformes a la ley", es decir que la propia Constitución federal diera garantías a las áreas lingüísticas, siguiendo el modelo belga. Estas "entidades lingüísticas estarían en cierta forma a mitad de camino entre los Estados cantonales legados por la historia y el Estado federativo". Una segunda Cámara federal estaría compuesta a partes iguales por representantes de la Suiza alemana y de la latina. También el Consejo federal estaría compuesto por ocho miembros, cuatro suizo-alemanes y cuatro latinos "para impedir cualquier hegemonía duradera de un grupo sobre otro" y para "remediar la injusticia flagrante que se constata actualmente por el hecho de que los miembros latinos del Consejo federal deban ser aceptados por la mayoría de lengua alemana de la Asamblea federal". Y concluye el manifiesto que "en un verdadero sistema federal, nadie debería sentirse sobreestimado... La Confederación Suiza pretende ser un Estado plurilingüe. Queda por hacer que esta afirmación se realice"¹⁰².

Los "romandos" exigen que se aplique rigurosamente el principio de territorialidad en el terreno lingüístico¹⁰³ y que sean los cantones y no los poderes centrales los que regulen el uso de las lenguas, ya que en este caso la mayoría

germanófono obtendría ventajas por vías indiscutiblemente democráticas. La Constitución federal no debe mencionar ni siquiera "la libertad de lengua", porque puede inducir a confusión siendo como es en Suiza un derecho individual. Un Estado federal cuatrilingüe no quiere decir que sus habitantes lo sean, por lo que el principio de territorialidad aplicado por los cantones es el único que puede ordenar el esquema lingüístico del país¹⁰⁴.

Con el fin de contrarrestar la buena imagen que el sistema lingüístico suizo tiene en los medios europeos, los sectores más radicales de la llamada por algunos Romandía, o Suiza de habla latina, han utilizado tradicionalmente el irredentismo jurásico, es decir la devolución del Jura francófono incluido en el Cantón de Berna al Cantón del Jura, de acuerdo con la voluntad de sus habitantes expresada en el referéndum de junio de 1974. La unificación de todo el Jura francófono sobre una base lingüística e histórica y superando las diferencias religiosas es la solución más viable señalada por un informe de 1993 dirigida al gobierno central y al de los cantones en litigio por una Comisión Consultiva¹⁰⁵.

Estas tensiones lingüísticas llevaron en 1993 a nombrar una comisión de expertos para estudiar una posible modificación constitucional en el sistema de cantones monolingües. Sus partidarios alegaban que este esquema no respeta las lenguas minoritarias (romanche e italiano), ni los de los hablantes de

una lengua distinta a la oficial del territorio. Aunque el Tribunal Federal suizo ha establecido claramente el principio de la libertad de lengua, no escrito en la Constitución, y que los ciudadanos pueden, por lo tanto, recurrir judicialmente ante las normas lingüísticas que consideren injustas, también ha ratificado el derecho de cada cantón a limitar el uso público de las lenguas distintas a la oficial del cantón para preservar su homogeneidad lingüística. En todo caso, empieza a abrirse paso la idea de que la apertura hacia un bilingüismo cantonal puede ser la manera de superar las actuales tensiones lingüísticas, especialmente en los cantones o comunas donde existan minorías romanches o italianas.

1.6.2: El conflicto lingüístico en el Jura

El principal conflicto lingüístico-institucional se planteó, en efecto, en el Cantón de Berna en la zona alemana, pero con una parte del Jura de habla francesa. En el año 999 el Jura francófono fue entregado por el rey de Borgoña al obispo de Basilea, germanoparlante. En 1529 el titular de la silla episcopal huyó al Jura perseguido por los reformadores y consiguió que toda la parte septentrional permaneciera católica desde su nueva sede en Porrentruy. En el Congreso de Viena el canciller Metternich decidió transferir el Jura al Cantón de Berna como compensación por la pérdida del Vaud y de la Argovia. A cambio los berneses se comprometieron a respetar el

culto católico, pero no la lengua francesa, lo cual provocó varias revueltas locales.

En 1950 el Cantón tuvo que reformar su Constitución para satisfacer las exigencias de los jurasianos de distinguirse del resto de la población germanófono¹⁰⁶. El nuevo texto estableció una autonomía jurasiana dentro del cantón, que constitucionalmente quedaba formado por dos pueblos, y reconoció también el francés como lengua nacional, si bien precisaba a continuación en qué zonas lo era el francés y en cuales el alemán¹⁰⁷. No fue suficiente para contentar las aspiraciones de los jurasianos¹⁰⁸ y en 1970 éstos obtuvieron el derecho constitucional a organizar plebiscitos en su zona ellos solos, hecho equivalente al derecho de autodeterminación. Esta facultad tras un referéndum celebrado el 23 de junio de 1974¹⁰⁹ desembocó en 1977 en una separación total de ambos territorios y la formación del Cantón del Jura con el francés como única lengua oficial, aunque se establece una protección especial para el dialecto local o "patois"¹¹⁰.

En 1978 una ley federal reconoció este nuevo cantón del Jura separado del de Berna. La ley y la subsiguiente modificación de la Constitución federal fueron aprobados en referéndum¹¹¹. Este es el único cantón suizo creado sobre una base y una motivación exclusivamente lingüística. El sociólogo jurasiano U. Windisch precisó que la base lingüístico del movimiento jurasiano está tan alejada de Berna, como de París: "La

francofonía puede ser una referencia en la medida en que permite a la identidad cultural jurasiana una mejor afirmación. Pero si el faro de la identidad cultural jurasiana quiere decir París, el Jura vivirá siempre una identidad por procuraduría. Más que afirmarse realmente, se identificará con otro, esta vez de buen grado. Los Jurasianos deberían evitar en su motivación francófona, substituir el opresor bernés por la imagen de otro padre. Su identidad es lo suficientemente rica como para poderse permitir el rechazo a la vez de Berna y de París. ¿Rechazo? Ni eso. Sólo tienen que cultivar lo que son, es decir distintos tanto de París como de Berna..."¹¹².

Sin embargo, la parte meridional del Jura francófono, de mayoría protestante más influida por Berna y alejada del núcleo jurasiano, permaneció dentro del Cantón de Berna, de modo que la Constitución de 1979 tuvo que reconocer los derechos lingüísticos del Jura bernés (por cierto, reivindicado en la Constitución del Cantón del Jura), pero suprimiendo la referencia anterior a dos pueblos distintos¹¹³. De la separación entre ambas comunidades da fe la ley federal de 1981 que obliga al gobierno federal a participar en el mantenimiento de la Escuela Cantonal de Lengua Francesa de Berna¹¹⁴, frecuentada por hijos de diplomáticos y funcionarios por ser Berna la capital política y administrativa de la Confederación.

1.7: La evolución lingüística en la Europa Central y Oriental

Al estudiar el proceso de unión europea, ya no es posible separar de forma tajante la Europa Occidental de la Central y Oriental, como ocurría antes de 1989-90. El camino recorrido desde esta fecha por lo que respecta al acercamiento entre ambas Europas, es muy grande gracias a organismos pan-europeos, como el Consejo de Europa y la CSCE. Merced a ello, la aproximación experimentada por las distintas políticas lingüísticas aplicadas por países del antiguo bloque soviético a las de los países de Europa Occidental, ha sido casi vertiginosa, si se tiene en cuenta que antes de 1989 se partía aún de principios muy distintos y no sólo de prácticas divergentes, como ocurría en la parte democrática del Continente.

A pesar de estas diferencias, en los Estados de la Europa Central y Oriental se observa un esfuerzo histórico por imponer lenguas de Estado, muy parecido al desarrollado en los países occidentales. En consecuencia, la contradicción de partida es muy similar para los unos y los otros: cómo aceptan unas estructuras multilingües y se integran en ellas unos Estados tradicionalmente defensores de las lenguas de Estado hegemónicas y perseguidores, en grados distintos, de sus propias minorías lingüísticas.

1.7.1: Un nuevo mapa lingüístico

Aunque la Constitución soviética de 1977 liberalizó sobre el papel el uso de las lenguas no rusas, el cambio real no se empezó a notar antes de 1985, año en que la URSS acometió un período de renovación y de apertura conducido por el secretario general del PCUS, Mikhail Gorbachov, que entre otras cosas comportó una relajación del centralismo y del unitarismo real imperante hasta entonces. La "perestroika" o liberalización comportó asimismo el fin de la "guerra fría", la liquidación de los bloques y, consecuentemente, el acercamiento entre las dos Europas partiendo de la idea de "Europa, como casa común".

En diciembre de 1986 se detectaron las primeras tensiones nacionalistas y lingüísticas, concretamente en Alma Atá (Kazajstán), que pese a ser severamente reprimidas desde Moscú, se fueron extendiendo a otros territorios y etnias. La escisión de los Países Bálticos, seguida de la de otras repúblicas y la desaparición de la URSS y del bloque soviético en 1992 provocó la progresiva aparición de nuevas lenguas de Estado y una reordenación general del mapa lingüístico en toda esta zona.

Sólo entre 1988 y 1990 varias repúblicas ex-soviéticas modificaron sus leyes para instaurar una lengua oficial. Fueron Estonia: (ley de 18 de enero de 1989), Lituania (ley de 25 de enero de 1989), Letonia (ley de 5 de mayo de 1989), Tadzjikistán (ley de 22 de julio de 1989), Kazajstán (ley de 22

de septiembre de 1989), Kirguizistán (ley de 23 de septiembre de 1989), Moldavia (ley de 31 de agosto de 1989), Uzbekistán (ley de octubre de 1989), Ucrania (ley de 28 de octubre de 1989), Bielorrusia (ley de 25 de enero de 1990), además de Rusia (ley de 24 de abril de 1990).

Otros países no soviéticos de nueva creación introdujeron disposiciones lingüísticas en su Constitución democrática, como por ejemplo Eslovenia en 1991, Eslovaquia en septiembre de 1992, Chequia en diciembre de 1992, etc. Otras veces eran leyes, como por ejemplo Croacia que aprobó la Ley Constitucional de los Derechos Humanos y las Libertades y de los Derechos de las Comunidades o Minorías Etnicas y Nacionales en diciembre de 1991, o Hungría la Ley sobre los Derechos de las Minorías Nacionales y Etnicas en julio de 1993¹¹⁵.

Cada una de estas leyes suscitó un vivo debate y en más de una ocasión repercutió en otros países del área. Así, el 18 de enero de 1989, por ejemplo, el Parlamento de Estonia votó un proyecto de ley que imponía el uso obligatorio de la lengua estonia en los servicios públicos de esta nueva República independiente. Tras un vivo debate en la Cámara, 204 diputados votaron a favor, 50 en contra y 6 se abstuvieron. Tanto los representantes del nacionalista Frente Popular de Estonia (FPE), como Tallinn Rain Veldeman, como del gobierno, como el ministro de Asuntos Exteriores, Valle Feldman, subrayaron que esta ley significaba un paso histórico en la restauración de la

soberanía económica, política y cultural de Estonia. La ley otorgaba a los rusos residentes en Estonia y que trabajaban en los servicios públicos un período de 4 años para aprender la lengua local. El modelo estonio fue seguido al día siguiente por la República soviética de Moldavia, cuyo gobierno propuso al Parlamento adoptar la lengua moldava como oficial y debatir su transcripción al alfabeto latino en lugar del cirílico¹¹⁶.

1.7.2: La ordenación lingüística en la Constitución soviética de 1977

"Manteniendo la continuidad de las ideas y los principios de la primera Constitución soviética, la de 1918, de la Constitución de la URSS de 1924 y de la Constitución de la URSS de 1936"¹¹⁷, la Séptima Sesión Extraordinaria del Soviet Supremo de la Unión Soviética aprobó el 7 de octubre de 1977 una nueva Constitución¹¹⁸, que fue reformada en 1988. Hacía dos años y dos meses que se había firmado el Acta de Helsinki, tratado que a medio plazo cambiaría el panorama político y lingüístico en toda Europa.

Desde el punto de vista de ordenación lingüística esta Constitución contenía tres artículos fundamentales: el 34, el 36 y el 45. Por el primero se reconocía el derecho a la igualdad ante la ley "independientemente del origen, posición social y económica, raza nacionalidad, sexo, grado de

instrucción, idioma¹¹⁹, actitud hacia la religión, género y carácter de sus ocupaciones, lugar de residencia y otras circunstancias".

Por el artículo 36 se reconocía el derecho "a usar la lengua materna y los idiomas de otros pueblos de la URSS". Ahora bien, este derecho debía aplicarse de manera que se asegurara "el acercamiento en todos los dominios, de las naciones y etnia de la URSS y la educación de los ciudadanos en el espíritu del patriotismo soviético y del internacionalismo socialista".

En tercer lugar, el artículo 45 relativo al derecho a la educación defendía "la posibilidad de estudiar en la escuela en la lengua materna. La Constitución de 1977 no hacía ninguna otra referencia a la política lingüística y dejaba en libertad a las 15 Repúblicas federadas para que legislaran en este terreno según creyeran conveniente. La reforma de 1988 tampoco modificó este esquema y siguió sin reservar a ningún poder la normativa lingüística¹²⁰.

Al no fijar una lengua de Estado y dejar libertad de uso de lenguas su orientación teórica era abiertamente progresista, pero la falta de una articulación coherente permitía que en la práctica las lenguas más potentes, especialmente el ruso, se impusieran fácilmente al resto más débiles.

Las leyes estatales debían ser publicadas en las lenguas oficiales de las 16 repúblicas. A su vez las leyes de cada república federada debían serlo en las de sus nacionalidades reconocidas. Algunas repúblicas tenían dos o más lenguas oficiales, como el Kazajstán que desde 1921 tenía el ruso y el kazakh. La Constitución del Tadzjikistán reconocía el uso del tadjik, el uzbeko y el ruso, pero autorizaba el uso del kirguiz en los tribunales que actuaban en los territorios donde esta lengua fuera mayoritaria. En la práctica la situación era mucho menos flexible, especialmente ante la presión incesante del ruso convertido prácticamente en la "lingua franca" de toda la URSS. Sólo el 3% de los rusos conocía otra lengua interior de la URSS, mientras que el 43% de los no-rusos conocían el ruso. En algunas zonas la proporción subía al 60%, 70% y hasta al 80%.

Se eliminaron lenguas y dialectos no estandarizados bien por simple desaparición física, bien por procesos de asimilación. Un tadjik ilustrado era prácticamente trilingüe y vivía en una situación de doble diglosia. Utilizaba el ruso, su lengua escrita standard y su dialecto, excepto si era de Bukara-Samarcanda cuya lengua fue escogida como standard en virtud de su potente tradición literaria. En todo caso, no recibían el mismo trato las lenguas con una larga tradición literaria, las que tenían una población concentrada y numerosa, las que estaban vinculadas a creencias religiosas, las que tenían relaciones con Estados vecinos de la URSS, como Turquía, que las que no tenían alguna de estas características.

1.7.3: Las reformas de Mikhail Gorbachov

Iniciada la "perestroika" en 1986, inmediatamente se presentaron dos problemas básicos: la revisión de las fronteras entre los antiguos territorios soviéticos y la rehabilitación de pueblos enteros represaliados entre 1930 y 1950. Según estimaciones del Parlamento ruso, sólo el 30% de las fronteras administrativas y territoriales coincidía con las fronteras naturales de las etnias¹²¹ y las lenguas. El caso es que, según el ex-ministro de Asuntos Exteriores de la URSS Edvard Schevernadze, entre 1988 y 1992 se registraron 175 conflictos protagonizados por distintas nacionalidades étnicas y lingüísticas, de los cuales 20 degeneraron en choques armados, como los de Nagorni Karabaj, Osetia, Moldavia, Abjazia, etc. En 1992 Paul Govel, experto del Departamento de Estado de los EEUU en temas de nacionalidades, citaba 60 casos susceptibles de derivar en una guerra¹²².

Desde que en diciembre de 1986 se produjeron incidentes en Alma Ata, capital del Kazajstán, el gobierno de M. Gorbachov tuvo que enfrentarse a importantes disturbios, especialmente en la zona del Cáucaso y en los Países Bálticos¹²³. En muchos casos se trataba de protestas contra la política de rusificación lanzada por L. Breznev. El PCUS empezó a revisar su política sobre las nacionalidades a partir de junio de 1988 con ocasión de su XIX Conferencia Federal, pero sin obviar medidas represivas. Por ejemplo, un decreto del Presidium del

Soviet Supremo de 8 de abril modificó la ley de responsabilidad criminal por crímenes contra el Estado y estableció penas para los ataques a la igualdad nacional y racial.

El 18 de enero de 1989 el Soviet Supremo de Estonia declaró el estonio lengua de Estado, con lo que las tensiones nacionalistas se trasladaron directamente al terreno lingüístico. En su primer informe al Congreso de los Diputados Populares en mayo de 1989 confirmó la nueva política de retorno a los postulados leninistas al afirmar que "en la esfera espiritual reconocemos la diversidad de culturas nacionales, considerándola como el más grande valor social e histórico, como patrimonio singular de toda nuestra Unión. No tenemos derecho a menospreciar ni, menos aún, a perder ninguna de las culturas, puesto que cada una de ellas es única en su género. Abogamos por un desarrollo libre y multifacético de cada pueblo, de su lengua nacional y su cultura, por relaciones equitativas y amistosas entre todos los pueblos, nacionalidades y grupos étnicos".

A continuación defendió explícitamente la vuelta a las tesis de Lenin sobre las nacionalidades: "el Congreso de los Diputados Populares y el Soviet Supremo de la URSS deben solucionar muchos complejísimos problemas en la esfera de las relaciones entre nacionalidades. Permítanme expresar la seguridad de que el estudio profundo de los mismos nos llevará a enriquecer la política leninista de las nacionalidades,

aplicándola a las realidades actuales del multinacional Estado soviético, con lo cual sentaremos una segura base política para el desarrollo del país"¹²⁴.

En la segunda quincena de agosto de 1989 empezó a plantearse el conflicto lingüístico, a raíz de las medidas adoptadas por los tres Países Bálticos para independizarse. El 26 de agosto el Comité Central del PCUS denunció estas medidas por discriminatorias para con las respectivas minorías rusófonas. El 1 de septiembre las tensiones se extendieron a Moldavia, cuyo Soviet Supremo proclamó el moldavo como lengua de Estado, decisión rechazada por la minoría rusófona.

El 19 de noviembre de 1989 Gorbachov presentó un informe ante el pleno del Comité Central, en el que reconoció que el problema de las nacionalidades había sido abordado con cierta tardanza y planteó el restablecimiento de los derechos, entre ellos los lingüísticos, de "los soviéticos de origen alemán, tártaros de Crimea, turcos meskhs, de los calmucos, de los barcaros, de los caratchais, de los chechenos, de los inguches, de los griegos, los coreanos y de los kurdos".

Frente al independentismo de los Países Bálticos en febrero de 1990 el Comité Central del PCUS aprobó una plataforma para someter al 28 Congreso del partido. De nuevo, aparece la libertad total en cada territorio con lengua propia por lo que respecta al uso de los idiomas no rusos y a su lado la

proclamación del ruso como lengua de Estado común, según el modelo fijado por la Constitución española de 1978.

El informe reconoce el peligro de que "algunos pueblos puedan perder los rasgos autóctonos en su patria histórica" y por esto "son justificadas las medidas con el fin de proteger su lengua materna, su peculiaridades culturales y sus valores espirituales nacionales, la originalidad del régimen de vida, la estructura demográfica de cada república".

Ahora bien, se alerta para que estas medidas no vayan "en detrimento de los intereses y los derechos de los ciudadanos de otras nacionalidades que habitan la república dada. El racismo, el chovinismo y el nacionalismo son incompatibles con los principios del socialismo, con las leyes del país y con las normas internacionales". En cualquier caso, añade el documento, "ningún pueblo, por poco numeroso que sea, debe perder su cultura, su idioma, su aspecto original y su carácter. Nos manifestamos a favor de que todo grupo étnico pueda formar sus asociaciones de carácter social, educativo, o religioso, tener sus organismos culturales e informativos, escuelas y templos. A nivel nacional, el Estado debe manifestar una solicitud especial por los pueblos poco numerosos, su existencia autóctona y su desarrollo".

En este orden de cosas el informe asegura que "el PCUS se pronuncia por que todos los pueblos tengan el derecho

incondicional a usar libremente su lengua materna, declararla oficial en el marco de su autonomía nacional. El idioma ruso sirve para las necesidades de todo el Estado, incluyendo la política exterior de la Unión Soviética, y de medio de contacto entre distintas etnias. Por esto conviene concederle el status de idioma oficial en todo el territorio del país". Por último, el informe recomienda introducir estos principios en una nueva Constitución. Qué duda cabe que este manifiesto-programa del PCUS se acercaba ya mucho a los de los países occidentales¹²⁵.

Es preciso subrayar que en esta época la URSS había empezado ya su acercamiento a los organismos europeos democráticos. El 1 de abril de 1990 entró en vigor un Acuerdo de Comercio y Cooperación con la CE, que a finales de 1991 irían recuperando los distintos Estados surgidos del estallido de la Unión Soviética. En diciembre de 1991 Hungría, Polonia y la República Checoslovaca fueron los siguientes países del área en firmar acuerdos de cooperación con la CE. Este mismo año estos mismos tres países fueron los primeros en ingresar en el Consejo de Europa, cuyo Comité de Ministros adoptó en junio de 1992 la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias. Dentro de la CSCE en junio de 1990 la URSS y los países ex-comunistas habían firmado la Declaración Final de la Conferencia de Copenhague para la Dimensión Humana de CSCE, texto básico en el reconocimiento de los derechos lingüísticos.

1.7.4: Rusia: Las lenguas en la Constitución de 1993

A diferencia de la Constitución soviética de 1988, la rusa de 1993¹²⁶ establece la lengua rusa como "lengua de Estado de la Federación de Rusia en todo su territorio" (artículo 68.1). A continuación se determina que "las Repúblicas podrán adoptar sus propias lenguas estatales" y que en los órganos del poder estatal, en los órganos de la administración local y en los organismos estatales de la repúblicas "se utilizarán dichas lenguas junto con la lengua del Estado de la Federación de Rusia" (artículo 68.2). Y en tercer lugar, la Constitución convierte al Estado en garante de "todos los pueblos de la Federación de Rusia para el derecho a la preservación de la lengua materna y la creación de oportunidades para su estudio y desarrollo" (artículo 68.3).

Se establece, por lo tanto, un régimen de co-oficialidad lingüística con el ruso como lengua de Estado y las otras según decida la Constitución de cada república en su territorio, aunque algunos analistas, como Félix Valdés, sostienen que el rango legal del ruso no es el mismo que el de las otras lenguas oficiales¹²⁷.

Ahora bien, el Estado asegura los derechos de "los pueblos indígenas pequeños de acuerdo con los principios y normas universalmente reconocidos por el derecho internacional y los tratados internacionales de la Federación de Rusia" (artículo

69). Este artículo resulta fundamental para la unificación de la doctrina europea sobre las minorías lingüísticas, ya que la normativa internacional sobre derechos humanos constituye la primera y más importante fuentes de los documentos elaborados por las instituciones europeas. Desde el mismo momento en que Rusia reconoció en su propia Constitución la preeminencia de estas normas internacionales, el camino para el establecimiento de un cuerpo doctrinal específicamente europeo quedó abierto.

La Constitución insiste más adelante en que la Federación de Rusia y sus sujetos¹²⁸ tienen competencias conjuntas en la protección de "los derechos de las minorías étnicas" (artículo 72.b) y en la protección "del habitat original y modo de vida tradicional de las etnias pequeñas" (artículo 72.m). La Constitución estatal sigue siendo el garante último de estos derechos y libertades fundamentales no sólo en su fase definitoria, sino incluso en su gestión. Todos los poderes públicos están comprometidos en esta defensa de las minorías y no como en la URSS en que el Estado sólo se comprometía a evitar discriminaciones y cedía a las instancias subestatales la política activa.

En cualquier caso, un tercer bloque de artículos previo prohíbe las discriminaciones y eleva a rango constitucional estos derechos de las minorías. Así, por el artículo 19.2 el Estado garantiza la igualdad de derechos y libertades "sin discriminación alguna por razón de sexo, raza, nacionalidad,

idioma¹²⁹, origen, posición patrimonial o administrativa, lugar de residencia, actitud hacia la religión, creencias, participación en organizaciones sociales y otras circunstancias. Se prohíbe cualquier forma de discriminación de los derechos de los ciudadanos por razón de pertenencia social, racial, nacional, lingüística¹³⁰ o religiosa".

Se reconoce el derecho de toda persona a "determinar y declarar sobre su identidad nacional (étnica)", pero en cambio "nadie podrá ser obligado a determinar y declarar sobre su identidad nacional (étnica)" (artículo 26.1). El mismo artículo consagra en el siguiente apartado el derecho de todos los ciudadanos a "usar su lengua materna, a elegir la lengua de comunicación, educación, instrucción y creación".

La Constitución rusa establece una cláusula cautelar por la que "no se admiten la propaganda o excitación al odio y la hostilidad social, racial, nacional o religiosa. Se prohíbe la propaganda de la superioridad social, racial, nacional, religiosa o lingüística", en el mismo artículo en que se garantiza la libertad de pensamiento y de palabra y la libertad de los medios de comunicación masiva y se prohíbe la censura (artículo 29).

Por lo demás, la Federación de Rusia conserva el esquema federal de la URSS, pero anula el anterior derecho a la autodeterminación. El titular de la soberanía es el "pueblo

multinacional" (artículo 3) y la Federación se compone de "repúblicas, territorios, regiones, ciudades federales, regiones autónomas y distritos autónomos". Las repúblicas tienen su propia Constitución, mientras que el resto de órganos territoriales dispondrán de sus estatutos y leyes (artículo 5). El artículo 65 designa cuáles son las repúblicas, los territorios, las regiones, las ciudades federales (Moscú y San Petersburgo), las regiones autónomas y los distritos autónomos. El presidente de la Federación podrá suspender todas aquellas decisiones subestatales que contradigan la Constitución o las normas federales. Además, el poder ejecutivo federal puede crear sus propias instituciones territoriales y nombrar sus responsables¹³¹.

De acuerdo con el análisis de Oleg Rumiantsev¹³², en esta ocasión la soberanía de las unidades sub-estatales está limitada por la Constitución federal: "son independientes en todo menos en aquello que es de competencia común". De esta manera, el poder federal ruso se ocupa de "las cuestiones más importantes", como son los derechos de los ciudadanos. Los litigios entre el Estado y sus componentes "se arreglan con ayuda de instituciones especiales, la más eficaz de las cuales es la Corte Constitucional de la Federación Rusa"¹³³.

1.7.5: Hungría y sus minorías en los Estados vecinos

Hungría es el otro caso paradigmático en la Europa Central en lo que concierne a las minorías lingüísticas. Los húngaros han tendido históricamente a la magiarización de sus pueblos vecinos o de los que cohabitan con ellos, hecho que ha sido admitido por algunos de sus intelectuales, como Béla Kópeczi. Esto es especialmente cierto para el período de la monarquía dual (1867-1918) tras la implantación de la "nación unitaria política". Convencidos de poseer una cultura superior que comportaba un papel civilizador, como lo fue antes el catolicismo en el Imperio Austríaco, los húngaros se esforzaron en magiarizar a los otros pueblos con los que convivían en el seno del Imperio¹³⁴.

Restablecida la democracia en 1988-89, Hungría volvió a plantear por la vía pacífica la situación de sus minorías en los países vecinos recogiendo por una parte la tradición histórica de volver a unir el pueblo magiar dividido después del Tratado de Trianon, y por otra la doctrina del Consejo de Europa y de la Comunidad Europea de impulsar la cooperación transfronteriza. Se trata, sin embargo, de establecer conciertos con otros siete países vecinos muchos de ellos en difíciles circunstancias económicas, políticas, institucionales e internacionales¹³⁵. Entre las distintas lenguas presentes en esta parte de Europa Central se encuentran algunas de raíz latina, como el rumano, de origen germano, como el alemán,

eslavo, como el esloveno o el croata, y magiar, como el propio húngaro, etc.. La asimilación de las minorías se convierte así en un proceso lento y difícil, habitualmente interpretado no como un hecho natural, sino como una renuncia o incluso como una traición, según señala el profesor Santiago Petschen¹³⁶.

La pauta de esta política húngara para con sus minorías la dió la Ley sobre las Minorías Nacionales y Etnicas de 1993¹³⁷. El texto no se refiere específicamente a las minorías territoriales, ni fija otro límite para aplicar la ley que el que tenga más de cien años de antigüedad. Los inmigrantes y los refugiados están excluidos de su ámbito de aplicación. Por lo tanto, la consideración de pertenecer a un grupo minoritario es libre. Esto fue criticado por círculos rumanos que pretendían que la ley impidiera positivamente la asimilación de las minorías. Hungría no favorece ninguna política de asimilación de los numerosos grupos étnicos y lingüísticos que pueden acogerse a la ley: búlgaros, gitanos, griegos, croatas, polacos, alemanes, armenios, rumanos, rutenos, serbios, eslovacos, eslovenos y ucranianos. Todas ellas son minorías activas, con su folklore y sus asociaciones cívicas y mucho menos asimiladas a la cultura y la lengua de Estado que las de Europa Occidental. A partir de esta base amplia y abierta a sus minorías Hungría se siente moralmente capacitada para pedir a sus vecinos que actúen de la misma forma con la minoría húngara que contengan.

En efecto, la ley de 1993 reconoce a las minorías establecidas en Hungría el **derecho a la madre patria**, es decir a conservar los lazos con la comunidad de origen e incluso a vivir en ella y a mantener relaciones pacíficas con ella. Este derecho a mantener relaciones internacionales sobrepasa el que conceden los países occidentales más permisivos con sus minorías. En todo caso, se trata de un derecho individual y no colectivo, como por ejemplo recibir programas de radio y televisión emitidos desde el país de origen.

Se reconoce asimismo el derecho al auto-gobierno, tanto a nivel estatal como local. Estos gobiernos son considerados órganos de derecho público y sus competencias se refieren solamente a la defensa de los intereses de la minoría representada y a salvaguardar su autonomía cultural y lingüística. La ley regula la manera y las condiciones para formar dichos gobiernos, sus derechos, sus obligaciones, y sus relaciones con el Estado. Su estructura es piramidal, es decir se forma en los municipios, pasa por el distrito y el área hasta alcanzar rango estatal. Sin embargo, la ley no reserva algunos escaños de la Asamblea Nacional para las minorías étnicas y lingüísticas, tema que se estudió a propuesta precisamente de Hungría y de Rumanía en la Conferencia de Copenhague de 1990, en la de Ginebra de 1991 y en la de Moscú de 1991. En Rumanía a raíz de las elecciones de 1990 la **Unión Magiar Democrática** obtuvo 29 escaños en la Asamblea Nacional y 12 en el Senado, la **Unión Germánica Democrática** consiguió un

escaño y la Unión Gitana Democrática otro. En virtud de la ley electoral armenios, búlgaros, lipovanos, polacos, serbios, eslovacos y checos, turcos y ucranios obtuvieron un escaño por minoría pese a no haber alcanzado el mínimo de votos exigible. Posteriormente el gobierno húngaro manifestó su propósito de procurar que las minorías presentes en este país dispusieran de sus propios representantes en el Parlamento nacional.

En tercer lugar, la ley de 1993 reconoce a las minorías étnicas y lingüísticas amplias competencias en materia cultural. Pueden tomar iniciativas educativas en su lengua desde las guarderías hasta la Universidad y desarrollar su propia red de escuelas. Hay libertad absoluta para cultivar el folklore y las tradiciones, así como para conservar los restos patrimoniales y los símbolos. Los que realicen sus estudios en el país de origen de la minoría ven homologados sus títulos y diplomas. En cualquier caso, el uso de la lengua materna está garantizado en cualquier parte de la República y la ley fija los procedimientos para su uso en los tribunales, la Administración y el Parlamento.

Cada minoría dispone de un ombudsman propio y el gobierno ha organizado un departamento para sus relaciones con las minorías. La Asamblea Nacional debe debatir cada dos años la situación de las minorías. Antes de la aprobación de esta ley la minoría rumana había denunciado una fuerte presión magiar para asimilarla a través de las escuelas, de la Iglesia, del

censo, de la magiarización de los nombres, etc. Esto hizo que esta minoría pasara de 250.000 miembros hacia 1920 a 25.000 a principios de los años 1990.

Entre la legislación húngara y la rumana existen todavía importantes diferencias, aunque ambos países persiguen la máxima reciprocidad. Así, la ley húngara concede el autogobierno a sus minorías, mientras que la rumana les otorga representantes parlamentarios. Y en segundo lugar, la ley rumana exige a la minoría fidelidad al Estado rumano, mientras que la ley húngara no lo hace. La explicación hay que hallarla en la debilidad demográfica y política de todas las minorías presentes en Hungría, mientras que la húngara en Transilvania conserva un gran poder.

Mediante tratados bilaterales, Hungría ha intentado normalizar las relaciones con algunas de sus minorías en países vecinos. El 4 de mayo de 1993, por ejemplo, el Parlamento de Budapest aprobó un tratado de fronteras con Ucrania que incluye el status legal de la minoría húngara en este Estado. Desde junio de 1992 Ucrania dispone de una ley de nacionalidades muy abierta, que ampara las aspiraciones de los 200.000 húngaros ucranianos. Estos, que habitan sobre todo en la región fronteriza de Kárpátalja, obtuvieron un Estatuto de Autonomía después de un referéndum ganado por el 80% de los votos favorables a la autonomía.

Croacia se adhirió en 1991 a una declaración húngaro-ucrania sobre las minorías étnicas y lingüísticas, pero los 30.000 húngaros-croatas vieron sus derechos suspendidos por la guerra en la antigua Yugoslavia. En 1992 Croacia y Hungría firmaron un acuerdo de cooperación que incluye aspectos educativos para la minoría magiar. Otro tanto, hizo Eslovenia en noviembre de 1992, por lo que Hungría considera normalizadas la cuestión de sus minorías en Croacia, Eslovenia y Austria.

En junio de 1992 el gobierno rumano hizo público un Libro Blanco sobre las minorías étnicas en su territorio. Según este estudio, el censo de 7 de enero de 1992 mostró que su minoría más numerosa era la magiar con más de 1.600.000 individuos, es decir el 7% de la población total (2.200.000, según otros cálculos), aunque el hecho de recibir tres nombres distintos (magiares, seclares y changos) confunde mucho los censos. Su concentración mayor se halla en los municipios septentrionales y centrales de Transilvania, como Bihor, Satu Mare, Salaj, Cluj, Mures, Harghita, etc., donde alcanzan porcentajes de hasta el 84%. Entre 1953 y 1968 formaron la Región Autónoma Húngara, suprimida por el dictador Nicolae Ceaucescu.

A continuación vienen los germánicos (0'5% de la población), mientras que los gitanos representan el 1'8%. La ley rumana permite a sus minorías actuar con toda libertad y disponer de su red educativa, sus medios de comunicación y sus manifestaciones culturales y religiosas. La radio y televisión

públicas emiten en lenguas minoritarias, etc. Por todo ello, hay que deducir que los problemas son de índole más bien política, por cuanto la minoría húngara actúa como un grupo de presión muy potente en un territorio históricamente codiciado por ambos países. Con todo, la apertura de un centro cultural rumano en Budapest en 1992 y otro húngaro en Bucarest permite tener un diálogo fluido entre ambas partes, al margen del estrictamente diplomático. Josep Palau da fe de esta mejora en las relaciones rumano-húngaras: "Las relaciones entre los Estados rumano y húngaro se han hecho algo más sinceras y cooperativas con menores sospechas de perturbaciones mal intencionadas. Este nuevo clima es el que permitirá un diálogo más productivo entre las comunidades culturales magiares y los partidos políticos húngarófonos con la mayoría rumana y las autoridades de Bucarest al objeto de una mejor y más equilibrada relación de los derechos de las minorías"¹³⁸.

A pesar ello, en febrero de 1995 las relaciones volvieron a empeorar súbitamente después que el líder de la Unión Democrática de los Húngaros de Rumania, Bela Marko, se negara a reconocer el carácter nacional del Estado rumano, provocando la airada reacción de los nacionalistas rumanos¹³⁹.

En julio de 1995 el parlamento rumano debatía un proyecto de ley para obligar a todas las escuelas del país a dar las clases exclusivamente en rumano, aunque se permitirían algunas clases en otras lenguas minoritarias. Los escolares pertenecientes a

estas minorías no podrían usar su lengua con carácter general durante su etapa formativa. En aquellos momentos en Rumanía había 33 escuelas húngaras y otras 100 daban gran parte de su enseñanza en esta lengua. (También había 5 escuelas en lengua alemana y alguna otra en lengua ucraniana, eslovaca y serbia). Esta operación uniformadora tenía como finalidad dar satisfacción a la derecha nacionalista rumana (y a la Iglesia ortodoxa), que siempre se ha fortalecido frente a la minoría húngara, y en menor grado frente a la alemana, de mayoría católica y protestante respectivamente¹⁴⁰.

La situación de los húngaros en Eslovaquia no es tan boyante, por lo que los parlamentarios húngaros se abstuvieron el 30 de junio de 1993 en la votación de admisión de esta república en el Consejo de Europa después de su separación de la República de Chequia. En opinión de Budapest la Constitución de la antigua Checoslovaquia era más tolerante con su minoría que la de Eslovaquia. La doble presión ejercida desde Budapest y desde Estrasburgo mejoró algo las condiciones de los húngaros en Eslovaquia, a pesar de lo cual continuaron las denuncias acerca de impedimentos de la lengua materna, rotulación sólo en eslovaco, inexistencia de profesores de húngaro, etc. En septiembre de 1995 la minoría húngara residente en Eslovaquia comenzó una campaña para boicotear las escuelas en protesta por la decisión de las autoridades de Bratislava de introducir la enseñanza bilingüe en las zonas donde los húngaros son mayoría. El plan del gobierno eslovaco

era introducir la enseñanza bilingüe en aquellos centros donde lo solicite al menos el 10% de los padres de alumnos, pero el proyecto no tuvo éxito. En las escuelas boicoteadas la enseñanza se impartía exclusivamente en húngaro y el eslovaco era tratado como una lengua extranjera. Algunos partidos eslovacos, como el Movimiento por una Eslovaquia Democrática (en el gobierno en 1995) preconizaba la eslovaquización de toda la red de enseñanza subvencionada y el paso del húngaro a lengua extranjera¹⁴¹.

Por último, la Voivodina serbia contenía una importante minoría húngara (el 16% de la población regional), cuyos derechos se vieron muy perjudicados en 1989 al ser suprimida la autonomía político-administrativa de la región por el gobierno de Belgrado. Los húngaros participaban activamente en dicho gobierno regional. Desde esta fecha los húngaros disponen de 9 escaños en el Parlamento serbio, donde apenas tienen capacidad de presión. Esta circunstancia y las propias de la guerra y del boicot internacional decretado por la ONU ha hecho emigrar a muchos húngaros de esta zona en un proceso de "limpieza étnica" más o menos forzado. Las casas vacías fueron ocupadas por serbios o por croatas en el caso de Croacia. A pesar de todo, los húngaros de la Voivodina siguen reclamando una autonomía regional con tres lenguas oficiales el croata, el serbio y el húngaro.

De todo ello, concluye el profesor Petschen, se deduce que los húngaros de Hungría y de los países vecinos tienen conciencia de formar una sola nación. "Asumimos nuestra identidad nacional... y no queremos asimilarnos a la nación rumana", afirmaba la declaración de octubre de 1992 de la Federación Democrática Húngara de Rumanía. En segundo lugar, viven en un territorio que consideran propio y que no dudan en compartir con otras nacionalidades. "No queremos ni segregarnos, ni emigrar, puesto que sentimos que nuestra tierra natal es nuestro hogar", añade el citado documento. Lo mismo les ocurre a las otras minorías étnicas y lingüísticas con las que conviven. Sus problemas se relacionan más bien con los derechos humanos básicos y a las libertades fundamentales.

Como soluciones a sus reivindicaciones piden algún grado de autogobierno desde el estatal hasta el local, sistema que les ha dado muy buenos resultados en países como Ucrania o Eslovenia. Además, las fronteras estatales no pueden impedir las relaciones entre Hungría y sus minorías externas y las instituciones europeas lo admiten y lo promocionan. En todo caso, en algunos países próximos a Hungría persiste la impresión de que su política de minorías persigue a la larga rectificaciones fronterizas y por otra parte se reprocha a Budapest la aplicación de una soluciones idénticas para todas sus minorías cuando las situaciones son distintas y a veces muy dispares¹⁴².

NOTAS AL CAPITULO I

1. BILBAO ARRESE, MARIO, J. y LOPEZ VAZQUEZ, JORGE: "El poder de las naciones en la Unión Europea" en Política Exterior nº 40, Vol. VIII, Agosto/Septiembre 1994, págs. 79 a 90
2. Eurobarómetro nº 41 de julio de 1994
3. "Compétences linguistiques dans l'UE" en Contact Bulletin, Vol. 12, nº 1, Été 1995, pág. 5
4. Artículo 113 de la Constitución alemana de Weimar de 11 de julio de 1919
5. Preámbulo, artículo 3º y artículo 5º de la Ley Fundamental para la República Federal Alemana (1949)
6. FISCHER, KARL-RUDOLF: "Deception et colère" en Contact Bulletin, Vol 11, n. 3, Hiver 1994/95, pág. 2
7. SCHEUERMANN, STEFAN: "El Gobierno alemán inicia una ofensiva lingüística en Europa Central y Oriental" en El País de 5 de octubre de 1993, pág. 30
8. Tras una serie de Constituciones provisionales una vez proclamada la República en 1918, el 1 de octubre de 1920 se aprobó esta Constitución, aunque fue revisada en 1925 y 1929. Fue abolida en 1934, por presiones del canciller alemán Adolf Hitler que en 1938 anexionó Austria al III Reich, y restablecida el 1 de mayo de 1945
9. DROZ, JACQUES: Histoire de l'Autriche, Presses Universitaires de France, Paris 1969, pág. 122
10. Artículo 7 del Tratado de 15 de Mayo de 1955 (Estado Austríaco)
11. El artículo 8 de la Constitución de la República Federal de Austria dice: "La lengua alemana es, sin perjuicio de los derechos acordados por la legislación federal a las minorías lingüísticas, la lengua de Estado de la República".
12. Apartados 1,2,3,4 y 5 del artículo 7 del Tratado de 15 de Mayo de 1955 del Estado Austríaco
13. PUIG, LLUIS Mª de: Les llengües minoritàries d'Europa: estat de la qüestió, Institut d'Estudis Autònoms de la Generalitat de Catalunya, Barcelona 1986, pág. 30.
14. ROIGE SOLE, JORDI: "Bèlgica, un Estat mutant" en Revista de Catalunya nº 77, Setembre 1993, págs. 51 a 59

15. RAMONEDA, JOSEP: "Bélgica: Algo más que una querella lingüística" en Tele-Expres de 3 de diciembre de 1975

16. LAPIERRE, JEAN-WILLIAM: Le pouvoir politique et les langues, Presses Universitaires de France, Paris 1988, pág. 152.

17. SENELLE, ROBERT: "El règim lingüístic a Bèlgica" en Ordenació legal del plurilingüisme als Estats contemporanis, Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1983; pág. 40.

18. Tratado entre Bélgica y los Países Bajos firmado en Bruselas el 9 de septiembre de 1980, que substituyó el Tratado sobre relaciones culturales de 16 de mayo de 1946.

19. En Malmédy y Wainies la minoría es germanoparlante.

20. VOS, PIERRE DE: "Babel-gique" en Le Monde Diplomatique-Supplément Belgique, Paris, Noviembre 1983, pág.26.

21. Esta misma discusión se planteó en otros países europeos, como por ejemplo en Suiza a raíz del artículo 116 de su Constitución.

22. Ver el informe de Lali Sandiumenge publicado en el diario Avui de Barcelona el 30 de noviembre de 1992.

23. SIGUAN, MIQUEL: "Bélgica, una tensión que no cesa" en La Vanguardia de 5 de junio de 1995, pág. 26

24. Despacho de la Agencia EFE fechado en Bruselas el 24 de octubre de 1994

25. DE LA GUÉRIVIÈRE, JEAN: Belgique: la revanche des langues, Editions du Seuil, Paris 1994, 193 págs.

26. BRIGOULEIX, BERNARD: "Une vaillante petite nation" en Le Monde Diplomatique - Supplément Belgique; París, Noviembre de 1983; pág. 21.

27. LAPIERRE, JEAN-WILLIAM: Op. cit., pág. 158

28. ALEN, ANDRE: "La Bélgica federal después de la reforma del Estado de 1993" en Informe Pi i Sunyer sobre Comunidades Autónomas 1992, Ed. Fundació Carles Pi i Sunyer d'Estudis Autònoms i Locals, Barcelona 1993, págs. 456 a 484

29. SIGUAN, MIQUEL: Op. cit., pág. 26

30. TRUYOL, ANTONIO: Los Derechos Humanos, Ed. Tecnos, Madrid 1984, pág. 130

31. TRUYOL, A: Op. cit., pág. 117

32. SENELLE, ROBERT: Op. cit., pág. 53

33. LAURING, PALLE: A History of Denmark, Ed. Host & Son, Copenhagen 1973, pág. 257

34. El artículo 3 de la Constitución española de 1978 dice: "1) El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. 2) Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos. 3) La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección".

35. Véase el Real Decreto del gobierno español 1049/1979 de 20 de abril, publicado en el BOE de 10 de mayo 1979, en el que se permite la incorporación de la lengua vasca al sistema educativo de la Comunidad Autónoma antes de la aprobación del Estatuto de Autonomía

36. Ver la Sentencia nº 82/1986 de 26 de junio del Tribunal Constitucional, publicada en el BOE de 4 de julio 1986, por el recurso interpuesto por el gobierno central contra determinados preceptos de la Ley de Normalización del Uso del Euskera, ley 10/1982 de 24 de noviembre

37. SIGUAN, MIQUEL: "A vueltas con una encuesta (y 2)"; en La Vanguardia de 25 de Marzo 1994

38. Doc: Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados. Serie B. nº 123 - 1, 29 de septiembre de 1988. Proposición de ley sobre la participación de la Administración del Estado en la normalización de las lenguas de las nacionalidades y regiones presentada por el Grupo Parlamentario Vasco.

39. Artículos 1, 2 y 3 de la ley 30/1992 de 26 de noviembre de Bases del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo. La lengua de los Procedimientos. BOE: 28 de diciembre de 1992, nº 311

40. Doc: Boletín Oficial de las Cortes Generales. Senado., Serie I: Boletín General, nº 119 de 9 de mayo 1994.

41. MODEEN, TORE: "Inter and Trans State Relations-The Aland Island", Ponencia presentada para el estudio conjunto Governments and non-dominant ethnic groups in Europe, Patrocinado por la Fundación Europea de la Ciencia. Dubrovnik, abril 1988

42. Esta es la ley de 31 de marzo de 1947/452 que modifica la ley de 14 de julio de 1923/191 que contempla los principios de la forma de organización de la Universidad de Helsinki. El 29 de diciembre de 1973 se aprobó la ley 1030 que regula el uso de las lenguas en la Universidad de Turku

43. Artículos 7 y 8 de la ley 1030 de 29 de diciembre de 1973 que contemplan el uso de las lenguas en la Universidad de Turku

44. OJANEN, URSULA: El bilingüismo en Finlandia, Conferencia pronunciada en el Ateneo de la Coruña el 25 de abril de 1982. Texto mecanografiado

45. MORA, CECILIA: "Triunfo de los socialdemócratas en las elecciones generales en Finlandia" en La Vanguardia de 20 de marzo de 1995, pág. 3

46. LAPIERRE, JEAN-WILLIAM: Op. cit., pág. 106

47. Doc: Ley Francesa nº 51-16 de 11 de Enero de 1951 publicada en el Journal Officiel de la Republique Française de 13 de Enero de 1951. Fue desarrollada mediante el decreto de 23 de septiembre de 1985

48. Ley de 5 de marzo de 1982 y ley de 7 de enero de 1983.

49. Sentencias de 25 de febrero de 1982, página 41, y de 18 de enero de 1985, página 36.

50. LUCHAIRE, FRANÇOIS: "L'autonomie des collectivités territoriales françaises dans le domaine de la culture" en Federalisme, Regionalisme, et Droit des Groupes Ethniques en Europe. Hommage a Guy Héraud; Edité par Theodor Veiter; Ethnos 30; Braumüller, Wien 1989, pág. 233.

51. Sentencia de 23 de diciembre de 1977.

52. Decreto nº 85/1006 de 23 de septiembre de 1985. B.O.R.F de 25 de septiembre de 1985, nº 11046

53. LAPIERRE, JEAN-WILLIAM: Op. cit., pág. 122

54. RIDEAU, JOEL: "France" en Les Constitutions nationales à l'épreuve de l'Europe, Centre de Recherche de Droit Constitutionnel (Université Paris I) - Faculté Jean Monnet (Université Paris-Sud), La Documentation Française, Paris 1993, pág. 114

55. Loi Constitutionnelle de la République Française nº 92-554 du 25 juin 1992 ajoutant a la Constitution un titre: "Des Communautés européennes et de l'Union européenne". Journal Officiel du 26 juin 1992, pág. 8406

56. GIORDAN, HENRI: "The Language of the Republic is French" en Contact Bulletin, Vol. 9, nº 2, Autumn 1992, pág. 4

57. "Extraits du débat sur l'amendement de l'article 2 de la Constitution" en MERCATOR nº 4, desembre 1992, págs.3 y 4

58. "Ha llegado la hora de un estatuto de las lenguas y las culturas de Francia, que reconozca su existencia real. Ha llegado la hora de abrirles las puertas de la escuela, de la

radio y la televisión permitiendo su difusión, y de concederles el lugar que merecen en la vida pública".

59. Diario de Sesiones de la Asamblea Nacional Francesa de 23 de junio de 1992, pág. 1539

60. OLIVESI, CLAUDE y PASTOREL, JEAN-PAUL: "Revision constitutionnelle. Langue française el Union Européenne" en Revista de Llengua i Dret, nº 19, juliol 1993, págs. 47 a 66

61. Projet de loi relatif à l'emploi de la langue française. Ministère de la Culture et de la Francophonie. NOR: MCCX9400007L

62. CABALLERO, OSCAR: "El Parlamento aprueba la polémica ley Toubon de defensa de la lengua francesa" en La Vanguardia de 3 de julio de 1994, pág. 51

63. MAURIS, JACQUES: "Breu història de les mesures legislatives lingüístiques al Regne Unit" en Revista de Llengua i Dret, nº 14, Barcelona, juliol 1990, pág. 236.

64. WITHERS, CHARLES W.J.: Gaelic in Scotland 1968-81, John Donald Publishers Ltd., Edimburg 1984, pág. 41

65. TSITSELIKIS, CONSTANTIN: "Les langues des minorités et leur statut juridique en Grèce" en Revista de Llengua i Dret nº 23, juliol 1995, págs. 101 a 128.

66. El artículo 40 del Tratado de Lausana dice: "Los ciudadanos turcos pertenecientes a minorías no musulmanas gozarán del mismo trato y de las mismas garantías de hecho y de derecho que los otros ciudadanos turcos. Tendrán el derecho de crear, dirigir y sostener a su costa todas las instituciones caritativas, religiosas o sociales, así como escuelas y otros establecimientos de enseñanza y de educación con el derecho de utilizar libremente su propia lengua y de practicar libremente su religión".

67. CAHRL: La situation des langues régionales ou minoritaires en Europe, Conseil de l'Europe 1994, Réf. nº DLA (94.1)

68. Ó RIAGÁIN, DÓNALL: "La situation des langues régionales ou minoritaires en Europe", Contact Bulletin, Vol 12, nº 1, Été 1995, pág. 11

69. SIGUAN, M: Op. cit., págs. 85 a 88

70. Artículo 4 de la Constitución de la República de Irlanda de 1922

71. Modificación de 1937 de la Constitución de Irlanda.
Ley de los Tribunales de Justicia de Irlanda de 1924.
Ley del Colegio de la Universidad de Galway (Irlanda) de 1929.
Ley de Seguros de Irlanda de 1936.

Ley de los Términos Legales en Irlandés de 1945.
 Ley de Transporte de Irlanda de 1950.
 Ley (enmienda) de la Ley de Ministros y Secretarios de Irlanda de 1956.
 Reglamento del Senado de la República de Irlanda (Eire).
 Art. 16.

72. O'CUIV, BRIAN: Irish dialecte in Irish Speaking districts, DIAS, 1951, págs. 31 y ss.

73. Para combatir el fenómeno de la emigración de los distritos gaélicoparlantes en 1980 se creó el Udarás na Gaeltachta, organismo encargado de promocionar el desarrollo industrial de los Gaeltacht

74. PETSCHEN, SANTIAGO: Las Minorías Lingüísticas en Europa Occidental: Documentos (1492-1989), Eusko Legebizarrar-Parlamento Vasco, Vitoria-Gasteiz 1990, Vol.II, págs. 749 a 756.

75. El Tratado lleva fecha de 15 de noviembre de 1985

76. El artículo 6 de la Constitución italiana de 1947 dice textualmente: "La República protegerá mediante normas adecuadas a las minorías lingüísticas"

77. Ver el texto completo del informe de Silvio Innocenti en Alle origini della Costituzione italiana de G. D'Alessio, Bolonia 1979, págs. 208 y ss.

78. CARROZZA, PAOLO: "La situazione attuale in Italia" en Revista de Llengua i Dret nº 12, Barcelona juliol de 1989, págs. 113 a 134

79. PIZZORUSSO, ALESSANDRO: "Minories i grups ètnics i lingüístics a Itàlia: perspectives de tutela" en Ordenació legal del plurilingüisme als Estats contemporanis, Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya, Barcelona 1983, pág. 13 y ss.

80. "Projecte de Llei de Tutela de les Minories Lingüístiques d'Itàlia" en Mercator, nº 1, març 1992, págs. 2 a 5

81. Despacho de la Agencia EFE fechado en Roma el 24 de noviembre de 1991

82. SALVI, SERGIO: Entrevista realizada por Aureli Argemí en Europa de les Nacions, nº 22, estiu 1994, págs. 8 y 9

83. MEMMO, DANIELA: "Problemi linguistici e rapporti di diritto privato: prospettive di soluzione nell'ordinamento giuridico italiano" en Revista de Llengua i Dret nº 14, Barcelona juliol 1990, págs. 239 a 253

84. Despacho de la Agencia EFE fechado en Roma el 13 de agosto de 1994

85. Artículo 29 de la Constitución de 17 de octubre de 1868

86. SIGUAN, MIQUEL: "El ejemplo de Luxemburgo" en La Vanguardia de 6 de junio de 1995, pág. 29

87. Este Tratado fue firmado el 9 de septiembre de 1980 en Bruselas y ratificado por el Parlamento de los Países Bajos y el Consejo flamenco por la parte belga, de acuerdo con la reforma constitucional de 1980, substituyendo un Tratado anterior mucho más incompleto de 16 de mayo 1946. La Secretaría General de la Unión se estableció en La Haya.

88. BOURDON, ALBERT-ALAIN: Histoire du Portugal, Presses Universitaires de France, Paris 1970

89. JEANNIN, PIERRE: Histoire des Pays Scandinaves, Presses Universitaires de France, Paris 1965, pág. 27

90. Véase el artículo "Germanic Languages" en la Encyclopaedia Britannica, 1979, Vol. 8, págs. 25 y 26.

91. Conclusiones del Consejo Europeo de Corfú, celebrado los días 24 y 25 de junio de 1994. Doc: SN 150/94 ES, págs. 14 y 15

92. LEPRÊTRE, MARC: "Xipre, l'últim mur de la vergonya" en Europa de les Nacions, n°17, primavera 1993, págs. 18 a 20

93. Esta Constitución sirvió de base para la independencia de la isla de Gran Bretaña proclamada el 16 de agosto de 1960, con el arzobispo greco-ortodoxo Makarios como primer presidente y el Dr. Küçük, turco-chipriota como vicepresidente.

94. Esta Constitución era la tercera concedida a Malta, después de la de 1921 y 1947. La isla obtuvo su independencia de Gran Bretaña en 1964

95. Artículo 116 de la Constitución suiza refrendada el 20 de febrero de 1938

96. BEGUIN, PIERRE: "L'Histoire récente (1928-73)" en Histoire de la Suisse, Ed. Payot, Lausanne 1974, pág. 327

97. PETSCHEN, SANTIAGO: "La identidad del Jura y la realización evolutiva de sus aspiraciones nacionales" en Ernaroa n° 11, abril 1994, pág. 51

98. LAPIERRE, J. W.: Op. cit., pág. 53

99. VILA PUJOL, ROSA: "Un paradigma de convivencia lingüística" en Historia y Vida, número especial dedicado a "Suiza. 700 años de libertad", Extra n° 62, 1991, pág. 39

100. ROUGEMONT, DENIS DE: La Suisse ou l'histoire d'un peuple heureux, Ed. Hachette, 1965 (2ème edition 1974), págs. 141-142

101. SIGUAN, MIQUEL: "Suiza, una antigua convivencia" en la Vanguardia, 4 de junio de 1995, pág. 32

102. Manifiesto de la Romandía para una Reforma Profunda del Federalismo de 1984

103. Los francófonos acusan concretamente a los cantones de Berna y de los Grisones de no respetar este principio

104. Carta de Bernard Mertenat y Roland Béguelin en nombre del "Rassemblement Jurassien" al Consejero Federal del Interior de la Confederación Helvética, Flavio Cotti, de 26 de junio de 1990 rechazando la propuesta a una reforma del artículo 116 de la Constitución federal

105. Rapport de la Commission Consultative du Conseil Fédéral et des Cantons de Berne et du Jura, 31 mars 1993

106. El pleito jurasiano lo desencadenó en 1947 el Gran Consejo Bernés al rechazar como consejero de obras públicas y ferrocarriles al francófono Georges Moeckli

107. Artículos 1, 2, 17, 26, 33 y 34 de la nueva Constitución del Cantón de Berna de 31 de enero de 1950

108. Tampoco les desalentó el perder en 1959 un referéndum segregacionista tanto en los distritos berneses como en los jurasianos

109. En el conjunto del Cantón de Berna los "síes" a la separación del Jura superaron a los noes por 90.359 votos contra 14.133 y en el Jura los votos afirmativos superaron a los negativos por 20.421 contra 2.259

110. Esta Constitución fue aprobada en referéndum el 20 de marzo de 1977

111. La ley federal lleva de la fecha de 9 de marzo de 1978, el 1 de abril se reformaron los artículos 1 y 80 de la Constitución federal, y el referéndum tuvo lugar el 24 de septiembre

112. WINDISCH, U. y WILLENER, A.: Le Jura incompris: Fédéralisme ou Totalitarisme?, Vevey, Ed. Delta, 1976, págs. 46-51

113. Artículos 2, 17, 17 bis y 17 ter de la Constitución del Cantón de Berna, refrendada el 26 de febrero de 1978

114. Ley federal de 19 de junio de 1981 concediendo subvenciones a la Escuela Cantonal de Lengua Francesa de Berna

115. VV AA: "Evolució de l'antiga URSS" en dCIDOB n° 48-49, Estiu 1994, págs. 4 a 39

116. Despachos de la Agencia France Presse de 19 y 20 de enero de 1989

117. Penúltimo párrafo del preámbulo de la Constitución de 1977 de la Unión Soviética

118. Constitución (Ley Fundamental) de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Versión en español, Editorial Progreso, Moscú 1977.

119. La cursiva es nuestra

120. Texto comparado publicado por la Fundación Encuentro en su Cuaderno n° 54 de marzo 1989.

121. Conferencia de Anatoli Anikiev en el coloquio El desmoronamiento de la URSS y los nacionalismos emergentes, organizado por la Fundación Encuentro en Madrid en marzo de 1992

122. Datos proporcionados por Juan Ricardo Yerganian en su conferencia "El desmoronamiento de la URSS y los nacionalismos emergentes", pronuncada durante el coloquio organizado por la Fundación Encuentro en Madrid en marzo de 1992

123. COMA, MANUEL: La Perestroika, Ed. Historia 16, Cuadernos del Mundo Actual n° 89, Madrid 1995, 31 págs.

124. GORBACHOV, MIKHAIL: Informe presentado al Congreso de los Diputados Populares en Mayo de 1989, Cuaderno n° 64, Ed. Fundación Encuentro, Junio 1989, págs. 29-30

125. PCUS: Hacia un socialismo humanitario y democrático. Plataforma del Comité Central del PCUS para el 28 congreso del Partido, aprobada en febrero de 1990, Ed. Fundación Encuentro, Cuaderno n° 86, Marzo 1990, pág. 22.

126. La Constitución de la Federación de Rusia fue aprobada en referéndum el 12 de diciembre de 1993

127. VALDES, FELIX: "La Constitución, clave del futuro de Rusia", en Política Exterior, n° 40, Vol. VIII, Agosto/Septiembre 1994, pág. 187

128. El texto de la Constitución en castellano distribuido por la Embajada de Rusia en España utiliza el término "sujetos" para referirse a las repúblicas, territorios, regiones, ciudades federales, regiones autónomas y distritos autónomos que forman parte de la Federación de Rusia

129. El subrayado es nuestro

130. El subrayado es nuestro

131. GONZALEZ, SANTI: "Una Constitució a mida del vell "apparatxik"" en Avui de 7 de noviembre de 1993, pág. 4

132. Oleg Rumiantsev fue uno de los juristas rusos miembros de la ponencia parlamentaria que redactó un proyecto de Constitución rusa en 1993, proyecto que recibió el nombre de este redactor. Al mismo tiempo, los asesores del presidente Boris Ieltsin prepararon otro borrador.

133. RUMIANTSEV, OLEG: "Reforma constitucional en la Federación Rusa" en Política Exterior nº 33, monográfico 1993, págs. 85 a 98

134. MORVAY, KÁROLY y FALUBA, KÁLMÁN: "Hongaresos a la Conca dels Càrpats" en Europa de les Nacions, nº17, Primavera 1993, págs. 15 a 17

135. Para más información sobre este tema ver SHÖPFLIN, GEORGE: Hungary and its neighbours, Paris, Chaillot paper 7, Institute for Security Studies, Western European Union, Mayo 1993.

136. PETSCHEN, SANTIAGO: "Les minories nacionals, matèria preferent de la política hongaresa" en Revista de Catalunya nº 78, octubre de 1993, pág. 76

137. Ley LXXVII de 1993 aprobada por la Asamblea Nacional húngara el 7 de julio de 1993 con el 96% de los votos favorables

138. PALAU, JOSEP: "La transición más difícil" en Revista Española de Defensa, nº77/78 de Julio/Agosto 1994, pág. 67

139. DUMITRESCU, RODICA: "El parlamento cierra filas contra las pretensiones de la minoría magiar", crónica de la Agencia EFE de 14 de febrero de 1995

140. VALLVE, JOAN: "Llengües i nacionalismes d'Estat" en Avui, 11 de julio de 1995,

141. Despacho de la Agencia EFE fechado en Bratislava el 8 de septiembre de 1995

142. PETSCHEN, S.: Op. cit., págs. 84-85

CAPITULO II

LOS ESTADOS EUROPEOS Y SUS MINORIAS LINGÜISTICAS

2.1: Objetivos y estructura del capítulo

Hablar de la ordenación lingüística de Europa no significa referirse únicamente a las lenguas de Estado, por más que las instituciones europeas sólo manejan lenguas declaradas oficiales por los Estados miembros. La inmensa mayoría de países europeos constituyen a su vez sociedades lingüísticamente complejas, en las que a lo largo de su historia ha prevalecido una lengua por encima de las otras, casi siempre con el decidido apoyo de los poderes centrales. Paralelamente a la política lingüística de la Unión Europea existen, pues, sendas políticas estatales, muchas veces no coincidentes con la primera.

Mientras se procedía a la construcción de Europa, catorce de los quince Estados miembros de la UE tenían que desarrollar sus propias políticas lingüísticas en un progresivo esfuerzo de ordenación interior. Se trata, por lo tanto, de un doble proceso que transcurre por una parte dentro de los Estados y por el otro entre ellos en el marco de los organismos europeos. Armonizar las disfunciones existentes entre la política lingüística europea y las de los Estados constituye en estos momentos el mayor reto en este terreno, de manera que se puede afirmar sin ambages que el proceso no habrá terminado hasta que dentro de su complejidad dichas políticas formen un cuerpo doctrinal político y jurídico coherente desde las más altas instituciones europeas hasta las lenguas minoritarias con un

número de personas hablantes.

En este Capítulo pretendemos mostrar la evolución interna en cada Estado para desembocar en una especie de foto fija que muestre la situación actual. La suma de todas estas situaciones tiene que dibujar un panorama de extraordinaria complejidad en el que transcurre el citado esfuerzo ordenador. Los dos capítulos, que se complementan, están destinados a instalar el terreno real sobre el que habrá que trabajar tanto a escala continental, como estatal y regional. Se incluyen Noruega y Suiza por las mismas razones aducidas en el Capítulo I.

El segundo bloque se refiere a las minorías lingüísticas en Europa Central y Oriental, con una atención especial a los casos de Rusia, Hungría, y Rumanía. Las profundas diferencias histórico-políticas existentes entre ambas Europas no han impedido a las instituciones continentales ir estableciendo unas bases doctrinales comunes. Los mismos planteamientos democráticos coincidentes a partir de 1989-90 son los que posibilitan más este acercamiento en el análisis de los problemas lingüísticos y su solución. El encaje de las minorías lingüísticas en este nuevo orden democrático constituye precisamente una de sus pruebas más importantes.

Los quince países de la UE son examinados por orden alfabético, criterio que por supuesto no refleja el orden de importancia de las minorías lingüísticas de cada uno. Resulta

prácticamente imposible encontrar una pauta objetiva que sirva para valorar por igual todos los países afectados. Ni el grado de conflictividad, ni el número de miembros de cada minoría, ni su peso cultural y político en el conjunto del Estado y de la UE, ni su regulación jurídico-legal, ni su grado de implantación social, ni su extensión geográfica pueden ser utilizados con el rigor necesario como escala de valores matriz para dichas minorías en su conjunto.

2.2: Los Estados y sus minorías lingüísticas. Grupos

A principios del siglo XIX, sólo 15 lenguas europeas, dejando aparte las lenguas de Estado, tenían un nivel suficiente de desarrollo idiomático. A comienzos del XX hay que añadir a este primer grupo unas 18 más (noruego, finlandés, galés, flamenco, occitano, catalán, croata, rumano, búlgaro, etc.), muchas de ellas recuperadas por los movimientos románticos y nacionalistas de la segunda mitad del XIX. Después de la I Guerra Mundial se añadieron a la lista unas 20 más (feroés, irlandés, euskera, retorromano, bretón, albanés, y otras del área soviética, como el bielorruso, moldavo, georgiano, etc.)¹.

Hacia 1980 darían el paso hacia su consolidación y/o reconocimiento el frisón, el corso, el groenlandés, el lapón o sami, y en la actualidad han acometido un esfuerzo de

supervivencia lenguas como el sardo, el ladino, el friulano, el bable, el aragonés, etc. y hasta el albanés y el croata de Italia, hablados en comunidades agrícolas y pastoriles situadas en diversas zonas de la Italia subdesarrollada². En nuestros días incluso se ha producido la resurrección de lenguas muertas. Dejando a un lado el caso del hebreo, cabe citar el del córnico que, habiéndose perdido completamente a fines del siglo XIX, se vuelve a hablar gracias al idealismo y a la ilusión, muy utópica ciertamente, de un centenar de personas residentes en Cornualles³. "Ejemplo válido, como símbolo de la tendencia de nuestra época", concluye al respecto el profesor Santiago Petschen⁴.

Según la distribución hecha por Miquel Siguán, los Estados europeos se agruparían de la siguiente manera atendiendo a sus relaciones con sus minorías lingüísticas:

- países monolingües, como Portugal o Alemania;
- países con una política fuertemente centralista, como Francia y Grecia;
- países donde las minorías tienen una cierta presencia, como Gran Bretaña con el galés, Finlandia con el sueco, los Países Bajos con el frisón, Dinamarca con el alemán e Irlanda con el gaélico;
- países con autonomías lingüísticas, donde el Estado mantiene una lengua mayoritaria oficial al lado de lenguas co-oficiales en sus territorios respectivos, como España con seis

Comunidades Autónomas bilingües, Italia con diversos estatutos regionales, o la antigua URSS;

- países lingüísticamente federales, como Bélgica o Suiza;
- y países trilingües, como Luxemburgo⁵.

Conectando el estatuto jurídico de cada idioma con las funciones instrumentales que cumple socialmente, Jordi Bañeres establece este otro esquema:

- países con una lengua oficial, que es conocida activa y pasivamente por toda la población de un determinado territorio. En particular, es el idioma en que funcionan los aparatos represivos, ideológicos y administrativos del Estado. Es necesario y suficiente para la actividad económica interna y para las actividades culturales. Es también necesario y suficiente para acceder y desempeñar la generalidad de los cargos, aunque puede no resultar suficiente para los de mayor rango representativo. Se identifica con una nación-Estado y con el Estado como tal la potencia. Sus máximos representantes la utilizan siempre para las relaciones políticas intraestatales;
- países con una lengua co-oficial dominante, o sea con una lengua oficial que tiene que compartir algunas funciones limitadas con una segunda lengua (= co-oficial secundaria);
- países con lengua(s) co-oficial(es) secundaria(s), es decir lengua(s) con la que funcionan algún que otro aparato

ideológico y administrativo del Estado -junto con la lengua co-oficial dominante-. Es necesaria, pero no suficiente para algunas actividades culturales, y es necesaria, pero no suficiente para acceder a algunos empleos. Relacionada con la Administración local que vela por ella evitando que erosione la situación preponderante de la lengua estatal oficial. Las máximas autoridades locales la utilizan de vez en cuando para las relaciones intrarregionales;

- países con lengua(s) reconocida(s), lengua en la que funcionan escasos y periféricos aparatos ideológicos y administrativos de Estado. Ni es necesaria, ni es suficiente;
- países con lengua(s) tolerada(s), o consentida para la comunicación privada;
- y países con lengua(s) de uso obstaculizado, o dificultada(s) o reprimida(s) por parte de los aparatos estatales⁶.

El Bureau Européen pour les Langues Moins Répandues (EBLUL) establece a su vez cinco categorías de lenguas minoritarias:

- las lenguas nacionales de dos Estados pequeños miembros de la UE, que no son lenguas oficiales de trabajo de la UE, y que son menos utilizadas aún a escala internacional: el irlandés y el luxemburgués;
- las lenguas de las pequeñas comunidades sin Estado situadas

en un Estado miembro, como el bretón en Francia, el sardo y el friulano en Italia, el frisón en los Países Bajos, o el galés en el Reino Unido;

- las lenguas de las pequeñas comunidades sin Estado extendidas en dos o más Estados, como el euskera en España y Francia, el occitano en Francia, Italia y España;

- las lenguas de los pueblos que constituyen una minoría dentro del Estado en la que residen, pero que son mayoritarias en otros países, como el alemán en Bélgica, el danés en Alemania, o el francés y el griego en Italia;

- y las lenguas no territoriales que fueron utilizadas tradicionalmente en algún Estado, pero que no pueden ser identificadas con una zona particular, como la lengua gitana o la de los judíos (el sinti, el roma y el yiddish)⁷.

2.3: ALEMANIA⁸

<u>Minorías lingüísticas</u>	<u>Regiones</u>	<u>Población hablante</u>
Frisona	Friesland del N.	10.000
	Helgoland	10.000
Danesa	Schleswig-Holstein	8.000

2.3.1.: Frisona

El 28 de agosto de 1955 representantes de las siete provincias frisonas tradicionales en Alemania y Holanda (Frísia del Norte, Frísia Oriental, Frísia Occidental, Saterland, Wursten, Oldenburg y Helgoland) reunidos en Upstalboom difundieron un manifiesto tras celebrar su Sexto Encuentro, en el que se proclamaron un sólo pueblo con una idiosincracia común a pesar de su carácter interestatal. Además encomendaron al Consejo frisón la promoción de la lengua y la cultura frisonas a través de la escuela, la "casa paterna" y la Iglesia y pidieron a las autoridades estatales que no entorpecieran esta tarea°.

La Constitución de 1990 del land de Schleswig-Holstein declara su protección genérica sobre esta minoría y las autoridades de Niedersachsen le conceden cierto apoyo. No hay ninguna otra ley federal o del land que proteja la minoría frisona de Alemania y el acuerdo entre Bonn y Copenhague de 1955 tampoco la menciona.

Casi ausente de la vida pública local, excepto en algunos ayuntamientos pequeños, y reducida a lengua familiar y coloquial en convivencia con el alemán y el danés, desde 1925 se empezó a enseñar en las escuelas elementales, pero con carácter voluntario y siempre como materia complementaria. Los trabajos de Pyt Kramer a partir de 1961 comportaron una cierta

revitalización de esta lengua.

El frisón se aprovechó del renacimiento lingüístico de finales de la década de 1970 y así las 3 escuelas que en 1975 lo enseñaban, en 1991 eran ya 32. Los alumnos dedican una media de dos horas a la semana al estudio del frisón entre los 2 y los 6 años. En la escuela secundaria se enseña en el liceo **Wyck auf Föhr** durante dos horas a la semana. Existen textos escolares y la ley permite a los padres pedir más cursos en todos los niveles educativos. Las autoridades locales organizan cursos de formación para enseñantes de esta lengua. También los hay desde 1966 para adultos y particulares, pero son "poco frecuentados".

Financiado por la institución **Foriining for nationale Friiske** (1948), se empezó a publicar desde 1950 la revista bianual "**Üusen äine wäi**" con una distribución gratuita de 1.000 ejemplares. Los periódicos regionales en alemán admiten algunos artículos, anuncios y avisos en esta lengua. El frisón no dispone de emisoras de radio, ni de televisión propias.

2.3.2: Danese

Aunque el alemán es la lengua oficial del land, el danés es la única minoría lingüística en toda la RFA que goza de algún

reconocimiento oficial. No hay constancia de que la propia minoría danesa haya solicitado un status jurídico propio, de modo que el único apoyo legal es una declaración germano-danesa ("Bonner und Kopenhagener Erklärungen") de 1955, según la cual ambos Estados se comprometen a proteger las respectivas minorías lingüísticas en su territorio¹⁰.

Esta declaración substituía a otra emitida en Kiel por el gobierno regional el 26 de septiembre de 1949, que basándose en la nueva Constitución alemana reconocía a esta minoría el libre uso del danés en la enseñanza incluyendo la superior, en los medios de comunicación y en la justicia, aunque con algunas limitaciones, como la sujeción a las leyes generales¹¹.

Dinamarca respondió al mes siguiente con una declaración idéntica para la minoría alemana en su territorio. La Declaración de 1955 mejora algunos aspectos de la de 1949, como por ejemplo cuando asegura que la minoría danesa participará en las instituciones locales representativas¹², se constituyó una comisión llamada *Sprachkontakt*, por medio de la cual expertos alemanes y daneses en lenguas y educación estudian la evolución lingüística a ambos lados de la frontera.

Este es uno de los casos en que siguiendo la fórmula instituida después de la I Primera Guerra Mundial, se regula el uso de una lengua minoritaria por medio de acuerdos internacionales, más que a través de la normativa interior.

La presencia de una minoría danesa en territorio alemán es un viejo problema entre ambos Estados, sobre todo por los intensos esfuerzos de Alemania para germanizar a sus ciudadanos de habla danesa. Ya al amparo de la Constitución de Weimar en 1920 se constituyó la asociación **Sydslesvigsk Forening** con el fin de fortalecer el sentido de comunidad, conservar su lengua y su cultura y fortalecer los lazos con Dinamarca.

Pero hasta el acuerdo de 1955 la minoría danesa en Alemania no gozó de "una situación privilegiada en comparación a las otras minorías y de una gran libertad lingüística y cultural"¹³. Esta base legal permitió unos primeros avances, como un acuerdo en 1969 entre la Iglesia alemana y la danesa que desarrolló una liturgia y una pastoral muy activas en lengua danesa.

A mediados de 1970 se observaron nuevos progresos, paralelos a los de otras muchas minorías europeas. Así, en 1974 el periódico "Flensburg Avis", fundado en 1869, se convirtió en bilingüe al incorporar el diario regional "Südschleswische Heimatzeitung", en alemán a pesar de ser el portavoz de la minoría danesa. También se publica la revista mensual "Kontakt". Otro signo de progreso fue que la **Sydslesvigsk Forening** contaba en 1980 con unos 21.500 asociados y englobaba otras asociaciones con objetivos más específicos. No hay emisoras de radio, ni de televisión propias, aunque se captan perfectamente las emisoras danesas, que informan regularmente

sobre las actividades de esta minoría en la RFA.

También en la enseñanza el progreso es muy perceptible a partir de la década de 1970. Desde 1920 se imparte el danés en escuelas privadas, mientras que en las públicas se enseña desde 1980. Las dos escuelas danesas de 1920 se habían convertido en 57 en 1979 y la Asociación para la Escuela Danesa coordinaba en 1988 54 escuelas y 62 guarderías de lengua danesa. En estos centros la enseñanza primaria se esparce íntegramente en danés.

Existe un fuerte apoyo desde Dinamarca a esta enseñanza proporcionando, por ejemplo, la mitad del profesorado, pero también se muestra activo el gobierno regional de Kiel, especialmente por lo que se refiere a la financiación escolar en la etapa obligatoria. La enseñanza superior es totalmente en alemán, aunque la escuela superior de Flensburg facilita el ingreso en las universidades danesas y alemanas por igual. La Skoleforening ofrece numerosos cursos de danés para adultos. Husum, y sobre todo Flensburg, cuentan con buenas bibliotecas especializadas¹⁴.

2.3.3: Soraba o eslava

En el valle de Lusacia (Sajonia) viven unos 70.000 sorabos o eslavos, descendientes de emigrantes eslavos que ocuparon la zona entre el Elba y el Oder durante la Alta Edad Media.

En 1948 el Parlamento del Estado de Sajonia y en 1950 el de Brandenburgo en la RDA proclamaron una ley para salvaguardar los derechos de esta minoría soraba. Era la primera vez que esto sucedía, aunque las medidas concretas de protección se hicieron esperar y se vincularon a la ideología de la RDA, que en la práctica promovió una política de desmovilización de esta minoría. Por ejemplo, por efecto de la ley de Educación de la RDA de 30 de abril de 1959 las 140 escuelas existentes en los años 1950 se habían reducido a 61 en 1979, de las cuales a su vez sólo 8 enseñaban en sorabo¹⁵.

La absorción de la RDA por la RFA en 1990 planteó una nueva situación de libertad a los sorabos, pero la ausencia en la Constitución alemana de referencias a las minorías lingüísticas complicó la salida jurídico-política a esta situación. Así, por ejemplo, los sorabos siguen divididos entre el Estado de Sajonia y el de Brandenburgo. Merced al artículo 35 del Tratado de Reunificación de las dos Alemanias, se permite el uso del sorabo en la administración local y en los tribunales regionales. Posteriormente el artículo 25 de la Constitución del land de Brandenburgo de 1992 autorizó a los sorabos a desarrollar su cultura y concretamente a usar su lengua, de acuerdo con una ley del land. La Constitución permite de entrada el uso del sorabo en la administración pública, su aprendizaje en escuelas y guarderías y su uso en las señalizaciones públicas.

Se enseña en algunas escuelas primarias como primera lengua y como primera lengua extranjera en las secundarias. Se dan cursos de sorabo en la universidad de Leipzig y se forman profesores en Bautzen, pero en la práctica estas actividades son poco frecuentadas.

En los medios de comunicación se observó una clara mejora desde 1992: las emisoras locales de radio y televisión emiten algunas horas semanales en esta lengua y se publica un diario y un semanario. Se publican unos 80 libros al año, la mitad de ellos textos escolares. Existen distintos grupos culturales de teatro, música, etc., muy activos e influyentes, principalmente la Domowina, fundada en 1912¹⁶. En Enero de 1995 el Intergrupo para las Lenguas Minoritarias del Parlamento Europeo presentó una propuesta de resolución para proteger la minoría soraba ante las amenazas de dispersión de este grupo a causa de la ampliación de la explotación de las minas de lignito a cielo abierto¹⁷.

2.4: AUSTRIA

<u>Minorías lingüísticas</u>	<u>Regiones</u>	<u>Población hablante</u>
Croata	Burgenland	18.000
	Estiria	
Eslovena	Carintia	16.000
	Estiria	
Húngara	Burgenland	4.000

2.4.1: Eslovena

En 1976 hablaban esta lengua en el Estado de Carintia unas 21.000 personas, mientras que en 1994 no pasaban de 16.000. No tiene un Consejo Consultivo propio y sus usuarios disponen de 4 escuelas donde se enseña esta lengua y 1 escuela totalmente eslovena. El 20% de los niños eslovenoparlantes recibe educación bilingüe y en la enseñanza secundaria hay 8 escuelas en las que se dan clases de esta lengua. Las Universidades de Klagenfurt, Graz, Salzburg y Viena tienen cátedra de esloveno. Existen tres revistas en esta lengua, una hora diaria de

programación radiofónica y 20 minutos de televisión los domingos. La presencia del esloveno en la administración local se limita a algunos servicios y sólo algunos indicadores toponímicos son bilingües.

En aplicación del Tratado de 1955 en 1959 una ley federal reguló el uso de las lenguas minoritarias en la enseñanza primaria del Estado de Carintia. De acuerdo con ella, "todo alumno tiene derecho a recibir la enseñanza en esloveno o a aprender esta lengua como materia obligatoria en las escuelas cuyo objetivo sea dispuesto por un reglamento de aplicación, si tal es la voluntad de su representante legal. Solamente a petición de este representante legal puede el alumno ser obligado a recibir la enseñanza en lengua eslovena o a aprender esta lengua en tanto que materia obligatoria"¹⁸.

También en 1959 se aprobó otra ley federal sobre las lenguas admitidas en los tribunales austríacos del Estado de Carintia. La ley admite el uso del esloveno en aquellos tribunales que serán determinados "en función de un censo general de las minorías que se regulará por una ley federal". El texto especifica a continuación el uso de la lengua eslovena en las demandas, en los debates, en las sentencias, en los recursos, en los registros públicos, en las notarías, etc. Las sentencias, por ejemplo, deben ser en alemán, pero deben ser traducidas "inmediatamente" al esloveno, si se ha usado esta lengua en los debates¹⁹.

2.4.2: Croata

La minoría croata de Burgenland ha bajado de 24.000 personas en 1976 a unas 18.000 en la actualidad y no dispone aún del Consejo Consultivo preceptivo. Unas 10 escuelas usan esta lengua en la enseñanza primaria y otras 21 son bilingües con predominio del alemán. Es lengua obligatoria en dos escuelas secundarias y facultativa en otras cinco. Se dan clases de croata en las universidades de Viena y de Graz.

Existen algunas instituciones para preparar profesores y la prensa croata editada en el Burgenland se reduce a algunos boletines y folletos y muy irregularmente a algún libro. La radio estatal emite unas horas a la semana en esta lengua. La administración usa el croata a discreción y la toponimia sólo recoge algunos carteles bilingües.

2.4.3: Húngara

La minoría húngara también en el Estado de Burgenland apenas reúne unas 4.000 personas y se halla en peor situación que el croata.

2.5: BELGICA

<u>Minorías lingüísticas</u>	<u>Regiones</u>	<u>Población hablante</u>
Alemana	Eupen St. Vith	100.000

2.5.1: Alemana

Todos los municipios de la región de lengua alemana²⁰ tienen un régimen especial para proteger la minoría francoparlante. Siendo el alemán la lengua oficial para los servicios locales, el uso del francés está previsto de la misma manera que lo es el uso de otra lengua en los municipios de régimen especial de las otras dos regiones lingüísticas, de acuerdo con las leyes estatales coordinadas.

En materia judicial el alemán es la lengua de enjuiciamiento civil en Eupen y Saint-Vith, pero el demandado puede solicitar que el procedimiento sea seguido en francés. En el caso de Malmédy es al revés. El alemán es utilizado asimismo en las causas penales y en los tribunales de policía de Eupen y Saint-Vith, aunque el interesado puede elegir el francés en las zonas bilingües. Está autorizado el uso del alemán ante los

tribunales con sede en Lieja.

En la región de lengua alemana se hacen algunas excepciones al principio general de lengua de la región igual a lengua de la enseñanza. Una parte del programa escolar se puede dar en francés en las escuelas de lengua alemana, y en alemán en las escuelas de lengua francesa, a partir del tercer año de enseñanza primaria. Según el artículo 6 de la ley de 30 de julio de 1963 no se puede derogar el principio general a la enseñanza pre-escolar y primaria, excepto en el caso de los escolares que no tienen el alemán como lengua materna o usual. Las escuelas de enseñanza secundaria de lengua francesa no tienen un reconocimiento legal en los municipios alemanes. De cualquier modo, el decreto de 30 de noviembre de 1966 definió la enseñanza en las escuelas secundarias de lengua alemana, donde la enseñanza de la mitad de los cursos puede ser hecha en francés en varios cursos. Sin embargo, la situación no es igual en los tres territorios alemanes. En el Alt-Belgien Süd la enseñanza en lengua alemana fue suprimida en 1919. La asociación **Arelerdan a sprooch** promueve el empleo de la lengua de Luxemburgo en los parvularios y defiende un estatuto bilingüe germano-francés en la enseñanza primaria y secundaria. En el Alt-Belgien Nord no hay enseñanza en lengua alemana desde 1945. En algunos casos, desde 1963 el alemán forma parte de las lenguas impartidas en las escuelas primarias. Pueden seguirse cursos de alemán a partir del tercer año de enseñanza secundaria. La enseñanza superior o universitaria no se imparte

en lengua alemana.

Por último, los decretos del consejo regional valón y los del ejecutivo se publican asimismo en lengua alemana por la ley especial de 8 de agosto de 1980 (art. 56). No hay televisión local en lengua alemana, pero sí alguna emisora de radio privada financiada con fondos públicos, como **Radio Aktivitāt**. El alemán utilizado en el **Alt-Belgien** es un dialecto denominado **Lëtzebuergesh**, lengua oficial en el vecino Estado de Luxemburgo.

2.6: DINAMARCA

<u>Minorías</u>	<u>Regiones</u>	<u>Población</u>
<u>lingüísticas</u>		<u>hablante</u>
Feroesa	Islas Feroe	40.000
Groenlandesa	Isla de Groenlandia	46.000
Alemana	Schleswig del N.	25.000

2.6.1: Feroesa

Desde el 23 de marzo de 1948 las Islas Feroe, de 1.399 kms², se rigen por un Estatuto de Autonomía, que les permite permanecer fuera de la UE. Su artículo 11 reconoce al feroés "como lengua principal", pero el danés debe ser enseñado sin obstáculos y con especial atención. En los asuntos relacionados con la administración se puede utilizar tanto el feroés como el danés. Cuando se trate de apelaciones, todos los documentos feroeses tendrán que ir acompañados de su correspondiente traducción al danés.

Existe un Comité para la Lengua o Malstóvan de cinco miembros, cuyo primer presidente fue Johan Hendrik Poulsen. Su misión consiste en proteger la pureza del idioma, cooperar con las instituciones locales en materia lingüística y asesorarlas, impulsar el uso del feroés en los medios de comunicación, administración, escuelas, etc., y mantener relaciones con las otras lenguas escandinavas. Recibe subvenciones del gobierno local. Gracias a su actividad se publican unos 100 libros al año en esta lengua.

2.6.2: Groenlandesa

El Estatuto de Autonomía de 1978 indica que el groenlandés o esquimal será la lengua principal del territorio, aunque la

enseñanza del danés será también objeto de gran atención. Y el 9.2 añade que cualquiera de las dos lenguas podrá ser utilizada como lengua oficial. En 1980 los asuntos lingüísticos fueron transferidos al Ministro para Groenlandia en Copenhague y en 1981 al gobierno regional, aunque el Parlamento groenlandés ya había aprobado en octubre de 1979 dos decretos reguladores del uso de la lengua.

En 1982 fue creado el Consejo para la Lengua Groenlandesa que empezó sus trabajos reestructurándola y modernizándola, por ejemplo por medio de un diccionario de la Lengua Groenlandesa. En 1984 inició cursos de enseñanza de esta lengua a un grupo de 11 alumnos en un marco bilingüe con el danés. Se superó así la antigua creencia de que el groenlandés era demasiado difícil de aprender y de usar para poder expresar las complejidades técnicas de la vida moderna, circunstancia que permitió una rápida normalización. Con todo, el danés continúa siendo la lengua hegemónica en las zonas urbanas, según los estudios de Folmer Wisti²¹. Groenlandia entró en la CE en 1973 como parte integrante del Reino de Dinamarca, pero se desvinculó de la CE en febrero de 1985 tras un referéndum.

2.6.3: Alemana

En 1945, al término de la II Guerra Mundial, el gobierno danés hizo aprobar una ley fuertemente restrictiva para las

escuelas alemanas situadas al sur de Jutlandia, en represalia por la colaboración de la minoría alemana con los ocupantes nazis. No se podían fundar nuevas escuelas públicas y las existentes debían de tener un mínimo de 10 alumnos por clase. Los planes de estudio debían ser aprobados por el Ministerio del Culto, así como cualquier actividad de las escuelas privadas y en cualquier caso, ninguna escuela alemana podía celebrar el examen de Estado.

La necesidad de normalizar las relaciones con la RFA en un momento en que se estructuraba el bloque occidental, cambió la política represiva instaurada por las autoridades danesas e hizo que el 27 de octubre de 1949 el ministro de Estado Hans Hedtoft presentara a los representantes de la minoría alemana una carta de principios sobre los que se regularía su actividad lingüístico-cultural en el Reino, documento conocido como el "Memorándum de Copenhague". Sobre estos principios y en concordancia con los derechos reconocidos simultáneamente a la minoría danesa en el Schleswig Meridional, el gobierno de Dinamarca firmó el 29 de marzo de 1955 al amparo del artículo 14 de la Convención Europea de los Derechos del Hombre de 1950²² y de la Constitución danesa de 1953, una declaración que reconocía a todos los miembros de la minoría alemana el derecho, entre otros, a usar su lengua sin discriminaciones: "los miembros de la minoría alemana y sus organizaciones no deben sufrir ninguna traba en la utilización hablada o escrita de la lengua que les convenga", dice textualmente el artículo

2.1 de dicha Declaración²³.

La regulación de los derechos lingüísticos de la minoría alemana en Dinamarca tuvo un fuerte impacto en el resto de países comunitarios en la medida que se solventaba definitivamente uno de los tradicionales conflictos fronterizos de Europa Occidental y se aplicaba la Convención Europea de 1950. La vía jurídico-política no era todavía la legislación interior, sino un Tratado internacional, siguiendo la pauta marcada después de la I Guerra Mundial, pero constituía ya un importante precedente que persiste 40 años más tarde.

La Declaración de 1955 autorizó a crear centros escolares de cualquier nivel en los que podía usar el alemán como lengua vehicular, mientras que supeditaba a la ley su uso ante los tribunales y los poderes públicos. Todas las escuelas de la minoría alemana pertenecen al sector privado, lo cual no impide que estén financiadas por las autoridades danesas hasta alcanzar el 85%. Este dato es muy indicativo del grado de compromiso gubernamental con la minoría alemana. En 1991 había 18 escuelas primarias alemanas en la zona²⁴, una secundaria y 25 guarderías, cuya coordinación administrativa corresponde al **Nordschleswiger Schulverein**. Destaca además la escuela técnica para adultos de Tinglev, fundada en 1908. Los diplomas otorgados por las escuelas alemanas en Dinamarca están reconocidos legalmente por la R.F.A.

La enseñanza del alemán como lengua extranjera está prevista en todas las escuelas danesas, y en 1985 un 3% de la población escolar acudía a escuelas en las que el alemán era lengua vehicular. En ellas el danés se aprendía como una asignatura. En todas las escuelas superiores el alemán es una lengua extranjera de aprendizaje voluntario. En las universidades de Copenhague Aarhus, Odense, Roskilde y Aalborg, se pueden obtener diplomas de alemán, y en la mayoría de las universidades forma parte del programa de estudios.

En el Schleswig del Norte no se utiliza el alemán en los anuncios oficiales, ni ante los tribunales, ni en los certificados oficiales. Tampoco se exige el certificado del alemán para acceder a la función pública. Algunos municipios lo utilizan para la toponimia local. Hay varias bibliotecas especializadas, con una en Aabenraa.

Las ceremonias religiosas se realizan en alemán y la Iglesia constituye uno de los baluartes de esta minoría. Desde los años 1920 existen asociaciones para la defensa y promoción del alemán en Dinamarca, como la *Deutscher Schul- und Sprachverein Für Nord Schleswig* o la *Die Heimatkundliche Arbeitsgemeinschaft für Nordschleswig*. En 1945 fue creado el *Bund Deutscher Nordschleswiger*, cuyos estatutos prevén una fidelidad absoluta al rey de Dinamarca. Actúan algunas compañías de teatro no profesionales y se convocan regularmente premios literarios en alemán. Se publican anualmente varios libros sobre temas

relacionados con esta minoría lingüística.

Desde los años 1920 existe el periódico en lengua alemana "Der Nordschleswiger", publicado actualmente por el Bund, pero no existen semanarios bilingües. Algunos periódicos daneses publican anuncios en alemán. La radio y la televisión públicas no difunden programas en alemán, pero dan información y comentarios sobre distintos aspectos de esta minoría lingüística.

La neutralización definitiva del conflicto en su dimensión internacional, las mejoras introducidas merced al Acuerdo de 1955 y la propia debilidad demográfica y política de la minoría alemana han impedido avances mayores a remolque del nuevo espíritu lingüístico imperante en Europa a partir de 1975.

2.7: ESPAÑA²⁵

<u>Minorías</u> <u>lingüísticas</u>	<u>Regiones</u>	<u>Población</u> <u>hablante</u>
Catalana	Cataluña	6.115.000
	Valencia	3.923.000
	Baleares	745.000
	Aragón	50.000
Vasca	Euskadi	2.109.000
	Navarra	523.000
Gallega	Galicia	2.720.000
Bable	Asturias	250.000
Aranesa	Cataluña	4.000

2.7.1: Catalana

En 1979 un nuevo Estatuto de Autonomía regional restableció los derechos lingüísticos del catalán en régimen de co-oficialidad con el castellano. Estos derechos habían sido abolidos en 1939 por el régimen del general Francisco Franco, que volvió a expulsar el catalán drástica y totalmente de la vida pública y a relegarlo al ámbito estrictamente privado²⁶,

desde donde se realizaron grandes esfuerzos para evitar su desaparición.

Las Baleares obtuvieron un régimen similar en febrero de 1983, mientras que el Estatuto de Autonomía del País Valenciano (julio 1982) reconoció la "lengua valenciana", expresión que dió pie para lanzar algunos intentos de segregación entre el catalán y el valenciano²⁷.

A pesar del largo período represivo anterior, la recuperación del catalán se benefició a partir de 1979-80 simultáneamente de una legislación interna democrática y respetuosa con los derechos lingüísticos, y de un entorno europeo mucho más favorable para las lenguas no de Estado. Cabe recordar que en 1979 John Hume presentó la primera resolución sobre los derechos de las minorías lingüísticas en el Parlamento Europeo, mientras que en el Consejo de Europa el senador barcelonés Alexandre Cirici se disponía a acometer los trabajos preparatorios de la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias. El hecho de que el catalán sea la lengua oficial del Principado de Andorra hizo que esta lengua consiguiera una cierta presencia internacional a raíz de la nueva Constitución de Andorra de 1983.

A partir de la Constitución española, el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 1979 define el catalán como la "lengua propia" de Cataluña y encarga al gobierno regional el uso

normal y oficial del catalán y del castellano para alcanzar su plena igualdad²⁸. En 1978 se creó en la Administración autonómica una Dirección General de Política Lingüística que a partir de 1983 aplicó una "Ley de Normalización Lingüística" aprobada por unanimidad por el Parlamento regional, de mayoría nacionalista, para fomentar y difundir el conocimiento del catalán²⁹. También la Administración local ha tomado medidas para favorecer el uso del idioma en este ámbito, mientras que los organismos de la Administración Central presentes en el Principado fueron adoptando asimismo el bilingüismo, aunque muy lentamente.

El 16 de febrero de 1994 el Tribunal Supremo planteó ante el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad contra tres artículos básicos de la Ley de Normalización del catalán, argumentando que constitucionalmente no existe el deber de conocer el catalán y que los padres tienen el derecho a escoger la lengua escolar de sus hijos durante todo el proceso educativo, pero la nueva sentencia del Tribunal Constitucional confirmó la política lingüística de la administración autonómica de Cataluña y, de paso, del resto de regiones bilingües españolas³⁰.

El Estatuto de la Comunidad Valenciana también reconoce la igualdad de derecho entre ambos idiomas y la necesidad de una "especial protección y respeto" para el valenciano³¹. En este sentido, en 1983 las Cortes Valencianas, con mayoría

socialista, aprobaron una "Ley sobre Uso y Enseñanza del Valenciano", que regula el uso de esta lengua en la Administración y en los medios de comunicación³².

El Estatuto de las Islas Baleares define asimismo el catalán como "la lengua propia" de la región en régimen de co-oficialidad con el castellano³³. Sobre este principio la "Ley de Normalización Lingüística" de 1986 se propone entre otras cosas "hacer efectivo el uso progresivo y normal de la lengua catalana en el ámbito oficial y administrativos", convertir el catalán en la lengua vehicular de la enseñanza, y crear la conciencia social sobre la importancia del conocimiento y del uso del catalán. Esta misma ley promociona el estudio de las modalidades insulares "sin perjuicio de la unidad de la lengua"³⁴. La Universidad de las Islas Baleares es la garante de esta unidad, en conexión con las otras autonomías que usan el catalán. Sin embargo, no existe ningún órgano ejecutivo dependiente de la Administración regional o central que aplique estos principios. En 1989 el gobierno conservador creó la "Campaña de Normalización Lingüística", ente asesor y de sensibilización para un mayor uso del catalán.

Por último, el Estatuto de Aragón ordena que "las diversas modalidades lingüísticas gocen de protección"³⁵. Entre estas modalidades está el catalán. Dado que hasta 1994 las competencias en materia educativa pertenecían al gobierno

central, ambos ejecutivos firmaron el 27 de noviembre de 1986 un Convenio de Cooperación sobre la Enseñanza de la Lengua Catalana en las Comarcas Orientales de Aragón³⁶.

Dentro de la gran variedad dialectal, el catalán se divide en el oriental, hablado en la provincia catalana de Lérida y en el País Valenciano, y el occidental, hablado en Gerona y en las Islas Baleares. El catalán de Barcelona y Tarragona ocupa una posición intermedia, más cercana a la lengua occidental y a la standard.

En Cataluña el catalán es hegemónico en la Administración autonómica y municipal, mientras que el castellano lo es en la periférica del Estado, aunque se extiende el bilingüismo. Las relaciones entre ambas Administraciones se realizan preferentemente en castellano. El gobierno regional dispone de un Consejo Catalán de Promoción Exterior de la Cultura³⁷. En el comercio, la industria y los servicios sigue predominando el castellano por lo que respecta a la contabilidad y documentación interna, pero existe un bilingüismo muy desarrollado en las relaciones con los clientes y usuarios. También la Iglesia tiende al uso mayoritario del catalán, aunque suele adaptar su pastoral al régimen lingüístico de la feligresía. El Parlamento de Cataluña realiza sus debates y publica sus documentos casi exclusivamente en catalán.

El valenciano ha seguido un proceso parecido, pero su uso público es menor en todos los ámbitos en comparación con Cataluña. En las Cortes Valencianas, por ejemplo, predomina el castellano en los debates, ya que el catalán goza de poca consideración social a pesar de que suele ser la lengua de la intelectualidad y de la Universidad. En las Baleares el catalán ha sufrido un fuerte retroceso frente a la hegemonía del castellano, a causa de la emigración de habla castellana, de la presión turística y de una política lingüística menos agresiva que en Cataluña. En el ámbito público la lengua catalana sigue siendo ampliamente minoritaria, al contrario que en el ámbito privado. Según el profesor Miquel Siguán, "mientras que en Valencia a pesar de las graves controversias planteadas parece que puede advertirse un progreso continuado de la lengua, en las Baleares la impresión es más bien de estancamiento"³⁸.

El Estatuto de Autonomía concede al gobierno catalán plena competencia en materia de enseñanza, lo que le permite legislar también en materia de lengua en las escuelas. Así, el catalán pasa a ser la lengua normal de enseñanza en todos los niveles y la de funcionamiento de los centros. Los padres tienen el derecho a que sus hijos reciban los primeros años de enseñanza general en la lengua materna. En cualquier caso, el objetivo final, de la misma manera que el de la sociedad catalana en general, es que todos los escolares terminen la enseñanza obligatoria en condiciones de utilizar sin dificultades ambos idiomas. Para ello pueden utilizar distintos procedimientos.

Existe todo tipo de material didáctico en catalán.

Sin embargo, el hecho de que en 1978 se partiera de unas condiciones claramente inferiores para el catalán, ha obligado a tomar algunas medidas complementarias a favor de este idioma, como por ejemplo la llamada "política de inmersión", es decir que en los dos primeros cursos de enseñanza obligatoria las clases fueran todas en catalán para facilitar el bilingüismo a los escolares castellano-parlantes. Una de las dificultades a superar para aplicar esta política es que más de la mitad del profesorado de enseñanza obligatoria es castellanoparlante³⁹.

El catalán es la lengua oficial de todas las Universidades, donde funciona el principio de que tanto los alumnos como los profesores utilizan el catalán o el castellano indistintamente, dado que se supone que tanto los unos como los otros dominan ambos idiomas. A principios del curso 1993-94 un 57% de la enseñanza en Cataluña se daba en catalán, según datos del *Servei d'Ensenyament del Català*, aunque con notables desigualdades según los niveles y los centros educativos⁴⁰.

En el País Valenciano todas las escuelas tienen la obligación de enseñar el catalán un mínimo de cuatro horas a la semana. En 1987 el 8% de las escuelas utilizaba el valenciano como lengua vehicular o dan la mayoría de clases en esta lengua. En 1992 40.000 escolares de esta Comunidad (el 8'6% del total) recibían la enseñanza obligatoria en valenciano. En las

Universidades existe libertad de lengua, pero en la de Valencia sólo un 20% de las clases se dan en valenciano. En el resto la proporción es similar o incluso inferior.

El Decreto de Bilingüismo del gobierno balear ordenaba dictar un mínimo de 4 horas semanales en todos los grados de la enseñanza de la lengua propia, instrucción que en 1986 sólo cumplían la mitad de los centros escolares aproximadamente. Sólo media docena de centros dan sus clases en catalán. Pese a ser uno de los reductos principales de la defensa del catalán en el archipiélago, la Universidad de las Baleares sólo da entre un 20% y un 30% de clases en esta lengua. A partir del 16 de agosto de 1994 los títulos y certificados en lengua catalana expedidos por cualquiera de las tres administraciones regionales eran reconocidos por las otras dos⁴¹.

Tras el colapso de 1939 la edición de libros en catalán no volvió a tener un volumen considerable hasta los años 1960. En 1965 concretamente se publicaron 360 títulos en catalán, cifra que en 1987 se había convertido en 4.145 y en 1993 en 5.905. Las tiradas medias suelen ser bajas, unos 2.000 ejemplares, pero en ocasiones se han alcanzado los 100.000 ejemplares. Existen diccionarios del catalán con los principales idiomas del mundo, una "Gran Enciclopedia Catalana" en 24 volúmenes y traducciones al catalán de numerosas obras escritas en distintas lenguas extranjeras. Tanto Valencia como Palma de Mallorca cuentan con pequeñas, pero activas, editoriales en

lengua catalana, como "Tres i Quatre", que además suelen aglutinar gran parte de la intelectualidad regional que se expresa en este idioma.

Se publican tres diarios íntegramente en catalán ("Avui", "Nou Diari" con ediciones en Barcelona, Tarragona y Lleida (hasta febrero 1994) y "Punt Diari" editado en Gerona), que representan aproximadamente el 25% de la prensa diaria en Cataluña, así como la mayor parte de la prensa comarcal diaria y no diaria. Existe un semanario, "El Temps", editado en Valencia, varias revistas mensuales y numerosos boletines, publicaciones especializadas, etc. en los tres territorios. La prensa en catalán suele estar subvencionada por los tres gobiernos regionales. El catalán tiene una larga tradición en la edición de revistas infantiles, empezando por el "Patufet" de los años 1930. En 1963 apareció "Cavall Fort", al que se añadieron otros títulos como "L'Infantil", "Cucafera", "Tiroliro" y "Reporter Doc"). Las publicaciones en catalán circulan sin dificultades por todos los territorios que usan esta lengua, en lo que de hecho constituye un único mercado cultural.

En Cataluña existen dos emisoras de radio de titularidad pública que emiten íntegramente en catalán, ("Catalunya Ràdio" y "Ràdio 4"). Muchas de ámbito local también son monolingües, pero las cadenas de ámbito estatal o las grandes emisoras comerciales suelen emitir en castellano o como máximo unas

horas a la semana en catalán. En conjunto las emisiones en catalán representaban en 1987 un 30% del total. En la Comunidad Valenciana existe una emisora pública, "Canal 9", que emite preferentemente en catalán, junto con "Radio 4", de la cadena estatal Radio Nacional de España.

Existen dos cadenas de televisión de titularidad pública que emiten sólo en catalán (TV3, Televisió de Catalunya, y Canal 33), mientras que Televisión Española programa algunas horas a la semana en esta lengua⁴². El resto de canales, públicos o privados son íntegramente en castellano.

En Valencia un canal de televisión público "Canal 9", emite prefentemente en valenciano, mientras que TVE 2 emite unas horas en esta lengua. Las cadenas de televisión autonómicas en catalán se captan en todos los territorios de ámbito cultural catalán, incluyendo Andorra y la Cataluña francesa, gracias a la acción de entidades privadas, como por ejemplo la asociación mallorquina **Voltor**, que ha sufragado e impulsado la infraestructura técnica para la recepción de TV3 en Mallorca desde julio de 1985.

En Aragón la promoción del catalán fuera de las escuelas corre a cargo básicamente de los ayuntamientos⁴³, pero se reciben las influencias exteriores de la comunidad catalana. En septiembre de 1994 la cadena de televisión cultural europea ARTE empezó a emitir programas en lengua catalana⁴⁴.

En 1992-93 los tres gobiernos autonómicos acometieron las primeras y muy tímidas acciones lingüísticas y culturales conjuntas, que las diferencias políticas y las limitaciones impuestas por la legislación estatal impiden desarrollar más rápidamente. Por esta razón, surgieron algunas iniciativas privadas subsidiarias, como la *Federació Llull* que desde 1990 agrupa la *Acció Cultural del País Valencià*, la *Obra Cultural Balear* y el *Omnium Cultural de Catalunya* con la finalidad de divulgar y promover la lengua y la cultura catalanas.

2.7.2: Euskera

El Estatuto de Autonomía del País Vasco de 1979 afirma que el euskera es "la lengua propia" del pueblo vasco, en régimen de co-oficialidad con el castellano. Las autoridades deben garantizar un bilingüismo efectivo en todo el territorio. En noviembre de 1982 el Parlamento Vasco, con mayoría nacionalista, aprobó una "Ley de Normalización del Uso del Euskera" para llevar a cabo este objetivo. La ley dice que el euskera es el signo más visible y objetivo de la identidad del País Vasco y que debe convertirse en un instrumento de integración plena en la comunidad. La ley regula el uso de la lengua vasca en la Administración, la enseñanza, los tribunales, etc, y la vida pública en general, al estilo de las otras comunidades bilingües⁴⁵. Posteriormente se dictaron distintas leyes y disposiciones sectoriales para ir adaptando

y extendiendo el uso del vascuence en la vida pública vasca⁴⁶.

En Navarra la primera lengua oficial es el castellano, en régimen de co-oficialidad con el vascuence sólo en las zonas vascoparlantes⁴⁷. Una ley foral de 1986 delimita los límites de estas zonas, es decir los municipios afectados por el bilingüismo, y establece normas para hacer posible el uso oficial del euskera en la zona vascófona y la posibilidad de utilizarlo en las otras áreas, así como recomendaciones para difundir su conocimiento y su uso⁴⁸. Así, por ejemplo, el Diario de Sesiones del Parlamento navarro o las decisiones y resoluciones del Gobierno foral deben ser publicadas en ambas lenguas. También se atribuye a la Academia de la Lengua Vasca el carácter de institución consultiva para asuntos lingüísticos, lo cual implica reconocer la unidad de la lengua que se habla en ambos territorios. El Gobierno navarro ha ido tomando medidas de protección del euskera, por ejemplo creando un Servicio de enseñanza del euskera o un Servicio de Traducción en el interior de la Administración.

La normalización del euskera exigió en primer lugar su unificación y codificación definitiva para superar los siete dialectos principales de la lengua oral. El filólogo Koldo Michelena realizó esta labor y creó el "euskera batua" o "euskera común", que es el utilizado en los medios de comunicación, la Administración y la enseñanza. A finales de 1994 la Academia de la Lengua Vasca estaba en vías de completar

este proceso de standarización, iniciado en 1968 en el Congreso de Aránzazu.

Por otra parte, el euskera se reparte muy desigualmente en las cuatro provincias, desde una máxima concentración en Guipúzcoa (43% de vascoparlantes) hasta la mínima en Alava (17%) y Navarra. Sin embargo, desde 1979 ha aumentado notablemente el número de vascos bilingües, en especial de castellanoparlantes que han aprendido el euskera.

La presencia del euskera en la Administración regional y local ha alcanzado niveles importantes, en particular por lo que respecta a su proyección exterior y a sus relaciones con los ciudadanos. En el Parlamento Vasco, por ejemplo, el castellano es la lengua predominante y el uso del euskera exige un servicio de traducción simultánea para los parlamentarios que no entienden esta lengua. Al contrario que el catalán o el gallego, lenguas neolatinas, las dificultades propiamente lingüísticas para aprender el euskera son muy grandes, lo cual impide en gran parte su mayor difusión.

En Navarra la comunidad vascófona, mucho más minoritaria, no vió regulado el uso de su lengua hasta 1986 a causa de la polémica entre los partidarios de una unión institucional y política con el País Vasco y los partidarios de una personalidad navarra diferenciada. Por otra parte, la emigración ha castigado estas comarcas, en general las más

atrasadas de la región. Todo ello ha hecho que el euskera haya seguido retrocediendo en en las zonas vascófonas, pero haya avanzado en las zonas de transición y en Pamplona. Según el profesor Siguán, "para el conjunto de Navarra puede decirse, por tanto, que aumenta el conocimiento del euskera y que aumenta al mismo tiempo su dispersión geográfica y el nivel social de los que lo hablan"⁴⁹. Con todo la presencia pública del vasco en Navarra es muy escasa, excepto en los municipios euskaldunes.

Las primeras "ikastolas", o escuelas en lengua vasca, se fundaron tanto en el País Vasco como en Navarra, antes de 1975 habitualmente en régimen cooperativo y de la mano de las fuerzas nacionalistas clandestinas. Su número creció rápidamente hasta 1980⁵⁰, pero en 1978 entraron en vigor los decretos de bilingüismo y en todos los centros escolares vascos se hizo obligatoria la enseñanza del euskera.

De este modo, se han formado tres grupos de escuelas:

- a) las que enseñan en euskera y dan un mínimo de tres horas semanales de castellano;
- b) las que enseñan en castellano y dan un mínimo de tres horas a la semana de euskera o una o más asignaturas en esta lengua;
- y c) las que enseñan en castellano y un mínimo de tres horas semanales de euskera.

La tendencia es que las escuelas del grupo c) pasen al b) y las del b) al a). En 1988 entre un 12% y un 15% de los escolares vascos recibían la enseñanza básicamente en euskera, entre un 18% y un 20% la recibían bilingüe, y entre el 65% y el 70% en castellano. A mediados de 1994 estalló una fuerte polémica dentro del gobierno de coalición vasco por la financiación pública de las "ikastolas" privadas y la posibilidad de que éstas den enseñanzas secundarias.

En las Universidades del País Vasco se impone el principio de libertad de lengua para alumnos y profesores, pero la inmensa mayoría de las clases se dan en castellano, a pesar de los esfuerzos realizados para implantar el euskera. Hay escuelas de magisterio para profesores vascoparlantes y abundan los cursos de euskera para adultos.

El gobierno navarro no contaba antes de 1993 con competencias educativas, asumidas por el gobierno central, el cual en 1987 tomó algunas medidas para la enseñanza del euskera en la región⁵¹. A pesar de ello, se creó un **Servicio de Enseñanza del Euskera** en la Administración regional para ayudar aquellas escuelas que enseñaran en o el euskera. En 1988 el 83% de los escolares navarros recibían la enseñanza obligatoria sólo en castellano y el 9% sólo en euskera. Otro 7% recibían clases de euskera o algunas asignaturas en esta lengua. No existía ni una sola "ikastola" para la enseñanza media y bachillerato.

No se edita ningún diario exclusivamente en euskera, pero sí bilingüe ("Egin"), muy próximo al nacionalismo radical. El resto de periódicos son en castellano, aunque suelen publicar artículos en euskera con cierta asiduidad. Hay una veintena de publicaciones periódicas en euskera y se publican entre 600 y 700 libros al año, la mayoría relacionados con la literatura juvenil e infantil y libros de texto, alcanzando los 250 títulos en 1988. En Navarra las publicaciones en euskera son escasas, pero el público interesado tiene acceso sin dificultad a las publicaciones del vecino País Vasco.

A partir de 1982 existen dos emisoras de radio y dos de televisión de titularidad pública, que emiten preferentemente en euskera⁵². En las otras emisoras, públicas o comerciales, el castellano es totalmente hegemónico, aunque se incluyen algunos programas en euskera. En Navarra la presencia del euskera en los medios de comunicación es meramente testimonial, pero se reciben sin dificultad las emisiones producidas en el País Vasco.

2.7.3: Gallego

El Estatuto de Autonomía de Galicia de 1981 establece que el gallego es la lengua propia de Galicia en régimen de co-oficialidad con el castellano y encarga a los poderes públicos regionales "el uso normal y oficial de los dos idiomas", así

como "la promoción y enseñanza de la lengua gallega"⁵³. Para desarrollar estos principios el Parlamento gallego, con mayoría conservadora, aprobó en 1983 una "Ley de Normalización Lingüística", similar a las de las otras comunidades bilingües⁵⁴. Esta política de normalización la lleva a cabo un departamento específico de la Administración gallega, la Dirección General de Política Lingüística. Como consecuencia, el gallego ha entrado con fuerza en la vida pública regional, aunque existen amplios sectores, como el empresarial, la justicia o los relacionados con la Administración Central que todavía profesan un claro monolingüismo castellano. En los debates del Parlamento autonómico se ha ido imponiendo la lengua gallega, síntoma claro de que esta lengua ha hecho progresos en su valoración social.

Con todo, los responsables de la normalización afirman sin dudar que existe un fuerte desequilibrio a favor del castellano y que el bilingüismo efectivo es aún una declaración de intenciones.

La introducción del gallego en la enseñanza fue lenta a principios de los años 1980 por falta de empuje de las autoridades educativas, y en ciertos casos por la resistencia de los padres de los alumnos que consideraban el castellano como una lengua de prestigio. A finales de esta década la situación había cambiado y se podía considerar que el Decreto de Bilingüismo de 1978 se aplicaba con un rigor desigual en

todas las escuelas públicas o privadas subvencionadas.

Según este Decreto, en todos los niveles del sistema educativo debe enseñarse la lengua y la literatura gallegas como mínimo unas horas a la semana y desde el curso 1984-85 deben darse en gallego como lengua vehicular dos asignaturas del área de sociales en la enseñanza obligatoria y una en la secundaria. En 1987 el 67% de las escuelas de enseñanza obligatoria daban las asignaturas correspondientes en gallego y el 30% de los Centros de Formación Profesional y de Bachillerato, con una tendencia a aumentar.

En las Universidades regionales el gallego ha hecho progresos notables, especialmente como lengua administrativa y de relación, mientras que sólo un 20% de las clases se dan en esta lengua. Para ingresar en esta institución hay que demostrar el conocimiento del gallego.

En 1987 se editaron 500 libros en gallego, aunque en tiradas reducidas que no superan los 2.000 ejemplares, excepto los libros de texto. Predominan las obras literarias y las dedicadas a jóvenes.

El 6 de Enero de 1994 apareció el primer diario integramente en gallego ("O Correo Galego"), aunque la prensa regional suele contener secciones en esta lengua. Sin embargo, existen varias revistas de temática diversa en la lengua regional,

principalmente el semanario "A Nossa Terra", cabecera histórica del movimiento galleguista. Existe una emisora de televisión de titularidad pública ("Televisión de Galicia"), que emite casi exclusivamente en gallego, al igual que la emisora estatal Radio 4 de Radio Nacional de España. En el resto de medios de comunicación el predominio del castellano es casi total.

La Xunta, o gobierno regional gallego, subvencionó las publicaciones en esta lengua entre 1977 y 1992.

2.7.4: Bable

El Estatuto de Autonomía de Asturias de diciembre de 1981 indica en su artículo 4 que "el bable, lengua específica de Asturias, gozará de completa protección. Se promoverá su utilización en los medios de comunicación y en la enseñanza, respetando las variantes locales y la voluntad de los ciudadanos en cuanto a su aprendizaje". Y el artículo 10.1) añade que el Principado de Asturias es responsable del "fomento la protección del bable en sus diversas formas, que como modalidades lingüísticas, se utilizan en su territorio". Sin embargo, en ningún momento se define el bable como lengua co-oficial de Asturias⁵⁵.

En 1980 se creó la Academia de la Lengua Asturiana para promover su utilización y, sobre todo, unificar ortográficamente los distintos dialectos. En 1985 una Oficina

de Política Lingüística dependiente del gobierno asturiano, fue encargada de la promoción y difusión de esta lengua, por ejemplo con cursos para adultos o para profesores⁵⁶. En 1984 aproximadamente el 51% del 1.100.000 asturianos entendían el bable, el 25% lo hablaban y el 33% lo leían, y en el curso 1985-86 un 4% de los alumnos de enseñanza obligatoria recibían clases de bable⁵⁷ .

2.7.5: Aranesa

El aranés se habla en el Valle de Arán, comarca situada al Noroeste de Cataluña. Se trata de un dialecto del gascón, del grupo de lenguas occitanas, que se introdujo en este valle pirenaico a raíz de las emigraciones gasconas del siglo XVII. El aranés está reconocido por el Estatuto de Autonomía de Cataluña⁵⁸, y la ley de Normalización Lingüística de 1983 la define como "la lengua propia de la Vall d'Aran", garantizando su uso público.

En 1987 el 80% de los 5.000 habitantes del Valle de Arán hablaban esta lengua y el 60% lo consideraban su lengua habitual. Los araneses conocen además el catalán y el castellano. En los últimos años se ha procedido a la codificación ortográfica de esta lengua y a la edición de libros de texto. En las escuelas se dan varias horas a la semana de clase en y de aranés, mientras que en los niveles

pre-escolares se procura dar la enseñanza totalmente en esta lengua.

2.7.6: Otras lenguas reconocidas

El Estatuto de Autonomía de Aragón al declarar la protección oficial a las distintas modalidades lingüísticas, reconoce aunque no explícitamente, al llamado "alto-aragonés" o lengua primitiva que quedó encerrada en algunos valles pirenaicos⁵⁹.

2.8: FINLANDIA

<u>Minorías lingüísticas</u>	<u>Regiones</u>	<u>Población hablante</u>
Sueca	I. Aland	300.000
	Turun-Porin	
Sami	Lappland	5.700

2.8.1: Sueca

La vigente legislación finlandesa ha sido citada con frecuencia como ejemplar por el respeto hacia su minoría sueco-

hablante, un 6% de su población. Pese a que esta minoría está concentrada especialmente en las Islas Aland y en la costa meridional en la región de Turun y Porin, el sueco y el finés son oficiales en todo el territorio nacional en virtud del artículo 14 de la Constitución, aunque su aplicación varía.

La Ley Lingüística de 1922 reconoce el derecho de los ciudadanos finlandeses a emplear ante los tribunales y ante las autoridades administrativas su lengua materna, sea el finés o el sueco, y a recibir la respuesta en el mismo idioma. Las leyes, los decretos y los proyectos enviados por el gobierno al Parlamento deben estar redactados en las dos lenguas y las unidades militares respetan el origen lingüístico de los reclutas. Ambas lenguas son obligatorias en las escuelas, donde se suele aplicar el método de la inmersión para que los niños fineses-parlantes aprendan el sueco, lengua común entre los países escandinavos⁶⁰.

Las dos lenguas también son exigidas en el mundo del trabajo, si bien en grados distintos, según la categoría laboral y el tipo de trabajo. Los padres declaran cual es la lengua materna del recién nacido, y ésta es la que cuenta en todos sus documentos, lo cual no obsta para que cambie de lengua declarada cuando quiera.

Las leyes finlandesas combinan el principio de territorialidad con el de personalidad. Así, por el primero se

reconoce a los miembros de un grupo o de varios grupos lingüísticos el derecho a beneficiarse de los servicios públicos en su lengua, dentro de ciertas regiones delimitadas. "El ideal de igualdad lingüística absoluta no es aplicable, vista la debilidad numérica de los sueco-hablantes y el coste prohibitivo de una Administración bilingüe para todo el Estado", en opinión de Carles Pastor⁶¹. Para que un municipio sea declarado bilingüe debe contar con 3.000 mil hablantes de la lengua minoritaria o con un 8% del conjunto del censo como mínimo. Por el segundo se reconoce al ciudadano el derecho a comunicarse con la Administración en la lengua de su elección, incluso allí donde el sueco es muy minoritario o no está presente, aunque este principio está muy matizado en la práctica por el de territorialidad.

El equilibrio legislativo no ha evitado que los fineses se quejen de tener que aprender sueco en vez de inglés, lengua muy introducida en el país, mientras que los suecos denuncian con frecuencia carencias lingüísticas, por más que cuentan con el apoyo de los medios de comunicación, educativos y culturales de la vecina Suecia⁶².

La importancia del bilingüismo se reflejó, por ejemplo, en la elección del último presidente de la República en febrero de 1994. Frente al candidato vencedor el finés Martti Ahtisaari que recibió el 53'9% de los votos, la candidata por el Partido Sueco, la sueco-parlante Elisabeth Rehn, sacó el 46'1%⁶³.

Los 24.000 habitantes (según el censo de 1987) de las Islas Aland, regidas por un Estatuto de Autonomía desde 1921 (reformado en 1951), son totalmente sueco-parlantes y el finés es enseñado allí como la primera lengua extranjera. Es la única zona monolingüe del Estado. Este Estatuto obligó al gobierno finlandés a consultar al Parlamento de las Islas la entrada de Finlandia en la Unión Europea, pudiendo el gobierno regional rechazar el ingreso. Celebrado un referéndum el 20 de noviembre de 1994, el 74% de los votos se inclinó a favor del ingreso en la UE, lo cual hizo redactar un protocolo adicional para adaptar las peculiaridades de la autonomía regional, sobre todo las financiero-fiscales, a la normativa de la UE. Desde 1970 las Islas Aland cuentan con dos representantes en el Consejo Nórdico.

2.8.2: Sami

La lengua sami o de los lapones en la provincia de Lappland (99.200 kms²) no es oficial, aunque este grupo es considerado una minoría lingüística, al contrario que los suecos. En 1973 se le concedió un Estatuto, que entre otras cosas autoriza la elección cada cuatro años de una asamblea parlamentaria con competencias culturales, pero sin potestad legislativa o normativa⁶⁴. El sami fue declarado "lengua nacional" el 1 de enero de 1992 y cuenta con unos 5.700 hablantes en todo el

Estado. Esta consideración les otorga ciertos derechos lingüísticos, como por ejemplo el uso de intérpretes ante los tribunales. La rotulación pública en las zonas laponas es bilingüe y disponen de una emisora de radio que emite unas horas al día en esta lengua. Están divididos en varias comunidades: los *nemets*, los *enets*, los *ngasanas*.

El Tratado de Adhesión de Finlandia a la UE incluye un protocolo que reconoce "los derechos exclusivos" del pueblo sami a la cría de renos en las áreas tradicionales. Dicho protocolo preve también "la posible extensión de estos derechos para cubrir derechos adicionales exclusivos del pueblo Sami".

La Carelia finlandesa se constituyó en la provincia de Pohjois-Karjala (21.500 kms²). De sus 200.000 habitantes entre 110.000 y 170.000 hablan careliano, que algunos consideran una lengua distinta del finés⁶⁵.

2.9: FRANCIA

<u>Minorías lingüísticas</u>	<u>Regiones</u>	<u>Población hablante</u>
Vasca	Pirineos At.	80.000
Bretona	Bretaña	1.000.000
Catalana	Pirineos Or.	200.000
Corsa	Córcega	200.000
Alsaciana	Alsacia	
	Lorena	200.000
Occitana	Sur de Francia	1.000.000
Flamenca	West Hoek	100.000

2.9.1: Vasca

La lengua euskaldún no goza de ningún reconocimiento oficial o legal, a excepción de los derechos genéricos derivados de la "Ley Deixonne" de 1951 o de la "Ley Toubon" de 1994. Por ello, las asociaciones para la defensa del idioma y de la cultura vascas siguen insistiendo en sus reivindicaciones ante las autoridades locales, regionales e incluso estatales. Su supervivencia depende en gran medida de la evolución lingüística en el País Vasco español.

Las autoridades locales del País Vasco francés han tomado durante la década de 1980 algunas iniciativas lingüísticas, como por ejemplo rotular determinadas carreteras provinciales en vasco y en francés. Algunas comunas aceptan el conocimiento del vasco como un mérito suplementario a la hora de contratar personal administrativo. También ha conocido una cierta recuperación el uso del vasco en los actos litúrgicos de la Iglesia Católica, así como en la difusión musical y en el teatro. Regularmente se convocan premios literarios.

La Euskalsaleen biltzarra desde 1901 y la asociación IKAS desde 1959 promocionan estudios, sensibilizan a la opinión pública y actúan en el terreno educativo. Existen algunas publicaciones periódicas en lengua euskaldún o bilingües desde 1944, como el semanario "Herria", luego "Euskalduna", o la revista "Maiatz". A partir de 1964 se intensificó la edición de publicaciones e incluso surgió un periódico bilingüe "Enbata". Algunas emisoras de radio y televisión regionales emiten unos minutos, unas horas como máximo a la semana, en lengua euskaldún, destacando "Radio Adour Navarre" emisora trilingüe en francés, occitano y euskera.

En materia educativa la situación es parecida. En los niveles primarios el vasco se enseña en algunas escuelas públicas y privadas durante algunas horas a la semana, aunque hay algunas aulas bilingües en determinadas escuelas públicas. En los años 1970 la asociación privada Seaska fundó una

treintena de escuelas en vasco o "ikastolak". Esta asociación no fue reconocida por el gobierno francés hasta el 22 de julio de 1994, cuando el ministro de Educación, el occitano François Bayrou, firmó un acuerdo con esta federación de ikastolas para su integración progresiva en la red educativa nacional, así como la creación de un centro de formación de maestros vascos. En esta ocasión el ministro Bayrou reconoció que "la defensa cultural no debe ser una defensa marginal, y yo reconozco a cada una de las lenguas minoritarias del suelo francés como parte integrante de nuestro patrimonio, de su dignidad y de su valor"⁶⁶.

La enseñanza del euskera se introdujo en el Liceo de Bayona a partir del curso 1966-67, experiencia que se había extendido en 1978 a otros 8 liceos de la región y a 6 centros privados. En 1982 se daban clases de vasco 3 horas a la semana en 112 escuelas de 75 comunas. El profesor Jean Haritschelhar, presidente de la Academia de la Lengua Vasca, estimaba en un millar los niños que en 1994 estudiaban sólo en euskera. Otros 1.300 recibían enseñanza en vasco y francés al 50 por ciento, y 1.400 más recibían clases de euskera unas horas a la semana⁶⁷. Sin embargo, en ningún caso esta enseñanza tenía carácter oficial y constituía únicamente una actividad complementaria. Más tarde el vasco se convirtió en una segunda lengua optativa desde la enseñanza elemental hasta la secundaria y se pudo obtener un diploma en estudios vascos en Pau e incluso en el Centro de Bayona de la Universidad de

Burdeos. Esta última dispone de una cátedra de lengua vasca, la primera del mundo, desde 1948.

2.9.2: Bretona

La lengua bretona no goza de ningún reconocimiento legal específico, a excepción de los derivados de la "Ley Deixonne" de 1951 y de la "Ley Toubon" de 1994, y su uso escolar o en los medios de comunicación sigue siendo marginal. Se tolera su uso en los tribunales locales a través de intérpretes. Incluso la Iglesia Católica ha abandonado casi su uso, sobre todo si se compara con su utilización antes de la II Guerra Mundial.

El bretón se manifiesta a través de cuatro dialectos: el de Cornuailles, el de Leon, Tregor y Vannetais, aunque en 1956 se completó su normalización ortográfica.

Hasta 1965 no se empezó a enseñar bretón en algunas escuelas elementales del Estado, si bien de forma totalmente voluntaria. La situación no cambió hasta que en 1977 el movimiento **Diwan** extendió esta enseñanza a otras escuelas hasta alcanzar las 19 maternas y las 4 elementales, en las que sólo se enseñaba en bretón. La recuperación del bretón en estos años fue uno de los puntos de referencia más estudiados y citados en las instancias europeas a la hora de acometer la elaboración de una doctrina lingüística.

En el curso 1993-94 se habían creado ya 23 escuelas bretonas de enseñanza pre-escolar y primaria y un "collège" en Brest, repartidos en los cinco departamentos bretones, siguiendo el método de la inmersión lingüística hasta los seis años. A partir de esta edad se introduce la enseñanza progresiva del francés. Desde los 11 años inician el aprendizaje del inglés y desde los 14 años pueden optar a una segunda lengua extranjera. Sin embargo, no existen centros Diwan para escolares mayores de 14 años. En el resto de escuelas secundarias de la región el bretón no formó parte del currículum escolar hasta 1970, siendo en este momento la mayor dificultad el bajo número (175) y la baja calificación de los profesores, que deben ser formados por Diwan. En 1982-83 el Rectorado de la Universidad de Rennes impulsó la creación de aulas bilingües. Con todo, en 1985 nueve profesores de una plantilla de 14.000, enseñaban el bretón en las escuelas públicas regionales. Por fin, en 1990 el Estado se hizo cargo de las remuneraciones de 51 profesores de lengua bretona, que en 1993 subió a 60^{es}.

Los estudios de lengua y literatura bretonas fueron introducidos en las universidades de Rennes, Brest, Nantes y París a partir del curso 1981-1982. Este año la universidad de Rennes otorgó 32 licenciaturas en lengua bretona aunque ninguno de sus titulares pudo dedicarse a la enseñanza por no existir el Certificado de Aptitud en Enseñanza Secundaria en esta especialidad. Sin embargo, existe una notable gama de cursos particulares para aprender esta lengua, organizados por el Skol

Ober desde 1930 o el Skol dre Lizher desde 1945, o por el Skol an Deskadurezh Eil Derez por correspondencia desde 1962.

Algunas emisoras de radio, como "Radio Bretagne Ouest" (Radio Breiz Izel) o "Radio Armorique", emiten desde 1940 algunas horas a la semana en lengua bretona, mientras que la televisión siguió a partir de 1964 un sistema parecido de unas horas a la semana.

Las publicaciones en bretón tienen una frecuencia mensual como máximo y su difusión media se situa sobre los 2.000 ejemplares. Los distintos centros de investigación suelen publicar revistas especializadas siendo la más antigua "Hor Yezh", fundada por el doctor Guy Etienne. La música tradicional ha sido una de las bases para la recuperación de la lengua, juntamente con las compañías de teatro popular. Desde 1959 la asociación Kuzul ar Brezhoneg agrupa todas las instituciones que trabajan en pro del bretón⁶⁹.

La implantación del bretón en el siglo VI afectó la parte occidental de Bretaña, mientras que la parte oriental conservó un dialecto galo-romano, satelizado por el bretón. Según su principal organización, el Bertaeyn Galeizz, lo conocen un millón de personas y lo hablan unas 300.000. La Carta Cultural de 1978 reconoce la existencia del galo-romano como cultura diferenciada, mientras que los bretones lo consideran un dialecto por no disponer ni de gramática, ni de diccionarios

propios. Lo aprenden unos 1.000 escolares y en la universidad de Rennes existe un centro de estudios e investigaciones galas⁷⁰.

2.9.3: Catalana

No existió ningún reconocimiento legal y oficial del catalán hasta la "Ley Deixonne" de 1951, que introdujo su enseñanza en las escuelas. En conexión con el gobierno de la Comunidad Autónoma de Cataluña, las autoridades locales han emprendido en los años 90 programas de normalización, como por ejemplo la introducción progresiva del uso del catalán en el ayuntamiento de Perpiñán.

La vitalidad lingüística del catalán en Francia depende en gran medida de su uso en la Cataluña española. Al margen de ello, a partir de los años 1950 se observó una creciente presión para afianzar y extender su uso en Francia. Así, en 1952 surgió el Grup Rossellonès d'Estudis Catalans, que fue seguido por otros organismos privados, como el Institut Rossellonès d'Estudis Catalans o la Federació de Defensa de la Llengua Catalana (1981).

Las emisoras de radio oficiales emiten algunas horas a la semana en catalán, pero no así las de televisión. Existe alguna emisora privada local con programación íntegramente en esta

lengua, principalmente "Ràdio Arrels".

La "Ley Deixonne" modificó muy poco el panorama educativo del catalán en la Cataluña francesa. En la segunda mitad de los años 1970 apenas unos centenares de niños lo aprendían en las escuelas primarias, que se agruparon en la asociación La Bressola. También se enseñaba unas horas a la semana en las escuelas secundarias con carácter voluntario y escasas facilidades.

Para preparar profesores autóctonos se organizaron por parte de la Junta Assessora d'Ensenyament del Català unos cursos especializados. La Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad de Perpiñán absorbió el Centre Pluridisciplinar d'Estudis Catalans y el Centre Interdisciplinar de Formació, Documentació i Recerca per l'Ensenyament de les Llengues con la misión de formar a los enseñantes.

2.9.4: Corsa

La lengua corsa no goza de ningún reconocimiento oficial, a excepción del genérico de la "Ley Deixonne" de 1951 y de la "Ley Toubon" de 1994 y se halla proscrita de la vida pública. A principios de los años 1970 estas presiones se radicalizaron y se vincularon a otros grupos y partidos de ideología independentista e incluso a organizaciones partidarias de la

violencia. La ley 82-214 de 2 de marzo de 1982, relativa a la organización de esta región y equivalente a un Estatuto de Autonomía, indica escuetamente que ésta tendrá en cuenta "sus peculiaridades como consecuencia especialmente de su geografía y de su historia", mientras que la ley de 30 de julio de 1982 relativa a las competencias regionales consagra un título a "la identidad cultural de la isla". Además, al lado del Parlamento regional y del Consejo Económico y Social, Córcega cuenta con un Consejo Consultivo para la Cultura, la Educación y el Modo de Vida, que incluye la supervisión de los medios audiovisuales.

En mayo de 1991 este Estatuto fue modificado⁷¹ y el nuevo artículo 53.2 permite al Parlamento corso llevar a cabo una política cultural y lingüística de nuevo cuño, especialmente en medios escolares. Este Estatuto no declara la co-oficialidad de la lengua corsa y deja su desarrollo en manos de la presión social a su favor y siempre con la permisividad del Estado. Sin embargo, la menciona en el Capítulo II referente a los medios de comunicación, la cultura y el medio ambiente⁷².

Derivado del toscano de Italia, el corso se divide en cismontano al Noreste de la isla y ultramontano al Suroeste. La descolonización francesa de los años 1960 afectó gravemente a los corsos, que por un lado perdían una salida profesional en la administración y el ejército, y por otro lado tenían que admitir entre ellos a millares de repatriados ("pieds noirs"),

en muchas ocasiones de origen corso. En 1956 los cursos de nacimiento constituían el 96% de la población de la isla, mientras que el 1983 apenas llegaban al 50%. Ello motivó el resurgimiento de una conciencia de minoría etno-lingüística a partir de 1962, movimiento que desde 1965 adoptó métodos terroristas. La fuerte expansión turística que experimenta la isla desde los años 60 ha contribuido también en gran medida a afrancesar a la población corso-parlante.

Sin embargo, los factores citados, sumados a otros como la larga experiencia histórica de resistencia o el renacimiento literario de finales del siglo XIX y principios del XX, hicieron que los intentos para la recuperación de la lengua corsa fueran muy tempranos, finales de la década de 1950, en comparación con otras lenguas minoritarias europeas.

En 1957 se fundó el *Centru di Studi Regionali Corsi*, que organizó cursos de esta lengua y otras actividades de promoción. Posteriormente surgieron otras asociaciones con la misma finalidad: la *Scola Corsa* (1960-72), la *Associu di l'Insegnanti Corsi* (1976), la *Scola Aperta* (desde 1977), o *Lingua Corsa* (1980). Todas ellas promocionan estudios y leyes, sensibilizan a la opinión pública y actúan en el terreno de la enseñanza. Hay asimismo asociaciones científicas que realizan investigaciones sobre la lengua, como es el caso de la *Association des Chercheurs en Sciences Humaines* (1971-73). La Iglesia local se halla fuertemente afrancesada, y sólo utiliza

la lengua corsa para acontecimientos locales, como pueden ser ferias o fiestas populares.

El fracaso de la prensa diaria completamente en lengua corsa, como el diario "Rigiru", reduce la prensa a las ediciones bilingües de algunos periódicos, principalmente a la edición local del "Nice matin" desde hace más de 50 años. Se publican varias revistas mensuales como "Kyrn", así como publicaciones distintas de los partidos nacionalistas como "Populu Corsu". Las emisoras de radio y televisión emiten algunas horas semanales en esta lengua programas culturales e informativos.

Los primeros intentos para introducir la enseñanza del corso en las escuelas datan de 1968, al amparo de la "Ley Deixonne". Sin embargo, no fructificaron hasta 1974, año en que la lengua corsa entró en las escuelas secundarias tres horas a la semana como asignatura autónoma, aunque la realidad era aún más modesta: una hora a la semana voluntaria y sólo en las escuelas primarias. La introducción del corso fué más rápida en algunas escuelas privadas, tanto en el nivel elemental como secundario. La asociación Scola Corsa ha promocionado cursos para adultos, textos para escolares y cursos de formación para profesores. Existen secciones de lengua y literatura y de cultura corsas en las universidades de Corte (desde 1975), Niza y París III.

2.9.5: Alsaciana

Al igual que el resto de las lenguas regionales, el alsaciano no goza de ningún reconocimiento oficial, a pesar de haber sido reivindicado con frecuencia y habitualmente junto a una mayor autonomía administrativa. Alsacia obtuvo en junio de 1976 la primera Carta Cultural Regional que la consagró como "región piloto" por su fuerte actividad cultural, su bilingüismo y por su estratégico papel en el entramado europeo.

Entre 1968 y 1982 surgieron en Alsacia distintas asociaciones para detener el proceso de afrancesamiento de la población y proteger el alsaciano. Se trata del Cercle Renes Schickele, el APCA, el EMA, el Unsri Gerachtigkeit o la Unsri Causa Nostra. El principal organismo para la defensa del bilingüismo es el Office Régional du Bilinguisme o Regionalam für die Zweisprachigkeit.

La presión combinada de estas entidades no ha evitado que el alsaciano siga estando prácticamente proscrito de la vida pública (la toponimia, por ejemplo), excepto en épocas electorales o en las fiestas locales. El idioma francés domina en la liturgia de la Iglesia Católica y el alsaciano en la protestante, aunque se observa cierta tendencia hacia el bilingüismo. Algunos tribunales locales permiten

extraoficialmente su uso. El alsaciano es ampliamente utilizado por las compañías de teatro nacionales y hay una fuerte tradición musical en esta lengua.

Por una ley de 1945 la prensa alsaciana debe publicar como mínimo el 25 % de sus textos en francés. Por esta razón, la prensa regional como los periódicos "Dernières Nouvelles d'Alsace" o "l'Alsace" tiran ediciones bilingües, mientras que otros como "Le Nouvelle Alsacienne" ha optado por ediciones separadas en alsaciano y francés. La prensa alemana y suiza tiene una amplia difusión en esta región. Existen varias revistas mensuales de poca tirada, unos 8.000 ejemplares por número. La radio y la televisión públicas reservan algunas horas a la semana para programas en lengua alsaciana, pero predomina la escucha de emisoras alemanas, suizas y luxemburguesas.

En 1927 el decreto "Poincaré-Pfister" permitió que el alsaciano se enseñara a partir de la segunda mitad del segundo curso de escolaridad, pero se exigía el conocimiento del francés a los germáfonos. Después de la II Guerra Mundial se prohibió su enseñanza, excepto como lengua extranjera.

La "Ley Deixonne" (1951) hizo posible que se enseñara obligatoriamente el alsaciano dos horas a la semana, aunque se ha debatido mucho si debe enseñarse el dialecto alsaciano o el alemán standard, que por lo demás es el usado en el lenguaje

escrito. Desde 1972 se convirtió en una materia facultativa y autónoma en las escuelas elementales, pero en 1985 surgieron escuelas maternas en las que se enseñaba el alsaciano, dependiendo de la voluntad de los maestros. En las secundarias se enseñaba entre 3 y 5 horas a la semana en cada curso. Los libros de texto proceden de editoriales alsacianas y los padres podían pedir cursos enteros en esta lengua. Desde 1970 se organizan cursos de alsaciano para adultos en Estrasburgo y Mulhouse, pero la asistencia no es muy alta.

La enseñanza bilingüe experimentó un incremento a partir de 1991 a remolque de las declaraciones europeas y gracias a una subvención de 60.000 ecus concedida por el Consejo de Europa, ayuda que contrasta con la nula recibida desde la Administración Central. De este modo en 1995 se habían conseguido 43 escuelas públicas bilingües, además de otras 12 escuelas asociadas y 8 más confesionales⁷³.

2.9.6: Occitana

Al igual que el resto de lenguas minoritarias en Francia, el occitano no goza de ningún reconocimiento oficial y se halla desterrado de la vida pública. También aquí la lucha a favor de la normalización lingüística suele ir pareja a la que reclama una autonomía regional político-administrativa.

El renacimiento literario del occitano del siglo XIX conoció un nuevo impulso después de 1945 y otro aún después de 1970. Según el Centro Internacional de Documentación Occitana de Veziers, creado en 1975, de las 30.000 publicaciones conservadas en esta lengua, unas 3.000 corresponden al período de la postguerra. Por esta razón, el occitano se hallaba ya en proceso de recuperación cuando las instituciones europeas empezaron a ocuparse a fondo de la protección a las minorías lingüísticas.

También el teatro ha experimentado un notable auge con al menos 3 compañías profesionales en los años 1980. Se registran otras manifestaciones culturales como cine o canción, que también han servido de vehículo para la normalización de esta lengua. Incluso se ha recuperado para ciertos actos litúrgicos de la Iglesia Católica.

Esta reactivación fue posible por el surgimiento de grupos y asociaciones de apoyo y fomento del occitano como el Institut d'Estudis Occitans (1945), El Parti Nationaliste Occitan, el Comitat Occitan d'Estudis d'Accion, la Lutte Occitane, Obradors y sobre todo el movimiento "Felibrige", fundado en 1854 por un conjunto de literatos occitanos entre ellos F. Mistral. Este movimiento, sin embargo, ha sido criticado como excesivamente nostálgico de las glorias medievales, polémica que se entrecruza con muchas otras sobre el alcance de las reivindicaciones lingüísticas y su instrumentación política.

Existen numerosas publicaciones en occitano, aunque todas ellas de tirada escasa como "Dire", "Pere Noste", "La Bugada", "Lo Revelh d'Oc", "Vivarès", "Terra Occitana", "Lucha Occitana", "Front Occitan", "Pobla d'Oc", "Obradors", "Occitan", "Vivre a l'Escola", "Lo Gai Saber", etc. Hay asimismo revistas de asociaciones culturales y especializadas como "Les Annales", "Aici et ara er la talvera", "Oc", "L'Occitan", etc.

Todas las cadenas de radio y televisión emiten algunas horas a la semana en occitano desde Burdeos, Tolosa, Montpellier, Aix, Pau o Marsella. El 25 de septiembre de 1981 la cadena estatal de TV "France 3" retransmitió su primer programa en lengua occitana tras arduas presiones del Institut d'Estudis Occitanes iniciadas en 1977. Se empezó con 15 minutos semanales, que pasaron a 20 minutos en 1984 y se acrecentaron en 1989.

Escolarmente el occitano ha recuperado cierto terreno en las ciudades, hecho que contrasta con su retroceso en las zonas rurales. Amparándose en una circular del Ministerio de Instrucción Pública de 1982⁷⁴, que recomienda la enseñanza de las lenguas regionales en sus territorios respectivas, numerosos estudiantes la eligen como segunda lengua en la enseñanza secundaria. En las escuelas maternas públicas apenas se utiliza, pero existe una red privada, las "calandretas" que la usan en mayor o menos grado. Desde 1951 se

enseña en las escuelas elementales, aunque siempre con carácter autónomo y dependiendo de la iniciativa de padres y profesores. En las escuelas secundarias se enseña asimismo entre 1 y 3 horas a la semana. Se editan libros de texto en occitano. Por último, se organizan cursos para adultos, cursos de verano y cursos de preparación de profesores. En 1992 apareció un completo diccionario francés-occitano de 112.000 voces, en el que colaboraron 600 autores⁷⁵.

2.9.7: Flamenca

El flamenco no goza de ningún reconocimiento legal ni está regulado su uso en la vida pública. Sin embargo, prácticamente desde su anexión a Francia, los flamencos han solicitado la legalización de su lengua.

El flamenco francés ha proporcionado escritores de talla a la literatura en esta lengua, como Michael de Swaen. Existe también una pequeña tradición teatral y musical en la región, que se ha intensificado a partir de 1945. Posteriormente a 1971 se fueron creando asociaciones de defensa y promoción de la lengua flamenca: **Cercle Michael de Swaen**, **Het Reucekoor** (1978), **Menschen lyk Wyder** (1979), **Tegaere Toegaen** (1981). El **Comité Flamande de France** publica desde 1853 estudios científicos sobre este idioma. La Iglesia ha abandonado prácticamente su

uso, excepto para algunas festividades concretas. Se registran algunas publicaciones periódicas bilingües como la "Revue de l'Hautland", de escasa tirada. Desde 1979 algunas emisoras de radio locales emiten programas en flamenco, unas horas a la semana.

El flamenco se enseña en las escuelas como lengua optativa, 3 horas a la semana en las escuelas secundarias. Desde 1980 se puede pedir su enseñanza en las escuelas maternas y elementales. Existen libros de texto en flamenco, cursos para adultos y cursos para profesores de esta lengua.

2.10: GRAN BRETAÑA

<u>Minorías lingüísticas</u>	<u>Regiones</u>	<u>Población hablante</u>
Escocesa	Escocia	80.000
Galesa	País de Gales	500.000
Gaélica	Irlanda del N.	100.000
Córnica	Cornualles	1.000

2.10.1: Escocesa

El idioma escocés sólo ha sido reconocido oficialmente en la ley escolar de 1980, que obliga a las autoridades a tomar medidas favorables al uso y enseñanza de esta lengua minoritaria en las comarcas gaélicoparlantes. Fuera de este ámbito no tiene ningún reconocimiento público, aunque en algunas comunas se promueve a los funcionarios que la conocen.

El **Western Isles Council** ha ido estableciendo un bilingüismo real, que sus habitantes quieren que sea reconocido legalmente. Ciertas instituciones, como el **Highland Regional Council** han hecho avanzar el uso del gaélico en determinadas actividades públicas como correos, avisos municipales, carteles e incluso publicidad.

En 1955 para las escuelas secundarias y el 1965 para las primarias se cursaron las primeras instrucciones destinadas a fomentar la enseñanza bilingüe. El **Scottish Education Department** y el **Western Isles Council**, formando el **Bilingual Curriculum Development Unit** fueron los protagonistas de esta reacción. Se trataba de seguir el modelo implantado en el País de Gales, es decir convertir la escuela en el principal valladar para evitar la desaparición total del escocés.

La tendencia recesiva del escocés se invirtió a partir de los años 60 gracias al resurgimiento del nacionalismo escocés,

que exigió a los sucesivos gobiernos centrales un mejor trato a esta lengua. Así, los 81.000 gaélicoparlantes de 1961 se habían convertido en 89.000 en 1971. Con todo, el único ámbito público con un uso regular del escocés era la Iglesia de Escocia y la Iglesia Presbiteriana Libre, convertidas ambas en los auténticos bastiones de esta lengua minoritaria.

Sin embargo, la enseñanza del escocés no se activó realmente hasta la citada ley de 1980 sobre la enseñanza en Escocia, que obliga a tomar medidas para su aprendizaje, ha sido aplicada habitualmente como una simple asignatura obligatoria en las áreas gaélicoparlantes en lugar de promocionar su uso social en toda Escocia.

En las zonas bilingües la presencia escolar del gaélico era mucho más intensa, especialmente en las islas Hébridas y en Skye, y el **Western Islan Council** intentó a partir de 1981 establecer una educación bilingüe, que no contó con el apoyo del gobierno Central. En las zonas anglófonas la enseñanza del gaélico es muy irregular y en todo caso no es obligatoria en la enseñanza secundaria.

Desde 1883 las universidades de Edimburgo, Glasgow y Aberdeen dan cursos de lengua gaélica en el marco de los estudios celtas en general. La asociación **Comhairle nan**

Sgoiltean Araich se dedica a desarrollar la formación preescolar a través de los "Play groups". Sólo el Instituto **Jordanhill** de Glasgow da cursos completos de gaélico para enseñantes pero resulta relativamente fácil encontrar cursos de perfeccionamiento. Las escuelas de profesorado escolar enseñan el escocés como materia optativa y los profesores de esta lengua en las escuelas secundarias deben poseer título universitario.

El instituto **Sabhal Mor Ostaig**, fundado en 1973, da cursos de dirección y gestión de empresas en gaélico y forma profesionales para las comunidades gaélicoparlantes rurales. En 1991 formó más de 300 alumnos, y recibió un fuerte impulso. También ha promocionado los estudios para modernizar el lenguaje y adaptarlo a las técnicas más modernas. Existen también algunos cursos para adultos a cargo del **Ancomann Gaidheabach** de Skye, con frecuencia sufragados por las instituciones oficiales.

Existen varias emisoras de radio, como Radio Escocia, que emiten en esta lengua y las propias de la BBC y de Televisión privada dan unas horas en gaélico con financiación pública. Tampoco hay cadenas de televisión que emitan sólo en escocés. Las cadenas públicas como la BBC o las privadas, como la de "Monts Granpians", emiten unas horas a la semana, que no suelen pasar de 10. Naturalmente la televisión se ha revelado como uno de los más poderosos instrumentos de anglicización de la

región.

Hay una publicación mensual "The Guisgean" con artículos en gaélico y otras trimestrales. Escocia cuenta con una fuerte tradición literaria, con unos 300 títulos cada año, especialmente para niños. También es notable su folklóre musical e instrumental, así como su producción teatral, que combina sucesivas piezas clásicas. Hasta 1986 no existió un diccionario gaélico solo, ni una biblioteca exclusiva para libros en escocés.

Varias instituciones como la Ancomann Gaidgealach (1891), la Gaelic Society of Inverness (1872), la Gaelic Books Council (1968), la Scottish Gaelic Texts Society (1934), la Gaelic Parliamentary Group o la Comhairle nan Sgoiltean Araich (1892), fomentan el uso del idioma, impulsan investigaciones y publican distintos boletines y revistas especializadas⁷⁶.

2.10.2: Galesa

Desde finales del siglo XIX se llevaron a cabo presiones de todo tipo para lograr el reconocimiento oficial del galés. Lo único conseguido fue la "Welsh Court Act" de 1942, que entre otras cosas permitió el uso del galés en la administración y los tribunales locales. Gracias a las acciones emprendidas en los años 1960 por el Cymdeithas yr Laith Gymraeg (Unión

Lingüística Galesa) se procedió a la sustitución de un gran número de indicaciones toponímicas en inglés por un sistema de señalización bilingüe, pero no hubo ninguna otra iniciativa oficial hasta 1964 con la "Elections (Welsh Forms) Act".

En 1965 el informe Hugues-Parry recomendó el uso del galés en la administración regional en paridad con el inglés, iniciativa admitida en 1967 gracias a la "Welsh Language Act"⁷⁷. Los objetivos de esta ley fueron mucho más limitados que los recomendados por el citado informe. De hecho, sólo otorgó a los testigos en los juicios el derecho a usar el inglés, y autorizó a los ministros a prescribir versiones galesas de documentos reglamentados, con el mismo rango y validez que las versiones inglesas⁷⁸.

En cualquier caso, la acción persistente de ciertos grupos y partidos nacionalistas, como el **Plaid Cymru**, amplió la presencia de esta lengua en distintos servicios administrativos públicos, como correos, o privados, como la publicidad y la banca, y eclesiásticos.

Este conjunto de leyes situó a la lengua galesa en una relativa buena posición en comparación con las otras lenguas minoritarias, cuando Gran Bretaña entró en la CEE y las instituciones europeas empezaron a dictar normas sobre las lenguas no de Estado. A su vez, el galés constituyó uno de los

más sólidos puntos de referencia para los parlamentarios del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa.

En febrero de 1991 una Comisión para la Lengua Galesa (*Bwrdd ya Iaith Gymraeg*) constató el fracaso de la ley de 1967, por lo que en diciembre de 1992 el Parlamento británico emitió la "Welsh Language Bill"⁷⁹ con el fin de darle un trato de igualdad al galés y proporcionar un rango legal, unas competencias y un presupuesto al Welsh Language Board. El Welsh Office, dependiente del Secretario de Estado para Gales, es el órgano público encargado, entre otras cosas, de velar por la lengua y la cultura galesas.

Las recomendaciones contenidas en un informe de 1927 realizado por el Comité Departamental sobre el uso del galés en los sistemas escolares del País de Gales, fueron el punto de partida para la regulación de esta lengua en la enseñanza. Dichas recomendaciones establecían que el inglés y el galés son lenguas usadas corrientemente en la región y que en consecuencia debe respetarse el principio de la educación en la lengua materna en los primeros años escolares, debiendo de aprenderse la segunda progresivamente.

Sin embargo, la traducción a la realidad de este principio no fue inmediata. En 1948 se constituyó el Welsh Joint Education Committee que hasta 1966 no publicó libros escolares

en galés. En 1968 la **National Language Unit** volvió a dar un fuerte impulso al desarrollo del bilingüismo. El **Welsh Nursery Movement-Mudiad Ysgolion Meithrin** fundado en 1971 significó un éxito resonante para la defensa del galés en la infancia y consiguió fuertes subvenciones del **Welsh Office**. En 1983 había unas 400 guarderías adscritas a esta organización.

En la red de escuelas primarias se alternan las tradicionales, generalmente en zonas rurales, que usan el galés como lengua vehicular, las escuelas galesas o **Ysaoglion Cymraeg** fundadas a partir de 1947 que usan el galés como lengua vehicular, pero enseñando progresivamente el inglés; las escuelas inglesas tradicionales con enseñanza bilingüe desde 1969; y las escuelas inglesas en las que se enseña el galés sólo como asignatura. A finales de 1993 se calculaba que un 25% de los escolares galeses recibía su educación en un sistema bilingüe.

La enseñanza bilingüe está mucho menos extendida en el nivel secundario. En los condados de Flintshire y de Glamorgan se iniciaron programas con el inglés como lengua vehicular a partir de 1956. En 1978 había 12 escuelas con este régimen y en 1985 el número de escolares secundarios con enseñanza bilingüe no pasaba del 3%. En cambio, muchas escuelas tienen el galés como asignatura obligatoria o como segunda lengua. Los cinco "Colleges" de la Universidad del País de Gales (**Prifysgol Cymru**) organizan cursos con diploma final de lengua y

literatura galesas y en varias otras universidades se ofrecen cursos para enseñantes. En los años 80 aumentó también el número de cursos para adultos especialmente para los no gaelicoparlantes, así como de los cursos de verano. Se han editado cursos audiovisuales y desde 1992 cursos especializados para empresarios ("Menter a Busnes"), financiados en gran parte por el Development Board for Rural Wales and the Welsh Development Agency. Los libros infantiles y juveniles oscilan sobre los 200 títulos anuales y la tirada ha doblado de 1.000 a 2.000 ejemplares en los años 1990.

"Radio Cymru", fundada en 1978, emite una programación bilingüe con cierto predominio del galés. El resto de emisoras regionales emiten un número variado de horas en galés. Tras una campaña popular promovida por el Cymdeithas yr Iaith Cymraeg, a partir de 1982 el "Sianel Pedwar Cymru", canal semipúblico de televisión fue el único con programación monolingüe. Desde 1962 la "BBC-Wales" emitía 11 horas a la semana en galés y 6 en inglés y a mediados de los años 1970 la "Harlech Television" empezó a emitir 6 horas semanales en galés y 3 en inglés⁸⁰.

Existen dos semanarios en galés, siendo el más importante "Y Cimru", una publicación mensual, y una semestral, "An Briathar Saor", destinada a establecer contactos con los gaélicoparlantes de todo el Reino Unido, así como otros boletines y periódicos de ámbito profesional. La prensa diaria es en inglés con muy poco espacio reservado al galés. Las

publicaciones en galés están todas subvencionadas. Se publican unos cuatrocientos títulos al año.

Los progresos experimentados ultimamente por el galés no pueden ocultar la especial complejidad en la que vive. Según Janet Davies, "para mucha gente de Gales, el galés es la esencia de su identidad. No obstante, para la mayoría de galeses, el idioma galés tiene una repercusión mínima en su vida cotidiana"⁸¹.

Los censos efectuados prácticamente cada 10 años desde 1891 indican que en términos absolutos y porcentuales la población gaélicohablante ha ido disminuyendo:

1891,	880.000	gaélico-parlantes,	54%	de la población total
1901,	929.000	"	, 50%	"
1911,	977.400	"	, 43%	"
1921,	922.000	"	, 37%	"
1931,	909.300	"	, 37%	"
1951,	714.686	"	, 29%	"
1961,	656.002	"	, 26%	"
1971,	542.402	"	, 20%	"
1981,	503.549	"		
1991,	496.530	"	, 19%	"

2.10.3: Córnica

En 1967 se fundó el Kesva and Tavas Kernewek (Cornish Language Board) con el objeto de enseñar y promover la enseñanza de esta lengua, que después de desaparecer hacia 1800, conoció un pequeño renacimiento durante el primer tercio del siglo XX. Entre esta fecha y 1985 se pasó de 5 a 24 cursos. Así surgieron nuevas asociaciones como la Cowethas an Yeth Kernewek o la Dalleth tanto para córnico-parlantes como para escolares.

Ultimamente se han vuelto a celebrar cultos religiosos en esta lengua y ha renacido parcialmente la actividad musical folklórica. Algunas escuelas empiezan a incluir el córnico como lengua alternativa en sus programas, e incluso en algunos parvularios financiados por los padres es usado como lengua de relación. En esta recuperación ha influido también el restablecimiento de los contactos con otras lenguas celtas vivas. Pese a su mínima implantación el córnico ha sido citado como ejemplo de recuperación de una lengua minoritaria, cuando dispone de apoyos públicos y de un mínimo consenso social.

2.10.4: Gaélica

En los seis condados de Irlanda del Norte (Ulster) existen núcleos familiares que utilizan la lengua gaélica, pero no hay

ninguna zona que la conserve viva. En 1985 algunas escuelas católicas la enseñaban y una escuela elemental de Belfast daba toda su enseñanza en esta lengua, sin subvención estatal, al contrario de lo que sucedía con otra de Derry que sí recibía fondos públicos. La "Queen's University" de Belfast y la "New University of Ulster de Coleraine" ofrecen cursos de gaélico, así como algunos institutos católicos para la formación de maestros. El tratado anglo-irlandés de 1985 habla de la cooperación cultural en su artículo 10.b), pero no menciona el idioma irlandés común a las dos Irlandas⁸².

El gaélico en Irlanda del Norte ha quedado reducido en la práctica a una lengua culta, que se estudia en círculos muy restringidos. Su futuro se halla claramente relacionado con la evolución que experimente el gaélico en la República de Irlanda, mucho más protegido y con un mayor soporte social.

En la Isla de Man, que goza de un régimen de autonomía muy amplio y que no forma parte de la Unión Europea, se habla una variedad del gaélico. Según el censo de 1991, 643 personas lo hablaban, 479 lo leían y 343 lo escribían. El gaélico en la Isla de Man se perdió y al parecer en 1874 murió el último nativo que lo usaba como lengua materna. Sin embargo, por estas fechas un grupo de clérigos lo revivió y modernizó su gramática.

El renacimiento del gaélico hizo que el Parlamento local lo declarara lengua oficial y que en enero de 1992 se tomaran algunas medidas para su extensión en las escuelas de la Isla y en la vida pública y privada. También nombró un comisario para asuntos lingüísticos, Brian Stowell. No hay libros de texto, pero el nuevo Instituto de Estudios Manenses trabaja por normalizar la enseñanza y establecer convenios con la Universidad de Liverpool. La única emisora de radio en lengua gaélica desapareció a principios de los años 1990, pero a cambio una ley local reguló el uso de esta lengua en los medios de comunicación⁸³.

2.11: GRECIA

<u>Minorías lingüísticas</u>	<u>Regiones</u>	<u>Población hablante</u>
Turca	Tracia Occ.	92.000
Pomaka	Tracia Occ.	27.000
Eslavo-		
macedonia	Macedonia	40.000
Aroumana	Tesalia	
	Epiro	
	Pindo	200.000
Arbanita		400.000

2.11.1: Turca

La legislación interna griega no reconoce la existencia de una minoría propiamente turca, por lo que esta lengua no tiene presencia en la vida pública. Sólo el Tratado de Lausana de 1923 garantiza los derechos del colectivo calificado como "musulmán". Dado que los derechos de esta minoría están regulados por un Tratado internacional, sus miembros apenas se han beneficiado de la nueva política lingüística europea, pese a que Grecia es miembro de la UE y del Consejo de Europa.

Los turcos de Grecia conservan sus propias instituciones religiosas, así como dos centenares de mezquitas (centros de culto y educativos a la vez) y 7 muftís. Estas autoridades religiosas intervienen no sólo en asuntos religiosos, sino que actúan también como jueces en distintos asuntos civiles, como por ejemplo acuerdos matrimoniales. La lengua usada en todas estas actividades es el turco. En cada población existe, además, una *awgafs*, asociaciones cooperativas que se ocupan del sostenimiento económico del culto, de las escuelas y de las distintas labores de beneficencia.

Las escuelas reciben ayuda gubernamental y utilizan la lengua turca como lengua de enseñanza, pero tienen el griego como lengua obligatoriamente enseñada. Las autoridades y los funcionarios de la región son siempre griegos, lo cual no obsta para que la comunidad turca tenga derecho a dos representantes

en el parlamento griego. En general, griegos y turcos mantienen relaciones muy poco conflictivas, pero sin mezclarse, especialmente a través de matrimonios mixtos. Se trata, pues, de dos comunidades claramente diferenciadas por sus tradiciones, sus costumbres, su religión y su lengua. El aislamiento y la presión greco-ortodoxa han hecho que la minoría turca tenga un grado de práctica religiosa superior al de Turquía, por otra parte su referencia y modelo cultural.

De todos modos, los turcos suelen considerarse discriminados por las autoridades locales y nacionales y han denunciado continuamente trabas a sus actividades culturales y religiosas. Por ejemplo, advierten del escaso nivel de sus escuelas, de la dificultad para conseguir maestros propios, para acceder a la enseñanza superior, y de que se les obligue a adoptar la lengua y la cultura griega para convertirse en funcionarios o profesionales, renunciando a sus señas de identidad. Esta situación suele agudizarse en los momentos de tensión entre Grecia y Turquía. Según Ahmet Ersoy, un portavoz diplomático turco, los turcos en Grecia no pueden comprar tierras, reparar sus viviendas o emprender negocios y necesitan salvoconductos para salir o entrar en sus pueblos. Tampoco pueden elegir sus autoridades religiosas, ni contratar profesores en Turquía⁸⁴.

Los griegos responden a estas denuncias con argumentos frecuentemente emotivos y nacionalistas, señalando que la minoría griega en Estambul se ha reducido de 120.000 personas

a 20.000 por culpa de las violaciones turcas del Tratado de Lausana⁸⁵.

2.11.2: Pomaka

Para el gobierno griego los pomakos forman parte de la minoría musulmana protegida por el Tratado de Lausana sin distinguirlos de los turcos. Por el contrario, Bulgaria sostiene que el pomako es un dialecto búlgaro y ha propiciado una política de asimilación de esta minoría, lo cual ha motivado no sólo numerosos incidentes entre Sofía y Atenas, sino la emigración de una parte de los pomakos hacia Turquía.

En la práctica los pomakos viven mezclados con los turcos, aunque mantienen una lengua y una tradición cultural e histórica propias. La lengua es actualmente su principal lazo de cohesión, pero en cualquier caso su uso es estrictamente familiar y coloquial, sin ningún reflejo en la vida pública. En consecuencia, los pomakos se ven obligados a aprender el griego como lengua oficial y pública, el turco como lengua de la minoría mayoritaria en la que se desenvuelven y en tercer lugar la suya propia⁸⁶.

2.11.3: Macedonia

Severamente perseguidos después de la II Guerra Mundial, los macedonios no fueron reconocidos por la legislación griega a ningún nivel, por lo que no existe dicha lengua en la vida pública. A pesar de ello, en 1952 fundaron la entidad cultural Ilinden y la editorial Nueva Grecia para dar a conocer la lengua y la cultura macedonias y en 1963 apareció la revista "Makedonski Zivot". En 1990 una delegación yugoslava informó a la Comisión de Derechos Humanos de la Conferencia de Seguridad y Cooperación Europea sobre la situación de los macedonios en Grecia y Bulgaria⁸⁷. En mayo de 1993 todavía un tribunal de primera instancia condenó a dos macedonios, Christos Sidorópoulos y Tassos Boulis, por declararse griegos eslavófonos en la revista "Ena". Se trata, por lo tanto, de un idioma reducido a la vida familiar y coloquial y en franco retroceso⁸⁸.

El desmoronamiento de la República Federal Yugoslava en 1990-91 agudizó aún más el problema, al surgir una República de Macedonia independiente, cuyo reconocimiento internacional obstaculizó el gobierno griego hasta septiembre de 1995 con el argumento de que la única Macedonia existente era la región incluida en la República de Grecia⁸⁹.

2.11.4: Aroumana

La lengua aroumana no goza de ningún reconocimiento legal, por lo que su uso está excluido de la vida pública y reducido a la vida familiar y coloquial. La educación, la Iglesia y los medios de comunicación utilizan exclusivamente el griego. Su precaria situación legal motivó que el 30 de mayo de 1994, 13 miembros de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa⁹⁰ presentaran una propuesta de directiva, denunciando "los problemas" con los que tropieza la comunidad aroumana "para preservar sus derechos especialmente en el plano étnico, cultural y lingüístico". Al mismo tiempo que recordaban que esta minoría está repartida entre varios Estados balcánicos, algunos de los cuales son miembros del Consejo de Europa, pedían que los derechos fundamentales de la población aroumana, la cual debe ser reconocida como una minoría étnica, sean protegidos. En su cuarto punto el proyecto de directiva solicitaba que la Asamblea elabore un informe "sobre la situación particular de la comunidad aroumana"⁹¹.

Los aroumanos conservaron su identidad frente a turcos, eslavos y griegos gracias a su aislamiento en la zona montañosa de la Península helénica, donde se dedicaron sobre todo al pastoreo. Aunque los expertos temen por su pronta desaparición, también han observado una clara recuperación de su conciencia como minoría, alentada por algunos núcleos emigrantes que han conseguido abrirse camino en la sociedad griega. Entre estos

núcleos han formado algunas asociaciones que han logrado publicar algún boletín e incluso celebrar algún congreso dedicado a la promoción de la lengua aroumana⁹².

2.11.5: Arbanita

De igual modo que las otras minorías lingüísticas griegas, los arbanitas no gozan de ningún reconocimiento legal, por lo que esta lengua se reduce a la vida privada y coloquial.

Posiblemente es la minoría lingüística griega peor conocida, a pesar de que se consideran los primeros habitantes de Grecia y por lo tanto se identifican como griegos. Su aislamiento ha permitido probablemente la conservación de su lengua, pero la presión del griego en las escuelas, los medios de comunicación y la Iglesia han puesto en peligro su futuro⁹³.

2.12: IRLANDA

<u>Minorías lingüísticas</u>	<u>Regiones</u>	<u>Población hablante</u>
Gaélica	Rpba. Irlanda	1.100.000

2.12.1: Gaélica o Irlandesa:

La Constitución irlandesa declara al idioma irlandés como "Lengua nacional y primera lengua oficial", y las leyes sectoriales suelen regular su uso en las instituciones del Estado, en la administración, en el ejército, en la policía, en la enseñanza, etc. La ley establece también la utilización de esta lengua en la toponimia, en los rótulos y avisos, etc. En general, se requieren unos conocimientos mínimos del gaélico para cumplir los requisitos que exigen las leyes, ya que en los últimos años se ha observado un relajamiento muy notable en la aplicación de la normativa bilingüe. La Iglesia Católica y la Iglesia de Irlanda hacen un uso muy variado del irlandés, dependiendo de las orientaciones de cada obispo y de la situación lingüística de cada zona.

Después de la creación del Estado Libre de Irlanda la enseñanza se convirtió en el instrumento básico para la normalización del irlandés. Fue inmediatamente declarado obligatorio tanto para la escuela primaria pública como para la secundaria, y ya lo era para acceder a la universidad. Por esta razón, en los años 1930-40 aumentaron las escuelas irlandofónas fuera del *Gaeltacht*⁹⁴, mientras que en los años 1950 se observó una disminución, especialmente en el nivel secundario. La introducción de la gratuidad en la enseñanza frenó aún más la demanda de plazas en las escuelas gaélicas.

La **An Comchoiste Réamhscolaíochta** promocionó la creación de guarderías infantiles irlandófonas con la ayuda de fondos públicos. Entre 1978 y 1982 se pasó de 22 a 109 escuelas (34 de ellas en el **Gaeltacht** con el propósito de llegar a las 160-170 en 1986). En 1980 se contabilizaron 161 escuelas gaélicas de las cuales 133 estaban en el **Gaeltacht** y 28 en el exterior. Hay que distinguir entre las escuelas donde el irlandés es la única lengua de relación y aquéllas donde lo principal de las actividades se hace en inglés, pero donde varias clases trabajan progresivamente en irlandés, y las escuelas secundarias donde una o varias materias se imparten en irlandés a todos los alumnos. En cualquier caso, en todas la escuelas elementales y secundarias el irlandés es enseñado como una asignatura obligatoria, pero desde 1973 no es indispensable aprobarla para obtener el diploma intermedio o al final.

Según el informe "Irish in Education" del **Comhairle Gaeilge** en 1974 14 condados no disponían aún de escuelas en lengua irlandesa, cuya extensión era considerada imprescindible para la normalización de la lengua.

Existen abundantes libros de texto en irlandés y todos los **University Colleges** disponen de cátedras de gaélico y algunos cursos son dados incluso en este idioma. Se dan clases de postgraduados en periodismo y se usa ampliamente en las academias militares y en distintos institutos técnicos regionales. Los profesores de las escuelas primarias deben

dominar el gaélico y los de las escuelas secundarias tienen que pasar una prueba oral específica, si no disponen de otros títulos que acrediten su conocimiento general del irlandés. Hay cursos de todo género para adultos y también intensivos, otros para principiantes, otros para no gaélicos y otros para mejorar el nivel.

La "Radio na Gaeltachta", emisora pública creada en 1972, emite programas de todo tipo en irlandés durante varias horas al día. Las otras emisoras nacionales destinan menos tiempo y espacio al gaélico. Las cadenas estatales de televisión RTE 1 y 2, dedican unas 100 horas a la semana en total al gaélico, sin embargo, el **Conradh na Gaeilge** defiende que la presencia del irlandés en la televisión debería ser más proporcional a su uso social, alcanzando un mínimo del 20% de los programas nacionales. Se publican dos semanarios, el "Comhar" y el "Inniu", varias revistas mensuales, otra bimensual y dos trimestrales en irlandés, aparte de otras publicaciones especializadas como la "Timire an Chróí Naofa", fundada en 1911 por la Iglesia Católica. Abundan también los boletines de ámbito local o universitario. Los periódicos "Irish Press" y "Irish Times" son publicados en inglés, pero con frecuentes artículos en gaélico. Se publican unos 80 libros al año de los que 25 corresponden a literatura juvenil e infantil, con un bajo número de ejemplares, excepto los escolares.

Irlanda dispone de una gran tradición folklórica y musical, recuperada en gran parte, y que constituye uno de los elementos más dinámicos de la normalización del gaélico.

2.13: ITALIA⁹⁵

<u>Minorías lingüísticas</u>	<u>Regiones</u>	<u>Población hablante</u>
Albanesa	Abruzos	80.000
	Campania	
	Calabria	
	Basilicata	
	Apulia	
	Sicilia	
	Molise	
Alemana	Trentino/	300.000
	Alto Adigio	
Catalana	Cerdeña	20.000
Croata	Molise	2.200
Francesa	Valle de Aosta	10.300
	Piamonte	
Franco-Provenzal		24.850

Friulana	Friul/ Venecia Julia	625.000
Griega	Apulia Calabria	12.500
Ladina	Prov. Trento/ Belluno/Bolzano	27.500
Occitana	Piamonte Liguria Calabria	50.000
Sarda	Cerdeña	158.600
Eslovena	Friul/ Venecia Julia Prov: Udine Gorizia Trieste	52.170

2.13.1: Albanesa

El Estatuto de la Región Basilicata de 1971 sostiene en su artículo 5º que "en particular, la Región, en el ámbito de sus competencias constitucionales,... favorece la revalorización del original patrimonio lingüístico, de costumbres de las que son portadores las comunidades locales"⁹⁶. También el Estatuto de la Región de Calabria afirma en su artículo 56.5) que entre sus competencias está el "promover el reconocimiento del patrimonio histórico-cultural y artístico de las poblaciones de origen albanés y griego; favorece la enseñanza de las dos lenguas en donde ellas se hablan"⁹⁷.

Igual principio instaaura el artículo 4º del Estatuto de la Región de Molise⁹⁸. En la Arbería no goza de ningún reconocimiento oficial y no se halla presente en ningún aspecto de la vida pública, dominada exclusivamente por el italiano. Su uso es oral entre familias y comunidades de esta lengua.

La minoría italo-albanesa utiliza preferentemente el dialecto toscano, actualmente la lengua oficial en la República de Albania. No ha sido posible hasta ahora introducir por ley el albanés en las escuelas de la región. Se utiliza en algunas escuelas maternas y elementales a petición de los padres, pero no pasan del 20%. En algunas escuelas privadas se dan clases de este idioma en el segundo ciclo. Se imparten cursos

de lengua y literatura albanesas en la Universidad de Calabria desde 1980, pero desde principio de siglo se dan clases de esta lengua en Roma, Nápoles, Bari y Palermo.

La Iglesia Católica utiliza el albanés para algunas ceremonias litúrgicas realizadas en rito griego. Por otra parte existe una tradición musical y folklórica, básica para la conservación del idioma.

Ultimamente se han realizado importantes esfuerzos para el mantenimiento del albanés. Por ejemplo, en Cosenza existe una buena biblioteca especializada y en 1971 se fundó en Lungro la **Associazione Insegnanti Albanesi d'Italia** para la difusión y promoción del albanés en las escuelas. En Cosenza se fundó en 1970 la **Unione delle Comunità Italo-Albanesi**; en Castrovillari hay la **Associazione Culturale Italo-Albanese**, y en Piana degli Albanesi el **Centro Regionale per le Tradizione Albanese**. La Universidad de Palermo a través de su **Centro Internazionale di Studi Albanesi** publica unos anuarios muy interesantes, mientras que el **Centro Greco-Albanese di Glottologia de Crotone** está especializado en los temas de pedagogía lingüística.

En Civita (Cosenza) se publica un periódico bilingüe de unos 1.000 ejemplares, el "**Katundi Yrië**". La revista "**Mondo Albanese**" se edita sólo en esta lengua. Algunas emisoras de radio locales emiten unas horas al mes en esta lengua, con un bajo nivel de audiencia, pero en cambio se extiende su uso

publicitario en las comunas de la Arbería.

2.13.2: Alemana

La legalización del alemán en el Alto Adigio/Tirol del Sur deriva de los acuerdos De Gasperi-Gruber firmados en París en septiembre de 1946. Este pacto reconoció a los alemanes de la zona el derecho a recibir la enseñanza en alemán en todos los niveles escolares, a la igualdad entre las dos lenguas en la administración pública, a la igualdad de derechos para los dos grupos étnicos en el acceso a la administración pública, y a la autonomía legislativa y administrativa de la zona. Este acuerdo sirvió de base para el Estatuto especial de la región del Trentino-Alto Adigio aprobado en 1948, Estatuto que concedía facultades legislativas al parlamento regional. El 8 de agosto de 1959 se aprobó un decreto con las normas de aplicación del estatuto especial en materia de uso de la lengua alemana. El decreto igualó las lenguas italiana y alemana, pero con algunas excepciones⁹⁹. Un segundo decreto de 23 de mayo de 1960 aplicó este principio en los concursos públicos¹⁰⁰.

Sin embargo, el Estatuto no satisfizo a los alemanes de la región, reagrupados en el Partido del Pueblo del Tirol del Sud y tras unos años de tensión dentro de la región y entre Italia y Austria, por medio de la ley de 31 de agosto de 1972 se reformó y amplió el Estatuto, reforma que fue conocida como el

"Pachetto". Además de ampliar las competencias a las autoridades regionales y locales, el nuevo Estatuto decidió la plena paridad del alemán y el italiano (art. 99), la transferencia de unas 15 comunas de la provincia de Trentino a la de Bolzano/Bosen, provincia en la que reforzaba el bilingüismo, la presencia de representantes de las tres comunidades lingüísticas en las instituciones locales, la introducción de una normativa bilingüe o trilingüe para los funcionarios y la introducción de un bilingüismo efectivo en la educación escolar. El artículo 2 de este Estatuto dice que "en la Región se reconoce igualdad de derechos a los ciudadanos cualquiera que sea el grupo lingüístico al que pertenezcan y se salvaguardan las respectivas características étnicas y culturales"¹⁰¹.

El artículo 19 del Estatuto y la ley de 16 de mayo de 1947 establecían de hecho tres tipos de escuelas primarias y secundarias: a) las que usan el alemán como lengua vehicular y tienen el italiano como segunda lengua; b) las que usan el italiano como lengua vehicular y tienen el alemán como segunda lengua; y c) las trilingües en alemán, italiano y ladino¹⁰². Se publican numerosos libros de texto en cada lengua y los profesores reciben cursos de preparación especializados para población bilingüe. Desde 1975 se dan cursos para residentes adultos no germanófonos. Un Decreto del Presidente de la República de 26 de julio de 1976 estableció la proporcionalidad lingüística en las oficinas estatales de la provincia de

Bolzano que utilizan los dos idiomas¹⁰³.

Desde la década de los años 1980 se detecta una gran actividad de los germanoparlantes para resistir la presión del italiano y conservar su patrimonio cultural. Esto conlleva no sólo insistir en una nueva ampliación de las competencias regionales, sino repetir algunos de los conflictos protagonizados antes de 1972 por el *Südtiroler Volkspartei*, creado en 1945 para canalizar las aspiraciones de la población germanoparlante. Así, en 1977 se creó el *Assessorato all'Istruzione*, que renovó el sistema educativo. También la toponimia y los carteles indicadores fueron redatados en las dos lenguas. Numerosos documentos civiles y certificados pudieron obtenerse en las dos lenguas a petición del solicitante. Se renovó la tradición musical y folclórica, y surgieron numerosos grupos de teatro popular, agrupados en la *Associazione Filodramática Altotesina*. Por su parte, la Iglesia Católica imparte sus cultos en ambas lenguas oficiales.

El periódico alemán más vendido es el "Dolomiten", pero desde 1945 hay otro bilingüe, el "Alto Adige-Blatt für den deutschen Leser". Las emisoras de radio y televisión públicas dependientes de la RAI, emiten varias horas diarias en lengua alemana, pero existen cadenas privadas de ámbito regional que emiten sólo en alemán o con una programación bilingüe¹⁰⁴.

2.13.3: Otras Minorías Alemanas:

2.13.3.1: Cimbria

Actualmente se conserva el alemán en Giazza, en Roana/Mezzoselva y en Rotzo, unas 500 personas sobre una población de unas 21.000. Esta comunidad no goza de protección oficial y sólo algunas escuelas dan unas de horas de clase a la semana sobre el cimbrío.

A partir de 1979 se apreció un renovado interés por parte de ciertas instituciones, como el Circolo Gandhi o el Kultur-Verein, por revitalizar la lengua. La Iglesia local está a favor de ello y propicia tanto la recuperación de cánticos religiosos tradicionales como de ritos litúrgicos. Se publican algunas revistas especializadas en esta lengua.

2.13.3.2: Mochena

Los mochenos son bilingües y su escaso número les hace escasamente reivindicativos. No tienen ningún reconocimiento oficial como minoría lingüística y su enseñanza se reduce a unos cursos privados.

2.13.3.3: Walser

La minoría walser está formada por comunidades germanoparlantes instaladas en algunos valles alpinos del Piamonte y el Valle de Aosta, descendientes de pastores y agricultores que en el siglo XII emigraron desde el Alto Rhin. Se hallan en los valles alrededor del Monte Rosa (Valle del Lys, Valsesia, Valle Anzasca, y Val Formazza). Son un millar largo de personas entre los piamonteses y los aostinos con una fuerte regresión entre 1901 y 1921. El área "walser" era anteriormente algo más extensa e influyó en otras lenguas, como el franco-provenzal o el piamontés. Se trata de un dialecto helveto-valaisano, muy alejado del alemán standard. También se encuentra muy influido por el francés del Valle de Aosta. Sus hablantes se hallan inmersos en un rápido proceso de italianización, pero persiste gracias a las intensas relaciones regionales con las poblaciones del sur de Alemania.

El Estatuto regional del Valle de Aosta no mencionaba el "walser", pero el 23 de septiembre de 1993 el Parlamento italiano reformó el Estatuto especial del Valle de Aosta para reconocer que "los germanófonos del Valle de Lys, incluido en la ley regional, tienen el derecho a salvaguardar sus propias tradiciones y características lingüísticas y culturales", sin perjuicio de las lenguas alemana e italiana. Un nuevo artículo 40 bis del Estatuto autorizaba, además, "la enseñanza en alemán en las escuelas a través de medidas apropiadas que tengan en

cuenta las necesidades locales".

Sin embargo, desde 1947 el walser es enseñado en algunas escuelas elementales y secundarias. También hay cursos privados de alemán y algunas asociaciones, como la **Deutsch-Schweizerischen Schulverein**, exigen una mayor protección oficial. Desde 1978 se editan en alemán pequeñas publicaciones, como hojas parroquiales, y las emisoras de radio regionales empezaron a emitir programas en esta lengua¹⁰⁵.

2.13.3.4: Carintia

En la zona de Belluno persisten algunas comunidades germanófonas, procedentes asimismo de la colonización bávara de los siglos XII y XIII. Su núcleo principal está en Sappada/Plodn, aunque hay algunas comunidades más en Timau/Tischlwang y Sauris/Zahre en el Friul-Véneto. En 1974 los carintios no pasaban de 5.000 personas, en convivencia tetraglósica con el italiano y el esloveno. Las autoridades regionales protegen levemente esta minoría sobre todo por razones turísticas, por lo que en algunas escuelas de Sappada/Plodn se enseña el alemán como materia facultativa.

2.13.4: Catalana

El catalán no goza de ningún reconocimiento oficial, aunque se intentó en 1977, 1978 y 1983. En julio de 1993 el Parlamento sardo aprobó una ley de protección de las lenguas propias de la isla, que, aunque sólo se refiere al sardo, puede aplicarse igualmente al catalán. La ley reconoce el derecho a la enseñanza y uso del catalán en la Administración, además del italiano¹⁰⁶. Sin embargo, el 4 de julio de 1994 el Tribunal Constitucional anuló algunos de sus artículos en materia educativa, por entender que sobrepasaban las competencias estatutarias regionales y reservadas al Ministerio de Instrucción Pública italiano¹⁰⁷.

Por más que desde 1976 está autorizada la enseñanza del catalán en las escuelas elementales de Alghero a título experimental y a petición de los padres, sólo en dos escuelas de la ciudad se dan clases de catalán. Sin embargo, algunos maestros se preparan anualmente en instituciones catalanas para enseñar esta lengua. Se dan cursos extra-oficiales en liceos técnicos y en centros culturales locales. En la Universidad de Cagliari se enseña el catalán estándar desde 1954 y en la de Sassari desde 1970.

El curso 1993-94 ya vio como la colaboración entre distintas instituciones isleñas y catalanas provocaba una incipiente programación de actividades escolares en alguerés. Una circular

del gobierno italiano de 2 de marzo de 1994 recomendaba "el diálogo intercultural" para lo cual "se introduce la consideración de las minorías lingüísticas y de las variedades regionales y locales de nuestra sociedad nacional"¹⁰⁸.

Por otra parte, existe un movimiento literario importante, conectado desde los Juegos Florales de 1961 a las actividades de Cataluña. Se dispone de varias bibliotecas especializadas y funcionan distintos centros culturales para la promoción de esta lengua, como el Centro di Studi Algheresi, l'Associazione Catalana d'Italia, o Està Esclarint. La Iglesia Católica lo utiliza para ciertas ceremonias y se está recuperando tanto la tradición musical como la teatral. Alghero tuvo periódicos en catalán que han desaparecido y los actuales son bilingües, como "Alghero", "La Sardenya Catalana", "Que ta Burugia?", "Renaixença Nova", o "Alghero Cronache".

2.13.5: Croata

A pesar de que el artículo 4º del Estatuto de la Región de Molise de 1971 da a los poderes regionales competencias para "la tutela del patrimonio lingüístico e histórico y las tradiciones populares de las comunidades étnicas existentes en su territorio"¹⁰⁹, el croata italiano no goza de ninguna protección oficial, ni se ha pedido. No se halla presente en ningún aspecto de la vida pública y su uso se reduce a la

intercomunicación familiar.

El croata hablado en Italia pertenece a la variedad eslava llamada "estocavicana". Como minoría carece de la consistencia de otras, como la albanesa, a causa de la ausencia de una estructura religiosa y eclesiástica propia. No se enseña en ninguna escuela, ni dispone de publicaciones o medios de comunicación audiovisuales propios. Entre 1967 y 1970 se publicó la revista "Nas Jezik", que ofreció datos sobre esta minoría y publicó relatos y poesías en italo-croata. Una parte de la señalización de carreteras es bilingüe.

En 1981 se fundó la Pro Loco Ziva Voda Kruc, institución destinada a promover y defender el uso del croata, hecho que demuestra una cierta revitalización conectada con las crecientes preocupaciones de las instituciones europeas.

2.13.6: Francesa

El francés no goza de ningún reconocimiento oficial específico en el Piamonte y se halla ausente de la vida pública regional, aunque el estatuto de la Región del Piamonte de 1971 indica en su artículo 7 que "la Región defiende el original patrimonio lingüístico de cultura y de costumbres de las comunidades locales y favorece su enriquecimiento"¹¹⁰.

En cambio, el Estatuto del Valle de Aosta de 1948 reconoce oficialmente su uso "en igualdad con la italiana"¹¹¹. El gobierno regional tiene competencia en materia educativa desde noviembre de 1964. El artículo 38 del Estatuto sitúa al francés en el mismo rango legal que el italiano y en los actos públicos se pueden usar las dos lenguas indistintamente, excepto en los actos judiciales que deben ser en italiano, aunque la defensa puede ser en francés¹¹².

El francés del Piamonte es un dialecto próximo al utilizado en el Vaudois suizo y se caracteriza por sus arcaísmos y la influencia que ha sufrido del italiano. Posiblemente el deseo de los católicos piamonteses de diferenciarse de la iglesia protestante del Vaudois en el siglo XVII hizo acentuar las diferencias. Esto conforma una región con cuatro lenguas (francés, italiano, piamontés y occitano). Aunque el francés está en regresión, persiste como lengua de cultura favorecido por un clero tradicionalmente francófono.

El Estatuto del Valle de Aosta de 1984 indica que en las escuelas debe dedicarse el mismo número de horas lectivas para el francés que para el italiano y que determinadas materias pueden darse en francés. Los planes de estudio en vigor en el resto del Estado italiano deben ser adaptados a las peculiaridades regionales y desde 1964 se exige a los docentes el conocimiento del francés. A partir del curso 1983/84 se introdujo un bilingüismo efectivo en las escuelas maternas.

El Centre Pédagogique de Coordination pour l'Enseignement de la Langue Française en Vallée d'Aoste se ocupa de los problemas relativos a la enseñanza. También la toponimia regional es en francés y se exige su conocimiento para ser funcionario. La Iglesia Católica utiliza esta lengua para algunas de sus ceremonias.

La prensa se define como bilingüe, pero dedica muy poco espacio al francés, aunque hay varias publicaciones periódicas en esta lengua, como "Le Peuple Valdôtain". Algunos anuncios son también en francés. Las emisoras de radio y televisión regionales, así como la tercera cadena de la RAI, emiten algunas horas o programas en francés.

2.13.7: Franco-Provenzal

Un decreto-ley de 11 de noviembre de 1964 cedió a las autoridades regionales la competencia en materia educativa, lo que permitió las primeras actuaciones lingüísticas. El Estatuto de Autonomía del Valle de Aosta de 1984 no reconoce el uso del franco-provenzal, pero sí del francés. Los gobiernos franceses han tendido a desconocer el franco-provenzal como un dialecto francés y le han regateado su apoyo. El artículo 38 del Estatuto sitúa el francés y el italiano en el mismo nivel legal para todos los actos públicos, excepto los judiciales que deben ser redactados en italiano. En el Piamonte no existe ningún

tipo de legislación que ampare esta lengua, excepto la genérica declaración de principios de su Estatuto.

En el Valle de Aosta conviven el franco-provenzal como lengua mayoritaria, una pequeña minoría alemana (en el Valle de Lys) y otra minoría francófona, centrada en la ciudad de Aosta, además del italiano, idioma usado principalmente por los inmigrantes. Por ello, los valdostanos suelen ser bi o trilingües, aunque el francés predomina en la vida administrativa y literaria de la región, junto al italiano para las instituciones estatales. El franco-provenzal era hablado por el 95% de la población regional hacia 1861, cifra que había descendido al 90% según el censo de 1921. Conviene tener en cuenta, además, que en 1985 sólo el 52% de los valdostanos lo eran de origen. Sin embargo, los valdostanos no mantienen relaciones políticas y culturales con Francia o Suiza.

En las escuelas no se enseña el franco-provenzal, si no es a petición de los padres o por iniciativa de los educadores. No hay libros de texto en esta lengua. Sin embargo, desde principios de los años 1960 numerosas escuelas participan en el concurso "Cerlogne" con apoyo oficial, que impulsa distintas actividades académicas sobre la lengua y la cultura franco-provenzal y que goza de una gran afluencia de escolares y profesores. Muchos profesores siguen cursos de formación del franco-provenzal, organizados por el **Assessorato alla Istruzione Pubblica**. También acuden a las universidades vecinas

(Grenoble, Lausana, Neuchâtel, Besançon), donde existen cátedras de esta lengua. En el Piamonte se usa el franco-provenzal desde los años 1970 en aquellas escuelas maternas, en las que lo piden los padres.

La Iglesia Católica utiliza esta lengua en ocasiones excepcionales, por ejemplo para fiestas folklóricas. Existe una fuerte tradición musical y teatral, así como distintas asociaciones culturales activas (*Académie Saint Anselme* (1855), *La Société de la Flore Valdôtaine* (1858), *le Comité des Traditions Valdôtaines* (1948), *Association Valdôtaine des Archives Sonores* (1980), etc.), que publican varios boletines y revistas especializados. La prensa regional publica con cierta frecuencia textos en franco-provenzal y desde 1841 sale el periódico "La Feuille d'Annonce". Las emisoras de radio y televisión regionales, así como la tercera cadena de la RAI, emiten algunos programas en esta lengua.

En el Piamonte el franco-provenzal constituye su borde oriental y recibe fuertes influencias del occitano y del piamontés, por lo que los habitantes de estos valles también suelen ser trilingües. La emigración y la inmigración han debilitado últimamente esta lengua, sobre todo en los valles más exteriores, como el Val di Susa o el Val Sangone. La *Associazione culturale EFFEPI* (1980) y el *Atlante linguistico e etnográfico del Piemonte occidentale* tienen como misión la promoción del franco-provenzal en esta área. No está presente

ni en la radio, ni en la televisión, ni en la prensa periódica, excepto en dos publicaciones editadas por asociaciones privadas.

En la Apulia el franco-provenzal que se había conservado bien hasta hace unas décadas, retrocede rápidamente frente a la presión del italiano, adoptado por los jóvenes.

2.13.8: Ladina

Los ladinos del Alto Adigio-Tirol del Sur gozan de una mayor protección legal que los del Trentino y de la región de Belluno. Desde 1948 el ladino está reconocido en la provincia de Bolzano y por el Nuevo Estatuto de Autonomía de la región Trentino-Alto Adigio de 1972¹¹³, así como por otras normas legales. Se trataba aplicar a los ladinos del Valle de Fassa (provincia de Trento) algunas de las medidas de tutela previstas para los ladinos de los valles de Gardena y Badia, en la provincia de Bolzano. No se proyectó nada, sin embargo, para los ladinos de la vecina provincia de Belluno, en la región de Véneto. El 3 de diciembre de 1993 se aprobó un Decreto Legislativo para la Tutela de la Minoría de Lengua Ladina de la Provincia de Trento. El Decreto reconoce el derecho de los ladinos a mantener relaciones orales y escritas en esta lengua con la Administración del Estado, la regional, la provincial y la local presentes en la provincia. El Ejército

y la policía quedan exentos de este Decreto¹¹⁴.

En todas las escuelas públicas de la zona ladina de la provincia de Bolzano se usa la lengua ladina en los niveles educativos inferiores, de acuerdo con el artículo 19 del Estatuto que regula el uso del italiano, del alemán y del ladino. Las escuelas alemanas e italianas no están obligadas a enseñar el ladino, pero las ladinas deben hacerlo con los otros dos idiomas. En la educación secundaria el ladino es enseñado unas horas a la semana, pero con frecuencia se utiliza como lengua vehicular. La distribución idiomática es parecida. En el curso 1983/84 cerca de 3.400 alumnos acudían a escuelas ladinas.

En los valles ladinos de la provincia de Trento la mitad de las escuelas maternas utilizan el ladino, pero todas ellas lo enseñan algunas horas a la semana.

Los rótulos viarios suelen estar redactados en dos o tres idiomas, según la provincia, uno de ellos el ladino. Por otra parte se exige el conocimiento de este idioma para ser funcionario o desde 1976 profesor. También la Iglesia Católica se ha constituido en uno de los más firmes reductos del ladino y lo utiliza tanto para sus ceremonias litúrgicas, como para las actividades pastorales. Existen además varias compañías teatrales, subvencionadas por la administración local y se celebran frecuentes concursos literarios. Las bibliotecas

públicas aceptan obras en ladino.

La principal organización de defensa del ladino es la **Union Generela di Ladins** (1947), y sus secciones **Ert pur i Ladins** (1960), **Communanza Ladina** (1975), y **Ladins Diâfora** (1981). El **Istituto di Cultura de S. Martino-Badia** desde 1976 y los **Istituti Culturali Ladini** desde 1977 se dedican a la investigación y estudio de la lengua.

Desde 1948 existen periódicos en ladino, como "Calender de Gherdeina", "Calender Ladin", "Rezia" y "Sas dla Crusc" en el Val Badia y Val Gardena, o "La Veis" y "Nosa Jent" en el Val di Fassa. La revista mensual "Usc di Ladins" está redactada en los cinco dialectos ladinos dolomíticos. Se editan también algunos periódicos trilingües (italiano, alemán y ladino), destacando el "Brunsin". Los otros periódicos monolingües suelen llevar algún artículo en ladino de forma esporádica. Las publicaciones ladinas suelen estar subvencionadas por la Administración local.

Por lo que respecta a la radio y a la televisión, "Radio Gardena" y "Radio Ladina" son bilingües desde 1978 y con una elevada audiencia, mientras que el resto de emisoras, incluyendo la RAI desde 1979, emiten unas horas a la semana en esta lengua. La publicidad utiliza el ladino con cierta frecuencia.

2.13.9: Friulana

El friulano no ha gozado de ninguna consideración jurídica o legal, por lo que no está presente en la vida pública de la región. El artículo 3 del Estatuto de Autonomía de la región (1963) dice únicamente que "en la Región, se reconoce la igualdad de trato a todos los ciudadanos, cualquiera que sea el grupo lingüístico al que pertenezcan, salvaguardando sus características étnicas y culturales respectivas"¹¹⁵.

El friulano no entró en la red escolar pública hasta principios de los años 1970 a petición de unos grupos de padres. A mediados de los años 1980 se calculaba que el 10% de las escuelas públicas lo utilizaban en algún grado, mientras que el 80% de las privadas maternas lo usaban normalmente. En cualquier caso, se trata de experimentos sin carácter oficial. Algunas escuelas enseñan esta lengua unas horas a la semana y siempre por indicación de los padres. Ultimamente se han editado algunos libros de texto elementales. La preparación de los profesores corre a cargo de la Società Filologica Friulana, que tiene el apoyo de organismos públicos locales. Hay igualmente cursos de friulano para adultos. Las Universidades de Udine (desde 1969), de Trieste (desde 1983) y de Padua tienen sendos departamentos de lengua y literatura friulanas.

Numerosas rótulos toponímicos y viarios están escritos en friulano e italiano. El teatro y la música tradicional han sido

revalorizadas por grupos de aficionados, cada vez más numerosos. Se convocan premios literarios en esta lengua. Distintas asociaciones culturales trabajan en la conservación y promoción del friulano, destacando la **Società Filologica Friulana**, creada en 1919. La Iglesia Católica ha sido uno de los principales bastiones para la defensa del friulano, no sólo utilizándolo en casi todos los actos litúrgicos y pastorales, sino apoyando asociaciones como el **Moviment Friûl** en 1966, o publicando manifiestos propios.

El periódico en lengua friulana más antiguo es el "Strolic Furlan", fundado en 1821. Otros, como "La Vitta Cattolica" son bilingües. Existen otras publicaciones mensuales o trimestrales, como "Sot la nape", o el anuario "Ce fastu?". El periódico "Friuli del Mondo" se distribuye entre los emigrantes. La emisora de radio privada "Onde Furlane" emite unas 6 horas diarias en friulano, ejemplo seguido por otras emisoras locales, aunque con menos horas a la semana.

2.13.10: Occitana

En 1979 y 1990 el Parlamento del Piamonte aprobó dos leyes para la conservación de su patrimonio cultural y lingüística. El occitano de Italia varía en cada valle, lo cual no ha permitido la creación de una lengua estandard, aunque existe conciencia de una homogeneidad lingüística entre toda la

población occitanohablante. La grafía utilizada es la mistraliana, adoptada en 1961 por la asociación *Escolo dòu Po*. Por otra parte, el occitano debe convivir con otras lenguas, empezando por el italiano, el francés y el piamontés. Esta situación ha motivado el surgimiento de una población con frecuencia trilingüe, sobre todo en las zonas de contacto.

No existe una política educativa concreta para la enseñanza del occitano. Todo depende de la demanda de los padres y de la disponibilidad de profesores. Se han realizado numerosas experiencias piloto desde 1963 y distintas asociaciones han solicitado la intervención de las autoridades, lo cual se ha hecho realidad en algún municipio.

Por todo ello, no se usa el occitano para la vida pública, excepto para la toponimia y los indicadores viarios. La Administración subvenciona grupos de teatro y musicales, que han resucitado una tradición popular muy arraigada. La Iglesia Católica no ha utilizado nunca el occitano, por sus connotaciones históricas con el protestantismo. Hay un centro de documentación en Macra (Val Maira), el *Valados Usitanos*.

Desde los años 1950 se han multiplicado las asociaciones de defensa del occitano en Italia, como el *Centro de Coumboscuro*, el *Movimento Autonomista Occitano*, la *Unione degli Autonomisti delle Valli Occitane*, o la *Lou Soulesthrelh*. En 1980 se creó por ley el *Centro Gianni Oberto* que entre otras cosas fomenta la

literatura occitana.

Se publican algunos periódicos en occitano, como el "Ousitano Vivo" y otros bilingües, como el "Valados Usitanos". Las publicaciones en occitano reciben generalmente fondos públicos. En los años 1970 apareció una emisora de radio en occitano.

2.13.11: Sarda

Cerdeña goza de un Estatuto de Autonomía, según el artículo 116 de la Constitución italiana. Sin embargo, este Estatuto no reconoce la lengua sarda, que no es utilizada en ningún aspecto de la vida pública de la isla, y permanece como lengua de ámbito familiar.

El 7 de octubre de 1993 el Parlamento regional aprobó una ley de protección de esta lengua¹¹⁶. Recurrida por el gobierno central italiano, el Tribunal Constitucional recortó en sentencia de julio de 1994 su alcance en materia de educación¹¹⁷.

No existe una lengua sarda standarizada o unificada, a pesar de los intentos llevados a cabo a finales del siglo pasado y de nuevo a mediados de los años 1980.

El sardo no se enseña en las escuelas, aunque se utiliza en las maternales para comunicar con los escolares de esta lengua. A principios de los años 1980 empezó a introducirse el sardo en los niveles primario y secundario, como materia autónoma y a título experimental. Posteriormente se convirtió en una materia obligatoria para todos los estudiantes, a razón de una o dos horas a la semana. No hay libros de texto, pero las universidades dan cursos de sardo para maestros. A partir de 1970 se empezó a enseñar lingüística sarda en las Universidades de Cagliari y de Sassari. También se pueden encontrar cursos para adultos.

La toponimia y los carteles públicos están redactados en sardo en algunas ocasiones. Los tribunales locales suelen tolerar el uso de esta lengua en las vistas orales. También existen grupos musicales y teatrales que tratan de recuperar un rico folclore, destacando de entre ellos los "Fratelli Medas", creado en 1950. Se convocan periódicamente concursos literarios desde 1956.

Existen varias asociaciones de defensa del sardo, creadas la mayoría al socaire de los movimientos autonomistas de los años 1970, como **Nazione Sarda** o el **Comitau Limba Sarda**. Estas asociaciones suelen publicar revistas especializadas en sardo.

La Iglesia Católica utiliza esta lengua en sus actos litúrgicos e incluso en los pastorales, a pesar de lo cual se

la considera uno de los más activos elementos de italianización de la población de la isla.

En 1949/50 empezaron a aparecer periódicos bilingües. Sobresalió de entre ellos "La Grotta della Vipera", "Nazione sarda", "Su populu sardu", "Sa Sardigna", "Sardegna Europa", "S'Ischiglia", "Indipendentzia", etc. Algunos círculos de emigrantes publican también sus revistas y boletines en esta lengua. En los años 1970 nacieron algunos periódicos unilingües, sobre todo "Sa Republica Sarda", financiado por distintos partidos políticos. Algunas emisoras de radio y televisión difunden programas en sardo unas horas a la semana.

2.13.12: Griega

El Estatuto de la Región de Calabria regula en su artículo 56, r) el uso del griego. Sin embargo, esta lengua minoritaria no goza de ningún reconocimiento oficial y se halla desterrado de la vida pública.

El griego en Italia se halla reducido a las relaciones familiares y micro-sociales. En algunos pueblos calabreses su uso es marginal. La creciente presión del italiano y de los dialectos latinos de la zona han fragmentado el otrora compacto ámbito griego. Esto ha impedido la formación de un idioma

uniformizado y ha facilitado la proliferación de variedades. En general, los escritores en esta lengua han optado por transcribir a caracteres latinos la fonética griega. Hay que tener presente que los únicos escritos en greco-italiano se refieren a poesías y cantos populares. En Calimera, centro intelectual de los griegos en Italia, se inició una campaña en los años 1970 reivindicando una política más activa en favor de esta lengua sobre todo en la enseñanza, de tal modo que a mediados de los años 1980 pudo observarse un suave relanzamiento del idioma.

No se enseña el griego en las escuelas maternas de Apulia, si no es a petición de los padres. Por lo que concierne a las escuelas elementales la situación varía de un centro a otro. En algunos municipios se enseña a título experimental desde el curso 1977/78 durante unas horas a la semana en concordancia con las reivindicaciones de ciertos núcleos. Se han publicado algunos libros de texto. En las escuelas secundarias también se enseña como asignatura voluntaria desde el año 1976/77.

En Calabria se enseña en las escuelas maternas desde 1977, de forma esporádica y a petición de los padres. En las elementales constituye una materia voluntaria unas horas a la semana, igual que en la enseñanza superior desde 1975. Las peticiones de los padres greco-parlantes para que sus hijos aprendan esta lengua es creciente. No hay cursos para profesores, pero desde 1978 los hay para adultos. La Universidad de Lecce enseña lengua y literatura neo-griega y

realiza estudios lingüísticos de esta lengua.

En algunos municipios los carteles viarios y toponímicos son bilingües. Se han formado varias asociaciones en defensa del griego, como el **Gruppo Operanti C.S.E.P.** (1977) y las entidades culturales **Glossa-Ma** (1977) y **Chora-Ma** (1977) en Apulia, o el **Circolo la Jonica del Greci di Calabria** (1968), **Comunità di Jalo Tu Vua** (1982), o el **Centro Intercomunale dei Greci di Calabria** (1982) en Calabria. Con su apoyo y el de la Administración local han surgido varias compañías de teatro, como el "Gruppo Teatrale" de Calimera, así como cantantes y corales que han recuperado la tradición musical. La Iglesia Católica utiliza esta lengua para algunos de sus actos litúrgicos en rito griego.

Desde 1968 existen algunos periódicos en griego de escaso tiraje y con subvención pública. También las emisoras de radio y TV locales emiten algunas horas a la semana en griego, aunque su audiencia es más bien reducida.

2.13.13: Eslovena

En la provincia de Udine los eslovenos no gozan de ningún derecho bien definido. En la de Gorizia tienen derecho a escuelas gratuitas, de acuerdo con las disposiciones de los aliados después de la II Guerra Mundial, disposiciones que el

gobierno italiano respetó posteriormente. En la provincia de Trieste la minoría eslovena es la que recibe mejor trato legal.

El estatuto especial anexo al Memorándum de Londres de 5 de octubre de 1954¹¹⁸ contenía disposiciones explícitas acerca de los derechos lingüísticos de la minoría eslovena en Italia, disposiciones llevadas a la práctica por los decretos del mando aliado de 26 de octubre para ciertas zonas bien definidas¹¹⁹. Así se estableció que los comunicados al público, las ordenanzas administrativas y las publicaciones oficiales tenían que llevar una traducción al esloveno, igual que el nombre de las calles, de las localidades y de las instituciones y organismos públicas. Sin embargo, estas normas sólo regían para aquellos municipios de la provincia de Trieste en los cuales los eslovenos constituyeran el 25% de la población.

Entre 1945 y 1949 el mando aliado militar y el Comisario General del Gobierno italiano para el territorio de Trieste promulgaron dos disposiciones para el uso del esloveno en la provincia de Gorizia, las cuales estuvieron en vigor hasta 1954. El gobierno italiano promovió leyes en defensa del esloveno en julio de 1961, en octubre de 1966, y en diciembre de 1973, mientras que en marzo de 1973 hizo lo propio el gobierno regional. El Tratado de Osimo de 1975¹²⁰ también ordenaba la protección más amplia posible a la minoría eslovena de Friul-Venecia Julia¹²¹.

El esloveno italiano, rama del eslavo meridional, conserva muchos rasgos arcaicos por su alejamiento de los grandes núcleos lingüísticos eslavos. El esloveno es además oficial en la vecina República de Eslovenia. En territorio italiano han surgido por lo menos seis variedades, entre las cuales la del Valle de Resia, ha desarrollado unas características propias.

Hay escuelas eslovenas en las cuatro provincias, aunque con grandes desigualdades territoriales. Fueron suprimidas bajo el fascismo, restablecidas por los ocupantes alemanes y favorecidas por los aliados, la República italiana las conservó. La legislación obligó a poner profesores eslovenoparlantes en estas escuelas. El uso de esta lengua está regulado para las escuelas maternas, mientras que en las elementales y secundarias es la lengua vehicular y un número indeterminado de ellas dan toda la enseñanza en esloveno. En otras se enseña el esloveno como una materia autónoma y unas horas a la semana, sin que sea obligatoria para los escolares no esloveno-parlantes. En cambio, el estudio del italiano es obligatorio para todos los escolares.

Un progreso importante significó la ley de 19 de julio de 1961, ampliada el 22 de diciembre de 1973, según la cual en las escuelas maternas, elementales y secundarias de Gorizia y de Trieste la enseñanza debía ser impartida en la lengua materna de los alumnos y se podían establecer escuelas de lengua eslovena en adición a las de lengua italiana.

Hay libros de texto en la lengua minoritaria y cursos para profesores en las Universidades de Trieste, Udine, Gorizia y Ljubljana en Eslovenia. En la de Trieste se enseña lengua y literatura eslovenas desde 1945 y en la de Udine desde 1968. Se dispone de diccionarios unilingües y plurilingües. En distintos centros se ofrecen cursos para adultos.

La toponimia y los indicadores viarios son bilingües en todos los municipios afectados. Los certificados administrativos pueden ser solicitados en esloveno directamente o por medio de una traducción. También se utiliza el esloveno en los tribunales locales de forma oficial desde 1982 y en los actos litúrgicos de la Iglesia Católica, una de las mayores impulsoras de la recuperación de esta lengua.

En 1848 surgieron las dos primeras asociaciones eslovenas, prohibidas inmediatamente, la **Slavijansko Bralno Drustvo** en Gorizia y la **Slavijansko Drustvo** en Trieste. Después de la II Guerra Mundial surgieron organizaciones en casi todas las poblaciones eslovenas, a partir de **Citalnica** en Trieste en 1961. Pero fue sobre todo en los años 1970 cuando surgieron muchas asociaciones, como la **Commissione per l'affermazione dello sloveno**, para la defensa del esloveno. Otras tienen como misión estudios especializados, como es el caso del **Instituto de Investigaciones Eslovenas**.

También se editaron periódicos, como "Primorec", "Slovenski Primorec", "Edinost", etc., pero los círculos "Glasbena Matica", las asociaciones teatrales, como la "Compagnia del Teatro Stabile" de Trieste y la Biblioteca Nacional de los Estudios han animado la vida cultural (grupos musicales, bibliotecas, premios literarios, etc.) en esta lengua. Muchas de estas actividades están subvencionadas por la Administración local e incluso por la Central.

Se publican algunos periódicos en esloveno, destacando el "Primorski Dnevnik". Desde 1968 hay otros periódicos bilingües, especialmente el "Novi Matajur", y las revistas "Galeb" y "Pastircek" para niños. Existen revistas trimestrales y boletines especializados. Con frecuencia estas publicaciones son subvencionadas con fondos públicos o por organismos privados.

Varias estaciones de radio emiten en esloveno entre 80 y 85 horas a la semana. Incluso la RAI-TS II difunde 12 horas diarias en lengua eslovena. Los eslovenos disponen de una agencia, "Alpe-Adria", en Trieste para noticias relativas al mundo eslavo en Italia. Sin embargo, no hay emisoras de televisión en esloveno¹²².

2.14: LUXEMBURGO

<u>Minorías lingüísticas</u>	<u>Regiones</u>	<u>Población hablante</u>
Luxemburguesa	G. D. Luxemburgo	350.000

2.14.1: Luxemburguesa

El uso del luxemburgués o "letzeburger" en el Gran Ducado de Luxemburgo viene regulado por la Ley sobre el Régimen de Lenguas de 1984. Según su artículo 1, el luxemburgués es declarado "lengua nacional de los luxemburgueses", pero el siguiente artículo precisa que "los actos legislativos y los decretos se redactarán en lengua francesa". En el caso de ser traducidos sólo da fe el texto en francés. Ahora bien, los decretos no legislativos editados por órganos del Estado, comunales o de empresas públicas serán válidos en la lengua que haya escogido el órgano emisor.

El artículo 3 deja libertad de lengua en el terreno administrativo y judicial, aunque exceptúa algunas materias. La administración debe contestar los escritos recibidos en la misma lengua "en la medida de lo posible", de acuerdo con el

artículo 4¹²³. Una emisora local ofrece dos horas diarias en luxemburgués.

2.15: PAISES BAJOS

<u>Minoría lingüística</u>	<u>Regiones</u>	<u>Población hablante</u>
Frisona	Friesland	400.000

2.15.1: Frisona

El uso de esta lengua está reglamentado por distintas leyes, como la de 9 de diciembre de 1953, la de 11 de mayo de 1966 o por el informe de la Comisión van Ommen de 1970. En 1982 se creó una comisión nacional para encontrar soluciones a la utilización del frisón en los Países Bajos.

Al contrario que el oriental, el frisón occidental ha desarrollado una importante literatura, circunstancia que ha favorecido la aparición de una lengua uniformizada por encima de los dialectos locales.

En las escuelas maternas se enseña esta lengua a petición de los padres, pero desde 1980 es obligatoria en las escuelas elementales como lengua vehicular. Este fue el primer intento serio de normalización educativa del frisón por parte de las autoridades holandesas, en consonancia con las primeras declaraciones europeas. Se enseña entre media hora y 10 horas a la semana durante seis cursos. En las escuelas secundarias es asimismo asignatura autónoma y lengua vehicular, pero no es materia obligatoria. Hay cursos para profesores de frisón organizados por el **Algemeine Fryske Underrjucht Kommissje** con subvención gubernamental. También hay cursos para adultos y desde 1992 cursos de verano organizados por **AFUK**, un organismo educativo regional, y el **Fryske Folkshegeskoalle Schylgeralân**.

El **Selskip foar Fryske tael en Skriftekennisse** (1884), el **Kristlik Frysk Selskip** (1908), el **Roomsk Frysk Bun** (1917), el **Stihel** (1978), el **Fiter** (1980), y el **Bernlef** son algunas otras de las asociaciones surgidas en defensa y promoción de esta lengua. Otras, como el **Friesch Genootschap** (1927) o la **Fryske Akademy** (1938), se dedican a estudiar y expandir dicha lengua y gozan de subvenciones de las autoridades provinciales. En 1964 se fundó el **Instituto para Frisia del Norte**, que recibe ayuda también de Dinamarca y Alemania para investigaciones relacionadas con esta cultura; en 1988 el gobierno regional del **Schleswig-Holstein** (RFA) también decidió subvencionar el Instituto. El primer presidente del Instituto, **Frederik Paulsen**, vinculó fuertemente el movimiento frisón con la

Conferencia de la Europa de las Regiones entre 1976 y 1984.

La toponimia y los carteles viarios pueden ser en frisón o en neerlandés. Los jueces locales están facultados para autorizar el uso de este idioma en los litigios. El 14 de mayo de 1992 el Ministerio de Justicia holandés aceptó promover una mayor presencia del frisón en los tribunales, en los documentos legales y en los certificados. Según Auke van der Goot, "este acuerdo indica que el frisón se dirige suavemente hacia estándares europeos"¹²⁴. Dos meses antes el Ministerio del Interior acometió la normalización del frisón en la administración pública regional.

Se utiliza muy poco en los oficios religiosos, y la tradición musical es escasa. No obstante, se han formado muchas compañías de teatro, normalmente subvencionadas con fondos públicos. Anualmente se convocan premios literarios. La Academia Frisona publica unos 15/20 libros al año en esta lengua, además de la revista trimestral educativa "It Beaken".

Hacia 1985 existían 18 periódicos en lengua frisona, siendo el más antiguo de 1839 y el más representativo el "Frysk en Fry". El "Flenade Krie" es una popular revista semestral subvencionada por la Administración local. Otros periódicos son bilingües. La estación de radio "Radio Fryslan", subvencionada por el Estado, emite 11 horas a la semana en frisón, con una aceptable audiencia. Los periódicos publican con frecuencia

anuncios en lengua frisona.

2.16: PORTUGAL

<u>Minoría lingüística</u>	<u>Regiones</u>	<u>Población hablante</u>
Mirandesa	Miranda de Duero	15.000

2.16.1: Mirandesa

Como única excepción a la homogeneización lingüística de Portugal, algunos expertos, como el propio profesor Miquel Siguán, citan el "mirandés", dialecto hablado en Miranda de Duero y aldeas vecinas, por unas 15.000 personas. Se trata de una fenómeno oral, sin ninguna protección o promoción por parte de las autoridades¹²⁵.

2.17: SUECIA

<u>Minorías lingüísticas</u>	<u>Regiones</u>	<u>Población hablante</u>
Sami	Norrbotten	
	Västerbotten	20.000
Finlandesa	Norrbotten	50.000

2.17.1: Sami

Al igual que sus hermanos de Finlandia y de Noruega los sami de Suecia disponen desde 1993 de un Parlamento y envían delegados a las conferencias bianuales que se celebran entre las tres ramas Sami. Los suecos designan 4 delegados a la Conferencia Sami Nórdica, surgida en 1953, mientras que los noruegos mandan 5 y los finlandeses 3. Su objetivo es conseguir más competencias y poderes legislativos para llegar a la autodeterminación y estructurarse como un solo pueblo y una sola cultura, superando las diferencias marcadas por su dispersión entre distintos Estados.

Al margen de las actividades artísticas tradicionales, como esculpir madera o tejer, los Sami jóvenes han empezado a grabar discos y a escribir los primeros libros de poemas y escolares en su lengua¹²⁶.

2.17.2: Finlandesa

En la provincia de Norrbotten, a orillas del río Tornedalen, vive también una minoría finlandesa de unas 320.000 personas, de las cuales entre 30.000 y 50.000 son de habla finesa. Esta minoría con el centro en la ciudad de Kiruna no goza de ningún reconocimiento oficial y la lengua finesa está reducida a un uso oral y familiar, aunque se enseña en algunas escuelas y se usa en algunos ayuntamientos pequeños. Finlandia apoya esta minoría, emite programas de televisión para ella y exige a Suecia el mismo trato para ella que el que recibe la minoría sueca en Finlandia¹²⁷.

2.18: Otros países europeos de referencia: Noruega y Suiza

Pese a no pertenecer a la UE, el trato que Noruega y Suiza dan a sus respectivas lingüísticas es un punto de referencia importante para el resto de países europeos y para las instituciones europeas. La minoría sami en Noruega, por ejemplo, es compartida por Finlandia y Suecia y los tres

Estados tienden a darle un tratamiento homogéneo.

2.18.1: NORUEGA

De los tres países escandinavos, Noruega es el que cuenta con una minoría sami o lapona más importante¹²⁸, concretamente en la provincia de Finnmark (97.300 kms²). En 1848 el gobierno reguló por primera vez algunos aspectos del uso de la lengua lapona y cinco años más tarde un nuevo Real Decreto tomó medidas para preparar profesores que introdujeran el noruego entre los lapones, sobre todo a través de las escuelas episcopales del Obispado de Tromsø¹²⁹.

En 1898 una instrucción del gobierno impuso medidas muy severas para el uso casi exclusivo del noruego en las escuelas primarias de los distritos bilingües. El sami y el kvensk fueron reducidos a lenguas coloquiales y los maestros sólo podían recurrir a ellos en caso de absoluta necesidad, como por ejemplo en clase de religión¹³⁰.

Hasta la II Guerra Mundial el gobierno noruego realizó ímprobos esfuerzos por asimilar los samis a la cultura y a la lengua nacionales, política que, sin embargo, experimentó un giro decisivo después de la guerra. En 1956 se nombró una comisión para analizar la situación de esta minoría, la cual en 1959 emitió un extenso informe. De acuerdo con sus recomendaciones se introdujo la lengua sami en las escuelas

primarias regionales. También se crearon cátedras de esta lengua en las universidades de Oslo, Tromsø y en la Escuela de Magisterio de Alta. En la ciudad de Karasjok se abrió una escuela secundaria donde se podía estudiar lengua e historia sami.

En 1960 el Parlamento noruego nombró otra comisión para el estudio de los derechos de los samis. Esta comisión sugirió en 1984 una solución a la finlandesa, es decir la creación de una asamblea consultiva sami, que efectivamente se constituyó en 1987. En noviembre de 1986 un sami, Ole Henrik Magga, defendió una tesis doctoral en la Universidad de Oslo sobre algunos aspectos de la lengua sami. Una de sus conclusiones era que en 1855 la mitad de la población de la zona de Finmark hablaba sami, mientras que ahora no pasa del 10%. En 1980 el Ombudsman de los Sami, Tomas Cramér, cifró su número global en unos 40.000, pero los cálculos gubernamentales los reducen a no más de 30.000 personas.

Esta situación permaneció casi intacta hasta que una enmienda a la Constitución de Noruega de 1988 impuso a las autoridades del Estado que facilitaran "las condiciones para que el grupo étnico sami pueda asegurar el desarrollo de su idioma, su cultura y su vida social"¹³¹. Noruega se convertía así en uno de los pocos Estados europeos que han introducido en su Constitución el tratamiento que deben recibir sus minorías lingüísticas, aunque sea en términos generales.

2.18.2: SUIZA

La única lengua minoritaria existente en Suiza es el romanche o retorromano. Lo utilizan unas 50.000 personas, la mitad de las cuales vive en su cantón de origen, los Grisones. En él representan un 22% de la población aproximadamente por un 60% de germanófonos y un 14% de italianófonos. En los siglos XIX y XX Bühler y Leza Uffer trataron de codificarlo, unificarlo y normalizarlo, pero siguió dividido en varios dialectos (sursilvan, sutsilvan, surmiran, puter, vallader, etc.), fragmentación mantenida muchas veces por razones religiosas. La Liga Romanche, asociación de defensa y promoción de esta lengua, funciona a partir del compromiso de utilizar el sursilvan los años impares (se convierte en la Ligia Ramontscha) y el ladino vallader los años pares (bajo el nombre de Lia Rumantscha). El sursilvan y el vallader son los únicos reconocidos oficialmente por la legislación cantonal.

Sólo el aislamiento provocado por las montañas explica la supervivencia del retorrománico. La mejora de las comunicaciones entre los distintos valles ha hecho retroceder claramente el uso de esta lengua. La mayor parte de sus hablantes son ya bilingües con el alemán. Se calcula que entre 1941 y 1970 por lo menos 35 municipios romanches se han convertido en mayoritariamente germanófonos y entre 1980 y 1990 en otros seis el romanche ha pasado a ser minoritario. En 1992 de 213 comunas grisonas, 117 hablaban alemán, 72 en romanche y

24 en italiano. En muy pocas escuelas se enseña esta lengua, aunque a partir de los años 1980 los poderes cantonales y locales han desarrollado un sincero esfuerzo de protección de esta lengua¹³².

En 1982 el Consejo Federal decidió traducir al romanche los principales textos oficiales y el Tribunal Federal aceptó escritos en esta lengua. A través de la asociación Helvetia Latina el cantón de Ginebra mantiene una oficina para traducir mensajes al "rumantsch grischun".

La Fundación Pro Helvetia subvenciona semanarios y las emisoras de radio locales emiten un promedio de 4 horas diarias en romanche, aunque este horario es mucho más reducido en la televisión. En 1985 se publicó un nuevo Diccionario y una Gramática con el fin de intentar una nueva normalización. Los expertos afirman que la unificación y codificación de los distintos dialectos es fundamental para su conservación. A la escasa población que utiliza esta lengua se une a su falta de tradición literaria y su fragmentación frente a la penetración del alemán. Sin embargo, cabe la posibilidad de conservarlo, dados los esfuerzos desarrollados últimamente y la psicología social de los suizos de conservar las tradiciones que constituyen sus señas de identidad¹³³.

2.19: EUROPA CENTRAL Y ORIENTAL2.19.1: Principales minorías lingüísticas en Europa Central y Oriental¹³⁴

	<u>Población hablante</u>	<u>Porcentaje sobre total</u>
<u>Albania</u>		
Griegos	75.000	2'4%
<u>Armenia</u>		
Azeríes	90.000	2'6% ¹³⁵
Kurdos	59.000	1'7%
Rusos	56.000	1'6%
<u>Azerbaiyan</u>		
Armenios	410.000	5'6%
Rusos	410.000	5'6% ¹³⁶
<u>Bielorrusia</u>		
Rusos	1.336.000	13'1%
Polacos	403.000	4'2%
Ucranianos	231.000	2'4%

Bulgaria

Turcos	850.000	9%
Macedonios	250.000	2'8%

Croacia

Húngaros	26.000
Italianos	15.000

Eslovenia

Croatas	59.000	3%
Serbios y monteneg	47.000	2'4%

Estonia

Rusos	464.000	30'2%
Ucranianos	36.000	2'5%
Bielorrusos	23.000	1'6%
Fineses	18.000	1'2%

Georgia

Armenios	450.000	8'1%
Rusos	350.000	6'3%
Azeríes	313.000	5'7%
Osetos	165.000	3%
Abjazos ¹³⁷	100.000	1'7%

Letonia

Rusos	464.000	30'2%
Bielorrusos	112.000	4'5%
Ucranianos	67.000	2'7%
Polacos	63.000	2'5%
Lituanos	38.000	1'5%

Lituania

Rusos	345.000	9'4%
Polacos	247.000	7'3%
Bielorrusos	58.000	1'7%

Macedonia

Albaneses	400.000	19'8%
Turcos	86.000	5%
Serbios y monten	52.000	2'6%

Moldavia

Ucranianos	561.000	14'2%
Rusos	560.000	12'9%
Gagausos	138.000	3'5%
Búlgaros	81.000	2%

Polonia

Alemanes	500.000	1'5%
Ucranianos	350.000	1%

Bielorusos	150.000	0'4%
Cajubios	150.000	0'4%
<u>Rumanía</u>		
Húngaros	1.700.000	9%
Alemanes	400.000	2%
Ucranianos	60.000	0'3%
<u>Rusia</u>		
Tártaros	5.022.000	3'7%
Ucranianos	3.658.000	2'7%
Chubajos	1.690.000	1'2%
Pueblos del		
Daguestán	1.402.000	1 %
Baizkiros	1.291.000	0'9%
Mordvanos	1.111.000	0'8%
Bielorrusos	1.052.000	0'8%
Alemanes	791.000	0'6%
Chechenes	712.000	0'5%
Udmurtos	686.000	0'5%
Cheremisos		
(marij)	600.000	0'4%
Kazakos	518.000	0'4%
Armenios	365.000	0'3%
Osetos	352.000	0'3%
Buriatos	350.000	0'3%

Yacutos	327.000	0'2%
Komi (zirianos)	320.000	0'2%
Kabardinos	319.000	0'2%
<u>Serbia y Montenegro</u>		
Albaneses	1.338.000	13'5%
Húngaros	400.000	4%
Croatas	156.000	1'6%
Eslovacos	70.000	0'8%
<u>Checoslovaquia¹³⁸</u>		
Húngaros	600.000	3'8%
Alemanes	60.000	0'4%
Polacos	60.000	0'4%
<u>Ucrania</u>		
Rusos	11.323.000	21'9%
Rumanos y moldavos	416.000	0'8%
Bielorrusos	406.000	0'8%
Polacos	258.000	0'5%
Búlgaros	238.000	0'5%
Húngaros	174.000	0'3%
Griegos	104.000	0'2%
Tártaros	91.000	0'3%

2.19.2: Grupos de minorías

Pierre Kende divide todas estas minorías en tres grupos:

- a) las minorías étnico-culturales aisladas;
- b) las minorías que prolongan una nación vecina;
- y c) las minorías transnacionales.

En el primer grupo el ejemplo más notable es el de los eslovacos, que han querido distinguirse de los checos, o los gagauzos de Moldavia, o los sorabos de la antigua Alemania Oriental. Son grupos étnico-culturales que hablan una lengua distinta a la de sus vecinos y que, habiendo aceptado un cierto grado de asimilación por comunidades nacionales más fuertes, buscan ahora afirmar su personalidad a través de la lengua y, en su caso, la religión.

En segundo lugar se agrupan las minorías que constituyen una prolongación de países vecinos, como los húngaros de Ucrania, Serbia, Rumanía o Eslovaquia, los polacos de Ucrania, de Bielorrusia o de Lituania, o los albaneses de Kosovo. Suelen ser minorías con una larga tradición en el país de acogida (a veces desde el siglo IX) y raramente son el fruto de movimientos incontrolados. Suelen tener y aceptar la nacionalidad del país receptor a raíz de tratados internacionales y variaciones fronterizas.

En tercer lugar, las minorías transnacionales son fundamentalmente los gitanos y los judíos, que en los países de Europa Central y Oriental tienen mucho más peso que en la occidental¹³⁹, aunque en los últimos años ha surgido el fenómeno de las minorías rusas en los antiguos países que formaban la URSS.

2.19.3: Las minorías étnicas y lingüísticas, como detonante de la Europa post-soviética

En todo el proceso de cambios sucedidos en la Europa Central y Oriental a partir del verano de 1989, el hecho nacional y lingüístico ha jugado un papel esencial¹⁴⁰. Ya en los años en que los Estados de régimen comunista ejercían el dominio absoluto de la vida pública a través de los respectivos poderosos partidos comunistas, la conciencia de minoría étnico-lingüística era con frecuencia un refugio válido para evadirse de este control, especialmente en aquellas situaciones en que la concepción de la identidad nacional difería esencialmente de aquella que defendía el Estado soviético. En muchos casos, además, la existencia misma de dicho Estado se justificaba ideológicamente más en la "lucha común" por la revolución socialista de los pueblos que lo habitaban, que no en la pertenencia a una etnia y a una lengua común, lo cual no evitó que en determinadas épocas se intentara imponer la lengua rusa como instrumento revolucionario de todos los soviéticos.

Con el derrumbe del modelo federativo soviético en toda esta parte de Europa, las reivindicaciones lingüísticas de los pueblos sin Estado encontraron más que nunca su razón de ser y un impulso sin precedentes. El factor lingüístico pesó, a veces de forma esencial, en estas renovadas aspiraciones. Es más, en ciertos territorios los movimientos nacionalistas protagonizados por minorías étnicas y lingüísticas dentro del Estado comunista actuaron de detonantes de la nueva situación.

La cuestión báltica, por ejemplo, fue inicialmente el más agudo problema planteado a la *perestroika* impulsada desde 1986 en la URSS por Mikhail Gorbachov. Y mucho más grave fue la reordenación de las nacionalidades en Yugoslavia, proceso que a partir de 1990 desembocó en la desaparición del Estado yugoslavo y en una guerra interna.

A medida que los países comunistas caían en una especie de "vacío ideológico" y en una profunda crisis económica, las instituciones estatales perdieron su cohesión anterior y los ciudadanos se refugiaron en formulaciones nacionalistas muchas veces con raíces atávicas pero que nunca habían dejado de existir. Con ellas renacieron antagonismos étnicos y lingüísticos, así como estigmas que parecían superados desde hacía décadas. La recuperación de la lengua nacional fue en muchos casos el vehículo más palpable para las masas de este proceso de auto-afirmación especialmente en los países con una cultura propia como los Bálticos, Ucrania o los del Cáucaso. En

Moldavia, por ejemplo, la lengua moldava fue proclamada "lengua oficial"¹⁴¹ el 4 de septiembre de 1989, mientras que la independencia no fue proclamada hasta el 20 de julio de 1990.

En Abjazia, república autónoma dentro de la República de Georgia, los abjazos eran minoritarios (17%) frente a los georgianos (24%) y los rusos (19%), y se hallaban fuertemente influídos por la lengua y la cultura de Georgia. Sin embargo, el 18 de marzo de 1988 los abjazos se declararon independientes alegando razones históricas de cuando Abjazia fue un principado independiente en el siglo X y una república en 1922, culturales-religiosas por su islamización bajo el Imperio turco, y lingüísticas, puesto que el 94% de la población hablaba abjazo, aunque sólo el 50% sabía escribirla. Con estas bases se originó uno de los conflictos más graves en el Cáucaso en la primera mitad de los años 1990¹⁴².

Ante la inesperada debilidad de los aparatos estatales comunistas, principalmente de la URSS pero también en otros Estados como Checoslovaquia o Yugoslavia e incluso de los Estados independientes recién nacidos, las reivindicaciones étnico-nacionalistas terminaron por desestabilizar la zona y engendrar algunos conflictos armados, muy serios en los Balcanes y en el Cáucaso. Los cambios de fronteras estatales tropezaron al principio con las reservas de las potencias occidentales, de tal manera que cuando en abril de 1990 el parlamento lituano aprobó unilateralmente la independencia de

este país báltico, no encontró aún apoyos decididos entre los otros Estados europeos y tuvo que entablar negociaciones urgentes con la Unión Soviética.

Tras la reunificación de Alemania en octubre de 1990, los países occidentales hicieron un último esfuerzo para mantener el mapa político trazado por la II Guerra Mundial: las fronteras estatales eran inviolables, proclamó todavía la Carta de París de noviembre de 1991, aunque ya aceptó el principio de autodeterminación de los pueblos y arreglos pacíficos de conflictos fronterizos.

En cualquier caso, en Europa Central y Oriental "el problema de las lenguas minoritarias es especialmente importante, sobre todo desde el punto de vista de los gobiernos autónomos", sostienen rotundamente el húngaro G. Demsky y el checo A. Slafkovsky, que esgrimen como razón de fondo la actual "función mitológica" de estas lenguas, además de las tradicionales de comunicación y de símbolo de la identidad étnica y cultural. "La lengua es la nación, el hogar de una nación. De hecho, durante siglos las naciones de Europa Central y Oriental no se han sentido cómodas más que en su propia lengua. La función simbólica de la lengua tiene una significación suplementaria en esta región. Aparece un dualismo único: la lengua minoritaria se convierte en el símbolo de la unidad nacional, mientras que la lengua del Estado representa la opresión", añaden ambos expertos¹⁴³.

2.19.4: Los nuevos Estados y las antiguas minorías étnicas y lingüísticas

Producida la primera fractura, distintos territorios de Estados federados que ya disponían de un status político e institucional, amén del nacional, emprendieron un rápido proceso de referéndums, elecciones y declaraciones de independencia para darle una cobertura democrática y hacerla creíble ante la opinión pública internacional y la propia. Lituania, Letonia, Estonia, Moldavia, Croacia o Eslovenia formaron parte de esta primera oleada independentista, mientras que otros como Ucrania, Macedonia, Bosnia-Herzegovina o Eslovaquia siguieron sus pasos algo más tarde. Todas estas nuevas repúblicas disponen de lengua propia, distinta de la oficial de su antiguo Estado-marco.

Una vez esbozado el nuevo mapa político, todos los países europeos inmersos en un proceso de unión, abordaron la necesidad de estabilizar las relaciones entre los nuevos Estados democráticos y sus minorías étnicas y lingüísticas para establecer a continuación los vínculos de cooperación que han constituido la base de la construcción europea en el lado occidental. Había que recuperar el desfase existente entre los dos antiguos bloques por lo menos desde la II Guerra Mundial.

Este desfase es el que hasta cierto punto pretendieron superar el Consejo de Europa, la OSCE y la propia UE con

iniciativas políticas como el Pacto de Estabilidad¹⁴⁴ a la hora de estrechar sus relaciones con estos países europeos y con vistas a la ampliación de la construcción de Europa. Así lo reconocieron los primeros ministros de Francia y la RFA, Edouard Balladur y Helmut Kohl, respectivamente, en mayo de 1994. "La iniciativa de los Doce en favor de un Pacto de Estabilidad apunta a impulsar la firma de acuerdos de buena vecindad entre todos los países de Europa Central y Oriental. Es evidente que estos acuerdos no regularán de una vez por todas los problemas que podrían subsistir entre todos estos países, pero deben crear un clima de confianza y poner en marcha modalidades de cooperación que permitan resolver de común acuerdo las dificultades que sobrevendrán. Este principio ha sido la clave de la reconciliación y del proceso de unificación de Europa Occidental tras la última guerra. La relación que une hoy a Francia y a Alemania, considerados durante mucho tiempo como enemigos hereditarios, es la prueba más clamorosa", señalaron ambos mandatarios¹⁴⁵.

El Pacto para la Estabilidad de Europa fue firmado por 52 Estados europeos en París los días 20 y 21 de marzo de 1995, haciéndose cargo de su aplicación la OSCE con financiación de la UE. Al mismo tiempo se firmaron un centenar de acuerdos regionales o bilaterales referidos a minorías étnicas y lingüísticas, entre los cuales destacó el rubricado entre los primeros ministros húngaro, Gyula Horn, y eslovaco, Vladimir Meciar, relativo a la protección de los 600.000 húngaros

residentes en Eslovaquia. En cambio, todavía no fue posible la firma de un tratado entre Hungría y Rumanía, considerado fundamental para evitar tensiones en la zona¹⁴⁶.

En los Estados más estables algunas minorías étnicas y lingüísticas obtuvieron representación parlamentaria en las sucesivas elecciones democráticas. Fue el caso de los turcos en Bulgaria¹⁴⁷, de los alemanes en Polonia, de los polacos en Lituania, de los húngaros en Rumanía o en Eslovaquia, o de los griegos en Albania. Conviene subrayar la ventaja adquirida desde el principio por las minorías lingüísticas apoyadas por Estados vecinos, sobre aquellas otras sin ningún Estado que las apoye¹⁴⁸. Muchos Estados respondieron con medidas de desconfianza, como las de tipo electoral¹⁴⁹, o claramente represivas, anulando en ocasiones ventajas concedidas anteriormente a las minorías, como ocurrió en Bulgaria, o exigiendo el conocimiento de la lengua propia para conceder la nueva ciudadanía, como ocurrió en Letonia.

El nuevo nacionalismo alcanzó no sólo a algunas minorías oprimidas, sino incluso a pueblos que habían formado el núcleo del Estado anterior, donde habían actuado como "pueblo " e incluso dominador. El ejemplo más destacado es el de Serbia, cuyo ultranacionalismo le llevó a perseguir sus propias minorías étnicas y lingüísticas, sobre todo la albanesa en Kosovo y la húngara y croata en Voivodina a partir de 1990, y a apoyar la suya en el resto de la antigua Yugoslavia con las

armas en la mano.

2.19.5: Las nuevas minorías de lengua rusa

Con el nuevo mapa político, pueblos que habían sido mayoritarios se convirtieron en minoritarios y así aparecieron importantes minorías de lengua rusa en distintos Estados, las cuales modificaron sensiblemente la antigua correlación de fuerzas lingüísticas. El Servicio Federal de Migración de Rusia preveía en junio de 1994 recibir a lo largo del año unos cuatro millones de emigrantes rusos que huían de los conflictos inter-étnicos y de las medidas discriminatorias dictadas por antiguas repúblicas de la Unión Soviética, muchas de ellas con una gran repercusión lingüística¹⁵⁰.

Estas minorías reclamaron la protección de su antigua potencia estatal, se opusieron en general a los procesos independentistas e incluso favorecieron intentos de golpes de Estado, por ejemplo en Letonia en enero de 1991, o en Moldavia donde en el verano de 1990 intentaron proclamar una república rusófona, la República Transdniestria con capital en Tiraspol, separada de la de habla moldava o rumana, con capital en Chisinau.

Presencia de población rusa en las antiguas repúblicas soviéticas, según el censo de 1989:

<u>República</u>	<u>Rusos</u> (miles)	<u>% población total</u>
Estonia	0'475	30'3
Letonia	0'906	33'9
Lituania	0'344	9'4
Bielorrusia	1'342	13'2
Moldavia	0'562	12'9
Ucrania	11'355	22'1
Armenia	0'52	1'6
Georgia	0'341	6'3
Azerbaiyan	0'392	7'6

Fuente: Anuario CIDOB 1994, Fundación CIDOB, Barcelona 1995, pág. 515

La importancia que han adquirido estas nuevas minorías rusas en Europa Central y Oriental ha sido subrayada en

distintas ocasiones por las autoridades de la Federación de Rusia. Su ministro de Asuntos Exteriores, Andréi Kozirev, escribía en 1994 que "el problema de los derechos de los rusos en el extranjero próximo es una cuestión real". Según él, casi todo el mundo tiene familiares o amigos rusos que están sufriendo alguna forma de discriminación o que se han convertido en refugiados, pero nadie oye alzarse en su defensa la voz de Occidente. Entretanto, los nacionalistas más radicales explotan ese hecho.

No se puede pasar por alto la diferencia fundamental entre la posición del gobierno ruso y la de los partidarios de una política imperial. Estos últimos consideran a la población rusoparlante de las repúblicas ex-soviéticas como una especie de quinta columna en los nuevos Estados independientes, con lo que siguen esencialmente la misma lógica que Hitler aplicó en 1938 en relación con los alemanes de los Sudetes, siempre según la visión de A. Kózirev. "Los demócratas rusos quieren algo completamente diferente: no privilegios, sino la ciudadanía normal, e igualdad para los rusos de estos Estados..."¹⁵¹.

La presión de los rusófonos ha hecho cambiar de política lingüística a alguno de los nuevos Estados independientes. Este es el caso, por ejemplo, de Ucrania y de Bielorrusia.

El equilibrio lingüístico entre ucranianos y rusoparlantes fue un elemento básico en los comienzos de la vida social y

política de la nueva Ucrania independiente. Tras la presidencia de Leonid Kravchuk, que favoreció abiertamente la recuperación de la lengua ucraniana, asumió la jefatura del Estado Leonid Kuchma, vencedor en las elecciones de 10 de julio de 1994 y más inclinado hacia la minoría rusa. El 19 de julio L. Kuchma pronunció su discurso inaugural en lengua ucraniana, lengua que no dominaba bien, y anunció cambios legislativos para dar a la lengua rusa la condición de idioma oficial, junto con el ucraniano, que en todo caso mantendría la distinción de lengua de Estado¹⁵².

En Bielorrusia el 14 de mayo de 1995 se celebró un referéndum convocado por el presidente Alexandr Lukashenko en el que una de las cuatro preguntas decía textualmente: "¿Está usted de acuerdo en que se dé al idioma ruso el mismo estatuto que al bielorruso?"¹⁵³. El 83% de los votantes aceptó que el ruso adquiriera el mismo rango oficial que el bielorruso, muy minoritario en las zonas urbanas¹⁵⁴.

Porcentaje de rusos que
conocen como segundo idioma
la lengua nacional de la
república de residencia
(1989)

<u>Repúblicas</u>	<u>Porcentaje</u>
Estonia	14%
Letonia	21%
Lituania	33%
Bielorrusia	25%
Ucrania	33%
Moldavia	11%
Georgia	23%
Armenia	32%
Azerbaiyan	14%
Fuente: <u>Anuario CIDOB 1994</u> , Fundación CIDOB, Barcelona 1995, pág. 515	

2.19.6: Las últimas migraciones han retocado el mapa lingüístico

La nueva situación surgida en 1989-90 provocó también movimientos migratorios distintos, que retocaron el mapa lingüístico especialmente por lo que concierne al número de hablantes¹⁵⁵. Estos trasvases de población motivaron una Conferencia de Ministros sobre Movimientos de Personas Provenientes de los Países de Europa Central y Oriental, que se celebró en Viena el 24 y 25 de Enero de 1991 bajo el patrocinio del Consejo de Europa¹⁵⁶.

Muchos judíos emigraron a Israel, Europa Occidental y EEUU; miles de alemanes de Polonia, Checoslovaquia, Rumanía e incluso de Rusia trataron de reintegrarse en la Alemania reunificada, mientras que miles de húngaros salían de Rumanía y parte de la minoría griega escapaba de Albania. También observaron movimientos entre los tártaros de Crimea o de los alemanes desterrados a Siberia hacia la zona del Volga o de Kaliningrado en el Báltico, movimientos migratorios muy difíciles aún de cuantificar¹⁵⁷ y que en términos generales tendían a debilitar las minorías lingüísticas pre-existentes.

"Que buenos profesionales y administradores experimentados, preocupados por la pérdida de su situación privilegiada al favorecerse la promoción social de los kazajos, dejen el país es una importante pérdida. El caso más llamativo es el del

primer ministro Oleg Soskovets que hoy ocupa un cargo similar en el gobierno ruso y que puede ser un caso único en el mundo de un político que haya ocupado un puesto tan importante en dos países sucesivamente.

Aunque las cifras de emigración suelen silenciarse, parece que el año pasado abandonaron el país casi doscientas mil personas, sangría que no se ha podido compensar con la llegada de kazajos de Mongolia y de otros países limítrofes. La composición heterogénea de su población no deja de ser un factor de riesgo social: la población autóctona no es mayoritaria en su propio país. Resulta también paradójico que en el país se hable más otra lengua, la rusa, que la propiamente oficial. Los rusos son también mayoría en el norte, en las ciudades industriales y en la capital", escribe Pedro Vallejo a propósito del Kazajstán¹⁵⁸.

Ni que decir tiene que las distintas guerras, especialmente en los Balcanes y el Cáucaso, han originado otras migraciones forzosas que han acabado de convulsionar el mapa lingüístico. Los propios conflictos conllevan muchas veces cambios en la política lingüística aplicada con anterioridad, como por ejemplo, los intentos para diferenciar el serbio del croata, lenguas que bajo el Estado yugoslavo fueron prácticamente unificadas.

La influencia lingüística en estos conflictos se demuestra también en Ucrania, donde la mayoría rusófona de Crimea se declaró independiente de Kiev tras un referéndum celebrado el 27 de marzo de 1994 y una declaración del Parlamento regional de 20 de mayo restableciendo la Constitución independentista de 1992, decisión anulada unas horas después por el Parlamento ucraniano¹⁵⁹, que fue ratificada el 17 de marzo de 1995¹⁶⁰.

Stalin suprimió la República Tártara de Crimea en 1944 y se calcula que entre 400.000 y 500.000 miembros de esta etnia huyeron a otros territorios. Actualmente son unos 280.000, aproximadamente el 10% de la población total de Crimea¹⁶¹.

2.19.7: El variopinto marco legal

Las fórmulas legales para las relaciones lingüísticas entre las distintas nacionalidades internas son muy distintas en cada Estado y varían desde la adoptada por el Kazajstán que indica el ruso como lengua común, hasta Ucrania que admite todas las lenguas internas para las relaciones inter-étnicas¹⁶². En general, las lenguas minoritarias se hallan todavía reducidas a ámbitos familiares y privados, donde ciertamente son muy activas, y en muy pocos casos gozan de un reconocimiento total para la vida pública, como por ejemplo en la administración o la justicia. Sin embargo, es frecuente que estas lenguas se usen en algún grado de la enseñanza primaria.

Al igual que en la zona occidental, la mayoría de estos Estados imponen una ley común oficial, pero varios de ellos permiten el uso de las otras lenguas incluso para las relaciones entre las repúblicas autónomas (Rusia, Ucrania, Lituania, etc.). Las leyes del Kazajstán y del Tadzjikistán ordenan el uso del ruso exclusivamente para las relaciones entre las distintas administraciones, mientras que Kirguizistán impone el bilingüismo oficial, incluso en las relaciones internacionales.

En Polonia el status legal de sus minorías étnicas y lingüísticas procede de su Constitución, tal como fue enmendada en 1952, del Código Penal, de distintas regulaciones administrativas y en el caso concreto de la minoría alemana del Tratado Germano-Polaco de Relaciones de Buena Vecindad y Cooperación Amistosa de 1991. No hay ninguna ley específica para las minorías lituana, ucraniana, lemka o bielorrusa, lo cual las sitúa en una posición muy insatisfactoria para sus reivindicaciones.

En Eslovenia las minorías húngara e italiana gozan de cierto reconocimiento legal, pero no así la alemana. En Eslovaquia la nueva ley lingüística en vigor desde 1990, ofrece escasas variaciones a las minorías lingüísticas en comparación con la legislación anterior.

Una cuestión aparte son las minorías alemanas, presentes en la mayoría de países de Europa Central y Oriental, que en gran medida han perdido su lengua materna excepto en Rumanía, pero que conservan su conciencia étnica. Las minorías no territoriales pero de fuerte tradición, como los judíos, los gitanos o los musulmanes tienen un peso mucho mayor que sus correligionarios de Europa Occidental.

2.19.8: La protección de los Estados hacia sus minorías nacionales en los países de adopción

La escasa protección que las minorías lingüísticas hallan en general en sus propios Estados, las empuja con frecuencia a buscarla en los países de origen. Las intervenciones de estos Estados-madre suelen resolverse por el principio de reciprocidad aplicado mediante acuerdos bilaterales. A veces este mismo principio sirve para rechazar un acuerdo internacional, como ocurre entre Italia y Eslovenia. Además del mencionado Tratado germano-polaco de 1991, hay que citar el acuerdo entre Moldavia y Ucrania, que establece derechos mutuos para las respectivas minorías.

Se ensayaron incluso soluciones inéditas, como la figura del Comisario para los Derechos Humanos creado por el Consejo de Estados del Mar Báltico. Se trata de un puesto cuya fundación exigió Rusia para la protección de las minorías rusas

residentes en Estonia, Letonia y Lituania¹⁶³. Según el propio ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Andrei Kózirev, los gobiernos bálticos pretendían vengarse de la población rusa residente ahora allí a causa de la invasión de estos países por el Ejército Rojo en 1940 mantenida hasta 1991. Estonia y Letonia no reconocieron la nueva ciudadanía a los inmigrantes rusos posteriores a 1940, a menos que la solicitaran y demostraran un nivel suficiente de conocimiento del idioma local¹⁶⁴.

Al estilo de los países occidentales, los de Europa Central y Oriental se proclaman "Estados-nación", por más que casi todos ellos también comprenden varias nacionalidades en su interior. Así, Rumanía se define como un Estado-nación unitario, aunque contiene de dos a cinco millones de gitanos, dos millones de húngaros, y una veintena de minorías numéricamente más reducidas. La Constitución checoslovaca antes de la partición de 1993 entre las Repúblicas de Chequia y Eslovaquia, también se definía como un Estado-nación, prescindiendo de que el censo de 1991 incluía 1'3 millones de moravos, 587.000 húngaros, 114.000 rumanos, 61.000 polacos, 53.000 alemanes, 20.000 ucranianos¹⁶⁵.

2.19.9: Las presiones externas al nuevo orden lingüístico en la Europa Central y Oriental

El reordenamiento de las minorías lingüísticas en los países de Europa Central y Oriental tropieza con las lógicas dificultades de orden económico, social, político, religioso y étnico, además de las forzosas implicaciones internacionales. Por citar sólo un ejemplo, el 1 de junio de 1994 el presidente de Turquía, Suleimán Demirel, visitó oficialmente la República de Moldavia para estudiar la concesión por parte del gobierno moldavo de un estatuto de autonomía para la minoría gagaus, pueblo de origen turco. El presidente de Moldavia, Mircea Snegur, se declaró dispuesto a negociar dicho estatuto, paralelo al solicitado por la minoría rusa del Transdniester, y a recibir ayuda de Turquía para el desarrollo del pueblo gagaus¹⁶⁶.

Los días 18 y 19 de octubre de 1994 se celebró en Estambul una reunión entre los presidentes de Turquía, Azerbaiyán, Kazajstán, Uzbekistán, Turkmenistán y Kirguizistán, que reivindicó la existencia de un bloque de naciones de lengua y cultura turcas entre China y Turquía.

Al día siguiente se celebró en Esmirna una "Conferencia de Amistad, Hermandad y Cooperación entre los Estados y Naciones Turcas" en la que Tadzjikistán susbtituyó a Azerbaiyán. Esta Conferencia iba dirigida fundamentalmente a las naciones de

etnia turca dentro de la Federación Rusa y de la Comunidad de Estados Independientes (CEI)¹⁶⁷. La base común para convocar esta reunión en la cumbre fue la lengua turca, es decir que una vez más la lengua se convertía en el elemento de partida que permite alianzas internacionales de zona. En esta ocasión el factor lingüístico turco predominó sobre el ruso¹⁶⁸.

NOTAS AL CAPITULO II

1. DEUTSCH, K.W.: Las Naciones en Crisis, Ed. Fondo de Cultura Económica, México 1981, pág. 48
2. COMMISSION DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION, DE L'INFORMATION ET DES SPORTS DU PARLEMENT EUROPEEN: La situation des Langues Minoritaires dans la Communauté Européenne, 2 octobre 1986
3. STEPHENS, MEIC: Linguistic Minorities in Western Europe, Londres 1978, págs. 218-220
4. PETSCHEN, SANTIAGO: "Entre la Política y el Derecho: la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias" en Revista de Estudios Políticos, nº 66, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid 1989, págs. 136-137.
5. SIGUAN, MIQUEL: Conferencia dentro del ciclo "¿Europa, una sociedad multicultural" organizado en Madrid por la Cátedra Joan Maragall de la Fundación Ortega y Gasset y la Fundación "La Caixa" el 10 de mayo de 1994
6. BAÑERES, JORDI: "El bilingüismo en Europa" en Repercusiones de la entrada en la CEE. Perspectivas desde Euzkadi, Bilbao 1986, págs. 228-229
7. LE BUREAU EUROPEEN POUR LES LANGUES MOINS REPANDUES: Unité dans la Diversité, Dublín 1994, pág. 2
8. Para una visión general de las minorías lingüísticas en la República Federal de Alemania consúltese la obra The Dialects of Modern German - A Linguistic Survey, por ALASTAIR G. H. WALKERS, Editado por Carles V. J. Rius, Stanford University Press, Stanford (California).
9. Manifiesto frisón proclamado en Upstalboom el 28 de agosto de 1955
10. Declaración del Gobierno de la República Federal de Alemania sobre el Estatuto de la Minoría Danesa en Alemania hecha al final de las Negociaciones con el Gobierno Danés, el 29 de marzo de 1955
11. Declaración de Kiel de 26 de septiembre de 1949 del Gobierno Regional del Schleswig-Holstein sobre la posición a tomar con respecto a la Minoría Danesa. Fue substituída por la Declaración de 1955

12. Declaración de Kiel del Gobierno Regional de Schleswig-Holstein sobre la posición a tomar con respecto a la Minoría Danesa (1949) y Declaración del Gobierno de la República Federal de Alemania, hecha al final de las Negociaciones con el Gobierno Danés, el 29 de marzo de 1955

13. COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES: Op. cit. pág. 240

14. FARGUES, ALFRED: "L'ús administratiu del danès a la zona fronterera germano-danesa" en Llenqua i Administració, Ed. Escola d'Administració Pública de la Generalitat de Catalunya, Barcelona 1994, págs. 295-309

15. OSCHLIES, WOLF: "Les langues de notre Communauté: Allemagne" en Contact Bulletin, vol. 8, n° 2 & 3, automne 1991, pág. 4

16. ZIESCH, BERNARD: "The Sorbs, a Slavic minority in Germany" en Contact Bulletin, vol. 7, n° 3, winter 1990-91, pág. 6

17. "Les membres du Parlement Européen contre la menace de destruction de territoires de peuplement sorabe en Basse-Lusace" en Contact Bulletin, Vol. 12, n° 1, Été 1995, págs. 8 y 9

18. Apartados 7 y 8 de la Ley Federal de 1959 sobre la Enseñanza Primaria en Carintia (Austria)

19. Artículos 1 a 12 de la Ley Federal de 14 de abril de 1959 sobre uso de las lenguas en los tribunales de Carintia (Austria)

20. Son Bullange, Reuland, Butgenbach, Eupen, Kelm, Lontzem, Rearen y Sankt Vith en la Neu-Belgien, y Plomieres, Welkenraedt, Baelen, Arlon y Ares en la Alt-Belgien.

21. WISTI, FOLMER: "Decentralisation and Regional Autonomy in the Nordic Countries" en Federalisme, Regionalisme el Droit des Groupes Ethniques en Europe. Hommage a Guy Héraud, Edité par Théodor Veiter, Ethnos 30, Braumüller, Wien 1989, págs. 485-487.

22. El artículo 14 de la Convención Europea dice que "el goce de los derechos y libertades reconocidos en el presente Convenio ha de ser asegurado sin distinción alguna, especialmente por razones de sexo, raza, color, lengua, religión, opiniones políticas u otras, origen nacional o social, pertenencia a una minoría nacional, fortuna, nacimiento o cualquier otra situación".

23. Declaración del Gobierno de Dinamarca sobre el estatuto de la minoría alemana en Dinamarca hecha al final de las negociaciones con el gobierno alemán, el día 29 de Marzo de 1955 en Bonn.

24. UTH, MANFRED: "Denmark, The German Minority" en Contact Bulletin, Vol. 8, Nos. 2 & 3, Autumn 1991, pag. 10

25. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA: Censo de población de 1991. Población de hecho al 1 de marzo de 1991

26. SOLE i SUBIRATS, JOSEP M.: La repressió franquista a Catalunya, 1936-1953, Ed. 62 Barcelona 1985. En esta obra se citan distintos bandos de alcaldes y gobernadores ordenando la inmediata substitución de toda la rotulación en catalán por otros en castellano, así como otras medidas represivas para la lengua

27. COLOMINES, JOAN: La lengua nacional de Catalunya, Col. Temes d'Actualitat, nº 5, Generalitat de Catalunya, Barcelona 1992

28. El artículo 3 del Estatuto de Autonomía de Cataluña de 1979 dice textualmente: "1) La lengua propia de Cataluña es el catalán. 2) El idioma catalán es el oficial de Cataluña, así como también lo es el castellano, oficial en todo el Estado español. 3) La Generalidad garantizará el uso normal y oficial de los dos idiomas, adoptará las medidas necesarias para asegurar su conocimiento y creará las condiciones que permitan alcanzar su plena igualdad en lo que se refiere a los derechos y deberes de los ciudadanos de Cataluña. 4) El habla aranese será objeto de enseñanza y de especial trato y protección". Este artículo sirvió de modelo para los correspondientes de los Estatutos de Baleares y de la Comunidad Valenciana

29. Ley 7/1983 de 18 de abril. D.O. de la Generalidad de Cataluña nº 322 de 22 de abril de 1983. Rectificada con arreglo a los Diarios Oficiales de 27 de abril y 18 de mayo, números 323 y 329. El Título V de la ley está dedicado al aranés, variante del occitano que se habla en el Valle de Arán

30. Sentencia del Tribunal Constitucional 710/94 de 23 de diciembre de 1994. BOE: Separata 19 de 23 de enero de 1995

31. Ley Orgánica de 1 de julio de 1982 o Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana

32. El artículo 7 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma Valenciana establece la co-oficialidad del catalán y del castellano y requiere la aprobación de una ley específica de normalización: "1) Los dos idiomas oficiales de la Comunidad Autónoma son el valenciano y el castellano. Todos tienen derecho a conocerlos y a usarlos. 2) La Generalidad valenciana garantizará el uso normal y oficial de las dos lenguas y adoptará las medidas necesarias para asegurar su conocimiento. 3) Nadie podrá ser discriminado por razón de su lengua. 4) Se otorgará especial protección y respeto a la recuperación del valenciano. 5) La ley establecerá los criterios de aplicación de la lengua propia en la Administración y en la enseñanza. 6) Mediante ley se determinarán los territorios en los que predomine el uso de una y otra lengua así como los que puedan exceptuarse de la enseñanza y del uso de la lengua propia de la Comunidad".

33. Según el artículo 3 del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares, "la lengua catalana, propia de las Islas Baleares, tendrá, junto con la castellana, el carácter de idioma oficial, y todos tienen el derecho de conocerla y de utilizarla. Nadie podrá ser discriminado por razón del idioma". Ley Orgánica

2/1983 de 25 de febrero

34. Ley del Parlamento Autónomo 3/1986 de 29 de abril

35. Artículo 7 del Estatuto de Autonomía de Aragón

36. BOE de 27 de diciembre de 1986

37. Decreto 227/1991 de 7 de mayo publicado en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, número 1514, de 6 de Noviembre 1991, pág. 5576

38. SIGUAN, MIQUEL: Op. cit., pág. 62

39. Ver los resultados de sendas encuestas elaboradas por la Universidad de Barcelona y la Universidad Autónoma de Barcelona y publicadas por La Vanguardia de 31 de octubre de 1993, pág. 29

40. Ver resumen publicado por el diario Avui del día 24 de octubre de 1993, pág. 17

41. Diario Oficial de la Generalitat Valenciana de 24 de agosto de 1994

42. En abril de 1994 TVE-1 emitía un mínimo de seis horas a la semana en catalán, mientras que TVE-2 más de 15 horas semanales

43. PALLAROL, JULI: "Situació a la Franja de Llengua Catalana d'Aragó", en Dret Lingüístic: Actes del Simposi de Dret Lingüístic, Escola d'Administració Pública de Catalunya, Generalitat de Catalunya, Col·lecció Materials N° 11, Barcelona 1989

44. YAGÜEZ, LAURA: "Reportajes en castellano y catalán en la cadena ARTE" en La Vanguardia, 1 de Septiembre de 1994, Revista de Comunicación pág. 11

45. Ley 10/1982 de 24 de noviembre. Boletín Oficial del País Vasco n° 160 de 16 de diciembre de 1982

46. Proposición de ley sobre la participación de la Administración del Estado en la normalización de las lenguas de las nacionalidades y regiones, presentada por el PNV. Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 1988. Serie B, n° 123-1.

Resolución del Parlamento vasco sobre la normalización del uso del euskera en las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco de 1989.

Ley de la Normalización Lingüística en la Función Pública Vasca de 1989.

47. Artículo 9 de la Ley de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra de 1982: "1) El castellano es la lengua oficial de Navarra. 2) El vascuence tendrá también carácter de lengua oficial en las zonas vascoparlantes de Navarra. Una ley

foral determinará dichas zonas, regulará el uso oficial del vascuence y, en el marco de la legislación general del Estado, ordenará la enseñanza de esta lengua". Ley Orgánica de 10 de agosto de 1982 nº 13/82

48. Ley Foral 18/1986 de 15 de diciembre. Esta ley utiliza el vocablo "vascuence" en lugar del de "euskera"

49. SIGUAN, MIQUEL: Op. cit., pág. 71

50. En Navarra llegaron a ser unas 40 "ikastolas" repartidas por toda la región con un total de 5.000 alumnos

51. Orden de 10 de septiembre de 1987 del Ministerio de Educación y Cultura sobre la Enseñanza del Vascuence en los Centros Docentes de la Comunidad Foral de Navarra. BOE de 12 de septiembre de 1987

52. Ley del País Vasco 5/1982 de 20 de mayo, de creación del Ente Público "Radio y Televisión Vasca". B.O. del País Vasco de 2 de junio de 1982

53. El artículo 5 del Estatuto de Autonomía de Galicia de 1981 (Ley Orgánica de 6 de abril de 1981, nº 1/81) dice textualmente: "1) La lengua propia de Galicia es el gallego. 2) Los idiomas gallego y castellano son oficiales en Galicia y todos tienen el derecho de conocerlo y usarlo. 3) Los poderes públicos de Galicia garantizarán el uso normal y oficial de los dos idiomas y potenciarán la utilización del gallego en todos los órdenes de vida pública, cultural e informativa, y dispondrán de los medios necesarios para su conocimiento. 4) Nadie podrá ser discriminado por razón de la lengua."

54. Ley 3/1983 del Parlamento gallego de 15 de junio de 1983. D.O.G.A: nº 84 de 14 de julio de 1983

55. TOLIVAR ALAS, LEOPOLDO: "Normalización lingüística y Estatuto asturiano" en Revista de Llengua i Dret, nº 12, Barcelona, Juliol 1989, págs. 171-186.

56. Decreto 104/1985 de 17 de octubre. B.O. del Principado de Asturias de 7 de noviembre de 1985

57. SIGUAN, MIQUEL: Op. cit., págs. 79-80

58. El artículo 3.4 del Estatuto de Autonomía de Cataluña dice textualmente: "El habla aranesa será objeto de enseñanza y de especial trato y protección"

59. El artículo 7 del Estatuto de Autonomía de Aragón (Ley Orgánica 8/1982 de 10 de agosto) dice textualmente: "Las diversas modalidades lingüísticas de Aragón gozarán de protección como elementos integrantes de su patrimonio cultural e histórico".

60. VESTERBACKA, SIV: Entrevista de Lluís Bonada en Avui de 18 de novembre de 1989, pág. 14
61. PASTOR, CARLES: "Finlandia: El respeto al bilingüismo" en El País de 22 de noviembre de 1993, pág. 20
62. MODEEN, TORE: "Situació jurídica de la població sueca de Finlàndia" en Revista de Llengua i Dret n° 9, Juny 1987, pàgs. 99 a 115
63. CAMINO SANCHEZ, MARIA: "Nuevo estilo, pero dentro de un orden", crónica en la Agencia EFE de 7 de febrero de 1994, pág. 1
64. WISTI, FOLMER: "Descentralization and Regional Autonomy in the Nordic Countries" en Federalisme, Regionalisme, et Droit des Groupes Ethniques en Europe. Hommage à Guy Héraud, Ethnos 30, Braumüller, Wien 1989, pág. 489-490
65. ORIOL RAMON - AURELI ARGEMI: "Questions nacionals i de minories en la Unió Europea ampliada" en Europa de les Nacions n° 21, primavera 1994, pàgs. 18 a 20
66. Despacho de la Agencia France Presse fechado en Bayona el 23 de julio de 1994
67. QUINTA, ALFONS: "Quan el rival de l'euskera és el francès" en Avui, de 15 de octubre de 1994, pág. 13
68. COUTELLER, J.P.: Entrevista de Inmaculada Fàbregas en Europa de les Nacions, n° 22, estiu 1994, pàgs. 11 a 13
69. FAVEREAU, FRANCIS: Bretagne contemporaine. Langue, culture, identité, Morlaix, Editions Skol Vreizh, 1993, 224 pàgs.
70. "Le gallo et Bertaeyn Galeizz" en Contact Bulletin, Vol. 11, n. 3, hiver 1994/95, pág. 4
71. Ley 91-428 de 13 de mayo de 1991 otorgando un Estatuto a la colectividad territorial de Córcega. JORF de 14 de mayo de 1991, pàgs. 6318 a 6329
72. BONNOT, OLIVIER: "Du bilinguisme à la co-officialité: réflexion autour de l'article 53 alinéa 2 du statut de la collectivité territoriale de Corse" en Revista de Llengua i Dret, n° 19, juliol 1993, pàgs. 67 a 79
73. QUINTA, ALFONS: "Alsàcia, entre França i Alemanya" en Avui de 17 de abril de 1995, pág. 8
74. La circular n° 28-261 de 21 de junio de 1982
75. KREMnitz, GEORG: "La situació de l'Occità dins l'Estat francès" en Llengua i Administració, Escola d'Administració Pública de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1984, pàgs. 279-294

76. MCKINNON, KENNETH: Gaelic: A Past and Future Prospect, Published by Saltire Society, Edinburgh 1992
77. Ley de 27 de julio de 1967.
78. STRUBELL I TRUETA, MIQUEL: "Iniciatives per reforçar l'estatus legal del gal.lès" en Revista de Llengua i Dret, n° 16, Barcelona desembre 1991, págs. 231-235
79. The Welsh Language Bill (1993), reproducido en Contact Bulletin, vol. 10, n° 2, autumn 1993, págs. 2 y 3
80. COROMINAS, MARIA: "Sianel Pedwar Cymru: A Welsh TV Channel by Popular Decision" en Europa de les Nacions, n° 6, Novembre-Desembre 1988, págs. 44-45.
81. DAVIES, JANET: The Welsh Language, University of Wales Press, Cardiff 1993, pág. 3
82. El Tratado entre el Reino Unido y la República de Irlanda fue firmado el 15 de noviembre de 1985
83. Ó HIFEARMÁIN, TADHG: "Illa de Man: Dependència i independència" en Europa de les Nacions, n° 19; págs. 10-12.
84. ERSOY, AHMET: "Ethnic Turks in Thrace", en The Economist de 20 de Abril de 1991.
85. SIGUAN, MIQUEL: Op. cit., págs. 89-90
86. SIGUAN, MIQUEL: Op. cit., pág. 91
87. OLIVARES, ALFONS: "Macedònia, encreuament de camins", en Europa de les Nacions, n° 12, 1991-92, pág. 14
88. SIGUAN, MIQUEL: Op. cit., pág. 92
89. PARTAL, VICENT; "Grècia, contra tot i contra tothom" en El Temps, 19 de julio de 1993, págs. 34 a 36
90. Ferrarini, Visibelli, Liberatori, Caldoro, Foschi, Severin, Radulescu Botica, Ferrari, Roseta, de Puig, P. Caccia, Bernardini y Masseret.
91. CONSEJO de EUROPA: Doc: 7091 de 30 de mayo de 1994
92. SIGUAN, MIQUEL: Op. cit., pág. 93
93. SIGUAN, MIQUEL: Op. cit., pág. 94
94. Actualmente hay siete áreas Gaeltacht: Donegal, Mayo, Galway, Kerry, Cork, Waterford y Meath.
95. PIZZORUSSO, ALESSANDRO: "Il regime giuridico delle lingue in Italia" en Dret Lingüístic, Col.lecció Materials n° 11, Barcelona 1989, págs. 215 a 231

96. Ley de 22 de mayo de 1971 n° 350, G.U. 148
97. Ley de 28 de julio de 1971 n° 519, G.U. n° 195
98. Ley de 22 de mayo de 1971 n° 347. G.U. n° 148
99. Decreto de la Presidencia de la República del 8 de agosto de 1959, n° 688
100. Decreto de la Presidencia de la República de 23 de mayo de 1960, n° 671
101. Véase el Título XI, artículos 99 a 102, del Estatuto Especial de 1972 que regula el uso del alemán y del ladino. Decreto de la Presidencia de la República del 20 de noviembre de 1972, n° 301
102. Decreto de la Presidencia de la República del 8 de agosto de 1959 n° 688 sobre Normas de Aplicación del Estatuto Especial para la Región del Trentino-Alto Adigio en materia de Uso de la Lengua Alemana
103. PETSCHEN, SANTIAGO: Op. cit., págs. 527 a 541
104. GRUNING, HANS GEORG: "Langues et glottopolitiques en Tyrol du Sud" en Revista de Llenqua i Dret, n° 19, juliol 1993, págs. 95 a 104
105. "Reconnaissance de la communauté walser" en Contact Bulletin Vol 11, n. 2, Été 1994, pag. 7
106. Ley 3-1993-1 del Consejo Regional de Cerdeña de 7 de Octubre de 1993 sobre Tutela y Valoración de la Cultura y la Lengua de Cerdeña
107. Sentencia n. 290 de 13 de julio de 1994 della Corte Costituzionale de la República Italiana. Doc: Bolletino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna, Cagliari 25 de julio de 1994, Anno 46° n° 24
108. BOSCH, ANDREU: "El català de l'Alguer davant del nou marc legal" en Avui de 25 de agosto de 1994, pág. 15
109. PETSCHEN, SANTIAGO: Op. cit., pág. 386
110. Artículo 7 de la Ley de 22 de mayo de 1971 n° 338. G.U. n°148
111. Artículos 38 a 40 de la Ley Constitucional n° 4/1948 de 26 de febrero de 1948. G.U. de 10 de marzo de 1948, n° 59
112. PEZZOLI, JEAN: "Droit linguistique et éducation bilingue au Val d'Aoste" en Revista de Llenqua i Dret n° 9, Junio 1987, págs. 79 a 98

113. El artículo 102 del Estatuto dice textualmente que "en las escuelas de los municipios de la provincia de Trento donde se habla el ladino, se garantizará la enseñanza de la lengua y la cultura ladinas"

114. Ver MERCATOR n° 13 de junio de 1993, págs. 1 a 3

115. Estatuto de Friul-Venecia Julia aprobado por Ley Constitucional el 31 de Enero de 1963

116. Ver MERCATOR n. 12 de abril de 1994, págs. 1-10

117. Sentencia de 13 de julio de 1994, n. 290, año 1994 de la Corte Costituzionale de la República Italiana. Doc: Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna, Cagliari 25 de julio de 1994, n. 24, Anno 46°

118. Se trata del Memorándum de Acuerdo entre los Gobiernos de Italia, del Reino Unido de Gran Bretaña y de Irlanda del Norte, de los Estados Unidos de América y de Yugoslavia, relativo al Territorio Libre de Trieste, firmado en Londres el 5 de Octubre de 1954

119. El artículo 5 del Estatuto establecía el derecho de los eslovenos a utilizar su propia lengua en sus relaciones oficiales con la Administración y los tribunales y a obtener respuestas (directas o por medio de un intérprete) en la lengua de la minoría

120. El Tratado de Osimo se firmó el 10 de noviembre de 1975, fue ratificado por Italia el 14 de marzo de 1977 y entró en vigor el 3 de abril del mismo año

121. Las disposiciones de este Tratado fueron incorporadas a la legislación italiana por medio de la ley n° 73 de 14 de marzo de 1977

122. STRANJ, PAVEL: The Submerged Community, an A-Z of the slovenes in Italy, Ed. Slovene Research Institute, Trieste 1991

123. Ley de 24 de Febrero de 1984 sobre el Régimen de Lenguas en Luxemburgo

124. VAN DER GOOT, AUKE, "Language Policy in Friesland" en Contact Bulletin, Vol. 9 n° 2, Autumn 1992, pág. 3

125. SIGUAN, MIQUEL: Op. cit., pág. 84 y 85

126. WISTI, FOLMER: Op. cit., págs. 491-492

127. ORIOL RAMON - AURELI ARGEMI: "Qüestions nacionals i de minories en la Unió Europea ampliada" en Europa de les Nacions, n° 21, Primavera 1994, págs. 21 y 22

128. VENTURA, JORDI: "Els saami, poble europeu del Cercle Polar Artic" en Revista de Catalunya n° 81, Gener 1994, págs. 47 a 68

129. Real Decreto de 25 de enero de 1853 del Ministerio de Asuntos Educativos y Eclesiásticos, dotando económicamente a los profesores de noruego en las provincias septentrionales con población lapona. El punto segundo afirmaba que no se modificaría el Decreto de 28 de febrero de 1848 sobre examen en el idioma lapón.

130. Instrucción de 18 de abril de 1898 sobre el uso del sami y del kvensk como segunda lengua en las escuelas primarias. En ella el gobierno utiliza el término "lappisk" para referirse a los sami o lapones.

131. Esta enmienda fue aprobada en abril de 1988 y en ella ya se habla de los "sami", de acuerdo con la terminología que desea este pueblo

132. N. Z.: "El romanx va desapareixent de Suïssa" en El Temps nº 447 de 11 de enero de 1993

133. LAPIERRE, J.W.: Op. cit., págs. 58 a 64

134. Fuente: Dossier CIDOB, nº 39, Febrero 1992, pág. 21. Esta se basa a su vez en los censos soviéticos de 1979 y 1989, en el yugoslavo de 1981 y en estimaciones diversas.

135. La mayoría huyó del país a causa del conflicto de Nagorno Karabaj

136. Después de 1989 la casi totalidad de armenios y una parte de los rusos han abandonado el país

137. La población abjaza en Abjazia se eleva a casi el 18%

138. Checoslovaquia se dividió el 1 de enero de 1993 entre las Repúblicas de Chequia y de Eslovaquia

139. KENDE, PIERRE: "Comment gérer le problème des minorités en Europe centrale et orientale?" en Notes et Etudes Documentaires, nº 4964-65, 1992, págs. 13 a 20

140. GELLNER, ERNEST: "Nationalism and Politics in Eastern Europe" en New Left Review, nº 133, 1991, págs. 127 a 134

141. Se mantuvo el ruso como "lengua de comunicación inter-étnica".

142. PARTAL, VICENT: "Els abkhazos conquesten la seua capital" en EL Temps, nº 486, 11 de octubre 1993

143. DEMSZKY, G. y SLAFKOVSKY, A.: Rapport sur les Autonomies, Minorités, Nationalismes et Union Européenne a la XXVIIème Session Plénière de la Conférence Permanente des Pouvoirs Locaux et Régionaux de l'Europe, Strasbourg 17-19 mars 1992. Doc: CPL (27) 4, Partie II b, págs. 5 y 6

144. BARRIOS, PABLO: "El Pacto de Estabilidad en Europa" en Política Exterior nº 40, Vol. VIII, Agosto/Septiembre 1994, págs. 21 a 30

145. BALLADUR, EDOUARD y KOHL, HELMUT: "Preparar la paz" en Le Monde y reproducido por El País de 27 de mayo de 1994, pág. 13

146. CEMBRERO, IGNACIO: "50 países firman hoy en París el Pacto de Estabilidad para la Europa del Este" en El País, de 20 de marzo de 1995, pág. 2

147. En 1994 el Movimiento para los Derechos y Libertades (MDL), encabezado por Ahmed Dogan, agrupaba a la fuerte minoría turca en Bulgaria (10% de la población) y en el Parlamento nacional actuaba de árbitro entre los dos grandes partidos, el Partido Socialista Búlgaro y la Unión de Fuerzas Democráticas, con una escasa diferencia en número de escaños.

148. SELLIER, JEAN et SELLIER, ANDRE: Atlas des Peuples d'Orient (Moyen Orient, Caucase, Asie Centrale), Ed. La Découverte, Paris 1993, págs. 88 a 112

149. La mayoría de habitantes de origen ruso de Estonia no pudieron participar en las elecciones generales celebradas el 5 de marzo de 1995, por no tener reconocida la ciudadanía estonia. Para acceder a ella se exige el conocimiento de la lengua estonia. A pesar de ello, el partido **Nuestro Hogar es Estonia** de la minoría rusófona obtuvo 6 de los 101 escaños con el 5'9% de los votos

150. Despacho de la Agencia EFE de 7 de junio de 1994

151. KOZIREV, ANDREI: "En busca de una estrategia conjunta" en Política Exterior, Vol. VIII, nº 39, julio 1994, pág. 43

152. Despacho de la Agencia "France Presse" de 19 de julio de 1994

153. FERNANDEZ, RODRIGO: "Bielorrusia vota en referéndum una mayor integración con Moscú" en El País, 15 de mayo de 1995, pág. 8

154. Despacho de la Agencia EFE fechado en Minsk el 15 de mayo de 1995

155. "Eastern Europe's Diasporas" en The Economist, December 26th 1992 / January 8th 1993, págs. 39-42

156. Los Pueblos del Este en Europa (I), Ed. Fundación Encuentro, Servicio de Documentos, Cuaderno nº 108, Febrero 1991

157. GROUPEMENT POUR LES DROITS DES MINORITES (ed.): Nouvelle Europe: Minorités et Réfugiés. Actes de colloque. Les minorités de l'est européen à la lumière des récents changements de régimes et leur impact sur l'immigration en Europe, Condé-sur-Noireau: Les rapports du G.D.M., 1993, 306 págs.

158. VALLEJO, PEDRO: "Kazajstán, un gran país surge en el mapa" en Política Exterior, Vol.VIII, nº 39, julio 1994, pág. 124

159. GANIN, LEV: "El Gobierno de Crimea desafía a Ucrania al aprobar la Constitución independentista de 1992" en El Mundo de 21 de mayo de 1994, pág. 18

160. POCH, RAFAEL: "Ucrania aprovecha la guerra de Chechenia como cobertura para someter Crimea" en La Vanguardia de 19 de marzo de 1995, pág. 6

161. ARGEMI, AURELI: "Tàtars, ucraïnesos i russos pugnen per Crimea" en Europa de les Nacions, nº 21, Primavera 1994, págs. 12 a 15

162. MAURAI, JACQUES: "Les lois linguistiques soviétiques de 1989 et 1990" en Revista de Llengua i Dret, nº 15, juny 1991, págs. 75 a 90

163. El cargo de Comisario para las Instituciones Democráticas y de los Derechos de las Personas y de las Minorías fue creado el 25 de mayo de 1994 y su primer titular fue el ex-ministro de Justicia de Dinamarca, Ole Espersen, con una larga experiencia en el Consejo de Europa.

164. Despacho de la Agencia EFE de 25 de mayo de 1994

165. KERN, Rudolf: "Linguistic Minorities in Eastern Europe" en Contact Bulletin, Vol. 9, nº 1, Spring 1992, pág. 3

166. Despacho de la Agencia EFE de 1 de junio de 1994

167. TILIC, DOGAN: Crónica de la Agencia EFE fechada en Esmirna el 20 de octubre de 1994.

168. GARCIA, JESUS: "Rusia teme la preponderancia de Turquía en las repúblicas ex-soviéticas" en ABC de 22 de Octubre de 1994, pág. 38

CAPITULO III

EL PRINCIPIO DEL CAMBIO. LA CREACIÓN DE UNA UNION EUROPEA PLURILINGUE

3.1: Objetivos y estructura del Capítulo

El panorama lingüístico de Europa dominado secularmente por unas lenguas de Estado protegidas por los gobiernos centrales y compitiendo entre ellas y por unas lenguas minoritarias marginadas o perseguidas en pugna con la(s) del Estado, cambió de forma radical con la aparición de distintas instituciones con vocación pan-europea como la CEE, el C. de E. y la CSCE. Con ellas, y muy especialmente con la CEE, surgió un nuevo modelo lingüístico a escala continental, el del multilingüismo integral.

La implantación y progresiva expansión de dicho modelo se incardinó en una idea de Europa a la vez unida, democrática y múltiple. La democracia lingüística proporcionó a todas las lenguas y a todos los pueblos los mismos derechos y relegó los privilegios de las lenguas universales al ámbito estatal o privado. En Europa ninguna lengua es "más" que las otras, excepto por lo que se refiere al número de hablantes, a su mayor o menor aceptación social, y a su producción cultural, en una palabra a sus propios méritos. No existen lenguas hechas o destinadas para la revolución, el progreso, los intercambios internacionales y, en opinión de lagunos, ni siquiera para la definición y cohesión de los Estados-nación, que a grandes rasgos han mantenido la misma filosofía lingüística desde su nacimiento.

La brecha estaba abierta. Si en el marco europeo todas las lenguas de Estado tienen que gozar, y de hecho gozan, del mismo nivel de derechos, ¿por qué no se procedía al mismo planteamiento en el ámbito estatal, en las relaciones entre las lenguas de Estado y las minoritarias? En general, los Estados no aceptaron este paralelismo, aduciendo razones internas de unidad y de seguridad, por lo que salvo en contadas ocasiones, fueron las instituciones europeas las que mostraron una mayor receptividad a las demandas de las lenguas minoritarias y marcaron el camino a seguir. Para ello, según veremos a continuación, dispusieron de dos instrumentos básicos: la progresión de los derechos humanos y el auge de los regionalismos, portavoces muchas veces de las reivindicaciones lingüísticas frente a los Estados y ante la nueva Europa unida.

El hecho de que los mismos países de la UE participaran activamente en el C. de E. y en la CSCE hizo que se produjera una interconexión entre ellos, un "trasvase" de problemas y, por lo mismo, de enfoques lingüísticos. Sería un grave error considerar cada institución como un terreno cerrado e impermeable a este tipo de cuestión. Por el contrario, la constante intensificación de las relaciones plantea un primer problema práctico más que doctrinal, que se alarga a la hora de establecer unas normas globales y comunes. Sin lugar a dudas, para la construcción europea resultaría muy negativo que los distintos organismos sostuvieran tesis muy diferentes sobre las políticas lingüísticas.

En realidad, en los inicios de la construcción de Europa se partió de una situación de hecho, por lo que las primeras decisiones lingüísticas, muchas de las cuales perduran, se tomaron más por necesidad que por doctrina. Pero a lo largo de los años estas decisiones se revelaron acordes con los principios democráticos preconizados y sirvieron de punto de partida para medidas posteriores. Y de todos modos el multilingüismo fundacional de los organismos europeos abrió sin pretenderlo expresamente un campo nuevo a las políticas lingüísticas, limitadas hasta entonces a las experiencias estatales.

A partir de la década de 1980 la construcción de Europa se enfrentó al hecho de la diversidad lingüística no sólo como una simple cuestión práctica, de corte administrativo, sino como uno de los elementos claves para fraguar una Europa nuclear y sin dejar atrás grupos minoritarios con su propia consistencia, que sumados tenían su importancia demográfica¹ y política, y que probablemente no se hubieran sentido vinculados al proyecto general por considerar relegada su lengua. Además de constituir una unión de Estados, Europa debe aglutinar todo tipo de grupos e incluso de ciudadanos.

Desde el comienzo la unión europea debía hacerse sin más exclusiones "a priori" que las exigidas por la aplicación estricta de las normas democráticas definidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Carta de las Naciones

Unidas. Las instituciones europeas han proclamado en distintas ocasiones que nadie por ser europeo debe dejar de sentirse lo que primariamente es: flamenco, corso, galés o euskaldún. Ni que deje de conservar la conciencia de propia identidad, tal como la recibió de la historia.

Es preciso reconocer que la CEE adoptó uno de los sistemas más abiertos e integradores en las esfera de las lenguas de Estado y aceptó que cada país aportara su lengua en igualdad de condiciones con los otros. La única simplificación procedía del hecho de que una misma lengua coincidiera en varios países miembros.

Prácticamente ya no existen zonas monolingües en las instituciones de la UE. Por ejemplo, en las conferencias de prensa oficiales dadas por los comisarios o por ministros siempre se respetó el régimen multilingüe: el protagonista se expresaba en su propia lengua asistido por traductores simultáneos a todas las lenguas oficiales de la UE. Unicamente la sesión informativa diaria en la que los portavoces de la Comisión Europea dan cuenta de los acuerdos, se realizaba exclusivamente en francés. Este sistema se instauró en la década de los años 1960, en la etapa inicial de las instituciones comunitarias. A pesar de las presiones recibidas desde la Asociación de la Prensa Internacional (API) para que se usara también el inglés, el anterior presidente de la Comisión, el francés Jacques Delors, bloqueó el cambio por

razones políticas. Su sustituto, el luxemburgués Jacques Santer, autorizó en enero de 1995 a su equipo de portavoces, encabezado por Nikolaus van der Pas, a usar las dos lenguas en sus comparecencias públicas².

Gran parte de la actividad comunitaria de estos últimos años en materia lingüística ha ido destinada precisamente a salvar la contradicción de fondo, entre unas instituciones europeas claramente definidas como plurilingües y que defienden el plurilingüismo como un elemento esencial de la Europa unida, y unos Estados con una fuerte tradición y vocación monolingüe detrás de su concepto nacional.

Ni que decir tiene que las sucesivas ampliaciones de la Comunidad Europea y del Consejo de Europa fueron complicando sus mecanismos lingüísticos tanto en el sentido administrativo como en el político. La tentación selectiva y restrictiva e incluso monolingüe era obvia, aunque sólo fuera para mejorar su competitividad con otras potencias mundiales, como los EEUU, y simplificar su estructura. Sin embargo, en esta fase de construcción de Europa no era posible, ni deseable acometer dicha simplificación, como muy bien reconoce el profesor Juan Tugores. "En cambio, la heterogeneidad de culturas e idiomas en la CE es notoria. Y no sería positivo, al margen de posible, eliminarla", afirma³.

A raíz de la tercera ampliación de la Comunidad Europea en 1995 empezaron los avisos de las instituciones comunitarias para que se replanteara la política lingüística. Según la Comisión Europea, "la ampliación introducirá unas lenguas suplementarias en la Comunidad, cuya diversidad cultural se enriquecerá. La multiplicación de lenguas complicará, no obstante, su labor. La Comunidad de los Doce tiene nueve lenguas normalmente utilizadas, mientras que una Comunidad de veinte Estados podría tener quince lenguas y una Comunidad de treinta países no tendría menos de 25 lenguas. Por razones de principio, los actos legislativos y los documentos importantes deberían seguir siendo traducidos a las lenguas oficiales de todos los Estados miembros. Será preciso, por el contrario, que cada institución encuentre las soluciones más prácticas para asegurar la eficacia de la comunicación en el curso de las reuniones"⁴.

No es de extrañar, pues, que Werner Weidenfeld cite "la diversidad de lenguas y de mentalidades" como uno de los cuatro problemas estructurales que provocan una falta de legitimidad democrática en la UE y que ésta tendrá que abordar en la reforma prevista para 1996⁵.

Este Capítulo se divide en dos partes. En la Primera Parte se analiza la ordenación y reglamentación del multilingüismo en las instituciones continentales, ordenación que alcanza a las organizaciones subsidiarias, como por ejemplo el Euroejército.

También se apunta el enorme esfuerzo traductor que este exige la aplicación de este principio.

La Segunda Parte se refiere a las citadas relaciones entre las instituciones y las minorías lingüísticas, algunas de las cuales datan de la I Guerra Mundial. Estas relaciones son las que dieron pie a las tres instituciones para ir elaborando una doctrina lingüística europea, expuesta en los capítulos siguientes.

I PARTE: LAS LENGUAS DE ESTADO EN LAS INSTITUCIONES EUROPEAS

3.2: Los antecedentes inmediatos: El régimen lingüístico en la comunidad internacional

A lo largo del siglo XX la comunidad internacional ha tendido a substituir el uso de una lengua única para las comunicaciones interestatales por un cierto multilingüismo. Como lengua de la Iglesia, de las universidades y de las cancillerías, el latín cumplió esta función de lengua común hasta el siglo XVIII y tratados de tanta importancia como los de Westphalia en 1648 fueron redactados y en gran parte discutidos en latín. El francés lo substituyó durante los siglos XVIII y XIX como lengua diplomática y en esta lengua se redactaron, por ejemplo, los convenios de La Haya de 1899 y 1907. Después de la Primera Guerra Mundial la influencia del inglés se aceleró y el francés perdió su monopolio. El Tratado de Versalles y el Pacto de la Sociedad de Naciones (1919) convirtieron al inglés en una lengua internacional europea.

Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial se amplió el círculo de lenguas internacionales, puesto que además del francés y del inglés, el ruso, el español y el chino se convirtieron en las lenguas oficiales de la ONU. En la década de 1970 el árabe hizo grandes progresos como lengua internacional y fue reconocido como lengua oficial por los

estatutos de distintas organizaciones, como por ejemplo el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, creado en 1977. El propio reglamento de las Naciones Unidas de 1947 fue modificado en 1973 y estableció en su artículo 51 que "el chino, el español, el francés, el inglés y el ruso serán a la vez los idiomas oficiales y los idiomas de trabajo de la Asamblea General, sus comisiones y subcomisiones. El árabe será a la vez idioma oficial e idioma de trabajo de la Asamblea General y de sus Comisiones Principales".

La ONU fue, por lo tanto, la primera gran organización internacional en adoptar un multilingüismo limitado en perfecta concordancia con lo que hacían la mayoría de organismos de alcance mundial. Como antecedente lejano puede citarse el Congreso de Viena, aunque sus conclusiones, el Tratado de Viena de 9 de junio de 1815, fueron redactadas exclusivamente en francés. Sin embargo, añade que para las potencias signatarias "el empleo de esta lengua no tendrá consecuencia alguna para el futuro, de forma que cada potencia se reserva adoptar, en las negociaciones y convenciones futuras, la lengua de la que se ha servido hasta aquí en sus relaciones diplomáticas, sin que el Tratado actual pueda ser citado como ejemplo contrario en los usos establecidos"⁶.

La experiencia demostraba que la introducción de lenguas en los mecanismos diplomáticos resulta siempre una cuestión delicada. Por cuestiones de prestigio, de igualdad y aún de

orden práctico los Estados suelen exigir el reconocimiento y uso de sus lenguas en los foros internacionales en los que suelen participar de forma asidua, fomentando así el multilingüismo, que paradójicamente en no pocos casos reprimen en su interior. Estas exigencias expansivas tienen que ser compaginadas por fuerza con otras restrictivas de signo técnico y jurídico, así como con los costes financieros que obviamente comporta el manejo de varias lenguas.

Por ello, no es raro encontrar soluciones muy restrictivas pero flexibles al mismo tiempo, como la ofrecida por el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ), cuyo reglamento establece en su artículo 39.1 que el inglés y el francés son sus únicas lenguas oficiales. A continuación, el apartado 3 del mismo artículo añade que "si una de las partes lo solicitara, la Corte la autorizará para usar cualquier idioma que no sea ni el francés, ni el inglés".

Siguiendo esta pauta, algunas organizaciones están abriendo sus reglamentos al uso de lenguas no oficiales, por lo menos en el ámbito oral. Este es el caso del Consejo de Europa, cuyo reglamento de 1949 dice en su artículo 12 que sus dos lenguas oficiales son el inglés y el francés para añadir a continuación que "los reglamentos de régimen interno del Comité de Ministros y de la Asamblea Consultiva determinarán las circunstancias y las condiciones en las que se podrán utilizar otras lenguas". En consonancia con esta disposición el artículo 12 del

reglamento del Comité de Ministros señala que "todo representante puede hacer uso de la palabra en una lengua distinta de las oficiales; en tal caso, el propio representante deberá encargarse de que se realice la interpretación a una lengua oficial". La Asamblea, por su parte, dispone en el artículo 17 de su reglamento que "además de las dos lenguas oficiales, se podrán utilizar el alemán y el italiano en los debates de la Asamblea y de sus comisiones como lenguas adicionales de trabajo".

La propia ONU sigue este modelo, cuando en el artículo 44 del reglamento de 1946, revisado en 1974, del Consejo de Seguridad y en el 53 de la Asamblea General utiliza términos idénticos al disponer que "cualquier representante podrá hacer uso de la palabra en idioma distinto de los idiomas de la Asamblea General. En este caso, se encargará de suministrar la interpretación a uno de los idiomas de la Asamblea General o de la comisión de que se trate. La interpretación hecha por los intérpretes de la Secretaría a los demás idiomas de la Asamblea General o de la comisión de que se trate podrá basarse en la interpretación hecha al primero de tales idiomas".

Incluso el propio Tratado del Atlántico Norte⁷, sobre cuyo artículo 9 se desarrolló la OTAN, establece en su artículo 14 que los textos en inglés y francés son los prevalentes en caso de contradicción. Estos dos idiomas se convirtieron en las lenguas oficiales de la Organización, con un amplio predominio

del primero a causa de la no participación de Francia en la estructura militar y de la hegemonía anglo-americana en sus estructuras. El reglamento de la Asamblea del Atlántico Norte regula el uso de estos idiomas. Sin embargo, la "Revista de la OTAN" es publicada bimestralmente en inglés y francés, danés, alemán, italiano, español y holandés; trimestralmente en griego, noruego, portugués y turco, y una vez al año en islandés⁸. Actualmente 11 de los 15 miembros de la UE lo son asimismo de la OTAN⁹.

3.3: Las lenguas de Estado oficiales en la Unión Europea

En el momento de su creación las Comunidades Europeas basaron su normativa lingüística interna en el principio de igualdad de las lenguas de los Estados fundadores, aunque el Tratado para la Comunidad Económica para el Carbón y el Acero (CECA) de abril de 1951 no regula el uso interno de las lenguas; sólo su texto en francés es jurídicamente válido. Fueron los ministros de Asuntos Exteriores de los seis países fundadores los que en vísperas de la entrada en vigor de dicho Tratado adoptaron un protocolo, no publicado posteriormente, en el que acordaban que "el francés, el alemán, el italiano y el neerlandés serán las lenguas oficiales y de trabajo de la Comunidad". De este modo, los seis países veían recogidos sus respectivos idiomas de Estado en la nueva organización europea, dado que el luxemburgués no fue lengua oficial en el Gran

Ducado hasta 1984.

A diferencia del Tratado CECA, el Tratado para la Comunidad Económica Europea (CEE) y el Tratado para la Comunidad Europea para la Energía Atómica (CEEa o EURATOM), ambos de marzo de 1957, entraron en su régimen lingüístico utilizando unos términos idénticos en sus artículos 217 y 190 respectivamente: "el régimen lingüístico de las instituciones de la Comunidad será fijado por el Consejo por unanimidad, sin perjuicio de las disposiciones previstas en el reglamento del Tribunal de Justicia". Ambos artículos demuestran primero que los Estados prefirieron delegar la competencia lingüística a un alto órgano comunitario, órgano en el que están directamente representados, y que exigían una solución aceptada por unanimidad, como muestra de su preocupación porque un acuerdo parcial abriera fisuras en la nueva institución. Por otra parte, aunque el Consejo recibió el mandato de regular el sistema lingüístico de todas las Comunidades nunca ha intentado hacerlo con el resto de instituciones, actitud excepcional en la historia de los Tratados, exceptuando la localización de las sedes¹⁰.

En aplicación del citado artículo 217, el Consejo aprobó el 15 de abril de 1958 el "Reglamento n° 1 por el que se fija el régimen lingüístico de la Comunidad Económica Europea"¹¹, cuyo artículo 1 establece que "las lenguas oficiales y de trabajo de las instituciones de la Comunidad serán el alemán, el francés, el italiano y el neerlandés". El Consejo de la CEEa adoptó una

norma reglamentaria idéntica en aplicación del también citado artículo 190 del Tratado fundacional¹². Así pues, desde un principio la CECA, la CEE y la CEEA funcionaron sobre un multilingüismo integral, semejante al de otros organismos internacionales, sólo que más cohesionado en su vertiente política.

Las adhesiones de nuevos países miembros en 1973 (Gran Bretaña, Irlanda y Dinamarca), 1981 (Grecia), 1986 (España y Portugal) y 1995 (Austria, Suecia y Finlandia) se resolvieron con la ampliación del número de lenguas (inglés, danés, griego, español, portugués, sueco y finlandés) hasta llegar al número actual de 11 lenguas oficiales y de trabajo¹³. Ni el irlandés, ni el luxemburgués, a pesar de que son lenguas oficiales en sus respectivos países, han obtenido el mismo rango en la Comunidad Europea simplemente por no haberlo solicitado los gobiernos afectados. El Acta Unica Europea de 1986 y el Tratado de Maastricht de 1993 no modificaron el régimen lingüístico establecido¹⁴.

En cambio, el Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 1974, modificado en distintas ocasiones y especialmente a raíz de las sucesivas adhesiones, incluyó el irlandés entre sus lenguas oficiales y de trabajo, además de las otras nueve, tras los retoques efectuados al artículo 29 en mayo de 1987. El irlandés no apareció en ninguna causa tramitada por dicho Tribunal antes

del 10 de octubre de 1987.

Al margen de la determinación de las lenguas, el Reglamento del Consejo deja cierta libertad de acción a las distintas instituciones por medio del artículo 6. Este permite que las instituciones determinen "las modalidades de aplicación de este régimen lingüístico en sus reglamentos internos". La interpretación de esta expresión "modalidades de aplicación" ha originado algunas confusiones y se ha revelado de difícil delimitación. El Consejo, que ha tenido que responder a varias preguntas al respecto, se ha limitado a señalar que corresponde a cada institución "apreciar bajo su propia responsabilidad el tipo de medidas que puede adoptar en el plano interno, respetando el Reglamento n° 1 del Consejo". Es decir, que en ningún caso las instituciones comunitarias pueden variar por su cuenta el número de lenguas oficiales y de trabajo fijadas por el Consejo, cuya decisión es vinculante.

Para aquellos Estados en que existan varias lenguas oficiales, el artículo 8 del reglamento del Consejo deja al criterio de dicho Estado la elección de la(s) lengua(s) que será(n) incorporada(s) a la normativa comunitaria, de acuerdo con su ordenamiento interno y con lo dispuesto por el reglamento.

El propio Consejo estableció en su reglamento algunas cláusulas para prevenir situaciones no reglamentadas. Así, el

artículo 8.1 del reglamento interno de 1979 dispone que "salvo decisión en contrario adoptada por el Consejo por unanimidad y por razones de urgencia, el Consejo deliberará y decidirá únicamente sobre la base de documentos y de proyectos establecidos en las lenguas previstas por el régimen lingüístico en vigor". En consecuencia, este artículo autoriza al Consejo a saltarse sus propias normas lingüísticas en casos excepcionales y urgentes y mediante la preceptiva unanimidad. Para el Servicio Jurídico del Parlamento Europeo esta posibilidad sólo tiene sentido cuando se trate de textos "que puedan tener fuerza jurídica obligatoria en el seno del ordenamiento jurídico comunitario", aunque cumplidos los requisitos de urgencia y unanimidad, no sería recurrible que el Consejo deliberase sobre un documento redactado en una lengua aparte de las nueve oficiales para poder tomar una decisión¹⁵.

También el reglamento del Tribunal de Justicia ofrece esta "modalidad de aplicación" a través del artículo 29.4. Este dispone como excepción que "cuando los testigos o peritos declaren que no pueden expresarse convenientemente en una de las lenguas mencionadas en el apartado 1 del presente artículo, el Tribunal o la Sala les autorizará para que presten sus declaraciones en otra lengua. El secretario se encargará de que se efectúe la traducción a la lengua de procedimiento". De este modo, se evita que una causa quede desnaturalizada o incluso impedida por causa del desconocimiento de las lenguas oficiales, pero se reconduce el procedimiento a una de ellas

por medio de una traducción "a posteriori".

Una cláusula muy parecida aparece en el reglamento del Parlamento Europeo, ya que su artículo 79.2 dice que "las intervenciones en una de las lenguas oficiales serán objeto de interpretación simultánea en cada una de las demás lenguas oficiales y en cualquier otra lengua que la Mesa estime necesaria"¹⁶.

En resumen, el régimen lingüístico de la Comunidad Europea se ha movido tradicionalmente dentro de un número tasado de lenguas oficiales, pero dispone de una cierta flexibilidad para utilizar otras lenguas o bien en circunstancias excepcionales, o bien a criterio de la dirección de la institución afectada. Por otra parte, fuera de las actividades estrictamente oficiales es innegable que los funcionarios y los diputados de la Unión Europea manejan documentos y conversan en otras lenguas además de las once oficiales, como por ejemplo lenguas minoritarias.

3.3.1: El derecho comunitario en materia lingüística

En materia de multilingüismo el derecho comunitario difiere a la vez del derecho internacional clásico y del derecho nacional. Por una parte, mientras que el contenido del derecho internacional clásico tiene que estar generalmente integrado en

el orden jurídico estatal para poder ser aplicado a los individuos, una gran parte del derecho comunitario es aplicable de una manera directa e inmediata, cualquiera que sea la lengua de los afectados.

Por otra parte, del mismo modo que sucede con el derecho interno de un Estado plurilingüe, las distintas versiones lingüísticas del derecho comunitario se refieren a un sólo orden jurídico, el de la UE (los tratados constitutivos que forman una especie de Constitución supraestatal, los tratados de adhesión y los acuerdos con terceros países y el derecho derivado de los tratados, como las actas de la Comisión o del Consejo). Ahora bien, los Estados miembros aplican en su lengua oficial las medidas propias para la ejecución de las directivas comunitarias y la jurisprudencia estatal para el desarrollo del derecho comunitario.

La mayor parte del derecho comunitario vinculante es válido en sus once versiones lingüísticas, es decir que un representante de la Unión Europea puede invocar cualquier versión de un reglamento o de una directiva en la lengua que prefiera y al margen de su nacionalidad o de su régimen lingüístico propio, según ha sentenciado en distintas ocasiones el Tribunal de Justicia¹⁷. Se trata de la expresión múltiple de una misma disposición y de su contenido en relación a un único orden jurídico, el comunitario. "El multilingüismo comunitario debe ser apreciado en su aspecto más esencial: un

mismo derecho para todos, sin barreras lingüísticas", escribe Hélène Bauer-Bernet¹⁸.

Partiendo del principio que cualquier ciudadano de un país miembro tiene derecho a conocer las disposiciones que se le aplican en su propia lengua, la UE debe atender directamente este derecho. No hacerlo y renunciar a la realización de distintas versiones oficiales por parte de la UE estimularía las traducciones oficiosas y, por lo tanto, la inseguridad jurídica a causa del alejamiento geográfico de los traductores, el desconocimiento del derecho comunitario, la imposibilidad de corregir el texto original, etc. Toda la organización comunitaria, desde los mecanismos institucionales de base hasta la revisión de los escritos, tiende por el contrario a asegurar la equivalencia fundamental de las distintas versiones lingüísticas por medio de una preparación paralela de los textos normativos (tratados, reglamentos, directivas y decisiones generales), de los cuales dan fe todas sus versiones lingüísticas por igual. Por ello el 14 de octubre de 1982 el Parlamento Europeo mantuvo el principio del multilingüismo integral. Las "traducciones" se reservan solamente para aquellos actos de los que sólo se dispone una versión que dé fe: determinados acuerdos, sentencias dictadas en la lengua del requiriente, decisiones individuales o administrativas expresadas en la lengua del destinatario, etc..

En el Consejo están representados todos los Estados miembros como tales y los debates se realizan en las once lenguas reconocidas. El contenido común de sus resoluciones finales debe ser expresado asimismo en todas las lenguas. Para ello se toman distintas medidas que aseguren este contenido común a pesar de las diferencias lingüísticas. Existen, por ejemplo, unos juristas revisores de los textos ya traducidos para garantizar su equivalencia jurídica. Se guían por el principio de igualdad entre todas las versiones lingüísticas, es decir que no se trata de acercar las distintas versiones a un texto "original", de mantener una coherencia con documentos anteriores y precedentes y de distanciarse en relación a las nociones puramente estatales. Conviene destacar que una misma palabra puede tener un significado distinto en el derecho comunitario que en el de alguno de los Estados, por ejemplo por efecto de sentencias judiciales. Ello obliga en ocasiones a generar una terminología propiamente comunitaria. En casos extremos, los órganos comunitarios renuncian a traducir algunos vocablos o expresiones, que son repetidas en la lengua original en las once versiones. En otras ocasiones se elige una terminología en una de las lenguas, que ha avanzado o se ha acreditado más en algún aspecto, como por ejemplo el derecho administrativo francés. Con todo, no es raro encontrar disfunciones o ambigüedades.

Para evitarlas y para ir fijando una terminología "comunitaria" se realizan complejos estudios y jornadas como

las de Cluny en 1990, y por parte de la Comisión se publica la revista "Terminologie et Traduction".

3.3.2: El esfuerzo traductor en la UE

El manejo simultáneo de todas estas lenguas oficiales es sin duda muy complicado y costoso, y normalmente ésta constituye la principal base crítica de los partidarios de una simplificación lingüística, e incluso de un unilingüismo comunitario. En la sesión del Parlamento Europeo de febrero de 1995 durante un debate en sesión nocturna sobre contrabando de cigarrillos se registró la asistencia de 29 traductores para 25 eurodiputados presentes, de acuerdo con el testimonio del periodista italiano Fabrizio Coisson¹⁹.

El informe del Tribunal de Cuentas de 31 de diciembre de 1982 indicó que en 1979 la CE gastó 96'42 millones de ECUs para traducir 925.000 páginas. El Informe Nyborg realizado en 1982 para la Comisión de Reglamento y Peticiones señaló que del presupuesto administrativo destinado a los servicios lingüísticos (traducción e interpretación) el 30% se lo llevaba la Comisión y 60% el Parlamento, el Consejo y el Tribunal de Justicia. El restante 10% era para servicios diversos. En 1987 sólo la Comisión hizo traducir 810.000 páginas a 105 ECUs por página, lo cual representó el 0'5% del presupuesto de la Comisión.

Según cálculos del diario The Independent, ya en 1991 4.000 de los 12.000 funcionarios de la CE estaban ocupados en distintos aspectos relacionados con la traducción²⁰. La Dirección General de Traducciones de la CE es el servicio más grande del mundo, en opinión del semanario Business Week, que calcula en unos 1'7 billones de pesetas anuales el valor de las traducciones realizadas dentro de la CE y en 180.000 millones de páginas rellenas cada año. La Comisión Europea consume anualmente sólo para proyectos científicos unas 100.000 hojas de papel impreso con un coste aproximado de 1.000 millones de ecus²¹.

Con todo, el sistema tiene fallos importantes. Así lo reconocía implícitamente el Parlamento Europeo en diciembre de 1993 cuando entre las medidas para dar más transparencia a la UE proponía "la publicación más rápida de los documentos de la Comisión en todas las lenguas de la Comunidad"²². Se produce muy frecuentemente una marginación de las lenguas menos utilizadas, como el neerlandés, el portugués o el griego, y por otra parte, según señala Johan Goudsblom, es muy difícil encontrar traductores muy expertos en las dos lenguas²³. El resultado es que mientras que los usuarios de estas lenguas menos habladas deben hacer un esfuerzo suplementario para dominar las lenguas universales, y muy especialmente el inglés, no se produce el mismo esfuerzo a la inversa. El director de la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad Autónoma de Madrid, Sean Golden, denunciaba en enero de 1993

que "hay una gran carencia de profesores para formar futuros traductores de idiomas poco corrientes. Y se necesitan porque el mercado precisa más de estas lenguas que del inglés o del francés, donde hay una oferta muy grande de personas"²⁴.

En la práctica, los servicios lingüísticos de la Comisión, del Consejo y del Parlamento tratan de simplificar la operación, utilizando un sistema según el cual un intérprete central traduce una de las lenguas menos conocidas a una de las de uso común, como el inglés o el francés, versión que a su vez es utilizada por otro intérprete para traducir a otra lengua menos conocida (el portugués o el sueco). Se evita así tener que disponer, por ejemplo, de un intérprete del griego al sueco, aunque con este sistema la traducción se hace más lenta y el riesgo de algún malentendido aumenta notablemente²⁵.

El 19 de septiembre de 1995 el Parlamento Europeo aprobó una propuesta de la Comisión Europea por la que se creó un Centro de Traducción en Luxemburgo. Esta resolución²⁶ se basaba en la Declaración de 29 de octubre de 1993 del Consejo Europeo celebrado en Bruselas y en la reunión del Consejo de Asuntos Generales de los días 6 y 7 de diciembre de 1993. Junto a los servicios existentes de la Comisión establecidos en Luxemburgo, este Centro debe atender todos los organismos y servicios citados en la Declaración de 29 de octubre de 1993, excepto el Instituto Monetario Europeo.

El preámbulo del reglamento del Centro exige que éste "trate las lenguas oficiales de la Comunidad Europea en la observancia del principio de absoluta igualdad"²⁷. Según la ponente Diemut R. Theato, este Centro abrió "amplias y oportunas perspectivas", ya que "la conservación, defensa y protección de las lenguas europeas constituye una tarea de primer orden y un deber prioritario de la Unión Europea", ya que "no existe posiblemente otro lugar en el mundo en el que haya tanta necesidad de traducciones de gran calidad y de tal diversidad como en los organismos de la UE", y ya que "la importante especialización alcanzada por los distintos servicios de traducción de las instituciones europeas hace necesaria una profundización continua y cada vez mayor, y hay que intentar reagrupar las competencias existentes para lograr efectos sinérgicos"²⁸. Obsérvese que la Sra. Theato sitúa con buena lógica en primer lugar el objetivo político de la preservación del plurilingüismo comunitario y como segundo y tercer argumentos, consecuencia del primero, los de orden práctico.

3.3.2.1: El Proyecto Eurotra

Todo ello empujó a distintas instituciones a investigar en la construcción de ordenadores capaces de realizar una traducción automática, aunque por el momento se descarta poder llegar a una traducción automática total. El Consejo de

Ministros de la CE lanzó el 4 de noviembre de 1982 el proyecto EUROTRA (que partía de experiencias anteriores, como el sistema europeo SYSTRAN, el canadiense METEO, el norteamericano ALPS, etc.) para estar presente en el mundo de la traducción automática. Sólo entre 1983 y 1992 la CE destinó 37'5 millones de Ecus a esta investigación. El equipo investigador, instalado en Luxemburgo pero con delegaciones estatales, fue dirigido por Serguei Perschke, uno de los pioneros de la lingüística computacional en Europa. La idea inicial era que funcionara a base de parejas de lenguas, como inglés y francés, hasta un total de 72 aparejamientos²⁹. El objetivo final para mediados de 1988 era el manejo simultáneo de 20.000 palabras por idioma. Al operar con nueve lenguas se convertía en el sistema de lenguas informatizado más importante del mundo³⁰.

Entre 1990 y 1992 el programa cambió de orientación, ya que se dió más relevancia a la comprensión científica entre jóvenes y a las actividades en lingüística computacional. Se formularon objetivos más modestos, como diccionarios, sistemas de análisis monolingües y traducción de dos en dos lenguas. EUROTRA se orientó hacia la industria para obtener nuevos productos. Francia, por ejemplo, lanzó el Programa EUROLANG. En España³¹ el Programa ALEP, surgido también del EUROTRA, está orientado a incrementar la fabricación de productos interesantes para la industria, como diccionarios, comprobadores estilísticos y gramaticales, traductores de cierto nivel, detectores de plagio y de autorías, y también traducción asistida, conocida entre

los especialistas como "traducción automática no utópica"³².

La irrupción de la informática en el mundo de las lenguas hizo que la CE advirtiera que las aquellas que no se adapten a la "ingeniería lingüística", se hundirán. Concretamente el responsable del informe de la CE sobre infraestructura lingüística europea, André Danzin, declaró en octubre de 1993 que aquellas lenguas de Europa que no sean capaces de utilizar todos los recursos de la informática y la telemática "dejarán de ser útiles para la ciencia, las técnicas y el comercio". El informe de la CE añade que la inutilidad será también de tipo cultural. Por esto José Manuel Blecua, del Instituto Cervantes español, reforzó esta opinión diciendo que el fondo del asunto es "la supervivencia de las lenguas, porque la que no se modernice no será utilizada en las grandes bases telemáticas y se quedará fuera"³³.

3.4: La extensión del principio multilingüe

La aplicación del principio multilingüe no se limita a los órganos de la UE, especialmente al PE y al Consejo, sino que se extiende a todas aquellas instituciones que de alguna forma están vinculadas orgánica o informalmente a la UE. La solidez de esta norma queda reflejada cuando se comprueba que un órgano tan específico como es el Eurocuerpo, ha adoptado un sistema plurilingüe. Sólo Bélgica dentro de la UE y Suiza fuera de ella

cuentan con una larga experiencia de ejércitos nacionales plurilingües.

3.4.1: Un Ejército europeo políglota

En el marco de la Comunidad Europea la Unión Europea Occidental (UEO) ha formado un Euroejército, que, según las previsiones, en 1995 deberá contar con unos 50.000 hombres permanentes. Su primer núcleo fue la brigada franco-alemana creada a título experimental en octubre de 1989 y considerada la base inicial del Euroejército a partir de la cumbre franco-alemana de La Rochelle de 22 de mayo de 1992. Su legitimidad fue reconocida en diciembre de 1992 por la OTAN, bajo cuyo mando supremo se colocó.

El Euroejército nació ya bilingüe (francés y alemán), mientras que la UEO actuaba con tres idiomas oficiales: inglés, francés y alemán. Todos los oficiales destinados al Estado Mayor de este cuerpo de ejército deben dominar el alemán, el francés y el inglés.

Bélgica aportó una división a esta brigada franco-alemana a partir de junio de 1993 y exigió que el neerlandés se convirtiera también en lengua oficial, estatuto que de momento no le fue concedido de forma plena. Se convino que se traducirían las órdenes al neerlandés, siempre que haya

traducción al francés o al alemán, cosa que no ocurre.

En noviembre de 1993 España anunció su decisión de contribuir a esta fuerza europea con unidades propias, pero al contrario que Bélgica no pidió que el castellano fuera asumido como lengua oficial³⁴. España propuso en febrero de 1994 que se utilizara únicamente el inglés, a pesar de que entre sus unidades no figura ninguna inglesa o norteamericana. La razón es que los mandos franceses, alemanes o belgas sólo deben conocer una lengua extranjera, mientras que los españoles deben aprender tres³⁵. El Gobierno español reconoció que en la preparación de los oficiales destinados al Eurocuerpo figura "los conocimientos de idiomas" y que antes de su incorporación "se mejora su fluidez en los idiomas de trabajo del Eurocuerpo"³⁶.

II PARTE: LA PARTICIPACION DE LAS LENGUAS MINORITARIAS EN LAS INSTITUCIONES EUROPEAS

3.5: El segundo circuito

Sería un grave error pensar en una Europa lingüísticamente bien ordenada y estratificada en lenguas de Estado y minoritarias, y no digamos si este hipotético orden se quisiera compaginar con el sistema político-institucional en vigor desde la II Guerra Mundial: organizaciones europeas, Estados y regiones. En Europa el orden, o según como se mire el "desorden" lingüístico, traspasa con frecuencia este esquema y forma el suyo propio. Con todo, también es cierto que los esfuerzos seculares de los Estados y los más recientes de los órganos europeos y de las autoridades regionales y/o locales han ido introduciendo un cierto "statu quo" por lo menos en las fórmulas jurídicas básicas.

Las políticas lingüísticas de los tres niveles político-administrativos citados no se comunican siempre de arriba a abajo, es decir desde las instituciones europeas a las regionales a través de las estatales, o a la inversa. En los últimos 25 años se han ido creando unos canales convergentes que han conectado directamente a las minorías lingüísticas con las instituciones europeas sin contar estrictamente con los Estados. Estos contactos se han establecido fundamentalmente a

través de dos conductos: la profundización de los derechos humanos universales y europeos establecidos en 1948 por la ONU y en 1950 por el Consejo de Europa, y la política regional de la Comunidad Europea y del Consejo de Europa aplicada a partir de los años 1970.

El surgimiento o la consolidación, según los casos, de poderes regionales modificó el panorama de las lenguas no de Estado. Por este conducto dichas lenguas pudieron disponer con frecuencia del apoyo de una administración propia y del amparo de un poder político próximo, que atendiera sus demandas primero frente a unos poderes estatales insensibles u hostiles, y luego frente a los comunitarios. Muchos países se fueron descentralizando y pudieron aportar así a la unión europea una gran variedad cultural y lingüística sin tener que pasar por el tamiz exclusivo de unos Estados históricamente reacios a abrir sus políticas en este terreno. En no pocas ocasiones las minorías lingüísticas han encontrado una mayor receptividad a sus planteamientos en las instancias comunitarias que no en las del propio Estado, circunstancia que ha estimulado sus aspiraciones de mantener contactos institucionales directos.

De este modo, se han ido formando dos "circuitos" lingüísticos complementarios entre ellos, pero distintos. Por un lado, las instituciones europeas se dirigen a los Estados, que a su vez forman las organizaciones europeas, y éstos toman sus medidas lingüísticas, no siempre con el acuerdo de los

poderes regionales. Estos por su parte tratan de influir en los Estados para que liberalicen sus políticas y las vinculen más a la doctrina emitida desde Bruselas y Estrasburgo. Por otro lado, existe el citado nexo directo entre los organismos europeos y las minorías lingüísticas, conexión que asimismo funciona en un doble sentido. La institucionalización de este diálogo ha ocupado muchas horas en el debate europeísta y, debate que a pesar de sus progresos evidentes, no ha concluído.

En estos momentos, pues, las políticas lingüísticas ya no forman compartimentos estancos, sobre todo a escala estatal, como sucedía prácticamente hasta los años 1970. Las interconexiones se multiplican estableciendo el entramado doctrinal y político-jurídico indispensable para perseguir el deseado ordenamiento lingüístico en una Europa unida.

Esta parte se propone describir este segundo "circuito", es decir el que relaciona las instituciones europeas con las minorías lingüísticas. A lo largo de casi todo el siglo XX se producen continuas conexiones entre la política europeísta y las minorías lingüísticas, relaciones que se aceleran y perfeccionan a raíz de la construcción y profundización de una Comunidad Europea.

Durante el período de entreguerras los primeros planteamientos relativos a una reordenación de Europa se preocuparon de las "minorías", la mayoría de ellas con un

componente lingüístico. Conviene no perder de vista esta referencia histórica, puesto que es la que conecta a las minorías a las sucesivas fases de reconstrucción y unión por las que atraviesa Europa a partir de 1918. En aquellos momentos entre 1918 y 1922 las minorías nacionales, todavía de base más étnica que cultural y lingüística, recibieron un vigoroso tratamiento en el contexto internacional, especialmente por lo que se refiere a las potencias vencidas de Europa Central y sus países vecinos.

A partir de entonces las minorías étnicas y lingüísticas han constituido un problema permanente en la política europea, de tal manera que los reajustes inmediatamente posteriores a la II Guerra Mundial tuvieron que volver a abordar este asunto. Y en la actualidad, en el transcurso de la tercera gran reordenación continental del siglo XX, el encaje de las minorías sigue siendo una cuestión esencial a lo largo y ancho de toda Europa. Tanto a escala continental, como en la mayoría de los Estados la participación plena de estas minorías en la vida política e institucional no quedó resuelta en el período de entreguerras. Por ello, al final de la II Guerra Mundial el problema de las minorías volvió a aparecer, a pesar de la persistencia de los distintos Estados occidentales en reducirlo a una cuestión interna y en no pocas ocasiones de orden público.

La progresiva implantación de los derechos humanos propugnados por los países democráticos de la post-guerra y la

cada vez más activa política regional empezaron a abrir vías para que las minorías se fueran incorporando al proceso de unión europea como colectividades propias y con sus propios signos de identidad, entre ellos los lingüísticos. Las primeras indicaciones claras de este matrimonio no aparecieron, con todo, hasta bien entrada la década de los años 1970.

Conviene resaltar que, excepto raras ocasiones como la minoría alemana de Bélgica, las minorías lingüísticas no tuvieron por sí mismas un poder político-administrativo. El poder fue reconocido a los territorios, muchas veces con una tradición histórica de auto-gobierno, aunque el elemento lingüístico pesó en no pocas ocasiones como uno de los más diferenciadores. En cualquier caso, en el proceso de construcción de Europa primero fueron las regiones y después éstas asociaron a las minorías. Esto se ve claro si se observa que el peso regional lo llevó inicialmente la República Federal de Alemania, un país con pocas minorías lingüísticas, o que la política regional de la Comunidad Europea fue casi exclusivamente económica hasta el Acta Unica Europea en 1986.

Los primeros pasos de la política regional en la CE responden todavía a una política estrictamente económica y muy tímida, pero que ya empieza a perfilar unas relaciones bilaterales y directas entre las instituciones europeas y los entes regionales y/o locales y a dar cierto protagonismo político y administrativo a las regiones, que en numerosos

casos han asumido la política lingüística de muchas minorías entre las competencias cedidas por los Estados. El Consejo de Europa resultó sin duda decisivo en estos primeros años para impulsar ambas líneas políticas en el contexto de los progresos experimentados por la unión europea.

A partir del Acta de Helsinki de 1975. Las declaraciones de distintas instituciones, como el Parlamento Europeo o el Consejo de Europa, se multiplicaron, surgieron nuevas organizaciones regionales, como la Asamblea de las Regiones de Europa (ARE), que dinamizaron la política regional, y la conectaron con las instituciones comunitarias a través de organismos como la Conferencia de Poderes Locales y Regionales de Europa (CPLRE) del Consejo de Europa y más tarde del Comité de las Regiones de la UE.

Durante estos 20 últimos años (1975-1995) la instrumentación político-administrativa de las minorías lingüísticas ha recibido un impulso, que sin duda ya ha dado resultados importantes. Las minorías empiezan a ser reconocidas como sujetos de derechos colectivos por las instituciones democráticas europeas. Se va forjando así un especie de "derecho de las minorías" que las legislaciones estatales empiezan a recoger. La propia CE crea el **European Bureau for Lessed Used Languages** (EBLUL) y los Estados mueven sus normativas interiores en un sentido parecido, y buena prueba de ello es la Constitución española de 1978 y los distintos

Estatutos de Autonomía.

Lo realmente importante fue que las minorías lingüísticas recibieron por un lado una cobertura legitimadora y legal a través de las sucesivas declaraciones de Derechos Humanos, y por el otro un arma política por medio de las asociaciones regionales europeas impulsadas por aquellas regiones que disponían de poderes legislativos y/o ejecutivos. Las regiones, y por medio de ellas las minorías, pudieron presionar así a sus respectivos Estados del que formaban parte institucional, a veces con un éxito notable, como en el caso de España o de Bélgica, y al mismo tiempo sometieron a las instituciones europeas a una presión en forma de tenaza para constituirse a corto plazo en un interlocutor directo de los órganos de la CE, y a la larga en su tercer pilar institucional.

Mientras que la política regional hacía rápidos, aunque muy limitados avances dentro de la CE en los años 1980, las minorías lingüísticas conseguían su mayor reconocimiento en el Consejo de Europa con la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias, aprobada por la Asamblea Parlamentaria de este organismo en octubre de 1988. La estrecha relación entre unión europea, los poderes regionales y locales y las minorías lingüísticas quedó patente cuando en mayo de 1984 la Conferencia Permanente de Poderes Regionales y Locales de Europa decidió preparar dicha Carta en su seno.

3.6: El precedente de la I Guerra Mundial: los Tratados Internacionales

La primera vez que se relacionó directamente a las minorías lingüísticas con un proceso pan-europeo fue al término de la I Guerra Mundial, en la Paz de París³⁷. Por un lado, se advirtió que estas minorías habían constituido un factor importante en la desestabilización interna de los grandes imperios perdedores de la guerra, el austríaco, el ruso y el turco. Por el otro, el hundimiento de dichos Estados imperiales "liberó" numerosas minorías con reivindicaciones nacionales y lingüísticas, especialmente en Europa Central y en los Balcanes. Por efecto de la presión de las nacionalidades, especialmente la checa y la serbia, se pidió la aplicación del principio heredado del siglo anterior de que a cada Estado corresponde una sola lengua, sólo que al revés, es decir que a cada lengua corresponde un Estado.

El reconocimiento internacional de este nuevo principio, especialmente por parte de los cada vez más influyentes EEUU, y las garantías que recibió configuraron en gran manera la Paz de París en relación al replanteamiento europeo. Así, los seis Estados existentes en 1914 en la franja central de Europa entre el Mar Báltico y el Mediterráneo se convirtieron en 1919 en dieciséis³⁸. Sin embargo, el nuevo mapa político de Europa no solventó todas las cuestiones relacionadas con las minorías. Los numerosos ajustes fronterizos en la parte occidental

también originaron importantes reivindicaciones de nuevo cuño por parte de las minorías lingüísticas recién formadas, como sucedió en el Trentino-Alto Adigio, en el Schleswig, o en Alsacia.

Las numerosas mutaciones fronterizas convirtieron algunos grupos nacionales anteriormente dominadores en minoritarios, y así aparecieron, por ejemplo, minorías alemanas en Italia, Checoslovaquia o Polonia, o húngaras en Yugoslavia o Rumanía. Estas reivindicaron a su vez los derechos que antes de la guerra habían negado a las minorías polacas, checas, serbias, croatas, etc. y entraron en conflicto con Estados tan asentados como Dinamarca o Francia. La post-guerra intentó solucionar este difícil y explosivo cruce de intereses y reivindicaciones con un tejido de tratados internacionales, a partir del de Versalles, sistema que en 1939 no podría impedir un nuevo conflicto generalizado en que la minorías étnicas y lingüísticas volvieron a tener mucho que ver.

En realidad, todo este movimiento político-diplomático de la post-guerra trataba de aplicar las tesis que sostenía el presidente norteamericano Woodrow Wilson acerca del derecho de auto-determinación de los pueblos. El programa de 27 puntos en total fue expuesto en cuatro discursos presidenciales, el 8 de enero, el 11 de febrero, el 4 de julio y el 27 de septiembre de 1918. El 9º punto de este plan de paz establecía que las fronteras de Italia se arbitrarían "según las líneas divisorias

de las nacionalidades que claramente puedan determinarse". El 11º se refería a la configuración de los Estados balcánicos "de acuerdo con el principio de las nacionalidades".

En otras cláusulas añadidas a los 14 puntos iniciales se afirmaba tajantemente que "los pueblos y las provincias no podrán manejarse como si fueran peones o fichas de un juego, ni siquiera del gran juego, para siempre desacreditado, del equilibrio de las potencias" (punto 16). La declaración siguiente decía que "todo arreglo territorial habrá de ser en interés de la población respectiva y no a base de compromisos entre las pretensiones de Estados rivales". El punto 18 añadía que "habrán de satisfacerse todas las reclamaciones nacionales en la medida de lo posible, sin perpetuar viejos litigios o crear nuevas disensiones que puedan poner en peligro la paz". Por último, el punto 20 proclamaba abiertamente el derecho a la autodeterminación de los pueblos³⁹.

De esta manera, las minorías étnicas entraban en el derecho internacional y sobre el papel sus reclamaciones dejaban de ser simples armas arrojadas entre las potencias, como había ocurrido anteriormente con Grecia, Bélgica o Finlandia, y especialmente el área balcánica.

Conviene subrayar que a lo largo del siglo XIX la lengua se había convertido en el criterio predominante para definir a las minorías étnicas por encima de la religión. Era un simple

reflejo de lo que hacían los Estados nacionales, especialmente Francia. Si la lengua, y no la religión como había sucedido en los siglos XVI a XVIII, era el gran aglutinante, el principal elemento definidor de los Estados-nación, también iba a serlo de los pueblos que aspiraban a convertirse en Estados o, por lo menos a adquirir un estatuto jurídico-político-administrativo autónomo dentro de uno de ellos. Territorios que compartían la misma religión que el Estado encontraron así una base legitimadora de tipo cultural para sus reivindicaciones de auto-gobierno. Este es el caso de Cataluña o del País Vasco en España, de Bretaña o Córcega en Francia, de Gales en Gran Bretaña, etc. En cualquier caso, el nuevo interés por las minorías quedó realzado en el I Congreso Europeo de las Minorías de 1928.

El sistema instaurado por la Paz de París tuvo una aplicación desigual en relación con los principios en que se movía. En numerosos casos se favorecieron y ampararon los deseos de las minorías nacionales, pero en muchos otros se tropezó con las resistencias de los Estados a perder población, y sobre todo territorios. Aunque en general mejoraron las perspectivas de muchas de dichas minorías, el nuevo sistema no dejaba de ser una imposición de los vencedores para debilitar más a los vencidos.

En primer lugar, el nuevo orden europeo para con las minorías nacionales y lingüísticas no se tradujo

automáticamente en la legislación positiva de los Estados, ni siquiera de aquellos que habían surgido gracias a él. La Paz de París estableció unos principios muy genéricos, a veces confusos, y en general difíciles de aplicar. Algunas Constituciones o legislaciones estatales los recogieron de una forma vaga y sin pasar a enojosas concreciones. No había tampoco garantías internacionales serias de que los principios serían respetados, quedando al albur de la buena fe de cada Estado. Esta indefensión fue señalada por la Asamblea de la Sociedad de Naciones en su reunión del 21 de septiembre de 1922. La Asamblea expresó su esperanza de que los gobiernos no ligados a ninguna obligación internacional concerniente a la protección de las minorías trataran, sin embargo, a sus propias minorías "... con al menos el mismo grado de justicia y de tolerancia estipulado por los acuerdos legalmente vinculantes"⁴⁰.

Por otra parte, el sistema obligaba formalmente sólo a algunos países, en concreto a Polonia, Austria, Checoslovaquia, Serbia, Croacia-Eslovenia, Rumania, Bulgaria, Hungría, Grecia, Turquía y Armenia y posteriormente a Albania, Lituania, Estonia y fuera de Europa a Iraq. Las potencias vencedoras no se sintieron comprometidas, ni asumieron ninguna obligación expresa al respecto. Así lo manifestó claramente el delegado del Reino Unido en la X Sesión de la Asamblea de la Sociedad de Naciones el 13 de febrero de 1919, aduciendo que en caso contrario muchos y serios problemas podrían suscitarse en el

seno del Imperio Británico. En efecto, por aquellos años el problema de los nacionalismos empezaba a extenderse a los imperios coloniales.

El nuevo equilibrio surgido de París no tardó en ser visto como discriminatorio, puesto que sólo obligaba a unos Estados y no a todos. Para evitarlo se pidió en repetidas ocasiones que los Estados vencedores respetaran a sus minorías, del mismo modo que exigían a los vencidos que lo hicieran. Con todo, en la Asamblea de la Sociedad de Naciones el nuevo sistema internacional de protección a las minorías étnicas y lingüísticas fue saludado con optimismo y se puso como ejemplo a Suiza y Gran Bretaña. La Asamblea incluso debatió y aprobó un informe de la Comisión Sexta de Protección a las Minorías, que hacía distintas recomendaciones al respecto⁴¹.

No obstante, a partir de esta fecha la Asamblea de la Sociedad de Naciones rechazó la extensión del estatuto de minoría, como indica Pierre Renouvin, tanto por temer la oposición de las potencias, como la proliferación de litigios donde no existían, por lo menos de una forma oficial. Todo ello dió una gran publicidad al tema de las minorías, de tal modo que su importancia política fue en aumento, a pesar de resolverse positivamente en algunos casos. En cambio, el "intercambio de minorías" que se intentó entre Grecia y Turquía desaconsejó su repetición a causa de los sufrimientos experimentados por la población civil⁴². Al confirmar las

fronteras de 1919, el Pacto de Locarno de octubre de 1925 neutralizó en gran parte el papel de las minorías en los conflictos internacionales, pero no en los internos de cada Estado.

Sólo algunos países occidentales de escaso peso en el concierto europeo, como Suiza, Finlandia o España (la II República) siguieron los requerimientos de la Sociedad de Naciones, ignorados por lo general por parte de las grandes potencias. Lo normal era aplicar a rajatabla los principios de la soberanía nacional y de no injerencia en los asuntos internos para no entrar en cuestiones planteadas por las minorías. Este era el caso, por ejemplo, del conflicto irlandés dentro de Gran Bretaña.

Hubo, sin embargo, algunos esfuerzos aislados: el 15 de enero de 1920 el Rector de la Academia de Estrasburgo, Director de la Institución Pública, Mr. Charlety, recomendó la enseñanza del alemán en Alsacia, pero conservando el francés como "lengua preponderante"⁴³. En 1927 su sucesor, Mr. Ch. Pfister, ya proponía un sistema escolar estrictamente bilingüe⁴⁴.

La rigidez del sistema impedía, además, atender las situaciones concretas. Las obligaciones internacionales eran iguales para todos, pero se adaptaban mal a muchos Estados con circunstancias propias. Por esta razón, los principios generales no encontraron buena acogida en el ordenamiento

interno de los distintos países afectados, tal como se hizo después de la II Guerra Mundial. En realidad, no se trataba de un programa de mínimos, que después cada Estado tenía que desarrollar a partir de sus especificidades, sino de imposiciones de los vencedores de la contienda, que por esto mismo eran rechazadas.

El nuevo orden reconocía a las minorías transitoriamente el derecho a voto en los lugares donde tuviera que celebrarse algún plebiscito, la obtención de la nueva nacionalidad de los ciudadanos, o la opción por conservar la que tenían, trasladando la residencia, y la posibilidad de conservar la propiedad inmueble y llevar consigo su propiedad mueble, sin pago de impuestos. De forma permanente se reconocía a los miembros de las minorías el derecho al uso de la lengua en las relaciones privadas, al uso de la lengua ante los tribunales, a la instrucción en la propia lengua en las escuelas del Estado, además del derecho a la vida, a la libertad en general, a la libertad religiosa, a la igualdad ante la ley, a la no discriminación, a la gestión de las instituciones sociales y centros educativos, y a la equitativa participación en ciertos fondos públicos. Todo ello con el compromiso de ser garantizado por la Sociedad de las Naciones.

Dichos principios fueron recogidos de algún modo, por ejemplo, en el Tratado de Saint Germain (arts. 62 a 69), referido a Austria⁴⁵; o en el Tratado de Trianon (arts. 54 a

66), referido a Hungría; o en los artículos 49 a 57 del Tratado de Neuilly sobre Bulgaria⁴⁶; o en el Tratado de Brno de 1920 entre Austria y Checoslovaquia para la protección de las respectivas minorías checa y alemana⁴⁷; o en el Tratado de Rapallo (12 de noviembre 1920) entre Italia y Yugoslavia, seguido del de Roma sobre la cuestión de Fiume (enero 1924). Incluso el Tratado de Sèvres (modificado en 1923 por el Tratado de Lausana) sobre Turquía⁴⁸ contiene muchas de estas disposiciones, aunque mucho más concretas que en los otros tratados. Los tratados internacionales se convirtieron así en el principal instrumento de la nueva política hacia las minorías étnicas y lingüísticas.

En cualquier caso, y con todas sus limitaciones la postguerra introdujo por primera vez desde el derecho internacional ciertas obligaciones generales de los Estados para con sus minorías étnicas y lingüísticas, lo cual marcó el futuro de éstas y en no pocos casos condicionó las relaciones internas. Así lo entendió, por ejemplo, Arthur de Balgh: "A pesar de los defectos y limitaciones, los acuerdos sobre las minorías, después de todo, estuvieron dirigidos más que cualquier acuerdo anterior de este tipo, a la protección de las minorías religiosas y nacionales. Ellos marcaron una nueva era en la evolución de la protección de las minorías"⁴⁹.

3.7: Los primeros reconocimientos de minorías lingüísticas

Los resultados, insistimos, fueron desiguales. Se resolvieron bien algunas situaciones, pero otras se fueron agravando y estuvieron otra vez en el origen de la II Guerra Mundial. La intervención de la Sociedad de las Naciones permitió, por ejemplo, solventar la situación de la minoría sueca en las Islas Aland, de soberanía finlandesa desde la independencia de este país en 1917. En este caso, no se aplicó el derecho de autodeterminación de la minoría, sino que se aseguró el respeto a sus derechos por medio de un amplio Estatuto de autonomía que mantenía la soberanía finlandesa. Solamente si estos derechos fueran persistentemente violados, se podría pensar en la segregación y su traspaso a Suecia. Para la Comisión de Expertos de la Sociedad de Naciones el principio de "libre disposición", admitido por algunos tratados internacionales, no había adquirido el valor de una norma de derecho internacional, sino que era sólo un principio de "libertad y justicia". Según este análisis, la separación de una minoría de su Estado sólo se justificaba cuando éste no garantizaba su libertad y la aplicación de medidas justas. La ruptura estatal se entendía, pues, básicamente como una sanción⁵⁰.

La solución dada a la cuestión de las Islas Aland alentó al gobierno finlandés a dar un estatuto constitucional al resto de la influyente minoría sueca en todo su territorio y no sólo en

las disputadas islas bálticas; finlandés y sueco obtuvieron rango de igualdad ante los tribunales y las autoridades administrativas⁵¹, situación que fue confirmada por la "Ley de la Lengua" de 1922 (reformada en 1935)⁵².

En Alemania la Constitución de Weimar de 1919 proclamaba que "los grupos minoritarios que hablan otra lengua dentro del Reich no pueden sufrir limitaciones en su desarrollo nacional, por leyes y administración, sobre todo en su lengua, en la administración interna y en los tribunales"⁵³. En Irlanda la Constitución de 1922⁵⁴ dió carácter oficial al idioma gaélico y abrió la puerta para que el gobierno tomara posteriormente medidas legislativas y ejecutivas en orden a su protección y desarrollo en los distintos niveles educativos, administrativos, gubernamentales, etc.⁵⁵. Una revisión posterior de 1937 estableció más claramente la prelación del gaélico como primer idioma⁵⁶. También Bélgica tuvo que revisar su legislación básica para equilibrar sus idiomas, incluyendo a la minoría alemana recién aumentada⁵⁷.

En Austria la minoría húngara del Burgenland había visto reconocida su lengua, en virtud de la Constitución federal de 1920 revisada en 1925 y 1929⁵⁸. En España la Constitución republicana de 1931 trató de resolver por primera vez el problema interno de las minorías étnicas, por más que salvaguardaba el uso del castellano como lengua del Estado y como lengua predominante en prácticamente todos los ámbitos

públicos. El propio texto constitucional y los Estatutos de Autonomía acordados a Cataluña en 1932⁵⁹, y al País Vasco y Galicia en 1936⁶⁰ significaron una ruptura formal con el modelo anterior centralista y unilingüe y un punto de referencia para constituciones posteriores⁶¹. En Suiza la Constitución de 1938 aceptó finalmente el reconocimiento del reto-romano o romanche como lengua nacional, aunque no le dió carácter de lengua oficial a causa de su fragmentación y su falta de normas ortográficas⁶². Las Islas Feroe o la minoría germano-parlante en Dinamarca son otros ejemplos de minorías que obtuvieron algún tipo de tratamiento legal en el período de entreguerras⁶³.

3.8: La regresión bajo los regímenes fascistas

La aparición de los regímenes fascistas y nazis comportó el fin de esta tímida pero real apertura y abrió un período de franca involución para muchas de estas minorías. Italia fue el país pionero en adoptar medidas restrictivas. Tras la victoria aliada en 1918 Italia obtuvo el Tirol del Sur por medio del Tratado de Saint Germain de 1919, el cual de paso imponía al gobierno de Roma distintas obligaciones para preservar los derechos de la nueva minoría alemana.

En parte como reacción al Pacto de Locarno (1925) que dejó fuera a Italia, el fascismo violó rápidamente el Tratado de

Saint Germain poniendo en marcha entre octubre y diciembre de 1925 un duro plan de italianización del Tirol del Sud, que para empezar recibió el nombre de Alto Adigio. Se favoreció el establecimiento de población italiana en la zona y por el contrario se realizaron traslados forzosos de tirolesees alemanes al Sur de Italia. El llamado "Pacto de Acero" de 22 de mayo de 1939 entre Hitler y Mussolini provocó que en seis meses unos 185.000 tirolesees germanoparlantes emigraran a Alemania, así como fuertes tensiones diplomáticas entre ambas potencias⁶⁴. Al mismo tiempo, se actuó en las otras zonas bilingües, como en Trieste, el Valle de Aosta o el Piamonte, donde en 1935 se prohibió el occitano.

El tratamiento del gobierno alemán hacia sus minorías fue bastante parecido. Baste recordar el bando de 1940 sobre la germanización de los nombres de Alsacia, donde "ya no hay más lugar para las personas que lleven nombres franceses"⁶⁵.

En Austria el canciller Engelbert Dollfuss substituyó en marzo de 1934 la Constitución de 1920 por otra de corte fascista-corporativista. En marzo de 1938 Austria se convirtió en un país satélite del III Reich ("Anchluss"), y aplicó sus mismos principios. Pero quizá el caso más dramático fue el de España, donde en 1937 el régimen para-fascista del general Francisco Franco suprimió todos los Estatutos de Autonomía regionales e instauró un Estado totalitario, uniforme, centralizado y monolingüe⁶⁶.

3.9: Los años posteriores a la II Guerra Mundial

El fracaso final del modelo instaurado tras la I Guerra Mundial y la represión de nazis y fascistas hicieron que en 1945 los aliados tuvieran que replantearse de nuevo el problema de las minorías étnicas y lingüísticas en Europa, sólo que bajo una perspectiva totalmente distinta. En 1919 la protección estatal a las minorías fue considerada como una salida válida para aquellos casos que no podían ser resueltos mediante la autodeterminación o las modificaciones fronterizas. En cambio, en 1945 prevaleció el principio de que para proteger los derechos individuales no era preciso, ni siquiera oportuno, reconocer los derechos de las minorías. Para la formación de este criterio pesó mucho la actitud beligerante de las minorías alemanas en Europa Central apoyando la política expansionista y belicista de Hitler. Por otro lado, reflejaba la ideología norteamericana del *melting pot*, que preconizaba la disolución de los particularismos étnicos y lingüísticos de las minorías dentro de la "nación americana".

Por esta razón, los primeros documentos de la post-guerra resultaron enormemente reservados sobre esta cuestión y la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU en 1948 no se refirió a los de las minorías étnicas y lingüísticas⁶⁷. Incluso se dió luz verde a las decisiones de la Conferencia de Potsdam (julio-agosto 1945), que comportaron la expulsión de millones de europeos, sobre todo de alemanes

residentes en los países de Europa Central y Oriental⁶⁸. Con todo, la Carta de las Naciones Unidas estableció en su artículo primero como base del nuevo orden internacional "el principio de igualdad de los derechos de los pueblos" y "el derecho a disponer de sí mismos".

Sin embargo, subraya Alain Fenet, el contenido de esta regla era limitada, puesto que para la Carta los pueblos son "las unidades políticas reconocidas, constituídas en los Estados existentes o a restablecer". Lo que pretende es restaurar Europa y el mundo sobre aquellas bases que el nazismo había querido destruir, es decir la democracia y el derecho⁶⁹, y no reconstruir un nuevo orden con una presencia más o menos activa de las minorías étnicas y lingüísticas.

Los graves problemas económicos derivados de la guerra y los precoces inicios de la "guerra fría" aconsejaron a los distintos gobiernos occidentales posponer el tratamiento de las minorías para no distraer las fuerzas, concentradas en la recuperación económica y en preparar la defensa ante un nuevo y, si cabe, más peligroso enemigo. En no pocos casos las reivindicaciones de las minorías eran vistas como un intento de debilitar al Estado en una situación de grave peligro, y en consecuencia como una traición a los intereses generales.

Por lo demás, en la mitad occidental de Europa los derechos individuales estaban bien encauzados, salvo en algunos países

como España y Portugal, y la mayor parte de las minorías eran débiles tanto demográfica, como política y culturalmente. Bajo esta perspectiva global pudo sostenerse, por ejemplo, el Estado franquista en España, o mantenerse durante unos años las disposiciones punitivas contra las minorías alemanas en países tan escrupulosamente democráticos como Bélgica o Dinamarca.

3.10: El debate sobre las minorías lingüísticas en el proceso constituyente italiano

Posiblemente el principal debate acerca del encaje de las minorías en los Estados de la post-guerra se dió en Italia. En 1919 la protección de las minorías se entendía como el corolario del principio de nacionalidad, de manera que pudiera ser aplicado sólo en aquellas situaciones en que se producía una separación entre "Estado" y "Nación", es decir cuando una colectividad de personas pertenecientes a una comunidad nacional viviera en un Estado distinto al que dicha comunidad reconocía como su propia patria.

Por el contrario, en 1945 la defensa de las minorías formaba parte de la construcción plural, es decir democrática, de los Estados. Todos aquellos grupos que adujeran diferencias étnicas, culturales o simplemente lingüísticas en relación a la cultura oficial o estatal, tenían los mismos derechos a verlas reconocidas y encauzadas en las leyes que los grupos

ideológicos o políticos.

Según la primera interpretación, el artículo 6 de la Constitución italiana de 1947 que reconocía la existencia de minorías nacionales en su interior y se comprometía a protegerlas "mediante normas adecuadas", tenía que referirse sólo a las comunidades francesa del Valle de Aosta, alemana del Tirol del Sur, y eslovena de Venecia-Friuli, comunidades que obtenían así una protección específica a través de sendos Estatutos de Autonomía regionales, a los que se sumarían los de las dos islas mayores, Sicilia y Cerdeña sin referencias lingüísticas⁷⁰. La segunda interpretación alcanzaba a todas las minorías que aspiraban a una distinción de sus peculiaridades étnico-lingüísticas y no sólo a las nacionales vinculadas a otro(s) Estado(s)⁷¹.

En el transcurso del debate constitucional prevaleció la primera idea de salvaguardar los derechos de las minorías a los que Italia se obligaría mediante tratados internacionales, como en 1919, los cuales serían incorporados al ordenamiento interno. Esto afectaba a las tres comunidades de los tres territorios citados, y excluía al resto de minorías lingüísticas, dándose el caso paradójico de que se protegía por ley a la minoría eslovena del Friul-Venecia Julia y no a la minoría de habla friulana en el mismo territorio. Pero ya entonces hubo varios intentos fallidos de conciliar ambos enfoques y de extender la protección del Estado a catalanes,

griegos, albaneses, etc., aunque fuera con fórmulas distintas. Se rechazó también transferir esta potestad a los poderes regionales, cosa que después resultó la mejor solución y no sólo en Italia⁷².

3.11: La recuperación de la técnica de los Tratados Internacionales

Lo cierto es que los primeros pasos para resolver la convivencia con las minorías lingüísticas italianas siguieron el modelo de 1919 de los Tratados Internacionales. La espinosa cuestión del Tirol del Sur-Alto Adigio fue regulada a través del Tratado de 1947, que admitía la supervisión de Austria sobre las garantías que Italia daba a la minoría alemana regional⁷³. La continuidad del proceso de italianización provocó numerosas protestas del gobierno de Viena y enfrentamientos diplomáticos, que llegaron a bloquear las negociaciones para un eventual ingreso austríaco en la Comunidad Económica Europea, y que se alargaron hasta el Acuerdo de noviembre de 1969. Hubo incluso episodios terroristas, que complicaron aún más la tensa situación.

Dinamarca y Alemania intercambiaron en septiembre y octubre de 1949 sendas declaraciones por las que se concedían garantías a las respectivas minorías alemana y danesa⁷⁴. Ambas declaraciones desembocaron en las de 29 de marzo de 1955, mucho

más completas y aún en vigor⁷⁵.

Italia y Yugoslavia protegieron sus respectivas minorías en el otro país por medio del Tratado de Londres de 5 de octubre de 1954 con Gran Bretaña y los EEUU como potencias garantes⁷⁶. Este tratado fue actualizado el 10 de noviembre de 1975 por el de Osimo, que regulaba la complicada situación en Trieste (zona italiana) e Istria (zona yugoslava) y las relaciones con las respectivas minorías en el área⁷⁷. En julio de 1994 el gobierno esloveno, presidido por Janez Drnovsek, rechazó una petición del gobierno italiano, presidido por Giulio Berlusconi, para revisar el Tratado de Osimo⁷⁸.

También las minorías eslovena de Estiria y Carintia y croata del Burgenland en Austria fueron protegidas por el Tratado de 15 de mayo de 1955 con Yugoslavia, regulación, por cierto, que los austríacos cumplieron con rigor y seriedad⁷⁹.

En aquellos países, como en España, donde no existieron los tratados internacionales la situación de las minorías en general permaneció igual en el mejor de los casos. Baste señalar, por ejemplo, que la Constitución francesa de 1958 no recogió los derechos de sus minorías. La Ley Fundamental de Bonn de 1949 creaba una estructura federal y reconocía en general todos los derechos al uso de las lenguas no de Estado, pero no se puede olvidar que este modelo fue pensado por los aliados como una forma de debilitar a Alemania⁸⁰. Las quejas

de otras minorías, por ejemplo de catalanes y vascos, dirigidas a los gobiernos occidentales y a las primeras instituciones europeas y mundiales encontraron el silencio y la indiferencia por toda respuesta.

Hubo, sin embargo, algunas excepciones ocasionadas por circunstancias muy concretas y determinados Estados tomaron iniciativas propias para mejorar la situación de sus minorías. Bajo la presión de una población flamenca cada vez más numerosa e industrializada Bélgica fue mejorando su legislación lingüística para dar más igualdad formal a los dos idiomas oficiales, el francés y el neerlandés. Dinamarca solucionó el conflicto de las Islas Feroe con un amplio Estatuto de Autonomía el 23 de marzo de 1948, que reconoció todos los derechos lingüísticos de su población sin menoscabo de la co-oficialidad de la lengua danesa⁸¹. También Groenlandia recibió un tratamiento semejante para evitar su absorción por los EEUU. Finlandia amplió la autonomía de las Islas Aland⁸² y además modificó en 1962 la Ley de la Lengua para atraerse a la minoría sueca frente a la presión soviética. En Francia la Ley Deixonne de 1951 supuso un leve respiro, más formal que real, para las minorías lingüísticas de este país. Luxemburgo y Malta introdujeron el bilingüismo en sus respectivas constituciones de 1948 y 1964⁸³, e Irlanda prosiguió su política de apoyo al gaélico.

3.12: La vía al pluralismo lingüístico a través de los derechos humanos

La constatación de las atrocidades nazis hizo que las declaraciones sobre derechos humanos de la post-guerra pusieran el énfasis en el derecho a la no-discriminación, y de un modo muy concreto en la no discriminación por razón de la lengua y en el derecho a la libertad de expresión. Prácticamente todos los documentos de los años 1945 a 1965 referidos a derechos humanos prohibían taxativamente la discriminación por razón de raza, de sexo, de lengua, de religión o de cualquier otra consideración política, social o económica. Incluso se elaboraron declaraciones específicas para cada situación, como por ejemplo la "Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial" de 1965. Estos derechos fueron penetrando en el ordenamiento interno de los países europeos, al principio con un sentido individual, pero más tarde en forma de derechos comunitarios, como ocurrió, por ejemplo, con los religiosos.

La libertad de expresión fue el otro puntal de los derechos lingüísticos. No sólo se protegía el contenido del mensaje, sino la forma, incluyendo la lengua. Así, por ejemplo, en Quebec (Canadá) la Corte Suprema consideró una violación del derecho a la libertad de expresión el que la ley impusiera el uso exclusivo del inglés en las publicaciones⁴⁴.

La progresiva democratización de la sociedad civil conllevó el que los expertos e intelectuales empezaran a considerar todas las expresiones lingüísticas como igualmente dignas, e incluso a valorar las ventajas de los sistemas bilingües o diglósicos. Las primeras experiencias en este terreno, especialmente en Quebec en la década de los años 1960, desmintieron los discursos tradicionales que denunciaban el uso de lenguas minoritarias como nocivas para el desarrollo intelectual de los escolares. La represión lingüística sostenida aún por muchos Estados empezaba a perder la lógica científica y política heredada del siglo XIX.

El pluralismo ideológico, político, religioso, cultural proclamado en casi todas las Constituciones democráticas (e incluso en algunas que no lo eran) exigía que las minorías lingüísticas dejaran de tener un carácter de excepcionalidad y de estar constreñidas en un Estado centralizado, unitario y monolingüe. El propio ordenamiento europeo empezó a reflejar esta nueva visión del pluralismo interno. En Italia, por ejemplo, las minorías constitucionalmente tuteladas desde 1947 por un tratado internacional o simplemente por el principio de nacionalidad, fueron situadas en régimen de igualdad con el resto de minorías lingüísticas.

Ya no se trataba, como en 1919, de retomar el principio de defensa de las nacionalidades, sino de una concepción más amplia a favor de las ideologías inspiradas en el pluralismo

institucional y democrático. Las nuevas relaciones internacionales habían erosionado el papel de los Estados cediendo protagonismo y funciones a los distintos bloques (aunque todavía no soberanía propiamente dicha), y por otra parte las fronteras habían perdido el valor intangible de antes de la guerra. Los nuevos valores democráticos habían ido ganando terreno en las instituciones y en la vida real de la población y, además, esto mismo había hecho retroceder el papel de la lengua como principal aglutinador de los Estados-nación. El tejido democrático era ahora quien cumplía esta función.

La descolonización de los imperios europeos y una primera distensión en la "guerra fría" permitieron que las grandes declaraciones internacionales empezaran a incluir llamamientos y artículos en defensa de las minorías nacionales, lingüísticas y étnicas. Y así el artículo 5.1.c) de la Convención Relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza adoptada por la UNESCO en 1960 sostenía que "debe reconocerse a los miembros de las minorías nacionales el derecho a ejercer las actividades docentes que les sean propias, entre ellas las de establecer y mantener escuelas y, según sea la política de cada Estado en materia de educación, emplear y enseñar en su propio idioma", aunque a continuación añadía una serie de reservas⁵⁵.

El Papa Juan XXIII, uno de los artífices de dicha distensión mundial, trató el tema de las minorías en su Encíclica "Pacem

In Terris" de 1963 y pidió que los gobernantes promovieran con eficacia los valores humanos de las minorías, "especialmente en lo tocante a su lengua, cultura, tradiciones, recursos e iniciativas económicas", aunque también alertó sobre los posibles excesos que pueden cometer éstas⁸⁶. Un cuarto de siglo más tarde su sucesor Juan Pablo II volvió sobre el tema en su Mensaje con motivo de la Jornada Mundial de la Paz, celebrada el 1 de Enero de 1989. "Otro derecho que se debe salvaguardar es el derecho de las minorías a defender y desarrollar su propia cultura. No es infrecuente el caso de grupos minoritarios en peligro de extinción cultural. De hecho, en algunos lugares se ha adoptado una legislación que no les reconoce el derecho al uso de la propia lengua. A veces, se han impuesto también cambios patronímicos y toponímicos...", afirmaba en su punto 7⁸⁷.

La misma Asamblea General de la ONU aprobó el 7 de diciembre de 1965 una declaración sobre el Fomento entre la Juventud de los Ideales de Paz, Respeto Mutuo y Comprensión entre los Pueblos, en la que remarcaba los derechos de las minorías⁸⁸, derechos que fueron proclamados de nuevo en la Declaración de los Principios de la Cooperación Cultural Internacional de 4 de noviembre de 1966⁸⁹.

El 19 de noviembre de 1974 la UNESCO recogería una vez más el contenido de ambas declaraciones en una de sus recomendaciones sobre Educación⁹⁰, mientras que la 20^a

Conferencia General de esta institución aprobó el 22 de noviembre de 1978 una declaración semejante para los medios de comunicación de masas⁹¹.

Esta convergencia de declaraciones y principios culminó en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, que dió paso a una renovada defensa de las minorías dentro de Europa. El artículo 27 del Pacto dice textualmente que "en los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma"⁹².

Este Pacto, aprobado por la Asamblea General de la ONU sin ningún voto en contra, ni abstención alguna, constituyó un nuevo punto de partida, a pesar de que las ratificaciones tardaron bastante en llegar. España, por ejemplo, no lo ratificó hasta abril de 1977. Con el fin de clausurar el Año de los Derechos Humanos la Conferencia Internacional de los Derechos Humanos proclamó el 13 de mayo de 1968 una Declaración que seguía los pasos del Pacto de 1966, con más energía, si cabe⁹³.

3.12.1: Los derechos lingüísticos en el Consejo de Europa

La adaptación de estas normas universales a Europa corrió a cargo preferentemente del Consejo de Europa, como garante de las democracias parlamentarias. Entre los acuerdos más destacados del Consejo de Europa en su primera etapa cabe mencionar la Convención Europea Para la Protección de los Derechos del Hombre y de las Libertades Fundamentales, firmada en Roma el 4 de noviembre de 1950 y en vigor desde el 4 de septiembre de 1953. Los artículos 10 y 14 de esta declaración amparan la libertad de expresión, sin distinción "de sexo, raza, color, lengua, religión, opiniones políticas u otras, origen nacional o social, pertenencia a una minoría nacional, fortuna, nacimiento, o cualquier otra situación"⁹⁴.

Sin embargo, una buena muestra de las dificultades con que tropezaba esta institución en sus relaciones con los Estados, es el anteriormente citado Texto sobre Minorías del Proyecto de Protocolo Adicional N° 4 a la Convención de 1950. Esta enmienda que defendía abiertamente los derechos de las minorías nacionales⁹⁵, fue aprobada por la Asamblea Parlamentaria el 23 de abril de 1961⁹⁶, pero el Comité de Ministros lo congeló a la espera de una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos sobre varias leyes lingüísticas belgas. Promulgada dicha sentencia, el texto no fue remitido nunca a la Convención, ni se promulgó.

En 1957 el Consejo de Europa creó la Conferencia de los Poderes Locales de Europa (CPLE)⁹⁷ al principio con objetivos puramente municipalistas, pero que resultó el embrión de una posterior política regional de esta institución. La CPLE reivindicó siempre el haber sido la primera organización europea que reconoció oficialmente el derecho primero de los municipios y comunas y más tarde de las regiones a participar en el proceso de unión europea al lado de los gobiernos y de los parlamentos estatales a partir del principio de subsidiariedad⁹⁸.

A partir de 1978 en la Declaración de Burdeos la CPLE añadió al principio de subsidiariedad "el derecho de cada europeo a su región", ya que "herederas de la historia de Europa y de la riqueza de su cultura, la regiones europeas constituyen los valores irremplazables e incomparables de la civilización europea"⁹⁹. Las regiones, por ende, ya no eran consideradas como meros instrumentos de la subsidiariedad, sino que aportaban a la construcción europea sus distintas culturas y lenguas en una relación multilateral. La Resolución 117 de 1980 insistió en estos puntos de vista de la CPLE, pero considerando siempre la región como un componente esencial del Estado descentralizado.

En su VIII Sesión celebrada en Estrasburgo en 1970 la Conferencia reconoció oficialmente el importante papel de las regiones, como nivel intermedio entre los Estados y los

municipios. Las regiones se habían ido dibujando como unidades económicas, pero ya empezaba a aparecer también su peso lingüístico-cultural e histórico, a pesar de las grandes diferencias existentes entre ellas. Por ello, se comenzaba a admitir que constituyeran un sistema político-electoral propio dentro del conjunto del Estado con el fin de articular su autonomía y desarrollar su línea de actuación.

3.12.2: La vía de Helsinki a unos derechos lingüísticos pan-europeos

1975 fue un año decisivo para las regiones europeas y las minorías lingüísticas, debido en gran parte al Acta de Helsinki, firmada el 30 de agosto de este año. Este documento, que ponía fin a la primera fase de la Conferencia de Seguridad y Cooperación de Europa (CSCE), impuso el principio de coexistencia pacífica dentro de la guerra fría entre los dos grandes bloques y aseguraba el mantenimiento de las fronteras de la post-guerra. En este nuevo marco de seguridad las minorías nacionales perdían en gran medida su carga de peligro interior para los Estados europeos. Pero al mismo tiempo, el Acta de Helsinki reconocía explícitamente sus derechos y les proporcionaba una base política y jurídica de primer orden. "Los Estados participantes en cuyo territorio existan minorías nacionales, respetarán el derecho de los individuos pertenecientes a tales minorías, a la igualdad ante la ley, les

proporcionarán la plena oportunidad para el goce real de los derechos humanos y las libertades fundamentales y, de esta manera, protegerán los legítimos intereses de aquéllos en esta esfera"¹⁰⁰. La conexión entre este texto y los anteriores sobre derechos humanos aparece aquí con toda nitidez.

Tradicionalmente las instituciones europeas de la post-guerra han combinado las grandes declaraciones en las que los derechos lingüísticos aparecen como universales, abstractos y aplicables a todos por igual, con las recomendaciones ya más concretas y lógicamente relacionadas con los objetivos fundamentales que persigue cada una de ellas: la seguridad, la conservación de los particularismos culturales, el impulso de las realizaciones transfronterizas, la construcción de la unión europea, etc. A medida que se ha ido progresando en la elaboración de este cuerpo doctrinal lógicamente se ha ido poniendo el énfasis en el segundo aspecto.

A partir de tales objetivos, las instituciones han considerado a los derechos humanos como un instrumento muy capaz de influir en las legislaciones y de introducir nuevas pautas educativas o en los medios de comunicación social, dos sectores claves para las distintas políticas lingüísticas. Un derecho como el de no discriminación goza de tal reconocimiento general que de ninguna manera puede ser seriamente negado allí donde se exija su aplicación.

El Parlamento Europeo en su Proyecto de Informe de una Carta de los Derechos de los Grupos Etnicos en los Estados de la Comunidad de 5 de mayo de 1988 clasificó los derechos de estas minorías en existenciales, políticos, culturales y socio-económicos. Por lo que se refiere a los culturales el Informe especifica que se refieren a "la protección de la identidad étnica, de la lengua¹⁰¹, de las particularidades y de las características y propiedades culturales específicas, así como de la historia y la religión del grupo étnico en cuestión

El aspecto comunitario de los derechos de las minorías lingüísticas ha sido subrayado sobre todo por el Consejo de Europa, ya que se trata no sólo de un foro sino de un marco de compromisos y de exigencias jurídicas que luego tienen su aplicación en las legislaciones estatales. Para el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos en el marco de la Convención de 1950 estos derechos tienen ya valor absoluto y no son sólo instrumento de otros objetivos generales. En su sentencia de 23 de julio de 1968 sobre el régimen lingüístico belga afirmó que no constituye discriminación perseguir "un fin de interés público", es decir "favorecer la unidad lingüística en el interior de las regiones unilingües y en particular promover en los alumnos el conocimiento profundo de la lengua oficial de la región"¹⁰². Con esta sentencia se admitió el derecho de un grupo étnico con carácter nacional y sin Estado propio a proteger las manifestaciones de su identidad colectiva sin violar a su vez los derechos de otros grupos establecidos

minoritariamente en su ámbito geográfico.

3.13: El desarrollo regional, arma política de las minorías lingüísticas

La segunda vía por la que la reformulación de las minorías lingüísticas entró en el proceso de unión europea fue la política de desarrollo regional. La estrecha conexión entre minorías y regiones deriva de la base territorial de las primeras y del carácter histórico que tienen muchas de las regiones europeas. Así pues, con mucha frecuencia, aunque no siempre, las regiones históricas con una cultura y una lengua propias coinciden con marcos administrativos y políticos, que son los primeros en dar salida a las aspiraciones de las minorías.

La profundización del proceso de unión en Europa benefició ampliamente a las regiones puesto que aquella trabajaba por recuperar sus esencias culturales y las regiones pretendían recogerlas mejor que no los Estados. En este sentido las regiones no plantearon directamente la cuestión de las minorías étnicas y lingüísticas aduciendo que en gran medida y en términos históricos se correspondían. En las regiones "se encuentran las raíces milenarias de Europa", afirmaba la declaración final de los primeros Estados Generales del Consejo (hoy Asamblea) de Regiones de Europa, celebrados en Estrasburgo

en noviembre de 1985.

Para los regionalistas esta afirmación no puede aplicarse a los Estados de construcción y consolidación muy modernas en comparación con las regiones. Estas, a pesar de haber desaparecido como entes políticos y con frecuencia incluso administrativos, han persistido por la profundidad de su sustrato histórico-cultural. "Siglos de esfuerzo centralizador -afirman Solange y Christian Gras-, no han matado las diversidades. Independientes y a menudo poderosas en la Edad Media, las regiones han podido conservar una vida propia incluso después de su incorporación a los Estados soberanos"¹⁰³. Por mucho que su personalidad ancestral haya dado la sensación de haber quedado disuelta en los Estados, ha persistido latente y encubierta tras las manifestaciones típicas de las diversas civilizaciones regionales. Esta personalidad es de hecho su gran aportación a la construcción europea, y así las características propias, entre ellas las lingüísticas, de las minorías territoriales se ven potenciadas como el aspecto más singular de todo el mosaico regional de Europa.

3.13.1: Los progresos regionalistas en la década de 1970

La década de 1970 conoció un rápido desarrollo de la política regional europea, hecho que repercutió directamente en

un mejor, aunque todavía muy limitado, tratamiento de las minorías lingüísticas. "Las regiones constituyen un marco propicio para el reconocimiento de las diversidades étnicas y culturales propias de cada una de ellas", afirmaba más tarde el Consejo de Europa¹⁰⁴.

Según la tesis de Andrea Chiti-Batelli¹⁰⁵, los progresos hechos por el regionalismo como vía al europeísmo se vinculan a los avances realizados por la idea de un "federalismo integral o global", que al incluir el principio de subsidiariedad abarca los tres estamentos, comunitario, estatal y regional/local. En segundo lugar, el argumento cultural sostiene una revaloración de las regiones frente a las dificultades de los Estados monolingües para dar satisfacción al pleno desarrollo de las características étnicas, culturales y lingüísticas de sus minorías; a lo sumo las toleran. Excluida la independencia de las regiones, la única solución es una Europa ampliamente federalizada. El tercer argumento, es de tipo económico-financiero, ya que sin una autonomía financiera no existe ni la política, ni la cultura, tal como sostiene Kenneth C. Wheare.

Los grandes principios democráticos elaborados desde 1945 fueron introducidos progresivamente en la legislación positiva de los Estados por la acción combinada de los partidos demócrata-cristianos y socialdemócratas, que, además de los derechos humanos, defendían la libertad de asociación para

sindicatos, partidos y organizaciones en general, y por ende de las minorías. De este modo, reconoce Alessandro Pizzorusso, "las minorías lingüísticas perdieron aquel carácter de excepcionalidad que las constreñía en el ámbito del Estado centralizado y rigurosamente unitario que se había ido desarrollando a lo largo del siglo XIX"¹⁰⁶.

Por otra parte, el Consejo Europeo de Roma de diciembre de 1990 añadió al principio de cohesión el de subsidiariedad, principio que más tarde aparecería ampliamente recogido en el Tratado de Maastricht. "El Consejo Europeo reconoce la importancia del principio de subsidiariedad, no sólo al considerarse la ampliación de las competencias de la Unión, sino también en la aplicación de las políticas y decisiones de la misma"¹⁰⁷.

En todo caso, los verdaderos interlocutores políticos y económicos de Bruselas continuaron siendo los gobiernos estatales, cuya integridad se garantiza, y no las instituciones regionales o locales. Las leyes empezaron a aplicar medidas diferenciadas para cada minoría lingüística, muchas veces en el ámbito regional, dado que la administración regional asumió casi siempre la gestión de las minorías. El modelo español creado en 1978 es en este sentido paradigmático. El derecho de las minorías fue entrando en el derecho común y perdió el carácter derogatorio y extraordinario que le había sido propio en los años anteriores. La legislación sobre las minorías se

fue ciñendo a un compendio de normas más o menos comunes para toda Europa Occidental, aunque adaptándose a las circunstancias concretas de cada Estado. Con frecuencia se trataba simplemente de un desarrollo de las leyes comunes, y no sólo de derogar normas discriminatorias o restrictivas.

De este modo, después de la Constitución española de 1978 y de la reforma administrativa francesa de 1981 ningún país europeo, con la excepción de Grecia, mantuvo oficialmente una doctrina abiertamente contraria al plurilingüismo en general y a la defensa de las minorías. En sus declaraciones también el Parlamento Europeo empezó a asociar a las regiones al proceso de toma de decisiones de la Comunidad. A partir de 1979 el nuevo sistema de elección universal y directa llevó al PE a representantes de partidos políticos de implantación regional.

Elecciones de 1979 al PEPartidos regionalistas representados

Volksunie (flamencos)..... 1

Front Democratique Francophone..... 2

Sudtiroler Volkspartei..... 1

Scotish National Party..... 1

Democratic Unionist Party..... 1

(Irlanda del Norte)

Official Unionist Party..... 1

(Irlanda del Norte)

En las elecciones de 1984 desapareció el FDF de Bélgica y se incorporaron otros partidos regionales como el Partito Sardo d'Azzione en coalición con la Unión Valdotaíne, así como varios partidos regionales españoles (Partido Nacionalista Vasco, Partido Nacionalista Galego, Convergència i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya, etc.). Algunos de los partidos de ámbito estatal constituyeron o integraron secciones

territoriales, como ocurrió en España con la coalición Izquierda Unida o el Partido Socialista, o en Bélgica con los socialistas, socialcristianos o los liberales.

Partidos regionalistas representados en el PE

Elecciones de 1994

Liga Norte de Italia.....	6
Bloque Flamenco.....	2
Frente Nacional Valón.....	1
Unión Popular (Volksunie).....	1
Convergencia i Unió (Cataluña).....	3
Coalición Nacionalista (PNV y C. Canaria)..	2
P. Nacionalista Escocés.....	2
P. Unionista del Ulster.....	1
P. Democrático Unionista del Ulster.....	1
P. Liberal del Ulster.....	1

Estos representantes trabajaron intensamente en pro de los derechos de las minorías lingüísticas, especialmente entre 1983 y 1988, y sus firmas aparecen en la mayoría de documentos y declaraciones de esta institución relacionadas con este tema, junto con la de diputados de otros grupos, como los ecologistas o los no inscritos.

La primera declaración del PE sobre esta materia fue hecha el 14 de septiembre de 1983 cuando en el preámbulo de una resolución se prevé expresamente que el fin de la unión europea consiste, entre otras cosas, en contribuir a hacer posible la participación de las colectividades regionales y locales en la construcción europea.

El 19 de junio de 1984, a raíz de la reforma del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), la Comisión, el Consejo y el Parlamento aceptaron este diálogo institucional con las regiones. Este principio hallaría una primera, aunque todavía muy tímida, concreción en el Acta Unica Europea de 1986.

El propio Parlamento Europeo adoptó el 18 de noviembre de 1988 una resolución sobre política regional y el papel de las regiones en la CE; como anexo y documento de trabajo de la recomendación figuraba una Carta comunitaria sobre la regionalización de los Estados miembros. En esta resolución la Cámara europea indicaba que un ordenamiento descentralizado y caracterizado por la autonomía regional no sólo era indispensable para la conservación del patrimonio cultural de las regiones, sino que también venía impuesto por motivos de racionalidad económica. Los puntos 27 y 29 insistían en la necesidad de mantener relaciones directas entre las regiones y la Comunidad. Esto último provocó un claro rechazo por parte de algunos Estados regionalizados, como se pudo observar en el debate que el Senado español mantuvo el 10 de abril de 1991

para manifestar, a propuesta de los nacionalistas catalanes, el apoyo de la Cámara a la resolución del Parlamento Europeo y a la Carta Regional¹⁰⁸.

Así se empezaba a identificar la identidad individual y colectiva, definida en gran medida por la comunidad lingüística, con la región y a aceptar la pluralidad de identidades europeas como elemento constitutivo de la unión continental.

A escala pan-europea esta visión fue finalmente asumida en la "Declaración de Viena", aprobada tras la reunión de Jefes de Estado y de Gobierno de los 32 países miembros del Consejo de Europa celebrada en octubre de 1993 en Viena¹⁰⁹, que otorgó a esta institución un mandato para elaborar por un lado un protocolo que complementara la Convención Europea de Derechos Humanos con el fin de proteger los derechos culturales y lingüísticos de las minorías étnicas y, por otro, un protocolo añadido a la Convención Europea de Derechos Humanos que garantizara los derechos culturales de las minorías, por medio de un Tribunal único y permanente resultante de una fusión, quizá dejando dos salas, antes de mayo de 1994 de la Comisión de Derechos Humanos con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo. Distintos países, encabezados por Francia y Gran Bretaña, rehusaron extender este protocolo a los derechos políticos¹¹⁰.

La cumbre de Viena encargó, además, al Comité de Ministros la conversión de la CPPLRE en una institución consultiva para asegurar la participación de las colectividades regionales y locales en el proceso de unión europea, así como su representación en los trabajos generales del Consejo de Europa. Así, el 17 de enero de 1994 por acuerdo del Comité de Ministros nació en Estrasburgo el Congreso de Poderes Locales y Regionales de Europa (CPLRE), subsumiendo con más competencias a la anterior CPLR.

3.13.2: La región como marco de soluciones lingüísticas

La progresiva asunción de poderes políticos y administrativos por parte de las regiones permitió ofrecer soluciones a distintos territorios plurilingües en el marco del autogobierno regional. Europa Occidental contaba con una buena tradición en el uso de las autonomías regionales para resolver conflictos, empezando por las regiones belgas o las italianas o los cantones suizos, pero también las Islas Aland, o las Feroe, o Groenlandia. Una vez más la Constitución española de 1978 aparece como el mejor ejemplo de este modelo, aunque no es la primera en desarrollarlo. Dentro de las posibilidades constitucionales del correspondiente Estado, las competencias regionales en materia lingüística proporcionan fórmulas positivas que no comprometen necesariamente todo el Estado. (Los núcleos regionalistas suelen reclamar este compromiso del

Estado, aunque sólo sea como garantía de segundo nivel). El Parlamento Europeo también se inclinó claramente por la participación de dichas minorías en el proceso de la toma de decisión política al afirmar que se debe consultar y pedir la colaboración "a las asociaciones que tienen por objeto la defensa y el desarrollo de las lenguas regionales y minoritarias"¹¹¹.

La regionalización de Europa da salida asimismo a una vieja aspiración de numerosas minorías lingüísticas de no quedar partidas por divisiones políticas o administrativas. La propia CELRM recomienda "el respeto al área geográfica de cada lengua regional o minoritaria, haciendo de forma que las divisiones administrativas existentes o nuevas, no constituyan un obstáculo a la promoción de esta lengua regional o minoritaria"¹¹². El recurso a las divisiones político-administrativas ha sido utilizado con frecuencia por los Estados (Irlanda, Finlandia, Suiza, Bélgica, España, etc.) con propósitos y resultados distintos. Tampoco el Parlamento de Estrasburgo dudó en vincular las unidades político-administrativas con las áreas culturales al pedir que "se favorezca la correlación más amplia posible entre regiones culturales y estructuras geográficas de los poderes locales"¹¹³. Se trata como escribe Jean Fourastié de "conservar un pequeño resto de esta originalidad y de esta personalidad locales sin las que el mundo se volvería un tedio fundamental extendiéndose de París a San Francisco y de San

Francisco a Calcuta..."¹¹⁴.

Al margen de la firma de tratados internacionales, siempre complicados de hacer, algunas constituciones estatales, como la belga¹¹⁵, permiten estas relaciones culturales y lingüísticas transfronterizas. Otras veces son las propias regiones quienes poseen esta competencia, como ocurre en el Estatuto de Autonomía del País Vasco¹¹⁶. En todo caso, para el Parlamento Europeo "la cooperación a través de las fronteras entre grupos regionales o minoritarios y las comunidades de otros Estados miembros con los que estén hermanados culturalmente, debe ser facilitada y favorecida aplicando el Convenio-marco europeo de 1980 sobre la cooperación a través de las fronteras entre las colectividades locales"¹¹⁷. Esta opinión fue totalmente compartida por el Consejo de Europa al insistir en Borken en "la necesidad de suprimir todo obstáculo a los intercambios culturales de las regiones que pertenecen a varios países, en favor de las minorías nacionales y de su identidad cultural, con el fin de sacar de dicha cooperación una experiencia suplementaria para una unión más estrecha entre los Estados europeos"¹¹⁸.

Los Estados deben asumir esta política. El Parlamento Europeo consideró "esencial para la identidad cultural europea que las peculiaridades regionales existentes tengan un espacio en cada Estado nacional, valorando las particularidades existentes y respetando los intereses, las aspiraciones y el

patrimonio histórico, lingüístico y cultural de cada región¹¹⁹.

3.13.3.: La política regional en la CEE a partir del Acta Unica: una interlocución directa

Firmada el 17 de febrero de 1986 en Luxemburgo, el Acta Unica Europea (AUE) entró en vigor el 1 de julio de 1987. El Acta no alteró las relaciones entre los poderes supranacionales y los subnacionales y las regiones continuaban siendo un objeto de la política comunitaria, sin que a cambio las autoridades regionales fueran actores en las decisiones comunitarias que más tarde tenían que aplicar. A lo sumo influían en la formación de la voluntad estatal correspondiente, que era la que negociaba con Bruselas. Su artículo 130 A seguía estableciendo una política regional de base esencialmente económica¹²⁰.

La creciente presión regional empezó a surtir efectos en Bruselas, que por primera vez sintió la necesidad de una interlocución directa, aunque no vinculante, con los poderes locales y regionales y no únicamente a través de los Estados miembros. Mediante la decisión 88/487/CEE, la Comisión Europea creó el 24 de junio de 1988 un Consejo Consultivo de los Poderes Regionales y Locales de Europa con la misión de asesorarla en la elaboración y aplicación de su política

regional¹²¹. Se la encuadró dentro de la Dirección General de Política Regional con una composición de 42 miembros.

"El Consejo Consultivo permite establecer una colaboración a nivel triangular, el "Dreieck": "Estados-Regiones-Comunidad", como afirmaba recientemente en Bruselas el comisario de política regional, Schmidhuber, en una reunión con el comité directivo de la Asociación Europea de Regiones Fronterizas. Es evidente, por otra parte, que se trata únicamente de un organismo consultivo, pero que de todos modos representa el reconocimiento por parte de la Comisión de la Comunidad de la representación de las regiones de Europa", escribió por aquellos días el Director General de Asuntos Interdepartamentales de la Generalidad de Cataluña, Joan Vallvé¹²².

Que las reivindicaciones regionales de una interlocución con los organismos de la CE continuaban, lo prueban las conclusiones del Consejo Europeo de Roma de Diciembre 1990, cuando afirma que "el Consejo Europeo toma nota de la particular importancia concedida por algunos Estados miembros a la adopción de disposiciones que tengan en cuenta las competencias especiales de las instituciones regionales o locales en lo que se refiere a determinadas políticas comunitarias, y a la necesidad de estudiar procedimientos apropiados para las consultas con dichas instituciones"¹²³.

3.13.4: Los instrumentos de las regiones: el ARE

A principios de los años 1980 la evolución del proceso de unión europea llevó a la cada vez más fuerte corriente eurorregionalista a crear los primeros "lobbies" propios para defender un reconocimiento directo de las regiones por parte de la CE. De este modo, en enero de 1985 se creó en Estrasburgo en el seno del Consejo de Europa el Consejo de las Regiones, con la asistencia de representantes de 60 regiones de Europa Occidental. La sesión constituyente se celebró en Louvain la Neuve (Bélgica) el 15 de junio de 1985.

En agosto de 1986 el Consejo de Europa le otorgó el estatuto de organización consultiva, lo que permitió una cooperación más estrecha en temas como juventud, itinerarios culturales y lenguas minoritarias. En la asamblea plenaria de Bruselas en mayo de 1987 el Consejo cambió su nombre por el de Asamblea de Regiones de Europa (ARE). Su primer presidente fue Edgar Faure, presidente del Franco Condado, hasta su muerte el 30 de marzo de 1988, siendo susbtituído el 28 de noviembre por el presidente del Véneto, Carlo Bernini. En julio de 1992 fue elegido tercer presidente de la ARE el presidente de Cataluña, Jordi Pujol, el cual fue reelegido para un segundo mandato bianual el 1 de diciembre de 1994 en la Asamblea de Estrasburgo.

La ARE estableció un total de 6 grupos de trabajo sobre diversos aspectos de las regiones europeas. El número cuatro, cuya dirección asumió el País de Gales, se denominó "Promoción de las Culturas Regionales", y tiene en cuenta las particularidades que caracterizan a las culturas y las lenguas minoritarias.

Que la ARE se preocupó de las minorías lingüísticas lo demuestran, por ejemplo, el documento "La contribución cultural de las regiones en la construcción de una Europa unida" publicado el 20 de noviembre de 1987 por el **European Centre for Traditional and Regional Cultures (ECTARC)**¹²⁴, o las declaraciones de su Cuarto Grupo de Trabajo emitidas el 11 de octubre de 1988 ("Promoción de las Culturas Regionales") y el 24 de abril de 1992 sobre los "Derechos Lingüísticos y los Derechos Culturales en las Regiones de Europa" emitido en Girona (España). En esta última se felicita a algunas minorías lingüísticas, como la catalana, la frisona o la galesa por los progresos realizados y las iniciativas tomadas, pero se señala asimismo que la vitalidad de muchas de ellas continúa en declive. Ello es debido en buena parte a la falta de reconocimiento legal por parte de los respectivos Estados, reconocimiento que la declaración exige con carácter inmediato. Al mismo tiempo, recuerda que merced al principio de subsidiariedad los poderes regionales deben ser los encargados de conservar la identidad cultural de sus poblaciones, tal como se ha hecho con éxito en países pluriculturales, como Bélgica,

Suiza, Alemania o Austria.

Por todo ello, la declaración

- a) lamenta los sucesivos recortes hechos por el Comité de Ministros del Consejo de Europa a la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias;
- b) requiere la ratificación inmediata de dicha Carta por los gobiernos;
- c) pide a los gobiernos que se oponen a ella que no impidan su firma a los Estados dispuestos a dotarse de este instrumento jurídico;
- y d) hace un llamamiento al Consejo de Europa para que prosiga activamente su política de defensa de las minorías.

A la Unión Europea y a sus instituciones la ARE les solicita que

- a) acojan favorablemente la diversidad lingüística y cultural de sus regiones, de acuerdo con los artículos 126 a 128 del Tratado de Maastricht;
- b) incluya en cuanto sea posible TODAS las lenguas europeas en los programas comunitarios de promoción cultural;
- c) incluya el catalán en el Programa Lingua, conforme a la Resolución Reding de 1990;
- d) aumente "considerablemente" los fondos destinados a promover las lenguas menos usadas¹²⁵.

3.13.5: El Comité de las Regiones de la Unión Europea

La creciente presencia de las regiones en la actividad institucional europea dió un paso más en el Tratado de Maastricht de 7 de febrero de 1992, fundador de la Unión Europea. Era la primera vez que un texto fundamental de la Comunidad Europea introducía a las regiones como entidades dotadas de poder político y que preveía mecanismos para posibilitar su participación en la definición de las políticas comunitarias. "En el marco de la evolución de la integración europea, el Tratado ha supuesto avanzar de un regionalismo funcional a un regionalismo institucional", escribe el profesor De Witte¹²⁶.

En efecto, el artículo 4.2 de este Tratado creó un Comité de las Regiones como órgano consultivo para asuntos locales y regionales de las instituciones comunitarias, recogiendo las propuestas básicas presentadas por España y Alemania en la Conferencia Intergubernamental para la Unión Política. El Comité no tiene rango de institución comunitaria, pero a diferencia del Consejo Consultivo, es independiente de la Comisión.

Los artículos 198 A, 198 B y 198 C del Tratado de Maastricht regulan el funcionamiento y las competencias de este órgano, que goza de la misma independencia que el Consejo Económico y Social (CES). Al igual que éste consta de 189 miembros, de los

cuales 21 son españoles y gozan de su misma independencia, aunque su Reglamento debe ser aprobado por el Consejo de Ministros.

Debe ser consultado por el Consejo de Ministros y la Comisión Europea en materias de educación, formación profesional y juventud, cohesión económica y social, redes de comunicación transeuropeas, salud pública y cultura. El Comité de las Regiones dispone, sin embargo, del derecho de iniciativa y puede elaborar informes y emitir dictámenes no solicitados previamente. Este derecho no se prolonga con un verdadero derecho de iniciativa legislativa. Por último, el Comité de las Regiones y el CES comparten la sede y la estructura funcional en Bruselas.

Su sexto informe versó sobre el Programa "Sócrates"¹²⁷, el 39º sobre el Programa "Kaleidoscope 2000"¹²⁸ y el 40º sobre el Programa "Ariane"¹²⁹. En ellos el Comité insiste en una mayor vinculación de los poderes regionales y locales en el intercambio de estudiantes, en el apoyo a las actividades artísticas y culturales de dimensión europea y en el fomento de las traducciones, alertando contra una imagen de cada Estado posee una cultura homogénea. Estos programas deben recoger mejor la diversidad cultural y lingüística de cada Estado miembro.

A raíz del Tratado de la Unión Yves Doutrieux estableció tres grupos de países comunitarios por lo que respecta a las relaciones directas entre las regiones y las instituciones comunitarias, especialmente la Comisión. El primer bloque incluye la RFA y Bélgica, países federales, que suelen incluir altos representantes regionales en las delegaciones que negocian con Bruselas. En el extremo opuesto Portugal, Irlanda, Dinamarca y Grecia apenas dan participación a los entes regionales y locales en su política comunitaria y presentan planes a escala estatal. En Portugal sólo las Azores y Madera han sido asociadas a las decisiones del gobierno central frente a Bruselas. Francia, España, Italia y Gran Bretaña se sitúan en una posición intermedia, ya que consultan a los gobiernos regionales antes de definir sus respectivas políticas comunitarias.

3.14: El derecho de las minorías dentro del proceso de unión pan-europea

Tanto la vía de los derechos humanos, como la política regional presentaban, sin embargo, importantes dificultades para el progresivo reconocimiento de los derechos de las minorías lingüísticas dentro del proceso de unión europea. La enorme variedad de situaciones y sobre todo el fuerte impacto que la reubicación de las minorías nacionales del Centro y Este de Europa tuvieron en la estabilidad continental a partir de

1989, obligaron a todas las instituciones europeas a pronunciarse y a crear un cuerpo doctrinario apto para todas las ocasiones.

La construcción europea en general se encontraba con el problema de que la Convención Europea de Derechos Humanos está basada en los derechos individuales y resultaba difícil aplicarlos a las colectividades. La misma ONU a duras penas consiguió realizar una definición común de minoría cuando declaró 1993 Año Internacional de las Minorías. La cuestión era que las distintas organizaciones trataban de fijar unas normas dentro de sus respectivos ámbitos de influencia, lo que motivó una iniciativa de la Unión Europea para conjuntar todas las declaraciones europeas.

En efecto, en el Consejo Europeo de Copenhague de junio 1993 se aprobó un primer borrador de documento para una propuesta de Pacto para la Estabilidad en Europa, que fue sometido a una comisión "ad hoc". El capítulo referente a las minorías étnicas y lingüísticas debía ser uno de los esenciales, una de las piezas claves en el proceso de ampliación y construcción de Europa, ya que "los nueve países en vías de adhesión a la UE dispondrán de un año aproximadamente para discutir bilateralmente y dejar zanjados sus litigios fronterizos y sus problemas con las minorías, ya sean nacionales, étnicas o religiosas"¹³⁰.

En este marco general el tema de las lenguas avanzaba con altibajos. Así, por ejemplo, el 11 de Enero de 1994 el Senado español realizó una profunda reforma de su Reglamento que permitió por primera vez el uso de las lenguas regionales co-oficiales en una institución del Estado, aunque de una forma muy restringida¹³¹.

Sin embargo, sólo un mes más tarde, el 23 de febrero de 1994, esta misma Cámara rechazó una moción que instaba al Gobierno central a promover la oficialidad de las lenguas autonómicas en las oficinas europeas instaladas en las Comunidades Autónomas bilingües. Fue inútil que en aquella ocasión el proponente, el senador Miguel Ramón i Quiles, adujera no sólo el ordenamiento legal del Estado español, sino el europeo, como por ejemplo la Resolución 192 del Consejo de Europa¹³².

3.15: ~~Las minorías lingüísticas obtienen su reconocimiento en toda Europa~~

En todas estas fases del proceso las lenguas minoritarias aparecían sólo de forma indirecta y no siempre. De hecho en las conclusiones de los sucesivos Consejos Europeos no aparecen referencias a las minorías hasta 1990, es decir después que la caída del muro de Berlín en noviembre de 1989 y el comienzo de la disgregación de Estados como la Unión Soviética, Yugoslavia

o Checoslovaquia alertaran sobre el futuro de las minorías. Empiezan a aparecer entonces ambiguas o vagas expresiones de reconocimiento de la existencia de "pueblos" o "naciones" distintas de las estatales. Sin embargo, dichas conclusiones dejan siempre bien patente que ello no cuestiona ni la estructura interna de los Estados, ni la confederal de la CE. Así, en las conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Birmingham de octubre de 1992 se afirma taxativamente que "corresponde a cada Estado miembro decidir cómo debe ejercer nacionalmente sus poderes"¹³³.

En cualquier caso, las referencias a las minorías étnicas y lingüísticas aparecen siempre vinculadas o a la defensa de los derechos humanos, o a la política exterior de la CE, sobre todo de cara a la evolución de los países de la Europa Central y Oriental. En el Consejo Europeo de Dublín-I de abril de 1990 se dan unas directrices a la CSCE. Entre ellas se cita la siguiente: "Los Doce se interesan en particular en un desarrollo equilibrado de la CSCE, que incluya en primer lugar el desarrollo de la democracia pluralista, el imperio de la ley, los derechos humanos, una mejor protección de las minorías¹³⁴, los contactos humanos, la seguridad, la cooperación económica, el medio ambiente, la ulterior cooperación en el Mediterráneo, y la cooperación en el ámbito de la cultura..."¹³⁵.

Dos meses después en el Consejo Europeo de Dublín-II los Jefes de Estado y de Gobierno hablaban para sus ciudadanos, recordando que "el Consejo Europeo ha hecho hincapié en que un objetivo fundamental de la integración europea es la promoción de los derechos, libertades y bienestar de los ciudadanos. Ha subrayado la importancia de una Europa de los pueblos¹³⁶, que trate de garantizar y aportar de una forma directa y práctica el beneficio de la Comunidad a todos sus ciudadanos"¹³⁷.

En la cumbre siguiente se insiste en ello y se promete que "esta misma exigencia (acercar la UE a los ciudadanos) se verá fortalecida por la definición de una ciudadanía europea, que se añadirá a la de los Estados miembros, y mediante la toma en consideración, según modalidades adecuadas, de los intereses particulares de las regiones"¹³⁸. Por primera vez, se reconoce oficialmente que la identidad regional, y por lo tanto la lengua, puede marcar a los ciudadanos, hasta el punto de influir directamente en su estatuto como ciudadano europeo. Sin embargo, no explicita la forma en que se va a aplicar este principio.

El Consejo Europeo de Luxemburgo de Junio 1991 aprobó una larga declaración sobre los Derechos Humanos, en la que cita a las minorías étnicas y lingüísticas. En primer lugar, el Consejo recoge la tesis de que una democracia efectiva debe asegurar la protección de las minorías, aunque recuerda el carácter fundamental del principio de no-discriminación, "tanto

si las personas afectadas pertenecen a una minoría como si no". Y añade a continuación que "el Consejo Europeo insiste en la importancia del respeto a la identidad cultural y a los derechos de que gozan los miembros de las minorías, y que estos deben poder ejercer en común con los otros miembros de su grupo. El respeto a este principio favorecerá el desarrollo político, social y económico". Con esta declaración la dirección comunitaria interpreta que los derechos humanos no son sólo de ámbito y alcance individual de acuerdo con la interpretación clásica, sino que también abarcan a los grupos y concretamente a las minorías. En cualquier caso, los derechos humanos son indivisibles, recuerda el Consejo de Luxemburgo, es decir que "la promoción de los derechos económicos, sociales y culturales, como de los derechos civiles y políticos, así como el respeto a las libertades religiosas y de culto, tiene una importancia fundamental para la plena realización de la dignidad humana y las aspiraciones legítimas de todo individuo"¹³⁹.

En diciembre siguiente en Maastricht el Consejo volvió a vincular los acontecimientos en Europa Central y Oriental con "los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales"¹⁴⁰, mientras que en el Consejo Europeo de Essen (RFA) de diciembre 1994 se advierte textualmente que "todas las actividades [culturales, educativas y formativas con los países de Europa Central y Oriental] deberán tener plenamente en cuenta la diversidad lingüística y cultural de la Unión"¹⁴¹.

En la cumbre de Lisboa en junio de 1992 se volvió a las expresiones ambiguas al relacionar la unión europea con las identidades nacionales: "el enfoque del Tratado de Maastricht, consistente en acercar el proceso de unidad europea a los ciudadanos y reitera la importancia de las identidades nacionales, debe quedar plenamente reflejado en las acciones y el comportamiento de la Comunidad". También se incluyó el fortalecimiento de los principios e instituciones democráticos y el respeto de los derechos humanos y de las minorías entre los objetivos de la Política Exterior y de Seguridad de la Comunidad (PESC)¹⁴². Y en la de Birmingham, en octubre de 1992, se distinguen (siempre vagamente) los conceptos de nación y de Estado: "debemos respetar la historia, la cultura y las tradiciones de cada nación, con una mayor comprensión de lo que los Estados miembros deben hacer y lo que compete a la Comunidad..."¹⁴³.

3.16: El Buró Europeo para las Lenguas Minoritarias

La aportación más concreta que la Comisión Europea hizo durante estos años al proceso de reconocimiento de las minorías lingüísticas fue sin duda la creación del **Buró Europeo para las Lenguas Menos Utilizadas**.

En el transcurso de un coloquio celebrado en Bruselas en mayo de 1982 sobre las implicaciones de la Declaración Arfé

aprobada por el Parlamento Europeo en octubre de 1981, varios representantes de minorías lingüísticas expresaron su deseo de que la CE creara un organismo propio que le sirviera de interlocutor oficial en este terreno. En Enero de 1983 se redactaron unos estatutos del recién creado Buró, aunque en sus primeros tiempos funcionó como un organismo dependiente del "Board na Gaeilge", la oficina estatal para la promoción de la lengua irlandesa, debido al interés de los irlandeses en este Buró.

Gracias a ello la Comunidad destinó una partida de 100.000 Ecus de su presupuesto para 1983 para las minorías lingüísticas dentro de la Comunidad, partida canalizada en gran parte a través del Buró, instalado en Dublín desde mediados de 1984. Este presupuesto había subido a 680.000 Ecus en 1986. Dispone de comités estatales en Francia, España, Italia, Países Bajos, Reino Unido, Dinamarca, Irlanda y Alemania, los cuales forman el Consejo del Buró, su órgano supremo de decisión. También ha instalado una delegación informativa en Bruselas.

Su finalidad consiste en la conservación y promoción de las lenguas y culturas regionales autóctonas dentro de las Comunidades Europeas. Se declara independiente de cualquier cuestión racial, religiosa, política, ideológica y de clase. Su actividad se resume en cuatro puntos:

- a) la búsqueda de apoyos legales y políticos a escala europea entre los Estados y las regiones;
- b) el intercambio de informaciones y experiencias entre los grupos interesados en la promoción de las lenguas menos extendidas;
- c) la búsqueda de apoyos financieros, sobre todo de la Comisión Europea, para la realización de los proyectos de estas lenguas minoritarias;
- y d) la construcción de estructuras para el sostén de las comunidades lingüísticas autóctonas, como por ejemplo la base de datos **Mercator** sobre educación, medios de comunicación, legislación y estudios en general¹⁴⁴.

El Buró ha organizado numerosos encuentros entre expertos, como el celebrado en octubre de 1986 en Nuoro (Cerdeña) sobre las lenguas minoritarias y los medios de comunicación, ha relacionado estas minorías entre ellas, ha influído en los gobiernos estatales para su protección, ha fomentado su introducción en la enseñanza, etc. El Buró publica trimestralmente un boletín, "Contact-Bulletin", dedicado a estas lenguas¹⁴⁵.

La lista de lenguas minoritarias con las que opera el Buró es la siguiente, según su propia denominación:

- arbërishtja,
- català,

- hrvatski,
- furlan,
- grecanico,
- ladin,
- occitan,
- sardu,
- slovensko,
- galego,
- français,
- euskara,
- brezhoneg,
- lingua corsa,
- dansk,
- deutsch,
- frysk,
- nederlands,
- gaeilge,
- gàidhlig,
- kernewek,
- franco provençal,
- cymraeg,
- scots,
- armâneasco,
- pomak,
- türkçe,
- serbscina,
- lëtzebuergesch,
- fräsch,

- seeltersk,
- parlars du domaine d'oïl,
- asturianu,
- makedonski,
- y arbëror¹⁴⁶.

3.17: Los derechos lingüísticos en la CSCE

Para algunos analistas como el profesor Santiago Petschen¹⁴⁷, la principal evolución sufrida por la CSCE antes de 1991 en el tema de las minorías étnicas y lingüísticas consistió en pasar de la consideración de "las personas pertenecientes a las minorías nacionales" a las de minorías como colectividad. Este paso se dió con toda claridad en el Documento de Copenhague¹⁴⁸.

Bajo la óptica de los derechos humanos el Documento afirma que todo ser humano "tiene derecho a ejercer plena y efectivamente sus derechos humanos y libertades fundamentales sin ninguna discriminación y en plena igualdad ante la ley". Entre estos derechos figura "utilizar libremente su lengua materna tanto en privado como en público". Pero más adelante no sólo se concede una gran importancia a las asociaciones, instituciones e incluso organizaciones internacionales no gubernamentales que los miembros pertenecientes a las minorías son capaces de crear, sino que va más allá al considerar a la

minoría como colectividad que encuentra su unidad en sus propias características naturales. Por ello hace referencia a "la identidad étnica, cultural, lingüística y religiosa de las minorías nacionales" y subraya sus aspectos históricos y culturales.

Coincidiendo con el Parlamento Europeo¹⁴⁹, la Declaración de Copenhague incluso valora positivamente, aunque con gran cautela, los esfuerzos emprendidos en la promoción de dicha identidad colectiva mediante el establecimiento de "administraciones apropiadas locales o autónomas, que correspondan a las circunstancias específicas, históricas y territoriales de dichas minorías"¹⁵⁰.

Dando un paso más la CSCE aceptó en esta ocasión que los grupos minoritarios consigan "administraciones apropiadas locales o autónomas" y tomó nota de la acción emprendida en este sentido por algunos Estados participantes para proteger y crear condiciones en favor de "la promoción de la identidad étnica, cultural, lingüística y religiosa de algunas minorías nacionales". Sin embargo, algunos Estados como España, la RFA, o Hungría, propusieron fórmulas más concretas y avanzadas.

Antes de la gran crisis de 1990-91 la CSCE insistió en que la aplicación de los derechos de las minorías no podía oponerse al principio de la identidad territorial de los Estados, de acuerdo con lo establecido en el Acta de Helsinki. En esto

coincidía con las otras instituciones europeas que reclamaban la aplicación de las directrices establecidas a favor de las minorías sin comprometer la integración territorial de los Estados. Es más, los posibles intentos secesionistas son "contrarios a los ideales de una Europa unida, creando situaciones difíciles de resolver y terminarán por hacer aún más difícil una Europa en la cual las diferencias nacionales, lingüísticas y culturales sean reconocidas como un valor común"¹⁵¹.

Como compensación la CSCE ofreció a las minorías el derecho "a establecer y mantener contactos a través de las fronteras"¹⁵², en consonancia con los objetivos de cooperación transfronterizos defendidos por todas las instituciones.

Sin duda para las máximas instituciones europeas, y concretamente para la CSCE, la cooperación entre minorías culturales y lingüísticas repartidas entre varios Estados constituye un decisivo test para la cooperación entre estos, tanto por lo que tiene de lazos entre comunidades como de estímulo para establecer otros nuevos.

NOTAS AL CAPITULO III

1. Entre 30 y 40 millones de personas sólo entre los Quince
2. RADIGALES, MONTSERRAT: "El francés pierde su monopolio" en El Periódico de 29 de Enero de 1995, pág. 18
3. TUGORES QUES, JUAN: "La construcción europea: de Roma a Maastricht" en Afers Internacionals nº 25 Barcelona 1993, pág. 66.
4. Fragmento del informe de la Comisión Europea sobre los criterios y las condiciones para la adhesión de nuevos Estados Miembros a la Comunidad. Doc: Boletín de la Agencia "Europe" de 3 de julio de 1992
5. CHAMORRO, SANTIAGO: "La reforma de Maastricht" en Política Exterior, nº 43, Vol. IX, Febrero-Marzo 1995, págs.191-196
6. Artículo CXX de la Disposición Sobre la Libre Utilización de la Lengua Diplomática del Tratado de Viena de 9 de junio 1815
7. Este Tratado fue firmado el 4 de abril de 1949 en Washington por Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Portugal, Gran Bretaña y los Estados Unidos
8. OFICINA DE INFORMACION DIPLOMATICA DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES DE ESPAÑA: Manual de la OTAN, Madrid 1980, 99 págs.
9. Sólo la República de Irlanda es miembro de la Unión Europea y no lo es de la OTAN
10. Precisamente la instalación de las primeras y básicas instituciones en sedes ubicadas en territorios bilingües (Bruselas, Luxemburgo, Estrasburgo) ha influido no poco en su carácter multilingüe.
11. Doc: 385/58, DO 17 de 6 de octubre 1958
12. Doc: 401/58, DO 17 de 6 de octubre 1958
13. Véase el artículo 155 del Acta relativa a las condiciones de adhesión de Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido (para los textos de los Tratados, véase igualmente el artículo 160), artículo 147 del Acta relativa a las condiciones de adhesión de la República Helénica y el artículo 397 del Acta relativa a las condiciones de adhesión de España y Portugal

14. El artículo 217 del Tratado de la Unión Europea establece que "el régimen lingüístico de las instituciones de la Comunidad será fijado por el Consejo, por unanimidad, sin perjuicio de las disposiciones previstas en el reglamento del Tribunal de Justicia".

15. SERVICIO JURIDICO del PARLAMENTO EUROPEO: Nota Informativa para la Comisión de Peticiones. Datos acerca del régimen jurídico-lingüístico en el ordenamiento jurídico comunitario (a propósito de la petición nº 113/88), Luxemburgo, 13 junio 1989, Doc: PE 140.254/def./An.V, pág. 33

16. Los artículos 25.1, 63.1, 64.1, 65.1 y 108.1 del mismo reglamento ofrecen soluciones parecidas para situaciones semejantes.

17. Asunto Stauder de 12 de noviembre de 1969, asunto Mecke de 16 de octubre de 1980, o asunto Comisión de los CER contra el Reino Unido de 28 de marzo de 1985.

18. BAUER-BERNET, HÉLÈNE: "La production de textes juridiques en diverses langues officielles par les institutions des Communautés Européennes" en Revista de Llengua i Dret, nº 13, Barcelona, Desembre 1989, págs. 15 a 28

19. COISSON, FABRIZIO: "¿Estrasburgo o Babel?" en Panorama, Roma 19 de Febrero de 1995. Traducido y reproducido por El País de 20 de febrero de 1995, pág. 12

20. "El rompecabezas europeo de lenguas" en The Independent de 4 de junio de 1991. Traducido y reproducido por El País el 5 de junio de 1991, pág. 12

21. "Ciencia y Salud. Los últimos avances en reconocimiento del habla y traducción simultánea" en Diario 16 de 16 de enero de 1994, pág. IX

22. Resolución sobre la democracia, la transparencia y la subsidiariedad y el acuerdo interinstitucional sobre los procedimientos para la aplicación del principio de subsidiariedad, sobre el estatuto del defensor del pueblo y las condiciones generales del ejercicio de sus funciones, y sobre las modalidades de funcionamiento del Comité de Conciliación previsto en el artículo 189 B, de 17 de noviembre de 1993. Doc: DOCE nº C 329 de 6 de diciembre de 1993

23. GOUDSBLOM, JOHAN: "El cristal de una sola cara" en El País-Liber de 9 de junio de 1990, pág. 13

24. CELAYA, CARLOS: "Sopa de letras" en El País de 31 de Enero de 1993

25. RADIGALES, MONTSERRAT: "El conflicto lingüístico llega a Bruselas" en El Periódico de 29 de Enero de 1995, pág. 18

26. Doc: A4-178-95 del PE

27. Doc: PE 184.974/95

28. Doc: DOC_ES\RR\259\259402 y PE 210.243/def. ES de 4 de noviembre de 1994, pág. 12

29. Con la ampliación de la UE en 1995 y la incorporación de dos lenguas más (el finés y el sueco) hasta 11, el número de combinaciones lingüísticas pasó a 110.

30. LAU, PETER: "EUROTRA. The machine translation project of the European Economic Communities" en Revista de Llengua i Dret, n° 9, Juny 1987, págs. 9 a 20

31. BADIA I CARDUS, ANTONI: "Els treballs del Projecte EUROTRA a l'Estat Espanyol" en Revista de Llengua i Dret n° 13, Barcelona Desembre 1989, págs. 15 a 28

32. AMBROJO, JOAN CARLES: "Màquines de traduir" en Avui-Diumenge de 16 de enero de 1994, pág. 18.

CERDA, RAMON y JULIO, TERESA: "Eurotra: Projecte comunitari de traducció automàtica" en EL Món n° 285 de 8 de octubre de 1987, págs. 41-43

33. RUBIO, ANDRES F.: "La CE advierte que las lenguas que no se adapten a la "ingeniería lingüística" se hundirán" en El País de 28 de octubre de 1993, pág. 31

34. GONZALEZ, MIGUEL: "España decide incorporarse al Euroejército" en El País de 11 de noviembre 1993, pág. 15

35. GONZALEZ, MIGUEL: "España ha renunciado a que el Euroejército hable español, pero exige el uso del inglés" en El País de 31 de enero de 1994, pág. 16

36. Respuesta parlamentaria del Gobierno a una pregunta por escrito del diputado Gabriel Elorriaga (Grupo Popular) sobre la preparación del personal que formará parte del Estado Mayor del Cuerpo de Ejército Europeo. B.O.C.G. (Congreso), Serie D, n° 179 de 3 de Enero de 1995.

37. La Paz de París (1919-20) la formaron el Tratado de Versalles con Alemania, el de St. Germain con Austria, el de Trianón con Hungría, el de Neuilly con Bulgaria y el de Sèvres con Turquía. Este último resultó demasiado inconsistente y fue substituído en 1923 por el Lausanne.

Véase: PARKER, R.A.C.: El siglo XX. Europa 1918-1945, Ed. Siglo XXI, Madrid 1978, pág. 22

y PETSCHEN, SANTIAGO: Las Minorías lingüísticas en Europa Occidental: Documentos (1492 - 1989), Eusko Legebiltzarra-Parlamento Vasco, Vitoria-Gasteiz 1990, Vol.I, págs. 155-165.

38. Entre finales del siglo XIX y principios del XX se formaron en esta zona Bulgaria, Rumania, Albania, Hungría, Checoslovaquia, Polonia, Finlandia, Letonia, Estonia, Lituania y Yugoslavia.

39. PETSCHEN, SANTIAGO: Op. cit., págs. 153-155.

40. PETSCHEN, S.: Op. cit., págs. 171-173

41. PETSCHEN, S: Op. cit., págs. 171-173.

42. RENOUVIN, PIERRE: Historia de las Relaciones Internacionales, Ed. Aguilar, Madrid 1964, Vol. III, pág. 821.

43. Artículo 2º de las Instrucciones de enero de 1920 sobre la enseñanza de las lenguas en Alsacia

44. Ch. Pfister era alsaciano y aunque se sentía profundamente francés, conocía bien la lengua regional

45. Este Tratado es del 10 de septiembre de 1919 entre los Aliados y Austria, representada por el gobierno republicano. Llevó consigo la disolución de la Monarquía dual entre Austria y Hungría y el nacimiento del Estado Checoslovaco y del Estado Serbo-Croata-Esloveno. La posibilidad de elegir que este Tratado dió a los ciudadanos de la zona limítrofe con Yugoslavia (Carintia) se hizo realidad con el plebiscito de 10 de octubre de 1920. el 59% decidió unirse a Austria y el 41% votó a favor de Yugoslavia. En el Burgenland y Saprón el plebiscito se celebró el 14 de diciembre de 1921. La zona de Saprón quedó para Hungría. La celebración de este plebiscito quedó establecida en el protocolo firmado en Venecia el 13 de octubre de 1921.

46. Tratado de 27 de noviembre de 1919 celebrado entre los Aliados y Bulgaria. Grecia se hallaba entre las potencias asociadas a los Aliados y asumió también la obligación de proteger a las minorías

47. Tratado Relativo al Derecho de Nacionalidad y a la Protección de las Minorías entre las Repúblicas de Austria y de Checoslovaquia, firmado en Brno, el 7 de junio de 1920

48. Tratado de 10 de agosto de 1920, celebrado entre los Aliados y Turquía. Grecia se hallaba entre las Potencias Asociadas y suscribió el compromiso de protección de las minorías. El artículo 86 establecía la reciprocidad con la minoría griega en Turquía por medio de un Tratado distinto.

49. DE BALGH, ARTHUR: La protection internationale des minorités, París 1930, pág. 161.

50. Documento del Consejo de la Sociedad de Naciones 26/28/106.B7. Informe presentado al Consejo el 16 de Abril 1921.

51. Constitución de 17 de julio de 1919. Se inspiró en gran parte en la Constitución suiza.

52. PETSCHEN, S: Op. cit., págs. 192-197

53. Artículo 113 de la Constitución alemana de 1919

54. Resulta interesante notar aquí la tendencia ya desde el principio de la independencia de Irlanda, a proteger el idioma irlandés de forma especial en las áreas donde éste se hablaba exclusivamente

55. Por ejemplo, a través de la Ley "Garda Síochána" de 1924, la Ley de los Tribunales de Justicia de 1924, la Ley de Expertos Legales de 1929, la Ley del Colegio de la Universidad de Galway de 1929, la Ley de Seguros de 1936, etc.

56. Constitución de la República de Irlanda de 1 de junio de 1937. El texto del artículo 8º comparado con el del artículo 4º de 1922 ofrece una claridad mayor en la prelación que se concede al irlandés (primer idioma) sobre el inglés (segundo idioma).

57. Ley Concerniente al Empleo de las Lenguas en Materia Administrativa de 1921, Ley Belga de 1932 Relativa al Empleo de las Lenguas en Materia Administrativa, Ley Concerniente al Régimen Lingüístico de la Enseñanza Primaria y de la Enseñanza Media de 1932, etc.

58. Artículos 1º, 2º, 3º, 6º y 8º de la Constitución promulgada el 1 de octubre de 1920 tras una serie de Constituciones provisionales que se habían sucedido desde el 30 de octubre de 1918, fecha de la fundación de la República de Austria

59. Artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 7º y 11º del Estatuto de Autonomía de Cataluña de 15 de septiembre de 1932

60. Artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 14º y 15º del Estatuto de Autonomía de Galicia refrendado el 5 de julio de 1936.

Artículos 1º, 4º y 7º del Estatuto de Autonomía del País Vasco de 4 de octubre de 1936

61. Constitución de la II República española de 9 de diciembre de 1931

62. Artículos 107 y 116 de la Constitución de la Confederación Helvética adoptada el 20 de febrero de 1938

63. Véase, por ejemplo, la Proclama de 31 de octubre de 1918 en favor del danés en el Schleswig del Norte o la Proclama en Defensa del Alemán Atacado en el Schleswig del Norte traspasado a Dinamarca nada más terminar la I Guerra Mundial

64. Normas para la Repatriación de los Ciudadanos Alemanes y para la Emigración de los Originarios Germanos del Alto Adigio a Alemania. Tratado entre Italia y Alemania de 1939.

65. IRYUD, ALPHONSE: "La germanisation de noms en Alsace entre 1940 et 1944" en Revue d'Alsace, n° 113, Strasbourg 1987, pp. 239-261

66. Edicto del Alcalde de Tarragona, E. Múgica, de 20 de abril de 1939, mandando la substitución de los rótulos en catalán por otros en castellano.

Circular del General Jefe de los Servicios de Ocupación de Barcelona, de 21 de junio de 1939.

Circular de 4 de Septiembre de 1939 del Gobernador Civil de la Provincia de Barcelona sobre la Imposición de la Lengua Castellana

67. Declaración Universal de los Derechos Humanos de 12 de diciembre de 1948

68. PIZZORUSSO, ALESSANDRO: "Minories i grups ètnics i lingüístics a Itàlia. Perspectives de tutela" en Ordenació legal del Plurilingüisme als estats contemporanis, Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya, Barcelona 1983, pág. 22-23.

69. FENET, ALAIN: "Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et la question irlandaise" en Federalisme, Regionalisme, et Droit des Groupes Ethniques en Europe. Hommage à Guy Héraud, Edité par Theodor Veiter, Ethnos 30, Braumüller, Wien 1989, pág. 128.

70. Estatuto Especial del Trentino-Alto Adigio. Ley Constitucional del 26 de Febrero de 1948.

Estatuto del Valle de Aosta. Ley Constitucional de 10 de marzo de 1948

Estatuto de Friul-Venecia Julia aprobado por Ley Constitucional de 31 de enero de 1963

71. PETSCHEN, S: Op. cit., págs. 253-259.

72. PIZZORUSSO, ALEJANDRO: Op. cit., págs. 20-24.

73. Disposiciones en las que han convenido en la Fecha del 5 de septiembre de 1946, los Gobiernos Italiano y Austríaco (Acuerdo De Gasperi-Gruber). Anexo IV del Tratado de Paz con Italia del 10 de febrero de 1947

74. Declaración de Kiel del Gobierno Regional del Schleswig-Holstein sobre la Posición a Tomar con Respecto a la Minoría Danesa de 26 de septiembre de 1949. Fue substituída por la Declaración de 1955

75. Declaración del Gobierno de la República Federal de Alemania sobre el Estatuto de la Minoría Danesa en Alemania Hecha al final de las Negociaciones con el Gobierno Danés el 29 de Marzo de 1955.

Declaración del Gobierno de Dinamarca sobre el Estatuto de la Minoría Alemana en Dinamarca Hecha al Final de las Negociaciones con el Gobierno Alemán, el 29 de Marzo de 1955.

En la Declaración de la RFA (artículo 10) se habla de elecciones regionales, pero no en la danesa por no tener Dinamarca divisiones regionales, sino solamente locales. También el texto de la Declaración alemana hace referencia al Schleswig-Holstein, entidad subestatal con atribuciones políticas que se obligaba a reconocer a la minoría danesa establecida en su territorio.

76. Memorándum de Acuerdo entre los Gobiernos de Italia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, de los Estados Unidos de America y de Yugoslavia, Relativo al Territorio Libre de Trieste, firmado en Londres el 5 de Octubre de 1954

77. El mismo día se firmó un acuerdo de promoción económica, un acta final y un intercambio de notas. Todo ello fue ratificado el 14 de marzo de 1977 y publicado en el Diario Oficial italiano de 21 de marzo de 1977, número 77. Para su financiación fue promulgada la ley de 22 de diciembre de 1982.

78. Despacho de la Agencia EFE fechado en Roma el 19 de julio de 1994

79. Tratado del Estado Austríaco (Staatsvertrag) firmado en Belvédère el 15 de mayo de 1955, por el que los Aliados reconocían la independencia y la soberanía de Austria

80. Ley Fundamental de Bonn de 23 de mayo de 1964. El Preámbulo menciona los Estados Federados de Baden, Württemberg-Baden, y Württemberg-Hohenzollern. Los tres se fusionaron tras el referéndum de 9 de diciembre de 1951.

81. Estatuto de Autonomía de las Islas Feroe. Ley Danesa n° 137 de 23 de marzo de 1948

82. Ley de Autonomia de las Islas Aland. Esta región había obtenido un primer Estatuto en 1920, revisado y ampliado por la ley de 28 de diciembre de 1951, con lo cual caducó la garantía internacional sobre las Islas.

83. Constitución del Gran Ducado de Luxemburgo de 17 de octubre 1869, revisada en 1948.

Constitución de la República de Malta de 1964

84. PETSCHEN, S.: Op. cit., pág. 65

85. Convención adoptada por la UNESCO el 14 de diciembre de 1960. Dos años más tarde la UNESCO adoptó un Protocolo para instituir una Comisión de Conciliación y Buenos Oficios en caso de conflicto.

86. JUAN XXIII: Encíclica "Pacem in Terris" de 11 de abril de 1963, párrafos 96 y 97.

87. JUAN PABLO II: Mensaje de Su Santidad Juan Pablo II, con motivo de la Jornada Mundial de la paz (1 de Enero), de 1 de Enero de 1989. Traducción publicada por "Catalunya Cristiana", semana del 1 al 7 de Enero de 1989, págs. 6 y 7.

88. Declaración de la ONU sobre el Fomento entre la Juventud de los Ideales de Paz, Respeto Mutuo y Comprensión entre los Pueblos, aprobada por la Asamblea General el 7 de Diciembre de 1965

89. Declaración de los Principios de la Cooperación Cultural Internacional, proclamada por la UNESCO el 4 de noviembre de 1966

90. Declaración de la UNESCO sobre la Educación para la Comprensión, la Cooperación y la Paz Internacionales y la Educación Relativa a los Derechos Humanos y a las Libertades Fundamentales, aprobada el 19 de noviembre de 1974

91. Declaración sobre los Principios Fundamentales Relativos a la Contribución de los Medios de Comunicación de Masas al Fortalecimiento de la Paz y la Comprensión Internacional, a la Promoción de los Derechos del Hombre y a la Lucha contra el Racismo, el Apartheid y la Iniciación a la Guerra, aprobada por la 20ª Conferencia General de la UNESCO el 22 de noviembre de 1978

92. Artículos 19, 24, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos aprobado por la Asamblea General de la ONU el 16 de diciembre de 1966

93. Declaración proclamada el 13 de mayo de 1968 por la Conferencia Internacional de Derechos Humanos reunida en Teherán con ocasión del Año de los Derechos Humanos

94. PETSCHEN, S: Op. cit., págs. 226-227

95. El proyecto de añadido decía que "no se negará a las personas que pertenezcan a una minoría nacional el derecho que les corresponde, en común con los demás miembros de su grupo y en cuanto es compatible con el orden público, a tener su propia vida cultural, a emplear su propio idioma, a establecer sus escuelas propias y a recibir la enseñanza en el idioma de su elección o a profesar y practicar su propia religión".

96. Texto sobre Minorías del Proyecto de Protocolo Adicional nº 4 a la Convención Europea de los Derechos del Hombre de 1961. Presentado a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa por el Subcomité de Minorías y aprobado por ésta el 23 de abril de 1961, el Comité de Ministros accedió a incluirlo en el Protocolo nº 4.

97. El 1 de Enero de 1983 mejoró su estatuto con la consideración de Conferencia Permanente.

98. LOCATELLI, RINALDO: "La Conférence Permanente des Pouvoirs Locaux et Régionaux de l'Europe et les Régions" en Federalisme, Regionalisme et Droit des Groupes Ethniques en Europe. Hommage a Guy Héraud, Edité par Theodor Veiter, Ethnos 30, Braumüller, Wien 1989; pág. 222.

99. LOCATELLI, RINALDO: "La Conférence Permanente des Pouvoirs Locaux et Régionaux de l'Europe et les Régions" en Federalisme, Regionalisme, et Droit des Groupes Ethniques en Europe. Hommage a Guy Héraud, Edité par Theodor Veiter, Ethnos 30, Braumüller, Wien 1989, pág. 226.

100. PETSCHEN, SANTIAGO: El euskera en el marco de la acción internacional en favor de las lenguas minoritarias en Europa Occidental. Lección de ingreso en la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, Madrid 17 de abril 1989. Texto mecanografiado

101. El subrayado es nuestro

102. TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS: Sentencia de 23 de julio de 1968 sobre ciertos aspectos del régimen lingüístico de la enseñanza en Bélgica

103. GRASS, SOLANGE et CHRISTIAN: La Revolte des Régions d'Europe Occidentale de 1916 à nos Jours, Presses Universitaires de France, Paris 1982, pág. 16

104. Declaración de Burdeos de 25 de marzo de 1987 sobre los problemas de la regionalización, número 30

105. CHITI-BATELLI, ANDREA: "Regionalism and Federalism in Europe: A "Biunivocal" Connection" en Federalisme, Regionalisme, et Droit des Groupes Ethniques en Europe. Hommage à Guy Héraud, Edité par Theodor Veiter, Ethnos 30, Braumüller, Wien 1989, págs. 49 y 50.

106. PIZZORUSSO, ALESSANDRO: "Minories i grups ètnics i lingüístics a Itàlia. Perspectives de tutela", en Ordenació legal del plurilingüisme als Estats contemporanis, Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya, Barcelona 1983, pág. 24

107. Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Roma de 14/15 de Diciembre de 1990. Apartado 4: "Ampliación y fortalecimiento de la acción comunitaria". Doc: 2.33.1 "90" Roma-2, SN 424/1/90.

108. Diario de Sesiones de las Cortes Generales. Senado, IV Legislatura, número 62, de 10 de abril 1991, págs. 3430 a 3442.

109. Ver respuesta de 24 de noviembre de 1993 del gobierno español a una pregunta del senador Rafael Román Guerrero explicando su posición defendida en la Cumbre de Viena, en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, V Legislatura, Serie I, Boletín General, pág. 54.

110. Ver crónica de Mónica Fokkelman desde Viena en "ABC" de 10 de Octubre 1993.

111. Proposición de Resolución del Parlamento Europeo sobre la Defensa y la Protección de las Lenguas y Culturas Regionales de la Comunidad. Doc: B2-0076/85. N° 5 (3

112. Artículo 5 (b de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias

113. Resolución Arfé del Parlamento Europeo de 16 de octubre de 1981, n° 1(c

114. FOURASTIE, JEAN: L'Organisation Departementale et communale. L'Epreuve du XXème siècle, Paris 1976.

115. Artículo 59 bis (3

116. Artículo 6 (5

117. Véase más información en el Capítulo V de la Carta Comunitaria de la Regionalización

118. Declaración final de la III Conferencia Europea de Regiones Fronterizas, celebrada en Borken (RFA) en septiembre de 1984, número 47

119. Resolución sobre la política regional comunitaria... nº 22

120. El artículo 130 A dispone que "la Comunidad se propondrá, en particular, reducir las diferencias entre las regiones y el retraso de las regiones menos favorecidas".

121. "Es preciso que los entes regionales y locales participen en mayor medida en la elaboración y aplicación de la política regional de la Comunidad, incluidas sus repercusiones en las regiones. Por ello, es necesario que dichos entes puedan ser consultados por la Comisión en el marco de un organismo abierto", dice textualmente el Acta de creación del Consejo Consultivo.

122. VALLVÉ i RIBERA, JOAN: "La Asamblea de las Regiones de Europa", en La Vanguardia, 3 de Noviembre 1988.

123. Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Roma de 14/15 de Diciembre 1990, Apartado 1 "Legitimidad democrática", Doc: 2.33.1. "90" Roma-2, SN 424/1/90.

124. Este centro está vinculado a la ARE y tiene su sede en Llangollen (País de Gales).

125. Déclaration finale du Symposium du Groupe de Travail IV de l'ARE. Girona (Espagne) 23-24 d'avril 1992 en Contact Bulletin, vol. 9, nº 2 automne 1992, págs. 5 y 6

126. DE WITTE, BRUNO: "Las regiones y las Comunidades Europeas durante 1992" en Informe Pi i Sunyer sobre Comunidades Autónomas, Ed. Fundació Carles Pi i Sunyer d'Estudis Autonòmics i Locals, Barcelona 1993, pág. 423.

127. Doc: COM (93)708 final. Rapporteur: David Bellotti (GB)

128. Docs: COM(94) 356, CdR 145/95. Rapporteur: John Evans (País de Gales, GB). Consultation

129. Docs: COM(94) 356, CdR 146/95. Rapporteur: Claude du Granrut (Picardie, Fr.). Consultation

130. GONZALEZ, ENRIC: "La Conferencia sobre la Estabilidad estudia en París cómo prevenir conflictos entre los candidatos a la UE" en El País de 27 de mayo de 1994, pág. 3

131. Sobre esta reforma en la que pesó mucho la política europea, véase el debate correspondiente en el Diario de Sesiones de las Cortes Generales. Senado, V Legislatura, número 19, de 11 de Enero 1994, págs. 889 a 918.

132. Diario de Sesiones de las Cortes Generales. Senado, V Legislatura, número 23, de 23 de febrero de 1994, págs. 1092 a 1096.

133. Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Birmingham (16 de Octubre de 1992), Anexo I, apartado "Una Comunidad cercana a sus ciudadanos". Doc: 2.33.1 "92" Birmingham. SN 343/1/92.

134. El subrayado es nuestro

135. Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Dublín-I (28 de abril 1990), Anexo I, Apartado "Directrices relativas a la CSCE". Doc: 2.33.1 "90" Dublín-I-, SN 46/3/90.

136. El subrayado es nuestro

137. Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Dublín-II, 25/26 de Junio 1990, Capítulo II, Apartado "Progresos realizados en los sectores relacionados con la Europa de los Ciudadanos". Doc: 2.33.1 "90" Dublín-2, SN 60/1/90.

138. Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Roma-1, 27/28 de Octubre 1990, Capítulo 1, Apartado "Conferencia sobre la Unión Política". Doc: 2.33.1 "90" Roma-1, SN 304/2/90.

139. Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Luxemburgo, 28/29 de Junio 1991, Anexo V: "Declaración sobre los Derechos Humanos". Doc: 2.33.1 "91" Lux., SN 151/2/91.

140. Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Maastricht, 9/10 de Diciembre 1991, "Declaración sobre los acontecimientos en la Unión Soviética". Doc: 2.33.1 "91" Maastricht, SN 271/1/91.

141. Documento de Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo celebrado en Essen (RFA) los días 9 y 10 de diciembre de 1994. Doc: SN 300/94 ES pág. 21

142. Conclusiones del Consejo Europeo de Lisboa, 26/27 de Junio 1992. Capítulo I, Apartado 4 "Una Unión próxima a sus ciudadanos", Capítulo II, Apartado 4 "Países de Europa Central y Oriental" y Anexo I "La Política Exterior y de Seguridad de la Comunidad". Doc: 2.33.1 "92" Lisboa, SN 3321/1/92

143. Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Birmingham, 16 de octubre 1992, Anexo I "Una Comunidad cercana a sus ciudadanos". Doc: 2.33.1 "92" Birmingham, SN 343/1/92.

144. RAMON, ORIOL: "Mercator: Dret i legislació lingüístics" en Revista de Llengua i Dret, nº18, Desembre 1992, págs. 223 a 226

145. Ó RIAGÁIN, DÓNALL: "The European Bureau for Lesser Used Languages- Its Role in Creating a Europe, United in Diversity" en Federalisme, Regionalisme, et Droit des Groupes Ethniques en Europe. Hommage à Guy Héraud, Edité para Theodor Veiter. Ethnos 30, Braumüller, Wien 1989, págs. 511 a 517.

146. LE BUREAU EUROPEEN POUR LES LANGUES MOINS REPANDUES: Unité dans la diversité, Dublín 1994, pág. 5

147. PETSCHEN, SANTIAGO: "La cuestión de las minorías en la Conferencia de Seguridad y en otros foros europeos" en Tiempo de Paz, Número especial "El Mediterráneo a debate", 1990, pág.108

148. Declaración final de la Conferencia de Copenhague sobre la Dimensión Humana de la CSCE de 1990

149. Proposición de Resolución del Parlamento Europeo sobre el Reconocimiento de los Derechos de las Minorías y la Revalorización de su Cultura. Doc: B2-321/85.

150. Declaración de Copenhague, número 35.

151. Proposición de Resolución del Parlamento Europeo sobre el Reconocimiento de los Derechos de las Minorías y la Revalorización de su Cultura. Doc: B2-321/85, número 4

152. Documento de Copenhague, número 32 (3

BIBLIOTECA UCM



5309043873

Se recuerda al lector no hacer más
uso de esta obra que el que
permiten las disposiciones Vigentes
sobre los Derechos de Propiedad
Intelectual del autor. La Biblioteca
queda exenta de toda responsabilidad.



Tesis de Doctorado

**LAS POLITICAS LINGÜISTICAS Y LA INSERCIÓN DE LAS
LENGUAS MINORITARIAS EN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN
DE EUROPA**

VOLUMEN II

JOSÉ M. SANMARTI ROSET

LAS POLITICAS LINGÜÍSTICAS Y LA INSERCIÓN DE LAS LENGUAS
MINORITARIAS EN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE EUROPA

VOLUMEN II

CAPITULO IV

LA FORMACION DEL CUERPO DOCTRINAL

LAS DECLARACIONES EUROPEAS SOBRE LAS MINORIAS LINGUISTICAS

4.1: Objetivos y estructura del capítulo

Los primeros pasos en el proceso de construcción de Europa no comportaron ningún cambio importante en las distintas políticas lingüísticas, reservadas a los Estados. Hasta bien entrados los años 1970 la ordenación lingüística europea no figuró entre los objetivos de la unión. Unicamente algunos documentos sobre derechos humanos prohibían la discriminación por razón de lengua, pero más como un derecho individual que como una política aplicada a las minorías lingüísticas.

La situación empezó a ser distinta a partir de la segunda mitad de la década 1970-80, cuando las instituciones europeas empezaron a elaborar su propia doctrina lingüística y a preconizar un orden y una política diferente, y a veces contradictoria, con las de los Estados miembros. Tal como hemos señalado en el capítulo anterior, la profundización de los derechos humanos y de la vida democrática, así como la nueva actividad regional proporcionaron los conductos principales a través de los cuales se desarrolló esta política.

La propia construcción europea fue exigiendo una mayor y mejor definición en el trato a las minorías lingüísticas con el propósito de que estas no quedaran descolgadas del proceso. El crecimiento competencial de la CE y las sucesivas ampliaciones obligaron a plantear incluso una reordenación de las lenguas de Estado incorporadas a estas instituciones en aplicación del

comentado anteriormente principio del multilingüismo integral.

No era posible impulsar unas instituciones europeas que asumían automáticamente las lenguas de Estado de los países adheridos y al mismo tiempo dejar a la deriva (ni siquiera en las manos exclusivas de los Estados) el futuro de las minorías lingüísticas, que en Europa Occidental agrupan a unos 40 millones de personas. Cuando las instituciones europeas empezaron a pronunciarse sobre las minorías lingüísticas, algunas ya habían sido reconocidas por los Estados o por tratados internacionales y disponían de un status legal, circunstancia que ciertamente contrastaba con la indigencia normativa e incluso la persecución que sufría el resto, por ejemplo en la España franquista.

De este modo, a lo largo de estos últimos 25 años las principales instituciones europeas han ido elaborando su propia doctrina destinada a las minorías lingüísticas, en un esfuerzo por indicar a los Estados los presupuestos mínimos sobre los que tienen que construir sus propias políticas lingüísticas. Esta doctrina procede de un conjunto de declaraciones y documentos, cuyo análisis constituye el objetivo de este capítulo.

Este está ordenado en tres grandes bloques. En el primero se exponen los principales documentos emitidos por el Consejo de Europa. Por su propia naturaleza y por su finalidad era lógico

que el C. de E. fuera la institución que iniciara la profundización de las políticas lingüísticas, sin duda una de las manifestaciones más elementales de la democracia y los derechos humanos. Vinculados primero a otras manifestaciones, como la cultura, los medios de comunicación, o la enseñanza, los estudios sobre las lenguas minoritarias obtuvieron una autonomía propia a partir del Informe Cirici en 1981.

El **segundo bloque** abarca los documentos aprobados por el PE. Aunque su ámbito se circunscribe a los países miembros de la UE, su repercusión real va mucho más allá entre otras razones por su consonancia con los trabajos del C. de E.. En realidad, se trata de las mismas ideas, de los mismos propósitos, de los mismos planteamientos e incluso de las mismas soluciones sólo que para áreas distintas. No se olvide que durante muchos años, y todavía ahora, el núcleo principal del C. de E. estuvo formado por los países de la CE. Era muy difícil, por no decir que imposible, que los mismos países sostuvieran una cosa en un sitio y otra distinta en el otro. De hecho, la suma de declaraciones de ambas instituciones es la que constituyó el cuerpo principal de la doctrina europea que venimos anunciando. En la década de los años 1990 los países de la Europa Central y Oriental se sumaron a él, al principio con algunos matices y más tarde sin reservas.

El **tercer bloque** afecta a las declaraciones de la CSCE en lo que respecta a la nueva posición de las minorías lingüísticas

teniendo en cuenta su situación en el antiguo bloque soviético. Después de unos débiles intentos para preconizar unas políticas lingüísticas algo diferentes en esta zona, el giro democrático de todos sus regímenes y su incorporación al proceso de unión europea les empujó a aceptar sin más dilaciones la doctrina establecida unos años antes por el C. de E. y la CE.

4.2: Las declaraciones del C. de E.: los primeros documentos

Dada su función de defensor de los derechos humanos y del sistema democrático, el C. de E., fundado el 5 de mayo de 1949 en Londres, fue lógicamente la primera institución europea en pronunciarse sobre los derechos de las minorías lingüísticas. El Consejo tenía además la ventaja de reunir a todos los países democráticos de Europa y no solamente a los que participaban en la Comunidad Europea, con lo que la variedad de situaciones implicadas y las repercusiones de los acuerdos eran mucho más amplias.

La Convención Europea de los Derechos del Hombre, aprobada en 1950 y en vigor desde 1953, fue de hecho el primer y más importante tratado del C. de E. con efectos inmediatos sobre las minorías lingüísticas en Europa occidental. Sin embargo, su aplicación tiende más a prohibir las medidas discriminatorias que a dictar y a apoyar medidas positivas. Conviene subrayar que ya en 1960 la situación en el Alto Adigio fue el trasfondo

de un proceso planteado por Austria contra Italia ante el Tribunal Europeo de Derechos del Hombre con sede en Estrasburgo.

En 1968 el Tribunal se volvió a pronunciar sobre determinados aspectos del régimen lingüístico en la enseñanza en Bélgica. Y en 1987 el caso Mathieu-Mohin y Clerfayt relativo a la elección de representantes de lengua francesa en el Consejo Flamenco de Bélgica, obligó de nuevo al Tribunal a sentar jurisprudencia sobre temas relativos a las lenguas¹.

En cualquier caso, antes de 1981 el C. de E. se esforzó por acrecentar la conciencia de los gobiernos y de los ciudadanos europeos para asumir la realidad plurilingüe del continente y de la inmensa mayoría de países. Por esto, en sus declaraciones en materia de educación el Consejo estimuló a todos los europeos a aprender por lo menos una lengua extranjera, lo cual alentaba el plurilingüismo y creaba métodos de enseñanza en este terreno flexibles y aptos para todas las edades. Así a mediados de los años 1970 se estableció el "nivel mínimo de aptitud para comunicarse útilmente" de cara al aprendizaje de las lenguas vivas. Este sistema del "nivel mínimo" fue aprovechado por distintas lenguas minoritarias para establecer sus propios programas educativos².

4.2.1: De la Recomendación 285 al Informe Cirici

Antes de empezar Alexandre Cirici los trabajos que desembocarían en la célebre Resolución 928, destacan dos declaraciones de la Asamblea Parlamentaria del C. de E. en conexión con las minorías lingüísticas. Se trata de la Recomendación 285 de 1961 y de la Recomendación 814 de 1977.

La primera³ se refiere a los derechos de las minorías nacionales. La Asamblea reconoce que el artículo 14 de la Convención Europea de los Derechos del Hombre ya otorga "a las personas pertenecientes a minorías nacionales una cierta protección, dado que que las asegura contra toda discriminación en el disfrute de los derechos y las libertades reconocidos por la Convención", pero considera que es deseable que "los derechos colectivos" de dichas minorías nacionales sean satisfechos en la medida en que sean compatibles con la salvaguardia de los intereses esenciales de los Estados a los que pertenecen dichas minorías. Por ello, en línea con la anterior Recomendación 234, la Asamblea recomendó al Comité de Ministros la creación de una comisión de expertos, que estudiara la inclusión en el segundo protocolo de la Convención, un artículo destinado a "garantizar a las minorías nacionales determinados derechos no contemplados por ella o por su primer protocolo adicional"⁴. Obsérvese que dicha recomendación todavía supeditaba el ejercicio de los derecho

incluso los relacionaba con "el orden público".

La Recomendación 814 de 1977⁵ ya se refiere a "las lenguas vivas de Europa". Para empezar introduce el concepto de que la "diversidad cultural" es "una riqueza irremplazable que justifica la preservación activa de las minorías lingüísticas de Europa". Subraya la importancia que tiene para cada uno el aprendizaje de al menos "una lengua de gran difusión", concepto que posteriormente desaparecería para referirse al plurilingüismo sin adjetivos. En consecuencia la Recomendación 814 propuso al Comité de Ministros desarrollar el estudio y el aprendizaje de las lenguas vivas, teniendo en cuenta, entre otras cosas, "la utilidad cultural de preservar las minorías lingüísticas en Europa".

Al margen de estas dos declaraciones es fácil encontrar en otras recomendaciones sobre temas diversos referencias a la protección de todas las lenguas europeas. Así, por ejemplo, la Directiva 364 de 1977⁶ sobre los aspectos culturales del turismo encarga a la Comisión de Cultura y Educación llevar a cabo estudios específicos sobre las lenguas y los dialectos de las minorías, mandato que recordaría más tarde la Recomendación 814 en su preámbulo, junto con la Recomendación 535 de 1972 sobre la promoción de las lenguas vivas en Europa.

En todo caso, el C. de E., que en la década de los 80 se convertiría en uno de los baluartes de las minorías étnicas y

lingüísticas, mostró un interés más bien escaso antes de 1979 por este tema, en consonancia con los debates políticos, culturales y europeístas de esta época.

4.2.2: El Informe Cirici: los primeros pasos

Al margen de ciertas referencias puntuales en documentos anteriores, el Informe Cirici y la consiguiente Resolución 192 del C. de E. constituyen el punto de partida y la base ideológico-programática de las declaraciones del C. de E. en favor de las lenguas minoritarias, documentos que culminarían en 1993 con la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias (CELRM).

La Comisión de Cultura y Educación del C. de E. acordó en 1979 encargar al miembro de su Asamblea Parlamentaria y senador por Barcelona, Alexandre Cirici i Pellicer, la elaboración de una ponencia que sería sometida a debate en esta institución y que debía orientar la política a seguir en relación a las lenguas minoritarias.

Los problemas de estos colectivos habían ido emergiendo durante los años anteriores, gracias a la acción de ciertas asociaciones privadas o públicas muy activas en zonas como Irlanda, Bretaña, Cataluña, Euskadi, Galicia, País de Gales, Tirol del Sur-Alto Adigio, etc. España acababa de incorporarse

al C. de E. en su proceso democratizador y aportaba 3 potentes lenguas no de Estado al acervo institucional común. No era mera casualidad que el primer gran informe sobre las lenguas minoritarias fuera encargado a un parlamentario español. En Bélgica las pugnas lingüísticas habían obligado a cambiar la Constitución en 1970 y estaba a punto de culminar otra en 1980.

El estudio preliminar realizado por Alexandre Cirici hacía un repaso de la evolución histórica de estas lenguas minoritarias y de su marco legal y denunciaba claramente la opresión y la discriminación que han sufrido históricamente a causa de su supeditación a la lengua hegemónica respectiva, a pesar de gozar en ocasiones de una gran riqueza literaria.

También alertaba contra el bilingüismo, ya que "por razones sociales y políticas puede revelarse contraproducente y convertirse en un instrumento de dominio de una lengua sobre otra". Sin embargo, Cirici admite que también puede servir para establecer medidas de apoyo a la lengua minoritaria. Con todo, la idea predominante en el texto es que el bilingüismo constituye el vehículo de dominación por parte del idioma más fuerte⁷.

El informe establecía un primer catálogo de 58 lenguas. Algunas de ellas, como el "mirandinho" hablada por unos 3.000 portugueses, estaban prácticamente deshauciadas, y él mismo redujo posteriormente esta lista. En aquel momento se determinó

que la minoría cultural en Europa Occidental más numerosa era la occitana en Francia con unos 11 millones de personas. La más importante, sin embargo, era la catalana con unos 8 millones de hablantes y una potente producción cultural. La más pequeña se situaba en Bretaña con unas docenas de personas y el país más respetuoso con sus minorías era Suecia, donde bastaban 4 niños para tener el derecho a recibir la enseñanza en su idioma materno. Estimaciones de aquella época sostenían que 27 de estas lenguas se hallaban en una situación prácticamente agónica, 15 se habían estabilizado y unas 16 atravesaban una fase de lenta consolidación y expansión. En cualquier caso, este primer informe alertó contra las generalizaciones y subrayó que cada minoría tiene unos problemas específicos, dependiendo su situación no sólo de las estructuras político-administrativas, sino de la voluntad y el dinamismo que muestren sus miembros en el terreno lingüístico.

En octubre de 1981 la citada Comisión de Cultura redactó una primera base de acuerdo sobre cuatro puntos fundamentales:

- a) en el aspecto científico, debe respetarse la toponimia local, por pequeño que sea el colectivo que hable la lengua del territorio y evitar traducciones o adaptaciones con frecuencia aberrantes;
- b) en el aspecto humano, todos los niños tienen derecho a ser escolarizados en su lengua materna y a su uso oral en la fase pre-escolar, así como a su normalización en la enseñanza

primaria, etapa durante la cual será introducida poco a poco la lengua mayoritaria o estatal al lado de la materna;

c) en el aspecto cultural, la normalización lingüística y cultural debe incluir también los medios de comunicación social, además de la enseñanza superior;

d) en el aspecto político, aquellas comunidades que dispongan de estructura administrativa suficiente dentro del Estado correspondiente pueden exigir que su idioma sea declarado oficial o co-oficial y de uso para los poderes públicos establecidos en el territorio*.

El punto de partida de esta declaración era en primer lugar el respeto a la verdad científica, en segundo lugar el derecho de los niños a su propia lengua, y en tercer lugar el derecho de las comunidades lingüísticas al desarrollo normal de su lengua y de su cultura. El objetivo era concienciar acerca de los problemas educativos y culturales que se plantean en el seno de las poblaciones con una lengua no mayoritaria tanto por lo que respecta a la población del propio territorio, como a la del resto del Estado.

Este primer informe se refería también a las minorías lingüísticas divididas por fronteras estatales, concepto territorial que más tarde desaparecería en parte de la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias (CELRM). Por ejemplo, en el caso concreto de la minoría frisona dividida entre los Países Bajos y la RFA se recomendaba que se

permitiera la reunificación lingüística por encima de la frontera entre las dos naciones, cosa que en este caso se consiguió en 1980. El catalán, el euskera, el occitano, el croata, el esloveno, el alemán en sus distintas variantes, son otras lenguas divididas por fronteras. Sin contar con que, por ejemplo, en Italia se habla francés o griego.

Para preparar este documento, A. Cirici realizó una encuesta entre los gobiernos y los parlamentos estatales de los países miembros del C. de E., encuesta que según algunas fuentes indirectas despertó fuertes críticas al proyecto. El gobierno suizo, por ejemplo, contestó que en la Confederación Helvética los idiomas no coinciden con los cantones, mientras que el gobierno belga expresaba sus temores de que las posibles recomendaciones lingüísticas del C. de E. exacerbaran la conflictividad interna.

Estas resistencias obligaron posteriormente al ponente a cambiar de orientación, de tal manera que en vez de hacer la división lingüística por Estados, la realizó por lenguas minoritarias, que quedaron reducidas a 51. La variación fue suficiente para que el 26 de mayo de 1981 la Comisión de Cultura y Educación votara a favor del dictamen por unanimidad y que éste fuera enviado a la Asamblea Parlamentaria del C. de E..

4.2.2.1: La Recomendación 928

El dictamen de la Comisión fue aprobado también por la Asamblea Parlamentaria el 7 de octubre del mismo año con una sola abstención, y se convirtió en la Recomendación 928.

Esta reconocía que la diversidad cultural e idiomática de Europa constituye "una riqueza insustituible", la cual justifica la salvaguardia activa de las minorías lingüísticas incluso de las amenazadas de desaparición. Este principio permaneció en todas las declaraciones posteriores del C. de E., aunque con formulaciones distintas.

La lista de las 51 lenguas minoritarias citadas en el "Informe Cirici", aunque no sometida a votación, es la siguiente:

- alandés
- albanés
- alemán
- alsaciano
- aragonés
- aranés
- armenio
- bable
- bretón
- catalán

- chesano o altoaragonés
- córnico
- corso
- criollo de los territorios de ultramar franceses
- croata
- escocés
- esloveno
- feroés
- finés
- flamenco
- francés
- franco-provenzal
- friulano
- frisón
- gaélico escocés
- gallego
- galés
- griego
- groenlandés
- ghelder
- irlandés
- ladino
- lapón
- limburgués
- luxemburgués
- mirandés
- meneghino

- noruego
- occitano
- piamontés
- pomaco
- portugués de Olivenza
- romanche
- sardo
- schwyzerstüütsch
- sueco
- thionés
- turco
- vasco
- véneto
- y valón^o.

El Comité de Ministros del C. de E. dejó "aparcada" indefinidamente la Resolución 928, alegando que la política lingüística era un asunto de cada Estado y que no debía convertirse en una directiva. No pasó nunca a los parlamentos estatales para su ratificación. Así pues, en 1981 frente a los primeros intentos serios de las instituciones europeas de intervención en la política lingüística, los Estados todavía reaccionaban aplicando el principio de no injerencia en los asuntos internos.

4.2.2.2: La Conferencia "Vivre le Multilinguisme Européen"

A pesar de ciertas resistencias y críticas, en febrero de 1982 tuvo lugar en Estrasburgo la Conferencia "Vivre le Multilinguisme Européen", que partiendo de las conclusiones alcanzadas por el "Informe Cirici", reafirmó de nuevo la necesidad de que las minorías dispusieran de capacidad para desarrollar su lengua como un instrumento educativo y cultural.

Para empezar a redactar el cuerpo legislativo que llevara a la práctica estos principios en mayo de 1982 se reunieron en Bruselas representantes del Parlamento Europeo y de la Asamblea Parlamentaria del C. de E., además de expertos, juristas y especialistas en lenguas minoritarias. La misión consistía en concretar los derechos de todas las etnias y minorías lingüísticas de Europa Occidental y ponerlas a todas en pie de igualdad. Los congregados podían disponer ya de distintos trabajos realizados en este campo, como por ejemplo los del Consejo de Cooperación Cultural que desde 1971 había estado trabajando en el terreno de la enseñanza de las lenguas y que a partir de 1977 con su obra "Un Nouveau-Seuil" había elaborado un proyecto de mejora en el aprendizaje de las lenguas vivas.

Tras el fallecimiento de Alexandre Cirici en el otoño de 1983, la Comisión de Cultura del C. de E. designó como ponente al diputado por Gerona, Lluís M^a de Puig.

4.2.3: Los preparativos de la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias en la CPPLRE: la Audición de Estrasburgo

Los días 15 y 16 de Mayo de 1984 se celebró en Estrasburgo una Audición de la Conferencia Permanente de Poderes Locales y Regionales de Europa (CPPLRE)¹⁰, institución estrechamente vinculada al C. de E., la cual se declaró representante de unas 40 lenguas regionales o minoritarias, habladas por unos 35/40 millones de europeos. La CPPLRE ya había celebrado en el mes de septiembre de 1982 una primera audición restringida en Trento (Italia), donde se pasó revista a la situación de las minorías lingüísticas del Arco Alpino. A la vista de los problemas que se plantearon allí, se habló de la posibilidad de convocar una gran conferencia en Estrasburgo bajo el patrocinio del C. de E. y referida a todas las minorías lingüísticas.

Era la primera vez que se escuchaba en el hemiciclo del "Palais d'Europe", sede del C. de E., las voces, las esperanzas y las reivindicaciones de dichas minorías, y a pesar de la dispersión de los temas suscitados y de la gran diversidad de situaciones, la sesión dió buenos frutos. Siguiendo un análisis de Lluís M^a de Puig, los participantes se dividieron básicamente en dos grupos: los representantes de las lenguas minoritarias, o sea de aquéllas habladas por un número comparativamente reducido de personas como el bretón, el euskera o el frisón, y los representantes de las minorías

lingüísticas, es decir, de aquéllos que hablan alguna de las grandes lenguas de Estado, pero que siendo minoritarios en su Estado, sufren situaciones de desventaja. Es el caso de los alemanes en Dinamarca o de los neerlandeses en Bélgica. Una cosa es el derecho de las lenguas pequeñas a sobrevivir y otra el derecho a utilizar la lengua propia en cualquier caso, todo ello sin dañar los lógicos derechos de la mayoría lingüística en cada país.

En aquel gran debate se insistió en "la necesidad y en la urgencia de elaborar un instrumento jurídico que garantizara la defensa y la protección del patrimonio que constituyen las lenguas regionales y minoritarias de Europa", especialmente en el terreno educativo y de los medios de comunicación, y en la existencia en Europa Occidental, y concretamente en los entonces 21 miembros del C. de E., de una gran diversidad de situaciones, puesto que hay desde lenguas a punto de desaparecer hasta lenguas todavía bien implantadas y fuertes, pero que retroceden en determinadas zonas. Las lenguas pequeñas viven situaciones y grados muy distintos, tanto por lo que se refiere a su uso social, como a su tratamiento jurídico-político, como a su peso cultural. Se estableció claramente la conveniencia de salvar estas lenguas "como un elemento cultural de primer orden". Se insistió en la enseñanza de estas lenguas, mediante un proceso que debería ser global y tender "como mínimo" al bilingüismo y a la formación de la propia identidad cultural y lingüística. Esto exigía además la enseñanza de la

historia y de la literatura propias de las comunidades regionales en una lengua distinta a la mayoritaria.

Se requirió asimismo el reconocimiento del derecho a la lengua propia por razones de igualdad y con planteamientos no discriminatorios. Se habló de elaborar políticas lingüísticas regionales, advirtiendo que no siempre hay una relación territorio-lengua, ni se pueden establecer límites precisos. Algunos oradores subrayaron la urgencia de las actuaciones concretas, habida cuenta de que algunas lenguas están a punto de desaparecer y en todo caso, que era preciso reclamar su co-oficialidad con la lengua estatal, lo cual suponía su uso por la Administración.

Para ello, se reclamó una descentralización de los poderes a escala regional y local, en particular por lo que respecta a la política cultural, a la elaboración de programas de enseñanza y a la teledifusión y los medios de comunicación. Se hizo un llamamiento a los gobiernos estatales para que crearan las condiciones institucionales y regionales y permitieran el uso y la enseñanza de estas lenguas y su promoción. Las autoridades debían "respetar" a las minorías lingüísticas, tomando las medidas necesarias para que los ciudadanos pudieran utilizar su lengua materna en sus relaciones con las distintas administraciones y los tribunales de justicia. Además, las autoridades locales y regionales afectadas debían ser conscientes del papel que pueden desempeñar para un mejor

conocimiento de estas lenguas y crear las condiciones socio-económicas propicias para su desarrollo. Concretamente pueden dar su apoyo logístico y financiero a las asociaciones destinadas a la promoción de las lenguas minoritarias. La Audiencia constató que allí donde había una autonomía regional o una descentralización de competencias se ha facilitado la defensa de estas minorías lingüísticas. La situación anémica de algunas de estas lenguas daba una mayor urgencia a la preparación de la Carta, que "debería convertirse en la base de un espacio cultural europeo abierto a las diversidades regionales".

El comunicado final de la Audiencia de Estrasburgo añadía que había que pasar "del estadio de las declaraciones de principio al más activo del apoyo a estas minorías". Por ello, se solicitó el apoyo de la Asamblea Parlamentaria y del PE a la redacción de una Carta Convencional para organizar "la protección de las lenguas regionales y minoritarias en el marco de los principios del C. de E., instancia encargada de construir la unión de Europa sobre la base de los principios democráticos, de la defensa y del desarrollo de los derechos del hombre". Los reunidos felicitaron por último a la Comisión Europea de la CE por haber creado una Oficina de seguimiento de estos problemas y la instaron a mantener la más estrecha colaboración posible con el C. de E. y la CPPLRE¹¹.

En esta asamblea sucedió un hecho anecdótico, pero que revela las dificultades prácticas con que tropezaba el proyecto desde el primer momento. El diputado Lluís M^a de Puig pronunció la totalidad de su discurso en lengua catalana, su lengua materna y una de las allí representadas. Este hecho acarreó algunos problemas técnicos y resistencias, a pesar de que el diputado de Puig actuaba como ponente y que su discurso abrió el debate, circunstancia que le añadía cierto carácter simbólico. Las lenguas de trabajo de la Audición eran el francés, el inglés, el alemán y el italiano, mientras que el castellano no figuraba por razones de orden burocrático. La intención del orador fue únicamente la de realizar un acto testimonial y establecer un precedente. Lluís M^a de Puig afirmó más tarde que éste fue "un paso importante" en el proceso de afirmación de las lenguas minoritarias en las máximas instancias europeas¹².

4.2.3.1: Los trabajos de la ponencia

En el marco inicial de la CPPLRE, una comisión de ocho personas fue encargada de redactar una ponencia o un borrador de una Carta, empezando sus trabajos el 19 de Diciembre de 1984 en Estrasburgo. Los reunidos eran Herbert Kohn (encargado de las definiciones y coordinador general) como representante de la CPPLRE, Lluís M^a de Puig y Modest Prats (redactores de la parte relativa a las responsabilidades de las colectividades

locales y regionales) como representante el primero de la Asamblea Parlamentaria del C. de E. y como experto el segundo, Mervyn Philipps (encargado de educación y enseñanza), Pietro Ardizzone (encargado de medios de comunicación), Jean-Marie Woehrling (acciones y equipamientos culturales), Ivo Peeters (encargado del uso de las lenguas en la vida administrativa y pública) y Félix Ermacora (encargado de las vías de recurso y los mecanismos de control).

Les apoyó un secretariado "altamente competente", según de Puig, formado por Rinaldo Locatelli, Phillip Blair y Carole Reich, y fundamentalmente el jurista Ferdinando Albanese. Y se consultó en audición pública a personalidades como Joan Dorandeu, presidente del *Bureau Européen des Langues Moins Répandues*, dependiente de la Comisión Europea de la CE; al profesor Jorgenssen, secretario general de la Unión Federalista de las Comunidades Europeas; y al conde von Stauffenberg, ponente en el PE de un informe sobre las lenguas minoritarias.

Los trabajos de la citada ponencia duraron dos largos años antes de poder presentar un primer borrador de Carta¹³. Había que elaborar un documento que contemplara a la vez todas las diversidades lingüísticas y todas las realidades tan distintas y contrastadas. La Carta tenía que servir para todas las situaciones que se daban en el ámbito del C. de E.. Al mismo tiempo, se pretendía no rebajar los avances experimentados en algunos Estados, como el español, progresos que, por cierto,

sirvieron de punto de referencia para algunos de los ponentes. Sin embargo, mantener los niveles marcados por las seis leyes de normalización lingüística aprobadas por sendos parlamentos regionales del Estado español, no fue una tarea fácil por la inclinación de otros ponentes procedentes de áreas lingüísticas minoritarias en situación más precaria que el catalán, el euskera o el gallego, de rebajar las aspiraciones normativas. También los contrarios a asumir compromisos más amplios presionaron para ir a un documento de mínimos que no reflejara las posiciones más avanzadas.

Así pues, había que establecer unos mínimos que siéndolo fueran al mismo tiempo útiles y eficaces, puesto que si por su lenidad resultaban a la larga ineficaces desde el momento en que se aplicaran, la Carta perdería todo su sentido político. Pero simultáneamente había que preparar un texto tan sutil y equilibrado que fuera aceptado tanto por la CPPLRE y luego por la Asamblea Parlamentaria, sino que también pudiera ser ratificado por el Comité de Ministros, teniendo en cuenta la tradicional reticencia que la mayoría de gobiernos estatales europeos han mostrado ante este tema.

Los ponentes partidarios de una posición más enérgica encontraron en el seno de la comisión incluso ciertas posiciones contrarias a la redacción de una Carta, por lo que los debates resultaron con frecuencia "duros", en expresión de algunos de ellos, para evitar que fueran rebajados los techos

inicialmente previstos. Griegos, turcos, algún francés, e incluso algún representante de lenguas minoritarias como el galés Mervyn Phillips, presionaron constantemente para reducir los compromisos de la Carta.

Había que allanar, por otra parte, las trabas jurídicas, a veces de difícil superación, del derecho internacional. Por supuesto, el C. de E. no podía intervenir en determinados aspectos que chocaran con las normas internacionales o con la legislación de los distintos Estados democráticos, a quienes al final del proceso iría dirigido el documento resultante. Y como trasfondo permanente estaba la tradición hegemónica de las grandes lenguas europeas. En no pocas ocasiones los ponentes tuvieron que superar la impresión de que la Carta significaba una agresión a dichas lenguas mayoritarias, y no pocas voces se alzaron pidiendo que el esfuerzo fuera dirigido precisamente a la expansión y cultivo de las grandes lenguas de Estado en vez de esforzarse en relanzar las minoritarias. Convencer de que la Carta no sería en ningún momento un peligro para la implantación de las lenguas de Estado comportó enormes esfuerzos. La defensa de las lenguas mayoritarias fue en ocasiones obsesiva, dada su tendencia histórica a ocupar el espacio de las minoritarias. Y hay que sumar a ello la oposición de ciertos núcleos conservadores en las instituciones europeas dispuestos a tratar minoritariamente a las minorías.

Otro de los grandes temas de discusión fue sin duda la forma jurídica de la Carta, su rango legal. Al final se decidió que fuera una Convención, en vez de una Resolución o de una Recomendación, para otorgarle el máximo nivel internacional y porque el sistema de aprobación parecía el más fácil a la larga. Una vez aprobada en el Consejo de Ministros bastarían 7 Estados que la firmaran para que se considerara adoptada y en circulación. No se requeriría la firma de la totalidad de los 23 Estados miembros del C. de E.. Ahora bien, la existencia de un segundo trámite de ratificación para que la Carta fuera normativa, permitiría a los gobiernos más reticentes firmarla sin tener la obligación normativa de aplicarla automáticamente. Esto evitaba en principio la posibilidad de vetos estatales. Los Estados que la firmaran y la ratificaran deberían sujetarse a sus normas, como si se tratara de una ley propia. Por último, la forma de una Convención permitiría la existencia de un sistema de control y de verificación del grado de aplicación de la Carta en cada Estado miembro, al contrario que otros tipos de recomendaciones.

Se produjeron asimismo larguísimos debates sobre el nombre de la Carta. Se barajaron docenas de denominaciones de estas lenguas de acuerdo con las anteriores de organismos internacionales, de leyes estatales y de textos científicos. ¿Lenguas minoritarias, minorizadas, regionales, poco extendidas, poco usadas, amenazadas, pequeñas nacionales, étnicas, locales propias, maternas, sin Estado, indígenas,

autóctonas, cooficiales, oficiales, autonómicas, de ámbito restringido, etc.? Todas estas denominaciones y otras más se utilizan libremente. Algunas son lenguas de Estado, otras no, pero son consideradas lenguas nacionales. La apelación a la idea nacional en relación a la idea del Estado fue constante por parte de algunos de los ponentes que defendieron con vigor esta denominación. Pero para los juristas llamar "lenguas nacionales" a este tipo de lenguas significaba lo mismo que llamarlas lenguas de Estado, lo cual inducía a confusión. Por ello, hubo que deslindar claramente todos estos conceptos. Se propuso alternativamente el nombre de lenguas "regionales", pero chocaba con la realidad de idiomas como el irlandés o el luxemburgués que eran lenguas de Estado, o del romanche que constitucionalmente es una de las lenguas nacionales de Suiza, o incluso de las lenguas no castellanas de España que estatutariamente no son clasificadas como lenguas regionales.

Se propuso finalmente la fórmula de "lenguas regionales y minoritarias". En 1985-86 la expresión "región" y "regional" ya había sido ampliamente adoptada por el derecho comunitario y europeo para designar aquellas realidades subestatales con un cierto grado de organización administrativo-política. Se hablaba abiertamente de política regional, de Fondo Regional, de la Asamblea de las Regiones, de la Conferencia de Poderes Regionales, etc. Se trataba, por lo tanto, de un término política y jurídicamente acuñado y universalmente admitido en toda Europa Occidental, por lo que resultó aceptable para

todos. Algunas lenguas regionales no son minoritarias en sentido estricto, como demuestra el caso del catalán, y por esta razón se acordó finalmente cambiar la conjunción "y" por una "o", es decir Carta de las Lenguas Regionales o Minoritarias y se pudo alcanzar el consenso deseado en este punto.

Desde la primera sesión de trabajo se decidió excluir un listado de lenguas minoritarias y de minorías lingüísticas, ni siquiera con carácter orientativo, ya que se consideraba del todo imposible lograr un acuerdo sobre ellas especialmente después de la áspera polémica suscitada por la lista elaborada por A. Cirici¹⁴. De todos modos, la ponencia trabajó con una lista revisada de lenguas minoritarias, que dividió en dos grandes grupos.

Como lenguas minoritarias claras estableció:

- el sami, en Suecia y Noruega
- el feroés, en Dinamarca
- el frisón, en Holanda y Alemania
- el gaélico
- el galés
- el trish
- el córnico
- el manx, en Gran Bretaña
- el bretón
- el alsaciano

- el corso, en Francia
- el euskera, en Francia y España
- el catalán
- el occitano, en Francia, España e Italia
- el romanche, en Suiza
- el friulano
- el ladino
- el piamontés
- el sardo, en Italia
- el croata
- el esloveno, en Italia y Austria
- el kurdo
- el armenio
- el asirio, en Turquía
- el gallego, en España
- el luxemburgués
- y valón, en Bélgica

Como modalidades más difíciles de aceptar:

- el auvergnat
- el franco-provenzal
- el thiois
- el francico, en Francia
- el gaumois, en Bélgica
- el bajo-sajón, en Alemania
- el walser, en Italia

- el bable
- y la fabla aragonesa, en España.

Se incluyeron también algunas minorías lingüísticas, como la alemana en Dinamarca, Bélgica, Francia e Italia; la danesa en Alemania; la holandesa en Francia; la francesa en Italia y Gran Bretaña; la griega y romanesa en Italia y Turquía; la albanesa en Italia y Grecia; la turca en Grecia y Chipre; la búlgara en Grecia; la húngara y checa en Austria¹⁵. Como salida posible se barajó la creación de una comisión de expertos que elaborara un censo definitivo sobre bases científicas con el cual se trataría de alcanzar un acuerdo político con los distintos poderes afectados. Examinada la propuesta, no pareció factible, ni siquiera con la mejor voluntad. Se dejó, por tanto, a cada Estado que determinara las lenguas minoritarias afectadas y que éstas se fueran acoplando a la Carta de acuerdo con el ordenamiento jurídico interno.

Hubo asimismo dificultades para que los distintos sistemas educativos estatales incluyeran la enseñanza de estas lenguas, "con el fin de que este derecho pueda hacerse efectivo desde el nivel pre-escolar hasta el universitario". Se pretendía por añadidura que la historia y la cultura regionales fueran materias "normalmente impartidas" en los centros de enseñanza ubicados en una determinada área lingüística. Resultó arduo encontrar una fórmula que pudiera ser aceptada por igual por los poderes públicos y por las colectividades afectadas. Era

evidente, por poner un ejemplo, que no era lo mismo enseñar el gaélico en Irlanda que el albanés en Italia, dado que su uso social, literario, administrativo y en los medios de comunicación es completamente distinto. Obviamente si todas las lenguas minoritarias se hubieran encontrado en una situación parecida, hubiese resultado fácil encontrar mecanismos educativos comunes. En cualquier caso, la ponencia reconocía la existencia de un grupo de lenguas con verdaderas posibilidades de normalización, como las españolas o el corso, y otras de dudoso futuro, como el bable o el piamontés, reservadas más bien a la erudición.

Por todo ello, los ponentes opinaron que "sería absurdo y seguramente inútil aplicar a una lengua sin posibilidades reales de normalización los mismos criterios de promoción que han de prevalecer para las lenguas que pueden convertirse en instrumentos de comunicación y cultura de masas, a corto o medio plazo". Encontrar expresiones legales únicas para que los medios de comunicación acogieran estas lenguas, presentó problemas muy serios, así como establecer los distintos grados para su uso en la vida pública y administrativa. Ello no obsta para que la Carta fuera pensada desde un principio para amparar todas las situaciones posibles y dejar a la responsabilidad de cada Estado la responsabilidad de su aplicación concreta. Incluso los casos más desesperados y deshauciados tenían que poder acogerse a esta convención. "Tal vez una lengua que no sea posible normalizarla ahora, lo sea más adelante", fue la

filosofía de trabajo de la comisión de expertos.

Otro tema de debate fue el ámbito de aplicación de la Carta, si tenía que ser sólo sobre las lenguas minoritarias o referirse a todas las minorías lingüísticas. Se decidió que el borrador no se aplicara a las segundas, sino únicamente a las lenguas minoritarias. Su objetivo, por lo tanto, era estrictamente cultural, y no social o político. La Carta no debía tratar tampoco del derecho de los inmigrantes a utilizar su lengua de origen, fuera cual fuera éste. Se consideró que estos colectivos pueden constituir mayorías dentro del área de una lengua mayoritaria y que ya disponen de otros apoyos legales, como la Carta Social Europea. Sus derechos estaban reconocidos desde hacía años y en último término suelen tener detrás los mecanismos de los Estados de Derecho europeos para velar por su correcta aplicación. La Carta, en cambio, pretendía salvar las lenguas minoritarias en tanto que forman parte del acervo cultural europeo y como forma de respeto al principio de no discriminación. La comisión tampoco entró en el espinoso tema de los dialectos, puesto que en este punto tampoco no había el menor acuerdo ni entre los lingüistas, ni entre los políticos.

Así pues, el criterio territorial se impuso a la idea del derecho individual. Era absolutamente básico concretar los derechos sobre una base geográfica y no el derecho individual de las personas que de una manera diseminada pudieran acceder

a unos determinados derechos lingüísticos, como ocurre por ejemplo con los gitanos.

Las obligaciones de los Estados constituyeron lógicamente uno de los nudos del debate previo en ponencia. Algunos de los comisionados sugirieron la introducción de una "reparación histórica", y esta expresión figuró ciertamente en el borrador elaborado por la comisión. Allí se hablaba de la necesidad de que los Estados tomaran medidas excepcionales como una "reparación histórica", puesto que estas lenguas habían sido históricamente abandonadas, marginadas e incluso perseguidas. Sin embargo, esta fórmula no prosperó en las fases posteriores.

Se fijaron unas obligaciones mínimas obligatorias para los Estados miembros. En la segunda parte del borrador de Carta se determinaron estos mínimos imprescindibles que debían firmar de forma global los gobiernos estatales. No hace falta subrayar las discrepancias que surgieron entre los ponentes a la hora de establecer los márgenes para estas obligaciones estatales.

Surgieron problemas serios con la cuestión de las relaciones inter-estatales, no resultando fácil tratar de obligar a los gobiernos nacionales a aplicar una determinada política en relación con las lenguas minoritarias compartidas con Estados vecinos. Esta discusión se entremezcló con otras de signo parecido, como por ejemplo, las repercusiones lingüísticas cuando las fronteras políticas y administrativas no coinciden

con las idiomáticas. La Carta es firme a la hora de pedir que no se corten, dividan o limiten los territorios lingüísticos unitarios con nuevas divisiones¹⁶.

En el último tramo de las discusiones algunos gobiernos expresaron su preocupación para que la Carta fuera abierta a la ratificación de los Estados de Europa Central y Oriental. Grecia y Turquía hicieron saber que sus respectivos gobiernos podrían verse sometidos a presiones no deseadas por parte de otros gobiernos, si ciertos países del bloque oriental llegaban a firmar la Carta¹⁷.

4.2.3.2: El Manifiesto de Tours

Mientras la ponencia iba elaborando lentamente un borrador de Carta, que no aparecería hasta finales de 1986, distintas instituciones europeas aprobaron algunas declaraciones, que con mayor o menor intensidad daban su apoyo a la Carta. El más señalado de estos documentos fue aprobado en un Coloquio Internacional sobre "Las Industrias de la Lengua" celebrado en la ciudad francesa de Tours el 1 de Marzo de 1986. En aquella ocasión el secretario general del C. de E. lanzó el llamado "Manifiesto de Tours".

Aunque el documento final no cita explícitamente a las minorías lingüísticas, estableció el doble principio de

preservación de las lenguas como medio para salvaguardar la identidad europea y, por ende, el de avanzar hacia una sociedad multilingüe. La tesis sostenida en Tours fue que el creciente uso de máquinas, ordenadores, servicios telemáticos, etc. de alta tecnología, origina unas "lenguas-máquina", por lo que es preciso asumir y asegurar el uso de las lenguas naturales habladas por la gente. Estas corren cada vez más el riesgo de irse empobreciendo y marginando en favor de una lengua estandar que, laminando las diferencias, se haga cada vez más cómoda para manipular las máquinas.

Como consecuencia de ello pelagra la diversidad cultural de Europa y se hace preciso defender la pluralidad lingüística, ante todo practicándola. Y esto vale tanto para las lenguas minoritarias, como para las dominantes, incluyendo las más extendidas. "El ciudadano europeo debe ser, por definición, un ciudadano plurilingüe", dice textualmente el "Manifiesto de Tours". La aplicación de este principio conduce al establecimiento de una industria lingüística que tenga impacto en la vida cotidiana y que, aunque parezca paradójico, reforzará su unidad¹⁸.

4.2.3.3: Los difíciles trámites de la Carta en la CPPLRE: sus seis principios básicos

A finales de 1986 el primer proyecto de Carta redactado por la ponencia estaba ya preparado para su debate en los órganos decisorios de la CPPLRE y del mismo C. de E.¹⁹. Es decir, que se aprestaba a pasar por la primera batalla política. El borrador se presentó para convertirse en una futura Convención, y sus impulsores empezaron a tomar ciertas precauciones frente a los poderes políticos, por ejemplo separando los principios y objetivos generales, que podían ser aprobados con más facilidad, de las obligaciones y controles de los Estados, que podían suscitar mayores reservas políticas y de carácter práctico.

En aquellos momentos, la Carta partía de la aplicación de seis principios básicos:

1) Derecho a la diferencia. Aquellos pueblos que poseen una lengua distinta a la oficial del Estado, tienen el derecho imprescriptible e inalienable a ejercer esta diferencia, es decir a usar su lengua. En el marco del artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, el C. de E. debe procurar que este derecho sea reconocido y aplicado por los Estados miembros.

2) Exigencia de la democracia. Romper los hábitos centralistas supone un avance cualitativo de la democracia. Una democracia real en el terreno de la cultura impone el respeto y el apoyo a todas las comunidades culturales y lingüísticas. De otra manera, no se llevaría a la práctica el principio de igualdad ante la ley al producirse discriminaciones hacia las minorías lingüísticas.

3) Principio de justicia. La mayoría de las lenguas minoritarias han sido perseguidas en mayor o menor grado en aras a una concepción cultural uniformista que las ha desvalorizado, recortado y marginado, llegando incluso a ponerlas en grave peligro de subsistencia. Con mucha frecuencia las lenguas minoritarias han sido consideradas como provincianas, inferiores, propias de campesinos incultos, "patois", indignas de una utilización científica y, por lo tanto, condenadas a desaparecer. No sólo hay que presevar esta parte de la cultura y de la identidad europeas, sino que estas lenguas merecen "una reparación histórica", unas ayudas especiales para restablecer el tratamiento injusto que ha recibido y volver al equilibrio que dicte libremente la sociedad afectada.

4) Principio de libertad. Para ejercer el derecho al libre uso de las lenguas, hay que tenerlo reconocido. Y este reconocimiento conlleva crear las condiciones escolares, institucionales, administrativas, culturales apropiadas para

hacer real esta libertad. Por lo mismo, hay que impedir las medidas prohibitivas, restrictivas, discriminatorias o simplemente despreciativas.

5) Principio de no discriminación. Es más, las lenguas minoritarias tienen el derecho a ser tratadas en las mismas condiciones que la oficial del Estado, salvando las distancias lógicas. Sin embargo, pueden exigir un apoyo público (técnico, financiero o material) proporcional o incluso superior al que recibe la lengua del Estado.

y 6) Responsabilidad política de los Estados. Los poderes públicos, tanto los del Estado como los locales y los regionales, tienen una responsabilidad directa en la medida en que la protección de las lenguas es un asunto de toda la sociedad, que debe velar por ellas. Desde la legislación básica hasta las simples actividades culturales, el poder político dispone de medios y de mecanismos para hacer posible la recuperación y la normalización de muchas de estas lenguas minoritarias. Por lo tanto, la responsabilidad de estos poderes públicos depende de la voluntad de los dirigentes y principalmente de su actuación desde los poderes del Estado²⁰.

4.2.3.4: Las exigencias a los poderes públicos

¿Qué es lo que el borrador de Carta exigía a estos poderes públicos?

1) En la educación y la enseñanza. Los Estados deben reconocer el derecho a la educación en la lengua materna o regional y promover en todos los procesos educativos establecidos desde el nivel pre-escolar al universitario, siempre que exista una demanda social. La historia y la cultura regionales deben ser materias normalmente impartidas.

2) En los medios de comunicación y acciones y equipamientos culturales. Los Estados deben facilitar el acceso de estas lenguas a los medios de titularidad pública y promover e incentivar su uso, así como garantizar una presencia suficiente en los medios de propiedad pública, especialmente la radio y la televisión. Al mismo tiempo, las lenguas minoritarias deben recibir una ayuda material y financiera suplementaria para sus manifestaciones culturales, a fin de promover sus publicaciones, su teatro, su cine, y toda clase de expresiones de la cultura autóctona.

3) Utilización de la lengua en la vida pública y administrativa. Los Estados deben permitir y facilitar que los ciudadanos pertenecientes a un grupo lingüístico minoritario puedan utilizar su idioma en todo aquello que se refiera a la

Administración y a los poderes públicos, incluyendo los del Estado, los regionales, los locales y los judiciales, para que puedan ejercer sus derechos y deberes cívicos en la propia lengua. Y si alguna de estas minorías no puede asumir los derechos de oficialidad de la lengua, los poderes estatales deberán buscar soluciones apropiadas.

El borrador de la Carta insistía en que el Estado es el nivel institucional que tiene que ofrecer seguridad jurídica y medios materiales para garantizar el normal desenvolvimiento de estas lenguas, pero el nivel regional es el más idóneo para aplicar los principios establecidos por el propio Estado democrático, naturalmente en aquellos países donde existe este poder regional. El nivel regional y local tiene como misión aplicar medidas concretas y llevar a cabo acciones puntuales y concretas. Las tres Administraciones deben trabajar coordinadamente para evitar disfunciones. También deben cooperar en este terreno aquellos poderes regionales pertenecientes a países distintos o dentro del mismo Estado pero que se ocupan de una misma lengua minoritaria, para evitar desarrollos no armónicos²¹.

Por último, el proyecto de Carta sometido a la CPPLRE fijaba unos mecanismos que permitían denunciar las discriminaciones y controlar la aplicación de la Carta, sin menoscabo de las competencias estatales. Estas vías de control consistían más bien en vías de apelación o de recurso a instancias

supraestatales para evitar posibles situaciones anómalas²².

4.2.3.5: La Conferencia de Florencia

Entre el 14 y el 16 de mayo de 1987 se reunió en Florencia el Consejo de Cooperación Cultural de la CPPLRE para discutir la relación entre cultura y regiones²³. Doscientos cincuenta cargos electos regionales y locales, responsables culturales de las regiones, expertos gubernamentales, responsables de las televisiones y de las radios regionales coincidieron en subrayar la importancia del nivel regional como espacio para alcanzar la democracia cultural.

Uno de los informes presentados fue precisamente sobre "La Cultura y las Lenguas Regionales Minoritarias" y su ponente fue Jean-Marie Woehrling, uno de los redactores del borrador de Carta. Este informó a los reunidos que ésta era posible, a pesar de la gran disparidad de criterios. Ahora bien, en esta ocasión se anunció que por este motivo al lado de un cuerpo dispositivo común, habría otro opcional, de modo que cada Estado podría decidir las lenguas a las cuales se aplicaría la Carta. El "rapporteur" consideraba fundamental que la Carta no se limitara a prohibir medidas de discriminación, sino que tenía que proponer medidas positivas, incluyendo las de rehabilitación y reparación.

La rehabilitación debería abarcar tanto a las instituciones y actividades públicas, como a la enseñanza o los servicios públicos, tanto a las actividades privadas como a los medios de comunicación o los asuntos financieros y mercantiles. La Carta no tenía que distinguir entre las lenguas en función de su número de hablantes, ni debía dar definiciones, ni se referiría a aquellas lenguas que no tuvieran un ámbito territorial propio, ni tomaría en consideración los dialectos.

En consecuencia, la Carta debería establecer en efecto un "mínimo común", que no perjudicara a nadie, que favoreciera a todas las partes implicadas, que se adaptara a todas las situaciones lingüísticas específicas y que ofreciera apoyos a las lenguas minoritarias. Los Estados afectados serían requeridos a reconocer los derechos proclamados en la Carta, a comprometerse en su salvaguarda, y a evitar discriminaciones, tomando resoluciones de orden positivo. Así, por ejemplo, en el terreno de las relaciones transfronterizas, la Carta pediría a los Estados que impulsaran los intercambios culturales y educativos entre aquellas comunidades que usaran la misma lengua o lenguas emparentadas a ambos lados de la frontera.

Como medidas opcionales para los Estados, la Carta debería proponer en materia de enseñanza que durante la fase pre-escolar los niños pudieran educarse en la lengua minoritaria, mientras que en los niveles superiores la lengua minoritaria podría oscilar desde ser la principal hasta no ser enseñada.

Por lo que respecta a la Administración y a la Justicia, los Estados deberían garantizar como mínimo la validez de los actos y de los recursos hechos en la lengua minoritaria, así como el ejercicio del derecho de defensa en esta lengua. Sin embargo, el uso de estas lenguas por los poderes públicos y su implantación administrativa quedaría a criterio de los distintos Estados, así como los servicios de traducción o entre los funcionarios.

En los medios de comunicación, la Carta tendría que asegurar el acceso de cada lengua minoritaria a un mínimo de vectores (televisión, radio, prensa, etc.), y si fuera posible, su uso exclusivo en alguno de ellos, como por ejemplo en un canal de TV. Todos los medios deberían regular la presencia de estas lenguas y vigilar el plurilingüismo y la formación de los periodistas. La Carta insistiría en el papel del Estado a la hora de favorecer el desarrollo cultural de las lenguas minoritarias, como traducciones, subtítulos, personal de animación, etc. Incluso habría que proponer la creación para cada lengua de un organismo encargado de recoger y difundir las obras escritas en la lengua minoritaria.

Para la vida económica y social, la Carta debería impedir todas aquellas medidas que desanimaran el uso de las lenguas regionales, especialmente en los medios laborales y en las relaciones comerciales. Debería preconizar que las normas de seguridad o la información a los consumidores se haría en estas

lenguas, aunque con las debidas garantías²⁴.

Cuando se celebró la Conferencia de Florencia, la ponencia no había decidido aún sobre la propuesta de elegir entre la creación de un comité de expertos para realizar el seguimiento de la Carta, o de diversos órganos designados por las instituciones responsables de cada lengua minoritaria, los cuales vigilarían su defensa y promoción. Estos órganos variarían según cada lengua y de Estado a Estado.

La "Declaración de Florencia" reconocía que las lenguas regionales representan "un patrimonio cultural esencial" que exige "medidas urgentes de protección tanto en el plano práctico como jurídico". La atención que las autoridades europeas presten a estas lenguas "lejos de ser un obstáculo para la unidad de los Estados o para la comunicación en el seno de Europa" constituye un testimonio fundamental de los Derechos del Hombre y de la diversidad cultural que caracteriza la sociedad europea. En consecuencia, la Conferencia apoyaba "plenamente" los trabajos en curso para redactar una Carta para las lenguas minoritarias, que definiera por un lado los principios generales y por otra las condiciones concretas "destinadas a asegurar el mantenimiento y la rehabilitación de estas lenguas y por ello mismo de las culturas regionales y locales a las que están unidas"²⁵.

4.2.3.6: Las lenguas en los medios de comunicación

Las declaraciones coincidentes con el proyecto de Carta iban surgiendo durante su elaboración. Así, además del referido "Manifiesto de Florencia", la 39ª Sesión Plenaria de la Asamblea Parlamentaria del C. de E. aprobó el 8 de octubre de 1987 una Recomendación sobre la cultura en los medios de comunicación europeos, en la que se insistía en el pluralismo lingüístico de dichos medios y en el uso de las lenguas minoritarias en las emisoras estatales, regionales y locales, en el cine, etc.²⁶

El texto final de esta Recomendación contenía distintas referencias que enlazaban con las del proyecto de Carta. Así, se denunciaba "la degradación de la identidad cultural de los países pequeños y de los grupos lingüísticos minoritarios, así como de la diversidad cultural de Europa en su conjunto". Se pedía que los medios de comunicación fueran "la expresión de la diversidad cultural y de comunicación a escala europea". Se remitía a las Recomendaciones 928 (1981) y 1043 (1986) para subrayar el papel que el cine y los medios de comunicación pueden desarrollar en "la preservación de la diversidad lingüística y en la extensión de la capacidad de apreciación cultural". Se solicitaba "el fortalecimiento de la diversidad cultural de Europa" y se instaba a "una acción rápida" de los gobiernos miembros y de los órganos de la Comunidad Europea.

En consecuencia, recomendaba al Comité de Ministros entre otras cosas "subrayar el papel de la televisión como medio de conocimiento de las distintas culturas y de fortalecimiento de la diversidad de las identidades culturales y lingüísticas" y preservar y favorecer "el pluralismo lingüístico en los medios de comunicación", por medio de un fondo común destinado a la producción que "también estaría a disposición de las lenguas minoritarias", de boletines informativos y entrevistas en estas lenguas, y en todo caso dando garantías de que las lenguas minoritarias y locales se puedan dar a entender en todas las redes nacionales, regionales y locales. Por último, la Recomendación pedía "una política cultural global"²⁷.

4.2.3.7: El rechazo del proyecto de Carta por la CPPLRE

A pesar de que el proyecto de Carta presentado finalmente²⁸ fue calificado de "general y prudente en sus definiciones, pragmática y posibilista en sus modalidades de adopción y ratificación" y de que contenía solamente "unos mínimos comunes", el 22 de octubre 1987 fue rechazado por la XXII Sesión Plenaria de la CPPLRE. Pasado el debate técnico en la ponencia, la Carta entraba en el debate político.

Ya en el transcurso de los trabajos de la Comisión de Educación y Cultura, antes de pasar al pleno, se había ido rebajando el texto. Por ejemplo, desapareció el concepto de

"reparación histórica" y desapareció el imperativo de oficialidad de las lenguas minoritarias. El texto sometido al plenario de la CPPLRE hablaba de "reconocimiento" de estas lenguas, pero en los primeros borradores de los expertos se había podido leer "reconocimiento oficial". Se habían suavizado expresiones imperativas como "garantizar" o "asegurar", que frecuentemente fueron substituídas por "promover" o "permitir". Algunas medidas de política lingüística que los expertos creían que deberían ser obligatorias, pasaron a ser optativas en la redacción definitiva.

Con todo, los ponentes creyeron que se mantenían los mínimos aceptables y que el espíritu de la Carta no había sido desnaturalizado. Incluso sin estos recortes su contenido habría sido mucho más coercitivo, por lo que hubiera resultado difícil su aprobación por el Comité de Ministros. No obstante, el plenario lo consideró aún excesivo y lo devolvió a la Comisión. Según el holandés Van Walsum las críticas al proyecto surgieron por presiones de última hora de ciertos gobiernos, puesto que cuando se tomó en consideración el borrador para su debate el 11 de septiembre, nadie puso la menor objeción. Estas no empezaron a aparecer hasta el mismo día 20 de octubre.

Tras la presentación y defensa de la Carta a cargo de H. Kohn y Lluís de Puig, en el debate en el pleno de la Comisión los oponentes a la Carta adujeron que se discriminaba a las lenguas de Estado y que provocaría un caos lingüístico en

Europa, dado que entre otras cosas no separaba claramente las lenguas tradicionales y territoriales de las introducidas por los inmigrantes (Mr. Moss). El griego Carelis dijo que algunas expresiones fomentarían el separatismo de ciertas regiones y el también griego Lendakis advirtió que la Carta tendría "un impacto desastroso en la unidad continental, en su paz, como también en la estabilidad social de los Estados miembros. Según él, la Carta permitiría que algunos Estados intervinieran en los asuntos internos de otros bajo el pretexto de proteger a sus minorías lingüísticas. La idea de unión europea debería tender hacia la uniformidad y la homogeneidad en vez de la dispersión y la diversidad, sostuvo el francés Sergent. También se adujo que resultaba una pérdida de tiempo, puesto que lo más útil sería el aprendizaje generalizado de las grandes lenguas. O que no era preciso actuar, ni adoptar normativa alguna, porque en la práctica aquéllos que quieren utilizar las lenguas minoritarias, ya lo hacen. Como razonamiento de fondo y ampliamente compartido se insistió en que los europeos tenían que fomentar una gran lengua común a todos y no perder el tiempo multiplicando, favoreciendo, promocionando y salvando o recuperando lenguas a punto de desaparecer por imperativo de la historia (Mr. Nungesser, francés).

Finalmente intervino el alcalde de Ginebra, Mr. Haegi, el cual indicó al plenario que no habiendo consenso sobre el proyecto de Carta, lo mejor era devolverlo a la ponencia, propuesta que fue aceptada, a pesar de un intento del

presidente de la Comisión de Cultura, el italiano Bucci, de forzar una votación que se adivinaba favorable a la aprobación del texto presentado, aunque por mayoría. Al cabo de tres años de denodados esfuerzos, los ponentes tuvieron que ponerse a revisar una vez más el texto²⁹.

4.2.3.8: El nuevo proyecto de Carta

A la nueva Carta revisada le fueron añadidas distintas expresiones destinadas a dar seguridades a sus críticos y a suavizar conceptos. En el preámbulo se añadió que la protección de las lenguas minoritarias "lejos de constituir un obstáculo para las lenguas nacionales", representa una contribución importante a la construcción de una Europa fundamentada en los principios de la democracia y de la diversidad cultural. Y antes de entrar en el contenido normativo propiamente dicho, la Carta advertía que tenía que ser interpretada "teniendo en cuenta las condiciones específicas y las tradiciones históricas propias de cada región de los países de Europa".

Las lenguas afectadas por la Carta serían solamente aquellas que "pertenezcan al patrimonio cultural europeo" y habladas en un determinado territorio.

Los compromisos mínimos de los Estados fijados por el artículo 2 fueron ligeramente reducidos, ya que se suprimieron

tres de las obligaciones que figuraban en el primer proyecto. Se añadió una cláusula, el artículo 4, según la cual la Carta no se aplicaría a aquellas lenguas minoritarias en cuyo territorio ya estaban reconocidas como lengua principal, ni a aquéllas que ya gozaran de una protección jurídica más favorable que la exigida por la Carta.

Entre los objetivos generales del artículo 5, que constituirían "la base" de la política lingüística de los Estados, se acordó no pedir el reconocimiento "oficial" de dichas lenguas, sino que fueran reconocidas "como un atributo de una comunidad". En cambio, se clarificó que las fronteras y las divisiones administrativas no serían un obstáculo para la promoción de la lengua, respetando su ámbito geográfico. A los habitantes de un territorio que no hablaran la lengua minoritaria afectada se les ofrecería facilidades para aprenderla "siempre que lo deseen". Los Estados "estudiarán la posibilidad" de promover intercambios transnacionales, si una lengua minoritaria es hablada a ambos lados de una frontera entre Estados distintos.

En materia de enseñanza se determinó que se enseñaría la lengua minoritaria en la escuela secundaria "por lo menos para los estudiantes que lo deseen". En este capítulo, sin embargo, se aplicarían sólo aquellos puntos "aceptados por la parte contratante".

Las partes se comprometían a tomar medidas en los servicios públicos, en la Administración y en la Justicia, pero únicamente "en la medida en que esto sea razonablemente posible". También se suprimió la obligación de las autoridades a responder a sus administrados en la lengua minoritaria y de una forma apropiada, si son interpeladas en esta lengua. En cambio, se añadió que los acusados por la justicia pudieran expresarse en su lengua en el momento de su defensa. El nuevo texto "animaba" a los poderes locales a garantizar la publicación de los textos oficiales en estas lenguas y a permitir el uso de la toponimia en su versión local. El Estado estaba obligado a aportar los medios humanos, técnicos y financieros precisos sólo para la aplicación de aquellos párrafos y cláusulas aceptados por las partes contratantes.

Algo parecido sucedió con los medios de comunicación (artículo 8). Se aseguró la difusión de estas lenguas en la televisión y en una emisora de radio por lo menos, "a menos que se hayan previsto otras modalidades". En cualquier caso, los Estados sólo se sentirían obligados por los párrafos genéricos aceptados. También en las actividades económicas y sociales se admitieron ciertos compromisos lingüísticos "en la medida que sea razonablemente posible".

La nueva Carta añadía un nuevo artículo 10 bis con la intención de fijar las obligaciones elementales de los Estados en los intercambios lingüísticos transfronterizos.

Concretamente los signatarios se comprometían a "mantener y desarrollar relaciones específicas a través de las fronteras para las lenguas minoritarias, que de una forma idéntica o casi, sean practicadas en dos o más Estados, así como las formas diferentes de intercambios y de cooperación transnacionales en todos los dominios de la cultura, de la enseñanza, de la formación profesional y de la educación permanente". Se trataba de una recopilación a la baja de las obligaciones que el texto rechazado recogía en distintos artículos.

En la parte relativa a la aplicación de la Carta, el segundo proyecto admitía que "organismos, grupos o individuos residentes legalmente en el Estado signatario puedan llamar la atención del Comité de Expertos" sobre aquellas situaciones que fueran contrarias a los compromisos de la parte interesada. Sin embargo, sería el Comité de Ministros y no el Comité de Expertos, el que publicaría o no dichos informes. Los expertos, que representarían los Estados signatarios, serían designados por éstos en lugar de ser propuestos por la Asamblea Parlamentaria del C. de E.. Con estas cautelas añadidas a última hora, quedaba claro que el control de la aplicación de la Carta y de las denuncias de posibles violaciones iría a cargo de los Estados afectados y no de organismos independientes³⁰.

4.2.3.9: La aprobación definitiva de la Carta en la CPPRLE

Realizados todos estos recortes, la Comisión de Cultura de la CPPRLE dió de nuevo su beneplácito a la Carta en su reunión del 12 de Enero de 1988. La XXIII Sesión Plenaria de la CPPLRE aprobó finalmente y sin dificultades el texto revisado el 16 de Marzo de 1988, "un proyecto importante y ambicioso", según un comunicado de la propia CPPLRE³¹. Sus ponentes en esta ocasión fueron de nuevo el alemán Herbert Kohn y el español Lluís M^a de Puig, que volvieron a defender el texto ante el plenario. El documento aprobado se convirtió en la Resolución 192 de 1988³².

4.2.3.10: La Carta en la Asamblea Parlamentaria del C. de E.

El paso de la CELRM por la Asamblea Parlamentaria del C. de E. resultó menos conflictivo que su tramitación en la CPPLRE, aunque no estuvo exento de tensiones. La Comisión de Educación y Cultura la aprobó el 12 de septiembre de 1988 con 16 votos a favor y con una sola abstención y la XL Sesión Plenaria de la Asamblea Parlamentaria lo hizo también el 4 de octubre de este mismo año.

En opinión de la Asamblea el proyecto de Carta era "lo suficientemente flexible" para que su aplicación fuera posible en las situaciones tan distintas de Europa "sin atender a la

integridad territorial o a las lenguas oficiales de los Estados contratantes". La Resolución subrayaba además que el proyecto sólo contenía medidas "básicas" para la protección y revitalización de las lenguas minoritarias y que representaba una primera medida práctica y necesaria en esta dirección. El punto 9 dejaba abierta la posibilidad de que países europeos no miembros del C. de E. firmaran la Carta.

4.2.3.11: La Recomendación 1177

La preocupación de la Asamblea del C. de E. por las minorías lingüísticas no terminó con la aprobación de la Carta. Buena prueba de ello es la Recomendación 1177 aprobada el 5 de febrero de 1992. En ella se advierte contra las fronteras que dividen a pueblos de cultura idéntica y contra la tentación de crear ciudadanos de segunda en razón de la cultura.

La Recomendación recuerda en su primer artículo que la historia ha creado en Europa un mosaico de pueblos diferentes por su lengua, su cultura, sus tradiciones y sus costumbres y sus prácticas religiosas. Estos pueblos se hallan tan unidos y entrelazados que ningún límite territorial puede circunscribirlos total y exclusivamente. Las fronteras estáticas heredadas de las dos últimas guerras mundiales no lo consiguieron, y las futuras, sean las que sean, tampoco lo conseguirán.

En segundo lugar, la Recomendación recuerda que la ciudadanía debe ser igual para todos y que en un Estado democrático no puede haber ciudadanos de segunda por razones de zona, en el respeto riguroso a los derechos humanos. En consecuencia, dentro de dicha ciudadanía común aquellas personas que comparten con otros unas características específicas especialmente de orden cultural, lingüístico o religioso, pueden, sin embargo, "aspirar a su reconocimiento y a que se garantice la posibilidad de su expresión"³³.

4.2.3.12: La Directiva 474

El mismo día en que aprobó la Recomendación 1177, la Asamblea Parlamentaria aprobó la Directiva 474, en la cual proponía al Comité de Ministros

- terminar los trabajos de elaboración de una Carta de lenguas minoritarias y proceder a su aplicación inmediata;
- elaborar un protocolo adicional sobre los derechos de las minorías a la Convención Europea de los Derechos Humanos;
- y dotar al C. de E. de un instrumento de mediación adecuado³⁴.

4.2.3.13: La Carta en el Comité de Ministros

De la misma manera que no había aprobado la Recomendación 928, el Comité de Ministros no aprobó la CELRM. En su reunión de enero de 1989 (423) y posteriormente en la de abril de 1989 (425) decidió aparcar el debate sobre la Carta. Finalmente en junio nombró una comisión especial de representantes gubernamentales, presidida por un sueco, para que aconsejara las reformas pertinentes al texto aprobado por la Asamblea Parlamentaria. Se le añadieron algunos representantes de la Asamblea Parlamentaria, de la CPPLRE y de países observadores³⁵.

Los gobiernos de Francia, Gran Bretaña, Grecia, Turquía y Luxemburgo fueron los que plantearon las reservas más profundas. Dinamarca, la RFA y Noruega tenían algunas dudas, mientras que España, Irlanda, Bélgica, Italia, Portugal, Austria, Suecia y Suiza expresaron su total apoyo al documento aprobado por la Asamblea Parlamentaria. Las reticencias estatales llevaron al ponente de Puig a advertir al comité de asesores que el grado de compromiso de los Estados fijado por el texto de la Asamblea debería ser inmodificable, so pena de desvirtuar la Carta entera. Únicamente podía admitirse la flexibilización de algunas expresiones³⁶.

En noviembre de 1991 la comisión de expertos gubernamentales alcanzó en Venecia un acuerdo sobre el nuevo texto de Carta.

Los delegados tuvieron especial cuidado en distinguir los derechos de las lenguas de los de los dialectos, dos cosas que no había que confundir para no poner en crisis la unidad cultural de ciertas naciones. Además, el aprendizaje de las lenguas locales debía ser el fruto de la libre elección de cada individuo y no una obligación impuesta³⁷.

El 24 de junio de 1992 el Comité de Ministros aprobó finalmente la CELRM. Votaron a favor Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Irlanda, España, Portugal, Malta, Liechtenstein, Austria, Hungría, Polonia, Alemania, Italia, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, San Marino, Suiza y Checoslovaquia. Se abstuvieron Francia, el Reino Unido, Chipre y Turquía. Grecia votó en contra, mientras que el delegado de Bulgaria no asistió a la reunión. La Carta fue puesta a la firma de los Estados a partir del 5 de noviembre para entrar en vigor el primer día del mes siguiente a la expiración de un período de tres meses después de la fecha en que 5 países miembros del C. de E. expresaran su aceptación de la Carta. El mismo 5 de noviembre de 1992 11 Estados europeos (Austria, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Hungría, Liechtenstein, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Noruega y España) firmaron la Carta en Estrasburgo con ocasión de la 91ª Sesión del Comité de Ministros de la Organización de los "27"³⁸. Chipre la firmó el 11 de noviembre, mientras que Suiza lo hizo el 8 de octubre de 1993.

En mayo de 1995 sólo Finlandia (9/11/94), Hungría (26/04/95) y Noruega (10/11/93) habían ratificado la Carta, por lo que ésta no había podido entrar en vigor al no haberse alcanzado el mínimo de cinco ratificaciones. El 7 de marzo de 1995 el Ministro de Asuntos Exteriores español, Javier Solana, se comprometió ante el Senado a poner en marcha los mecanismos de ratificación por parte del Estado español³⁹.

4.2.3.14: El contenido de la Carta del Comité de Ministros

El texto definitivamente aprobado por el Comité de Ministros difería mucho del de la Asamblea Parlamentaria. Ya en el mismo Preámbulo se reforzó el párrafo que señalaba que la protección a las lenguas minoritarias no se haría "en detrimento de las lenguas oficiales y la necesidad de aprenderlas". Claro que este mismo párrafo remarcaba "el valor del interculturalismo y del bilingüismo".

Inicialmente desapareció el carácter de Convención que le dieron los ponentes y que permaneció a lo largo de todos los trámites anteriores al Comité de Ministros. Al ser un Anexo de la Recomendación 198, y no indicando otra cosa la Carta, ésta se convertía jurídicamente en una Recomendación, a pesar de la permanencia de un sistema de control, que sólo puede ser introducido en los tratados internacionales. Al final, sin embargo, el Comité de Ministros modificó el rango legal de la

Carta, aceptándola finalmente como una Convención.

En la Parte I de la Carta relativa a las definiciones se deja claro que por lengua minoritaria se entiende la hablada en el territorio "de un Estado" y "diferente de la(s) oficial(es) de este Estado". Se afirma tajantemente que el concepto no incluye ni "los dialectos de la(s) lengua(s) del Estado, ni las lenguas de los inmigrantes". Se amplía también el concepto de discriminación (art. 1.c).

Cada Estado se compromete a aplicar la Parte II, referida a Principios y objetivos, solamente "como base política" de su legislación y de su práctica, es decir no literalmente.

En el artículo 3 se rebajaron los compromisos mínimos obligatorios para cada Estado firmante y se extendió la aplicación de la Carta a lenguas oficiales poco difundidas en el conjunto o en una parte del Estado, una vieja aspiración de los irlandeses. Al lado de algunas precisiones, como por ejemplo, que las disposiciones de la Carta no se aplicarán si la normativa vigente en el Estado correspondiente es más favorable para la lengua afectada, el nuevo artículo 5 insiste en que las actividades derivadas de la Carta no pueden atentar contra el principio de la integridad territorial de los Estados.

Los recortes afectaron también a la Parte II. Por ejemplo, las lenguas minoritarias pasan de ser un "atributo de una comunidad" a ser una "expresión de la riqueza cultural" (art. 7.1.a). Las medidas discriminatorias dejan de ser una vulneración de los Derechos del Hombre (art. 7.1.d). Las relaciones entre comunidades que practiquen una misma lengua minoritaria o una distinta también minoritaria sólo podrán ser establecidas en el marco de un mismo Estado, mientras que el texto anterior no ponía límites (art. 7.1.f). Al definir los Estados su política lingüística y al aplicarla a las lenguas sin territorio, "la naturaleza y el alcance de las medidas serán determinadas de una manera flexible" y se tendrán en cuenta "las necesidades y los deseos" de la población, respetándose "sus tradiciones y sus características".

El Comité de Ministros volvió a redactar prácticamente toda la Parte III que contiene los compromisos gubernamentales en materia de enseñanza, justicia, administración, medios de comunicación, actividades y equipamientos culturales, vida económica y social e intercambios fronterizos. En enseñanza, por ejemplo, el texto de la Asamblea pedía el uso de la lengua minoritaria "principalmente o totalmente en el nivel pre-escolar y primario, por lo menos cuando lo desearan las familias". El Comité de Ministros añadió que se tendrá en consideración "la situación de cada lengua" y que "haya un número juzgado suficiente de alumnos". La voluntariedad y un número mínimo son condicionantes que se repiten para el resto

de niveles educativos. El informe de los Estados al Secretario General del C. de E. sobre la aplicación de la Carta pasa de ser bianual a trianual⁴⁰.

4.2.3.15: La Conferencia de Palermo

Mientras el Comité de Ministros del C. de E. rehacía la Carta a su conveniencia, los días 25 y 26 de abril de 1990 se reunió en Palermo (Italia) una Conferencia de 31 Ministros Europeos de Cultura⁴¹. El tema principal de la Conferencia fue "La sociedad multicultural: un desafío para las políticas culturales". Todos los ministros asistentes reconocieron que todos sus países respectivos se enfrentaban a la cuestión de las minorías presentes en sus territorios. Sin embargo, tanto si se trataba de minorías procedentes de otros países europeos, como de países no europeos, como de minorías regionales propias, "fueron reconocidas por parte de todos los asistentes como un enriquecimiento que hay que cultivar".

Conscientes de la urgencia con la que hay que encarar este problema y de la necesidad de buscar un acercamiento a escala europea en esta materia, los Ministros pidieron al C. de E. poner en marcha "un proyecto sobre la sociedad multicultural". Esta podría revestir la forma tanto de una Declaración como de un Código de buena conducta que pregonaría "los valores de las culturas minoritarias dentro del respeto a la cohesión social

y a las reglas del juego democrático".

En el ámbito concreto de las lenguas, la Conferencia expresó sus deseos de que los trabajos en curso en el C. de E. "acerca de una Convención sobre las lenguas minoritarias y regionales en Europa fueran acelerados"⁴².

4.2.4: El Protocolo Adicional a la Convención Europea de los Derechos Humanos

Paralelamente a las dificultades que ponía el Comité de Ministros del C. de E. a la hora de reconocer los derechos colectivos de las minorías nacionales y lingüísticas que la Asamblea Parlamentaria había proclamado a través de la Recomendación 1134 (1990), de la Recomendación 1177 (1992) y de la propia CELRM, la Asamblea Parlamentaria aprobó la Directiva 474 (1992) que planteaba la elaboración de un protocolo adicional a la Convención Europea de los Derechos del Hombre sobre dichos derechos de las minorías.

Este protocolo preparado por M. Worms⁴³, fue aprobado por la Asamblea Parlamentaria el 1 de marzo de 1993 y contiene 20 artículos de obligado cumplimiento para todos los Estados miembros del C. de E.. Se estableció así un marco jurídico para la protección de las minorías, en un momento histórico de fuertes turbulencias para ellas sobre todo en la Europa Central

y Oriental⁴⁴.

La ampliación de la Convención enlazaba claramente con la CELRM por medio de una enmienda que Lluís M^a de Puig introdujo al artículo 7, según la cual "toda minoría nacional tiene el derecho al reconocimiento y a la protección de su lengua materna, en tanto que elementos de identidad y de riqueza cultural, a fin de salvaguardarla"⁴⁵. En términos genéricos, se prohíbe cualquier tipo de discriminación "por razones étnicas, religiosas o culturales".

4.2.4.1: El mandato de los Jefes de Estado y de Gobierno

Esta vez la resolución de la Asamblea Parlamentaria no cayó del todo en saco roto. El 9 de octubre de 1993 la I Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros del C. de E. encargó al Comité de Ministros que impulsara los trabajos de redacción del citado Protocolo Adicional en el área cultural, además de elaborar medidas de confianza, de apoyo a la negociación y para el cumplimiento de los tratados que las afecten. Todo ello culminaría en la presentación de un convenio-marco que precisara los principios necesarios para la protección de las minorías. Esta decisión no resultó fácil, ya que países como Francia o Gran Bretaña se opusieron a extender los derechos de las minorías a un nivel político⁴⁶.

Sin embargo, el encargo al Comité de Ministros no fijaba ninguna fecha, ni las características esenciales del documento, lo cual llevó a algunos observadores a calificar de "vago" el mandato, sobre todo después de que la Conferencia no se pusiera de acuerdo sobre una definición de las minorías nacionales⁴⁷. Para algunos analistas, como Aureli Argemí, la conclusión era más dura aún: ser más precisos y comprometidos en el tema de las minorías nacionales obligaría a los gobiernos europeos a revisar su interpretación de los derechos humanos. "Dar la cara implicaría que los representantes de los gobiernos estatales criticaran el conjunto de la "doctrina oficial" sobre los derechos humanos colectivos, con el más que probable hundimiento de tantas teorías que sostienen el orden establecido..."⁴⁸

Según explicó en el Senado el ministro de Asuntos Exteriores español, Javier Solana, la enorme complejidad que encierra el trato a las minorías, especialmente después de la caída del muro de Berlín en 1989-90, obligaba al C. de E. a actuar coordinadamente con la Comunidad Europea y con la CSCE. Para el gobierno español el titular de los derechos humanos es solamente el individuo. Ahora bien, ningún individuo puede ser discriminado en el ejercicio de sus derechos por su pertenencia a una minoría, ni es aceptable que se pretenda una discriminación positiva por dicha pertenencia. En tercer lugar, el ejercicio de determinados derechos fundamentales por individuos integrantes de una minoría, nacional o no, puede

justificar, no obstante la petición de que se atiendan por los poderes públicos determinadas necesidades colectivas⁴⁹.

4.2.4.2: El Convenio-Marco, aprobado por el Comité de Ministros

Finalmente el 10 de noviembre de 1994 el Comité de Ministros del C. de E. reunido en Estrasburgo aprobó el Convenio-Marco para la Protección de las Minorías⁵⁰. El texto quedó abierto a la firma de los 33 Estados miembros a partir del 1 de enero de 1995, aunque el artículo 27 permite al Comité de Ministros invitar a Estados no miembros a firmar el Convenio. El 1 de febrero de 1995 21 países⁵¹, procedieron a su firma en la sede del C. de E. en Estrasburgo. El Congreso de los Diputados español ratificó el documento el 11 de mayo de 1995 por unanimidad⁵². "Lo que ha hecho el C. de E. fundamentalmente ha sido establecer una doctrina, una doctrina que me parece importante, la doctrina según la cual se renocen los derechos de las minorías y según la cual las minorías reconocen la lealtad que deben a las mayorías. Este es el juego... de una democracia preventiva, de lo que definió la Cumbre de Viena como seguridad democrática, es decir una serie de compromisos jurídicos, de normas que aseguren y garanticen el buen funcionamiento de la democracia en el sentido del respeto de las mayorías y de las minorías. Ello, sin duda, va a coadyuvar a los procesos de paz y estabilidad y de ahí su importancia

histórica", afirmó con ocasión de aquel debate Lluís María de Puig⁵³.

4.2.4.3: El Convenio-Marco final

El texto final del Convenio-Marco para la Protección de las Minorías considera en su preámbulo que los acontecimientos europeos han demostrado que "la protección de las minorías nacionales es esencial para la estabilidad, la seguridad democrática y la paz en el Continente" y que una sociedad pluralista y verdaderamente democrática debe "no solamente respetar la identidad étnica, cultural, lingüística y religiosa de cualquier persona perteneciente a una minoría nacional, sino que además debe crear las condiciones propias que permitan expresar, preservar y desarrollar esta identidad".

Además de consagrar los derechos generales de las minorías nacionales, el Convenio-Marco especifica los siguientes derechos lingüísticos de los miembros de las minorías y deberes de las Partes signatarias:

- a conservar y desarrollar su cultura, así como a preservar los elementos esenciales de su identidad, como pueden ser la religión, la lengua, las tradiciones y el patrimonio cultural (art. 5.1);

- a no ser asimiladas y a ser protegidas de cualquier acción destinada a la asimilación (art.5.2);
- las Partes deberán favorecer el respeto y la comprensión mutuas, así como la cooperación entre todas las personas residentes en su territorio, cualquiera que sea su identidad étnica, cultural, lingüística o religiosa, especialmente en el terreno de la educación, de la cultura y de los medios de comunicación (art.6.1);
- las Partes deberán proteger a aquellas personas que pudieran ser objeto de actos de discriminación, de hostilidad o de violencia a causa de su identidad étnica, cultural, lingüística o religiosa (art.6.2);
- el derecho a la libertad de expresión comprende la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas en la lengua minoritaria, sin injerencias de las autoridades públicas y sin consideraciones fronterizas (art.9.1);
- ello no obsta para que las Partes puedan someter a un régimen de autorización, no discriminatorio y fundamentado en criterios objetivos, las empresas de radio, televisión y cine (art. 9.2);
- las minorías nacionales tienen derecho a disponer de medios de comunicación propios y acceso a los estatales, en el marco legislativo existente (art. 9.3 y 9.4);
- se reconoce el derecho a utilizar libremente y sin trabas la lengua minoritaria tanto en privado como en público, tanto oralmente como por escrito (art. 10.1);
- las Partes deberán asegurar, en la medida de lo posible, las condiciones que permitan utilizar la lengua minoritaria en las

relaciones entre las personas y las autoridades administrativas (art. 10.2);

- se reconoce el derecho a ser informado, en el período de tiempo más corto posible, en una lengua que pueda entender, las razones de su detención, la naturaleza de la acusación que se le formula, así como a defenderse en esta lengua, y si fuere necesario con ayuda de un intérprete (art. 10.3);

- se reconoce el derecho a utilizar el nombre y apellidos en la lengua minoritaria (art. 11.1);

- se reconoce el derecho a presentar documentos, inscripciones y otras informaciones en la lengua minoritaria (art. 11.2);

- las Partes deberán respetar las denominaciones tradicionales locales, el nombre de las calles, y otras indicaciones topográficas destinadas al público en la lengua minoritaria, cuando haya una demanda suficiente para tales indicaciones (art. 11.3);

- las Partes deberán promover el conocimiento de la cultura, la historia, la lengua y la religión de sus minorías nacionales, así como las de la mayoría (art. 12.1);

- las Partes deberán promover los intercambios de profesores y escolares de comunidades distintas, y garantizar la igualdad de oportunidades para el acceso a todos los niveles educativos (art. 12.2 y 12.3);

- se reconoce el derecho de las minorías a un sistema educativo propio y a dirigir sus centros educativos privados, sin que ello implique obligaciones financieras de los Estados (art. 13.1 y 13.2);

- se reconoce el derecho de cualquier persona a aprender su lengua minoritaria y a recibir enseñanza en esta lengua, sin perjuicio del aprendizaje de la lengua oficial (art. 14.1, 14.2 y 14.3);
- y se reconoce el derecho a mantener contactos pacíficos transfronterizos con comunidades que tengan en común una identidad étnica, cultural, lingüística o religiosa, o un patrimonio cultural (art. 17).

El Convenio-Marco indica que los Estados signatarios deberán informar a la Secretaría General del C. de E. de las medidas legislativas adoptadas en aplicación de los principios adoptados. Transcurrido un año de la firma, la información deberá ser periódica y por propia iniciativa de las Partes o a petición del Comité de Ministros, que podrá ser asesorado por un consejo consultivo.

4.3: El tratamiento de las minorías lingüísticas en el PE: Los primeros antecedentes

El PE ha sido, junto al C. de E., la institución que más documentos ha emitido sobre las minorías lingüísticas. Poco a poco el PE ha ido fijando una auténtica política lingüística para con las minorías de la CE, de tal modo que las lenguas de Estado puedan convivir perfectamente con las minoritarias sin rupturas en el ejercicio de los derechos democráticos y comunitarios de todos los colectivos. Las sucesivas ampliaciones de 1973, 1986 y 1995 no han desvirtuado estas declaraciones, sino que por el contrario les han dado un mayor realce y una mayor profundidad al incorporar todos los países candidatos, excepto Portugal, nuevas minorías a la Comunidad.

En el transcurso de su sesión plenaria de 26 de octubre de 1979, el PE decidió enviar a la Comisión para la Juventud, la Cultura, la Educación, la Información y los Deportes una proposición de resolución presentada por John Hume y otros diputados sobre la creación de una carta comunitaria para las lenguas y las culturas regionales⁵⁴ para su debate en profundidad. Recibido el encargo del pleno, la Comisión nombró ponente de este documento al diputado Gaetano Arfé en su sesión de 19 de diciembre de 1979. Para ello se partía, además de la resolución Hume, de otra resolución sobre el mismo tema debatida en el pleno el 28 de septiembre de 1979⁵⁵ y enviada a la Comisión de Asuntos Jurídicos y de una tercera que se

presentó al PE el 15 de febrero de 1980 por parte de Joachim Delsass y otros sobre la protección de los grupos étnicos y las minorías lingüísticas⁵⁶. El 24 de febrero de 1981 Gaetano Arfé presentó a la Comisión un proyecto de Carta Comunitaria para las Lenguas y las Culturas Regionales y otra Carta sobre los Derechos de las Minorías Etnicas, proyecto que fue aprobado por 8 votos a favor y 1 en contra.

4.3.1: La Resolución Hume

Considerada habitualmente como la primera resolución específica sobre las minorías lingüísticas y la que desencadenó las siguientes, la presentada por John Hume consta de un interesante preámbulo de seis puntos que fija la filosofía de la propuesta. Dicha base ideológica aparece repetida con mayor o menor intensidad en todos los documentos posteriores.

El objetivo último es, de acuerdo con el Tratado de Roma, "la unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa" y esta unión debe partir de la "diversidad de los pueblos europeos", la cual constituye "una de las fuentes principales de la vitalidad, la riqueza y la originalidad de la civilización europea". En aquellos momentos, la CEE contaba con unos 30 millones de habitantes que tenían como lengua materna alguna de las minoritarias o regionales, cifra que aumentaría "considerablemente" a raíz de la ampliación ya solicitada por

otros Estados. La Resolución aplaude y se apoya tanto en las últimas medidas adoptadas por algunos Estados a favor de las lenguas como en algunas declaraciones anteriores del propio PE, especialmente en el terreno de la educación⁵⁷. La Resolución señala asimismo que distintos miembros de la Comisión Europea se habían expresado a favor de la preservación de la diversidad cultural de Europa.

Por ello, además de solicitar la Carta la Resolución pidió un informe de la Comisión sobre sus acciones a favor de las minorías lingüísticas, sobre las medidas prácticas posibles y los instrumentos nuevos que necesitaría la Comunidad para formular "una verdadera política de apoyo a las lenguas y las culturas regionales".

4.3.2: La Resolución Arfé

El 16 de octubre de 1981 el PE dio luz verde a la Resolución Arfé, que establecía los principios generales de la Carta solicitada por el pleno de octubre de 1979. Por estas mismas fechas la Comisión de Cultura del C. de E. aprobó las bases para el proyecto de Carta que estaba preparando en paralelo al PE.

El documento señala "el vigoroso renacimiento de los movimientos animados por las minorías étnicas y lingüísticas,

que desean profundizar y ver reconocidas las razones de su identidad histórica", pero este renacimiento es "un signo de vitalidad de la civilización europea y por ello una fuente de riqueza". A continuación, apela a las declaraciones internacionales sobre derechos humanos, entre ellas las del C. de E., y a la Declaración de Oslo de 1976 para proclamar el derecho de estas culturas "a expresarse libremente y a expresar su cultura", principio, por otra parte, reconocido por todos los gobiernos de la Comunidad que lo han trasladado a su legislación y han acometido programas de actuaciones. La identidad cultural constituye "una de las necesidades psicológicas no materiales más importantes y la autonomía no puede ser considerada como "una solución de recambio para la integración entre pueblos y tradiciones distintas", sino como "una posibilidad de orientar personalmente el proceso necesario de creciente inter-comunicación"

Para salvaguardar el patrimonio de lenguas y culturas hay que fortalecer las condiciones apropiadas para su desarrollo cultural y económico y atendiendo distintos antecedentes del propio PE, la Resolución propone a los gobiernos nacionales y a los poderes locales y regionales llevar a cabo una política que se inspire en estos principios.

En el terreno de la educación la Resolución Arfé insta a autorizar y a promover la enseñanza de las lenguas y las culturas regionales, "desde la escuela maternal hasta la

universidad". Es especialmente importante que los niños puedan utilizar su lengua materna en las escuelas maternas, así como que se autorice en todos los niveles educativos la enseñanza de la literatura y de la historia de la comunidad afectada.

En el terreno de los medios de comunicación se pide el acceso a la radio y a la televisión locales para conectar las distintas comunidades y preparar especialistas en información cultural. También subraya el derecho de las minorías a recibir subvenciones y ayudas proporcionales a las que reciben las mayorías.

En el terreno de la vida pública y de las relaciones sociales la Resolución solicita que se confiera a los poderes locales y regionales "una responsabilidad directa en la materia", que se favorezca "la mayor correlación posible entre regiones culturales y estructuras geográficas de los poderes locales", y que se garantice a las minorías la posibilidad de utilizar su propia lengua en sus relaciones con los poderes regionales y los órganos judiciales.

En segundo lugar, la Resolución se dirige a la Comisión para pedirle información sobre el comportamiento de la población de los Estados miembros ante las minorías lingüísticas y a montar con cargo a los Fondos estructurales proyectos de educación multilingüe para asegurar la supervivencia de dichas culturas y abrirlas a la influencia exterior. El objetivo es arbitrar

una verdadera política cultural comunitaria que "recoja las aspiraciones y los deseos de todas las minorías étnicas y lingüísticas que han puesto su esperanza en Europa y sus instituciones", para lo que será preciso "revisar todas las disposiciones legislativas o prácticas de la CE discriminatorias hacia las lenguas minoritarias"⁵⁸.

4.3.2.1: Las resoluciones consecuencia de la Resolución Arfé

Como si fuera una señal de partida, la Resolución Arfé abrió una etapa de unos seis años en la que el PE examinó en repetidas ocasiones la situación de las lenguas minoritarias, bien sea en términos generales, bien sea para tratar de problemas concretos o de lenguas específicas. Esta actividad desembocaría en 1987 en la llamada Resolución Kuijpers.

La lista de resoluciones aprobadas durante este período es la siguiente:

- Resolución sobre las Medidas en Favor de las Lenguas y las Culturas Minoritarias (11 de febrero de 1983)⁵⁹;
- Proposición de Resolución sobre los Derechos Lingüísticos de Cataluña Norte (1985)⁶⁰;
- Proposición de Resolución sobre la Elaboración de un Derecho Europeo para los Grupos Etnicos (1984)⁶¹;

- Proposición de Resolución sobre la Defensa y la Protección de las Lenguas y las Culturas Regionales en la CE (1985)⁶²; - Proposición de Resolución sobre el Reconocimiento de los Derechos de las Minorías y la Revalorización de su Cultura (1985)⁶³;
- Proposición de Resolución sobre el Hecho de que la Comisión no Haya Actuado según una Resolución sobre una Carta Comunitaria de Lenguas y Culturas Regionales y una Carta de los Derechos de las Minorías Etnicas (20 de marzo de 1986)⁶⁴;
- Proposición de Resolución sobre el Reconocimiento de las Radios Libres (1986)⁶⁵;
- Proposición de Resolución sobre el Deseo del Ministro de Bienestar, Salud Pública y Cultura de los Países Bajos de suprimir la Ayuda Concedida al "Algemeend Verbond" (Alianza General Holandesa) y las Consecuencias Nefastas de esta Medida para la Cooperación Cultural Transfronteriza (5 de febrero 1987)⁶⁶;
- Proposición de Resolución sobre una Televisión Frisona en Frisia (26 de julio de 1986)⁶⁷;
- Proposición de Resolución sobre la Creación de Institutos de Estudios Lingüísticos para las Lenguas de Poca Difusión (15 de febrero de 1987)⁶⁸;
- Proposición de Resolución sobre los Obstáculos para la Utilización del Catalán en la Universidad y en la Televisión Valencianas (26 de julio de 1987)⁶⁹;
- Proposición de Resolución sobre la Ayuda a los Institutos y Asociaciones de Estudios Lingüísticos para la Defensa de las

Lenguas de Poca Difusión (26 de junio de 1987)⁷⁰;

- Proposición de Resolución sobre el Carácter Injusto de las Medidas Disciplinarias Tomadas por el Poder Central Francés contra un Funcionario, Mr. Leonetti, por Haber Utilizado Denominaciones Corsas para Nombrar a Personas y Lugares (23 de septiembre de 1989)⁷¹;

- Proposición de Resolución sobre un Derecho Europeo de los Grupos Etnicos y el Ejercicio de los Derechos Democráticos Fundamentales (17 agosto de 1987)⁷²;

- Proposición de Resolución sobre la Integración de las Escuelas Bilingües Franco-Vascas Gestionadas por la Asociación Seaska (26 de junio 1987)⁷³;

- Proposición de Resolución sobre la Promoción de las Lenguas Minoritarias de la CEE (26 de junio de 1987)⁷⁴;

En ocasiones se trataba de un recordatorio a la Comisión y al Consejo de Ministros para que prosiguiera e intensificara sus esfuerzos en sus proyectos pilotos en pro de las lenguas minoritarias. En otras, se planteó la posibilidad de crear un código legal comunitario para las minorías étnicas, código que incluiría el uso de las lenguas minoritarias. Se realizaron distintos llamamientos a los Estados para que eliminaran sus medidas discriminatorias e incluso a la CE para que incorporara algunas de estas lenguas a sus actividades, especialmente las informativas, y se debatieron asimismo numerosas cuestiones concretas relacionadas con el uso de lenguas minoritarias.

4.3.2.2: El balance de la Resolución Arfé en la CE

En octubre de 1986 un documento de trabajo de la Comisión de la Juventud, añadido posteriormente al Preámbulo del Informe Kuijpers, hacía un balance de las medidas comunitarias tomadas durante los cinco años anteriores a partir de la Resolución Arfé.

En primer lugar, señalaba la creación en mayo de 1982 de la Oficina Europea para las Lenguas Menos Desarrolladas con sede en Dublín y con iniciativas todavía "modestas", como la publicación de un boletín y la organización de una serie de visitas de estudio.

En segundo lugar, en 1983 el PE creó un nuevo apartado presupuestario para sufragar acciones comunitarias en favor de las minorías lingüísticas.

La Oficina había elaborado varios estudios sobre la enseñanza de dichas lenguas en niveles pre-escolares y algunos de estos estudios habían tenido ya una aplicación práctica en la enseñanza del frisón en escuelas primarias de los Países Bajos. Con el presupuesto de 1985 la Comisión financió otros dos proyectos pilotos, la creación de un banco de datos de la lengua corsa y la difusión de material didáctico adaptado a las nuevas tecnologías de la información en lengua escocesa. Además se organizaron varios coloquios entre jóvenes procedentes de

regiones bilingües, destacando la de septiembre de 1985 en Bretaña y la de julio/agosto en Aberystwyth.

El informe destaca también el encargo hecho en 1982 por la Comisión al Istituto della Enciclopedia Italiana con el auxilio del Bord na Gaeilge para redactar un estado de la cuestión de las lenguas minoritarias en la CEE. La Association for Film and Television in Celtic Countries fue encargada a su vez de estudiar el impacto de las nuevas tecnologías en la enseñanza y la formación profesional en las regiones periféricas y poco pobladas, muchas de ellas bilingües⁷⁵.

4.3.3: Resolución del PE sobre las Lenguas y Culturas de las Minorías Regionales y Étnicas de la Comunidad Europea o Informe Kuijpers

En sus reuniones de 20 de septiembre de 1985 y de 20 de marzo de 1986 la Comisión de Juventud, Cultura, Educación, Información y Deporte decidió confeccionar un único dictamen partiendo de las propuestas de resolución anteriormente citadas y nombrando ponente al diputado belga flamenco Willy Kuijpers. Entre el 30 de abril de 1986 y el 26 de junio de 1987 la Comisión celebró seis reuniones para debatir el tema. Finalmente el 23 de septiembre de 1987 fue aprobado el dictamen por 15 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones.

Dicho dictamen fue sometido al pleno del PE y aprobado en votación a mano alzada el 30 de octubre de 1987. En esta sesión se hicieron diversas intervenciones en euskera, catalán, luxemburgués y flamenco⁷⁶. Haciéndose eco de la oposición de algunos diputados al dictamen, la presidenta de la Comisión para la Juventud, la Cultura, la Educación y el Deporte, la irlandesa Eileen Lemass, intentó aplazar el debate en el Pleno de la Cámara. Además, la pertenencia de Willy Kuijpers al grupo parlamentario "Arco Iris", de mayoría ecologista y alternativa, suscitó recelos entre los conservadores. La retirada de algunas enmiendas y el apoyo final de los grupos Liberal y Demócrata-cristiano, así como del socialista permitió el debate⁷⁷.

4.3.3.1: El Preámbulo del Informe Kuijpers

La Resolución Kuijpers va precedida por una importante exposición de motivos, en la que se establecen sus principios doctrinales. Así, después de lamentar "la falta de medidas globales en esta materia", recuerda los ya numerosos antecedentes internacionales en el reconocimiento de los derechos de las minorías. La Sociedad de Naciones ya dictó sentencias de signo positivo, doctrina recogida y reafirmada por las Naciones Unidas, aunque éstas "han preferido evitar el referirse expresamente al problema de la protección de las minorías". También recuerda las declaraciones efectuadas por el C. de E. desde la Convención Europea para la Protección de los

Derechos del Hombre y las Libertades Fundamentales, y añade otras declaraciones de la CSCE e incluso la Carta Canadiense de los Derechos y Libertades de 1982.

El capítulo III repasa las medidas ya adoptadas por la Comunidad Europea, mientras que el IV explica las medidas que se pueden prever para la protección de las minorías. Por primera vez se alega que el desarrollo económico del territorio sobre el que se sustenta una de estas lenguas es un factor esencial para su normalización. El documento llama a esta actitud "una política europea equilibrada fundamentada en una base regional y que lucha contra el éxodo rural". Lo cierto es que las lenguas más amenazadas son las usadas por poblaciones económicamente atrasadas, y viceversa. Por otra parte, el Informe reclama como segunda condición que los Estados reconozcan a su(s) minoría(s) en sus Constituciones, ajustándose cada uno lógicamente a su derecho nacional.

4.3.3.2: El contenido del Informe Kuijpers

Partiendo de distintas declaraciones anteriores, el informe constata una vez más que "subsisten numerosos obstáculos a la realización por parte de las minorías nacionales y lingüísticas de su identidad cultural y social, y que los comportamientos con respecto a esas minorías y sus problemas quedan frecuentemente impregnados de desconocimiento y de

incomprensión, léase en algunos casos de discriminación". Ahora bien, en su punto F añade un aspecto hasta entonces inédito y es que "las condiciones económicas regionales condicionan las posibilidades de expresión y desarrollo de la culturas locales, de modo que las medidas correspondientes se deben elaborar en el marco de una política regional, europea y equilibrada que parta de una base regional y que frene el éxodo de la periferia hacia el centro".

Por todo ello, pide la aplicación "total" de los principios e iniciativas aprobados en las Resoluciones de 16 de octubre de 1981 y de 11 de febrero de 1983, y que los Estados miembros "reconozcan a sus minorías dentro del marco de su orden jurídico, creando así las condiciones de conservación y de desarrollo de las culturas y de las lenguas de las minorías regionales y étnicas".

A continuación los puntos 4 a 9 de la Resolución desarrollan una lista de 24 medidas prácticas respecto a la enseñanza, los trámites administrativos y jurídicos, los medios de comunicación, la infraestructura cultural, la vida socioeconómica y la cooperación transfronteriza. La Resolución incluye también un paquete de 6 medidas específicas para la Comisión Europea, como por ejemplo apoyo financiero. En cualquier caso, en el apartado 12 se recaba de parte de la Comisión y del Consejo de Ministros un apoyo para la Oficina Europea para las Lenguas Menos Desarrolladas concretado en

cuatro medidas. El presupuesto comunitario de 1988 debería consignar "un mínimo de 1.000.000 de Ecus" para acciones en favor de las lenguas minoritarias⁷⁸.

4.3.3.3: Documento de Trabajo de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos Cívicos

Durante los preparativos del Informe Kuijpers la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos Cívicos elaboró un documento de trabajo, en el que se plasman importantes consideraciones de orden jurídico, legal y político. Estas reflexiones son señaladas como la base ideológico-política de la futura Carta Comunitaria y también como sus límites. Actuó como ponente el conde Stauffenberg y el documento fue aprobado por la Comisión el 12 de mayo de 1987.

El texto reconoce que "las persistentes discriminaciones de los grupos étnicos han originado conflictos políticos graves, que con frecuencia han degenerado en acciones violentas". En consecuencia, una actitud más positiva a escala europea "ofrecería la posibilidad de canalizar los conflictos nacientes por medio de procedimientos jurídicos y aportar así soluciones legítimas a tales conflictos". Las instituciones comunitarias se han pronunciado varias veces sobre esta cuestión, pero con contenidos muy generales, de modo que la próxima resolución⁷⁹ debía contener "de manera muy detallada los puntos esenciales

para una futura Carta general de los grupos étnicos".

La Comisión señaló dos limitaciones de partida:

- a) separar los derechos de los grupos étnicos tradicionalmente asentados en sus regiones de origen y que forman parte, parcial o totalmente de un Estado, de los problemas de los inmigrantes, que son de origen étnico extranjero;
- y b) tratar las relaciones jurídicas entre los grupos étnicos y sus miembros y por otra parte entre los Estados miembros y la Comunidad. Por lo tanto, la resolución no podría afectar a la estructura constitucional de los Estados miembros, ni establecer reglas relativas al derecho a la autodeterminación (en el sentido de una colectividad nacional) de los pueblos o su aplicabilidad.

Los derechos de las minorías que tenían que ser reconocidos por la resolución eran:

- a) los existenciales, es decir los referentes al reconocimiento y la protección de los grupos étnicos y su individualidad cultural y lingüística, prohibiendo medidas coactivas y discriminaciones;
- b) los políticos, es decir los que garanticen la participación política de los grupos étnicos en el marco del proceso de decisión democrático y el derecho a residir en su región de origen tradicional;

c) los culturales, en particular el derecho a utilizar la propia lengua y a tener enseñanza en ella, a disponer de indicaciones topográficas en dicha lengua, y el derecho a mantener la tradición, las costumbres y la historia específicas del grupo.

y d) sociales y económicos, es decir los que ofrezcan seguridades de igualdad de trato con la población mayoritaria y de aproximación a los niveles económicos y sociales.

Como garantías concretas al ejercicio de estos derechos el documento recomienda:

a) a nivel nacional:

i) el reconocimiento oficial de los grupos étnicos por parte del Estado;

ii) la concesión a los miembros de los grupos étnicos de derechos individuales directamente aplicables y que se puedan hacer valer por la vía judicial y administrativa;

iii) la concesión de derechos colectivos que los representantes de los grupos étnicos puedan hacer valer por vía judicial o administrativa;

y iv) la creación de la figura del Defensor del Pueblo a nivel nacional;

b) en el marco de la CE:

i) la institución de un procedimiento europeo de reconocimiento de los grupos étnicos;

ii) la adopción de directivas en el marco de los Tratados de la CE;

y iii) la constitución de una comisión de expertos encargada de examinar la situación de los grupos étnicos a escala nacional sobre la base de los informes periódicos que los Estados habrán de presentar, de investigar, sobre la base de comunicaciones, y de elaborar propuestas de solución en caso de conflicto⁸⁰.

4.3.4: El catalán, lengua de la Comunidad Europea

De todas las lenguas no de Estado de la CE, el catalán fue la primera, y hasta el presente la única, en obtener en 1990 un status legal dentro de las instituciones comunitarias⁸¹. La presión combinada de las instituciones regionales afectadas, especialmente los parlamentos de Cataluña y de las Islas Baleares, y de varios eurodiputados catalano-parlantes que contaron con el apoyo de otros procedentes de áreas con lenguas minoritarias, permitió la aprobación de esta resolución, sin duda importante para esta lengua, pero también como precedente.

4.3.4.1: Los antecedentes del luxemburgués y el irlandés

El Consejo de Ministros de la CE aprobó en 1958 un reglamento, según el cual se deja en manos de este organismo el régimen lingüístico de la Comunidad⁸². Dicho reglamento ha sido modificado a raíz de cada ampliación, de modo que en 1990 declaraba que "las lenguas oficiales y las lenguas de trabajo de las instituciones de la Comunidad serán el alemán, el castellano, el danés, el francés, el griego, el inglés, el italiano, el neerlandés y el portugués". Conviene subrayar que, de acuerdo con este texto las lenguas oficiales y las de trabajo de la CE se confunden.

Por otra parte, el artículo 6 de dicho reglamento dispone que "las instituciones podrán determinar las modalidades de aplicación de este régimen lingüístico en sus reglamentos internos", mientras que el 8 precisa que "los Estados miembros donde existan varias lenguas oficiales, el uso de una lengua se regirá, a petición del Estado interesado, por las normas generales de la legislación de dicho Estado".

Partiendo de esta normativa era posible que lenguas minoritarias, aunque de Estado, como el luxemburgués y el irlandés figuraran entre las oficiales de la CE y, sin embargo, no estaban incluídas en la lista.

La justificación proporcionada por el propio PE fue que cuando el 24 de febrero de 1984 la Cámara de Diputados de Luxemburgo votó la ley de régimen lingüístico, no mencionó la inclusión del luxemburgués en el reglamento de la CE. Por otra parte, dado que Luxemburgo reconoce tres lenguas oficiales, con el predominio del francés en los actos legislativos y sus reglamentos de ejecución, lingüísticamente se halla perfectamente representado en los organismos comunitarios a través del alemán y del francés.

Por lo que respecta al irlandés el Acta de Adhesión de Dinamarca, Gran Bretaña y de Irlanda de 1973 establece que el derecho comunitario se publicará también en inglés y en danés, pero no dice nada del irlandés, reservado sólo para los Tratados existentes que "serán auténticos en las mismas condiciones que los textos originales de los Tratados"⁸³. Por lo tanto, el irlandés tampoco obtuvo la consideración de lengua de trabajo de las instituciones europeas⁸⁴.

4.3.4.2: La Resolución Reding sobre la situación de las lenguas en la CE y la de la lengua catalana

La situación del catalán ya se había discutido en distintas ocasiones en el PE. El diputado Xavier Rubert de Ventós presentó en 1985 una propuesta de resolución sobre los obstáculos a la utilización del catalán en la universidad y en

la televisión estatal⁸⁵. En 1987 los diputados Carles Gasòliba y Josep Antón Duran i Lleida presentaron otra propuesta de resolución sobre la utilización del catalán en determinados ámbitos de actividad de las instituciones europeas⁸⁶. Este mismo año el diputado Antoni Gutiérrez Díaz presentó otra propuesta de resolución sobre la utilización de las lenguas gallega, vasca y catalana en la difusión de los documentos de base de la Comunidad Europea⁸⁷.

Con estos antecedentes en 1988 y 1989 los Parlamentos autonómicos de Cataluña y de las Islas Baleares presentaron sendos escritos a la Comisión de Peticiones del PE solicitando que la lengua catalana fuera incluida entre las oficiales de la CE⁸⁸. El 30 y 31 de agosto de 1989 la Comisión decidió elaborar un dictamen conjunto sobre ambas peticiones y nombró ponente a la Sra. Vivian Reding. Dicho dictamen fue aprobado por unanimidad de la Comisión el 21 de junio de 1990 y debatido en el pleno del PE de los días 10 y 11 de diciembre. Rechazadas todas las enmiendas presentadas, la resolución fue aprobada por 188 votos a favor y 3 abstenciones.

El texto de la Resolución Reding empieza señalando que la CE "constituye el único órgano entre los internacionales que ha adoptado el principio del multilingüismo integral", por lo que dispone de 10 lenguas oficiales. Ahora bien, el uso de 9 lenguas de trabajo "comporta costes no despreciables, da origen a dificultades y sobrecargas técnicas, que pueden verse

acrecentadas en su caso, a consecuencia de nuevas adhesiones". El "multilingüismo integral" tiene, a pesar de todo efectos positivos, puesto que los textos legislativos del PE pueden verse "en las lenguas de todos los países en cuyos sistemas jurídicos estas medidas deberán integrarse".

El punto D de la Resolución reconoce la importancia y la implantación de la lengua catalana, "y de la que hace uso efectivo y continuado la mayor parte de la población de un territorio de 10 millones de habitantes"⁸⁹, así como su carácter oficial. Sin embargo, la Cámara advierte que "no es posible acceder a una aplicación completa del principio de igualdad de todas las lenguas de los países comunitarios, pero por lo que respecta a la lengua catalana existen posibilidades de utilización que pueden ponerse en práctica en el momento actual".

Estos usos son los siguientes:

- i) la publicación en catalán de los Tratados y de los textos fundamentales de las Comunidades;
- ii) la difusión en catalán de la información pública relativa a las instituciones europeas por todos los medios de comunicación;
- iii) la inclusión del catalán en los programas elaborados por la Comisión para el aprendizaje y el perfeccionamiento de las lenguas europeas;

y iiii) la utilización del catalán en las relaciones orales y escritas con el público en la(s) oficina(s) de la Comisión de las Comunidades Europeas en las Comunidades Autónomas en cuestión.

Al mismo tiempo, y de acuerdo con el régimen lingüístico propio, se pide que "los testigos y expertos puedan ya utilizar la lengua catalana en el Tribunal de Justicia de la Comunidad, si no pueden expresarse de modo conveniente en una de las lenguas de procedimiento del Tribunal"⁹⁰.

En el debate en el pleno todos los intervinientes mostraron su acuerdo y su satisfacción por el alto consenso logrado, aunque algunos lamentaron que fuera de mínimos. El diputado Xavier Rubert de Ventós, por ejemplo, reprochó a la Cámara que no incluyera "el uso del catalán en las reuniones de la Comunidad en territorio de habla catalana, ni su uso eventual en el pleno". En respuesta el comisario Rippa di Meana recordó que la petición para que el catalán fuera propuesto como lengua oficial de la CE debía cursarla el gobierno español, de acuerdo con el Reglamento de 1958⁹¹. En cualquier caso, tanto para la ponente, como para la mayoría de diputados y de analistas se trata de un importante precedente para futuras reordenaciones lingüísticas de la Comunidad Europea⁹².

4.3.5: El Informe Killilea

La caída del Muro de Berlín en noviembre de 1989 y la posterior disolución del bloque soviético, así como los distintos procesos democratizadores en los antiguos países comunistas, sumado todo ello a la guerra en la antigua Yugoslavia, transformaron en parte la visión comunitaria sobre las minorías. Polonia y Hungría presentaron su petición de ingreso en la Comunidad Europea y otros países, como la República Checa o la propia Federación Rusa anunciaron su deseo de ingresar. El debate sobre las minorías lingüísticas en las instituciones comunitarias acusó este giro, que quedó reflejado en el Informe Killilea, junto con otras circunstancias como la aprobación por el Consejo Europeo de una Carta Europea para las Lenguas Regionales o Minoritarias.

Según el propio Mark Killilea, hubo tres razones para elaborar su informe:

- a) el resurgimiento de las pequeñas naciones y las comunidades oprimidas en Europa central y oriental, la mayoría de las cuales reivindican sus derechos culturales y lingüísticos;
- b) la adopción del Tratado de Maastricht, que por primera vez reconoce la diversidad lingüística y cultural de la UE;
- y c) la adopción de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias y su firma por parte de 13 países democráticos europeos.

Los progresos realizados por las lenguas minoritarios a partir del Informe Arfé de 1981 también constituyeron un poderoso impulso a la Resolución y permitieron a Mark Killilea realizar un balance optimista. "Después de haber sido víctimas de discriminaciones, de marginalización y de alienación durante siglos en la mayor parte de los casos, los hablantes de de las lenguas regionales o minoritarias de Europa están a punto de conseguir el sitio que les corresponde en la formación de una Europa de los pueblos, de todos sus pueblos"⁹³.

4.3.5.1: Los antecedentes

El Informe Kuijpers de 1987 no puso fin, ni mucho menos, a las iniciativas en favor de las lenguas minoritarias en el PE:

- el 12 de febrero de 1990 el diputado Elliott anunció en el Pleno una propuesta de resolución sobre las lenguas minoritarias⁹⁴;
- el 25 de enero 1991 el diputado Jon Gangoiti anunció una propuesta de resolución sobre la promoción y uso de las lenguas regionales o minoritarias⁹⁵;
- el 13 de junio 1991 el diputado Juan María Bandrés anunció una propuesta de resolución sobre la concesión de permisos de emisión a las emisoras en lengua vasca⁹⁶;
- el 17 de diciembre 1992 la diputada Van Hemeldonck anunció una propuesta de resolución sobre la firma de una Carta Europea

de las Lenguas Regionales y Minoritarias⁹⁷;

- el 21 de enero 1993 el PE aprobó una resolución sobre nuevas perspectivas para la acción cultural comunitaria⁹⁸.

Teniendo en cuenta estas iniciativas y otras como la Declaración de Copenhague sobre la dimensión humana de la CSCE de 29 de junio de 1990; la Carta de París para una Nueva Europa (CSCE) de 21 de noviembre de 1991; o la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias del C. de E. de 5 de noviembre 1992, a propuesta del diputado irlandés John Hume el Parlamento encargó a la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación la elaboración de un nuevo dictamen. El 21 de marzo 1990 la Comisión nombró ponente al diputado irlandés Mark Killilea y el 26 de enero 1994 aprobó el dictamen final por 14 votos a favor, 2 en contra y 4 abstenciones. El Pleno de la Cámara también lo aprobó en su sesión de 9 de febrero de 1994 por 318 votos a favor, 1 en contra y 6 abstenciones.

El único diputado que votó en contra, el francés León Schwartzenberg, justificó su voto diciendo que aceptaba la enseñanza de las lenguas minoritarias por respeto a las tradiciones familiares o regionales, pero que no podía admitir que los documentos oficiales o administrativos estuvieran disponibles en otras lenguas que no fuera la nacional. Para él esto ponía en peligro la unidad de cada nación y además habría que actuar de forma que se suprimieran las fronteras en lugar

de crear de nuevas. Los partidarios de la abstención no explicaron su voto⁹⁹.

4.3.5.2: Los principios del Informe Killilea

Los cuatro primeros puntos de la exposición de motivos del Informe Killilea están dedicados al análisis de "una nueva perspectiva: la CSCE" en relación con las minorías lingüísticas. La conclusión es que "los acontecimientos que han tenido lugar en la Europa Central y del Este demuestran la importancia de dar a las minorías culturales y étnicas los medios para expresar, defender y desarrollar su identidad cultural y lingüística a fin de que cada persona pueda hallar satisfacción en el contexto de la paz y la democracia". Por otra parte, se señala que los Estados miembros de la CE no pueden firmar acuerdos que garanticen los derechos lingüísticos y culturales de las comunidades de la Europa central y del Este que utilizan lenguas de menor difusión y negarse a aplicarlos en su propio territorio, "sin pecar de falta de consecuencia".

El segundo objetivo del Informe es hacer un balance de la situación en la CE desde el Informe Kuijpers de 1987, hacer un inventario de las lenguas y culturas autóctonas y formular propuestas encaminadas a dar a estas lenguas y culturas "la posibilidad de un florecimiento paralelo a la intensificación de la integración europea".

En este balance el documento destaca la actividad de la Oficina Europea para las Lenguas Menos Usadas, "en estrecha colaboración con el PE y la Comisión Europea", la cual subvenciona gran parte de sus proyectos. El resto de recursos de la Oficina proceden de los gobiernos de Irlanda, Luxemburgo, de la provincia de Frisia y del **Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens**. La Oficina ha colaborado con la ONU, la UNESCO y la CSCE y sobre todo con el C. de E. en la redacción de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias.

También subraya el aumento de las ayudas presupuestadas por la Comisión. Así, en 1991 se pasó de un millón de Ecus a dos millones. En 1992 la partida creció hasta 2'4 millones y en 1993 pasó a 3'5 millones.

El Informe recoge asimismo en su balance la Resolución Reding y la actividad del C. de E. en esta materia, en estrecho contacto con las instituciones comunitarias.

Partiendo de esta evaluación, el Informe pretende "formular propuestas en los ámbitos de la educación, relaciones con gobiernos y autoridades judiciales, medios de comunicación, actividades culturales y cooperación transfronteriza", sin ocultar su propósito de "destacar la importancia política que debería concederse a las lenguas y culturas de las comunidades que usan una lengua menos difundida cuando, en un futuro relativamente próximo, la Comunidad Europea deba acometer

nuevas ampliaciones y establecer acuerdos de asociación con los países de la Europa central y del Este, que incluirán la dimensión cultural".

En opinión del Informe también conviene tener presentes los nuevos poderes que la Comunidad debe adquirir en el ámbito de la cultura tras la ratificación del Tratado de Maastricht, sobre la base del principio de subsidiariedad.

La exposición de motivos insiste en que "la riqueza de la CE está en su diversidad. Esta es la base de su originalidad, porque se apoya en el mutuo respeto entre las distintas culturas. Sin embargo, la CE nunca estará cabalmente realizada, si deja de tener en cuenta las culturas que existen en el plano subestatal y que a veces trascienden las fronteras".

Es más, a la CE le incumbe la particular responsabilidad de mantener la paz en el continente europeo en una época en la que resurge el nacionalismo en la Europa central y del Este, ya que si la CE logra encontrar soluciones que permitan el florecimiento en sus propias culturas, sean éstas nacionales, regionales, o transfronterizas y estén vinculadas o a un territorio, "constituirá un ejemplo para el resto de Europa y habrá desempeñado la función estabilizadora que le es propia desde su creación".

Destacar las diferencias entre los pueblos que componen la CE y unirlos de forma más estrecha es el último propósito del Informe "con el fin de contribuir a fomentar la construcción de la CE".

Durante la redacción de la Resolución el C. de E. aprobó la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, por lo que su ponente optó por recortar su informe y darle todo su apoyo, cosa que hace en el apartado 6, "en tanto que instrumento a la vez eficaz y flexible de protección y de promoción de las lenguas con una difusión menor". Por ello, la Resolución invita a los gobiernos de los Estados miembros que no lo hayan hecho "a ratificar urgentemente esta Convención, escogiendo los párrafos que respondan mejor a las conveniencias y aspiraciones de las comunidades lingüísticas afectadas".

4.3.5.3: La Resolución Killilea

Lo más notable de la Resolución de 9 de febrero es su proyección sobre las minorías lingüísticas de Europa Central y Oriental. El documento ya no se apoya solamente en los anteriores del PE y en la CELRM, sino que lo hace también en la Declaración de Copenhague de 1990 y en la Carta de París de 1991, ambas producidas por la CSCE. Entre los considerandos se cita concretamente el proceso de democratización en la Europa Central y Oriental y "en particular la determinación de los

pueblos recién democratizados de reivindicar sus propias lenguas y culturas".

Sensible a las peticiones de ingreso en la Unión Europea de formuladas por algunos de estos países, como Hungría, Polonia o la República Checa, la Resolución advierte en su apartado K que "la lengua es un elemento esencial para la comunicación en el ámbito de la Unión Europea en construcción y que la construcción europea ha de hacer compatible la utilización de las lenguas de mayor difusión para la comunicación a través de las actuales fronteras interiores con la protección y defensa de las lenguas menos difundidas en ámbitos regionales o transregionales".

Y pide concretamente a la Comisión en el punto 10.d) que "se tengan debidamente en cuenta las necesidades de las personas que hablan las lenguas menos utilizadas en los países de la Europa central y oriental al desarrollar programas comunitarios para la reconstrucción económica y social y, en concreto, en el marco del programa PHARE".

Para los países comunitarios la Resolución vuelve a solicitar el cumplimiento de los principios y de las propuestas establecidos en las resoluciones de 16 de octubre de 1981, de 11 de febrero de 1983 y de 30 de octubre de 1987. Destaca de nuevo la necesidad de que los Estados miembros "reconozcan sus minorías lingüísticas y adopten las disposiciones legales y

administrativas necesarias para crear las condiciones básicas para conservar y desarrollar dichas lenguas". El estatuto legal de estas minorías debería cubrir "como mínimo, el uso y fomento de dichas lenguas y culturas en los ámbitos de la enseñanza, la cultura, la justicia, y la administración pública, los medios de comunicación, la toponimia y demás sectores de la vida pública y cultural, sin perjuicio de la utilización de las lenguas de mayor difusión cuando así lo requiera la fluidez de la comunicación en cada uno de los Estados miembros y en la Comunidad en su conjunto".

Pide, asimismo, el fin de las discriminaciones, la creación de instituciones lingüísticas transfronterizas para aquellas lenguas y culturas minoritarias extendidas en dos o más Estados, la firma, ratificación y aplicación de la CELRM, y el apoyo a las asociaciones especializadas, especialmente las delegaciones de la Oficina Europea.

A la Comisión Europea le pide la adopción de 7 medidas, como por ejemplo que incluya las lenguas minoritarias "en todos los programas educativos y culturales", o que fomente el uso de estas lenguas en la política audiovisual de la Comunidad, como por ejemplo en la televisión de alta definición y en la moderna tecnología digital de telecomunicaciones.

Propone un segundo paquete de medidas a la Comisión y al Consejo de Ministros, como por ejemplo las debidas dotaciones

presupuestarias a las iniciativas en favor del desarrollo de estas lenguas.

Al contrario que en las anteriores, en esta Resolución se solicita que se apliquen "mutatis mutandis" las mismas recomendaciones a las lenguas autóctonas no territoriales (gitano, sinti, hebreo...), que a las lenguas minoritarias territoriales.

Y en cualquier caso, repite que estas recomendaciones no pueden amenazar "la integridad territorial, o el orden público en los Estados públicos, ni deben interpretarse en forma alguna en base de un derecho a emprender cualquier actividad o acción que contravenga los objetivos de la Carta de las Naciones Unidas o cualquier otra obligación establecida por la legislación internacional"¹⁰⁰.

4.3.5.4: El Anexo I de la Resolución Killilea: Estudio sobre las lenguas y culturas minoritarias de la UE

El Informe Killilea contiene un Anexo con los resultados provisionales de una encuesta realizada entre los países miembros de la CE a propósito de las minorías lingüísticas. Dicho cuestionario recaba de los gobiernos nacionales, regionales y locales, así como a numerosas instituciones y organismos especializados los datos principales de las

respectivas minorías lingüísticas (número de hablantes, territorio, estatuto legal, etc.), su situación educativa, en los servicios públicos, en los medios de comunicación y en las actividades culturales, así como la cooperación transfronteriza y distintos aspectos socio-políticos. La información recogida, "que no pretende ser exhaustiva", abarca a las siguientes lenguas y territorios:

- albanés/arberesco/arvanita
- alemán
- aragonés
- aranés
- arboror (Italia y Grecia)
- armina
- asturiano/bable
- brezhoneg/bretón
- català (Cataluña, Illes Balears, Rosellón, Alguer)
- cimbri
- corsu/corso
- croata
- cymraeg/galés
- dansk/danés
- deutsch/alemán y sus variedades dialectales (Bélgica, Dinamarca, Francia, Italia)
- mòcheno
- walser
- euskera/vasco (País Vasco autónomo, Navarra y Pirineos)

Atlánticos)

- français/franco-provençal (Valle de Aosta, Piamonte, Apulia)
- frysk-friisk-seeltersk/frisio (Países Bajos-Frísia, Alemania-Frisia septentrional, Alemania-Baja Sajonia)
- furlan/friulano
- gaeilge (Irlanda del Norte)
- gaidhlig/ gaélico
- galego/ gallego
- helliniki/ griego
- hrvatski/croata
- irlandés
- kernevek/cornuallés
- furlan/ladino
- lenguas de oil
- idiomas de los territorios de ultramar
- lëtzebuergesch/luxemburgués (Gran Ducado de Luxemburgo y Bélgica)
- nederland/neerlandés
- occitan/occitano (Francia, Italia: Piamonte, Liguria y Calabria, España: Valle de Arán)
- polski/polaco
- pomak/pomako
- sardu/sardo
- scots/escocés
- serbski/serbio
- slavo-makedonski /macedonio

- slovensko/esloveno
- turkce/turco
- armina-valaco
- valencià/valenciano
- wallon/valón¹⁰¹

4.4: Las Declaraciones de la CSCE: el Acta de Helsinki

Entre 1975 y 1989-90 la CSCE situó su doctrina hacia las minorías lingüísticas exclusivamente en el terreno de la política de derechos humanos, siguiendo una trayectoria inicial parecida a la de la CE y el C. de E.. En la década de los 90 ya fue delimitando una política lingüística propia y autónoma, aunque coherente con los documentos aprobados por las otras dos instituciones .

Las únicas referencias que el Acta de Helsinki de 1 de Agosto de 1975 contiene sobre las minorías lingüísticas, están en el Capítulo VII relativo al "Respeto de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, incluida la libertad de pensamiento, conciencia, religión o creencia". En esta parte "los Estados participantes respetarán los derechos humanos y las libertades de todos, incluyendo la libertad de pensamiento, conciencia, religión o creencia sin distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión".

Pero más específicamente, los Estados participantes en cuyo territorio existan minorías nacionales "respetarán el derecho de los individuos pertenecientes a tales minorías a la igualdad ante la ley, les proporcionarán la plena oportunidad para el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales y, de esta manera, protegerán los legítimos intereses de aquéllos en esta esfera"¹⁰².

Conviene subrayar, sin embargo, que en 1975 las declaraciones de las instituciones europeas no habían ido tampoco mucho más allá que el Acta de Helsinki. La Resolución Arfé del PE y la Recomendación Cirici del C. de E. tardarían todavía unos años en salir a luz. Con todo, el Acta de Helsinki tuvo un gran efecto indirecto sobre el reconocimiento de las minorías lingüísticas al crear unas condiciones políticas generales mucho más aptas para abordar estas cuestiones. La fijación definitiva de las fronteras resultó en este sentido de gran importancia al eliminar la posibilidad del uso de las minorías para intentar rectificaciones fronterizas, sobre todo en zonas especialmente sensibles, como por ejemplo entre Italia y Yugoslavia o entre Grecia y Turquía, pero también entre Dinamarca y Alemania o entre Bélgica y Alemania.

4.4.1: Del Acta de Helsinki a la Carta de París

De hecho los grandes documentos de la CSCE posteriores al Acta de Helsinki apenas registraron progresos en el terreno de las minorías lingüísticas. Ni en la Conferencia de Belgrado (1977-79), ni en la de Madrid (1980-83), ni en la de Viena (1986-89) se pasó de las grandes definiciones y compromisos, ya señalados en Helsinki, aunque es posible rastrear alguna recomendación aislada algo más precisa.

Eran los últimos años de la "guerra fría" y a ninguno de los dos bloques le interesaba entrar a fondo en un tema que intuían muy conflictivo para todos. Los Estados seguían teniendo una autonomía absoluta en la regulación de estas cuestiones, la cual se inscribía en el ejercicio de su soberanía interna, siendo la preocupación conjunta esencial únicamente el evitar las fricciones internacionales. Estas primeras declaraciones tuvieron, sin embargo, la virtud de establecer una base de partida común, que en breve tiempo y por efecto del proceso democratizador en los países del antiguo bloque soviético, se convertiría en un acuerdo casi total sobre las grandes declaraciones realizadas por el C. de E. entre 1985 y 1995 en materia de lenguas minoritarias.

En la Declaración de Madrid, por ejemplo, los firmantes "subrayan la importancia de realizar constantes progresos para garantizar el respeto y disfrute efectivo de los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales, así como para proteger sus legítimos intereses, tal y como se recoge en el Acta Final". Pero más adelante, al tratar de la "Cooperación e intercambios en materia de cultura" el documento indica que los Estados participantes tratarán de fomentar la traducción, publicación y difusión de obras en la esfera de la literatura y en otros campos de la actividad cultural de otros Estados participantes, "especialmente las producidas en las lenguas menos ampliamente utilizadas, facilitando la cooperación entre las editoriales, en particular por medio del intercambio de

catálogos de libros que puedan ser traducidos, así como de otra información pertinente"¹⁰³. Son todavía pequeños pasos, pero que indican una cierta voluntad de superar las vagas declaraciones programáticas y pasar a la adopción de medidas positivas por discretas que sean.

En la Conferencia de Viena el tema de los derechos humanos fue remitido a sendas reuniones específicas y paralelas a celebrar en París y en Copenhague¹⁰⁴. A pesar de ello, su Declaración final ofrece algunos enunciados genéricos. El punto 11 declara que los Estados participantes respetarán los derechos humanos y las libertades fundamentales "sin distinción por motivos de raza, sexo, idioma¹⁰⁵ o religión", precisando en el 13.7 que garantizarán a todas las personas presentes en su territorio y sujetas a su jurisdicción el goce de sus derechos humanos y libertades fundamentales, "sin hacer distinción alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma¹⁰⁶, religión, opinión pública o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición".

En el apartado 16 sobre libertad religiosa los Estados se comprometen a respetar el derecho de los creyentes individuales y de las comunidades de creyentes "a adquirir, poseer y utilizar libros sagrados y publicaciones religiosas en el idioma¹⁰⁷ de su elección, así como otros artículos y materiales relacionados con la práctica de una religión o

creencia" (art. 16.9). También al fijar las normas para los contactos entre las personas de distintos países, la Declaración de Viena recuerda los derechos de las minorías nacionales o de las culturas regionales a gozar de un estatuto propio y a establecer relaciones con los ciudadanos de otros Estados "con los que compartan un origen nacional o un patrimonio cultural comunes" (art. 31). Y en todo caso, los Estados deberán asegurar "en la práctica" que las personas que pertenecen a minorías nacionales o culturas regionales residentes en sus territorios "puedan tener acceso a información en su lengua materna y difundir e intercambiar esa información" (art. 45).

Más concretamente, en los intercambios culturales los Estados deberán velar porque las personas pertenecientes a minorías nacionales o culturas regionales existentes en su territorio puedan mantener y desarrollar su propia cultura en todos sus aspectos, "incluidos el idioma, la literatura, la religión y la preservación de monumentos y objetos culturales e históricos" (art. 59).

También en materia educativa los Estados deberán garantizar que las personas pertenecientes a minorías nacionales o culturas regionales existentes en su territorio "puedan impartir o recibir instrucción sobre su propia cultura, inclusive por medio de la transmisión de padres a hijos del lenguaje, la religión y la identidad cultural" (art.68)¹⁰⁸.

Aunque muy lejos aún de la precisión y del nivel de compromisos de la CELRM, aprobada por la Asamblea Parlamentaria del C. de E. tres meses antes, lo cierto es que la Declaración de Viena ya empezó a dibujar un cuadro básico de derechos lingüísticos, superando la simple prohibición de mantener medidas discriminatorias, cuadro válido para todos los países situados entre los Urales y el Atlántico. Se tomaron decisiones importantes como el derecho a la cooperación transfronteriza de las minorías, uno de los aspectos más conflictivos y peor resueltos de las minorías lingüísticas y, en cualquier caso, se permite crear las condiciones necesarias para la promoción de la propia identidad cultural, recibida de padres a hijos junto con el idioma. La vinculación entre minorías religiosas y lenguas minoritarias demuestra el esfuerzo llevado a cabo por los regímenes del bloque oriental oficialmente ateos.

En esta Conferencia los soviéticos aceptaron por primera vez la vinculación directa entre los derechos humanos y la cooperación en el campo humanitario, abandonando la tesis "monista", que supeditaba los derechos individuales y colectivos a los del Estado.

4.4.2: La Declaración de Copenhague sobre Dimensión Humana

De acuerdo con el mandato dado en la Conferencia de Viena de 1989, representantes de 33 países europeos¹⁰⁹, más EEUU y

Canadá, efectuaron una primera reunión en París entre el 30 de mayo y el 23 de junio de 1989 para preparar un documento sobre la dimensión humana de la CSCE. Entre el 5 y el 29 de junio de 1990 se celebró una segunda reunión en Copenhague, que culminó con una importante declaración sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales, y muy especialmente los de las minorías lingüísticas.

De hecho, la Declaración de Copenhague constituye ya un auténtico programa de mínimos, por más que todavía no alcanza la minuciosidad de la Carta del C. de E.. Entre este documento y los elaborados por el PE y el C. de E. empieza a observarse un paralelismo total, a pesar de la diversidad mayor de situaciones. Conviene insistir en que en junio de 1990 casi todos los países de Europa Central y Oriental habían acometido sus respectivos procesos democratizadores, circunstancia que establecía una base de partida común a todos los participantes en el cónclave de Copenhague y a este respecto los Estados participantes "acogen con gran satisfacción los cambios políticos fundamentales que han tenido lugar en Europa desde la primera reunión celebrada en París en 1989", cambios que la CSCE ha contribuido a producir.

Todos los Estados participantes reconocen que "una democracia pluralista y el Estado de Derecho son esenciales para garantizar el respeto de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, el desarrollo de los contactos entre

personas y la solución de otras cuestiones conexas de carácter humanitario. Por consiguiente, acogen con satisfacción el compromiso manifestado por todos los Estados participantes de favorecer los ideales de democracia y de pluralismo político así como su determinación común de edificar sociedades democráticas basadas en elecciones libres y en el Estado de Derecho". Obviamente al alinearse todos los países europeos con los principios democráticos generales, era mucho más fácil acordar los aspectos más concretos, como los referidos a las minorías lingüísticas. La evolución política de los países permitió que "el grado de aplicación de los compromisos... haya mostrado mejoras fundamentales desde la reunión de París", pero "son necesarias nuevas medidas". En cualquier caso, este manifiesto era políticamente vinculante para los países signatarios, pero no jurídicamente.

4.4.2.1: El contenido de la Declaración de Copenhague

La reunión de Copenhague significó la adopción de un cuadro completo de derechos de las minorías, que pueden desarrollar su personalidad y su identidad cultural libres de cualquier tentativa de asimilación en contra de su voluntad. Los derechos lingüísticos se extienden tanto al ámbito público como al privado.

La Declaración dedica todo su capítulo IV a las minorías nacionales, cuya problemática "sólo puede resolverse satisfactoriamente en un marco político democrático basado en el Estado de Derecho, con un funcionamiento independiente de la justicia".

Concretamente las personas pertenecientes a minorías nacionales "tienen el derecho de expresar, preservar y desarrollar libremente su identidad étnica, cultural, lingüística o religiosa y de mantener y desarrollar su cultura en todos sus aspectos, libres de cualquier tentativa de asimilación contra su voluntad" (art. 32). Y al enumerar los derechos específicos inherentes a este principio genérico el primero de los citados es "utilizar libremente su lengua materna tanto en privado como en público" (art.32.1).

Para el ejercicio de este derecho los Estados participantes "harán lo posible" para garantizar que las personas pertenecientes a minorías nacionales, "a pesar de la necesidad de aprender el idioma o idiomas oficiales del Estado de que se trate, tengan oportunidades adecuadas de recibir instrucción en su lengua materna, así como de poder aprenderla y, siempre que sea posible y necesario, utilizarla ante las autoridades públicas, de conformidad con la legislación nacional". En el contexto de la enseñanza de la historia y la cultura en los establecimientos educativos "también tendrán en cuenta la historia y la cultura de las minorías nacionales" (art.34).

También la Declaración de Copenhague considera que los poderes locales o autónomos son los más adecuados para aplicar esta política, siempre que "correspondan a las circunstancias específicas, históricas y territoriales de dichas minorías y sean conformes a las políticas del Estado de que se trate" (art. 35). Por otra parte, el documento insta a los Estados a cooperar entre ellos sobre las cuestiones relativas a las minorías nacionales, promoviendo "un clima de respeto, comprensión, cooperación y solidaridad mutuos entre todas las personas que viven en su territorio" (art. 36).

El marco general lo constituyen las convenciones de derechos humanos existentes y el límite son los principios de las Naciones Unidas, las otras obligaciones dimanantes de derecho internacional y las disposiciones del Acta Final de Helsinki, "incluyendo el principio de la integridad territorial de los Estados" (arts. 37 y 38). Dando un paso adelante, los Estados se comprometen a cooperar estrechamente con las organizaciones internacionales "inclusive las Naciones Unidas y, si procede con el C. de E., teniendo presente sus trabajos en curso con respecto a cuestiones relativas a minorías nacionales" (art. 39). Esta frase puede interpretarse como un invitación a crear un derecho común europeo en materia de minorías, concretamente de base lingüística. Finalmente en el artículo 40 destinado a combatir los fenómenos racistas y xenófobos, se recuerda que algunos actos de hostilidad tienen una base lingüística¹¹⁰.

4.4.3: La Carta de París para una Nueva Europa

"Entre la Carta de París (1990) y el Acta de Helsinki (1975) se sitúa el cambio fundamental sufrido por Europa en 1989, que ha permitido la unión del Continente, derribada la barrera del telón de acero", afirma tajantemente Salvador López de Latorre¹¹¹. Y es verdad que la propia Carta reconoce al principio de todo que Europa estaba viviendo "un momento de cambios profundos y de grandes esperanzas".

La Carta, aprobada por la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la CSCE celebrada el 21 de Noviembre 1990 en París, no aporta novedades sobre los derechos de las minorías lingüísticas en el seno de Europa, aunque su rango de Tratado hace vinculantes sus resoluciones. Se limita a asumir la Declaración de Copenhague, a reafirmar los principios más generales en este terreno y a convocar una reunión de expertos en Ginebra para el mes de julio de 1991. Por lo tanto, el valor de la Carta de París estriba sobre todo en su contexto político, desaparecidos los bloques y superada la "guerra fría". A diferencia del Acta de Helsinki ya no contiene reservas, ni cláusulas protectoras, sino que asume todos sus aspectos constructivos y positivos y los sitúa plenamente en un contexto general democrático para toda Europa.

4.4.4: El Simposio de Cracovia sobre el Patrimonio Cultural de la CSCE

Siguiendo el mandato de la Declaración de Viena y de la Carta de París, entre el 28 de mayo y el 7 de junio de 1991 se reunieron en Cracovia (Polonia) sendas delegaciones de los 35 países de la CSCE para fijar la posición de la Conferencia sobre el patrimonio cultural europeo.

Los delegados partieron de la idea de que "la diversidad cultural regional es una expresión de la riqueza de la identidad cultural común de los Estados participantes" y de que "su conservación y protección contribuye a la edificación de una Europa democrática, pacífica y unida". De este modo se incorporó a la CSCE el principio de que la diversidad cultural y lingüística forma parte de la esencia europea y de su unión, aspecto fundamental en todos los documentos del C. de E. y de la CE.

El Acta de Cracovia dedica sólo uno de sus apartados, el 28, a recomendar el fortalecimiento del patrimonio cultural popular, "incluyendo las culturas autóctonas y vernáculas". Para ello, los Estados participantes toman nota de la importancia de investigar las diferentes formas de expresión de las culturas pasadas y presentes (prácticas simbólicas, objetos y conocimientos técnicos, arte popular, idiomas¹¹²) y de la importancia de hacer todo lo necesario para realzarlas"¹¹³.

4.4.5: El Informe de los Expertos sobre las Minorías Nacionales

De acuerdo con la decisión plasmada en la Carta de París, representantes de los 35 países de la CSCE se reunieron en Ginebra de 1 al 19 de julio de 1991, para elaborar un dictamen sobre las Minorías Nacionales. La guerra de Yugoslavia pesó desde el primer día en los trabajos de esta convención, ya que el conflicto se planteó en gran medida como un enfrentamiento entre minorías étnicas. Como signo de esta confusión los expertos fueron incapaces de encontrar una definición de "minoría nacional" y de fijar el papel que juegan en ellas el factor lingüístico.

Por lo tanto, la conferencia trabajó principalmente en los trámites de protección de los derechos de las personas que pertenecen a alguna minoría, en el marco de los derechos humanos y del sistema democrático, siguiendo las pautas de Copenhague. El reconocimiento de las minorías es más fácil sobre el terreno concreto, que sobre el papel, convinieron los expertos¹¹⁴.

El borrador, elaborado por 17 países entre ellos España, contó con la oposición de los delegados de Bulgaria, Rumanía y Yugoslavia. Estos últimos pidieron limitar fuertemente el derecho a la autodeterminación de las minorías. Finalmente se distinguieron la protección al derecho de las personas que

pertenecen a minorías nacionales y las medidas políticas que pueden ser adoptadas para afrontar el problema de una manera global. Los contactos por razón de lengua dentro y fuera del país ya no podían ser penalizados.

El Documento, que establece una especie de Constitución de las minorías nacionales en toda Europa, recoge toda la doctrina anterior y reafirma que "las personas pertenecientes a minorías nacionales tienen el derecho de expresar, preservar y desarrollar libremente su identidad étnica, cultural, lingüística o religiosa y de mantener y desarrollar su cultura en todas los aspectos, libres de cualquier tentativa de asimilación contra su voluntad". Con esta finalidad los Estados participantes reiteran en esta Declaración la necesidad de tomar "las medidas oportunas para proteger la identidad étnica, cultural, lingüística y religiosa de las minorías nacionales en su territorio y de crear las condiciones necesarias para la promoción de dicha identidad".

En este contexto los Estados participantes constataron que se habían obtenido resultados positivos entre otras cosas:

- para las personas pertenecientes a las minorías nacionales, provisión de tipos y niveles adecuados de educación en su idioma materno con la debida consideración del número, características del asentamiento geográfico y tradiciones culturales de las minorías nacionales;

- sufragando la enseñanza de los idiomas de las minorías al público en general así como la inclusión de idiomas de minorías en las instituciones de formación de maestros, en particular en regiones habitadas por personas pertenecientes a minorías nacionales;
- y en aquellos casos en que la enseñanza de una disciplina determinada no se facilite en su territorio a todos los niveles en el idioma de la minoría, tomar las medidas necesarias para buscar los medios de reconocer los diplomas otorgados en el extranjero para los estudios realizados en ese idioma.

Por lo que respecta a los medios de comunicación, la Declaración pide que :

- no haya discriminación alguna basada en motivos étnicos, culturales, lingüísticos¹¹⁵ o religiosos. Los grandes medios de comunicación tomarán en cuenta en sus programas la identidad étnica, cultural, lingüística y religiosa de las minorías nacionales.
- se establezcan y mantengan sin trabas contactos entre personas pertenecientes a una minoría nacional, así como contactos a través de las fronteras con personas pertenecientes a una minoría nacional con quien comparten un origen étnico o nacional, patrimonio cultural o creencia religiosa comunes. Esto contribuye al entendimiento mutuo y fomenta las relaciones de buena vecindad¹¹⁶.

4.4.6: La Declaración de Moscú de Octubre 1991

Con la Carta de París se pusieron en marcha distintas medidas para estimular la confianza entre los países miembros de la CSCE, como por ejemplo la creación de un centro de prevención de conflictos con sede en Viena¹¹⁷. Para fomentar dichas medidas entre el 10 de septiembre y el 4 de octubre de 1991 se celebró en Moscú la Tercera Ronda del Forum sobre Derechos del Hombre en el marco de la CSCE¹¹⁸, con el debate de fondo de si la defensa de los derechos humanos constituía o no una injerencia en los asuntos internos de un país. Hacía algún tiempo que núcleos de intelectuales y parlamentarios occidentales sostenían que no se podía considerar la defensa de los derechos humanos como tal injerencia. "Proteger los derechos de las minorías, atendiendo a sus demandas, es algo totalmente diferente de la intervención unilateral de un país en los asuntos internos de otro. La comunidad internacional, en suma, tiene hoy el derecho y el deber de intervenir cuando son violados los derechos de las minorías", afirmaba con rotundidad el profesor norteamericano Dietrich Fischer¹¹⁹.

En Moscú se convino finalmente en que no lo es, en contradicción con lo que sostenían todavía las primeras declaraciones de la CSCE. El giro experimentado por los soviéticos en esta materia fue decisivo, tras 50 años de defender con energía lo contrario. Influidos por el intento de golpe de Estado de agosto de 1991 en Moscú¹²⁰, los delegados

de la URSS llegaron a proponer el reconocimiento del derecho de la comunidad internacional a injerirse en los asuntos internos de un país cuando estén afectados derechos humanos y libertades fundamentales, derecho que algunas potencias occidentales, especialmente los EEUU por su mantenimiento de la pena de muerte, obligaron a diluir, frente a la posición alemana y rusa de permitir intervenciones efectivas de la CSCE en sus Estados miembros. Esta posibilidad de intervenir abarcaba también la defensa de los derechos colectivos, concretamente los de las minorías nacionales¹²¹. "Categórica e irrevocablemente la dimensión del compromiso de la CSCE con los derechos humanos es un tema de directa y legítima preocupación para todos los Estados miembros y no sólo cuestiones internas de los Estados afectados", reza literalmente este nuevo principio.

De la admisión del derecho de intervención a la creación de mecanismos iba un paso, que la Conferencia de Moscú dió en su Declaración final. Sobre base programática anteriormente expuesta, la CSCE podrá formar consejos de expertos imparciales que investiguen supuestas violaciones de derechos humanos y elevar los informes pertinentes a la CSCE. Cada país miembro podrá proponer hasta tres expertos para estudiar las condiciones de los derechos humanos en otro país, pero la nación investigada puede rechazar a dos de ellos¹²².

4.4.7: La Declaración de Helsinki de 1992

El 9 y 10 de julio de 1992 51 Jefes de Estado y de Gobierno de Estados europeos, más EEUU y Canadá¹²³, se reunieron en Helsinki para ratificar solemnemente los principios del Acta de Helsinki de 1975 y de la Carta de París de 1990, hacer un balance y dar un nuevo impulso a la CSCE. De hecho, la Declaración de Helsinki, realizada mientras la antigua Yugoslavia se hundía en una sangrienta guerra civil, se producían choques armados en varios países del Cáucaso y se detectaban fuertes tensiones en otras zonas de la antigua URSS, como Moldavia o Crimea, o de los Balcanes, como Macedonia, trasluce la preocupación por la fuerte inestabilidad en Europa Central y Oriental, que fácilmente podría extenderse más aún.

El punto 12 de la Declaración lo expresa con la mayor claridad: "Estamos en un momento prometedor, pero también en un momento de inestabilidad e inseguridad. La recesión de la economía, la tensión social, el nacionalismo agresivo, la intolerancia, la xenofobia y los conflictos étnicos amenazan la estabilidad en la región de la CSCE. Las flagrantes violaciones de los compromisos de la CSCE en materia de derechos humanos y libertades fundamentales, incluidos los relativos a las minorías nacionales, plantean una amenaza especial a la evolución pacífica de la sociedad, en las nuevas democracias sobre todo"¹²⁴.

El documento hizo suya la conclusión de Moscú, según la cual los derechos humanos son una garantía de la seguridad común y no un asunto interno de cada Estado. En su punto 8 se afirma "los compromisos contraídos en la esfera de la dimensión humana de la CSCE son asuntos de preocupación directa y legítima de todos los Estados participantes y no exclusivamente asuntos internos del Estado de que se trate. La protección y la promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales y la consolidación de las instituciones democráticas siguen siendo un fundamento esencial de nuestra seguridad integral".

La Declaración final de Helsinki no aportó, por lo tanto, ninguna novedad específica para las minorías lingüísticas, ya que se asumieron íntegramente los documentos de Copenhague y Ginebra. En esta ocasión, el reto de la Conferencia era crear unas estructuras operativas que hicieran efectiva la doctrina emitida en esta materia desde el Acta Final de 1975. Entre otras medidas de tipo general, la CSCE creó en Helsinki un Alto Comisionado para las Minorías Nacionales, a cuya regulación dedica todo el Capítulo II, con la misión de prevenir los conflictos causados por minorías y encauzarlos en caso de que llegaran a estallar.

"El Alto Comisionado para las Minorías de la CSCE debería recibir el máximo apoyo en su tarea. Los conflictos regionales nos afectan, de forma directa o indirecta, a todos. El

conflicto yugoslavo ha demostrado que la debilidad política de los Doce es su incapacidad para actuar eficazmente en una crisis externa, fuera de la esfera de la Unión, pero que afecta a su situación actual y futura", escribe a este propósito Krzysztof Skubiszewski¹²⁵.

El primer Alto Comisionado es el ex-Ministro de Asuntos Exteriores de los Países Bajos, Max van der Stoep. Su trabajo se basa en dos premisas fundamentales:

a) que los compromisos y responsabilidades adquiridos en el ámbito de la dimensión humana de la CSCE afectan en su totalidad y por igual a todos y cada uno de los Estados participantes en la Conferencia. La dimensión humana es indivisible y no puede haber zonas de mayor o menor "humanidad";

y b) que los compromisos sobre la dimensión humana no son asuntos internos de un determinado Estado, sino que afectan legítima y directamente a todos los Estados participantes. Para él el argumento negativo de no interferir en los asuntos internos de un país cuando afectan a la dimensión humana no es válido y nunca lo ha sido.

Sus primeras gestiones se dirigieron al estudio de la situación de la minoría rusa en Letonia y Estonia, de la minoría húngara en Eslovaquia y de la eslovaca en Hungría, de

la minoría húngara en Rumanía, de la minoría albanesa en la República de Macedonia, de la minoría griega en Albania, de la minoría rusa en Crimea (Ucrania) y de las relaciones inter-étnicas en Kazajstán y Kirguizistán, además de la situación general de los romaníes o gitanos¹²⁶.

4.4.8: La Declaración de Budapest de 1994

Los días 5 y 6 de diciembre de 1994 se celebró en Budapest la IX Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la CSCE¹²⁷, que a juicio de numerosos observadores terminó en un fracaso, a causa del desacuerdo sobre la ampliación de la OTAN y la guerra en Bosnia. A pesar de ello, la Cumbre aprobó un grueso manifiesto de 54 páginas en la edición española, que ciertamente no aporta novedades en el terreno de las minorías nacionales y lingüísticas. La mayor preocupación de la Declaración es que no se produzca un retroceso en relación a declaraciones anteriores, por lo que muchas de las cláusulas van destinadas a reafirmar los principios ya adoptados en precedentes reuniones.

Además de solicitar más medios para el Alto Comisionado para las Minorías Nacionales y de elogiar su labor, la Declaración dedica los apartados 20 y 21 a las minorías nacionales dentro del capítulo VIII referido a la Dimensión Humana. Los Estados participantes reafirmaron su determinación de aplicar todas las

disposiciones del Acta Final de Helsinki y declaraciones posteriores "relativas a la protección de los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales".

Por otra parte, la Declaración de Budapest subraya con satisfacción "los esfuerzos internacionales destinados a mejorar la protección de los derechos de las personas que pertenecen a minorías nacionales". Y a continuación cita explícitamente la adopción en el C. de E. de una Convención Marco sobre la Protección de las Minorías Nacionales, "que se basa en las normas de la CSCE". Finalmente llama la atención acerca del carácter abierto de dicha Convención gracias a la posibilidad de firmar por invitación por parte de los Estados que no son miembros del C. de E.. La CSCE sugiere a los Estados no miembros del C. de E. que "examinen la posibilidad de pasar a ser partes en dicha Convención".

NOTAS AL CAPITULO IV

1. El 11 de mayo de 1994 31 Estados del C. de E. (todos sus miembros excepto Italia) firmaron una reforma de los procedimientos para acceder a este Tribunal. Según esta reforma, los ciudadanos de países signatarios de la Convención pueden acceder directamente al Tribunal sin tener que someter previamente su reclamación a la Comisión Europea de Derechos Humanos. Por otra parte, se crea una segunda instancia en el mismo Tribunal a la que se podrá elevar recurso de apelación.

2. CONSEIL DE L'EUROPE: Guide du Conseil de l'Europe, Direction de la Presse et de l'Information, págs. 18-19 y 36-37.

3. Recomendación debatida y adoptada por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa el 28 de abril de 1961 en el transcurso de la 13ª Sesión Ordinaria de la Asamblea

4. El texto propuesto por la Asamblea decía: "Las personas pertenecientes a una minoría nacional no pueden ser privadas del derecho, conjuntamente con los otros miembros de su grupo y dentro de los límites asignados por el orden público, de tener su propia vida cultural, usar su propia lengua, abrir escuelas propias, y recibir enseñanza en la lengua de su elección, o de profesar y practicar su propia religión".

5. La Recomendación 814 fue debatida y aprobada por la Asamblea Parlamentaria el 5 de Octubre de 1977 en el transcurso de su 29ª Sesión Ordinaria. Doc: 4018

6. La Directiva 364 fue aprobada por la Comisión Permanente de la Asamblea Parlamentaria, actuando en nombre de ésta, el 8 de julio de 1977. Doc: 3997

7. SOLE, ALFONS: "El Consell d'Europa critica el bilingüisme com a solució" en Avui de 19 de Octubre 1980.

8. SANMARTI, JOSEP M. : "Europa reconeix els drets de les seves minories culturals" en Canigó de 12 de Julio 1980, nº 666, pág. 26.

9. BONADA, LLUIS: "Informe del Consell d'Europa a favor de les llengües en minoria" en Avui de 15 de Julio 1981

10. El lema de Audición era "Hacia una Carta Europea de las Lenguas".

11. CONSEJO DE EUROPA: Vers une Charte Européenne des Langues Regionales et Minoritaires en Europe, Direction de la Presse et de l'Information, 22 Mai 1984. Doc: B (84) 28

12. PUIG, LLUIS M^a DE: "Parlar català a Europa" en Avui de 7 de Junio 1984.

Ver también la crónica de S. J. Llierca titulada "El Consell d'Europa escoltà el primer discurs en català" en el mismo diario Avui de 17 de Mayo 1984.

13. GOMEZ, ISABEL: "El Consejo de Europa estudia medidas para proteger las lenguas minoritarias" en La Vanguardia de 15 de Abril 1986, pág. 19.

14. LUNA, JOAQUIN: "El Consejo de Europa elaborará un documento para proteger las lenguas de naciones sin Estado", en La Vanguardia de 4 de Enero 1985.

15. PUIG, LLUIS M^a DE: "Les llengües d'Europa" en El Món n^o 181 de 11 de Octubre 1985, pág. 33.

16. BOSCH, JORDI: "Cap a una carta europea sobre llengües regionals" en Avui de 13 de Febrero 1986.

17. PUIG, LLUIS M^a DE: Presentación de la Carta de las Lenguas Regionales o Minoritarias, Conferencia pronunciada en San Sebastián-Donostia en noviembre 1988. Texto mecanografiado.

18. CONSEIL DE L'EUROPE: Pourquoi plusieurs langues pour l'Europe? Un Colloque à Tours y répond... Direction de la Presse et de l'Information, 4 Març 1986. Doc: B (86) 10.

19. MERCADER, JORDI: "El Consejo de Europa prepara una carta sobre los derechos de las lenguas minoritarias" en El País de 3 de Marzo 1986.

20. PUIG, LLUIS M^a DE: "Informe provisional sobre la preparació d'un projecte de Carta Europea de les llengües regionals i minoritàries" en Revista de Llengua i Dret, Escola d'Administració Pública de la Generalitat de Catalunya, n^o 8, Desembre 1986, págs. 79 a 92.

21. PUIG, LLUIS MARIA DE Y PRATS, MODEST: "Avant-projet de Charte Responsabilité des collectivités locales et régionales", Commission des Affaires Culturelles et Sociales de la CPPLRE. Strasbourg, 12 juin 1985.

22. Esquisse du Projet de Charte Européenne des Langues Regionales et Minoritaires.- Consultation d'Experts Chargés d'Elaborer un Projet de Charte Européenne des Langues Regionales et Minoritaires.- Commission des Affaires Culturelles et Sociales de la Conférence Permanente des Pouvoirs Locaux et Régionaux de l'Europe, Strasbourg, 6 Novembre 1986. Doc: CPL/Cult/GT/LRM (20) 5 rév. 2

23. El lema de la convención era exactamente "Cultura y Regiones: acción cultural y espacio regional".

24. Rapport présenté par Jean-Marie Woehrling au Carrefour V Culture et langues régionales minoritaires dans la Conférence Culture et Régions: Action Culturelle et Espace Régional du Conseil de la Coopération Culturelle de la Conférence Permanente des Pouvoirs Locaux et Régionaux de l'Europe du Conseil de l'Europe, Florence 14/16 Mai 1987. Doc: CPL/CCC (87) 5.

25. Declaration de Florence, Direction de la Presse et de l'Information du Conseil de l'Europe, Estrasburgo 26 Mayo 1987. Doc: B (87) 18. Punto 11.

26. Doc. 5.782 de la 39ª Sesión de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa de 8 de Octubre 1987

27. MORF, DORIS: Projet de Rapport sur l'enjeu culturel des mass media en Europe. Projet de Recommandation, Commission de Culture et de l'Education de l'Assemblée Parlementaire du Conseil de l'Europe, Strasbourg 31 Août 1987. Doc: AS/Cult (39) 3 rév., FAC39.3R

28. Doc. CPL (22) 4

29. Interventions des membres de la CPPLRE lors de la 2e Séance de la XXIIe Session Plénière de la Conférence sur le rapport de M. Kohn sur les Langues Regionales ou Minoritaires en Europe, Estrasburgo, 22 de Octubre 1987. Doc: CPL/Cult (22) 16.

30. Rapport sur les Langues Regionales ou Minoritaires en Europe. Projet de Resolution. Rapporteur Herbert Kohn (RFA), Conférence Permanente des Pouvoirs Locaux et Régionaux de l'Europe, Strasbourg, 18 Janvier 1988. Doc: CPL (23) 8 prov.

31. 23ème Session de la Conférence Permanente des Pouvoirs Locaux et Régionaux du Conseil de l'Europe, Service de l'Information du Conseil de l'Europe, Strasbourg 29 Février 1988. Doc: B (88) 8.

32. Proyecto de Resolución presentado por la Comisión de Asuntos Culturales y Sociales de la CPPLRE. Ponente, H. Kohn. La Carta figuraba como un anexo. Doc: CPL (23) 8, 1ª Parte.

33. Doc: 6556 de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos (ponentes Brincat y Worms) y 6562 de la Comisión de Cultura y Educación (ponente de Puig) y de la Comisión de Refugiados y Demografía (ponente Cucó).

34. Doc: 6556 de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de los Derechos Humanos y Doc. 6562 de la Comisión de Cultura y Educación y de la Comisión de los Refugiados y la Demografía.

35. Vers une Charte des Langues Regionales ou Minoritaires du Conseil de l'Europe, Service de l'Information du Conseil de l'Europe, Estrasburgo 12 de junio 1989. Doc: I (89) 50

36. Nota de la Agencia Efe de 26 de Marzo 1990 titulada La Carta Europea de Lenguas Minoritarias podría desaparecer

37. ARIAS, JUAN: "Una Carta Europea defenderá las lenguas minoritarias" en El País de 28 de noviembre 1991.

38. Ver MERCATOR n. 4 de diciembre de 1992, pág. 10

39. Diario de Sesiones del Senado de 7 de marzo de 1995, V Legislatura, n. 68, págs. 3542 a 3543

40. "Carta Europea per les Llengües Minoritzades: Text definitiu" con un comentario de Albert Lamarca en Europa de les Nacions, n.º 12, Hivern 1991-92, págs. 19 a 25.

41. Los 23 de países miembros del Consejo de Europa más los de Hungría, Polonia, Yugoslavia, Santa Sede (signatarios éstos de la Convención Cultural Europea), Bulgaria, Checoslovaquia, República Democrática de Alemania y la URSS. Asistió también el Ministro de Cultura de Canadá.

42. L'Europe retrouve sa vraie dimension culturelle. Conférence des Ministres Européens de la Culture, Service de la Communication du Conseil de l'Europe, 4 de Mayo 1990. Doc: I (90) 33.

43. Doc: 6742

44. ZAMORA, JORDI: "El Consejo de Europa establece los derechos de las minorías nacionales" en La Vanguardia de 2 de febrero 1993

45. Avis relatif à un protocole additionnel à la Convention européenne des Droits de l'Homme sur les droits des minorités. Rapporteur M. de Puig, Assemblée Parlementaire du Conseil de l'Europe, 1 febrero 1993. Doc: 6749.

46. FOKKELMAN, MONICA: "El Consejo de Europa deberá regular los derechos de las minorías" en ABC de 10 de Octubre 1993.

47. CEMBRERO, IGNACIO: "La cumbre del Consejo de Europa concluye con un tibio acuerdo sobre las minorías" en El País de 10 de octubre 1993

48. ARGEMI, AURELI: "Europa en recerca dels drets de les minories. O dels pobles?" en Europa de les Nacions, n.º 20, Hivern 1993-94, pág. 15

49. Comparecencia del Ministro de Asuntos Exteriores, Javier Solana Madariaga, ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado español. Sesión Informativa. 18 de noviembre 1993. Doc: Diario de Sesiones del Senado. Comisión de Asuntos Exteriores, V Legislatura, Comisiones n.º 35, Año 1993, págs. 4 y 5.

50. Despacho de la Agencia EFE fechado en Estrasburgo el 10 de noviembre de 1994.

51. Austria, Chipre, Dinamarca, Finlandia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Lituania, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, España,

Suecia, Suiza y Reino Unido.

52. Diario de Sesiones del Pleno del Congreso de los Diputados de 11 de mayo de 1995. BOCG-Congreso n° 146, pág. 7760

53. Diario de Sesiones del Pleno del Congreso de los Diputados de 11 de mayo de 1995. BOCG-Congreso, n° 146, pág. 7757

54. Doc: 1-436/79

55. Doc: 1-371/79

56. Doc: 1-790/79

57. Doc: 410/78

58. Résolution sur une Charte Communautaire des Langues et des Cultures Régionales et sur une Charte des Droits des Minorités Ethniques. Rapporteur Gaetano Arfé de 16 octubre de 1981, n° C 287/106, D.O.CE 9 noviembre 1981.

Ver también el Rapport elaborado por Gaetano Arfé para la Comisión de 16 de marzo 1981. Doc: 1-965/80

59. Resolución publicada en el Diario Oficial de la CE de 14 de Marzo 1983. Doc: C 68/103

60. Doc: 2-1259/84

61. Doc: 2-411 84 de 31 de julio 1984.

62. Doc: B2-0076/85

63. Doc: B2-321-85

64. Doc: B2-1514/85

65. Doc: B2-1532/85

66. Doc: B2-890/86

67. Doc: B2-31/86

68. Doc: B2-1015/86

69. Doc: B2-1323/86

70. Doc: B2-1436/86

71. Doc: B2-853/86

72. Doc: B2-794/87

73. Doc: B2-149/87

74. Doc: B2-291/87

75. Documento de trabajo del diputado Kuijpers fechado el 2 de octubre de 1986. Doc: PE 105.139/déf.

76. CEMBRERO, IGNACIO: "El Parlamento Europeo aprueba una resolución de apoyo a las lenguas minoritarias" en El País de 31 de octubre 1987, pág. 21

77. "El Parlament Europeu debat el suport a les llengües minoritàries" en Avui de 30 de octubre 1987.

78. Doc: A 2-150/87 de 28 de septiembre 1987, DOCE 318 de 30 noviembre 1987, pág. 160.

79. Se refería al Informe Kuijpers.

80. Doc: PE 113.309

81. GENERALITAT DE CATALUNYA: El català reconegut pel Parlament Europeu, Col. Temes d'Actualitat nº 2, Barcelona 1991

82. Reglamento nº 1, DO L 17 de 6 octubre 1958, pág. 385

83. Artículos 155 y 160 del Acta de Adhesión de Dinamarca, Gran Bretaña e Irlanda a la CE. DO L nº. 73 de 23 de marzo de 1972.

84. GASOLIBA, CARLES: "El Parlament Europeu i els drets lingüístics". Intervención ante el Grupo de Trabajo IV de la ARE. Girona, 23/25 de abril 1992

85. Doc: B2-1323/85

86. Doc: B2-217/87

87. Doc: B2-1387/87

88. Peticiones 113/88 y 161/89.

89. La cuantificación de la población del territorio catalanoparlante en 10 millones de personas ha hecho creer que el Parlamento Europeo incluía la Comunidad Valenciana en dicha área. De otro modo, no se alcanza esta cifra.

90. Informe elaborado por la Comisión de Peticiones sobre la situación de las lenguas en las Comunidades Europeas y la de la lengua catalana. Ponente Sra. Reding, 27 de junio 1990. Doc: A3-169/90

91. Diario Oficial Sesiones de 10 y 11 de diciembre 1990.

92. MONTSERRAT, ANTONI: "L'aplicació de la resolució del Parlament Europeu sobre la llengua catalana a les institucions europees" en Revista de Llengua i Dret, nº 18, desembre 1992, págs. 67 a 94

93. Fragmento del discurso de Mark Killilea ante el Parlamento Europeo el 9 de febrero de 1994 en defensa de su Informe

94. Se pide "a la Comisión competente que estudie el trato que los Gobiernos de los Estados miembros dispensan a las lenguas menos habladas de la CE". Doc: B3-0016/90.

95. Pide una mayor intervención de los Estados en la introducción de las lenguas minoritarias en todos los niveles de la enseñanza, en los servicios públicos y en los medios de comunicación. Doc: B3-2113/90.

96. En ella insta al gobierno de Navarra a reconocer legalmente las emisoras en euskera existentes y a promover la utilización de dicha lengua en los medios de comunicación navarros, de acuerdo con lo previsto en la ley. Doc: B3-0523/91.

97. Pide que el Consejo "en nombre de todos los gobiernos de los Estados miembros de la CE" firme "si es posible de forma conjunta" la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias del Consejo de Europa. Doc: B3- 1351/92

98. DOCE 42 de 15 de febrero 1993, págs. 153-173

99. "Le Parlement Européen réaffirme son soutien pour nos langues" en Contact Bulletin, vol. 11, n° 1, Printemps 1994, pág. 2

100. Doc: A3-0042/94

101. Anexo I al Doc: ES/RR/244/244469 PE 201.963/def.

102. TRUYOL, ANTONIO: Los Derechos Humanos, Ed. Tecnos, Madrid 1984, pág. 186

103. CSCE: "Documento de clausura de la reunión de Madrid" en Afers Internacionals, N° 2 de 1983, Ed. Centre d'Informació i Documentació Internacionals a Barcelona (CIDOB), págs. 113 y 126.

104. FUENTES, JORGE: "El Congreso de Viena de 1989" en Política Exterior, Vol.III, N° 9, Invierno 1989, págs. 139 a 157.

105. El subrayado es nuestro

106. El subrayado es nuestro.

107. El subrayado es nuestro

108. CSCE: "Conclusiones de la Conferencia de Viena" en Política Exterior, n° 9, Invierno 1989, Documentación, págs. 238 a 270.

109. Todos los existentes en aquel momento, excepto Albania que asistió como país observador.

110. Documento de la Reunión de Copenhague de la Conferencia sobre la Dimensión Humana de la CSCE de 29 de Junio 1990

111. LOPEZ de LATORRE, SALVADOR: "De Helsinki a París" en Política Exterior, Vol.IV, N° 18, 1990, pág. 70.

112. El subrayado es nuestro

113. Documento del Simposio de Cracovia sobre el Patrimonio Cultural de los Estados participantes en la CSCE de 7 de Junio 1991.

114. Despacho de la Agencia "France Presse" de 6 de julio 1991.

115. El subrayado es nuestro

116. Informe de la Reunión de Expertos sobre Minorías Nacionales de la CSCE. Ginebra 19 de Julio 1991

117. Estos mecanismos dibujados en la Carta de París fueron concretados por el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la CSCE celebrado en Berlín los días 19 y 20 de julio de 1991.

118. En esta reunión se admitió a los tres nuevos países bálticos independientes (Estonia, Letonia y Lituania) como miembros de pleno de derecho de la CSCE, por lo que el Foro empezó con 35 miembros y terminó con 38.

119. FISCHER, DIETRICH: "La guerra por la paz" en El Observador de 2 de marzo de 1993, pág. 18

120. Unos días antes de la sesión el Congreso de los Diputados del Pueblo de la URSS aprobó por primera vez una declaración sobre los derechos humanos.

121. "Una CSCE insólita" en El País de 15 de Septiembre 1991.

122. Despachos de las Agencias "Reuter" y EFE de 4 de octubre 1991.

123. Con el ingreso de Georgia, Croacia y Eslovenia el 24 de marzo de 1992 la CSCE pasó a tener 51 Estados miembros. Japón mandó observadores.

124. El Desafío del Cambio. Documento Final de Helsinki 1992.

125. SKUBISZEWSKI, KRZYSZTOF: "Europa central y la Unión Europea" en Política Exterior, Vol. VIII, n° 39, Julio 1994, pág. 20

126. VAN DER STOEL, MAX: "Prevenir conflictos y construir la paz: un reto para la CSCE" en Revista de la OTAN, Agosto 1994, n° 4, pág. 7

127. En esta cumbre la CSCE cambió su nombre por el de Organización para la Seguridad y Cooperación de Europa (OSCE)

CAPITULO V

LOS CAMBIOS EN LOS ESTADOS

LAS MEJORAS CON RESPECTO A LAS MINORÍAS LINGÜÍSTICAS

5.1: Objetivos y estructura del capítulo

Una vez analizados la cincuentena de documentos en materia lingüística producidos por las tres instituciones pan-europeas, se pueden desprender de ellos una serie de principios generales y comunes que conforman el entramado de una verdadera doctrina. Por más que cada uno de ellos persigue un fin específico en virtud del momento y de las circunstancias en que es aprobado por el órgano competente, la suma de todas estas declaraciones configura un cuadro de derechos y deberes mínimos relacionado con el proceso de unión europea. La CELRM aparece, sin duda, como la aportación más completa y contundente a este esquema de relaciones lingüísticas.

En la **Primera Parte** de este Capítulo se exponen las principales conclusiones de esta doctrina, comenzando por la valoración que se hace del plurilingüismo como seña de identidad europea y la ausencia de una jerarquía de lenguas, que otorgue a unas más derechos que a otras en el marco comunitario y europeo en general. También se repasa el proceso de unificación doctrinal entre las dos Europas.

En la **Segunda Parte** se hace un balance de la repercusión que esta doctrina ha tenido en la práctica, cómo se ha ido incardinando en la normativa comunitaria, estatal y regional, así como los efectos que ha tenido en la evolución más reciente de las lenguas minoritarias.

Por último este Capítulo se cuestiona sobre las posibilidades de una simplificación del sistema lingüístico vigente en las instituciones comunitarias, aunque sólo sea con vistas a futuras ampliaciones de la UE.

5.2: La confección de un cuerpo doctrinal

Desde 1975 las tres máximas instituciones europeas (la Comunidad Europea, el Consejo de Europa y la Conferencia para la Seguridad y la Cooperación en Europa) han producido no menos de 50 grandes declaraciones relacionadas con las lenguas y las minorías lingüísticas, observándose una clara aceleración a partir de 1979. A ellas hay que sumar algunos otros documentos de alcance universal, como los de la ONU relativos a los derechos humanos, o de organismos internacionales, como la UNESCO, que también afectan a los europeos. Entre todos ellos es posible deducir un verdadero cuerpo doctrinal sobre esta materia, una buena parte del cual ya es vinculante para los Estados implicados en la construcción de una Europa unida.

Sin embargo, no todos los documentos han tenido ni el mismo rango legal y político, ni la misma repercusión. En este sentido, creemos que se pueden seleccionar como más destacados

del Consejo de Europa:

- el Informe Cirici (1981);

- la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias (1988);
- la Declaración de Viena (1993);
- y el Convenio-Marco para la Protección de las Minorías Nacionales (1994).

del Parlamento Europeo:

- la Resolución Arfé (1981);
- el Informe Kuijpers (1987);
- y el Informe Killilea (1994):

de la CSCE:

- la Declaración de Copenhague sobre Dimensión Humana de 1990.

Lo habitual es que cada declaración sobre minorías lingüísticas se base en las anteriores de la misma institución y también en las de las otras. Así, el PE sigue con mucha atención los trabajos del C. de E., mientras que el C. de E. cita constantemente las declaraciones del órgano parlamentario comunitario. Aunque en menor medida, también la CSCE sigue los pasos del C. de E. en esta materia, sobre todo a partir de 1989. En todo caso, todas estas organizaciones parten de los mismos textos universales referidos a derechos humanos.

El resultado es un cuerpo doctrinal sólido y sin contradicciones importantes. Las diferencias residen más en el grado de compromisos y de obligaciones que asumen los Estados

que no en las declaraciones teóricas propiamente dichas.

Después cada declaración adopta el tono y el contenido derivado de las circunstancias político-jurídicas en las cuales es elaborado y aprobado, pero en el terreno doctrinal no se observan retrocesos entre documentos consecutivos y en conjunto el progreso es evidente.

5.2.1: La CELMR, su punto álgido

El proceso lingüístico tiene su punto álgido en la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, sin duda el más ambicioso y concreto de los textos referidos a las lenguas minoritarias y el que impone unos deberes más precisos a los países signatarios. Otra cosa es que el Comité de Ministros, es decir los gobiernos estatales, rebajara posteriormente el nivel de los compromisos fijados por el proyecto aprobado por la Asamblea Parlamentaria.

5.2.2: La unificación doctrinal entre la Europa del Este y la del Oeste

De hecho, el primer paso en la unificación doctrinal sobre los derechos lingüísticos entre la Europa democrática y el antiguo bloque soviético se dió con el Acta de Helsinki de 1975. Con mucha mayor claridad aún que en la parte occidental,

la nueva visión democrática y europea de las políticas lingüísticas se introdujo en la parte oriental en gran medida por la vía de los derechos humanos. El instrumento político-institucional utilizado fue la CSCE.

Los derechos lingüísticos de las minorías figuraron entre 1975 y 1990 como uno de los capítulos del tercer "cesto" sobre la dimensión humana en conjunto, traduciendo a los acuerdos los principios universalmente aceptados. Conviene subrayar, sin embargo, que precisamente los derechos humanos constituyeron el núcleo de las discusiones más duras y el origen de las mayores discrepancias de todas las declaraciones elaboradas por la CSCE entre ambas fechas.

La caída del muro de Berlín en noviembre de 1989, la reunificación de Alemania en 1990 y la desaparición de la URSS con el consiguiente hundimiento del bloque soviético a partir de 1991, cambiaron radicalmente las perspectivas. Y si los documentos posteriores a Helsinki aportaron pocas novedades, la Declaración de Viena de 1989 dió los primeros pasos firmes, dibujando un primer cuadro básico de derechos lingüísticos. Se despegaba así del simple ejercicio de los derechos humanos elementales y se superaba la simple prohibición de mantener medidas discriminatorias. Lo más importante era todavía que el esquema trazado anteriormente ya era válido para todos los países situados entre los Urales y el Atlántico.

El paso definitivo se dió con la Declaración de Copenhague de 1990, programa de mínimos homologable a los que estaban elaborando el Consejo de Europa y el Parlamento Europeo. Al asumir esta declaración de derechos, la Carta de París (noviembre 1990) consagró por primera vez un mismo cuadro de derechos y valores para todos los países europeos. Los principios doctrinales en materia lingüística quedaron implantados así en ambas Europas, pero no los mínimos prácticos que seguían reservados a la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias, por cierto entonces todavía en el Comité de Ministros del Consejo de Europa. En noviembre de 1991 cayó el último obstáculo al admitir la URSS que el respeto y la vigilancia de los derechos humanos no era un asunto interno de cada Estado, sino una garantía de paz de y para la comunidad internacional.

Entre 1991 y 1994 entraron en el Consejo de Europa países como Bulgaria, la República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Lituania, Polonia y Rumanía, mientras negociaban su adhesión Albania, Bielorrusia, Croacia, Letonia, Moldavia, Rusia y Ucrania¹. Ni que decir tiene que la adhesión comportó la aceptación de todo el importante acervo doctrinal de esta institución, dentro del cual iba el paquete lingüístico. Hungría, por ejemplo, firmó la Carta de las lenguas minoritarias el 5 de noviembre de 1992, junto con otros 10 Estados occidentales.

La Declaración de Budapest de 1994 en su punto 22 reconoció explícitamente la identidad entre los principios defendidos por el C. de E. y la CSCE, y llamó a los Estados no miembros del Consejo a firmar -por invitación- la Convención Marco sobre la Protección de las Minorías Nacionales. El "trasvase" doctrinal y documental entre todos los países europeos era ya un hecho, hasta el punto que países no pertenecientes a una institución podían firmar sus documentos, cuyas bases ideológicas ya estaban asumidas por el conjunto de Estados europeos en otras declaraciones.

Lo cierto, también, es que las nuevas Constituciones democráticas de estos países ex-comunistas, como las de Eslovenia (1991), Croacia (1991), Eslovaquia (1992), República Checa (1992), Hungría (1993) o Rusia (1993), incluyeron los derechos lingüísticos de sus minorías, en ocasiones incluso en términos francamente progresistas. La ordenación lingüística de esta zona se alineaba así con la occidental desde las mismas bases jurídicas de los Estados y no sólo desde la perspectiva de las instituciones pan-europeas.

Una vez elaborada y habiendo entrado en vigor la CELRM, un análisis de los documentos aprobados posteriormente indica que los organismos europeos dan prácticamente por cerrado el proceso en Europa Occidental y centran sus preocupaciones en los países de la Europa Central y Oriental. A este respecto es paradigmático el Informe Killilea del Parlamento Europeo

(1994), sin duda el más completo después de la Carta. A partir de 1991 las distintas declaraciones tratan más de prevenir, condenar y reconducir los conflictos en los que intervienen minorías étnicas y lingüísticas, que en profundizar en la línea de los años 1980 de ir clarificando posiciones y adoptando compromisos. Los problemas de las minorías lingüísticas en la Unión Europea aparecen mucho menos graves en comparación con los que viven las minorías en Europa Central y Oriental.

5.3: La doctrina europea: Los derechos humanos de las minorías lingüísticas

La conexión entre el respeto a los derechos humanos y la defensa de las minorías lingüísticas es reconocida de forma unánime por todos los documentos de las instituciones europeas y universales. El derecho a usar la lengua propia en la vida pública y en la privada se vincula directamente a los principios contenidos por lo menos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en la Convención Europea para la Salvaguarda de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de 1950 y el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos de 1966, ratificados y ampliados por el Protocolo Adicional de 1993 a la Convención Europea y la Declaración de Viena sobre los Derechos Humanos también de 1993.

Sin embargo, la dificultad principal estribaba en que los derechos reconocidos en las tres primeras declaraciones son derechos individuales y los Estados se resistían a extenderlos a las colectividades. Esta contradicción no empezó a ser resuelta hasta 1992-1993 a raíz del citado Protocolo Adicional a la Convención Europea impulsado por el Consejo de Europa y recogido por la CSCE.

Los textos fundamentales de los derechos humanos, tanto de carácter internacional como constitucional establecen:

- el derecho a la "no discriminación" por razón de lengua y a la supresión de los obstáculos que impidan una igualdad efectiva en el uso de todas las lenguas y sus hablantes. Los artículos 1.c) y 5.d) de la Carta Europea para las Lenguas Regionales o Minoritarias son taxativos al respecto;

- el derecho a la libertad de expresión, "que no sólo protege el contenido de lo que se expresa, sino que salvaguarda también la forma. La expresión si es libre, puede hacerse en la lengua que sea. Y si se impone un idioma, no hay libertad de expresión", afirma el profesor Santiago Petschen partiendo de dicha Carta²;

- el derecho a la libertad de enseñanza, aunque no de una forma tan rotunda y explícita como en los dos derechos anteriores. La tesis general mantenida es que el establecimiento de las

condiciones idóneas para el uso de las lenguas, incluye su aprendizaje en la escuela, por lo que los poderes públicos están obligados a regular la enseñanza de las lenguas minoritarias en los centros educativos en el marco de los derechos humanos culturales, educativos y lingüísticos.

5.3.1: El plurilingüismo, un valor europeo

Existe unanimidad total en considerar el plurilingüismo como un valor europeo, una señal de identidad que es preciso reivindicar y salvaguardar. El reconocimiento formal y total de este principio constituye la lógica contrapartida de no designar ninguna lengua con categoría europea. En consecuencia, la doctrina derivada del análisis de las declaraciones afirma sin ambages, ni restricciones que la defensa y el fortalecimiento de las lenguas regionales o minoritarias representan una contribución, más que importante, decisiva para el proceso de construcción de una Europa fundada en los principios de la democracia y de la diversidad cultural.

Es más, la pérdida de alguna de estas lenguas significaría automáticamente un debilitamiento de la tradición y de la riqueza multicultural y plurilingüística de Europa, por lo que se reclaman medidas urgentes y eficaces destinadas a su preservación y normalización.

5.3.2: No hay jerarquía de lenguas

Desde un punto de vista de política lingüística ninguno de los documentos examinados establece una jerarquía de lenguas en Europa. Los idiomas se sitúan o se agrupan en función de su status legal, es decir si son lenguas de Estado o no, o si gozan de algún reconocimiento legal u oficial. Las listas de lenguas minoritarias recogidas en algunos anexos, presuponen automáticamente un criterio de selectividad muy dudoso y con frecuencia discutible.

Por lo demás, las lenguas varían solamente según su número de usuarios, su función y peso social, su influencia cultural, etc., pero en ningún caso se fija un orden de importancia que comporte determinados derechos suplementarios, privilegios u obligaciones.

Es cierto que algunas lenguas de Estado de alcance universal, como el inglés o el francés, reciben el tratamiento de "lenguas de trabajo" por ejemplo en el Consejo de Europa, pero este uso no proporciona prerrogativa jurídica alguna fuera de este ámbito, aunque es cierto que supone muchas ventajas prácticas que en principio se agotan en el ámbito burocrático del organismo.

En cualquier caso, resulta imposible encontrar alguna recomendación en favor del uso de alguna lengua concreta y

mucho menos con valor para toda Europa, o por lo menos para toda la Unión Europea. No existe ni una sola propuesta formal para instaurar una lengua con rango oficial y obligatoria para todos los ciudadanos.

En el otro extremo, y a pesar de que en algún momento se formulan quejas por las complicaciones derivadas del uso de 11 lenguas simultáneamente que dan una gran complejidad lingüística a las relaciones intra-comunitarias y al funcionamiento de sus organismos, tampoco se propone una limitación en un número concreto de lenguas o el abandono de otras con simples criterios de utilidad.

5.3.3: Las dificultades para fijar una lengua europea común

Las propuestas siempre a título particular, realizadas por ejemplo en algún debate parlamentario, en el sentido de establecer o reconocer una sola lengua para uso obligado de todos los europeos, reciben tres tipos de críticas básicas:

a) ninguna lengua, ni siquiera entre las más universales, goza actualmente de tal hegemonía como para ser declarada "la lengua europea" y dictar algún tipo de obligación general en orden a su aprendizaje y conocimiento. Otra cosa distinta es que la extensión de hecho de alguna de ellas, principalmente el inglés, y su fuerte implantación en sectores claves como el

comercio, los medios de comunicación o la tecnología, favorezcan un amplio uso social. Se trata de una expansión no regulada y que obedece a una especie de ley del mercado para las lenguas, por otra parte muy variable según las zonas.

La lengua más hablada dentro de la UE es con gran diferencia el alemán, con unos 90 millones de germanoparlantes. ¿Es imaginable en estos momentos decretar en la RFA o en Austria algún tipo de obligación legal para que toda la población aprenda el inglés en calidad de una hipotética lengua europea? Y lo mismo puede decirse de cualquier otro país comunitario.

Ciertamente los poderes públicos de cada Estado tienen la obligación de favorecer e impulsar el aprendizaje de lenguas extranjeras, pero será la demanda la que condicionará la oferta de escuelas de idiomas, de profesores, ayudas y subvenciones, etc., así como la normativa en general dentro de los esquemas tradicionales de las "linguae francae", como pueden ser los intercambios culturales, los acuerdos bilaterales, etc.

Ello no obsta para que algunos países establezcan la obligatoriedad de aprender algún idioma extranjero sea por razones históricas o de proximidad cultural, sea por cualquier otro motivo, pero nunca con la intención de implantar "una" lengua europea;

b) la experiencia histórica demuestra que cualquier "lingua franca" tiende a dominar y a substituir a las lenguas que se sitúan por debajo, por lo que a la larga suele originar conflictos en el marco de situaciones diglósicas. Este es el caso de las lenguas colonizadoras, cuando han sido implantadas mediante la coerción y por medio de medidas administrativas, políticas e incluso policíaco-militares. Concretamente en Europa donde ha aumentado la sensibilidad de algunas lenguas frente a la penetración de otras (por ejemplo, la del francés frente al inglés, tal como demuestra la "ley Toubon"), esta sensación de dominio y de colonización, originaría sin duda una fuerte resistencia ante la imposición de otra lengua que no fuera la propia, siempre con el citado carácter de lengua pan-europea;

c) lo normal es que a medio o largo plazo las lenguas comunes se fragmenten a su vez a medida que se adaptan a los distintos territorios de su ámbito, sobre todo si éstos disponen de una lengua social y culturalmente potente. De este modo, el problema vuelve tarde o temprano a su principio, sólo que más agravado por la cantidad de conflictos y de situaciones nuevas, ya que no pocas veces han dejado otra(s) lengua(s) híbrida(s) detrás suyo.

5.3.4: Lenguas de Estado y lenguas minoritarias

Las declaraciones de las instituciones europeas distinguen solamente entre lenguas de Estado y las minoritarias, existiendo una cierta confusión con el irlandés y el luxemburgués incluídas simultáneamente en ambas definiciones. Esta separación deriva no sólo de su distinto rango legal y de su uso social, sino del grado de protección jurídica y material otorgada por los poderes públicos. Sin embargo, los documentos evitan cuidadosamente dar aliento a unas en detrimento de otras. Cada lengua, de Estado o no, debe convivir con las otras en un perfecto equilibrio y muy especialmente sin que se produzcan discriminaciones en el orden legal o social, en las instancias públicas o privadas o en el territorio que corresponde a cada una.

Ni siquiera se hace distinción alguna entre las lenguas minoritarias con un claro riesgo de desaparecer con respecto a aquéllas con perspectivas no sólo de sobrevivir, sino incluso de afianzarse y de expandirse. Ello no impide que constantemente se denuncie en términos generales, pero muy enérgicos este peligro de desaparición, con el consiguiente empobrecimiento cultural de Europa. Aceptada esta división en lenguas de Estado y lenguas minoritarias, todas las lenguas europeas reciben, pues, el mismo tratamiento de principio y gozan de los mismos derechos mínimos.

Ahora bien, es indiscutible que las minorías lingüísticas conectadas con Estados soberanos han recibido frecuentemente la garantía de su desarrollo por medio de diversos tratados internacionales, referidos a cada una de las situaciones concretas. Por el contrario, las minorías no conectadas con nacionalidades con Estado propio, no han gozado en el pasado de la misma protección internacional. De ahí que la actuación de las instituciones europeas esté resultando considerablemente positiva para ellas. Sus aspiraciones coinciden con los objetivos de dichas instituciones, como por ejemplo el Consejo de Europa. Uno de estos objetivos que aparece con mucha frecuencia en los textos es la conservación de las culturas europeas, de tal modo que en no pocos casos se pone más el acento en la protección de las lenguas como manifestaciones culturales que como expresión de los derechos humanos.

La Carta Europea de las Lenguas Minoritarias o Regionales excluye de su ámbito de aplicación a las lenguas estatales, aún en aquellos casos en que tienen un carácter regional y minoritario, así como a las lenguas no europeas aunque sean habladas por un gran número de personas, como acontece con el árabe. Lo que parece buscar el Consejo de Europa es evitar el deterioro de las manifestaciones culturales tradicionales europeas en cuanto tales, dado que su pérdida representaría una merma en el conjunto de las características propias de Europa. La Carta advierte que estas lenguas "corren el riesgo de desaparecer", fenómeno que "debilitará la tradición y la

riqueza cultural de Europa"³.

5.3.5: Las obligaciones de los poderes públicos hacia las minorías

Las instituciones europeas sostienen con claridad que todos los poderes públicos están directamente concernidos en la defensa y promoción de las minorías lingüísticas. Los poderes estatales deben proporcionar un marco legal y político suficientemente estable y flexible para dar cabida a todas las situaciones que se den en el Estado, de modo que queden a salvo los derechos fundamentales de estas lenguas minoritarias en orden a su recuperación, su promoción y su normalización, así como el derecho a la diferencia lingüística en relación a la(s) lengua(s) de Estado.

En consecuencia, la actividad de los poderes regionales y locales debe basarse en primer lugar en la seguridad jurídica y política y en las garantías para el ejercicio de los derechos implicados proporcionadas por las instituciones parlamentarias y judiciales del Estado.

5.3.5.1: El papel del Estado

La doctrina europea establece que el Estado debe:

- garantizar constitucionalmente o mediante una ley del máximo rango normativo posible, el reconocimiento de cualquier lengua minoritaria, si es posible declarándola oficial en su territorio en régimen de co-oficialidad con la lengua del Estado para con el fin de dotarla de carácter territorial;
- asegurar la protección de las lenguas minoritarias en su ámbito para amparar el ejercicio de los derechos básicos;
- velar por su uso libre en todas las formas de comunicación, privadas y públicas;
- castigar de acuerdo con la ley los actos de discriminación motivados por la pertenencia a una minoría lingüística;
- reconocer el derecho a la enseñanza en todos los niveles de la lengua propia de una comunidad y establecer programas educativos escolares y universitarios para hacer posible este principio, así como la correspondiente formación de profesores;
- reconocer la utilización de estas lenguas en los medios de comunicación y su presencia en los medios de titularidad pública;

- reconocer el uso de las lenguas minoritarias en todas las actividades culturales;
- asegurar el uso de todas las lenguas en la vida jurídica, administrativa, y en el conjunto de la vida pública;
- incluir en todo momento los derechos lingüísticos de sus minorías en el desarrollo legislativo, sobre todo por lo que respecta a la enseñanza, el mundo laboral, la señalización, los tribunales de justicia, la policía, el correo, las telecomunicaciones, la radio y la televisión;
- garantizar la aprobación y aplicación de las medidas necesarias para la normalización completa de las lenguas minoritarias en la medida de lo posible y partiendo del hecho de que se trata de lenguas en condiciones difíciles que exigen un esfuerzo particular y frecuentemente una protección decidida para evitar su desaparición;
- reconocer las instituciones culturales, académicas o científicas representativas de la comunidad lingüística y que se hayan distinguido en la defensa y promoción de la lengua, así como en su conocimiento y en el de sus problemas;
- y dedicar un capítulo presupuestario específico a fin de asegurar el proceso de defensa y de promoción de las lenguas, en la medida que necesiten una ayuda financiera suplementaria.

5.3.5.2: El papel de los poderes regionales y locales

Las autoridades subestatales (regionales, departamentales, cantonales, provinciales, municipales, etc.) deben asumir la obligación de aplicar la reglamentación estatal dentro de su ámbito territorial y competencial. Las instituciones europeas reconocen que la enorme variedad de administraciones regionales y locales en Europa complica su adaptación al sistema lingüístico. Por otra parte, en muchos Estados las zonas administrativas no se corresponden con las lingüísticas. Ello impide el establecimiento en los documentos analizados de un modelo único y fijo para la gestión regional y local de las minorías. Ahora bien, queda claro que allí donde existen y tienen minorías a su cargo, los poderes subestatales tienen un papel importante que jugar. Y donde no existen, corresponde al Estado actuar de forma subsidiaria.

La doctrina europea establece que los poderes subestatales deben:

- aplicar los principios constitucionales o legislativos en orden a la recuperación y normalización de las lenguas minoritarias, su estandarización, su utilización y su extensión hasta que su normalización sea efectiva;
- legislar en el marco de sus competencias, con el fin de proporcionar un soporte jurídico a sus acciones y al proceso

completo del ejercicio de los derechos lingüísticos de la población;

- incorporar la lengua propia como oficial de la administración autónoma y de las corporaciones locales que dependan de ellas, garantizando que cualquier documento procedente de esta administración o que le sea dirigido en esta lengua tenga el valor y la eficacia de una lengua oficial;

- asegurar la atención al público en la lengua autóctona y crear servicios de traducción y de intérpretes allí donde fuera necesario;

- fijar la denominación de los topónimos en la lengua autóctona y determinar los nombres oficiales de los territorios, de las localidades, de las vías de comunicación, y reglamentar los avisos y carteles públicos, respetando en cualquier caso las normas internacionales aceptadas por el Estado;

- garantizar el aprendizaje y el conocimiento de la lengua propia por parte de los funcionarios de la administración regional y/o local;

- garantizar el derecho a recibir una primera enseñanza en la lengua materna, aportando los medios necesarios para ello;

- garantizar la enseñanza de la lengua a todos los niveles, haciendo aplicar la legislación del Estado y procurando que existan las condiciones materiales para que resulte posible;
- favorecer el uso de la lengua propia en la universidad, con el fin de que, si puede, sea una lengua de uso científico y de investigación;
- enseñar la lengua propia a los adultos que no han tenido ocasión de aprenderla;
- organizar cursos específicos de aprendizaje de la lengua para cubrir las distintas situaciones (funcionarios, inmigrantes, discapacitados, etc.);
- asegurar la preparación del profesorado necesario a fin obtener una cualificación completa en lengua autóctona;
- implantar la lengua propia como lengua normalmente utilizada en los medios de comunicación de titularidad pública y ámbito regional;
- subvencionar las publicaciones periódicas en la(s) lengua(s) minoritaria(s) y ayudar los medios de comunicación que la utilizan total o parcialmente, con especial atención a la televisión;

- realizar una política de publicaciones propias y de estímulo a la edición de libros en la lengua minoritaria, para fortalecer la producción editorial y su difusión;
- estimular y apoyar la creación teatral y cinematográfica en lengua autóctona, el doblaje y el subtitulado de películas realizadas en otras lenguas, así como cualquier otra manifestación cultural o espectáculo que se haga en esta lengua regional;
- favorecer el uso de la lengua en actividades populares como festivales, cancioneros, marionetas, fiestas populares, ferias, etc.;
- impulsar el uso de la lengua regional en las actividades intelectuales, mercantiles, publicitarias, asociativas, profesionales, deportivas, religiosas, políticas, etc.;
- organizar campañas de concienciación y de divulgación de la lengua;
- adaptarse a la situación socio-lingüística a fin de crear estructuras especiales allí donde fuera necesario y planificar la acción para ir perfeccionando el proceso de normalización;
- y crear mecanismos de seguimiento de la lengua para informar a las instancias estatales y europeas de su evolución,

necesidades, incidencia, etc.

5.3.6: La cooperación transfronteriza en materia de lenguas

Además de recomendar que las estructuras administrativas se correspondan lo más ajustadamente posible a las áreas lingüísticas, las declaraciones europeas dedican una gran atención a la cooperación entre los poderes públicos de Estados distintos en el caso de aquellas áreas lingüísticas que formen parte de más de un Estado. Una vez más, las autoridades estatales deben proporcionar el marco legal general, por ejemplo con tratados bilaterales de rango internacional, mientras que las autoridades regionales y locales de ambos lados de la frontera deben llevar a la práctica los mecanismos de cooperación y crear los propios en caso de ser necesarios u oportunos. La idea es vaciar de contenido las fronteras estatales, motivo tradicional de conflictos, y superar la separación que los Estados han impuesto a determinados pueblos. La Constitución belga⁴ y el Estatuto de Autonomía del País Vasco⁵, por poner dos ejemplos, tienen en cuenta la posibilidad de fomentar las relaciones entre los grupos étnicos y lingüísticos repartidos entre su Estado y otros a través de tratados internacionales, en cuya elaboración tienen una mayor o menor participación, según los casos.

Asimismo, los poderes regionales y/o locales deben establecer mecanismos de coordinación cuando dentro de un mismo Estado las divisiones administrativas no coincidan con las lingüísticas.

Como norma las minorías cuya lengua es oficial en algún Estado vecino, suelen gozar de algún tipo de protección legal, aunque no siempre de ayuda material por parte del Estado titular. Este es el caso, por ejemplo, del danés en Alemania. Sin embargo, no existe ningún caso de colaboración lingüística cuando la lengua afectada es minoritaria en ambos Estados, con la relativa excepción del sami entre Suecia, Finlandia y Noruega. Francia y España firmaron el 10 de marzo de 1995 en Bayona (Francia) un Tratado de cooperación transfronteriza que permitía acciones comunes de ayuda al euskera y al catalán a ambos lados de la frontera. En el mes de mayo el PNB presentó en el Congreso de los Diputados español una proposición de ley para permitir a las autoridades regionales y locales firmar convenios de cooperación, entre ellos en materia lingüística, ya que las Comunidades Autónomas, las Diputaciones y los Ayuntamientos tienen competencias en este terreno.

5.3.7: Las diferencias entre las minorías lingüísticas territoriales y las emigrantes

Aunque no existe acuerdo total al respecto, las declaraciones examinadas separan claramente el tratamiento a dar a las minorías lingüísticas territoriales de las minorías formadas por inmigrantes. Las diferencias son básicamente dos:

- las minorías lingüísticas forman parte inseparable de la historia, la tradición y la cultura de Europa, en cuya secular evolución han tomado parte a veces muy activamente y desde posiciones políticas y culturales muy destacadas:
- las minorías lingüísticas se caracterizan también por su base territorial con la que se identifican y que igualmente forma parte consubstancial de su identidad.

Los colectivos de inmigrantes, en cambio, proceden de culturas ajenas a Europa, como la árabe, la china, la hindú o la centroafricana, y no se asimilan a ningún territorio concreto y estable del Continente. La tendencia es estudiar los problemas de ambas colectividades por separado, aunque en algún caso se solicite para los inmigrantes medidas parecidas a las pedidas para las minorías lingüísticas.

Se trata del criterio de personalidad frente al de territorialidad. El primero supone el reconocimiento de los

derechos lingüísticos individuales independientemente de la situación geográfica de sus hablantes dentro del Estado. Este es el caso de los inmigrantes o de los hablantes de una lengua dispersa, como los gitanos. Algunos expertos, como Lluís M^a de Puig, asimilan esta situación a las minorías lingüísticas, como los daneses en Alemania o los francófonos de Bruselas.

El segundo criterio, es decir la fijación territorial de las lenguas y por lo tanto de las políticas lingüísticas correspondientes, es el clásico en Europa y se adapta mejor a los objetivos para la supervivencia y la normalización de las lenguas minoritarias con una implantación en territorios concretos. Para empezar es mucho más sencillo declarar la co-oficialidad de la lengua, limitándola a su propio espacio geográfico. Por otra parte, permite una actuación más autónoma de los poderes subestatales concernidos en relación a la lengua del Estado. Este es el criterio que se ha manejado tradicional y sistemáticamente en Europa: Escocia, Suiza, Bélgica, Galicia, etc.

En el caso del principio de personalidad prácticamente sólo pueden actuar las autoridades estatales, ya que la lengua de la minoría, caso de ser declarada co-oficial lo sería para todo el Estado, y los poderes locales sólo podrían actuar en la plasmación de las órdenes del gobierno central. De todos modos, las instituciones europeas se inclinan por fórmulas mixtas siempre que éstas sean factibles con el propósito de fijar al

máximo las lenguas minoritarias y dotarlas del adecuado soporte legal y material.

5.3.8: El plurilingüismo como arma para la tolerancia

En varias ocasiones las instituciones europeas señalan el plurilingüismo como vía normal y natural para el conocimiento y la comprensión entre los distintos pueblos. Por ello, se recomienda calurosamente su aplicación a través, por ejemplo, de intercambios de jóvenes y por supuesto introduciendo su aprendizaje en todos los programas y planes escolares. Este mayor conocimiento será a su vez un modo de acercar a poblaciones que tradicionalmente se han ignorado y que incluso han sido adversarias.

5.4: La transposición de la doctrina a las legislaciones estatales y regionales

Es evidente que en estos momentos la cuestión principal reside en la transposición de las declaraciones europeas al terreno práctico, es decir a las legislaciones estatales y regionales, las realmente ejecutivas. En términos generales, y por más que los Estados acepten la doctrina europea sobre las políticas lingüísticas y que en ciertos casos, España entre ellos, ya la hayan traducido en gran medida a su ordenamiento

legal interno, siguen subsistiendo medidas discriminatorias e incluso un interés muy escaso en el apoyo a las minorías lingüísticas, salvo en aquellos sitios donde pueden plantear serios problemas internos o internacionales.

De todos modos, es posible rastrear recomendaciones de Parlamentos nacionales para que el poder ejecutivo tome medidas positivas en la protección de las minorías lingüísticas. Valga a modo de ejemplo, la moción aprobada por unanimidad por el Senado español el 8 de marzo de 1995 instando al gobierno central a "intensificar las acciones necesarias tendentes al respeto, promoción y protección de todas las lenguas que son oficiales de acuerdo con el artículo 3 de la Constitución"⁶.

El PE reconoce que su intención es presionar a los Estados miembros de la CE para que "reconozcan a sus minorías en sus Constituciones"⁷. Así lo hizo Noruega cuando en abril de 1988 modificó su ley fundamental incluyendo un artículo⁸ para que "el grupo étnico sami (lapón) pueda asegurar el desarrollo de su idioma, su cultura y su vida social".

Al mismo tiempo el PE presiona a las instituciones comunitarias para que sean modélicas en lo que concierne a la vinculación de las minorías lingüísticas en el proceso de construcción de Europa. "Es en el ámbito de las instituciones comunitarias donde será preciso proteger y desarrollar las lenguas y culturas regionales, así como los grupos

minoritarios", sostenía ya en 1985⁹.

Desde 1975 hasta hoy día los Estados de la UE han tomado, por lo menos, las siguientes medidas con repercusiones lingüísticas:

Tratados internacionales:

- Acta de Helsinki, 1975
- Tratado de Osimo (Ancona) entre Italia y Yugoslavia, 1975
- Tratado entre Bélgica y los Países Bajos instituyendo la Unión de la Lengua Neerlandesa, 1980
- Tratado anglo-irlandés, 1985

Constituciones:

- Suiza¹⁰, modificación constitucional de 1978
- España, constitución de 1978
- Bélgica, modificaciones constitucionales de 1980, 1988 y 1993
- Francia, modificación constitucional de junio de 1992
- Noruega¹¹, modificación constitucional de 1988

Estatutos de Autonomía:

- Dinamarca: Estatuto de Groenlandia de 1978
- España: * País Vasco, 1979

- * Cataluña, 1979
- * Galicia, 1981
- * País Valenciano, 1982
- * Navarra, 1982
- * Baleares, 1983
- Suiza¹²: modificación de la constitución del Cantón de Berna, 1979
- RFA: * Constitución del land de Sajonia, 1992
- * Constitución del land de Brandenburgo, 1992

Leyes especiales:

- Bélgica: * Ley especial de Reformas Institucionales, 1980
- * Ley de Reformas Institucionales para la Comunidad de Lengua alemana, 1987
- * Ley especial relativa a las instituciones bruselesas, 1989

Leyes ordinarias (estatales o regionales):

- Bélgica: * Decreto del Consejo de la Comunidad Francesa relativo a la protección de la libertad de utilización de las leyes y del uso de la lengua francesa, junio 1982

- España: * Ley de normalización del uso del euskera, noviembre 1982
 - * Ley de normalización lingüística del catalán en Cataluña, abril 1983
 - * Ley de normalización lingüística de Galicia, junio 1983
 - * Ley de uso y enseñanza del valenciano, noviembre 1983
 - * Ley de normalización lingüística en las Islas Baleares, abril 1986
 - * Ley foral del uso del vascuence en Navarra, diciembre 1986
 - * Convenio entre el Ministerio de Educación y Ciencia y el Gobierno de Aragón sobre la enseñanza de la lengua catalana en las comarcas orientales de Aragón, noviembre 1986
- Francia: * Decreto de creación del Consejo Nacional de Lenguas y Culturas Regionales, septiembre 1985
 - * Acuerdo que reconoce oficialmente la enseñanza del catalán, febrero 1990
 - * Proyecto de ley relativo al estatuto y a la promoción de la lengua en Alsacia y Mosela, noviembre 1991
 - * Moción de la Asamblea de Córcega sobre la oficialidad de la lengua corsa, junio 1992
 - * Ley sobre el empleo de la lengua francesa, agosto 1994

- Gran Bretaña: * Ley de la Lengua Galesa, junio 1987 y octubre 1993
- Italia: * Proyecto de ley de tutela de las minorías lingüísticas de Italia, noviembre 1991
 - * Ley regional para la adopción y aplicación del programa de plurilingüismo europeo "pax Linguis", abril 1993
 - * Ley de reforma del Estatuto del Valle de Aosta para el reconocimiento de la minoría walser, sept. 1993
 - * Ley regional sobre la tutela y revalorización de la cultura y la lengua de Cerdeña, octubre 1993
 - * Decreto legislativo de la Provincia de Trento por la tutela de la minoría de lengua ladina, diciembre 1993
 - * Propuesta de ley presentada en el Consejo Regional del Piamonte para la tutela y la revalorización de la cultura y la lengua del Piamonte, diciembre 1993
- Luxemburgo: * Ley sobre el régimen de lenguas, marzo 1984
- Suiza: * Ley federal concerniente a la concesión de subvenciones a la escuela cantonal de lengua francesa de Berna, junio 1981
 - * Ley federal sobre subvenciones a los cantones de los Grisones y del Tesino para la salvaguarda de su cultura y de sus leyes, junio 1983
- Unión Europea: * Creación del European Bureau for Lessed Used Languages, mayo 1982

- * La Comisión Europea destina 100.000 ecus a la protección de las lenguas minoritarias, 1983
- * La Comisión Europea destina 1 millón de ecus a las lenguas minoritarias, 1988
- * Se crea el Programa Lingua, 1989
- * Tratado de Maastricht, febrero 1992
- * La Comisión Europea destina 3'5 millones de ecus para las lenguas minoritarias, 1995

5.4.1: Consecuencias de estas medidas

De esta relación de leyes, normas y medidas se desprenden seis consecuencias:

- la política lingüística sigue afectando en mayor o menor grado a las normas de rango más alto, como el Tratado Constitutivo de la UE, o las Constituciones de distintos Estados (España, Francia, Luxemburgo, etc.);
- algunas de las medidas tomadas, como la reforma constitucional francesa de 1992, siguen favoreciendo el hegemonismo de la lengua de Estado;
- el grueso de la actividad legislativa desde 1975 está destinado principalmente al encaje legal de las minorías

lingüísticas tanto dentro del ordenamiento estatal, como del comunitario;

- aunque muchas de estas normas son susceptibles de críticas desde la perspectiva europeísta, de hecho ninguna de ellas se opone o va decididamente en contra de la doctrina emanada desde las instituciones europeas;

- a escala comunitaria la distancia entre esta normativa y los niveles mínimos marcados por las declaraciones europeas, especialmente la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, es todavía muy importante y es donde se detecta mejor una cierta falta de voluntad de los gobiernos concernidos;

- en esta actividad normativa participan tanto los poderes comunitarios, como los estatales, como los regionales y/o locales, según el reparto competencial en cada país.

5.5: Panorama actual de las minorías lingüísticas

El panorama de las minorías lingüísticas ha cambiado desde 1975, tanto desde la perspectiva legal como desde su implantación y uso social. El resultado actual es en conjunto muy irregular e incluso en un mismo país, como Italia o Gran Bretaña, el tratamiento jurídico-legal y el desarrollo de las

lenguas minoritarias es muy desigual.

Según gocen o no de algún reconocimiento legal, pueden agruparse del siguiente modo:

<u>Oficiales</u>	<u>Reconocidas</u>	<u>No reconocidas</u>
Eslovena (Aus)	Frisona (RFA)	Euskera (Fr)
Croata (Aus)	Danesa (RFA)	Bretona (Fr)
Feroesa (Din)	Soraba (RFA)	Catalana (Fr)
Catalana (Esp)	Húngara (Aus)	Alsac. (Fr)
Euskera (Esp)	Groenlandés (Din)	Occitana (Fr)
Gallega (Esp)	Bable (Esp)	Flamenca (Fr)
Sueca (Finl)	Aranesa (Esp)	Escocesa (GB)
Irlandesa (Irl)	Aragonesa (Esp)	Córnica (GB)
Luxemburgués (Lux)	Sami (Finl)	Gaélica (GB)
Alemana (It)	Corsa (Fr)	Pomaka (Gr)
Alemana (Bélg)	Galesa (RU)	Macedon (Gr)
	Albanesa (It)	Aroumana (Gr)
	Walser (It)	Arbanita (Gr)
	Carintia (It)	Cimbria (It)
	Francesa (It)	Mochena (It)
	Ladina (It)	Catalana (It)
	Occitana (It)	Croata (It)
	Sarda (It)	Francop. (It)
	Griega (It)	Friulana (It)
	Eslovena (It)	Miran (Por)

Frisona (Hol)	Fine (Suecia)
Sami (Suecia)	
Sami (Noru)	
Romanche (Suiza)	
Turca (Gr)	
Alemana (Din)	

Según el grado y el momento de desarrollo y uso, puede establecerse la siguiente distribución:

<u>Antes de 1975</u>	<u>Después de 1975</u>	<u>No desarrollo</u>
Frisona (RFA)	Soraba (RFA)	Húngara (Aus)
Danesa (RFA)	Eslovena (Aus)	Alemana (Din)
Alemana (Bel)	Croata (Aus)	Gaélica (GB)
Feroesa (Din)	Groenlandés (Din)	Turca (Gr)
Sueca (Finl)	Catalana (Esp)	Pomaka (Gr)
Corsa (Fr)	Gallega (Esp)	Aroumana (Gr)
Alsaciana (Fr)	Bable (Esp)	Arbanita (Gr)
Occitana (Fr)	Aranesa (Esp)	Mochena (It)
Escocesa (GB)	Aragonesa (Esp)	Mirandés (Po)
Galesa (GB)	Sami (Finl)	Finesa (Sue)
Córnica (GB)	Euskera (Fr)	
Irlandesa (Irl)	Bretona (Fr)	
Albanesa (It)	Catalana (Fr)	
Alemana (It)	Flamenca (Fr)	
Ladina (It)	Cimbria (It)	

Occitana (It)	Walser (It)
Sarda (It)	Carintia (It)
Eslovena (It)	Catalana (It)
Sami (Nor)	Croata (It)
	Francesa (It)
	Francoprovenzal
	Friulana (It)
	Griega (It)
	Luxemburgués (Lux)
	Frisona (Hol)
	Sami (Suecia)
	Romanche (Suiza)

Según su grado de implantación social, se puede fijar el siguiente cuadro:

	<u>Vida públ.</u>	<u>Enseñanza</u>		<u>Prensa</u>	<u>Audio</u>	<u>Inst.</u>
		Prim	Sec			
<u>LENGUAS</u>						
Frisona	no	sí	sí	sí	no	sí
Danesa	no	sí	no	sí	no	sí
Soraba	sí	sí	sí	sí	sí	sí
Eslovena	sí	sí	sí	sí	sí	sí
Croata	sí	sí	sí	sí	sí	sí
Húngara	no	no	no	no	no	no

Al. (Bel)	sí	sí	sí	sí	sí	sí
Feroesa	sí	sí	sí	sí	sí	sí
Groenl.	sí	sí	no	no	no	sí
Al. (Din)	no	sí	sí	sí	no	sí
Catalana	sí	sí	sí	sí	sí	sí
Euskera	sí	sí	sí	sí	sí	sí
Gallega	sí	sí	sí	sí	sí	sí
Bable	no	sí	no	sí	no	sí
Aranesa	sí	sí	no	sí	no	sí
Altoarag	no	no	no	no	no	sí
Sueca	sí	sí	sí	sí	sí	sí
Sami (Fi)	sí	sí	no	sí	sí	sí
Euskera	no	sí	sí	sí	sí	sí
Bretona	no	sí	sí	sí	sí	sí
Catalana	no	sí	sí	sí	sí	sí
Corsa	no	sí	sí	sí	sí	sí
Alsaciana	no	sí	sí	sí	sí	sí
Occitana	no	sí	sí	sí	sí	sí
Flamenca	no	sí	sí	sí	sí	sí
Escocesa	sí	sí	sí	sí	sí	sí
Galesa	sí	sí	sí	sí	sí	sí
Córnica	no	sí	no	no	no	sí
Gaélica	no	sí	sí	no	no	no
Turca	sí	sí	sí	no	no	sí
Pomaka	no	no	no	no	no	no
Macedonia	no	no	no	sí	no	sí
Aroumana	no	no	no	no	no	sí

Arbanita	no	no	no	no	no	no
Irlandesa	sí	sí	sí	sí	sí	sí
Albanesa	no	sí	sí	sí	no	sí
Al. (It)	sí	sí	sí	sí	sí	sí
Cimbria	no	sí	no	sí	no	sí
Mochena	no	no	no	no	no	no
Walser	no	sí	sí	sí	sí	sí
Carintia	no	sí	no	no	no	no
Catal (It)	no	sí	no	sí	no	sí
Croata	no	no	no	no	no	sí
Franc (It)	sí	sí	sí	sí	sí	sí
Francopr	sí	sí	no	sí	sí	sí
Ladina	sí	sí	sí	sí	sí	sí
Friulana	no	sí	no	sí	sí	sí
Occitana	no	sí	no	sí	sí	sí
Sarda	no	sí	no	sí	sí	sí
Grieg (It)	no	sí	sí	sí	sí	sí
Eslovena	sí	sí	sí	sí	sí	sí
Luxemburg	sí	sí	sí	sí	sí	sí
Frison (PB)	sí	sí	sí	sí	sí	sí
Miran (Por)	no	no	no	no	no	no
Sami (Sue)	no	sí	no	no	no	sí
Fine (Sue)	no	sí	no	no	no	no
Sami (Nor)	no	sí	sí	no	no	sí
Roman (Sui)	sí	sí	sí	no	sí	sí

5.5.1: Balance de la situación

De estos tres cuadros se desprende que de las 58 lenguas minoritarias analizadas:

- 11 tienen algún carácter de oficialidad por lo que gozan de amplios derechos, por lo menos en el interior del Estado en el que goza de este status;
- 26 tienen algún tipo de reconocimiento legal, bien sea por la normativa estatal o por la regional;
- 4 minorías se hallan protegidas por tratados internacionales;
- 21 no tienen ningún tipo de reconocimiento legal y su futuro se halla en el mejor de los casos en manos de instituciones privadas;
- 19 conocieron algún tipo de desarrollo antes de 1975, bien sea por la acción de los Estados o por la de sus organizaciones propias;
- 28 experimentaron progresos claros posteriormente a 1975, aunque algunos de estos avances no aseguran totalmente su supervivencia;

- 11 no han mejorado su situación y se hallan en trance de desaparición, o casi;
- el nivel de protección legal y de desarrollo de una lengua no siempre se corresponden;
- en un mismo Estado se pueden dar situaciones muy distintas, como ocurre en Italia o en Gran Bretaña, mientras que una misma lengua minoritaria puede recibir tratamientos muy distintos por parte de Estados diferentes;
- 24 lenguas minoritarias tienen algún tipo de presencia por leve que ésta sea, en la vida pública y/o en la administración de su territorio;
- de 37 minorías con alguna cobertura legal, 13 no tiene presencia significativa en la vida pública. Esta cifra demuestra una vez más la resistencia de muchas autoridades a permitir el uso normal y habitual de estas lenguas en el ámbito administrativo y judicial, incluso en varios casos en que la lengua tiene algún tipo de reconocimiento legal;
- 49 de estas lenguas son enseñadas en escuelas primarias de forma obligada o voluntaria. Esto demuestra que, de acuerdo con la tesis de Antoni Milian¹³, el derecho a la enseñanza de una

lengua en los primeros niveles educativos es uno de los que se consigue con mayor facilidad, a veces incluso cuando la lengua no está reconocida legalmente;

- 9 minorías no gozan ni siquiera de este derecho más elemental y deben ser aprendidas por vía oral y en el ámbito familiar o local;

- 34 minorías han accedido a la enseñanza secundaria, si bien es cierto que en ocasiones en condiciones muy precarias y como lengua optativa unas horas a la semana o incluso con el tratamiento de lengua extranjera. Normalmente en las regiones donde se imparten clases de esta lengua en las escuelas secundarias, suele haber alguna(s) universidad(es) que también la estudien y la enseñen, aunque sólo sea como una rareza filológica;

- 24 lenguas minoritarias no están presentes en la enseñanza secundaria, lo cual limita gravemente no sólo su expansión e implantación en los medios comerciales, científicos, administrativos, etc., sino su progreso y su evolución en consonancia con las necesidades de una sociedad moderna;

- 42 lenguas disponen de algún tipo de prensa escrita, sin duda el medio más fácil todavía de organizar y mantener;

- 16 lenguas no tienen ni siquiera un boletín o una revista que

informe regularmente a la comunidad en esta lengua y dé una salida a los posibles escritores autóctonos;

- 34 lenguas disponen de algún medio audiovisual (radio y/o televisión). Es muy frecuente que esta actividad se reduzca a unas horas a la semana en los medios donde predomina otra lengua, habitualmente la del Estado;

- 24 lenguas no reciben apoyo de ningún medio audiovisual propio;

- en materia de medios de comunicación (escritos o audiovisuales) no es raro que la comunidad usuaria de una lengua minoritaria en su Estado recurra a las publicaciones y emisiones procedentes de otros Estados o regiones donde la misma lengua goza de una implantación mayor y mejor. Algunos Estados, Administraciones regionales e instituciones privadas siguen una política de apoyo a estas minorías de la misma lengua situadas en otros Estados, e incluso en otras provincia del mismo Estado;

- 50 minorías lingüísticas reciben el impulso de alguna(s) asociación(es) o institución(es) pública(s) o privada(s), lo cual indica un esfuerzo notable en orden a su recuperación y desarrollo;

- 8 minorías carecen de cualquier organización social que promueva su normalización. Suelen corresponder a los llamados por Oriol Ramon "islotes lingüísticos".

5.6: Los intentos de simplificación

Hasta ahora no consta ninguna propuesta oficial de cambios en materia de política lingüística en la UE, a pesar de los llamamientos de la Comisión y del Consejo de abordar el problema en un futuro más o menos inmediato. Ni siquiera el Informe de la Comisión Europea o el del Comité de las Regiones¹⁴ dirigido al Grupo de Reflexión que debe redactar una propuesta de reforma de la UE para la Conferencia Intergubernamental de 1996, contienen iniciativas en este terreno, aunque el primero se refiere "a la complejidad jurídica y lingüística" cuando examina los problemas de la codificación¹⁵.

Informalmente se ha sugerido la adopción de un número no superior a cinco de "lenguas de trabajo", y mantener el resto como lenguas oficiales, es decir con ciertos derechos como la publicación de los documentos básicos en dichos idiomas. A estos efectos el Informe Reding de diciembre de 1990, que confiere un cierto status al catalán, puede ser un antecedente válido para el reconocimiento de ciertas lenguas minoritarias, y así lo señala el propio documento. "Esperemos que la solución

que os presentamos para el caso de la lengua catalana pueda servir de modelo para el futuro, sobre todo de cara a una probable ampliación de la Comunidad. Es así como construimos nuestro futuro común, con la preservación del instrumento de trabajo político y legislativo, y al propio tiempo con el pleno respeto hacia la diversidad cultural y lingüística de los ciudadanos europeos", dijo textualmente la Sra. Reding en la presentación de su resolución al pleno del Parlamento Europeo¹⁶.

Uno de los pasos adelante realizados en este terreno lo realizó el Servicio de Política de Consumidores de la Comisión Europea que acepta y tramita quejas y reclamaciones de ciudadanos escritas solamente en catalán. "Tengo órdenes estrictas de acercar la UE al ciudadano" declaró al respecto la jefa del servicio, Mercè de Solà¹⁷.

No es de extrañar, pues, que cuando en diciembre de 1994 el ministro de Asuntos Europeos de Francia, Alain Lamassoure, declaró en una entrevista que había que limitar los idiomas de trabajo de la UE al inglés, francés, alemán, español e italiano, provocara una verdadera tempestad política en el seno de la Unión, polémica protagonizada por varios de los Estados comunitarios cuya lengua no es una de las cinco citadas.

El ministro griego de Asuntos Europeos de Grecia, Yanos Kranidiotis, criticó esta propuesta y anunció que su país se

opondría a cualquier intento de ignorar que la igualdad de los miembros de la UE constituye. El gobierno griego anunció su intención de luchar para mantener su idioma como lengua oficial y de trabajo en todos los niveles y órganos de la Unión. Entre las razones dadas estaba que el entendimiento entre los países miembros es incluso mejor porque cada uno utiliza su idioma y que el coste financiero para el presupuesto de la Comunidad es poca cosa frente al beneficio de poder expresarse claramente¹⁸.

Diputados daneses en el Parlamento Europeo también expresaron su malestar por la fórmula de Lamassoure. El plan "deja de lado algunos de los fundamentos de la democracia", ya que "debe seguir siendo posible que cualquier ciudadano, sin la necesidad de que sepa idiomas, sea elegido para el Parlamento Europeo", sostuvo la diputada liberal danesa Karen Riis-Joergensen¹⁹.

El hecho cierto es que la presidencia francesa de la UE ejercida durante el primer semestre de 1995 no hizo ninguna propuesta en este sentido, ni anunció su intención de hacerlo.

El Pleno del PE dió carpetazo al asunto en enero de 1995 aprobando una resolución sobre el uso de las lenguas oficiales en las instituciones de la Unión, en la que dejaba las cosas tal como estaba. La resolución, votada favorablemente por 236 diputados con una abstención, dejaba las cosas tal como

estaban.

El documento "reitera su compromiso favorable a la igualdad de las lenguas oficiales y de las lenguas de trabajo de todos los países que constituyen la Unión, lo que resulta un elemento fundamental de la noción de Unión Europea, de su filosofía y de la igualdad política de sus Estados miembros, y confirma que el plurilingüismo constituye uno de los rasgos característicos de la cultura y civilización europeas y un elemento importante de la pluralidad y de la riqueza culturales de Europa". Por lo tanto, "declara su determinación de combatir todo intento de establecer una discriminación entre las lenguas oficiales y las lenguas de trabajo de la EU".

En los otros cuatro puntos de su resolución el PE "insiste en que se respete el principio que establece que los ciudadanos podrán servirse de su propia lengua, tanto por escrito como verbalmente, en sus contactos con todas las instituciones europeas; considera que el derecho de un representante electo a expresarse y a trabajar en su propia lengua forma parte indisoluble del derecho democrático y de su mandato; reitera la soberanía del PE y su competencia para regular su propio funcionamiento y recuerda el contenido de su Resolución de 6 de mayo de 1994 en la que se insiste con firmeza en la importancia de la utilización sin discriminaciones de todas las lenguas oficiales como lenguas de trabajo del PE". Esta Resolución fue comunicada al Consejo, a la Comisión, a los

Gobiernos de los Estados miembros y a los presidentes de las demás instituciones europeas²⁰.

NOTAS AL CAPITULO V

1. El Estado del Mundo, Ediciones Akal, Edición 1995, Madrid, 1994, pág. 584
2. PETSCHEN, SANTIAGO: Entre la política y el derecho: la Carta Europea de Las Lenguas Regionales o Minoritarias; Centro de Estudios Constitucionales, Madrid 1989, pág. 133
3. Párrafo 2 del Preámbulo de la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias y Regionales
4. Artículo 59 bis, 3) de la Constitución de 1980.
5. Artículo 6.5
6. Diario de Sesiones del Senado de 8 de marzo de 1995, n. 69, págs. 3614 a 3619
7. Resolución del Parlamento Europeo sobre las Lenguas y Culturas de las Minorías Regionales y Etnicas de la CE aprobada el 30 de noviembre de 1987, número 21.
8. Artículo 110 (a
9. Resolución del PE sobre las Lenguas y Culturas de las Minorías Nacionales y Etnicas de la CE, aprobada el 30 de noviembre de 1987, número 18
10. Suiza no forma parte de la Unión Europea. Es citada aquí por las razones aducidas en el Capítulo I.
11. Noruega no forma parte de la Unión Europea. Es citada aquí por las razones aducidas en el Capítulo I.
12. Suiza no pertenece a la UE
13. MILIAN I MASANA, ANTONI: Drets lingüístics i dret fonamental a l'educació, Institut d'Estudis Autònoms de la Generalitat de Catalunya, Barcelona 1992, pág. 55
14. COMITE DES REGIONS: La Réforme Institutionnelle, Bruxelles 1995, 43 págs.
15. COMISION EUROPEA: Informe de la Comisión para el Grupo de Reflexión, Ed. Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, Luxemburgo 1995, pág. 40
16. PARLAMENTO EUROPEO, Diario de Sesiones del pleno correspondiente al día 10 de diciembre de 1990, pág. 12 del texto en francés.

17. SUBIRA, JOAN: "Brusel.les accepta en català les queixes dels consumidors europeus" en Avui de 28 de febrero de 1995 pág. 31

18. Despacho de la Agencia EFE fechada en Atenas el 29 de diciembre de 1994

19. Despacho de la Agencia EFE fechado en Copenhague el 30 de diciembre de 1994

20. Resolución del PE sobre el empleo de las lenguas oficiales en las instituciones de la UE, aprobada el 19 de enero de 1995. Doc: B4-0038, 0052, 0060, 0075, 0094, 0110 y 0113/95. DOCE: nº C 43/91 de 20 de febrero de 1995

CAPITULO VI

UN DEBATE ABIERTO SOBRE LA EUROPA DEL FUTURO

6.1: Objetivos y estructura del capítulo

No nos hallamos frente a un debate histórico o agotado, sino que la ordenación lingüística de Europa y su incidencia sobre el proceso de unión siguen siendo hechos importantes, y para algunos cada vez más importantes. Expertos, intelectuales y políticos de todos los países continúan discutiendo como en siglos anteriores cuál debe ser la estructura lingüística ideal para una Europa que dispone ya de fuertes mecanismos integradores en el terreno económico y comercial, pero también en el institucional-político y en el cultural. Proceso que además no es estático, sino que evoluciona y se extiende hacia otros países, algunos de los cuales parecían muy alejados de la Comunidad Europea no hace muchos años.

Incluso Estados que habían dado por resuelta su ordenación político-lingüística interna, han tenido que intervenir en la polémica, primero porque afecta su actividad supra-estatal, cada vez más intensa, y segundo porque las posibles soluciones que se dicten pueden afectar su ordenamiento jurídico y político, e incluso su estructura constitucional básica. "Hay que reconocer que ha habido una especie de transferencia de las cuestiones nacionales al ámbito institucional. Es innegable que hoy día los temas lingüísticos y quizá los mismos temas ligados a la identidad, han entrado a formar parte de las preocupaciones de los gobernantes, aunque hay que ver hasta qué punto. Distintas autoridades regionales se han movido bastante

en esta dirección", escribía recientemente Sergio Salvi, pionero en estas cuestiones¹.

No obstante, es de justicia observar que los Estados con mayores tensiones lingüísticas en su interior con frecuencia son los que aportan más experiencias y más ideas al debate lingüístico europeo. Este es el caso de España, país que en muy pocos años ha realizado una aportación ingente Tanto en el Consejo de Europa, como en la Comunidad Europea. En algunos casos, parece como si los dirigentes y los portavoces de ciertas minorías lingüísticas europeas hubiesen renunciado a buscar salidas de ámbito estatal y las buscaran mejor en el complejo entramado europeo, en principio más receptivo a sus planteamientos.

A modo de cierre, este Capítulo VI se estructura alrededor de tres ideas expuestas con el siguiente orden:

- la polémica lingüística se produce en un mapa de lenguas muy complejo y variado, mal estudiado todavía, y en el que están en juego intereses distintos y aún contrapuestos, especialmente a la hora de definir los neo-nacionalismos europeos, de Estado o de ámbito regional;
- el debate lingüístico y su relación con el proceso de unión europea no está reservado sólo a las instancias políticas e institucionales como un simple problema formal a resolver, sino

que se enraiza profundamente en el conjunto de la sociedad con una activa participación de numerosos pensadores y expertos;

- existe una estrecha correlación entre las lenguas de Estado universales, las menores de Estado y las lenguas regionales o minoritarias, correlación que es objeto de un intenso uso político en el marco de las sociedades regionales, estatales y europea en general;

- la idea de una Europa plurilingüe y de una población políglota recibe hoy día importantes apoyos sociales e intelectuales frente al monolingüismo de Estado, prevaleciente en épocas anteriores en la generalidad de los círculos políticos, educativos e ilustrados en general.

6.2: Un mapa lingüístico complejo

Para empezar es preciso admitir que hacer un mapa riguroso de todas las lenguas existentes en la Unión Europea y en general en Europa Occidental y fijar su peso político global e individualizado, sigue siendo un ejercicio sumamente complicado, según atestigua la propia Comisión Europea de la CE que en 1986 publicó un extenso, aunque incompleto, documento sobre el particular². El estudio fue realizado por encargo del Parlamento Europeo poco antes de la segunda ampliación de la CEE, es decir que no cuenta con las lenguas minoritarias de

España, Suecia, Finlandia o Austria. Tampoco contabiliza las de Grecia por la simple razón de que la ponencia redactora no obtuvo respuesta oficial a su cuestionario.

El informe de la Comunidad Europea señala en primer lugar la limitación que sufre este tipo de conocimientos e incluso "la falta casi absoluta de datos oficiales y rigurosos de tipo estadístico, geopolítico y normativo"³, puesto que hay serias contradicciones entre las evaluaciones cuantitativas, ausencia de centros de coordinación, etc. A estas alturas, sin embargo, conviene llamar la atención sobre los grandes avances que se han producido durante los últimos seis o siete años, tanto desde el punto de vista analítico, como normativo.

En 1986 la Comisión afirmaba todavía sin ambages que "no existe ningún estudio de carácter global actualmente disponible que no contenga errores, evaluaciones equivocadas, imprecisiones, omisiones, etc., incluyendo los trabajos más importantes, como los de Stephens, Salvi o Pogarell"⁴. Esta confusión es debida a las dificultades documentales, a la gran variedad de lenguas existentes, y a la disparidad de problemas que presentan éstas. Por otra parte, las grandes divergencias metodológicas tanto de orden interno como entre ellas limitan aún más su utilidad como base de datos y en general su estudio comparativo. Estas disparidades provienen en general de visiones que van desde las básicamente socio-lingüísticas de las lenguas minoritarias hasta otras de orden estrictamente

histórico-políticas, cuyo alcance es "sumamente delicado".

Una Proposición de Resolución del Parlamento Europeo también de 1986⁵ recomendó la creación de Institutos de Estudios Lingüísticos para las lenguas de menor difusión, pese a lo cual en 1987 tuvo que reconocer de nuevo "la ausencia de material de información global sobre minorías"⁶.

Todavía en la Conferencia de Copenhague sobre la Dimensión Humana de la CSCE de 1990 la delegación griega se quejó de la falta de construcciones conceptuales adecuadas, mientras que la delegación rumana planteó una vez más la necesidad de disponer de un mapa completo de las minorías étnicas con los datos actualizados.

Paralelamente el Consejo de Europa ha sostenido unas posiciones muy parecidas. Por ejemplo, la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias de 1988 solicita "la promoción de los estudios y las investigaciones sobre las lenguas regionales o minoritarias en el ámbito universitario o equivalente"⁷. Por ello, en 1994 el Consejo de Europa presentó un informe lingüístico que abarca 22 países miembros. En una escueta nota preliminar el Comité de Expertos redactor del estudio traspasa la responsabilidad de los datos a los gobiernos que los han proporcionado, señal evidente de lo resbaladizo del terreno.

6.3: Grandes diferencias interlingüísticas

El C. de E. constata asimismo las grandes diferencias detectadas entre las lenguas minoritarias tanto por el número de personas que usan cada una de ellas y el nivel social de su utilización, como por su peso cultural o por su reconocimiento legal y normativo. Esta situación plantea un primer problema de definición y de clasificación, que en no pocos casos empieza por su propia denominación: lenguas minoritarias, lenguas minorizadas, lenguas regionales, lenguas sin Estado, etc.

Dejando de lado los criterios cuantitativos, las consideraciones políticas para definir las lenguas minoritarias suelen ser en primer lugar de carácter histórico-geográfico. Esto permite ser más objetivo sobre el pasado de la lengua y sobre su grado de influencia, pero por el contrario es difícil precisar cuando pasó a ser realmente minoritaria. Se la puede medir en relación al poder político que ostenta la minoría étnica que la utiliza y que suele ser escaso, a veces incluso en la propia zona de su ámbito, aunque también en esto hay importantes excepciones. Quizá el criterio político es el que más se acerca al antropológico, es decir al uso de la lengua como factor de cohesión nacional y como instrumento de confrontación con otros poderes, muy especialmente los estatales. Así, el grado de lealtad a la lengua se convierte en un elemento básico, pero no exclusivo, para identificar las aspiraciones nacionales de la población.

6.4: Los grupos lingüísticos

Para definir a las lenguas minoritarias, la Comisión Europea recurre a distintos parámetros objetivos y subjetivos. Entre los primeros cita los siguientes:

a) el hecho de hablar una lengua aloglota genética y estructuralmente en relación a la(s) utilizada(s) oficialmente en el país o Estado de pertenencia;

b) el hecho de ser utilizada por una población mínimamente cohesionada socialmente y de que sus usuarios no estén repartidos en una variedad de puntos geográficos;

c) el hecho de tener tradiciones culturales, religiosas, históricas, etc., distintas a las de la población étnicamente mayoritaria;

y d) el hecho de reivindicar el reconocimiento legal y público de una autonomía lingüística en los distintos niveles educativos, judiciales, administrativos, comunicativos, etc.

Entre los subjetivos cita:

a) el sentimiento de lealtad a la lengua y a las tradiciones culturales, religiosas, históricas, etc. conectadas con ella;

b) el sentimiento de percibir esta lengua y su entorno cultural como algo independiente de la mayoritaria;

c) el hecho de atribuir a la lengua propia y a su cultura una "vitalidad" o un conjunto de iniciativas para su salvaguardia, transmisión y desarrollo.

6.5: Principio de territorialidad frente a principio de personalidad

Por otra parte, el uso de las lenguas minoritarias responde o bien al principio de territorialidad (el más común), o bien al de personalidad. Según el primero, una lengua es utilizada en un territorio determinado, mientras que en virtud del segundo las normas se aplican a una comunidad de personas, sea cual sea su residencia legal. El galés, por ejemplo, se enseña sólo en Gales y un representante de este territorio no puede utilizar dicha lengua en el parlamento británico. En cambio, en Canadá se aplica el principio de personalidad (con ciertas restricciones) para el inglés y el francés de acuerdo con la Carta de Derechos y Libertades de 1981, lo que convierte a todo el Estado en oficialmente bilingüe a escala individual y colectiva en algunos Estados de la federación, como Nueva Brunswick⁸.

Estas y otras complejidades empiezan en la misma denominación de las lenguas, circunstancia que ha originado asimismo fuertes polémicas. Se han defendido los términos de "lenguas étnicas", "lenguas menos utilizadas", "lenguas regionales", "lenguas comunitarias", "lenguas minorizadas", etc. Desde otras ópticas se han utilizado expresiones como "dialectos" o "patois", que en general tienen unas connotaciones despectivas.

6.6: La lengua como elemento definidor de las minorías étnicas

Comentando la Convención Greco-Búlgara de 1919 sobre el derecho de emigración de las minorías balcánicas⁹, ya el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) de la Sociedad de Naciones incluyó la lengua entre los cuatro elementos esenciales para definir una minoría, además de la raza, la religión y las tradiciones. Cincuenta años más tarde la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas modificó ligeramente la definición de minoría y la amplió sobre la base de un excelente informe redactado por F. Capotorti¹⁰, el cual conservó el elemento lingüístico entre los definitorios. Sin embargo, la fórmula de las Naciones Unidas contiene, como la anterior del TIJ, muchas incertidumbres y numerosos enfoques por lo menos discutibles, como el relativo al "número importante y suficiente" de los que hablan una lengua o la "lealtad al Estado".

En cualquier caso, es cierto que no todas las definiciones de minoría contienen una lengua propia para diferenciarlas de los colectivos mayoritarios, todo lo cual conduce a F. Capotorti a concluir que no es posible hacer una definición que pueda lograr la adhesión de todas las partes. Dicho de otro modo, cada minoría es un caso específico y lo mismo puede decirse de las lenguas minoritarias aisladas. A pesar de ello, Capotorti intenta una definición global y final, en la cual recupera la lengua como elemento de distinción de las minorías.

La misma Comisión Europea admite que el valor dado a su lengua por las minorías que la tienen, se refleja en su lucha para que sea considerada como una lengua autónoma y distinta de la mayoritaria oficial. Utilizar un dialecto es situarse en principio en una posición de inferioridad y se busca el rango de lengua autóctona para cimentar una política también autónoma. Este es el caso del frisón o del valenciano. Se trata, pues, de un concepto reduccionista, que las autoridades centrales suelen fomentar a su favor, comenzando por utilizar denominaciones limitativas del tenor de "lenguas regionales" o "lenguas étnicas", o peor aún de "dialectos locales".

Ni siquiera la terminología usada por las instituciones europeas coincide exactamente. La CSCE habla de "minorías nacionales", expresión que refleja su objetivo esencial, la seguridad en Europa. Las minorías que no tienen conciencia de nacionalidad no causa problemas especiales a la seguridad

europea, mientras que las minorías nacionales constituyen una de las claves políticas de la estabilidad en la mitad oriental y, por ello, sirvió a las potencias occidentales durante más de 20 años para presionar a los países del antiguo bloque soviético.

El C. de E. cambia su terminología básica con relativa frecuencia y según el documento de que se trata. Así, substituye el continente por el contenido y habla de "lenguas minoritarias" en lugar de "minorías lingüísticas" con el fin de descargar el sentido conflictivo que tradicionalmente ha envuelto a las minorías y sus derechos frente a los Estados. Por otra parte, es frecuente que las lenguas de Estado reciban denominaciones distintas cuando son de ámbito regional en otro país, como sucede con el francés en el Valle de Aosta (Italia).

El PE optó por usar preferentemente el nombre de "grupos étnicos", aunque utiliza también las expresiones "minoría étnica" y "minoría lingüística". Sólo en alguna rara ocasión se sirve de la denominación propia de la CSCE "minorías nacionales" y esporádicamente, además, de la fórmula "minorías regionales"¹¹.

6.7: La lengua como base de los nacionalismos actuales

Hoy día parece fuera de toda duda que la lengua diferenciada constituye un elemento clave, aunque no exclusivo, en la expansión de los modernos nacionalismos tanto de Europa Occidental, como de la Central y Oriental en fase de redefinición tras el hundimiento del bloque soviético en 1989-91. Así lo reconoce, por ejemplo, el británico Eric J. Hobsbawn, uno de los mejores especialistas (dentro de la línea marxista) de los nacionalismos europeos: "Si actualmente hay algún criterio standard de lo que constituye una nación con una reivindicación para la autodeterminación, o sea establecer una nación-Estado territorial, independiente, es el étnico-lingüístico, ya que la lengua se usa, donde es posible, para expresar y simbolizar la etnicidad. Pero está claro que a veces no es posible, porque la investigación demuestra conclusivamente que el tipo de lengua escrita estandarizada que puede ser usada para representar la etnicidad o la nacionalidad es una construcción histórica bastante reciente -la mayoría del siglo XIX o incluso posterior- y en cualquier caso con frecuencia ni siquiera existe, como ocurre por ejemplo entre serbios y croatas. Incluso entonces se hace la distinción étnica, signifique lo que signifique"¹².

Así pues, desde la perspectiva de Hobsbawn la reivindicación nacional-étnica se expresa principalmente por medio de una lengua propia y en el caso de que ésta no exista se llega a

crear o a resucitar, aunque en último término la etnicidad también puede manifestarse con la lengua mayoritaria. Esto es lo que sucede, por poner un sólo ejemplo, en el Ulster.

En un agudo análisis de las relaciones internacionales después de la guerra fría, Ignacio Ramonet cita entre los fenómenos a tener más en cuenta el renacimiento del concepto étnico Estado-nación, es decir que los Estados deben cimentarse sobre comunidades étnicamente homogéneas. Esto conduce a ciertas regiones europeas a reivindicar con mayor fuerza que antes su propio Estado, teniendo en cuenta que "afirman su personalidad política sobre características culturales distintas, especialmente lingüísticas". Es el caso de Flandes, de Cataluña, Córcega o Euskadi¹³.

Muy sugestiva es la tesis defendida por Agnes Heller, según la cual el fracaso de los experimentos universalistas, como el cristianismo, la Revolución francesa o el comunismo, ha demostrado que la separación entre el *demos* y el *ethnos* casi nunca ha funcionado. La nueva esencia colectiva o nacional fue la cultura, basada en el lenguaje, en contraposición a la civilización que se basa en los objetos y las normas. La cultura nacional evita recurrir a orígenes místicos y centra la atención en aquellos sucesos culturales que han conformado la forma de ser de la comunidad nacional. "La cultura se convierte en una nueva naturaleza", afirma A. Heller. Ahora bien, mientras que el hecho de manejar las cosas y obedecer las

reglas adecuadamente es, al menos en principio, una habilidad universal, el completo dominio del lenguaje y la participación en su vida está reservado a un grupo en particular. "Esta es la razón de que el asimilacionismo lingüístico sea inseparable del nacionalismo". Con esta visión la fórmula "una nación-una cultura" es una ecuación inevitable dadas las tareas asignadas a la cultura como esencia de la nueva identidad colectiva.

El problema es que la aparición de movimientos que piden el "pluriculturalismo" como un derecho dentro de la comunidad nacional, va en contra de esta tradición -tan fuertemente atrincherada- de identificación entre cultura y nación. Considerar la unidad y homogeneidad del Estado nacional como una institución concedida por Dios fue un peligroso escorzo de nuestra perspectiva histórica europea. De hecho la homogeneidad nacional -tal como existe hoy- tiene un pasado muy corto y alguno de los esfuerzos particularmente brutales para crear tal homogeneidad están registrados en la memoria viviente. Para bien o para mal, todas las diferencias políticas, culturales, sexuales y raciales tienen hoy día su propio microdiscurso, concluye A. Heller¹⁴.

En todo caso, es indiscutible que la mayor parte de los conflictos nacionalistas actuales en Europa, y muy particularmente en la Europa Central y Oriental, siguen a grandes rasgos las fronteras étnico-lingüísticas fijadas por el Plan Wilson a principios de los años 1920. Los problemas

étnicos en las dos Europas tienen, sin embargo, un punto en común, de acuerdo con las tesis de Miroslav Hroch: que las demandas étnico-lingüísticas tanto de los nacionalismos de Centroeuropa como los de base más cultural de las naciones pequeñas surgidas en el siglo XIX en la parte occidental, son más fáciles de entender por las masas, y por lo tanto más fáciles de asumir y de defender, que los complejos mecanismos institucionales y constitucionales exigidos a las sociedades democráticas de ámbito estatal¹⁵.

Por lo tanto, como instrumento más inmediato y visible del nacionalismo étnico, la lengua propia suele ser primordial. O la asunción de pertenecer a una sociedad plurilingüe, sea de alcance estatal o europeo. Nadie puede negar, por ejemplo, que el plurilingüismo es hoy día uno de los factores más determinantes del sistema federal suizo. Este es un típico caso, como ocurre con el belga, en el que el equilibrio plurilingüístico compromete su estabilidad político-institucional. Según Denis de Rougemont, "después de cinco siglos de existencia a la vez comunal e imperial, a continuación cantonal, y en resumen anárquica, Suiza ha tomado conciencia de ella misma en tanto que unidad federal. Y esto significa en concreto que ve las garantías de su fuerza y de su cohesión cívica en esta diversidad, precisamente la que los grandes Estados vecinos han considerado tradicionalmente como la causa de debilidad material, de divisiones morales y aún de guerras civiles..."¹⁶.

El ejemplo confederal suizo es defendido por otros intelectuales y filósofos europeos entre los que se puede citar a Umberto Eco, que lo cita como la mejor solución "frente a este retorno a las lenguas étnicas, que dará mayor vigor a las reivindicaciones de los nacionalismos", aunque dentro de un contexto de unión europea. Sólo la idea de una Europa unida y plurilingüe puede canalizar las tendencias a su balcanización¹⁷.

La pertenencia a una comunidad lingüística no exige nada más que conocer esta lengua y además nadie puede ser expulsado de ella. Se impone por encima de las ideologías y de las clases sociales, constituye un elemento base del sentimiento de comunidad y permite contraponer la propia comunidad a las otras, que es el segundo concepto básico del nacionalismo étnico-lingüístico. Por otra parte, los medios de comunicación audiovisuales permiten rápidas expansiones de los idiomas minoritarios (cuando éstos cuentan con ellos) y no les exigen un nivel cultural alto como sucedía en el siglo XIX, en el que sólo las lenguas cultas o las muy atrasadas y aisladas sobrevivían a la presión de las grandes culturales estatales. "La lengua está ligada a los pueblos y a los hombres", dice el escritor mallorquín Baltasar Porcel.

Es más, volviendo a Miroslav Hroch, como norma general la comunidad de lengua y de cultura se convierte "en la última certeza, en el valor demostrable de una manera inequívoca",

cuando fracasa el sistema político, social y económico establecido. "La lengua actúa como substitutivo de los factores de integración en una sociedad que se desintegra"¹⁸.

Por esta razón, la presencia de emigrantes de otra lengua en el grupo lingüístico es interpretada muchas veces como una amenaza de ruptura de esta comunidad referencial. Eso explica que en la mayor parte de las comunas suizas se exige el conocimiento del dialecto local a los aspirantes a la ciudadanía y que solamente los ciudadanos suizos gocen de plenos derechos lingüísticos.

La lengua como elemento integrador de la comunidad no es exclusivo de los nacionalismos. También lo sostiene el movimiento libertario formulado por P. J. Proudhon, por cierto muy influido por el modelo suizo. "La unidad en la variedad - escribía en 1847 en sus "Carnets"- esto es lo que hay que buscar, respetando la independencia de los fueros, de los cantones, de los principados y de los círculos... Dejad, pues, a cada uno sus sentimientos, sus afectos, sus creencias, su lengua, y sus costumbres..."¹⁹.

6.8: La respuesta de los Estados

Frente a esta función de las lenguas, los Estados suelen responder con medidas de mayor protección al idioma común

estatal, otorgándole no ya la hegemonía, sino el monopolio oficial por lo menos en los usos públicos y en los niveles superiores de la administración y de la educación. Este "blindaje lingüístico" es lo que sucede no sólo en Europa Occidental, sino con el inglés en distintos Estados norteamericanos ante la progresiva consolidación de minorías lingüísticas distintas en su interior, principalmente la hispana.

A la lengua oficial de Estado se le suele asignar la misma misión aglutinadora y cohesionadora que a las otras. Su misión no es meramente administrativa, sino que su uso define un Estado frente a los otros, aunque no siempre. Los austríacos, por ejemplo, se diferencian política y socialmente de los alemanes, pero nunca han planteado un secesionismo lingüístico, nos recuerda Antoni M. Badía²⁰.

Además, el Estado es el que decide el status legal de cada idioma presente en su territorio y en muchas ocasiones incluso su uso y su normalización en una serie de decisiones políticas, en el mejor de los casos coparticipadas por los responsables políticos y los expertos en lingüística. La declaración de una lengua como oficial del Estado excluye en principio de las funciones públicas a todos aquellos que no la conocen y que utilizan otra en su ámbito propio. Ni siquiera se pueden conocer unos textos legales que todos los ciudadanos están obligados a aplicar. Esto facilita toda clase de abusos y

obliga a las comunidades lingüísticas minoritarias a convertirse en bilingües por la fuerza en una clara desventaja respecto a aquéllos que tienen como lengua materna la oficial del Estado, so pena de quedar marginados de la vida comercial, de las relaciones profesionales y de los circuitos culturales oficiales. Se puede dar el caso de que la lengua oficial del Estado sea una lengua minoritaria y no la que habla la mayoría de la población de todo el Estado o de alguna de sus partes. En resumen, "la lengua se convierte en un asunto de Estado, sobre todo si el Estado pretende construir una Nación o identificarse con ella"²¹.

En las relaciones del poder político, es decir en la comunicación entre gobernantes y gobernados, entre legisladores y ciudadanos, entre jueces y justiciables, la lengua se convierte en una condición totalmente necesaria. Y "si es cierto que la política es un combate en el cual las palabras substituyen a las armas, este combate se lleva a cabo con grandes dosis de manipulaciones simbólicas más que con demostraciones conceptuales"²². Este criterio parece plenamente compartido por el profesor Santiago Petschen cuando escribe que "las variaciones de una lengua inciden en la vida política y son afectadas también por ella"²³.

Lo que ha ocurrido entre las lenguas europeas ha sido un reflejo fiel de la tendencia de los hombres y de los pueblos más fuertes a hacerse con el poder y a ejercerlo. Como escribió

Hans Morgenthau, por poder "entendemos la superioridad de un hombre sobre la mente y las acciones de otro hombre; fenómeno éste que se encuentra, doquiera que haya seres humanos, que guarden un contacto social entre sí"²⁴. Los vertiginosos progresos realizados por la lingüística y la semántica a lo largo del siglo XX han perfeccionado su uso político, circunstancia reconocida por los propios lingüistas, que, como Gregorio Salvador, definen el idioma como "un nuevo poder político en su sentido puro"²⁵.

A partir de aquí y recogiendo una larga tradición lingüística, el profesor José Hierro S. Pescador afirma que "la manera de usar la lengua expresa de modo implícito la ideología de clase. Además, visto el carácter histórico de la lengua, ésta sufre cambios y sólo es inteligible en conexión con diversos aspectos del contexto social, tales como estructura del poder político, variedad y articulación de las clases sociales, diversidad de grupos profesionales, reparto de la riqueza, incidencia de las diferencias de edad o de sexo, desarrollo de las ciencias y las técnicas, grado de recepción social de unas y otras, tendencias artísticas predominantes, creencias sociales, modas, expectativas y vigencias diversas"²⁶.

En los últimos años la interdependencia de las naciones, el desarrollo de los sistemas de comunicación, la gran movilidad de los ciudadanos, la eliminación de las barreras comerciales,

etc. ha provocado ciertas "cohabitaciones lingüísticas", en expresión de John Zvereff. Algunos Estados sienten que su lengua es "agredida" por otras con mayor vitalidad o potencialidad y han dictado normas para su defensa. El caso más significativo es la ley de defensa del francés ("la ley Toubon") aprobada en julio de 1994 por la Asamblea Nacional francesa para proteger esta lengua de la creciente influencia del inglés. Zvereff es contundente al respecto: "Una lengua se verá perjudicada, principalmente, cuando los gobiernos sean incapaces de potenciar, diversificar y enriquecer lo que le da contenido: cultura (en el sentido más amplio de la palabra), investigación, economía y tejido social..."²⁷.

6.9: Lengua, Sociedad y Estado

No todas las lenguas minoritarias gozan de la misma vitalidad y del mismo grado de desarrollo en el marco de su sociedad. La Comisión Europea establece tres niveles para diferenciarlas:

- nivel 0: ausencia de cualquier percepción específica de su propia especificidad cultural;
- nivel I: percepción de un sentimiento de diversidad de su propia comunidad en relación al resto de comunidades establecidas sobre el territorio estatal;

- nivel II: percepción de un sentimiento de diversidad y de oposición entre la cultura de la propia comunidad y la de las otras comunidades del país, agravada por medidas de hostilidad (por acción u omisión) por parte de los gobiernos del propio país, tanto desde el plano histórico, como desde el de la actualidad.

Por supuesto, las comunidades del nivel 0 apenas tienen peso y su futuro es muy incierto, mientras que las del nivel II y III constituyen con frecuencia los núcleos regionalistas y nacionalistas más activos. Hasta el punto de que "las garantías a las minorías del derecho a usar su propia lengua, así como de dotarse de instituciones especiales de tipo cultural, religiosas y educativas en su lengua materna", son, de acuerdo con el parecer del analista británico Jonathan Eyal, una de las condiciones esenciales para la pacificación de los Estados europeos orientales²⁸.

En otra clasificación de corte más lingüístico la CE establece otras cuatro categorías:

- a) comunidades que hablan lenguas que no son oficiales en ningún país, como por ejemplo el occitano o el sardo;
- b) comunidades que hablan lenguas que son oficiales en otros países o Estados, como los albaneses de Italia o los alemanes en Dinamarca. Se da la circunstancia de que algunas minorías

lingüísticas son fronterizas y viven en territorios políticamente divididos y situados uno enfrente del otro. Un caso muy típico es el de la minoría alemana en Dinamarca y el de la danesa en Alemania;

c) comunidades que hablan lenguas que pueden ser consideradas históricamente y técnicamente como dialectos de la lengua del Estado. Es el caso del friulano, tomado como dialecto del italiano o del ladino;

y d) comunidades que hablan una lengua que no es oficial en ninguno de los países o Estados por los que se extiende ésta, siendo siempre lenguas minoritarias. Es el caso del catalán o del euskera en España y Francia.

Cabe señalar que las lenguas minoritarias se agrupan esencialmente en los apartados a) y d), mientras que el b) se refiere a las minorías lingüísticas con una evolución y unos problemas distintos a los de las primeras. El grupo c) plantea una serie de dificultades de análisis bastante espinosas, tanto de orden político, como estrictamente lingüístico.

Para Jean-William Lapierre, en cambio, se pueden establecer tres tipos de relación entre las distintas lenguas habladas en un mismo territorio:

a) situación de bilingüismo generalizado sin diglosia, cuando

todos entienden y hablan la otra lengua sin tener en cuenta las relaciones sociales dentro de las que actúan (vida pública o laboral, comercio, área privada, etc.), con lo que la fluidez comunicativa suele evitar conflictos de base lingüística, aunque puede sostener otros de otro signo, principalmente social;

b) situación de diglosia o de dominio relativo de un idioma sobre otro gracias a un status superior proveniente de tener el privilegio de ser usada en las actividades de mayor prestigio social, cultural y económico (administración, negocios, enseñanza superior, etc.), mientras que la lengua inferior queda reservada al interior del grupo dominado, a la vida rural, a los talleres o tiendas, a los niveles inferiores de la enseñanza, etc. El grupo superior se considera bilingüe. Este esquema es el que suele provocar un mayor número de conflictos de corte étnico-lingüístico;

y c) relación de dominio absoluto, cuando una lengua se impone o es impuesta a la otra en casi todos los órdenes de la comunicación social, mientras que el uso de la otra queda limitado a los ancianos, a la vida más privada o familiar y frecuentemente a un proceso de regresión social y lingüística, que conduce al unilingüismo nacional. En estos casos la conflictividad suele ser baja o incluso nula²⁹.

La Comisión Europea valora también el concepto de vitalidad de las lenguas minoritarias, en relación a sus comportamientos públicos y a su capacidad para protegerse de la desaparición o de la incorporación a otra lengua. En este tema Giles, Bourbis y Taylor son tajantes: "La vitalidad de un grupo etno-lingüístico es lo que hace probable que se comporte como una entidad colectiva distinta y activa en sus relaciones con otros grupos"³⁰.

Para este equipo de investigadores existen tres categorías de lenguas de acuerdo con su vitalidad:

a) las que se basan en su distribución demográfica (proporción dentro de la población total del Estado, concentración o dispersión geográficas, antigüedad en el territorio, fecundidad, endogamia, emigración, etc.);

b) las que se basan en el status social del grupo (posición económica, prestigio, memoria colectiva y símbolos movilizadores que produce, etc.);

y c) las que se basan en el grupo institucional informal (minorías activas) o formal (presencia en los medios de comunicación de masas, en las instituciones religiosas y políticas, etc.).

Las lenguas con un bajo nivel de vitalidad suelen ser habladas por las capas más envejecidas de la población, su uso público es escaso, sus reivindicaciones son defendidas sobre todo por intelectuales con frecuencia adscritos a otras lenguas mayoritarias, y en no pocos casos desean la desaparición de esta diferencia a la que achacan su retraso social y económico. Por el contrario, el informe de la Comisión Europea cita los casos del corso y del occitano como ejemplos de lenguas minoritarias con una fuerte vitalidad que luchan para no ser absorbidas definitiva y completamente por el francés, la lengua-marco del Estado.

Los redactores del informe sostienen además, quizá con escaso rigor o con mucho riesgo, que "la mayor parte" de las minorías lingüísticas se hallan en condiciones de inferioridad económica en comparación con el contexto estatal. Esto provoca fenómenos migratorios que originan núcleos que hablan esta(s) lengua(s) en otros puntos del Estado, e incluso del extranjero.

La lengua materna actúa entonces como factor aglutinante y asociativo de estos núcleos dispersos con fines no sólo de defensa y protección de la propia etnia-lingüística, sino de promoción económica y social. Aunque la situación de las lenguas minoritarias en España obligaría a revisar la primera parte de la teoría asumida por la Comisión Europea, es cierto que la comunidad étnico-lingüística, por ejemplo entre los corsos o los sicilianos, está en la base de ciertos fenómenos

mafiosos extendidos por varios países. El uso de la lengua minoritaria como instrumento de progreso y de promoción social, política y económica es, pues, un hecho frecuente. Conviene destacar, sin embargo, que estas circunstancias son obviamente cambiantes: regiones antaño fuertemente industrializadas se hallan inmersas en una seria crisis económica y social, mientras que otras tradicionalmente deprimidas, como Bretaña, se encuentran en una fase de expansión gracias a la mejoría en las comunicaciones y al desarrollo de economías sectoriales en auge.

Concluye con ello la Comisión Europea que la difusión de una lengua minoritaria no depende solamente de su reconocimiento legal, de su status jurídico, ni de la aplicación de los derechos connaturales, sino que va ligada asimismo a la evolución económica y social del grupo. Las minorías con dificultades de este orden tienden a perder población joven por efecto de la emigración y ésta se asimila a las culturas y lenguas mayoritarias, o simplemente más potentes. De este modo, el uso de la lengua minoritaria se va reduciendo a las zonas agrícolas y a las capas más envejecidas con el evidente peligro de desaparición a medio o largo plazo, incluso en aquellos casos en que gocen de un amplio apoyo legal y oficial.

Si el uso de la primera lengua se convierte en un estigma de inferioridad social, -subraya J.-W. Lapierre-, cuando el niño abandone su entorno familiar y comunitario para extender su

experiencia hacia la vida social, especialmente en la institución escolar, depositaria del prestigio del saber y en la cual aprenderá a leer y a escribir, quedará marcado para el resto de su vida. La autoridad del maestro de escuela le somete a unas obligaciones que le enfrentan a las familiares y le incitan a renegar o a rechazar su infancia y sus vínculos con la comunidad de origen. Objeto de burlas, de reprimendas o de castigos, ¿cómo puede reaccionar de otra manera que no sea a través de una actitud de resignación pasiva ante esta "inferioridad", o de revuelta activa contra esta dominación, afirmando el orgullo que siente por su origen y su habla? O también a través del rechazo de su comunidad lingüísticamente dominada o marginada y del deseo de asimilarse lo antes posible a la comunidad dominante?

Para este autor desde el momento en que el niño entra en la escuela, se convierte en objeto de unas relaciones con el poder político: la lengua que se le va a enseñar a leer y escribir y la lengua en la que le hablará su maestro dependen de unas reglas políticas establecidas por los poderes públicos, sean de la comuna, del cantón, la provincia o la región o del propio Estado, según esté el régimen más cercano o más alejado del modelo federal o del centralizado. Y ciertamente "ningún Estado se abstiene de intervenir de alguna forma en el uso de las lenguas, incluso los más federalizados"³¹, aunque estas intervenciones tienen que ser analizadas siempre a través del proceso histórico de formación del Estado. "La política

lingüística de un Estado, así como los conflictos que suscita o que intenta resolver, sólo puede ser entendida desde una perspectiva histórica", concluye Lapierre.

Esgrimiendo como argumento supremo la "razón de Estado", éste ha operado fuertemente sobre los grupos humanos en los que se ha asentado. "A pesar de ser una construcción artificial ha utilizado elementos propios de una nación, revistiendo de un carácter natural algo que no tenía por qué ser más que una fabricación humana. Para conseguirlo ha tenido que reducir lenguas, modificar religiones, imponer fidelidades, exigir dependencias, distorsionar identidades. Numerosos seres humanos se han visto desposeídos de su grupo natural de pertenencia y han tenido que optar por otro, el que el Estado les ha dictado", escribe el profesor Santiago Petschen³².

Habitualmente la concepción unilingüe del Estado responde a un modelo basado en la tradición jacobina-bonapartista que identifica unidad nacional (un sólo pueblo) con unidad lingüística (una sola lengua). La primera se fundamenta en la segunda y viceversa. La segunda razón para el monolingüismo de Estado es de tipo práctica: evitar tensiones y complicaciones en el gran aparato burocrático del Estado, ya que el uso simultáneo de dos o más lenguas (aunque no sean minoritarias) suele provocar algunas complicaciones, según demuestran distintas experiencias, como la canadiense o la suiza³³.

Lo que ocurre es que en los Estados federales la desconcentración del poder a favor de las instituciones regionales o locales permite a éstas desarrollar otra política lingüística normalmente más cercana a la realidad socio-lingüística, y en ocasiones incluso distinta o contrapuesta a la normativa estatal. Siendo la palabra (oral o escrita) fundamental en la acción política, su regulación lingüística se convierte en un hecho de gran trascendencia. "Una política de lenguas es necesaria tanto para la lucha por el poder como para el ejercicio de este poder", afirma J.-F. Lapierre, "y como instrumento del Estado contribuye a la vez a la integración y a la jerarquización sociales"³⁴.

En efecto, de este modo el aparato estatal controla lo que Pareto llamaba "la circulación de las élites", es decir la posibilidad de acceder a la clase dominante y dirigente a través de la apropiación de las riquezas económicas, de los valores culturales y de los poderes políticos. El unilingüismo estatal actúa como un filtro para aquellos que no conocen a fondo esta lengua, tanto por lo que se refiere a los negocios importantes, como al poder político o cultural en sí mismo.

Ambos terrenos se hallan reservados a los que manejan la lengua oficial con absoluta soltura, eliminando incluso a veces acentos o giros locales que revelan un origen socio-lingüístico "inferior" o que pueden ser mal vistos en los círculos elitistas. De este modo, la mayoría dominante impone a través

del unilingüismo de Estado una doble alternativa a los sujetos procedentes de las áreas lingüísticas más complejas: o la marginación o la asimilación con la consiguiente pérdida de la identidad individual. Para los lingüistas de influencia marxista el dilema esencial es si hay una lengua de clase o si hay una utilización de la lengua por las clases sociales, especialmente por las dominantes.

Esta relación de dominio lingüístico-social puede darse también entre lenguas de Estado potentes, como ocurre con el alemán, el italiano y el francés en la Administración federal suiza. No es de extrañar, por ende, que los conflictos lingüísticos adopten formas de reivindicación social y política y viceversa. La lengua puede convertirse con suma facilidad en una de las banderas del conflicto, puesto que se convierte en uno de los mejores símbolos de la identidad colectiva de una comunidad dominada. En cualquier caso, los conflictos estrictamente lingüísticos son raros, aunque no imposibles.

Lo habitual es que estas comunidades que se sienten marginadas formen a su vez una élite, que reivindica al mismo tiempo su promoción social a los puestos de prestigio estatales y el derecho al plurilingüismo. Ello no es óbice para que esta misma comunidad actúe también como dominante de otra socialmente más débil y habitualmente de origen emigrante. En esta compleja relación de dominios múltiples y cruzados, Lapierre destaca el papel de esta burguesía local o regional

como agente movilizador y como promotora de iniciativas socio-lingüísticas, como el control de la educación primaria por ejemplo en alianza con la Iglesia, que actúa como plataforma de poder. Hoy día la ya clásica lucha por el control de la educación es compartida con la dirigida al dominio de los medios de comunicación.

Al propio tiempo que la lengua sirve de barrera para evitar la asimilación total de la minoría regional o local por la mayoría estatal, se tiende en los países democráticos a crear un equilibrio socio-político-lingüístico, base de los Estados federales o regionalizados. Los bloqueos integrales de la élite estatal frente al ascenso de la burguesía regional conducen a que ésta última se constituya en un poder paralelo o concurrente, fuente casi siempre de graves enfrentamientos, incluso armados. En estos casos, la apelación a la solidaridad lingüística suele ser un factor de primer orden en la movilización de las masas para alcanzar distintos grados de autonomía o la secesión del Estado correspondiente, tal como sucede con el movimiento abertzale vasco, con el independentismo corso o con el Sinn Fein irlandés. En algunos sitios el recurso a la violencia terrorista desacredita ante la opinión pública estatal y/o regional más moderada no sólo el movimiento socio-político en sí mismo, sino la propia reivindicación lingüística por la que se lucha³⁵.

Por esto algunos analistas, como el catedrático Jesús Mosterín³⁶, afirman que la comunicación lingüística debe pertenecer al ámbito individual y no al público-estatal y que la normalidad se da solamente en aquellas situaciones en las que cada ciudadano decide por sí mismo los contenidos culturales que prefiere y "el Estado se limita a tomar nota de ello, sin pretender manipular los cerebros mediante política cultural, religiosa o lingüística alguna". Visto así, la "normalización lingüística" emprendida por muchos Estados a lo largo de la Historia Universal equivale a "la normalización religiosa", según la cual es el Estado quien determina la religión de sus ciudadanos y no es la elección personal quien se pronuncia, por la aplicación del principio "cuius regio, eius religio". Esta política de normalización conduce fatalmente a la homogeneización y por consiguiente a la eliminación de los disidentes, sean religiosos o lingüísticos, en relación a la doctrina/lengua oficial.

Según esta corriente, la lengua es, pues, un atributo de la persona, no del territorio. Cuando una persona se mueve, lleva consigo su lengua. Lo normal, en ausencia de cualquier coacción, es que en un territorio convivan distintas lenguas. Y si la población no se ajusta al ideal lingüístico del Estado, es éste el que debe cambiar y no la población. No es necesario que los políticos o los burócratas decidan qué lengua deben tener, o qué lengua deben aprender o hablar los ciudadanos. En un mundo libre y sin fronteras los ciudadanos se establecerán

donde deseen y aprenderán y hablarán la lengua que prefieran. Será, por decirlo así, el libre mercado cultural el que determinará las frecuencias relativas del uso de las lenguas. No debe haber lenguas oficiales, ni lenguas discriminadas, aunque naturalmente las lenguas que más ventajas ofrezcan a los consumidores lograrán una porción mayor del mercado. La evolución lingüística será entonces el resultado de muchas decisiones libres individuales en vez de una imposición política. "Sólo cuando esto se haya conseguido, podremos hablar de normalización lingüística", afirma J. Mosterín.

Es indudable que las grandes lenguas ligadas a culturas económicamente potentes aumentan su presión expansiva a costa de las pequeñas, situación que se desacelera y detiene cuando la crisis política y económica hace dudar de la viabilidad, o por lo menos de la utilidad, de la lengua grande. Por ejemplo, el proceso de rusificación de los pueblos de Europa Oriental se fue deteniendo a medida que se frenaba el crecimiento económico de aquella zona continental.

La vertebración social traducida en un asociacionismo activo es otro de los elementos fundamentales destacados por la Comisión Europea para las minorías lingüísticas, concretamente como medida de su vitalidad. Con frecuencia su misión principal consiste en la protección y salvaguarda de las tradiciones lingüísticas y culturales en general, al mismo tiempo que sirven para cohesionar la comunidad de lengua. Su carácter

puede ser más educativo, o más cultural, o más popular, o incluso pueden llegar a ser movimientos parecidos o próximos a los partidos políticos y más de una de estas asociaciones llega a convertirse en partido, una vez que adopta o transforma un programa político. Su principal problema suele ser de orden financiero, hasta en aquellos casos en que las autoridades locales o estatales las amparan y subvencionan.

A partir de aquí no es raro que las comunidades étnico-lingüísticas redacten un(os) programa(s) político(s) y que sus reivindicaciones adquieran unas dimensiones regionalistas o nacionalistas de distinto nivel, desde autonomistas hasta independentistas. En 1986 la Comisión Europea valoraba a la baja los intentos secesionistas sustentadas sobre estas bases, aunque paradójicamente reconocía que "las tradiciones separatistas están extendidas en la Europa de las Regiones". Como casos más avanzados en esta línea citaba ciertas regiones italianas que no especificaba.

Lo habitual es que estas minorías acepten el marco legislativo-político general en el que se mueven, sin perjuicio de sus reivindicaciones concretas. En cualquier caso, los países federales como la República Federal Alemana, o regionalistas, como Italia, sufren menos tensiones internas por esta causa, que los Estados de corte centralista, como por ejemplo Francia. Si parece claro que los Estados federales canalizan mejor, sin violencias extremas, ni amenazas serias de

desintegración sus divergencias socio-lingüísticas, también lo es que tampoco ellos están exentos de este tipo de problemas. "En la dialéctica entre la unidad política y la diversidad social, un Estado federativo en peligro de secesión tiende a acercarse al modelo unitario, mientras que un Estado unitario amenazado de estallido por las reivindicaciones de las minorías étnico-lingüísticas puede inclinarse poco o mucho hacia el federalismo", sostiene J.W. Lapierre³⁷.

El derecho a la autodeterminación es el último paso jurídico-político en esta pugna, derecho que hoy día no acepta el ordenamiento jurídico de ningún Estado de la CE. La secesión sería, por lo tanto, el último escalón del proceso étnico-lingüístico descrito y su planteamiento corresponde sólo a aquellas comunidades con una fuerte cohesión social, política y cultural, así como una fuerte vitalidad como minoría nacional que aspira a tener un Estado propio como culminación de su proceso de búsqueda de una identidad nacional. En un hecho cierto que raramente una minoría étnico-lingüística se declare satisfecha del grado de autonomía conseguida de los poderes estatales, lo cual provoca una permanente inestabilidad en este terreno que tanto las instituciones comunitarias, como las estatales tratan de contrarrestar en estos últimos años con la adopción de medidas legislativas y constitucionales. La creación del Comité de las Regiones por parte del Tratado de Maastricht en diciembre de 1991 indica los más recientes esfuerzos hechos por la CE en este campo.

El profesor Santiago Petschen señala que en algo más de un siglo las lenguas europeas con suficiente desarrollo idiomático han pasado de 15 a cerca del centenar, y que casi todas se convirtieron en el fundamento para que la comunidad obtuviera la independencia, la autonomía política, o al menos la autonomía cultural. Este es el caso del noruego, el finlandés, el flamenco o el checo en el siglo XIX, y el del feroés, el islandés, el escocés, el euskera, el retorromano o el catalán ya en el XX. En consecuencia se puede pensar en una evolución parecida para el frisón, el corso, el laponés o sami, el sardo, el ladino o el friulano, partiendo de la célebre constatación de Johannet, según la cual no se conoce despertar nacional que no haya sido precedido por un renacimiento lingüístico³⁸.

No faltan voces, sin embargo, que se pronuncian en contra de esta dimensión socio-política de las lenguas y de su uso como arma arrojadiza entre comunidades. La culpa la tiene una concepción igualitarista de los idiomas, que otorga a todos ellos los mismos derechos y funciones por encima de sus características. Por lo menos así lo sostiene el académico español Gregorio Salvador. "Decir que no todas las lenguas son iguales, que en la práctica no debe haber ni siquiera dos que lo sean, es posiblemente una obviedad. Porque se ha extendido ahora la opinión de que sí lo son, se ha generalizado el dogma del igualitarismo lingüístico", escribe³⁹.

Desde este punto de vista un sistema fonológico, una estructura gramatical y un léxico utilitario no bastan para cualquier uso confundiendo la potencia con el acto. Lo que subyace en el fondo de esta posición igualitarista, dicen sus detractores, es el uso del idioma como bandera de separación y el olvido de su valor esencial como instrumento comunicativo así como su verdadera dimensión cultural histórica. Una vez convertida la lengua en símbolo, ya es posible plantear la lucha idiomática. De este modo, además de las luchas expansionistas de los grandes idiomas, hay las guerras de las lenguas pequeñas contra las grandes, la de las lenguas tornadas en símbolos, "que es lo que no deben ser. Y no deben serlo porque esto trastueca su oficio, las muda de vehículos de entendimiento en motivos de disensión". El símbolo pasa a metáfora y ésta se convierte en imagen antropomórfica, hecho que desvirtúa las relaciones entre idiomas al otorgar a éstos unas funciones que no poseen. En este marco no hay lenguas oprimidas y lenguas opresoras, sino hablantes de una lengua que oprimen a los usuarios de otra.

Algo muy parecido defiende el profesor J. A. Argente cuando escribe que "el contacto lingüístico es un aspecto del contacto socio-cultural" y puede resultar de la asimilación, la aculturación o de la conservación de un grupo respecto a otro. En ambos casos, los protagonistas no son lenguas ni culturas, sino grupos humanos. Por ello, cuando se dice que un contacto lingüístico conduce a un conflicto lingüístico, "debe

entenderse que se alude no a un conflicto entre lenguas, sino a un conflicto entre grupos sociales". La lengua se convierte en una cuestión simbólica, en un campo de batalla donde se dirimen intereses políticos y sociales. Importa conocer entonces la reacción del poder ante la diversidad lingüística"⁴⁰.

La tendencia histórica de los Estados ha sido la de unificar lingüísticamente su territorio. Este es el balance global que hace el profesor Argente, balance que suscribimos. Lo que pudiéramos llamar "nacional-monolingüismo" ha sido la política lingüística implícita que han desarrollado los Estados-nación europeos en su proceso constitutivo a lo largo de la Edad Moderna y Contemporánea. El triunfo de la "lengua nacional" era tanto mayor cuanto más eficaz fuese el arrinconamiento de las lenguas no nacionales: éstas quedaron sentenciadas en el mismo momento en que se decidió que debía haber "una" lengua nacional y se eligió, sin discusión, ni apelación posibles, la que se hablaba en la villa y corte. Que ello se llevara a cabo en nombre del "imperio" de su católica majestad o en nombre de la "libertad, la igualdad y la fraternidad" de la república burguesa poco iba a variar el resultado. Por consiguiente, la política nacional-monolingüística del Estado-nación, al perseguir la exaltación y la extensión de la lengua nacional, se proponía a la vez acabar con todo vestigio lingüístico que pudiera resucitar el espectro de la diversidad y poner en cuestión la sagrada uniformidad del Estado. El bilingüismo

sería promovido, pues, tan sólo en la medida en que contribuyera a la extensión de la lengua de la villa y corte primero y a la eliminación de las lenguas "regionales" luego. Ello no empece para que hayan existido y existan en realidad Estados multilingües y multinacionales en Europa.

6.10: El plurilingüismo y la cohesión europea

Actualmente la política lingüística sigue apareciendo como fundamental para cohesionar las nuevas instituciones supranacionales de Europa. Todas las culturas y todas las lenguas forman un patrimonio común de alcance europeo, de tal modo que Europa deja de ser una simple noción geográfica para convertirse en el marco de una cultura plurilingüe. Así lo proclamó en 1995 el presidente de la RFA, Roman Herzog, ante el PE siguiendo las ideas de José Ortega y Gasset. "Si hicieramos balance de nuestro patrimonio espiritual comprobaríamos que la mayor parte no procede de nuestra patria respectiva, sino de un fondo común europeo. En todos nosotros lo europeo prima, con mucho, sobre lo alemán, lo español o lo francés. Cuatro quintas partes de nuestra riqueza interior están constituídas por un patrimonio europeo comun". Y añadió con rotundidad que "franceses y alemanes, británico e italianos, españoles y suecos, daneses y griegos son, sin saberlo, mucho más europeos de lo que algunos políticos nacionales quieren reconocer"⁴¹.

El sociólogo e historiador italiano Paolo Flores de Arcais propone una educación plurilingüe, aunque él se refiere a las grandes lenguas universales, como uno de los factores a considerar a la hora de construir una identidad europea. "Pero ante todo, si no queremos renunciar del todo a Europa es urgente que se empiece a construir una identidad europea en forma de 'vivencias' concretas. Pensemos en el enorme impacto que tendría la simple aplicación -pero general y sin excepciones- de la enseñanza de una segunda lengua cualquiera desde los años de la más tierna infancia, antes de la escolarización obligatoria, a partir de los tres años... El uso de las lenguas debería incentivar la identidad nacional"⁴².

Es en esta fase cuando empieza a abrirse paso la idea de fundamentar una nueva identidad europea sobre la base del plurilingüismo. Para el profesor Santiago Petschen el marco comunitario incluso puede dar más facilidades a las lenguas minoritarias que no las ha dado el estatal, en el cual se han movido hasta ahora. De todos modos, la construcción europea debe prestar una atención especial a la diversidad, y ésta es a su vez causa y efecto de la crisis del Estado. En efecto, los organismos supraestatales y las entidades regionales combinan sus esfuerzos en una acción de pinza para arrebatar competencias y poder a los Estados. Al debilitarse éstos dejan un mayor campo de acción a las minorías, que tienden a aproximarse a los organismos internacionales dado que "proceden de una manera empírica y no dogmática" y sólo centralizan

aquellas cosas exigidas por la naturaleza de la técnica, de acuerdo con el principio de subsidiariedad.

6.10.1: Las culturas regionales son Europa

Apoyándose en el libro Europa, ¿para qué? de Marcelino Oreja⁴³, el profesor Petschen, pone de manifiesto cómo el grueso del gasto cultural e incluso educativo ha pasado de la Administración central a la regional o local, a causa de la desconcentración de competencias que en ambos terrenos han seguido la mayoría de países de la CE, provocada a su vez por el citado principio de subsidiariedad. Y del mismo modo que los Estados-nación fomentaron un patriotismo estatal fundamentalmente a través de las escuelas, ahora son las regiones, gestoras de la red escolar, las que canalizan esta política a su favor, poniendo el énfasis en el conocimiento de la geografía, el arte, la historia y la lengua regionales. En la RFA los "länder" y los municipios administran el 98% de los gastos destinados a cultura; en Suiza el porcentaje es del 90%; en los Países Bajos del 70%; y en Suecia del 60%.

Por otra parte, las culturas regionales constituyen en gran medida la alternativa o el contrapeso a las culturas universalistas y de masas fomentadas por los modernos medios de comunicación. No es de extrañar, por lo tanto, que el Centro Europeo para las Culturas Tradicionales y Regionales, vinculado

a la Asamblea de las Regiones de Europa, requiriera el 20 de noviembre de 1987 que la construcción europea "tiene que ayudar a las culturas ocultas del pueblo, las culturas basadas en la localidad, con sus propios acentos y dialectos, y apoyar sus formas culturales: tradiciones orales, lenguas, costumbres, habilidades, artes populares", que es lo que puede contrapesar la capa de unidad homogeneizadora impuesta "por las tendencias sociales modernas, la industrialización y la expansión de los medios de comunicación de masas"⁴⁴.

La legislación europea, empezando por las nuevas (o renovadas) Constituciones, tiende a reconocer a la región como el mejor ámbito para la identificación del ciudadano con su grupo, especialmente en aquellas que disponen de una lengua y de una cultura propias. La reforma de la Constitución de Noruega hecha en 1988 ordena a las autoridades estatales que faciliten "las condiciones para que el grupo sami pueda asegurar el desarrollo de su idioma, su cultura, y su vida social"⁴⁵. La norma seguida casi invariablemente es que las regiones que obtienen algún tipo de estatuto jurídico y político especial dentro del ordenamiento estatal recogen amplias competencias lingüístico-culturales como la mejor vía de integración personal a la vida colectiva e incluso estatal.

Sólo en la medida en que se desarrolla debidamente su personalidad individual y comunitaria, el ciudadano se encontrará cómodo dentro de un Estado plurilingüe y

pluricultural. Es lo que preconizan los estatutos de autonomía de las Islas Feroe, de las Islas Aland, del Trentino-Alto Adigio, Gales, Escocia, Schleswig-Holstein, Carintia, Burgenland, Jura, Piamonte, así como los 17 estatutos de autonomía españoles.

Ahora bien, ¿es posible mantener una doble fidelidad por una parte hacia el grupo étnico y por otra para con el Estado? La cuestión ya la suscitó en 1923 Richard Coudenhove-Kalergi en su libro Pan-Europa a raíz del surgimiento de los nuevos Estados procedentes del antiguo Imperio austro-húngaro. Coudenhove defendió la posibilidad de ser leal a la nación en tanto que hombre y al mismo tiempo al Estado en tanto que ciudadano. Sin embargo, otros autores, como el antropólogo valenciano Joan F. Mira, expresan sus fuertes dudas sobre la viabilidad de esta fórmula, que el profesor Petschen califica de "distinción profundamente inadecuada". "Solamente en algunos casos y a fuerza de nacionalización permanente -y no sin posible o real incomodidad-, puede funcionar una doble adscripción a grupos básicos de identidad", escribe Mira en su Crítica de la Nación Pura⁴⁶. Se puede lograr en algunos casos el que ambas lealtades o adscripciones no se interfieran, como puede ser la regional (o nacional) y la europea.

Otros analistas, como Denis de Rougemont en un artículo titulado "La Region n'est pas un mini-Etat-nation"⁴⁷, sostienen que es deseable la multiplicación de las lealtades. Rougemont

declara las suyas al canton de Neuchâtel, a la Confederación Helvética, a la francofonía, al protestantismo, y a un sinfín de redes parentales, profesionales, intelectuales, etc. Esta es una posición muy extendida entre los más decididos defensores de la unión europea. Sólo que algunos las jerarquizan, poniendo en primer lugar la lealtad a la región étnico-lingüística, a continuación al Estado y en tercer lugar a Europa.

6.10.2: Muchas lenguas para una sola Europa

Algo muy parecido es lo que sostiene Antonella Rampino cuando se pregunta qué lengua utilizarán los futuros Estados Unidos de Europa. Para ella es importante que haya una lengua directa y casi universal, como el inglés, "pero es mucho más importante que haya muchas lenguas y que todos, si es posible, aprendan a convivir con ellas"⁴⁸. Porque tal como explica la escritora y periodista Jacqueline Risset, el sentido del lenguaje no estriba en sus posibilidades prácticas, sino en su pluralidad. Quizá en la Europa unida nuestros hijos serán todos políglotas, o mucho mejor, tal como afirma la psicoanalista Simona Argentieri, "serán capaces de tener un alma para cada una de las lenguas que se sabe hablar".

De todos modos, el profesor Robert di Pietro, catedrático de Lingüística y Metodología de la Universidad de Delaware, se muestra convencido de que el uso de una segunda lengua

(principalmente el inglés) común a todos los europeos, "no quiere decir que los países vayan a perder su culturas", por lo que a pesar de defender la hegemonía del inglés, como lengua que comunica grupos diferentes en un papel parecido al del latín en la Edad Media, y del proceso de acercamiento de las naciones, sostiene que "hay que mantener los idiomas regionales"⁴⁹.

Por lo tanto, se trata de aprender y de conservar al mismo tiempo, o como dice Cathy Sweeney, "aprender inglés y utilizarlo para la comunicación internacional no pondrá en peligro de muerte la lengua propia, que no hay que abandonar tampoco para la comunicación internacional"⁵⁰.

Algunos van todavía más allá. Según una editorial del diario The European, las 15 lenguas minoritarias principales de Europa Occidental no deben desaparecer: "si una Europa unida debe aspirar a ser algo más que un insípido crisol, tenemos que buscar la forma de salvar las lenguas de una serie de minorías, amenazadas por los modernos medios de comunicación... Incluso si quedan fuera de la vida cotidiana, su literatura debe ser conservada y estimada. Aquí hay una lección que aprender de las dos grandes lenguas clásicas, lenguas muertas en la actualidad". Al fin y al cabo, no sería la primera vez que la desaparición de una lengua minoritaria diera paso no directamente a la mayoritaria-oficial, sino a una tercera, mezcla de las dos primeras e incluso que acabara

consolidándose⁵¹.

Sin embargo, esta convivencia entre una posible "lingua franca" europea y las minoritarias no parece posible, en opinión de Andrea Chiti-Batelli, quien cree que a la luz de las experiencias históricas, por ejemplo con el latín o las lenguas coloniales, la lengua más extendida termina por absorber o simplemente aniquilar a las otras. En este sentido, aboga por el uso de una lengua muerta, sin el respaldo político, cultural y económico de una de las grandes lenguas universales, y especialmente el inglés, o mejor aún por la implantación del esperanto, lengua de síntesis que carece de la agresividad característica de todas las grandes lenguas universales⁵².

¿Se puede incluso relacionar el respeto a las "lenguas débiles" con la pacificación de Europa y la paz en general? El Consejo de Europa lo hace rotundamente en el Preámbulo del Convenio-Marco para la Protección de las Minorías Nacionales de 1994, cuando afirma textualmente que "los trastornos de la historia europea han demostrado que la protección de las minorías nacionales resulta esencial para la estabilidad, la seguridad democrática y la paz del continente".

Este papel pacificador del plurilingüismo es reconocido por el actual secretario general del Consejo de Europa, Daniel Tarschys, especialmente en las zonas fronterizas, donde esta organización lleva a cabo programas de intercambios culturales

y lingüísticos, entendidos como medidas de fomento de la confianza entre distintos países y pueblos. "Los proyectos han puesto de manifiesto que al centrarnos en iniciativas locales y básicas podemos llegar a reducir la tensión y establecer vínculos nuevos y directos entre grupos de otro modo antagónicos", escribe Tarschys⁵³. Las lenguas constituyen así un elemento no menor en la seguridad europea.

El profesor Robert di Pietro no duda tampoco en hacerlo: "si no conservamos las lenguas más débiles, no habrá un mundo en paz". Su argumento de fondo es que si bien la comunicación es más importante que nunca, también lo es la autonomía de la gente.

Una Europa multilingüe es ardorosamente defendida también por el profesor J. A. Argente cuando afirma que "el multilingüismo se proyecta sobre el contexto europeo y aún universal, como consecuencia de la movilidad de la población, de la internacionalización del mercado y del espacio comunicativo de los grandes medios y de la inevitable integración en instancias políticas que desbordan las fronteras, falaces pero férreas, del Estado-nación. A estas alturas el esquema del nacionalmonolingüismo es inaplicable a la construcción de Europa y de la conciencia europea". Admite el profesor Argente la posibilidad de que de ello se derive un golpe mortal, definitivo para ciertas lenguas, pero otra no menos real es que los europeos se acostumbren a convivir en una

pluralidad de lenguas, "dispuestas sin duda en una inevitable y compleja escala de implicación jerárquica -no la misma para todos-, según los ámbitos de uso, las situaciones sociales y las relaciones interpersonales"⁵⁴.

Esta actitud de defensa del plurilingüismo no debe limitarse a las lenguas minoritarias propias de Europa, sino que debe abarcar también las introducidas por los inmigrantes. Esta es la opinión, entre otras, del profesor de Filosofía del Lenguaje de la Universidad de Roma, Tullio de Mauro, quien cree que lenguas como el árabe o el bantú deberían ser enseñadas en las escuelas europeas. "Con los emigrantes o estamos dispuestos a crear ciudadanos de segunda división, o bien les facilitamos medios para su integración efectiva. En este caso, debemos realizar un doble trabajo: enseñarles la lengua de nuestro país y la del suyo". Se trataría simplemente de seguir el ejemplo sueco. Ya no es, pues, el monolingüismo de Estado el factor de integración de las minorías étnicas con una lengua distinta, sino por el contrario la educación plurilingüe⁵⁵.

En todo caso y en términos generales, una Europa multicultural y plurilingüe no resulta fácil de estructurar. Según Raymond Weber, Director de Relaciones Culturales del Ministerio de Trabajo y Cultura de Luxemburgo, una ordenación lingüística de Europa debe tener en cuenta factores como:

- a) - las migraciones extra-europeas
- la diversidad cultural interna
- la confrontación entre culturas distintas

- b) - la caída del comunismo
- la consolidación de la Europa comunitaria
- el proceso de desarme y el pacifismo
- el optimismo democrático
- la agravación de las desigualdades y el paro estructural
- la defensa del medio ambiente
- las nuevas formas de interdependencia y de
supernacionalidad
- la creación de una cultura de transfronteras
- el proceso informático
- el fracaso de la trasposición de los modelos occidentales y
el desarrollo de modelos carismáticos
- la desaparición de las ideologías y de las utopías sociales
más movilizadoras
- la teoría del caos
- la lucha contra la droga y el SIDA
- los Derechos Humanos como referencia central de las
legitimidades políticas y sociales
- la tendencia a reconciliar Estado y sociedad
- las técnicas y los nuevos desafíos biomédicos
- la sociedad de la comunicación
- y la crisis del Estado de Bienestar hacia la sociedad del
saber⁵⁶.

6.10.3: Los valores del bilingüismo

Durante el primer tercio del siglo XX, y sobre todo a partir de 1928, era cosa habitual en los congresos sobre lingüística y política lingüística la condena de la enseñanza bilingüe por entender que los sujetos bilingües son o quedan menos capacitados que los monolingües. Esta teoría, todavía en vigor en algunos círculos pedagógicos y administrativos de Europa Occidental, ya ha sido abandonada por la inmensa mayoría de técnicos y expertos, a partir de los revolucionarios trabajos de Peal y Lambert en Quebec (Canadá) durante la década de 1960. Ambos estudiosos demostraron la mayor capacidad de los sujetos bilingües, mientras que las técnicas pedagógicas y escolares posteriores permiten la enseñanza en dos, tres, y hasta cinco idiomas sin graves dificultades, pero siempre que se observen determinadas normas, como por ejemplo, que el alumno identifique siempre a las mismas personas utilizando el mismo código lingüístico.

Para la lingüística histórico-comparativa el bilingüismo nunca representó un problema que hubiera que explicar, sino que era un recurso explicativo, del cual, bajo el nombre de "substrato", podía echar mano el lingüista para dar cuenta de aquello que no alcanzaba la regularidad de las "leyes fonéticas" y "los procesos analógicos". Para la lingüística descriptiva constituía un problema que había que evitar, so pena de caer en graves contradicciones respecto a la naturaleza

de su objeto de estudio, así como una causa a la que era preciso no recurrir a fin de mantener los límites de "lo lingüístico".

Sólo a mediados de este siglo comenzó a desarrollarse lo que hoy se conoce como "lingüística de contacto", cuyo objeto es precisamente el contacto entre lenguas y los fenómenos derivados. Entre las causas del contacto conviene distinguir entre lo que algunos han llamado "factores primarios" y "factores secundarios". Los primeros son responsables de que dos pueblos con lenguas distintas entren en contacto directo; los segundos son responsables de la naturaleza específica y de la evolución lingüística de este contacto. Entre los primeros cabe mencionar a la geografía, a los movimientos socio-demográficos, los desarrollos políticos y militares, los procesos socio-económicos de industrialización y modernización. Aunque en cierto sentido puedan considerarse las causas más profundas de lo que luego pueda ocurrir a las lenguas y a los hablantes como efecto del contacto, no bastan para explicarlo, ya que no inciden de forma directa en la conducta lingüística individual.

Entre los segundos hallamos factores de orden socio-psicológico, como las actitudes de la población hacia el contacto lingüístico, ya sean inducidas por razones de tipo político, religioso, comercial o educativo, las

identificaciones y lealtades de los hablantes, así como factores de orden socio-demográfico o factores que combinan características de ambos órdenes, como la duración, la intimidad del contacto, o, en fin, factores de orden socio-político, como la extensión del conocimiento y uso de una lengua mediante la generalización del sistema educativo obligatorio entre la población en general y la del servicio militar obligatorio entre los varones.

En otras palabras, los factores secundarios son los que determinan la posibilidad y el grado del bilingüismo, ya que tienden a facilitar u obstaculizar la aparición o no de alternancia lingüística y de interferencia, así como la medida de su aparición, y finalmente influyen en el desarrollo del contacto, ya sea en la dirección de la sustitución, ya sea en la del mantenimiento de la lengua. Lo que determina la situación de contacto de lenguas es la historia sociolingüística de sus hablantes y no la estructura de su lengua.

En cualquier caso, hoy día parece ya fuera de dudas la superioridad de los sujetos bilingües por lo que respecta a las capacidades cognoscitivas del individuo, aunque debe ser un bilingüismo "integrado" o "sumativo", es decir que permita expresarse indistintamente en cada una de las lenguas. Esto se adquiere mediante una metodología situada en el contexto social y en las circunstancias personales del afectado.

Esta es la tesis que sostiene el Manifiesto de Bastia de 1984. Según sus signatarios, la educación bilingüe es "un aprendizaje precoz, intensivo e interdisciplinar de dos lenguas que luego seguirán siendo vehículos de enseñanza a lo largo de toda la escolaridad". La declaración deja bien sentado que "está demostrado que la capacidad de aprendizaje precoz del niño es siempre superior a sus capacidades ulteriores y que, además, una competencia bilingüe de partida facilita en todos los casos el aprendizaje ulterior y el dominio de una tercera y una cuarta lengua". En consecuencia, una educación bilingüe e intercultural "es la única susceptible de sacar a las minorías culturales y lingüísticas de sus ghettos, la única en transformar en patrimonio y en un signo de riqueza cultural la pretendida "tara" que con frecuencia constituye hoy día el empleo de una lengua minoritaria o extranjera. En este sentido, la educación bilingüe e intercultural es una opción educativa privilegiada para sacar a la Humanidad del sub-desarrollo cultural".

En cualquier caso, el Manifiesto insiste en que al contrario de lo que sostiene una opinión muy extendida en los medios unilingües, la educación en dos lenguas "no se hace en detrimento de una de ellas. Cuando las condiciones (individuales, familiares y socio-culturales) son respetadas para una escolarización eficaz del niño en una lengua, lo son también para una escolarización bilingüe. Al final, la competencia bilingüe favorece el dominio de una y otra

lenguas"⁵⁷.

6.10.4: El método de la "inmersión"

El método de la "inmersión" es uno de los más recomendados por los buenos resultados dados hasta ahora en distintos países para formar adecuadamente una población bilingüe. Consiste en educar escolares que usan un idioma en un medio que habitualmente utiliza otro. Se recomienda especialmente que aquéllos que utilizan la lengua considerada dominante se inscriban en escuelas que usen normalmente la más débil. Lambert, por ejemplo, no creía prudente que los niños francófonos del Quebec estudiaran en escuelas anglófonas, dado que el inglés era en aquellos momentos todavía la lengua más fuerte en el territorio, de modo que los escolares francófonos corrían el peligro de perder su lengua, mientras que difícilmente sucedería el proceso contrario, es decir que los escolares anglófonos abandonaran el inglés por el hecho de estudiar en régimen de "inmersión" en escuelas francófonas.

El profesor Miquel Siguán pone tres condiciones para que la "inmersión" funcione debidamente:

- a) iniciación a la enseñanza en la lengua propia;
- b) introducción gradual de la lengua fuerte y oficial o

mayoritaria;

y c) continuidad en el cultivo de la lengua propia en alguna medida a lo largo de todo el proceso de escolaridad⁵⁸.

Para aplicar con éxito los métodos de la "inmersión" es preciso, pues, tener un cierto conocimiento inicial de la lengua escolar, que evite situaciones de rechazo total, y al mismo tiempo que el escolarizado no sienta amenazada su lengua materna original. "No se trata de substituir la lengua materna... El cambio de lengua entre casa y escuela puede ser bueno si se da un conjunto de requisitos. Y puede ser malo si no se da", afirma J.M. Artigal, director del Instituto Europeo de Programas de Inmersión⁵⁹. En estas condiciones el fracaso escolar por razones de idioma proviene de otras consideraciones, como por ejemplo un bajo aprendizaje del idioma materno⁶⁰.

El peso que tiene el grupo en el aprendizaje de la segunda lengua fue especialmente subrayado por el profesor Miquel Siguán en un Congreso de Psiquiatría Infantil y Juvenil celebrado en Barcelona en diciembre de 1987. Después de negar la existencia de "trastornos psicológicos" a causa del bilingüismo, Miquel Siguán afirmó que "las lenguas siempre están relacionadas con situaciones sociales y para una persona que vive en una comunidad con dos o más lenguas, cada una de ellas aporta la adscripción a un grupo determinado con un sistema propio de valores"⁶¹.

De hecho el método de la "inmersión" se extiende cada vez más, hasta el punto de que el vicerrector de la Universidad de Vasa (Finlandia) Christer Laurén sostenía en 1992 que "los programas de inmersión lingüística son el futuro de la enseñanza de las lenguas extranjeras... Ser monolingüe es una pequeña pobreza"⁶². Los buenos resultados obtenidos en la normalización lingüística en Cataluña llevaron a finales de agosto de 1991 a Barcelona al Ministro de Estado para la Lengua Gaélica, Padraig C. O'Gallchoir, y al presidente del comité parlamentario irlandés, David Andrews, para aplicar el modelo catalán al galés y al gaélico. En todo caso, la experiencia demuestra que enseñar francés a los alumnos angloparlantes de Quebec, catalán a los castellanoparlantes de Cataluña o el sueco a los niños de habla finlandesa ha resultado un fracaso total o relativo siempre que se ha planteado como una asignatura más. En cambio, una correcta aplicación de la inmersión garantiza el aprendizaje a fondo de la segunda lengua, bien sea la del territorio, bien sea extranjera.

En verdad, no otra cosa hacían ya en épocas pasadas las familias ricas al mandar a sus hijos a estudiar a colegios elitistas en países con otra lengua, práctica que por cierto se ha acrecentado en estos últimos años⁶³.

Las recientes experiencias escolares con carácter general, especialmente en las zonas bilingües españolas, indican, en efecto, que los niños tienen una gran facilidad para "absorber"

otro idioma y que aprenden con rapidez y sin graves dificultades al estar inmersos en un ambiente escolar bilingüe. Concretamente, los niños aprenden otro idioma cuando se está gestando su fonética, o sea a partir de los tres años⁶⁴.

Partiendo del principio de que el bilingüismo precoz no perjudica y que aprender a leer en una segunda lengua puede incluso ser beneficioso a condición de que no sea una imposición, de que se tenga muy en cuenta la lengua materna del niño, de que éste posea conocimientos de la lengua de aprendizaje antes de abordar la lectura y de que se disponga de medios para una enseñanza de calidad, los expertos pretenden que los jóvenes al final de su escolarización obligatoria sean capaces de expresarse correcta y fluidamente en las dos lenguas oficiales y que conozcan además una lengua extranjera por lo menos. Se puede trabajar, por lo tanto, hasta con tres lenguas a la vez sin inconvenientes superiores a los que pueden plantear otras materias escolares. "Para ello, la enseñanza ha de ser bilingüe, sea con las dos lenguas como vehículo de enseñanza o con una de ellas como lengua vehicular y la otra enseñada de manera que asegure su pleno dominio oral y escrito", afirma Aina Moll⁶⁵.

De todos modos, no existen sociedades bilingües por sí mismas, ya que una lengua para subsistir necesita un territorio propio, donde sirva de vehículo normal de comunicación de la comunidad y su conocimiento sea necesario para integrarse en

ella como ciudadano". El objetivo es "conseguir una sociedad que funcione normalmente en la lengua territorial, pero donde todos conozcan también la oficial del Estado".

La educación bilingüe es la que se propone el dominio de dos lenguas, pero se puede dar el caso de que la escuela enseñe en una sola pero distinta de la habitual de los alumnos. Sería la enseñanza en una situación de bilingüismo real. En cambio, el profesor Miquel Siguán se resiste a considerar la otra lengua como una simple asignatura.

No bastan, sin embargo, las estrictas técnicas escolares para asegurar el éxito del proceso o por lo menos para facilitarlo. Se requiere, además, la colaboración de los padres, un comienzo temprano (en pre-escolar o guardería), la aceptación de la lengua original de los sujetos y un enfoque nunca discriminatorio, la introducción funcional de la lengua en la comunicación y la acción de los escolares, la continuidad del cultivo de la segunda lengua, el entusiasmo de los educadores por el método seguido, y la debida atención al nivel social y cultural de los alumnos y de su entorno. Por otra parte, con frecuencia en estos programas bilingües hay que combinar el aprendizaje de una tercera lengua extranjera con las dos manejadas en la escuela y en la calle o la familia.

6.10.5: La incidencia socio-política del bilingüismo

El bilingüismo es un fenómeno socio-lingüístico con un alcance socio-político muy complejo y que presenta situaciones muy peculiares. El profesor Hugo Baetens Beardsmore, profesor de neerlandés en la Universidad de Bruselas, distingue entre el bilingüismo "simétrico" y el "asimétrico", el "horizontal" y el "vertical", asimilando a este último el concepto de diglosia⁶⁶. Gran parte de esta complejidad deriva precisamente de su dinamismo y de su movilidad y al propio tiempo de su enorme variedad, aunque se admiten situaciones de bilingüismo más o menos estable. Todo depende de las implicaciones personales, de las condiciones socio-culturales, de la evolución histórica de la población, de su sociodemografía, y de su psicología social, que determinan el acceso de cada comunidad lingüística a cada lengua, del grado y la forma de aprendizaje, de las actitudes de los hablantes de cada lengua frente a la otra y de su contacto, de sus consecuencias, etc., según señala J. A. Argenté⁶⁷.

El profesor barcelonés Josep María Colomer distingue a su vez dos actitudes básicas en una conversación entre personas bilingües: la "adaptada" y la "inadaptada". La primera busca "eficacia comunicativa y relación social", mientras que la segunda pretende "la preservación de la identidad cultural", aunque todo ello dependa del nivel de competencia y de la proximidad entre las dos lenguas. Partiendo de estas dos

actitudes y de las posibles conversaciones entre la lengua mayoritaria y la minoritaria, Colomer establece unas curiosas tablas que derivan hacia cuatro comportamientos generales: "adaptación por turnos de ambas lenguas", cuando ambos sujetos mantienen una actitud adaptada; el "bilingüismo pasivo", cuando ambos tratan de imponer su primera lengua y se produce un equilibrio; "la imposición del idioma mayoritario", cuando un interlocutor utiliza una estrategia dominante e impone su primera lengua y el otro en actitud adaptada utiliza su segunda lengua; y la "imposición de la lengua minoritaria", es decir el caso inverso al anterior. En grupos de más de dos personas funciona "la ley de las mayorías", o el uso de la lengua mayoritaria del grupo, que puede ser la minoritaria de la comunidad, fórmula muy utilizada por los poderes públicos⁶⁸.

La imposición de la lengua mayoritaria por inadaptación de los miembros de este grupo es la propia de los Estados-nación que en algún momento de su historia ha propiciado un proceso de "asimilación" de las lenguas minoritarias. Puede darse la situación contraria, la imposición de la lengua minoritaria, pero exige una actitud adaptada de los hablantes de la mayoritaria, los cuales seguramente conocen mejor la minoritaria que al revés. O también a causa de la represión simplemente. Esta es una situación frecuente en las regiones con una lengua propia e integrada en un Estado multinacional con una lengua oficial distinta y dominante, que actúa como lengua común.

6.11: Soluciones distintas para situaciones diferentes

Dado que en Europa no existen apenas Estados cuyas fronteras lingüísticas coincidan exactamente con las políticas, el bilingüismo es un fenómeno muy extendido que los distintos poderes públicos tratan de solventar o mediante la convivencia interlingüística, o mediante el dominio de unas lenguas sobre las otras. A escala mundial, "el bilingüismo es la norma y el monolingüismo la excepción", nos recuerda el profesor Hugo Baetens⁶⁹, pero el profesor Miquel Siguán sostiene precisamente lo contrario, es decir que "el monolingüismo es la regla y el bilingüismo la excepción"⁷⁰. La diferencia estriba en que son "las situaciones bilingües" más abundantes que las monolingües.

La expansión colonial europea universalizó la idea de que una sola lengua representa una fuerza unificadora, lo que conllevó la unión entre la noción de Estado y una lengua única o por lo menos hegemónica. En contrapartida, el bilingüismo se convirtió en un problema de Estado cuando era él quien lo creaba con su ignorancia de la realidad o su incapacidad a adaptarse a ella.

Ahora bien, hay un acuerdo generalizado acerca de dos aspectos básicos: que no hay dos sociedades bilingües idénticas y, por lo tanto, no hay soluciones genéricas, y por otra parte que las tensiones lingüísticas suelen reflejar además desigualdades sociales o políticas. Una convivencia armónica

entre distintas lenguas en un mismo territorio suele provocar, además, procesos de fusión idiomática, que por lo menos en la práctica conduce a un código comunicativo bastante o muy fluido de acuerdo con las circunstancias concretas. Estas fusiones, análogas a las existentes en el resto de campos de la actividad social humana, "responden básicamente a estrategias de simplificación en el manejo de los instrumentos lingüísticos y no pueden corregirse con facilidad. Varían en función de factores estructurales, relativos a las características de las lenguas en cuestión, pero también de factores socio-culturales y personales, cuya combinación engendra las más variopintas especies de híbridos lingüísticos", en expresión de Lluís Payrató⁷¹.

Estas mezclas no deben escandalizar, ni ser magnificadas. Los estudios efectuados al respecto en sociedades bilingües suelen ser desbordados rápidamente por la velocidad de los cambios y en no pocos casos resulta difícil incluso distinguir el idioma original. No falta, sin embargo, quien traduce (y aún reduce) el problema a términos morales o de pureza lingüística, considerando la lengua primigenia como la "buena" y la añadida como la "mala".

De todos modos, en opinión de otros expertos, como Lluís V. Aracil, el bilingüismo es el camino más idóneo para superar o contrarrestar el carácter resistencialista de muchas lenguas minoritarias y asimilar por este conducto a sus hablantes a la

lengua y a la cultura dominantes. Aunque referida exclusivamente al catalán, esta es la tesis que subyace , por ejemplo, en el célebre manifiesto "Una nación sin Estado, ¿un pueblo sin lengua?" de 1979.

Bajo esta perspectiva el bilingüismo no sería sino una etapa de transición entre dos estadios de monolingüismo en lenguas diferentes, o lo que es lo mismo una etapa necesaria en el proceso de sustitución de una lengua por otra y tal vez la definitiva extinción de la primera. Este temor es el que empuja a ciertas colectividades con una lengua minoritaria propia a renunciar a los beneficios culturales genéricos del bilingüismo. El conflicto conduce en no pocas ocasiones a exigir que la otra comunidad sea bilingüe, mientras que se defiende el monolingüismo en la propia.

Los problemas planteados por las comunidades de inmigrantes (turcos en la RFA, argelinos en Francia, marroquíes en España, asiáticos en Gran Bretaña, etc.) son en este sentido muy parecidos a los de las minorías lingüísticas autóctonas. Su incorporación a la(s) lengua(s) del país receptor no puede ser brusca, ni debe suponer tampoco una ruptura radical con su lengua y cultura de origen. En consecuencia, su educación debe basarse inicialmente en su propia lengua o en una "inmersión" que respete sus raíces. Ello resulta en primer lugar caro y en segundo lugar requiere una consideración social y política para con los inmigrantes, que los países receptores raramente están

dispuestos a otorgar, por lo menos en su plenitud.

Lo usual es que se presente el proceso como un paso hacia la integración total y lo más rápido posible basándose en el monolingüismo oficial adquirido y por consiguiente en el abandono de la cultura original. Esta ruptura de fondo suele estar en la base de muchos conflictos sociales con la población autóctona. Por otra parte, la población emigrante, al contrario que las minorías lingüísticas, suele vivir mucho más dispersa y a veces es la mezcla de culturas tan distintas, como pueden ser vietnamitas y árabes. En algunas escuelas de Londres se han llegado a inscribir alumnos de hasta 20 culturas diferentes, no siendo raro que se reúnan alumnos de 10 culturas y lenguas.

La Unión Europea ya cuenta con 11 idiomas oficiales (más el irlandés y el luxemburgués), sin contar con los otros reconocidos en las respectivas legislaciones estatales o los introducidos por la inmigración. La coordinación entre todos estos idiomas en un sólo ámbito institucional hay que hacerla o bien a través del unilingüismo continental, o a través de las prácticas plurilingües.

6.11.1: Una lengua común perfecta

El mito de una gran lengua común es uno de los más antiguos y constantes de la Historia universal. Aparece ya en los

primeros libros de la Biblia bajo formas distintas y sigue en discusión en nuestros días. Es "el sueño de una lengua universal", en acertada expresión del profesor Jesús Mosterín, quien concluye que "el ideal de una lengua empírica artificial simple y regular, que substituya con ventaja o acompañe a todas las lenguas naturales y facilite la comunicación humana, sólo habría cuajado con un gobierno mundial que la hubiese respaldado vigorosamente. En el mundo imperfecto en que vivimos, a los que miramos con simpatía el proyecto de una lengua universal no nos queda más remedio que apuntarnos al carro del inglés"⁷².

Uno de los máximos defensores de la solución del unilingüismo, es Alain Minc, quien en su obra La Grande Illusion propone la enseñanza obligatoria del inglés en todas las escuelas de la UE a partir de la enseñanza primaria. Se trata de seguir un método parecido al ruso en el antiguo bloque soviético, sólo que en este caso el ruso era enseñado a partir de la enseñanza secundaria. Para Alain Minc la omnipresencia del inglés es un hecho "inevitable" y por consiguiente conviene anticiparse a él y organizarlo debidamente. El aprendizaje de otros idiomas sería permitido una vez demostrado el dominio del inglés, que pasaría a tener una categoría académica parecida a la que tienen las matemáticas. A la universalización de la economía, de la ciencia y de la cultura se corresponde, según él, la universalización de la lengua⁷³.

Este punto de vista reduce el idioma a la condición de simple vector de comunicación técnica, a un código impersonal para intercambiar informaciones instrumentales, lo cual difícilmente puede ser definido como una lengua plena, con todos sus requisitos de orden socio-político. Por otra parte, equivaldría a encerrar a los otros idiomas dentro del área privada y desconectarlos de una serie de círculos esenciales para su desarrollo y su plena vigencia política y social. Muchos europeos no podrían comunicarse entre ellos en otras lenguas muy enraizadas en la sociedad, circunstancia que sin duda multiplicaría la conflictividad. Dado que "idioma y poder son inseparables", una política monolingüística de estas características consagraría la hegemonía de los países anglosajones y conduciría a una colonización cultural del resto. Y es notable que europeos que rechazan una dominación económica, militar o de cualquier otra índole, acepte una jerarquización de las lenguas, en cuya cúspide se situaría el inglés⁷⁴.

Andrea Chiti-Batelli sugiere una fórmula parecida, aunque algo más flexible. Tras descartar el reconocimiento de un grupo de dos (inglés y francés) o tres (con el alemán) lenguas oficiales en la UE, propone el uso del inglés como lengua común de los europeos, pero sin un reconocimiento oficial. Una especie de gran pacto lingüístico a escala europea. Ella misma señala, sin embargo, los tres inconvenientes más graves de esta solución: la dificultad de implantar el inglés para todos los

Europeos y no únicamente para una élite empresarial o burocrática; la mayor ventaja política y económica que ello daría a los países anglófonos; y en tercer lugar las repercusiones mundiales que ello tendría⁷⁵.

Para otros, como Salvador Reguant, la adopción del inglés como lengua de comunicación en el ámbito científico europeo es un proceso lento "y en parte un espejismo". Aprender un inglés fluido en este campo es difícil y sólo un porcentaje bajo de científicos procedentes de otras áreas lingüísticas pueden dominarlo con eficacia. Por otra parte, hay una importante producción científica realizada en otros idiomas, producción que con frecuencia queda marginada. De ello se deduce que "el foro científico es significativamente deficiente ya que no intervienen todos los que pueden decir algo, sino sólo una minoría... y de ahí la necesidad de hacer reuniones en la propia lengua para madurar, matizar y perfeccionar las propias aportaciones en foros de discusión internacionales"⁷⁶.

Muy sugestiva también y no muy alejada de la del profesor Mosterín es la tesis expuesta por Umberto Eco en su libro La búsqueda de la lengua perfecta. Tras repasar la larga lucha por una lengua universal, sostiene que la cultura europea se halla frente a la necesidad urgente de encontrar una lengua vehicular que restaure sus fracturas lingüísticas, hoy más aún que ayer. Ahora bien, la historia europea ha provocado que cada una de sus lenguas exprese el "genio" de un grupo étnico, y se

mantenga como vehículo de una tradición milenaria. ¿Cómo se puede conciliar esta lengua universal y la defensa de las tradiciones lingüísticas?

El límite de una lengua vehicular universal es, en opinión de U. Eco, su capacidad de traducción. Aquéllas que optan a esta categoría lo hacen porque creen que pueden captar dicho "genio" de las otras lenguas, "y a pesar de que cada lengua constituya un modo bastante rígido de ver, organizar e interpretar el mundo". El problema es que esta lengua capaz de reproducir todos los significados de la lengua de origen, no existe. "Si existiera este "tertium" sería la lengua perfecta, y si no existe queda como simple postulado de la actividad de traducir", concluye Eco.

Claro que este planteamiento no afecta sólo a las prácticas de traducción, sino también a la posibilidad de convivencia en un continente políglota por vocación. El problema de la cultura europea del futuro no está sin duda en el triunfo del poliglotismo total, sino en una comunidad de personas que puedan captar el espíritu, el perfume, la atmósfera de una habla distinta. Una Europa de políglotas no es una Europa de personas que hablan con facilidad muchas lenguas, sino en el mejor de los casos, de personas que pueden encontrarse hablando cada uno su propia lengua y entendiendo la del otro, que no sabrían hablar de manera fluida, pero que al entenderla, aunque

fuera con dificultades "entenderían el "genio", el universo cultural que cada uno expresa cuando habla la lengua de sus antepasados y de su propia tradición"⁷⁷.

Es decir, que *pro malo bonum* comenta Tullio de Mauro acerca de la obra de Umberto Eco. Y si equivocada es la dirección que pretende buscar una lengua perfecta, "valiosos son, sin embargo, sus últimos frutos, preciosas las repercusiones que a nivel cognoscitivo y teórico ha provocado"⁷⁸.

6.12: El estudio de idiomas

En consonancia con esta visión de una Europa plurilingüe, el estudio y aprendizaje de lenguas extranjeras en los países de la UE es francamente alto si se compara con el practicado por las generaciones adultas. Por ejemplo, entre la población irlandesa mayor de 55 años no existe casi nadie que sepa español, mientras que hoy día un 5% de los jóvenes entre 15 y 24 años lo está aprendiendo. Sólo el 3% de los adultos españoles tienen conocimientos de inglés y el 6% de francés, porcentaje que se sitúa en el 60% y el 21% cuando se desciende a los jóvenes menores de 25 años. No se olvide en último término que el Tratado de la Unión Europea ordena explícitamente en su artículo 126.2 que "la acción de la Comunidad se encaminará a desarrollar la dimensión europea de la enseñanza, especialmente a través del aprendizaje y de la

difusión de las lenguas de los Estados miembros".

Según los datos aportados por Eurostat⁷⁹, la oficina estadística comunitaria, la situación no es la misma en todos los países en lo que respecta al número de idiomas extranjeros por alumno. La media comunitaria está situada en 1'2 lenguas por estudiante. El país donde más lenguas se estudian son los Países Bajos con un promedio de 2'2. Italia, Irlanda y España se sitúan en 1, por delante de G. Bretaña (0'9) y de Portugal (0'8).

El inglés (83%) es, con mucha diferencia, el idioma más estudiado, seguido del francés (32%), el alemán (16%) y el español (9%). Aparte de Gran Bretaña e Irlanda, el país en el que más se estudia el inglés son los Países Bajos, donde el 96% de los estudiantes de enseñanza secundaria la aprende, seguido de Alemania con un 93% y de Dinamarca y España con un 92%. En Portugal lo solicita un 55% de los estudiantes.

Después se sitúan Francia con un 84%, la parte valona de Bélgica con un 68%, Italia con un 61%, la parte francófona de Bélgica con un 58%, y Portugal con un 55%.

El segundo idioma que más interés despierta es el francés, especialmente en la parte valona de Bélgica, donde es estudiado por el 98% de los alumnos de segunda enseñanza. Después viene Irlanda, donde lo estudian el 69% de los alumnos y a

continuación los Países Bajos con un 65% y Gran Bretaña con un 59%.

En Irlanda el francés es estudiado por el 33% de los alumnos, en Portugal por el 25%, en la RFA por el 23%, en España por el 10%⁸⁰ y en Dinamarca por el 8%.

Por lo que se refiere al alemán despierta bastante interés en Dinamarca, donde lo elige el 58% de los alumnos de enseñanza secundaria y también en los Países Bajos, donde lo estudian el 53%. El alemán suscita bastante demanda en los núcleos estudiantiles franceses con un 27%, en Irlanda con un 24%, en la parte valona de Bélgica con un 22%, y en Gran Bretaña con un 20%⁸¹.

No todas las lenguas de Estado gozan del mismo reconocimiento estudiantil, en Italia e Irlanda no existe la enseñanza generalizada de un segundo idioma. Además su peso cultural puede ser muy distinto al numérico⁸². Según el embajador de los Países Bajos en Madrid, Bentinck Van Schoonheten, el holandés es hablado por unos 20 millones de personas, lo cual la sitúa como la sexta de Europa Occidental y la 30 de todo el mundo, pero por el número de publicaciones salta al 12º lugar⁸³.

El interés de las universidades europeas por el fomento del aprendizaje de idiomas se patentiza, por ejemplo, en las Ferias

Europeas de Educación y de los Idiomas, en las que participan instituciones educativas de Alemania, Gran Bretaña, Países Bajos, Irlanda, España, EEUU, Australia, Rusia, Canadá y Egipto. La primera Feria sobre "Educación e Idiomas" se celebró en Madrid y las siguientes en Zurich y Munich.

La preocupación de las máximas autoridades comunitarias por la diversidad lingüística en la educación quedó muy patente en el discurso que el presidente de Francia, François Mitterrand, pronunció el 18 de Enero de 1995 ante el Parlamento Europeo para exponer las prioridades de la presidencia francesa durante el semestre siguiente. En aquella ocasión Mitterrand denunció y rechazó la creciente polarización cultural alrededor del inglés y del español, y reclamó el máximo pluralismo lingüístico en las escuelas de la UE. Para ello, anunció la preparación por parte de la Administración francesa de un proyecto de convenio que obligaría a los escolares comunitarios a aprender por lo menos dos lenguas vivas extranjeras, además de la(s) propia(s).

6.12.1: El Programa Lingua

Frente a los que proponen la implantación de una sola lengua para toda la UE, ésta ha optado por el momento por un camino distinto: dejar que la sociedad elija libremente los idiomas que cree necesitar. Por esta razón, impulsa decididamente el

Programa Lingua para implantar un plurilingüismo libre, real y en su mayor grado posible.

Creado en mayo de 1989 (bajo la presidencia española) por la Comisión Europea, preconiza que todos los idiomas oficiales de la Comunidad deberían ser más ampliamente estudiados. No se trata únicamente de preservar el patrimonio lingüístico vigente, sino de promover el conocimiento y la convivencia entre lenguas y culturas distintas, como elemento enriquecedor de las personas y de las sociedades. Así lo reconoce explícitamente el gobierno español cuando afirma que considera dicho programa como "un medio muy importante para profundizar en el aprendizaje de otras lenguas comunitarias, aspecto esencial en la formación de los alumnos, de cara al nuevo marco integrador del espacio europeo. Además del aspecto lingüístico, es también positivo el que los alumnos españoles realicen una estancia en otros países de la Unión Europea para aprender a conocer otras culturas y formas de vida, lo que, sin duda, influye positivamente en el desarrollo de la personalidad"⁸⁴.

Las dificultades prácticas que esta política pueda conllevar, especialmente su coste económico, quedan compensadas por los puestos de trabajo creados (traductores, intérpretes, etc.) y la industria que se deriva de todo ello⁸⁵.

El Programa Lingua se inscribió en el capítulo de la "Europa de los Ciudadanos" de la CE para que las relaciones personales

en el seno de la Comunidad no se limitaran a los aspectos más estrictamente económicos o estratégicos, sino para que se fomenten los aspectos humanos y se vaya creando una conciencia europea⁸⁶. Se empezó a aplicar el 1 de Enero de 1990 en una primera fase de 5 años, es decir hasta el 31 de diciembre de 1994. Su presupuesto global es de 250 millones de Ecus sin contar con la financiación complementario procedente de cada Estado. De esta manera, los escolares de los países comunitarios emprenden el estudio de dos lenguas extranjeras además de la materna: una a partir de los 8 años y la segunda a partir de los 11. También se conceden facilidades a los estudiantes universitarios, muchos de los cuales se reciclan por este conducto.

Además de las becas, el Programa Lingua fomenta la preparación de los profesores de idiomas por ejemplo con estancias de seis meses en el país de la lengua enseñada. El número de becas concedidas a cada Estado se determina en función de la población juvenil menor de 21 años y la distancia entre los Estados. La beca máxima fue fijada en 1.500 ecus por becario. También se abrió la puerta para establecer acuerdos de cooperación con empresas, necesitadas por lo general de personal políglota. Y en general se promueven numerosos acuerdos de colaboración entre Estados y entre escuelas especializadas o no para la promoción del Programa.

La misma Comisión Europea patrocina el Programa Erasmus, de hecho complementario del anterior, sólo que destinado específicamente a los universitarios de toda la CE. El objetivo es que los estudiantes europeos puedan desenvolverse profesionalmente y laboralmente en un mercado único de carácter plurilingüe establecido por el Acta Unica Europea. El estudio de las lenguas extranjeras es reconocido en el correspondiente título, diploma o calificación profesional. Umberto Eco añadió otra vertiente a dicho programa, ya que según él "tendrá más importancia sexual que cultural, dado que significará una gran cantidad de matrimonios mixtos. Y esto contribuirá a que dentro de 30 años la nueva clase dirigente europea sea mayoritariamente bilingüe"⁸⁷.

Las previsiones situaban en 112.733 los estudiantes que en el curso 1993-94 se iban a beneficiar de ambos programas, mientras que para el curso 1994-95 se esperaba acercarse a los 200.000⁸⁸. En marzo de 1994 se iniciaron los trabajos para substituir el Programa Erasmus por el Programa Sócrates y su conexión con el Utrecht Network, formado por las principales universidades europeas, el Programa Tempus con los países de Europa Central y Oriental, y el Programa Med-Campus para la participación de Argelia, Marruecos y Egipto⁸⁹.

Según explicó en enero de 1989 Domenico Lenarduzzi, director general de la División de Cooperación en Educación de la CE encargado de lanzar el Programa Lingua, "se va a concentrar la

ayuda en las lenguas menos habladas" y al mismo tiempo se solicitaron medidas de ámbito estatal para ir introduciendo un estatuto específico para el conjunto de las lenguas comunitarias, a fin de facilitar la movilidad geográfica de los enseñantes mediante la formación inicial o continuada, y evitar que el aprendizaje de los idiomas de la CE se limite a la enseñanza secundaria". En cualquier caso, "la Europa de mañana no será la de los diplomáticos. Será también la de los mecánicos que tendrán que discutir con sus colegas de otros países", recordó acertadamente Jacques Tschoumy, director del Instituto Romand de Investigaciones Pedagógicas con sede en Suiza⁹⁰.

Los datos manejados por la Comisión Europea a principios de 1989 indicaban que de los 321 millones de ciudadanos de los doce países miembros, un 65% no hablaba ningún idioma que no fuera el suyo propio, un 25% uno extranjero, y un 10% dos o más. El 54% del segundo grupo hablaba el inglés. En el curso escolar 1988-89 Holanda, Portugal, la RFA, y Luxemburgo ya disponían de una legislación adecuada para introducir dos lenguas extranjeras en los planes de estudio de la enseñanza primaria y secundaria, y otros países, como España, se aprestaban a aprobar leyes parecidas. En Italia reconocen que las experiencias realizadas a partir de escolares de 6 años han resultado asimismo muy positivas. Este aprendizaje "influye positivamente en el conocimiento de la lengua materna y en los procesos cognitivos en general", según Cristina Marotta, alta

funcionaria del Ministerio de Educación italiano⁹¹.

El principal inconveniente de estos programas es que al plantearse como una cuestión preferentemente por no decir que exclusivamente utilitaria, se produce una concentración muy alta de estudiantes en unos pocos idiomas. En Gran Bretaña, por ejemplo, el 95% de los centros de secundaria opta por el francés como primera lengua extranjera, por lo que las autoridades docentes han preparado planes para una mayor diversificación.

Las ofertas de cursos de idiomas que no sean el inglés, francés, castellano y alemán son poco frecuentes o casi inexistentes en las universidades europeas, con lo que lenguas como el danés, el griego o el holandés quedan relegadas en la práctica. En España 7.282 estudiantes universitarios se inscribieron en el Programa Erasmus durante el curso 1991-92. Pues bien el 52% se dirigió a Francia o al Reino Unido, cifra que se considera excesiva, a pesar de que había bajado en relación a los dos cursos anteriores (1988-89 el 65% y en el curso 1990-91 el 54%). Siguen Italia con el 12% de estudiantes españoles y la RFA con el 11%, con lo que la proporción que se reparte entre otros países, incluso afines como Portugal, es muy baja⁹².

El aprendizaje de idiomas extranjeros no impide que la población de los territorios bilingües considere preferente la

normalización de los locales. En realidad, se produce una jerarquización lingüística, aunque sólo sea por el orden de aprendizaje.

En su primera fase el Programa Lingua incluyó únicamente las lenguas de Estado que solicitaron su participación en él. Esto provocó una cierta polémica en España con los portavoces de algunas lenguas minoritarias con status de oficialidad en la legislación estatal, especialmente el catalán. El senador Joaquim Ferrer (CiU) solicitó en diversas ocasiones al Ministro de Educación español que negociara la entrada del catalán en dicho Programa a partir de 1994, cosa que hizo el gobierno español el 7 de mayo ante el Comité Comunitario de Educación con el apoyo de distintas universidades europeas con vistas a una segunda fase.

La importancia de estos programas quedó de manifiesto, una vez más, en el Consejo Europeo de Essen (RFA) de diciembre de 1994 al recomendar éste en las conclusiones de la presidencia su extensión y aplicación a los países asociados de Europa Central y Oriental. "Los programas comunitarios Leonardo y Sócrates y el Programa La Juventud con Europa deberían abrirse a los países asociados con arreglo a lo dispuesto en la Decisión del Consejo de 27 de julio de 1994. Reviste igual importancia el Programa Tempus para apoyar la reestructuración de la enseñanza superior y la formación profesional... Además, podrían intensificarse los esfuerzos bilaterales para fomentar

el intercambio de estudiantes y profesores universitarios y el desarrollo conjunto de los programas de estudios, así como la creación de relaciones de colaboración entre centros de enseñanza y la promoción del aprendizaje de lenguas europeas", dice textualmente la declaración final de Essen⁹³.

6.12.2: El Programa Sócrates

En su pleno de 25 de octubre de 1994 el Parlamento Europeo aprobó el Programa Sócrates destinado a contribuir al desarrollo de una educación de calidad, al intercambio de estudiantes y al aprendizaje de idiomas. En realidad, el Programa Sócrates refundía los antiguos Erasmus, Lingua y Comenius. La propuesta del Parlamento Europeo incluía una enmienda, según la cual, además de las lenguas oficiales de la Unión, se incluirían aquellas que tuvieran algún tipo de reconocimiento oficial y fuera de uso habitual en las universidades, circunstancias que sólo reúne el catalán⁹⁴.

El Consejo de Ministros dió luz verde al proyecto el 5 de diciembre de 1994 y, a propuesta del ministro de Educación español Gustavo Suárez Pertierra, lo amplió para determinadas acciones relativas a la enseñanza superior a todos los idiomas que tengan estatuto de cooficialidad⁹⁵. Finalmente el comité de conciliación entre el Parlamento y el Consejo dotó el programa con 850 millones de Ecus para el período 1995-1999, dotación revisable a los dos años⁹⁶.

El PE debatió y aprobó la propuesta⁹⁷ en su sesión plenaria de 1 de marzo de 1995. En esta ocasión el eurodiputado Joan Vallvé, coponente de la propuesta, señaló que "por primera vez se reconoce la posibilidad de utilizar las lenguas que no siendo oficiales en la Unión, lo son en algunos países miembros y utilizadas en los mismos en el ámbito universitario"⁹⁸.

6.13: La Conferencia de Madrid de Ministros de Educación

A partir de 1990 la preocupación por un normal y acrecentado aprendizaje de las lenguas aparece ya en casi todos los documentos emitidos por el C. de E., relacionados con este asunto. Buena prueba de ello es, por ejemplo, la declaración final de la 18ª Sesión de la Conferencia Permanente de Ministros de Educación del C. de E., celebrada en Madrid los días 23 y 24 de Marzo de 1994. La idea más importante contenida en ella es la necesidad de intensificar al máximo los intercambios escolares "por todos los medios apropiados, políticos, jurídicos, administrativos y financieros". Para ello, resulta imprescindible estimular el conocimiento de las lenguas vivas europeas, sin que el documento establezca límite alguno. Concretamente la Conferencia dió su apoyo a la creación de un Centro Europeo de Lenguas Vivas en Graz (Austria) destinado a la "formación de formadores y a ser "una plataforma y lugar de encuentro entre dirigentes, líderes de opinión y especialistas de toda Europa". Además, el aprendizaje de

lenguas es una de las formas para combatir la intolerancia.

Los Ministros se congratulan de los trabajos realizados por el C. de E. "para promover en la orientación profesional un aprendizaje de lenguas que se adapte tanto a las exigencias de las empresas como a las necesidades educativas y comunicativas de los alumnos". Y al propio tiempo recomiendan que el C. de E. "trate de promover una mayor coherencia y un consenso europeo creciente en lo concerniente a los objetivos y al contenido de los programas de aprendizaje de idiomas en la orientación profesional, así como los modelos de formación de los enseñantes".

También recomiendan a los Estados⁹⁹ firmantes de la Declaración que "preparen a los jóvenes, entre otros medios, mediante el aprendizaje de lenguas vivas, para la movilidad del futuro mercado de trabajo europeo".

En todo caso, los intercambios escolares "son un elemento esencial de la preparación de los jóvenes para la vida en una Europa democrática, multilingüe y multicultural". Y además "favorecen la comprensión y la amistad entre los jóvenes de diferentes tradiciones lingüísticas, culturales y religiosas". Por último, la Declaración de Madrid deja bien claro que no se refiere solamente a las grandes culturas y lenguas europeas, sino que los intercambios deben realizarse en el mayor número posible de países, "en lugar de centrarse solamente en los

grandes o en aquellos cuyo idioma está muy difundido"¹⁰⁰.

6.14: Euronews, televisión europea en cinco lenguas

El 1 de enero de 1993 la Unión Europea de Radiodifusión, organismo que agrupa las televisiones públicas del Viejo Continente, inauguró las emisiones de Euronews¹⁰¹. Se trata de un espacio de noticias de 12 minutos que se actualiza cada media hora y combinados con reportajes de quince minutos. No hay producción propia. Euronews proporciona 20 horas diarias de información sin interrupción. Este auténtico canal internacional fue puesto en órbita por 11 televisiones públicas: France 2, France 3, RAI, RVTE, Télé-Monte-Carlo, RTBF belga, ERT griega, ERTU de Egipto, YLE de Finlandia, RTP portuguesa y CYBC de Chipre. En abril de 1993 se les agregó la SSR de Suiza y en julio las televisiones públicas de Argelia (ENTV) y de Túnez (ERTT). La BBC británica no entró en el proyecto, porque preparaba su propio proyecto, el **World News Service**. Las dos cadenas públicas alemanas se retiraron cuando se asignó la sede central a Ecully (Lyon-Francia) en lugar de designar Munich. Sin embargo, la razón oficial fue que sólo 2 de los 16 "länder" votaron a favor de la entrada, aduciendo que ya participaban en la cadena cultural franco-alemana, Arte.

Euronews emite en cinco lenguas: alemán, inglés, castellano, francés e italiano. La sexta lengua tenía que ser el árabe, y

las séptima y octava tenían que ser escogidas entre el neerlandés, el ruso, el portugués, el griego y el polaco. En este caso el uso de las lenguas viene determinado en parte por el uso de los satélites, ya que Euronews transmite a través del Eutelsat y no del Astra¹⁰². En octubre de 1994 el directorio de Euronews aprobó un plan de relanzamiento con la introducción de capital privado¹⁰³.

NOTAS AL CAPITULO VI

1. SALVI, SERGI: Entrevista de Aureli Argemí en Europa de les Nacions, nº 22, verano 1994, pág. 8
2. COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES: Document: Les Minorités Linguistiques dans les pays de la Communauté Européenne, Office des Publications Officielles des Communautés Européennes, Luxembourg 1986
3. COMISSION DES CCEE: Op. cit, pág. 2
4. COMMUNAUTE DES CCEE: Op. cit., pág. 3
5. Doc: B2-1015/86
6. Resolución del Parlamento Europeo sobre las Lenguas y Culturas de las Minorías Regionales y Etnicas de la CE aprobada el 30 de noviembre de 1987, número 21.
7. Artículo 5 de la CELRM
8. LAPIERRE, JEAN WILLIAM: Le pouvoir politique et les langues, PUF, Paris 1988, págs. 35 y 36
9. SVORONOS, NICOLAS: Histoire de la Grèce Moderne, Presses Universitaires de France, Paris 1972, pág. 95
10. CAPOTORTI, F.: Etude des droits des personnes appartenant aux minorités ethniques, religieuses et linguistiques, NNUU, New York 1979
11. Proposición de Resolución del PE sobre la Elaboración de un Derecho Europeo para los Grupos Etnicos de 31 de julio de 1984, y Documento de Trabajo del PE para una Discusión sobre una Carta Comunitaria de los Grupos Etnicos de 12 de mayo de 1987.
12. HOBBSAWN, ERIC J.: "Etnicitat i nacionalisme a l'Europa actual" en L'Avenc, nº 158, Abril 1992, pág. 16
13. En un seminario celebrado en Ohrid (Yugoslavia) en verano de 1974 se aceptó que la lengua pueda ser la base de una nacionalidad, aunque no hubo acuerdo para establecer distintas categorías de minorías nacionales
14. HELLER, AGNES: "Pluriculturalismo" en El País de 6 de febrero de 1993, pág. 14
15. HROCH, MIROSLAV: "Els nacionalismes de les nacions minoritzades", entrevista de Jordi Bañeres y Marc Leprêtre, en Ateneu nº 3, octubre 1992, pág. 22 y 23

16. ROUGEMONT, DENIS DE: La Suisse ou l'histoire d'un peuple heureux, Ed. Hachette, París 1974, pág. 141-142

17. ECO, UMBERTO: "Umberto Eco prevé una Europa políglota y hecha de confederaciones étnicas", entrevista de Peru Egurbide en El País de 19 de diciembre de 1991, pág. 31

18. HROCH, MIROSLAV, citado por E. J. Hobsbawn en op. cit., pág. 20

19. PROUDHON, P. J.: citado por J. W. Lapierre en Le pouvoir politique et les langues, PUF, París 1988, pág. 41

20. BADIA I MARGARIT, ANTONI M.: "Por favor, un poco de seriedad" en El País, 11 de octubre de 1995, pág. 13

21. LAPIERRE, JEAN-WILLIAM: Le pouvoir politique et les langues, PUF, París 1988, pág. 37

22. LAPIERRE, J. W.: Op. cit., pág. 38

23. PETSCHEN, SANTIAGO: "Las lenguas minoritarias" en El País-Temas de Nuestra Epoca de 17 de marzo 1988, pág. 8

24. MORGENTHAU, HANS J.: La lucha por el poder y la paz, Ed. Sudamericana, Buenos Aires, 1963, pág. 139

25. Discurso de Gregorio Salvador en el acto de clausura del X Congreso de Asociaciones de Academias de la Lengua Española. Madrid, 29 de abril 1994

26. HIERRO S. PESCADOR, JOSE: "La lengua como herramienta" en El País-Temas de Nuestra Epoca, de 17 de marzo de 1988, pág. 3

27. ZVEREFF, JOHN: "Los peligros de la pureza" en La Semana en la Vanguardia de 6 de marzo de 1994, pág. 2

28. EYAL, JONATHAN: "El problema étnico" en The European de 30 de abril de 1992

29. LAPIERRE, J. W.: Op. cit., págs. 133 y 134

30. GILES, H. (dir): Language, Ethnicity and Intergroup Relations, Academic Press, London/New York 1977

31. LAPIERRE, J.W: Op. cit., pág. 254

32. PETSCHEN, SANTIAGO: "La Región como ámbito de identificación" en Afers Internacionals n° 22, Barcelona 1991, pág. 91

33. Según el diario británico The Independent de 4 de junio de 1991, unos 4.000 de los 12.000 funcionarios de la CE están empleados en tareas relacionadas con la traducción

34. LAPIERRE, J.W.: Op. cit., págs. 251-254

35. Esta dinámica socio-lingüística relacionada con las lenguas minoritarias ha sido estudiada por J.-W. Lapierre y A. Prujiner en "Les Conflits ethnolinguistiques: un cadre d'analyse socio-politique" en Cahiers Internationaux de Sociologie, Vol. LXXIX, 1985

36. MOSTERIN, JESUS: "La normalización lingüística" en El País de 10 de junio de 1992, pág. 14

37. LAPIERRE, J. W.: Op. cit., pág. 43

38. PETSCHEN, SANTIAGO: "Las lenguas minoritarias" en El País-Temas de Nuestra Epoca de 17 de marzo de 1988, pág. 8

39. SALVADOR, GREGORIO: "Contra el Romanticismo Lingüístico" en El País-Temas de Nuestra Epoca de 17 de marzo de 1988, pág. 2

40. ARGENTE, J. A.: "Un debate político" en El País-Temas de Nuestra Epoca de 27 de octubre de 1988, pág. 8

41. Fragmentos del discurso del presidente de la RFA, Roman Herzog, pronunciado ante el PE el 10 de octubre de 1995. Doc: PE 194.527/ES

42. FLORES D'ARCAIS, PAOLO: "La Europa de los Ciudadanos" en El País-Temas de Nuestra Epoca de 2 de octubre de 1992

43. OREJA, MARCELINO: Europa, ¿para qué?, Ed. Plaza y Janés, Barcelona 1987, pág. 205

44. El ECTARCT fue creado en 1983 en Llangollen (País de Gales) como organismo asesor de la Asamblea de Regiones

45. Artículo 110 de la Constitución de Noruega

46. MIRA, JOAN FRANCESC: Crítica de la raó pura, Valencia 1984, pág. 17

47. ROUGEMONT, DENIS DE: "La Région n'est pas un mini-Etat-nation" en L'Europe des Régions II, Genève 1970, pág. 3

48. RAMPINO, ANTONELLA: "¿Qué lengua usaremos" en Il Europeo de Milán de 2 de mayo 1992

49. DI PIETRO, ROBERT: Entrevista de Alex Rodríguez en El País de 3 de junio de 1991, pág. 30

50. SWEENEY, CATHY: "My language is rich; your language is not rich" en El Temps n° 411 de 4 de mayo de 1992, págs. 32-33

51. Editorial del diario The European de 20 de febrero de 1992. Traducida y reproducida por El País de 21 de febrero de 1992, pág. 12

52. CHITI-BATELLI, ANDREA: "Regionalism and Federalism in Europe: A "Biunivocal" Connection" en Federalisme, Regionalisme, et Droit des Groupes Ethniques en Europe. Hommage à Guy Héraud, Ed. Ethnos 30. Braumüller, Viena 1989, págs. 52-53

53. TARSCHYS, DANIEL: "Consejo de Europa: Hacia un amplio espacio de seguridad democrática" en Revista de la OTAN, nº6 dic. 94 / nº1 enero 95, pág. 11

54. ARGENTE, JOAN A.: "Un debate político" en El País- Temas de Nuestra Epoca de 27 de octubre de 1988, pág. 8

55. FANCELLI, AGUSTI: "El lingüista De Mauro cree que Europa debe prepararse para una nueva realidad lingüística" en El País de 9 de febrero de 1989

56. WEBER, RAYMOND: "Europa multicultural, sistemas de valores y normas éticas", Conferencia ante el Congreso del Secretariado Internacional de Profesores Católicos de Agosto de 1990, en Revista de Educadores n. 160

57. Manifiesto de Bastia o Declaración final del Congreso Internacional sur les Bilingüisme celebrado en Bastia entre el 12 y el 15 de abril de 1984, convocado por el Cunsigliu di a Cultura, di l'Educazione e di l'Ambiente de Córcega.

58. SIGUAN, MIQUEL: "Educar la lengua y el oído" en El País-Temas de Nuestra Epoca de 27 de octubre de 1988, pág. 6

59. ARTIGAL, J. M.: Entrevista de Carles Pastor en El País-Educación de 7 de diciembre de 1993, pág. 8

60. SERRAMONA, JAUME: "Bilingüisme i fracàs escolar" en Avui de 25 de agosto de 1987

61. LLOPART, SALVADOR: "Siguan diu que el bilingüisme no afecta la psicologia dels nens" en Avui de 8 de diciembre de 1987, pág. 25

62. LAUREN, CHRISTER: Entrevista de Carles Pastor en El País-Educación de 18 de diciembre de 1990, pág. 8

63. Ver informe de Carles Pastor en El País-Educación de 18 de diciembre de 1990 sobre este tema

64. DIAZ, CESAR: "Cuanto antes mejor" en El País-Educación de 21 de enero de 1992, págs. 1 y 4. Experiencias citadas por María Jesús Abaroa, directora de la International Montessori School de Madrid

65. MOLL, AINA: Entrevista de Andreu Manresa en El País-Educación de 30 de abril de 1991, pág. 8

66. BAETENS BEARDSMORE, HUGO: Principis bàsics del bilingüisme, Ed. La Magrana, Barcelona 1989

67. ARGENTE, J. A.: "Un debate político" en El País-Temas de Nuestra Epoca de 27 de octubre de 1988, pág. 8
68. COLOMER, J. M.: "La utilitat del bilingüisme" en L'Avenc n° 144 de Enero de 1991, págs. 26-34
69. BAETENS, HUGO: "La diversidad europea" en El País-Temas de Nuestra Epoca de 27 de octubre de 1988, pág. 1
70. SIGUAN, MIQUEL: "Educar la lengua y el oído" en El País-Temas de Nuestra Epoca de 27 de octubre de 1988, pág. 6
71. PAYRATO, LLUIS: "Sabor a mezcla" en El País-Temas de Nuestra Epoca de 27 de octubre de 1988, pág. 3
72. MOSTERIN, JESUS: "El sueño de una lengua universal" en El País-Babelia de 6 de noviembre de 1993, pág. 8
73. MINC, ALAIN: La Grande Illusion, Ed. Grasset, Paris 1989, pág. 226
74. "Cómo hablará Europa. ¿Proliferación cultural o servidumbre?" en Le Monde Diplomatique en Español n° 28, Mayo-Junio 1989, pág. 20
75. CHITI-BATELLI, ANDREA: "Le problème des langues dans l'Europe unie". Texto fotocopiado sin referencia al original
76. REGUANT, SALVADOR: "Esclavos de Elite" en El País de 22 de septiembre de 1993, pág. 1
77. ECO, UMBERTO: La búsqueda de la lengua perfecta, Ed. Crítica, Col. La Construcción de Europa, Barcelona 1994, págs. 288-293
78. TULLIO DE MAURO: "Un paseo por Babel" en El País-Babelia de 25 de septiembre de 1993, pág. 8
79. COMMISSION EUROPEENNE: Eurobaromètre: Les Chiffres Clés de l'Education dans l'Union Européenne, Bruxelles 1994
80. En cambio, el 29% de los escolares franceses elige el español como primer idioma extranjero
81. Despacho de la Agencia "Europa Press" de 30 de diciembre de 1994
82. En 1994 había 100 estudiantes de holandeses en la Universidad Complutense de Madrid
83. Despacho de la Agencia EFE fechado en Madrid el 7 de marzo de 1995
84. Respuesta parlamentaria del gobierno al senador Francisco Gil-Ortega Rincón (Grupo Popular) con fecha 24 de febrero de 1995. Doc: Boletín Oficial de las Cortes Generales (Senado), V Legislatura, Serie I, n. 242, pág. 19

85. Editorial "¿Cómo hablará Europa" en Le Monde Diplomatique en Español n° 28, mayo 1989, pág. 1

86. Fue creado por decisión del Consejo 87/489/CEE de 28 de julio de 1989. Doc: D.O. L 239 de 16 de agosto de 1989, pág. 24

87. ECO, UMBERTO: Entrevista de Peru Egurbide en El País de 19 de diciembre de 1991, pág. 31

88. Despacho de la Agencia Servimedia de 10 de mayo de 1993

89. Despacho de la Agencia Europa Press de 22 de marzo de 1994

90. RODRIGUEZ, ALEX: "Dos lenguas extranjeras" en El País-Educación de 7 de febrero de 1989, pág. 3

91. RODRIGUEZ, ALEX: "La Europa de las lenguas vivas" en El País-Educación de 14 de marzo de 1989, pág. 1

92. SIMON SCHUHMAHER, LIOBA: "El lento viaje de Erasmus" en El País-Educación de 10 de septiembre de 1991, pág. 2

93. Documento de Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo celebrado en Essen (RFA) los días 9 y 10 de diciembre de 1994. Doc: SN 300/94 ES, Anexo IV, pág. 22

94. PARLAMENTO EUROPEO: "La importancia de Sócrates debe extenderse a su financiación" en Guía de la Sesión, Pleno del 24 al 28 de octubre de 1994, Doc: PE 184.650 y 184.659

95. Nota oficial del Ministerio de Educación y Ciencia español de 5 de diciembre de 1994

96. Despacho de la Agencia "Europa Press" fechado en Madrid el 4 de julio de 1995.

97. Doc: A4-36/95

98. PARLAMENTO EUROPEO: "Ecos de la Sesión" de Marzo de 1995, Doc: PE 188.032/ES, pág. 31.

99. Los países asistentes a la Conferencia fueron los 32 miembros del Consejo de Europa, más los de la Convención Cultural Europea (Albania, Bielorrusia, Croacia, Federación Rusa, Letonia y la Santa Sede), más los participantes de la CSCE (Bosnia-Herzegovina, Canadá, Georgia, Moldavia, Turkmenistán y Ucrania), más Australia y Macedonia, como observadores.

100. Declaración Final de la 18ª Sesión de la Conferencia Permanente de Ministros de Educación del Consejo de Europa, estructurada en 4 Resoluciones. Doc: Communiqué de Presse de la Direction de la Communication du Conseil de l'Europe. Madrid, 24 Marzo 1994. págs. 13, 14, 16, 18 y 21.

101. GONZALEZ, PEDRO: Euronews: Una televisión pública para Europa, Ed. Icaria-Antrazyt 1995, 167 págs.

102. ABAD, IGNASI: "Euronews, camí de pioners" en El Temps n° 481 de 6 de septiembre de 1993, págs. 39-41

103. FROMENTIN, BERNARD: "TV: O capital privado, o muerte" en El Mundo de 21 de octubre de 1994, Suplemento de Comunicación pág.

3

CONCLUSIONES

En contraposición a unos Estados que a lo largo de su formación histórica han tendido al monolingüismo o por lo menos a la hegemonía de una sola lengua oficial y pública que sirviera de aglutinador y de señal de identidad al país entero, varias instituciones europeas surgidas después de la II Guerra Mundial de cara a la unión continental, adoptaron desde sus inicios el principio del "multilingüismo integral", es decir el uso simultáneo de todas las lenguas de Estado de los países miembros.

Lo notable es que fueron los propios Estados fundadores de estas instituciones, muy especialmente la CEE, los que implantaron dicho principio sin resistencias, ni dificultades importantes a veces en contradicción flagrante con sus propias políticas lingüísticas internas. En aquellos momentos dicha contradicción no aparecía tan flagrante como lo fue posteriormente. No se olvide que en 1961 la Asamblea Parlamentaria del C. de E., incansable promotora de los derechos de las minorías lingüísticas, supeditaba el ejercicio de estos derechos a "los intereses esenciales de los Estados" e incluso los relacionaba con el "orden público". Dos eufemismos para conceder carta blanca a los gobiernos centrales en materia lingüística, aunque recurrieran a medidas represivas y policíacas. Las declaraciones no pasaban aún de ser expresiones de buena voluntad o simples recomendaciones.

Esta situación paradójica no fue un elemento relevante en la vida europea hasta bien entrados los años 1970, dado el contenido y el carácter fuertemente económico de la CEE, el número relativamente pequeño de países que participaban de forma activa en el núcleo del proceso de unión europea (hasta 1970 seis con cuatro lenguas) y a causa de una inmovilización de este tipo de cuestiones con motivo de la "guerra fría". Se plantearon algunos casos conflictivos de minorías lingüísticas, especialmente la alemana del Tirol del Sur-Alto Adigio en Italia, más como una cuestión internacional entre Estados que como un problema interno y la prueba es que dichos pleitos se resolvieron mediante tratados internacionales, siguiendo en buena parte el modelo establecido tras la I Guerra Mundial. El firmado entre Alemania y Dinamarca en 1947 (ratificado y ampliado en 1955) es una buena demostración de ello.

En otros Estados, como Bélgica, la evolución de la política lingüística obedecía en cambio más a las necesidades concretas de su política interior que a los grandes principios europeístas en elaboración durante estos años. En ciertos casos se produjeron algunas iniciativas aperturistas de cara a las propias lenguas minoritarias, como por ejemplo la "ley Deixonne" en Francia en 1951, que no modificaron significativamente el duro panorama real de las minorías durante estos años. Por último, en algunos países la política monolingüe fue llevada a sus extremos más radicales tanto por países con regímenes dictatoriales, como España, como por

democracias parlamentarias, como Francia o Grecia.

Este "statu quo" lingüístico en Europa Occidental se mantuvo casi inalterado entre 1945 y 1975: por un lado, los Estados mantenían sus políticas represivas o escasamente permisivas y, por el otro, participaban sin dificultades relevantes en el incipiente plurilingüismo que practicaban tanto los organismos europeístas como los mundiales, e incluso lo impulsaban. Hay que recordar que todavía en 1981 el Comité de Ministros del C. de E. rechazó la tramitación de la Recomendación 928 de su Asamblea Parlamentaria por considerar la política lingüística como un asunto interno de cada Estado.

Ello no impidió que algunas instituciones, especialmente el Consejo de Europa y el Parlamento Europeo, debatieran en varias ocasiones el tema de una ordenación democrática de las lenguas en Europa para incorporarla al proceso de unión. Lo normal todavía era asimilar este problema al cultural-educativo general o al desarrollo de los derechos humanos. Cabe señalar que estas primeras declaraciones tuvieron un eco muy escaso y que su mayor valor consistió básicamente en servir de precedente y abrir el camino a las grandes declaraciones de los años 1980.

Hacia 1975 la situación empezó a cambiar y la evolución se aceleró claramente a partir de 1979, año en que John Hume en el Parlamento Europeo y Alexandre Cirici en el Consejo de Europa

recibieron sendos encargos de preparar un gran informe sobre el panorama lingüístico europeo y los derechos de las minorías.

Esta apertura fue posible porque las circunstancias europeas cambiaron durante esta segunda mitad de la década de los 70. El Acta de Helsinki de 1975 relajó el clima de guerra fría y permitió un mayor desarrollo de las tesis europeístas, basadas en gran medida en su rica personalidad cultural y en consecuencia idiomática, al mismo tiempo que las minorías dejaban de ser una potencial amenaza de debilitamiento de los Estados democráticos enfrentados al bloque soviético de corte totalitario. Las lenguas no de Estado, especialmente las minoritarias, encontraron además otras dos vías ideológico-políticas en su búsqueda de un reconocimiento legal e institucional en el marco de la unión europea: la profundización de los derechos humanos y la política regional desarrollada tanto por muchos Estados como por los organismos europeos.

Partiendo de esta base, la necesaria ordenación lingüística de Europa fue apareciendo cada vez más como uno de los retos más importantes y difíciles a su proceso de unión. Considerado poco más que un problema interno de los Estados hasta principios de los años 1980, el debate lingüístico que se ha llevado a cabo en los últimos 15 años, se halla sujeto todavía a consideraciones e intereses contradictorios, de tal manera que, una vez establecidos los principios generales, a estas

alturas nadie es capaz de proponer una solución práctica viable y al mismo tiempo consensuada.

La simplificación de los usos lingüísticos, e incluso de la propia estructura lingüística del continente, aparece como una necesidad operativa y urgente en un cuerpo político, económico, cultural y social cada vez más homogéneo y sustentado en la existencia de un fondo común y de unos intereses compartidos. En numerosos foros europeos se ha instalado la creencia de que la fragmentación lingüística sitúa la UE en una posición de inferioridad frente a otras potencias monolingües o con una gran lengua dominante, como pueden ser EEUU, Japón o el bloque árabe.

Para muchos la aplicación del "multilingüismo integral" ha alcanzado, si es que no rebasado, sus límites normales y se ha convertido en un dogal para el progreso comercial, científico y social de la Unión. El manejo de algunas instituciones en 11 idiomas resulta prácticamente imposible, contando incluso con la ayuda de la tecnología moderna. No se trata sólo del enorme esfuerzo traductor, posiblemente el mayor y más costoso del mundo, sino de los desequilibrios que encierra el sistema y que origina frecuentes quejas y reivindicaciones. En un marco que habitualmente exige una gran precisión terminológica, la multiplicación de traducciones no sólo se presta a errores y distorsiones de todo tipo y categoría, sino que en opinión de muchos resulta casi imposible encontrar las mismas

equivalencias semánticas, incluso respecto al vocabulario considerado básico en las 11 lenguas oficiales.

A este inconveniente se le añade la preocupación creciente por las perspectivas de próximas ampliaciones de la UE, ya que de aplicarse las mismas fórmulas que hasta ahora, aumentaría el número de lenguas oficiales hasta unos límites francamente inmanejables. La adhesión, al parecer no muy lejana, de países centroeuropeos como Hungría, Polonia, Eslovenia, la República Checa, la República Eslovaca, Rumanía, etc., podría originar una auténtica confusión babélica de lenguas comunitarias en un "totum revolutum" indescifrable.

Ya la situación actual, con quince Estados miembros, provoca distorsiones graves, en la medida en que las lenguas de Estado menos habladas con frecuencia se encuentran marginadas frente a las cuatro cinco lenguas universales. No es raro encontrar denuncias amargas de representantes de estas lenguas (griego, portugués, danés, etc.) frente a la pertinaz hegemonía del alemán, del inglés, el francés o del español. Así pues, el sistema imperante no garantiza ni siquiera un equilibrio total entre las lenguas oficiales de la UE y los motivos de fricción abundan cada vez más.

Por otra parte, el "multilingüismo integral" se aviene mal con la exclusión sistemática de las lenguas europeas no de Estado, encabezadas por el catalán, la única que hasta ahora ha

obtenido cierto reconocimiento. Esto mismo lleva a Oriol Ramon a hablar de "multilingüismo restringido". A pesar de las declaraciones institucionales europeas, el trato concedido a las lenguas minoritarias sigue dependiendo exclusivamente de los Estados. Estos practican una política muy desigual e incluso se da el caso de que un mismo Estado trata de forma muy distinta las diversas lenguas minoritarias presentes en su territorio. O sucede que una misma lengua reciba un tratamiento diferente en cada Estado en el que se halla presente.

En cualquier caso, todos los Estados tienden a hacia una política pensada para fortalecer y desarrollar su lengua predominante tradicional, tanto frente a las otras del interior, como sobre todo en su pugna con las otras lenguas de Estado. Conviene dejar a parte el caso de Bélgica, donde la pugna entre dos lenguas de Estado bastante equilibradas ha condicionado la estructura estatal. Es el único Estado en el que las consideraciones socio-lingüísticas se han impuesto y han marcado a las propiamente político-institucionales.

El renacimiento de los nacionalismos de base o contenido lingüístico en la década de los años 1980 se explica asimismo como reacción a los universalismos uniformadores de la post-guerra. Frente a los nacionalismos de Estado manejados por los regímenes fascistas y nazis, el mundo democrático o comunista respondió con unos planteamientos globalistas al socaire de los progresos tecnológicos y al servicio de las potencias

vencedoras en la contienda. Para ello se sirvió de varias lenguas (inglés, francés, ruso, español, etc.), algunas de las cuales ya habían experimentado rápidos progresos mundiales en los años del colonialismo y del imperialismo. El fracaso de varios de estos proyectos, entre ellos los coloniales o el soviético, fragmentó el paisaje político mundial, pero también el cultural. Al final se evidenció, por ejemplo, que lo único que había en común entre un ciudadano letón y otro siberiano era el Estado soviético y su lengua, la rusa. Al hundirse el primero, lógicamente el ruso perdió su función identificadora y pasó a ser o bien la lengua materna de la comunidad rusa, o bien la lengua franca entre países y poblaciones de la zona, ahora con lenguas de Estado distintas. No se olvide que el ruso había sido declarado por el Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS) lengua de la revolución soviética, del mismo modo que 150 años antes el francés lo había sido de la revolución francesa.

Una vez más la lengua se convierte en un instrumento de poder y en un arma al servicio a la expansión ideológica, económica o comercial. El dominio lingüístico favorece la penetración cultural y económica, por lo que la implantación de la lengua estatal en los circuitos internacionales constituye no sólo una necesidad, sino una obligación que acaba por comprometer a todos los poderes y todos los sectores del Estado que la sustenta. Al formar parte del altamente competitivo mundo del comercio, la lengua se transforma en un bien de

consumo por sí misma y en un vehículo esencial para la comercialización de otros. La enseñanza privada de las grandes lenguas universales, y muy especialmente del inglés, mueve hoy día enormes cantidades de dinero y de intereses, sin contar con las industrias auxiliares y de apoyo, como por ejemplo la edición de libros de texto y de material diverso.

Pero hay más. Diluídos los signos de identidad tradicionales de las naciones y los nacionalismos europeos (parlamentos, fronteras, ejércitos, moneda, etc.) y al compartir los Estados instituciones y proyectos comunes en el marco de la construcción de Europa, la cultura ha pasado a ser la principal referencia de los neo-nacionalismos, los de Estado y los regionales. De esta manera, la historia, el folklore, la gastronomía, los premios Nobel... y muy especialmente el deporte y la lengua son actualmente los referentes principales que distinguen a los Estados entre sí y proporcionan gran parte de la argumentación básica a los movimientos nacionalistas (de Estado o regionales) e independentistas. Ordenar las lenguas en el contexto europeo significa, por lo tanto, implicarse de lleno en el proceloso debate de los nacionalismos.

Ante ello, muchos dirigentes políticos e intelectuales reivindican o bien una lengua común desprovista de sus connotaciones nacionales, cosa a todas luces inviable por el momento, o bien una cultura mestiza, formada por la suma de todas las nacionales. Los europeístas más convencidos o más

atrevidos defienden incluso la existencia de una cultura europea con una vida y una superestructura propias por encima de las estatales y regionales. En los dos últimos casos se trata de una cultura ciertamente de base plurilingüe, pero que puede y debe expresarse en pocas lenguas y quizá en una sola no identificada aún. La contradicción vuelve a aparecer.

Esto convierte al multilingüismo en un valor esencialmente europeo, en uno de los fundamentos de su identidad. Una simplificación lingüística, en especial si se realiza por métodos coercitivos, mutilaría gravemente este naciente espíritu europeo, ya que con cada lengua que desaparece o simplemente retrocede, se merma, se empobrecen las características europeas, sustrato y justificación últimos de su proyecto de unión. Desde esta óptica europeísta todos los poderes públicos están comprometidos en la protección, y si cabe en el fomento de todas las lenguas situadas bajo su responsabilidad político-administrativa. Para ello deben tomar las medidas pertinentes en el terreno de la administración, la justicia, la enseñanza, los medios de comunicación, la topografía, etc. No hacerlo supone la desprotección de muchas minorías lingüísticas y su casi inevitable desaparición aunque sea a largo plazo ante la penetración de lenguas más potentes y mejor protegidas, sean de Estado o no.

Este mandato a las autoridades de mantener una actitud comprometida choca muchas veces con un notorio desinterés, que

se justifica en la falta de requerimientos por parte de la comunidad lingüística teóricamente receptora y beneficiaria de estas medidas. La valoración política y social, expresada a través de distintos canales, se plantea entonces como un asunto primordial en el tratamiento de las lenguas y motiva una actividad paralela, y también muy desigual, protagonizada por partidos políticos, organizaciones privadas, academias, círculos ilustrados, universidades, etc., la cual repercute a su vez en las instituciones y los poderes públicos competentes. Se establece así un principio democrático básico, según el cual cada pueblo, cada nación, cada comunidad debe estar en condiciones de utilizar aquella(s) lengua(s) que democráticamente haya elegido, y no por imposición o dejadez.

En este contexto, no es de extrañar que la política lingüística se vea como una de las pruebas más fehacientes y palpables de las nuevas democracias europeas, como ocurrió en España en 1977-78 o en las surgidas en Europa Central y Oriental a partir de 1990. Se entiende que un país que no es capaz de dar un tratamiento democrático y conforme a los derechos humanos, difícilmente respetará los derechos de las comunidades que le son ajenas. Por este conducto la política lingüística es una garantía más contra la intolerancia, la xenofobia y el racismo, y una vía hacia la convivencia entre culturas y pueblos distintos, y en definitiva hacia la paz. Queda claro a estas alturas que la defensa de las lenguas minoritarias no es, pues, un resabio de los nacionalismos

decimonónicos trasnochados, sino una parte constitutiva de la doctrina europeísta más actual y moderna.

El plurilingüismo democrático en Europa se plasma además en el propio acervo legislativo de la UE, que es creado simultáneamente en las 11 lenguas oficiales sin distinciones, ni preeminencias o exclusiones. El derecho comunitario nace multilingüe y cualquier restricción o limitación "a priori" en este sentido, aunque fuere legal, haría dudar legítimamente de su componente democrático y de la tantas veces reiterada voluntad de llegar a todos los ciudadanos de todos los países miembros. Estos tienen derecho a ser legislados y no digamos que informados y a actuar en su propia lengua sin que el marco comunitario pueda cambiar estas reglas.

Más delicado es aún el problema que plantean las instituciones representativas, y de forma muy señalada el PE. Si bien es perfectamente posible y legítimo exigir el conocimiento de determinados idiomas para poder ser funcionario de la UE, ¿lo es pedir esto mismo para ser miembro del PE? En puridad democrática, ¿se puede excluir del PE aquellos ciudadanos que no conozcan sus hipotéticos idiomas de trabajo, por ejemplo el inglés o el francés? En una palabra, ¿es permisible que sólo puedan acceder al PE aquellos ciudadanos comunitarios que, además de la suya, conozcan determinadas lenguas oficiales?

Desde el mismo momento en que la política lingüística conecta directamente con la identidad esencial y con la expresión democrática de Europa, cualquier posible recorte en el uso de las lenguas debe tener presente esta doble perspectiva. Ello obliga a realizar los cambios normativos por consenso entre todas las partes afectadas, consenso que hoy por hoy no se vislumbra.

Cualquier solución en orden a una simplificación lingüística iría sin duda en detrimento de las lenguas menos habladas o menos potentes y en beneficio de las más potentes. Es lógico, por lo tanto, que los países y las comunidades con lenguas menos usadas sean las más recelosas y las más predispuestas a bloquear cualquier solución que amenace con agravar el desequilibrio vigente. Es más, a lo que aspiran precisamente es a aumentar su cuota de mercado y a acercarse en la medida de lo posible a las grandes, por lo menos en lo que respecta a los derechos.

La Europa que se va dibujando en todos sus documentos trabaja decididamente en favor del proceso de unión, pero hablando decenas de lenguas, entre 50 y 60 sólo en la mitad occidental. Se trata de ordenar el mapa lingüístico de la Unión Europea de tal manera que cada lengua encuentre su encaje constitucional, su rango legal y político, su función social y su espacio vital en el concierto europeo, en paralelo a la unión en otros terrenos, como el económico. Ni una sola minoría

está descalificada, condenada o dada por perdida de antemano, ya que es la población usuaria de una lengua determinada la que debe determinar democráticamente su futuro y su incardinación en la estructura legal y socio-cultural del Estado correspondiente y de la Unión Europea. No obstante, el trato histórico recibido con frecuencia por muchas de estas minorías sometidas a discriminaciones e incluso a prohibiciones y a persecuciones, justifica la adopción actual de medidas discriminatorias positivas de carácter protector y normalizador, sin que ello suponga ataque alguno, limitación, discriminación o marginación para con las lenguas de Estado.

La Unión Europea apuesta claramente a favor de una ciudadanía políglota, como solución a la Babel continental, en lugar de jerarquizar idiomas e imponerlos, o en vez de alentar la desaparición de otros, como vía a la simplificación lingüística. El europeo medio que se vislumbra para el siglo XXI deberá conocer entre dos y cuatro idiomas por término medio: la(s) lengua(s) propia(s) más una o dos extranjeras. Los ciudadanos residentes en territorios bilingües deberán expresarse correctamente en la lengua regional o minoritaria y la estatal más una o dos extranjeras, sobre todo en territorios fronterizos.

Para alcanzar esta meta no se preconizan imposiciones o métodos coercitivos, sino una vía principal, por no decir que única: la enseñanza. Véase, si no, el mandato dado por el

artículo 126.1 del Tratado de la Unión cuando sostiene que "la Comunidad contribuirá al desarrollo de una educación de calidad fomentando la cooperación entre los Estados miembros y, si fuere necesario, apoyando y completando la acción de éstos en el pleno respeto de sus responsabilidades en cuanto a los contenidos de la enseñanza y a la organización del sistema educativo, así como de su diversidad cultural y lingüística".

No es, por otra parte, una situación insólita. Los luxemburgueses, por ejemplo, son trilingües por obligación constitucional, circunstancia que les permite con suma facilidad aprender alguna otra lengua. En Islandia es preceptivo saber el idioma islandés y el danés. Con estas dos lenguas resulta relativamente sencillo aprender alguna otra lengua escandinava, como el sueco o el noruego. Además las intensas relaciones con Gran Bretaña y Norteamérica y la necesidad de superar un cierto aislacionismo lingüístico empuja a muchos islandeses a aprender el inglés o el alemán.

Sin ir más lejos, en las Comunidades Autónomas españolas con idioma co-oficial todos los alumnos de enseñanza secundaria deben terminar sus estudios dominando las dos lenguas co-oficiales y una extranjera, con lo que es frecuente encontrar gente con estudios superiores manejando cuatro idiomas.

El modelo plurilingüe propuesto por las distintas declaraciones europeas parte, pues, de una realidad en

numerosas áreas, aunque también es cierto que unos 300 millones de europeos pueden considerarse inicialmente monolingües. Teniendo en cuenta que sólo un 10% de la población europea tiene alguna experiencia o formación bilingüe, se perfila el enorme esfuerzo educativo que se deberá hacer en los próximos años. Las cifras indican que algo se ha hecho ya en los últimos diez años, pero resulta obviamente difícil convencer y educar en prácticas bilingües a la población que tiene como lengua materna una de las cuatro o cinco grandes lenguas, por número de hablantes y por su peso político, cultural y económico. Son precisamente las comunidades de estructura bilingüe las más inclinadas a adoptar un tercer y un cuarto idioma, sobre todo si el hacerlo conlleva salir de ciertos "ghettos" socio-profesionales. Es frecuente poner a los Estados y a las regiones plurilingües, como Luxemburgo o Suiza, como paradigma de lo que debe ser la Europa venidera.

Si la ordenación de las lenguas de Estado presenta graves obstáculos, estos se multiplican cuando se les añade las lenguas minoritarias. Su simple clasificación y definición ya resulta problemática en no pocas ocasiones, y en cualquier caso su tratamiento se hace sobre un terreno globalmente aún mal conocido y poco estudiado.

Es verdad, sin embargo, que en los últimos 15 años se han hecho importantes progresos, tanto en lo que se refiere a su profundización científica, como a sus avances socio-políticos y

legales. Conviene resaltar el notable esfuerzo realizado por la inmensa mayoría para salir de los ghettos en que las habían encerrado las políticas lingüísticas de los Estados hasta la década de los años 1970, salvo contadas excepciones. Prácticamente todas las minorías han contado con asociaciones e instituciones públicas o privadas que han mantenido su pervivencia en los peores momentos y circunstancias y que ahora pueden plantearse ciertas aspiraciones.

A mitad de la década de los 90 las minorías lingüísticas disponen de un cuadro de derechos universalmente aceptados, aunque, como tantos otros, frecuentemente incumplidos. La existencia de esta doctrina y de este código de alcance europeo no puede menospreciarse. Supone un sólido punto de referencia para las reivindicaciones de estas minorías y un innegable progreso de la sociedad europea en general en su proceso de unión democrática. Es impensable la construcción europea dejando atrás colectivos que en su conjunto suman un 10% de la población continental, y algunos de los cuales tienen un peso específico notable.

Ahora bien, basta seguir un poco la historia de la CELRM y leer su texto final para comprobar que las mejoras que experimenten las lenguas minoritarias no podrán hacerse nunca en detrimento de las posiciones ya adquiridas por las lenguas de Estado. La Carta, y muchos otros documentos, deja meridianamente claro que las actividades derivadas de su

aplicación no pueden ir contra el principio de la integridad territorial de los Estados y que la protección de las lenguas minoritarias no se hará en detrimento de las lenguas oficiales y la necesidad de aprenderlas. La neutralización política de las lenguas minoritarias aparece, pues, en toda su extensión, así como sus límites en política propiamente lingüística, es decir el status de las lenguas de Estado.

Con todo hay mucho camino que recorrer para las lenguas minoritarias. El conjunto de derechos reconocidos por las instituciones europeas presenta aún un perfil de mínimos sin duda por la presión de los Estados y sus portavoces y es posible y deseable profundizarlos más. Por otra parte, la traducción de estos derechos a la normativa de cada Estado y de cada región con competencia en la materia se prevé todavía como una lucha larga y difícil. Y en tercer lugar cada minoría debe aprovechar al máximo las posibilidades de que disponga para normalizar su implantación social, desarrollar su potencial cultural y en definitiva para inserirse en el proceso de unión europea con toda naturalidad.

Hacer ésto, nos recuerda Kuijpers, no es posible aislando las minorías de sus problemas sociales y económicos y de los generales del Estado correspondiente y de Europa. Fenómenos como las migraciones, el nivel de vida, las comunicaciones, el comercio, los conflictos políticos, etc., y no digamos la educación, inciden directamente en la evolución de las

distintas comunidades lingüísticas. Por ello es preciso desarrollar políticas globales de integración y de progreso, y no refugiarse en simples consideraciones nostálgicas o históricas. En la Europa del futuro las minorías lingüísticas no pueden ser reducidas a unos reductos antropológicos, conservados para dar satisfacción a los científicos, para entretener turistas y mucho menos para proporcionar coartadas a los poderes que no cumplen con las directrices europeístas. En una palabra, las minorías deben formar parte de la Europa unida en igualdad de condiciones y con las mismas oportunidades que cualquier otro colectivo.

FUENTES Y BIBLIOGRAFIA

1) BIBLIOGRAFIA GENERAL

- ABALIN, Hervé: Destin des langues celtiques, Centre National de la Recherche Scientifique, Ophrys Ed., 1989, 253 págs.

- ABELLAN, José Luis: El reto europeo: Identidades culturales en el cambio de siglo, Editorial Trotta-Asociación de Hispanismo Filosófico, Madrid 1994, 432 págs.

- ACUÑA, Ramón Luis: Tribus de Europa, Ediciones B, Barcelona 1994

- ALDECOA, Francisco: Euroelecciones 1994. Un Parlamento para una legislatura constituyente de la Unión Europea(1994-99), Movimiento Europeo, Ed. Tecnos, Madrid 1994, 253 págs.

- AMERSFOORT, Hans van y KNIPPENBERG, Hans (Editors): States and Nations. The rebirth of the "nationalities question" in Europe, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam 1991

- ARGEMI, Aureli: Sobirania o Submissió, Ed. Mediterrània, Col.lecció "Temes d'Ara Mateix", Barcelona 1994

- ATTALI, Jacques: Europa(s), Ed. Seix Barral, Barcelona 1994,
192 págs.

- AVILA PALAFOX, Ricardo; CALVO BUEZAS, Tomás: Identidades,
nacionalismos y regiones, Universidad de Guadalajara
- Universidad Complutense de Madrid, Madrid 1994

- BAETENS, Hugo: Principis bàsics del bilingüisme, Ed. La
Magrana, Barcelona 1989

- BAGLEY, Tennet Harington: General Principles and Problems
in the International Protection of Minorities. A
Political Study, Geneva 1950

- BALIBAR, Renée; LAPORTE, Dominique: Burguesía y lengua
nacional, Ed. Avance, Barcelona 1974, 203 págs.

- BARBE, Esther; GRASA, Rafael: La Comunitat Europea i la nova
Europa, Fundació Jaume Bofill, Barcelona 1992

- BARON, Enrique: Europa en el alba del milenio, Ed. Acento
Editorial, Madrid 1994, 218 págs.

- BASSAND, M.: "Cultura y regiones en Europa; a partir del
proyecto Cultura y Región del Consejo de Europa",
Materiales de Política Cultural, 1. Diputación de
Barcelona, Barcelona 1992

- BASTARDES, Albert; BOIX, Emili: ¿Un Estado, una lengua? La organización política de la diversidad lingüística, Ed. Octaedro, Col. Octaedro Universidad, Barcelona 1994, 167 págs.

- BAUER-BERNET, Helène: Droit, Informatique et Traduction. L'expérience de la CEE, Dossiers du Conseil de la Langue Française nº 16, Editeur Officiel du Québec 1983, 103 págs.

- BEER, W. R.: The unexpected rebellion: Ethnic activism in Contemporary France, New York University Press 1980

- BLANCHET, Philippe: Nos langues et l'unité de l'Europe. Actes des colloques de Fleury (Normandie) et de Maiano (Prouvenço), VRIN, Paris 1993

- BLAS GUERRERO, Andrés de: Nacionalismos y naciones de Europa, Alianza Ed., Madrid 1994, 202 págs.

- BONET, Pilar: La Rusia imposible, Ed. El País-Aguilar, Madrid 1994

- BORRAT, Héctor: Fer Europa. Els periòdics, protagonistes del post-Maastricht, Ed. Centre d'Investigació de la Comunicació, Col.lecció Estudis i Recerques, Generalitat de Catalunya, Barcelona 1994, 166 págs.

- BRETON, Roland: Les Ethnies, ¿Que sais-je? PUF, Paris 1992

- BREUILLY, John: Nacionalismo y Estado, Ediciones Pomares-Corredor S.A., Barcelona 1990, 440 págs.

- BRU, Carlos Maria: La ciudadanía europea, Ed. Sistema - Fundación Sistema, Madrid 1994, 534 págs.

- BYRAM, Michael; LEMAN, Johan: Bilingual and Trilingual Education, Ed. by ---, Multilingual Matters, n° 54, Ed. Multilingual Matters Ltd., Clevedon-Philadelphia, 1990, 158 págs.

- CABRE, M^a Teresa: La terminología. La teoría, els mètodes, les aplicacions, Ed. Empúries, Barcelona 1992

- CABRERA, Mercedes; JULIA, Santos; MARTIN ACENA, Pablo: Europa 1945-1990, Comp. por ---, Ed. Pablo Iglesias, Madrid 1992, 194 págs

- CAHLR: The Situation of Regional or Minorities Languages in Europe, Council of Europe, Strasbourg 1994, 148 págs

- CALVET, Louis-Jean: La guerre des langues et les politiques linguistiques, Ed. Payot, Paris 1987

- : L'Europe et ses langues, Col. "Essai", Ed. Plon, Paris 1993
- CARPENTIER, Jean; LEBRUN, François: Breve Historia de Europa, Alianza Editorial, Madrid 1994, 808 págs.
- CARRERE d'ENCAUSE, Hélène: Victorieuse Russie, Ed. Arthème Fayard, Paris 1992
- : L'Empire éclaté, Ed. Flammarion, Paris
- CAPOTORTI, F.: Etudes des droits des personnes appartenant aux minorités ethniques, religieuses et linguistiques, NNUU, Nueva York 1979
- CECCHINI, Paolo; GARRIGUES, Antonio; ILLESCAS, Rafael: La Unión Europea. Eficacia y democracia, Ed. McGraw-Hill, Madrid 1994, 176 págs.
- CEINO, Pedro: Minorías étnicas, Coordinado por ---, Ed. Integral, Barcelona 1990, 160 págs.
- CIDOB: Anuario Internacional CIDOB 1993, Ed. Fundació CIDOB, Barcelona 1994, 667 págs.

- CHITI-BATELLI, Andrea: Communication Internationale et Avenir des Langues et des Parlers, Presses d'Europe, Nice 1987

- CE: Portrait des Régions, Ed. EUR-OP, Luxemburg 1993, 3 vols

- COLOMER, Josep Maria: La política en Europa, Dir. por ---, Ed. Ariel, Barcelona 1995, 334 págs.

- COMRIE, Bernard: The Major Languages of Western Europe, Ed. by ---, Routledge, London 1990, 315 págs.

- CONFERENCIA DE COMUNIDADES DE BASE CRISTIANAS DE EUROPA: Pueblos y Estados en la construcción de Europa, Sta. Maria de Getxo: Herria 2.000 Heliza, 1994, 227 págs

- COOK, Chris; STEVENSON, John: Guía de historia contemporánea de Europa, Alianza Editorial, Madrid 1995, 700 págs.

- CORDES, Gerhard; MOHN, Dieter: Handbuch zur Niederdeutschen Sprachund Literaturwissenschaft, Eric Schmidt, Berlin 1983

- CRYSTAL, David: Enciclopedia del lenguaje, Ed. Taurus, Madrid 1994, 475 págs.

- DELPÉRÉE, Francis: La Belgique Fédérale, Dir. por ---, Ed. Bruylant, Bruselas 1994, 528 págs.

- DIL, A.: Language in sociocultural change, C.A: Stanford University Press, Stanford 1972

- DOFNY, J.; AKIWOWA, A.: National and Ethnic Movements, Editado por---, Sage Publ. 1981

- DOUTRIAUX, YVES: La politique régionale de la CEE, Col. ¿Que sais-je?, PUF, París 1992 (2ème ed.), 128 págs.

- DUVERGER, Maurice: Europa de los Hombres. Una metamórfosis inacabada, Ed. Alianza Editorial, Madrid 1994, 289 págs.

- E.B.L.U.L: Select Bibliography on Lesser Used Languages in European Community, Dublin/Brussels 1993, 120 págs.

- ECO, Umberto: La búsqueda de la lengua perfecta, Col. "La Construcción de Europa", Ed. Crítica-Grijalbo Mondadori, Barcelona 1994, 317 págs.

- EKLAR, Rainer S.: Europas unruhige Regionen. Geschichtsbewusstsein und Europäische Regionalismus, Ernst Klett, Stuttgart 1981

- FISHMAN, Joshua: Sociología del lenguaje, Ed. Cátedra, Madrid 1988

- : Readings in the Sociology of language, Mouton, El Haya 1968

- FONTANA, Josep: Europa ante el espejo, Col. "La Construcción de Europa", Ed. Crítica-Grijalbo Mondadori, Barcelona 1994, 197 págs.

- FOSSAS, Enric: Regions i Sector Cultural a Europa. Estudi comparat: Bèlgica, França, Itàlia, RFA i Espanya, Institut d'Estudis Autònoms de la Generalitat de Catalunya, Barcelona 1990, 216 págs.

- FOUCHER, Michel: La próxima Europa, Dir. por ---, Fundación BBV, Bilbao 1994, 98 págs.

- FUEN: "Fundamental Rights of Ethnic Groups in Europa" en Ethnos Vol. 42, Ed. Wilhem Braumüller, Viena 1993, 232 págs.

- GAUTHIER, François; LECLERC, Jacques; MAURIS, Jacques: Langues et Constitutions: Recueil des clauses des Constitutions du monde, Québec: Publications du Québec, Conseil Internationale de la Langue Française, Paris 1993, 130 págs.

- GILES, H.: Language, Ethnicity and Intergroups Relations, Academic Press, London 1977

- GIMENEZ ROMERO, Carlos: "El caleidoscopio cultural europeo: entre el localismo y la globalidad", en Documentación Social nº 97, Octubre-Diciembre 1994, págs. 9-35

- GINEBRA, Jordi; MELIA, Joan; MOLLA, Toni: La llengua als Països Catalans, Col. "Politiques", Ed. Fundació Jaume Bofill, Barcelona 1992

- GIORDAN, Henri: Les minorités linguistiques. Droits linguistiques et droits de l'homme, Direc. de ---, Ed. Kimé, Paris 1992, 680 págs.

- GRILLO, R.D.: Dominant Languages, Cambridge University Press, Cambridge 1989, 261 págs.

- GRIN, François: European Economic Integration and the Fate of Lesser Used Languages, Col. "Language and Society Papers", nº LD17, University of Washington, Washington 1992, 12 págs

- GROSJEAN: Life with two languages and introduction to bilingualism, Harvard University Press - Cambridge, Londres - H.A 1982

- GUMPERZ, J.: Language in social groups, C.A: Stanford University Press, Stanford 1971

- HAMERS, J.-Blanc: Bilinguality and Bilingualism, Cambridge University Press, Cambridge 1989

- HENRIQUEZ, M^a. C.: O uso das linguas na perspectiva da Europa Comunitaria, Associação Galega da Língua, A Corunha, 1993, 194 págs.

- HERAUD, Guy: L'Europe des Ethnies, Ed. Press d'Europe 1963

- : "Les Communautés linguistiques en quête d'un statut" en Plural Societies, 1982, vol. 13

- HOBBSBAWM, Eric J.: "Identitat: Estat, etnicitat i religió" en L'Avenc n^o 189, Febrero 1995, págs. 8-16

- HUGUES, Medwin: The Challenge of Diversity, 1993

- INSTITUT LADIN: I Ladini delle Dolomiti, Bolzano/Bozen 1987

- JACOBY, Lucien: European Community Activity in Favour of Lesser Used Languages 1983 to 1989

- JOYAUX, François: Enciclopedia de Europa: Geografía, Historia, Sociedad, Política, Economía, Alianza Editorial, Madrid 1994, 396 págs.

- JENNIGES, Ricarda: Citizenship 2000, the lesser used languages of Europe, Ed. University of Wales, Cardiff 1993, 147 págs.

- : Mini-guide to the Lesser Used Languages of the EC, Ed. EBLUL, Dublin 1994, 62 págs

- JOYAUX, François: Enciclopedia de Europa, Ed. por ---, Alianza Editorial, Madrid 1994, 397 págs.

- JUARISTI, Jon: Vestigios de Babel. Para una arqueología de los nacionalismos españoles, Ed. Siglo XXI, Madrid 1992

- JUNYENT, Carme: Les llengües del món, Ed. Empúries, Barcelona 1989

- : Vida i mort de les llengües, Ed. Empúries, Barcelona 1992

- KELLER, R.E.: The German Language, Ed. Faber and Faber, London 1978

- KERN, Rudolf: Deutsch als Umgangs- und Muttersprache in der Europäischen Gemeinschaft, Ed.----,
Europäisches Buró für Sprachminderheiten, Belgisches Komitee, Bruselas

- KREMnitz, Georg: Multilingüisme social, Edicions 62,
Barcelona 1993

- LABOV, William: Modelos Sociolingüísticos, Ed. Catedra,
Madrid 1983

- LABRIE, Normand: La construction linguistique de la Communauté européenne, Col. "Politique Linguistique", Honoré Champion Editeur, Paris 1993,
450 págs.

- LAFFAN, Brigid: Integration and Co-operation in Europe, The Routledge University Association for
Contemporary European Studies Series, London/New York/Routledge 1992

- LAMUELA, Xavier: Estandarització i establiment de les llengües, Col. "Llibres a l'Abast", Edicions 62,
Barcelona 1994, 175 págs.

- LAZARO, Laureano; MOLINA, Mercedes: La política regional, Editorial Trivium, Madrid 1986

- LUCAS, Javier de: El desafío de las fronteras. Derechos humanos y xenofobia frente a una sociedad plural, Col. "Temas de Hoy. Ensayo", Ed. Temas de Hoy, Madrid 1994, 261 págs.

- MARC, Alexandre: El porvenir de Europa y otros ensayos, Centro de Estudios Constitucionales, Boletín Oficial del Estado. Madrid 1994, 370 págs.

- MAHLER, Michel: Les langages de la humanité. Une encyclopédie des 3.000 langues parlées dans le monde, Seghers, Paris 1984

- MALMBERG, Bertil: Introducción a la lingüística, Editorial Cátedra, Madrid 1985

- MARSA, Francisco: "Idiomas, lenguas y dialectos con Europa al fondo", en Cuenta y Razón, año 1992, Vol. 65-66, págs. 64-70

- MASCLET, Jean-Claude; MAUS, Didier: Les Constitutions nationales à l'épreuve de l'Europe, Direc de ---, La Documentation Française, Centre de Recherches des Droits Constitutionnels. Faculté Jean Monnet, Université Paris I, Paris 1993, 239 págs.

- MAURAI, Jacques: La Crise des Langues, Coord. par ---, Col. "L'ordre des mots", Conseil de la Langue Française du Gouvernement de Quebec, Paris 1985, 490 págs

- MAUSER, M. H.: A Dictionary of Contemporary Idioms, Pan Books, London 1983

- MENCHEN BARRIOS, Maria Teresa: "Los padres de Europa" en Guadernos del Mundo Actual-Historia 16, Madrid 1993, 31 págs.

- MCCONNELL, Grant D. ; GENDRON, Jean Denis: Atlas international de la vitalité linguistique. L'Europe Occidentale, Vol 2, CIRAL - ICRLP, Quebec 1994

- MINORITY RIGHTS GROUP REPORT: Minority and Autonomy in Western Europe

- MORAGAS, Miquel de / GARITAONANDÍA, Carmelo: Coord. por ---, "La televisió a les regions, nacionalitats i als petits països de la Unió Europea, Revista Anàlisi n° 17, Barcelona 1994, 204 págs.

- MORIN, Edgar: Pensar Europa. Las metamorfosis de Europa, Gedisa Editorial, Barcelona 1994, 184 págs

- NEWMEYER, Frederic J.: Panorama de la lingüística moderna de la Universidad de Cambridge, Ed. Visor, Madrid 1990-92, 4 vol.

- NIETO SOLIS, José Antonio: Fundamentos y políticas de la Unión Europea, Siglo XXI de España Editores, Col. Manuales Economía, Madrid 1995, 257 págs.

- ONU: Memorandum: "Définition et classification des minorités" préparé à l'intention du Secrétaire Générale de l'ONU, IIIème Session, 1950

- OREJA, Marcelino: La Constitución Europea, Dirigido por ---, Actas de El Escorial, Universidad Complutense de Madrid, Cursos de Verano 1993, Madrid 1994, 366 págs.

- ORIVE RIVA, Pedro: Nuevo desorden mundial, Ed. Eudema Actualidad, Madrid 1991

- ORTEGA, Andrés: La razón de Europa, Ed. El País-Aguilar, Madrid 1994, 251 págs.

- PEDERSEN, R.N.: One Europe, 100 Nations, Ed. Multilingual Matters Ltd. Clevedon, Avon 1992

- PEREZ BUSTAMANTE, Rogelio: Los Estados de la Unión Europea, Editorial Dykinson, 1994, 400 páginas

- PERRY, M.M. / DAVIES, W.V. / TEMPLE, R.A.M.: The changing voices of Europe. Social and political changes and their linguistic repercussions, past, present and future, Dir. por ---, The University of Wales Press Modern Humanities Research Association, Cardiff, 1994, 335 págs.

- PETRELLA, R.: La renaissance des cultures régionales en Europe, Paris 1978

- POGARELL, Reiner: Minority Languages in Europe. A Classified Bibliography, Mouton Publishers, Berlín/New York/Amsterdam 1983, 208 págs.

- PRESSES D'EUROPE: Contre les Etats, les Régions d'Europe, Col. "Régions", Ed.---, Paris-Nice 1973

- PUEYO, Miquel: Llengües en contacte en la comunitat lingüística catalana, Col. "Biblioteca Lingüística Catalana", Universitat de València, València 1992

- PUIG, Lluís M^a de: Historia de la Unidad Europea, Ed. Anaya, Madrid 1994, 96 págs.

- PUJOL I SOLEY, Jordi: Pensar Europa, Col. "Temes d'Actualitat" n^o 7, Generalitat de Catalunya, Barcelona 1993, 634 págs.

- : Reflexiones sobre Europa, Publicacions de la Generalitat de Catalunya, Barcelona 1994, 400 págs.
- REITZ, J.G.: The survival of ethnic groups, McGraw-Hill Ryerson, Montreal 1981
- RIEMERSMA, Alex M.J.; WALKER, Alastair G.H.: Rapport du colloque EMU "Les Langues Moins Répandues dans L'Enseignement Primaire, Riis (Frise) 25/28 d'avril 1988, Ed. Fryske Akademy/EMU-projekt, Ljouwert/Leeuwarden, décembre 1989, 54 págs.
- ROMUS, Paul: L'Europe et les régions, Editions Labor, Bruselas 1979
- ROUSSO-LENOIR, Fabienne: Minorités et droits de l'homme: l'Europe et son double, Ed. Bruylant, Bruxelles 1994, 200 págs.
- RUBERT de VENTOS, Xavier: Nacionalismos. El laberinto de la identidad, Ed. Espasa Calpe, Madrid 1994
- RUDOLPH, Joseph R. Jr.; THOMPSON, Robert J.: Politica extraterritorial, Ed. Pomares-Corredor, Barcelona 1992, 317 págs.

- RUMMEL, Reinhardt: Toward Political Union. Planning a Commun Foreign and Security Policy in the European Community, Nomos Verlagsgessellschaft, Baden-Baden 1992

- SALVI, Sergio: Le nazioni proibite, Florencia 1973

- : Le lingue tagliate, Milán 1975

- : Patria e patria, Florencia 1978

- : La disunione sovietica, Florencia 1990

- SANGUIN, André-Louis: Les Minorités Ethniques en Europe, Dir. par ---, Ed. L'Harmattan, Paris 1993, 369 págs

- SCARDIGLI, Victor: L'Europe de la diversité. La dynamique des identités régionales, CNRS Sociologie. CNRS Editions, Paris 1993, 239 págs

- SEILER, Daniel L.: Les partis autonomistes. PUF, Paris 1982

- SELLIER, Jean / SELLIER, André: Atlas des Peuples d'Europe Centrale, Ed. La Découverte, Paris 1994, 199 págs.

- SERRANO, Sebastià: Lingüística i qüestió nacional, Ed. Eliseu Climent, València 1979

- : Comunicació, societat i llenguatge. El desenvolupament de la lingüística, Ed. Empúries, Barcelona 1993
- SIGUAN, Miquel: Lenguas y Educación en Europa, Coord. por --- Institut de Ciències de l'Educació - Universitat de Barcelona, Col. "Seminarios" nº 19, XI Seminario sobre "Educación y Lenguas" de Barcelona, Barcelona 1987, 186 págs.
- , L'Europa de les llengües, Ed. 62, Col. "Llibres a l'abast", Barcelona 1995, 218 págs.
- SIKMA, Jantsje / GORTER, Durk: European Lesser Used Languages in Primary Education, Ed. Fryske Akademy/ Mercator Education, Netherlands
- SOBRERO, A.: Dialetti diversi. Proposte per lo studio delle parlate alloglotte in Italia, Lecce 1974
- TAIBO, Carlos: Los cambios en el este: una guía introductoria, Cuadernos del ICE nº 9, Ediciones de la Universidad Autónoma de Madrid, Madrid 1994, 177 págs.
- TAMAMES, Ramon: La Comunidad Europea, Alianza Editorial Textos, Madrid 1987, 453 págs.

- : La Comunidad europea, Alianza Universidad,
Madrid 1994, 472 págs.
- TORRES MURILLO, José Luis: La Europa de las Autonomías, Ed.
Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa, Col.
Documento n. 36, S. Sebastián 1985, 332 págs.
- TRUCHOT, Claude: Le plurilinguisme européen, Direc. ---, Col.
Politique-Linguistique, Ed. Honoré Champion Editeur,
Paris 1989
- TUAILLON, Gaston: Le Franco-provençal. Progrés d'une
définition, Centre d'Etudes Franco-Provençals "René
Willien", 1983
- VACCHINA, Mariagrazia: Le plurilinguisme, condition de la
democratie culturelle pour l'Europe, Coord. por ---,
Colloque Internationale: Saint-Vincent 16/18 de
Sept. 1991, Region Autonome de la Vallée d'Aoste.
Assessorat de l'Instruction
- V.V.A.A.: España en la nueva Europa, Ciclo de Conferencias
en el Club Siglo XXI de Madrid (1991), Unión
Editorial, Madrid 1993

- : L'événement européen. Initiatives et débats, Col.
"Regards" n° 22, Ed. Françoise Seuil, 1993

- : El proceso de unidad europea y el resurgir de los nacionalismos, Ed. Euroliceo, Ayuntamiento de Telde, Madrid 1993, págs. 189 págs.

- : "El porvenir de Europa" en Revista de Occidente n° 157, Fundación Ortega y Gasset, Junio 1994, 156 págs.

- : Minoranze Linguistiche fra Storia e Politica, Col. "Studi e Testi", CIVIS, Trento, Suplemento 4/1988

- : "Nación, nacionalismos, multiculturalidad", en Revista de Occidente, n° 161, Fundación José Ortega y Gasset, Octubre 1994, 152 págs.

- : Atlas Linguarum Europae, Misumeci Editur, 183 págs.

- : Visiones de Europa, Guillermo Gortázar Editor, Barcelona 1995

- : La inserció de les regions en l'Europa de demà, Institut d'Estudis Autonòmics, Generalitat de Catalunya, Barcelona 1987, 141 págs.

- : "Europa, realidad y perspectivas", en Documentación Social n. 91, Abril-Junio 1993, 272 págs.
- : Visiones de Europa, Fundación BBV, Madrid 1995,
- VALVERDE, José Luis: Europa. Una idea en marcha, Ed. PPE, 1994
- VEITER, Theodor: Federalisme, Regionalisme et Droits des Groupes Ethniques en Europe. Hommage a Guy Héraud, Ed. W. Braumüller, Viena 1989
- WALTERS, F.P.: Historia de la Sociedad de Naciones, Ed. Tecnos, Madrid 1971
- WEIDENFELD, Werner; WESSELS, Wolfgang: Jahrbuch der Europäischen Integration 1990-91, Publication of the Institut für Europaeische Politik, Europa Union Verlag, Bonn 1991
- WENDT, Heinz F.: Sprachen, Fisher Tashenbuch, Frankfurt 1977
- WITTE, Bruno de: Language, Rights, Minority Rights, Human Rights, Ponencia leída en la sesión final del estudio conjunto sobre "Comparative Studies on Governments and Non-dominant Ethnic Groups in Europe", Dubrovnik 1988

- ZAJMI, Gazmend: "Some Theoretical Aspects of Relations between the International Law and Constitutional Law in their Treatment of National Minorities" en Ethnic Groups Studies, Slovenska Akademja Znanosti in Umetnosti, Ljubljana 1988

2) LOS ESTADOS Y SUS LENGUAS:a) Bibliografía:

- BEGUIN, Pierre: Histoire de la Suisse, Ed. Payot, Lausanne 1974.
- BOURDON, Albert-Alan: Histoire du Portugal, PUF, Paris 1970, 128 págs.
- COLOMINES, Joan: La Llengua Nacional de Catalunya, Col. Temes d'Actualitat nº 5, Generalitat de Catalunya, Barcelona 1992, 223 págs.
- COMA, Manuel: La Perestroika, Ed. Historia 16, Cuadernos del Mundo Actual nº 89, Madrid 1995, 31 págs.
- DAVIES, Janet: The Welsh Language, University of Wales Press, Cardiff 1993,
- DE LA GUÉRIVIÈRE, Jean: Belgique, la revanche des langues, Editions du Seuil, Paris 1994, 193 págs.
- DEUTSCH, Karl W.: Las naciones en crisis, Ed. Fondo de Cultura Económica, México 1981,

- DROZ, Jacques: Histoire de l'Autriche, PUF, Paris 1969 , 126 pág.

- FAVEREAU, Francis: Bretagne contemporaine. Langue, culture, identité, Morlaix, Editions Skol Vreizh, 1993, 223 pág.

- GROUPEMENT POUR LES DROITS DES MINORITÉS (ED.): Nouvelle Europe: Minorités et Réfugiées. Actes de colloque. Les minorités de l'Est européen à la lumière des récents changements de régimes et leur impact sur l'immigration en Europe, Les Rapports du G.D.M., Condé-sur-Noireau, 1993, 306 pág.

- JEANNIN, Pierre: Histoire des Pays Scandinaves, PUF, Paris 1965, 126 pág.

- LAPIERRE, Jean-William: Le pouvoir politique et les langues, PUF, Paris 1988, 297 pág.

- LAURING, Palle: A History of Denmark, Ed. Host & Son, Copenhagen 1973, 274 pág.

- MCKINNON, Kenneth: Gaelic: A past and future prospect, Published by Saltire Society, Edinburgh 1992

- PETSCHEN, Santiago: Las Minorías Lingüísticas en Europa Occidental: Documentos (1492-1989), Eusko Legebiltzarra-Parlamento Vasco, Vitoria-Gasteiz 1990, 2 Vol. 864 págs.

- PUIG, Lluís Maria de: Les llengües minoritàries d'Europa: estat de la qüestió, Institut d'Estudis Autònoms de la Generalitat de Catalunya, Barcelona 1986, 228 págs.

- ROUGEMONT, Denis de: La Suisse ou l'histoire d'un peuple heureux, Ed. Hachette, 1965 (2ème edition 1974)

- SELLIER, Jean et André: Atlas des Peuples d'Orient (Moyen Orient, Caucase, Asie Centrale), Ed. La Découverte, Paris 1993

- SOLE I SUBIRATS, Josep M.: La repressió franquista a Catalunya 1936-1953, Edicions 62, Barcelona 1985

- STEPHENS, Meic: Linguistic Minorities in Western Europe, Londres 1978

- STRANJ, Pavel: The Submerged Community, an A-Z of the slovenes in Italy, Ed. Slovene Research Institute, Trieste 1991

- VVAA: Federalisme, Regionalisme et Droit des Groupes Ethniques en Europe. Hommage a Guy Heraud, Edité par Theodor Veiter, Ethnos 30, Braumüller, Wien 1989

- VVAA: Les Constitutions Nationales a l'Epreuve de l'Europe, Dir. de Jean Claude Masclet et Didier Maus, Centre de Recherche de Droit Constitutionnel (Université Paris I) - Faculté Jean Monet (Université Paris-Sud), La Documentation Française, Paris 1993, 239 págs.

- WINDISCH, U. y WILLENER, A.: Le Jura incompris: Fédéralisme ou Totalitarisme?, Vevey, Ed. Delta, 1976,

- WITHERS, Charles W.J.: Gaelic in Scotland 1968-81, John Donald Publishers Ltd, Edimburg 1984,

b) Documentos:

- Eurobarómetro de la UE, nº 41 de julio de 1994

- Constitución de la República Alemana de Weimar de 1919

- Ley Fundamental de la RFA de 1949

- Tratado del Estado Austríaco de 1955

- Tratado de Lausana de 1923
- Constitución de la República Federal de Austria
- Constitución de Bélgica de 1980
- Constitución Española de 1978
- Ley Constitucional de la República Francesa nº 92-554 de 25 de junio de 1992. JORF de 26 de junio de 1992, pág. 8406
- Constitución de la República de Irlanda
- Constitución de la República de Irlanda. Modificación de 1937
- Constitución italiana de 1947
- Constitución del Gran Ducado de Luxemburgo de 1868
- Constitución de Noruega de 1988
- Constitución de la Confederación Helvética de 1938
- Reforma de la Constitución federal de la CH de 1978

- Constitución de la URSS de 1977
- Constitución de la Federación Rusa de 1993
- Constitución de Chipre de 1960
- Constitución de Malta de 1964
- Constitución del Cantón de Berna (CH) de 1950
- Constitución del Cantón de Berna de 1978
- Constitución del Canton del Jura (CH) de 1977
- Estatuto de Autonomía de Catalunya de 1979
- Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana de 1982
- Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares de 1983
- Estatuto de Autonomía de Aragón de 1982
- Estatuto de Autonomía de Galicia de 1981
- Ley de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra de 1982

- Estatuto de Autonomía del País Vasco de 1979
- Ley 91-428 de 13 de mayo de 1991 otorgando un Estatuto a la colectividad territorial de Córcega. JORF de 14 de mayo de 1991
- Estatuto Especial de la Región de Trentino-Alto Adigio de 1972
- Estatuto de la Región de Basilicata de 1971
- Estatuto de la Región de Calabria de 1971
- Estatuto de la Región de Molise de 1971
- Estatuto de la Región del Piamonte de 1971
- Estatuto de la Región del Valle de Aosta de 1948
- Estatuto de la Región de Friul-Venecia Julia de 1963
- Circular del Ministerio francés para la Instrucción Pública nº 28-261 de 21 de juny de 1982
- Tratado entre Bélgica y los Países Bajos de 1980, que substituyó el de mayo de 1946 sobre relaciones culturales

- Tratado entre el Reino Unido y la República de Irlanda de 15 de noviembre de 1985
- Tratado de Osimo entre Italia y Yugoslavia firmado el 10 de noviembre de 1975 sobre la región de Trieste
- Informe sobre "Las Minorías Lingüísticas en la CEE: España, Portugal y Grecia", redactado por Miquel Siguán para la Comisión Europea (1986)
- Informe sobre "La Situation des Langues Régionales ou Minoritaires en Europe", redactado por el CAHRL para el Consejo de Europa en 1994. Réf. n° DLA (94.1)
- Informe de Silvio Innocenti con ocasión del debate constitucional italiano de 1946. Publicado en Alle origini della Costituzione italiana de G. D'Alessio, Bolonia 1979
- Informe del secretario general del PCUS, Mikhail Gorbachov, presentado al Congreso de los Diputados Populares en Mayo de 1989. Publicado en el Cuaderno n° 64 de la Fundación Encuentro, marzo 1990

- Plataforma "Hacia un socialismo humanitario y democrático " para el 28º Congreso del PCUS, aprobada por el Comité Central del partido en febrero de 1990. Publicada por el Cuaderno nº 86 de marzo de 1990 de la Fundación Encuentro

- Real Decreto 1049/1979 de 20 de abril (BOE 10 de mayo de 1979) sobre incorporación de la lengua vasca al sistema educativo del País Vasco

- Sentencia del Tribunal Constitucional español 82/1986 de 26 de junio (BOE 4 de julio 1986) sobre la Ley de Normalización del Uso del Euskera de 1982

- Proposición de ley sobre la participación de la Administración del Estado español en la normalización de las lenguas regionales. Doc: BOCG. Serie B, nº 123
- 1 de 29 de septiembre de 1988

- Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Bases del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo. La lengua de los procedimientos. BOE: 28 de diciembre de 1992, nº 311

- Ley de 31 de marzo de 1947/452 que modifica la ley de 14 de julio de 1923/191 sobre la organización de la Universidad de Helsinki
- Ley de 29 de diciembre de 1973 sobre el uso de las lenguas en la Universidad de Turku
- Ley Francesa nº 51-16 de 11 de enero de 1951, desarrollada mediante un decreto de 23 de septiembre de 1985. JORF de 13 de enero de 1951
- Ley Francesa de 5 de marzo de 1982
- Ley Francesa de 7 de enero de 1983
- Ley de los Tribunales de Justicia de Irlanda de 1924
- Ley del Colegio de la Universidad de Galway (Irlanda) de 1929
- Ley de Seguros de Irlanda de 1936
- Ley de los Términos Legales en Irlandés de 1945
- Ley de Transporte de Irlanda de 1950
- Ley (enmienda) de la Ley de Ministros y Secretarios de Irlanda de 1956

- Reglamento del Senado de la República de Irlanda (Eire)
- Ley federal de la CH de 19 de junio de 1981 concediendo subvenciones a la Escuela Cantonal de Lengua Francesa de Berna
- Ley LXXVII de 1993 aprobada por la Asamblea Nacional húngara el 7 de julio de 1993 sobre las minorías lingüísticas
- Ley Federal austríaca de 1959 sobre la enseñanza primaria en Carintia
- Ley Federal austríaca de 1959 sobre uso de las lenguas en los tribunales de Carintia
- Ley 7/1983 de 18 de abril del Parlamento autónomo de Cataluña sobre la normalización de las lenguas catalana y aranesa. DOGC nº 322 de 22 de abril. Rectificada con arreglo a los Diarios Oficiales de 27 de abril y 18 de mayo, números 323 y 329. El Título V está dedicado a la lengua aranesa.
- Ley 3/1986 de 29 de abril del Parlamento autónomo balear sobre normalización lingüística del catalán
- Sentencia del Consejo Constitucional francés de 23 de diciembre de 1977

- Sentencia del Consejo Constitucional francés de 25 de febrero de 1982
- Sentencia del Consejo Constitucional francés de 18 de enero de 1985
- Sentencia del Tribunal Constitucional español 710/94 de 23 de diciembre de 1994. BOE: Separata 19 de 23 de enero de 1995
- Decreto del Gobierno francés nº 85/1006 de 23 de septiembre de 1985. JORF de 25 de septiembre de 1985 nº 11046
- Discurso del presidente de la República Francesa, François Mitterand, en Lorient (Bretaña) el 14 de marzo de 1981
- Diario de Sesiones de la Asamblea Nacional Francesa de 23 de junio de 1992
- Proyecto de ley relativo al empleo de la lengua francesa. Ministerio de la Cultura y de la Francofonía. NOR: MCCX9400007L
- Conclusiones del Consejo Europeo de Corfú (Grecia) celebrado los días 24 y 25 de junio de 1994. Doc: SN 150/94 ES

- BOCG-Senado español. Serie I: Boletín General, nº 119 de 9 de mayo de 1994
- Manifiesto de la Romandía para una Reforma Profunda del Federalismo de 1984
- Carta de Bernard Mertenat y Roland Béguelin en nombre del "Rassemblement Jurassien" al Consejero Federal del Interior de la Confederación Helvética, Flavio Cotti de 26 de junio de 1990, rechazando la propuesta de una reforma del artículo 116 de la Constitución federal
- Rapport de la Commission Consultative du Conseil Fédéral et des Cantons de Berne et du Jura, 31 mars 1993
- Informe de la Comisión para la Juventud, la Educación, la Información y los Deportes del Parlamento Europeo Comisión para la Comisión Europea sobre "La situación de las lenguas minoritarias en la CE", octubre de 1986
- Rapport sur les autonomies, minorités, nationalismes et Unión Européenne a la XXVIIème session plénière de la Conférence Permanente des Pouvoirs Locaux et Régionaux de l'Europe, Strasbourg 17-19 de mars 1992 rédigé par Demszky, G. et Slafkovsky, A. Doc: CPL (27) 4, Partie IIb

- Declaración de Kiel del Gobierno Regional del Schleswig-Holstein sobre la Minoría Danesa de 26 de septiembre de 1949
- Manifiesto frisón proclamado en Upstalboom el 28 de agosto de 1955
- Declaración del Gobierno de la RFA sobre el Estatuto de la Minoría Danesa en Alemania de 29 de marzo de 1955
- Declaración del Gobierno de Dinamarca sobre el estatuto de la Minoría Alemana en Dinamarca de marzo de 1955
- Censo de la población española de 1991 elaborado y publicado por el Instituto Nacional de Estadística
- Convenio de cooperación de noviembre de 1986 entre el gobierno español y el gobierno autónomo de Aragón para la enseñanza de la lengua catalana en las comarcas orientales de Aragón . BOE: 27 de diciembre de 1986
- Decreto 227/1991 de 7 de mayo de la Generalitat de Catalunya sobre promoción exterior de la cultura catalana. BOGC: 6 de noviembre de 1991, nº 1514
- Decreto de homologación de títulos de catalán publicado por el BOGV el 24 de agosto de 1994

- Ley 10/1982 de 24 de noviembre sobre normalización del euskera en el País Vasco. BOPV: nº 160 de 16 de diciembre de 1982
- Proposición de ley sobre la participación de la Administración del Estado en la normalización de las lenguas de las nacionalidades y regiones presentada por el PNV. BOCG-Congreso de los Diputados: 29 de septiembre de 1988. Serie B, nº 123-1
- Resolución del Parlamento autónomo vasco sobre la normalización del uso del euskera en las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma vasca de 1989
- Ley de Normalización Lingüística en la Función Pública Vasca de 1989
- Ley foral 18/1986 de 15 de diciembre del Parlamento de Navarra sobre normalización lingüística del vascuence
- Orden de 10 de septiembre de 1987 del Ministerio de Educación y Cultura sobre la enseñanza del vascuence en los centros docentes de la Comunidad Foral de Navarra. BOE de 12 de septiembre de 1987

- Ley del País Vasco 5/1982 de 20 de mayo de creación del Ente Público "Radio y Televisión Vasca". BOPV de 2 de junio de 1982
- Ley 3/1983 del Parlamento autónomo gallego de 15 de junio de 1983 sobre normalización lingüística del gallego. DOGA nº 84 de 14 de julio de 1983
- Decreto 104/1985 de 17 de octubre del gobierno autónomo asturiano. BOPA de 7 de noviembre de 1985
- The Welsh Language Bill (1993), reproducido en Contact Bulletin, Vol. 10, nº 2, Autumn 1993, págs. 2 y 3
- Propuesta de directiva del Consejo de Europa sobre la lengua aroumana. Doc: 7091 de 30 de mayo de 1994
- Decreto de la Presidencia de la República italiana de 23 de mayo de 1960, nº 671, sobre uso del alemán en la Región del Trentino-Alto Adigio
- Decreto de la Presidencia de la República italiana de 8 de agosto de 1959, nº 688 sobre uso del alemán en la Región de Trentino-Alto Adigio

- Ley 3-1993-1 del Consejo Regional de Cerdeña de 7 de octubre de 1993 sobre tutela y valoración de la cultura y la lengua de Cerdeña
- Sentencia n. 290 de 13 de julio de 1994 de la Corte Costituzionale de la República italiana. Doc: Bolletino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna, Cagliari 25 de julio de 1994, Anno 46º nº 24
- Decreto legislativo para la tutela de las minorías de lengua ladina de la provincia de Trento de 3 de diciembre de 1993
- Ley del Consejo Regional de Cerdeña para la tutela y valoración de la cultura y la lengua de Cerdeña de 7 de octubre de 1993
- Memorándum de Acuerdo y Anexo entre los gobiernos de Italia, Reino Unido, EEUU y Yugoslavia relativo al Territorio Libre de Trieste, firmado en Londres el 5 de octubre de 1954
- Ley italiana nº 73 de 14 de marzo de 1977 para incorporar a la legislación italiana las disposiciones del Tratado de Osimo

- Ley de 24 de febrero de 1984 sobre el régimen de lenguas en el Gran Ducado de Luxemburgo
- Real Decreto de 25 de enero de 1853 del Ministerio de Asuntos Educativos y Eclesiásticos de Noruega dotando económicamente a los profesores de noruego en las provincias con población lapona
- Instrucción de 18 de abril de 1898 sobre el uso del sami en las escuelas primarias laponas de Noruega

c) Artículos y Reportajes

- BILBAO ARRESE / MARIO, J. / LOPEZ VAZQUEZ, Jorge: "El poder de las naciones en la UE" en Política Exterior nº 40, Vol. VIII, Agosto/Septiembre 1994, págs. 79 a 90
- "Compétences linguistiques dans l'UE" en Contact Bulletin, Vol. 12, nº 1, Été 1995, pág. 5
- FISCHER, KARL-RUDOLF: "Deception et colère" en Contact Bulletin, Vol 11, nº 3, Hiver 1994/95, pág. 2
- SCHEUERMANN, Stephan: "El gobierno alemán inicia una ofensiva lingüística en Europa Central y Oriental" en El País de 5 de octubre de 1993, pág. 30

- ROIGE SOLE, Jordi: "Bèlgica, un Estat mutant" en Revista de Catalunya, nº 77, Setembre 1993, pàgs. 51 a 59
- RAMONEDA, Josep: "Bélgica: Algo más que una querella lingüística" en Tele-Expres de 3 de diciembre de 1975
- SENELLE, Robert: "El règim lingüístic a Bèlgica" en Ordenació legal del plurilingüisme als Estats contemporanis, Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya, Barcelona 1983, pág. 40
- VOS, Pierre de: "Babel-gique" en Le Monde Diplomatique-Supplément Belgique, Paris novembre 1983, pág. 26
- SANDIUMENGE, Lali: "Informe sobre Bèlgica" en el diari Avui de Barcelona el 30 de novembre de 1992
- SIGUAN, Miquel: "Bélgica, una tensió que no cesa" en La Vanguardia de 5 de junio de 1995, pág. 26
- Despacho de la Agencia EFE fechado en Bruselas el 24 de octubre de 1994

- ALEN, André: "La Bélgica federal después de la reforma del Estado de 1993" en Informe Pi i Sunyer sobre Comunidades Autónomas 1992, Ed. Fundació Carles Pi i Sunyer d'Estudis Autonòmics i Locals, Barcelona 1993, pág. 456 a 484
- SIGUAN, Miquel: "A vueltas con una encuesta (y 2)" en La Vanguardia de 25 de marzo de 1994
- MODEEN, Tore: "Inter and Trans State Relations - The Aland Islands", Ponencia presentada para el estudio conjunto Governments and Non-dominant Ethnic Groups in Europe, Patrocinado por la Fundación Europea de la Ciencia, Dubrovnik, abril 1988
- OJANEN, Ursula: El bilingüismo en Finlandia, Conferencia pronunciada en El Ateneo de La Coruña el 25 de abril de 1982. Texto mecanografiado
- MORA, Cecilia: "Triunfo de los social-demócratas en las elecciones generales en Finlandia"; en La Vanguardia de 20 de marzo de 1995, pág. 3
- GIORDAN, Henri: "The Language of the Republic is French" en Contact Bulletin, Vol. 9, nº 2, Autumn 1992, pág. 4

- "Extraits du debat sur l'amemdemement de l'article 2 de la Constitution" en Mercator, n° 4, Desembre 1992, pág. 3 y 4

- OLIVESI, Claude / PASTOREL, Jean-Paul: "Revision constitutionnelle. Langue française et Union Européenne" en Revista de Llengua i Dret, n° 19, Juliol 1993, pág. 47 a 66

- CABALLERO, Oscar: "El Parlamento aprueba la polémica ley Toubon de defensa de la lengua francesa" en La Vanguardia de 3 de julio de 1994, pág. 51

- MAURICE, Jacques: "Breu història de les mesures legislatives lingüístiques al Regne Unit" en Revista de Llengua i Dret, n° 14, Barcelona juliol 1990, pág. 236

- TSITSELIKIS, Constantin: "Les langues des minorités et leur estatut juridique en Grèce", en Revista de Llengua i Dret, n° 23, juliol 1995, pág. 101 a 128

- Ó RIAGÁIN, Dónall: "La situation des langues régionales ou minoritaires en Europe" en Contact Bulletin, Vol. 12, n° 1, Été 1995, pág. 11

- O'CUIV, Brian: Irish Dialects in Irish Speaking Districts , DIAS, 1951, pág.31 y ss.

- CARROZZA, Paolo: "La situatione attuale in Italia" en Revista de Llengua i Dret, nº 12, Barcelona juliol 1989, pág. 113 a 134

- PIZZORUSO, Alessandro: "Minories i grups ètnics i lingüístics a Itàlia. Perspectives de tutela" en Ordenació Legal del plurilingüisme als Estats contemporanis, Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya, Barcelona 1983, pág. 13 y ss

- "Projecte de llei de Tutela de les Minories Lingüístiques d'Itàlia" en Mercator nº 1, març 1992, pág. 2 a 5

- Despacho de la Agencia EFE fechado en Roma el 24 de noviembre de 1991

- SALVI, Sergio: Entrevista realizada por Aureli Argemí en Europa de les Nacions, nº 22, Estiu 1994, pág. 8 y 9

- MEMMO, Daniela: "Problemi lingüistici e rapporti di Diritto Privato: Prospettive di Soluzione nell'Ordinamento giurídico italiano" en Revista de Llengua i Dret, nº 14, Barcelona, juliol 1990, pág. 239 a 253

- Despacho de la Agencia EFE fechado en Roma el 13 de agosto de 1994

- SIGUAN, Miquel: "El ejemplo de Luxemburgo" en La Vanguardia de 6 de junio de 1995, pág. 29

- LEPRÊTRE, Marc: "Xipre, l'últim mur de la vergonya" en Europa de les Nacions, nº 17, primavera 1993, págs. 18 a 20

- PETSCHEN, Santiago: "La identidad del Jura y la realización evolutiva de sus aspiraciones nacionales" en Ernaeoa nº 11, abril 1994, pág. 51

- VILA PUJOL, Rosa: "Un paradigma de convivencia lingüística" en Historia y Vida, número especial dedicado a "Suiza. 700 años de libertad", Extra nº 62, Barcelona 1991

- SIGUAN, Miquel: "Suiza, una antigua convivencia" en La Vanguardia, 4 de junio de 1995, pág. 32

- Artículo "Germanic Languages" en la Encyclopaedia Britannica, 1979, Vol. 8, págs. 25 y 26

- Varios Autores: "Evolució de l'antiga URSS" en deIDOB nº 48-49, Estiu 1994, págs. 4 a 39

- Despachos de la Agencia France Presse de 19 y 20 de enero de 1989

- Conferencia de Anatoli Anikiev en el coloquio "El desmoronamiento de la URSS y los nacionalismos emergentes", organizado por la Fundación Encuentro en Madrid en marzo de 1992
- Conferencia de Juan Ricardo Yerganian en el coloquio sobre "El desmoronamiento de la URSS y los nacionalismos emergentes", organizado por la Fundación Encuentro en Madrid en marzo de 1992
- VALDES, Félix: "La Constitución, clave del futuro de Rusia" en Política Exterior, nº 40, Vol. 8, Agosto-Septiembre 1994,
- GONZALEZ, Santi: "Una Constitució a mida del vell "aparatchik"" en Avui de 7 de noviembre de 1993, pág. 4
- RUMIANTSEV, Oleg: "Reforma constitucional en la Federación Rusa" en Política Exterior nº 33, monográfico 1993, págs. 85 a 95
- MORVAY, Károli / FALUBA, Kálmán: "Hongaresos a la Conca dels Cárpats" en Europa de les Nacions, nº 17, Primavera 1993, págs. 15 a 17

- SHÖPFLIN, George: ~~Hungary and its Neighbours~~, Paris, Chaillot Paper 7, Institut for Security Studies, Western European Union, Mayo 1993

- PETSCHEN, Santiago: "Les Minories Nationals, matèria preferent de la política hongaresa" en Revista de Catalunya, nº 78, octubre de 1993 pág. 76

- PALAU, Josep: "La transición más difícil" en Revista Española de Defensa, nº 77/78, de julio/Agosto 1994, pág. 67

- DUMITRESCU, Rodica: "El Parlamento cierra filas contra las pretensiones de la minoría magiar", crónica de la Agencia EFE de 14 de febrero de 1995

- VALLVÉ, Joan: "Llengües i nacionalismes d'Estat" en Avui de 11 de julio de 1995

- Despacho de la Agencia EFE fechado en Bratislava el 8 de septiembre de 1995

- PETSCHEN, Santiago: "Entre la política y el derecho: la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias" en Revista de Estudios Políticos nº 66, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid 1989, pág. 136-137

- SIGUAN, Miquel: Conferencia dentro del ciclo "¿Europa, una sociedad multicultural?", organizada en Madrid por la Cátedra Joan Maragall de la Fundación Ortega y Gasset y la Fundación "la Caixa" el 10 de mayo de 1994

- BAÑERES, Jordi: "El bilingüismo en Europa" en Repercusiones de la entrada en la CEE. Perspectivas desde Euskadi, Bilbao 1986, págs. 228-229

- BUREAU EUROPEEN POUR LES LANGUES MOINS REPANDUES: Unité dans la diversité, Dublín 1994, pág. 2

- ALASTAIR, G.H. Walkers: The Dialects of Modern German - A Linguistic Survey, Editado por Carles V. J. Rius, Stanford University Press, Stanford (California)

- FARGUES, Alfred: "L'ús administratiu del danès a la zona fronterera germano-danesa" en Llengua i Administració, Escola d'Administració Pública de la Generalitat de Catalunya, Barcelona 1994, págs. 295-309

- OSCHLIES, Wolf: "Les langues de nostre Communauté: Allemagne" en Contact Bulletin, Vol. 8, nº 2 & 3, Automne 1991, pág. 4

- ZIESCH, Bernard: "The Sorbs, a slavic minority in Germany" en Contact Bulletin, Vol. 7, nº 3, Winter 1990-91, pág. 6

- "Les membres du Parlement Européen contre la menace de destruction de territoires de peuplement sorabe en Basse-Lusace", en ~~Contact-Bulletin~~, Vol. 12, nº 1, Été 1995, págs. 8 y 9

- WISTI, Folmer: "Decentralisation and Regional Autonomy in the Nordic Countries" en ~~Federalisme, Regionalisme et Droits des Groupes Ethniques en Europe. Hommage a Guy Héraud~~, Edité para Theodor Veiter, Ethnos 30, Braumüller, Wien 1989, págs. 485-487

- UTH, Manfred: "Denmark, The German Minority" en Contact Bulletin, Vol. 8, nº 2 & 3, Autumn 1991, pág. 10

- Encuestas sobre la lengua catalana elaboradas por la Universidad de Barcelona y la Universidad Autónoma de Barcelona y publicadas por La Vanguardia de 31 de octubre de 1993, pág. 29

- Datos sobre enseñanza universitaria en Cataluña confeccionados por el Servei d'Ensenyament del Català y publicados por el diario Avui de 24 de octubre de 1993, pág. 17

- PALLAROL, Juli: "Situació a la Franja de Llengua Catalana d'Aragó" en ~~Dret Lingüístic: Actes del Simposi de Dret Lingüístic~~, Escola d'Administració Pública de Catalunya, Generalitat de Catalunya, Col·lecció Materials nº 11, Barcelona 1989

- YAGÜEZ, Laura: "Reportajes en castellano y catalán en la cadena ARTE" en La Vanguardia-Revista de la Comunicación, 1 de septiembre de 1994, pág. 11

- TOLIVAR ALAS, Leopoldo: "Normalización lingüística y Estatuto asturiano" en Revista de Llengua i Dret, nº 12, Barcelona julio 1989, págs. 171-186

- Entrevista a Siv Vesterbacka de Lluís Bonada en Avui de 18 de noviembre de 1989, pág. 14

- PASTOR, Carles: "Finlandia: El respeto al bilingüismo" en El País de 22 de noviembre de 1993, pág. 20

- MODEEN, Tore: "Situació jurídica de la població sueca de Finlàndia" en Revista de Llengua i Dret nº 9, juny 1987, págs. 99 a 115

- CAMINO SANCHEZ, María: "Nuevo estilo, pero dentro de un orden", crónica de la Agencia EFE de 7 de febrero de 1994

- WISTI, Folmer: "Descentralisation and Regional Autonomy in the Nordic Countries" en Federalisme, Regionalisme et Droit des Groupes Ethniques en Europe. Hommage a Guy Héraud, Ethnos 30, Braumüller, Wien 1989, págs. 489-490

- Despacho de la Agencia France Presse fechado en Bayona el 23 de julio de 1994

- QUINTA, Alfons: "Quan el rival de l'euskera és el francès" en Avui de 15 de octubre de 1994, págs 11 a 13

- Entrevista de Inmaculada Fàbregas a J. P. Couteller en Europa de les Nacions, nº 22, estiu 1994, págs. 11 a 13

- "Le gallo et Bertaeyn Galeizz" en Contact Bulletin, Vol 11, nº 3, Hiver 1994/95, pág. 4

- BONNOT, Olivier: "Du bilinguisme à la co-officialité: réflexion autour de l'article 53 alinéa 2 du statut de la collectivité territoriale de Corse" en Revista de Llengua i Dret, nº 19, juliol 1993, págs. 67 a 79

- QUINTA, Alfons: "Alsàcia, entre França i Alemanya" en Avui de 17 de abril de 1995

- KREMELITZ, Georg: "La situació de l'occità dins l'Estat francès" en Llengua i Administració, Escola d'Administració Pública de la Generalitat de Catalunya, Barcelona 1984, págs. 279-294

- STRUBELL I TRUETA, Miquel: "Iniciatives per reforçar l'estatus legal del gal·lès" en Revista de Llengua i Dret, nº 16, Barcelona desembre 1991, págs. 231-235

- COROMINAS, María: "Sianel Pedwar Cymru: A Welsh TV Channel by Popular Decision" en Europa de les Nacions, nº 6, Novembre-Desembre 1988, págs. 44-45

- Ó HIFERMÁIN, Tadgh: "Illa de Man: Dependència i independència" en Europa de les Nacions, nº 19, págs. 10-12

- ERSOY, Ahmet: "Ethnic Turks in Thrace" en The Economist de 20 de Abril de 1991

- OLIVARES, Alfons: "Macedònia, encreuament de camins", en Europa de les Nacions, nº 12, 1991-92, pág. 14

- PARTAL, Vicent: "Grècia, contra tot i contra tothom" en El Temps, 19 de julio de 1993, págs. 34 a 36

- PIZZORUSSO, Alessandro: "Il regime giuridico delle lingue in Italia" en Dret Lingüístic, Col.lecció Materials nº 11, Barcelona 1989, págs. 215 a 231

- GRUNING, Hans Georg: "Langues et glottopolitiques en Tyrol du Sud" en Revista de Llengua i Dret, nº 19, juliol 1993, págs. 95 a 104

- "Reconnaissance de la communauté walser" en Contact Bulletin, Vol. 11, nº 2, Été 1994, pág. 7

- BOSCH, Andreu: "El català de l'Alguer davant del nou marc legal" en Avui de 25 de agosto de 1994, pág. 15

- PEZZOLI, Jean: "Droit linguistique et éducation bilingue au Val d'Aoste" en Revista de Llengua i Dret nº 9, Junio 1987, págs. 79 a 98

- Van DER GOOT, Auke: "Language Policy in Friesland" en Contact Bulletin, Vol. 9, nº 2, Autumn 1992, pág. 3

- RAMON, Oriol / ARGEMI, Aureli: "Qüestions nacionals i de minories en la Unió Europea ampliada" en Europa de les Nacions n° 21, Primavera 1994, págs. 21 y 22
- VENTURA, Jordi: "Els saami, poble europeu del Cercle Polar Artic" en Revista de Catalunya n° 81, Gener 1994, págs. 47 a 68
- N. Z.: "El romanx va desapareixent de Suïssa" en El Temps de 11 enero de 1993, n° 447
- Cuadro de las principales minorías étnicas y lingüísticas de Europa Central y Oriental en Dossier CIDOB n° 39, Febrero 1992, pág. 21
- KENDE, Pierre: "Comment gérer le problème des minorités en Europe Centrale et Orientale?" en Notes et Etudes Documentaires, n° 4964-65, 1992, págs. 13 a 20
- GELLNER, Ernest: "Nationalism and Politics in Eastern Europe" en New Left Review, n° 133, 1991, págs. 127 a 134
- PARTAL, Vicent: "Els abkhazos conquesten la seua capital" en EL Temps, n° 486, 11 de octubre de 1993

- BARRIOS, Pablo: "El Pacto de Estabilidad en Europa" en Política Exterior, nº 40, Vol. VIII, Agosto/Septiembre 1994, págs. 21 a 30

- BALLADUR, Edouard / KOHL, Helmut: "Preparar la paz" en El País de 27 de mayo de 1994, pág. 13

- CEMBRERO, Ignacio: "50 países firman hoy en París el Pacto de Estabilidad para la Europa del Este" en El País de 20 de marzo de 1995, pág. 2

- Despacho de la Agencia EFE de 7 de junio de 1994

- KOZIREV, Andrei: "En busca de una estrategia conjunta" en Política Exterior, Vol. VIII, nº 39, julio 1994, pág. 43

- Despacho de la Agencia France Presse de 19 de julio de 1994

- FERNANDEZ, Rodrigo: "Bielorrusia vota en referéndum una mayor integración con Moscú" en El País, 15 de mayo de 1995, pág. 8

- Despacho de la Agencia EFE fechado en Minsk el 15 de mayo de 1995

- "Eastern Europe's Diaspora" en The Economist, December 26th 1992 / January 8th 1993, págs. 39-42

- "Los Pueblos del Este en Europa (I)", Servicio de Documentos de la Ed. Fundación Encuentro, Cuaderno nº 108, Febrero 1991

- VALLEJO, Pedro: "Kazajstán, un gran país surge en el mapa", Política Exterior, Vol. VIII, nº 39, julio 1994, pág. 124

- GANIN, Lev: "El Gobierno de Crimea desafía a Ucrania al aprobar la Constitución independentista de 1992", en El Mundo de 21 de mayo de 1994, pág. 18

- POCH, Rafael: "Ucrania aprovecha la guerra de Chechenia como cobertura para someter Crimea" en La Vanguardia de 19 de marzo de 1995, pág. 6

- ARGEMI, Aureli: "Tàtars, ucraïnesos i russos pugnen per Crimea" en Europa de les Nacions nº 21, Primavera 1994, págs. 12 a 15

- MAURAI, Jacques: "Les lois linguistiques soviétiques de 1989 et 1990" en Revista de Lengua i Dret nº 15, juny 1991, págs. 75 a 90

- Despacho de la Agencia EFE de 25 de mayo de 1984

- KERN, Rudolf: "Linguistic Minorities in Eastern Europe" en Contact Bulletin, Vol. 9, nº 1, Spring 1992, pág. 3
- Despacho de la Agencia EFE de 1 de junio de 1994
- TILIC, Dogan: Crónica de la Agencia EFE fechada en Esmirna el 20 de octubre de 1994
- GARCIA, Jesús: "Rusia teme la preponderancia de Turquía en las república ex-soviéticas" en ABC de 22 de Octubre de 1994, pág. 38

3) LAS INSTITUCIONES EUROPEAS, LAS LENGUAS DE ESTADO Y LAS LENGUAS MINORITARIAS

a) Bibliografía

- DE BALGH, Arthur: La protection internationale des minorités, Paris 1990, pág. 161
- FOURASTIÉ, Jean: L'Organisation Departementale et Communale. L'Epreuve du XXème Siècle, Paris 1976
- GRASS, Solange et Christian: La Revolte des Régions d'Europe Occidentales de 1916 à nos Jours, PUF, Paris 1982, pág. 16
- OFICINA DE INFORMACION DIPLOMATICA DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES DE ESPAÑA: Manual de la OTAN, Madrid 1989, 99 págs.
- PARKER, R.A.C.: El siglo XX. Europa 1918-1945, Ed. Siglo XXI, Madrid 1978, pág. 22
- PETSCHEN, Santiago: Las Minorías Lingüísticas en Europa Occidental: Documentos (1492-1989), Eusko Legebitzarra-Parlamento Vasco, Vitoria-Gasteiz 1990, Vol.I, págs. 155-165

- PETSCHEN, Santiago: La Europa de las Regiones, Generalitat de Catalunya, Institut d'Estudis Autònoms, Barcelona, 1992, 332 págs.
- RENOUVIN, Pierre: Historia de las Relaciones Internacionales, Ed. Aguilar, Madrid 1964, Vol. III, pág. 821

b) Documentos

- Informe de la Comisión Europea sobre los Criterios y las Condiciones para la Adhesión de nuevos Estados Miembros a la Comunidad. Doc: Boletín de la Agencia "Europe" de 3 de julio de 1992
- Disposición sobre la Libre Utilización de la Lengua Diplomática del Tratado de Viena de 9 de junio de 1815
- Reglamento nº 1 por el que se fija el Régimen Lingüístico de la CEE (1958). Doc: 385/58 DO 17 de 6 de octubre de 1958
- Norma Reglamentaria del Consejo de la CEEA para la aplicación del artículo 190 del Tratado de Roma. Doc: 401/58, DO 17 de 6 de octubre de 1958

- Acta Relativa a las Condiciones de Adhesión de Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido
- Acta Relativa a las Condiciones de Adhesión de la República Helénica
- Acta Relativa a las Condiciones de Adhesión de España y Portugal
- Tratado de la Unión Europea de 1993
- Nota Informativa del Servicio Jurídico del Parlamento Europeo para la Comisión de Peticiones. Datos acerca del Régimen Jurídico-Lingüístico en el Ordenamiento Jurídico Comunitario (a propósito de la petición nº 113/88). Luxemburgo, 13 de junio de 1989. Doc: PE 140.254/Def./An. V.
- Reglamento del Parlamento Europeo
- Asunto Stauder de 12 de noviembre de 1969, asunto Mecke de 16 de octubre de 1980 o asunto Comisión de los CER contra el Reino Unido de 28 de marzo de 1985
- Resolución sobre la Democracia, la Transparencia y la Subsidiariedad y el Acuerdo Interinstitucional sobre los Procedimientos para la Aplicación del Principio

de Subsidiariedad sobre el Estatuto del Defensor del Pueblo y las Condiciones Generales del Ejercicio de sus Funciones, y sobre las Modalidades de Funcionamiento del Comité de Conciliación previsto en el Artículo 189 b) de 17 de noviembre de 1993. Doc: DOCE nº C 329 de 6 de diciembre de 1993

- Propuesta de la Comisión Europea por la que se crea un Centro de Traducción en Luxemburgo. Doc: A4-178-95 del PE
- Reglamento del Centro de Traducción de Luxemburgo. Doc: PE 184.974/95
- Intervención de la ponente Diemut R. Theato en el PE en defensa del Centro de Traducción de Luxemburgo. Doc: DOC-ES/RR/259/259.402 y PE 210.243/Def. ES de 4 de noviembre de 1994, pág. 12
- Respuesta parlamentaria del gobierno español a una pregunta por escrito del diputado Gabriel Elorriaga (Grupo Popular) sobre la preparación del personal que formará parte del Estado Mayor del Cuerpo de Ejército Europeo. BOCG- Congreso: Serie D nº 179 de 3 de enero de 1995
- Los 14 Puntos del Presidente Wilson (1918)

- Informe de la Comisión de Expertos de la Sociedad de Naciones sobre la situación en las Islas Aland, presentado al Consejo el 16 de abril de 1921. Doc: 26/28/106.B7
- Debate del Informe de la Sexta Comisión de la Protección a las Minorías en la Tercera Sesión Plenaria de la Asamblea de la Sociedad de Naciones celebrada el 21 de septiembre de 1922. Diario de Sesiones págs. 170 a 186 y Anexo II del Volumen II
- Instrucciones del Rector de la Academia de Estrasburgo de enero de 1920 sobre la Enseñanza de las Lenguas en Alsacia
- Tratado de Saint Germain de 10 de septiembre de 1919
- Tratado de Neuilly de 27 de noviembre de 1919
- Tratado de Brno de 7 de junio de 1920
- Tratado de Sèvres de 10 de agosto de 1920
- Tratado del Estado Austríaco de 15 de mayo de 1955
- Constitución de Finlandia de 1919
- Ley de la Lengua de 1922 de la República de Irlanda

- Constitución de la República alemana de Weimar (1919)
- Constitución de Irlanda de 1922
- Ley Garda Síochána de 1924 de Irlanda
- Ley de los Tribunales de Justicia de 1924 de Irlanda
- Ley de Expertos Legales de 1929 de Irlanda
- Ley del Colegio de la Universidad de Galway de 1919 de Irlanda
- Ley de Seguros de 1936 de Irlanda
- Constitución de la República de Irlanda de 1937
- Ley Belga Concerniente al Empleo de las Lenguas en Materia Administrativa de 1921
- Ley Belga Relativa al Empleo de las Lenguas en Materia Administrativa de 1932
- Ley Belga Concerniente al Régimen Lingüístico de la enseñanza Primaria y Media de 1932
- Constitución de Austria de 1 de octubre de 1920

- Constitución italiana de 1947
- Constitución de la II República Española de 1931
- Estatuto de Autonomía de Cataluña de 1932
- Estatuto de Autonomía de Galicia de 1936
- Estatuto de Autonomía del País Vasco de 1936
- Constitución de la Confederación Helvética de 1938
- Proclama de 1918 en favor del danés en el Schleswig del Norte
- Proclama en defensa del alemán atacado en el Schleswig del Norte traspasado a Dinamarca al término de la I Guerra Mundial
- Tratado entre Italia y Alemania para la Repatriación de Ciudadanos Alemanes del Alto Adigio a Alemania (1939)
- Edicto del alcalde de Tarragona, E. Múgica, de 20 de abril de 1939, mandando la substitución de los rótulos en catalán por otros en castellano

- Circular del General Jefe de los Servicios de Ocupación de Barcelona de 21 de junio de 1939
- Circular del Gobernador Civil de la Provincia de Barcelona sobre la Imposición de la Lengua Castellana de 4 de Septiembre de 1939
- Declaración Universal de los Derechos Humanos de 12 de diciembre de 1948
- Estatuto Especial del Trentino-Alto Adigio. Ley Constitucional de 26 de febrero de 1948
- Estatuto del Valle de Aosta. Ley Constitucional de 10 de marzo de 1948
- Estatuto de Friul-Venecia Julia aprobado por ley Constitucional de 31 de enero de 1963
- Acuerdo De Gasperi-Gruber entre Italia y Austria de 5 de septiembre de 1946
- Declaración de Kiel del Gobierno Regional del Schleswig-Holstein sobre la Posición a Tomar con respecto a la Minoría Danesa, de 26 de septiembre de 1955

- Declaración del Gobierno de la RFA sobre el Estatuto de la Minoría Danesa en Alemania, de 29 de marzo de 1955
- Declaración del Gobierno de Dinamarca sobre el Estatuto de la Minoría Alemana en Dinamarca, de 29 de marzo de 1955
- Memorándum de Acuerdo entre los Gobiernos de Italia, Reino Unido, EEUU y Yugoslavia Relativo al Territorio Libre de Trieste, firmado en Londres el 5 de octubre de 1954.
- Tratado de Osimo de 1975. GURI: 21 de marzo de 1977, nº 77
- Ley Fundamental de Bonn de 23 de mayo de 1964
- Estatuto de Autonomía de las Islas Feroe. Ley Danesa nº 137 de 23 de marzo de 1948
- Ley de Autonomía de las Islas Aland de 1951
- Constitución del Gran Ducado de Luxemburgo de 1948
- Constitución de la República de Malta de 1964
- Encíclica "Pacem in Terris" del Papa Juan XXIII de 11 de abril de 1963

- Mensaje de Su Santidad Juan Pablo II con motivo de la Jornada Mundial de la Paz de 1 de enero de 1989

- Declaración de la ONU sobre el Fomento entre la Juventud de los Ideales de Paz, Respeto Mutuo y Comprensión entre los Pueblos, aprobada por la Asamblea General el 7 de diciembre de 1965

- Convención de la UNESCO Relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza (1960)

- Declaración de los Principios de la Cooperación Cultural Internacional, proclamada por la UNESCO el 4 de noviembre de 1966

- Declaración de la UNESCO sobre la Educación para la Comprensión, la Cooperación y la Paz Internacionales y la Educación Relativa a los Derechos Humanos y a las Libertades Fundamentales, aprobada el 19 de noviembre de 1974

- Declaración sobre los Principios Fundamentales Relativos a la Contribución de los Medios de Comunicación de Masas al Fortalecimiento de la Paz y la Compresión Internacional, a la Promoción de los Derechos del Hombre y a la Lucha contra el Racismo, el Apartheid y la Iniciación a la Guerra, aprobada por la 20ª Conferencia General de la UNESCO el 22 de noviembre de 1978
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966
- Declaración Proclamada en Teherán sobre Derechos Humanos de 13 de mayo de 1968
- Convención Europea de 1950 para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales
- Proyecto de 1961 de Protocolo Adicional nº 4 a la Convención Europea
- Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 23 de julio de 1968 sobre ciertos aspectos del régimen lingüístico de la enseñanza en Bélgica
- Declaración de Burdeos de 25 de marzo de 1987 sobre los problemas de la regionalización, nº 30

- Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Roma de 14/15 de diciembre de 1990. Doc: 2.33.1 "90" Roma-2, SN 424/1/90
- Debate en el Senado español sobre regionalización. Doc: Diario de Sesiones de las Cortes Generales-Senado, IV Legislatura, nº 62, de 10 de abril de 1991, págs. 3430 a 3442
- Respuesta parlamentaria del gobierno español al senador Rafael Román Guerrero sobre la posición defendida por el gobierno español en la Cumbre de Viena. BOCG-Senado; V Legislatura, Serie I, Boletín General, pág. 54
- Proposición de Resolución del PE sobre la Defensa y la Protección de las Lenguas y Culturas Regionales de la Comunidad. Doc: B2-0076/85, nº 5 (3
- Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias
- Resolución Arfé del PE de 16 de octubre de 1981, nº 1 (c
- Carta Comunitaria de la Regionalización

- Declaración Final de la III Conferencia Europea de Regiones Fronterizas, celebrada en Borken (RFA) en septiembre de 1984, n° 47
- Acta Unica Europea de 1986
- Acta de Creación del Consejo Consultivo de los Poderes Regionales y Locales de Europa. Doc: Decisión 88/487/CEE de 24 de junio de 1988
- Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Roma de 14/15 de diciembre de 1990. Doc: 2.33.1 "90" Roma-2, SN 424/1/90
- Déclaration finale du Symposium du Groupe de Travail IV de l'ARE, Girona (Espagne), 23-24 d'avril 1992 en Contact Bulletin, Vol. 9, n° 2, Automne 1992, págs. 5 y 6
- Informe del Comité de las Regiones sobre el Programa "Sócrates". Doc: COM (93)708 final
- Informe del Comité de las Regiones sobre el Programa "Kaleidoscope 2000". Doc: COM(94) 356, CdR 145/95
- Informe del Comité de las Regiones sobre el Programa "Ariane". Doc: COM(94) 356, CdR 146/95

- Debate en el Senado español sobre el uso de las lenguas co-oficiales en la Cámara. Diario de Sesiones de las Cortes Generales-Senado, V Legislatura, nº 19, de 11 de enero 1994, págs. 889 a 918
- Debate en el Senado español sobre uso de las lenguas co-oficiales en la Administración central. Diario de Sesiones de las Cortes Generales-Senado, V legislatura, nº 23, de 23 de febrero de 1994, págs. 1092 a 1096
- Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Birmingham de 16 de octubre de 1992. Doc: 2.33.1 "92" Birmingham. SN 343/1/92
- Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Dublín-I de 28 de abril de 1990. Doc: 2.33.1 "90" Dublín-I, SN 46/3/90
- Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Dublín-II de 28 de abril de 1990. Doc: 2.33.1 "90" Dublín-2. SN 60/1/90
- Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Roma-1 de 27/28 de octubre de 1990. Doc: 2.33.1 "90" Roma-1, SN 304/2/90

- Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Luxemburgo, 28/29 de junio 1991. Doc: 2.33.1 "91" Lux. SN 151/2/91
- Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Maastricht (PB) de 9/10 de diciembre de 1991. Doc: 2.33.1 "91" Maastricht, SN 271/1/91
- Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo celebrado en Essen (RFA) los días 9 y 10 de diciembre de 1994. Doc: 2.33.1 "94" Essen, SN 300/94 ES, pág. 21
- Conclusiones del Consejo Europeo de Lisboa de 26/27 de junio de 1992. Doc: 2.33.1 "92" Lisboa, SN 3321/1/92
- Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Birmingham, 16 de octubre de 1992. Doc: 2.33.1 "92" Birmingham, SN 343/1/92
- Declaración final de la Conferencia de Copenhague sobre la Dimensión Humana de la CSCE de 1990
- Proposición de Resolución del PE sobre el Reconocimiento de los Derechos de las Minorías y la Revalorización de su Cultura. Doc: B2-321/85, nº 4

c) Artículos y Reportajes

- RADIGALES, Montserrat: "El francés pierde su monopolio" en El Periódico de 29 de de enero de 1995, pág. 18

- TUGORES QUES, Juan: "La construcción europea: de Roma a Maastricht" en Afers Internacionals nº 25, Barcelona 1993, pág. 66

- CHAMORRO, Santiago: "La reforma de Maastricht" en Política Exterior, nº 43, Vol IX, febrero-marzo de 1995, págs. 191-196

- BAUER-BERNET, Hélène: "La production de textes juridiques en diverses langues officielles par les institutions des Communautés Européennes" en Revista de Llengua i Dret, nº 13, Barcelona, desembre 1989, págs. 15 a 28

- COISSON, Fabrizzio: "¿Estrasburgo o Babel?" en Panorama, Roma 19 de febrero de 1995. Traducido y reproducido en El País de 21 de febrero de 1995, pág. 12

- "El rompecabezas europeo de lenguas" en The Independent de 4 de junio de 1991. Traducido y reproducido en El País de 6 de junio de 1991, pág. 12

- "Ciencia y salud. Los últimos avances en reconocimiento del habla y traducción simultánea" en Diario 16 de 16 de enero de 1994, pág. IX

- GOUDSBLOM, Johan: "El cristal de una sola cara" en El País de 9 de junio de 1990, pág. 13

- CELAYA, Carlos: "Sopa de letras" en El País de 31 de enero de 1993

- RADIGALES, Montserrat: "El conflicto lingüístico llega a Bruselas" en El Periódico de 29 de enero de 1995, pág. 18

- LAU, Peter: "EUROTRA. The machine translation project of the European Economic Communities" en Revista de Llengua i Dret, nº 9, juny 1987, págs. 9 a 20

- BADIA I CARDUS, Antoni: "Els treballs del Projecte EUROTRA a l'Estat espanyol" en Revista de Llengua i Dret, nº 13, Barcelona, desembre 1989, págs. 15 a 28

- AMBROJO, Joan Carles: "Màquines de traduir" en Avui-Diumenge de 16 de enero de 1994, pág. 18

- CERDA, Ramon / JULIO, Teresa: "EUROTRA: Projecte comunitari de traducció automàtica" en El Món n° 285 de 8 de octubre de 1987, págs. 41-43

- RUBIO, Andrés F.: "La CE advierte que las lenguas que no se adapten a la "ingeniería lingüística" se hundirán" en El País de 28 de octubre de 1993, pág. 31

- GONZALEZ, Miguel: "España decide incorporarse al Euroejército" en El País de 11 de noviembre de 1993, pág. 15

- GONZALEZ, Miguel: "España ha renunciado a que el Euroejército hable español, pero exige el uso del inglés" en El País de 31 de enero de 1994, pág. 16

- YRIUD, Alphonse: "La germanisation des noms en Alsace entre 1940 et 1944" en Revue d'Alsace n° 113, Strasbourg 1987, págs. 239-261

- PIZZORUSSO, Alessandro: "Minorities i grups ètnics i lingüístics a Itàlia. Perspectives de tutela" en Ordenació Legal del Plurilingüisme als Estats Contemporanis, Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya, Barcelona 1983, págs. 22-23

- FENET, Alain: "Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et la question irlandaise" en Federalisme, Régionalisme et Droit des Groupes Ethniques en Europe. Hommage a Guy Heraud, Edité par Théodor Veiter, Ethnos 30, Braumüller, Wien 1989, pág. 128

- Despacho de la Agencia EFE fechado en Roma el 19 de julio de 1994

- LOCATELLI, Rinaldo: "La Conférence Permanente des Pouvoirs Locaux et Régionaux de l'Europe et les Régions" en Federalisme, Régionalisme et Droit des Groupes Ethniques en Europe. Hommage a Guy Héraud, Edité par Théodor Veiter, Ethnos 30, Braumüller, Wien 1989, págs. 222 y 226

- PETSCHEN, Santiago: "El euskera en el marco de la acción internacional en favor de las lenguas minoritarias en Europa Occidental". Lección de ingreso en la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, Madrid 17 de abril de 1989. texto mecanografiado

- CHITI-Batelli, Andrea: "Regionalism and Federalism in Europe: A "Biunivocal" Connection" en Federalisme, Régionalisme et Droit des Groupes Ethniques en Europe. Hommage a Guy Héraud, Edité par Theodor Veiter, Ethnos 30, Braumüller, Wien 1989, págs. 49 y 50

- FOKKELMAN, Mónica: Crónica desde Viena en "ABC" de 10 de octubre de 1993

- VALLVÉ I RIBERA, Joan: "La Asamblea de las Regiones de Europa" en La Vanguardia de 3 de noviembre de 1988

- DE WITTE, Bruno: "Las Regiones y las Comunidades Europeas durante 1992" en Informe Pi i Sunyer sobre Comunidades Autónomas 1992, Ed. Fundació Carles Pi i Sunyer d'Estudis Autonòmics i Locals, Barcelona 1993, págs. 421 a 433

- GONZALEZ, Enric: "La Conferencia sobre la Estabilidad estudia en París como prevenir conflictos entre los candidatos a la UE" en El País de 27 de mayo de 1994, pág. 3

- RAMON, Oriol: "Mercator: Dret i legislació lingüístics" en Revista de Llengua i Dret, nº 18, desembre 1992, págs. 223 a 226

- Ó RIAGÁIN, Dónall: "The European Bureau for Lesser Used Languages - Its Role in Creating a Europe, United in Diversity" en Federalisme, Régionalisme et Droit des Groupes Ethniques en Europe. Hommage à Guy Héraud, Edité para Theodor Veiter, Ethnos 30, Braumüller, Wien 1989, págs. 511 a 517

- LE BUREAU EUROPEEN POUR LES LANGUES MOINS REPANDUES: "Unité dans la diversité", Dublin 1994, pág. 5

- PETSCHEN, Santiago: "La cuestión de las minorías en la Conferencia de Seguridad y en otros Foros Europeos" en Tiempo de Paz, número especial "El Mediterráneo a debate", 1990, pág. 108

4) LA DOCTRINA LINGÜÍSTICA DE LAS INSTITUCIONES EUROPEAS

a) Bibliografía

- CONSEIL DE L'EUROPE: Guide du Conseil de l'Europe, Direction de la Presse et de l'Information, págs. 18-19 y 36-37
- TRUYOL, Antonio: Los Derechos Humanos, Ed. Tecnos, Madrid 1984, 200 págs.
- VVAA: El Estado del Mundo, Ediciones Akal, Edición 1995, Madrid 1994, 611 págs.
- MILIAN I MASANA, Antoni: Drets lingüístics i dret fonamental a l'educació, Institut d'Estudis Autònoms de la Generalitat de Catalunya, Barcelona 1992, 406 págs.

2) Documentos

- Recomendación 285 adoptada por la 13ª Sesión Ordinaria de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa el 28 de abril de 1961

- Recomendación 814 adoptada por la 29ª Sesión Ordinaria de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa el 5 de octubre de 1977. Doc: 4018

- Directiva 364 aprobada por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa el 8 de julio de 1977. Doc: 3997

- "Vers une Charte Européenne des Langues Regionales et Minoritaires en Europe", Direction de la Presse et de l'Information du Conseil de l'Europe, 22 mai 1984. Doc: B (84) 28

- "Pourquoi plusieurs langues pour l'Europe? Un Colloque à Tours y répond...", Direction de la Presse et de l'Information du Conseil de l'Europe, 4 març 1986. Doc: B (86) 10

- "Esquisse du Projet de Charte Europeenne des Langues Regionales et Minoritaires", Comission des Affaires Culturelles et Sociales de la Conférence Permanente des Pouvoirs Locaux et Régionaux de l'Europe, Strasbourg, 6 novembre 1986. Doc: CPL/Cult/GT/LRM (20) 5 rév. 2

- Rapport présenté par Jean-Marie Woehrling au Carrefour V Culture et langues régionales minoritaires dans la Conférence Culture et Régions: Action Culturelle et Espace Régional du Conseil de la Coopération Culturelle de la CPPLRE du Conseil de l'Europe, Florence 14/16 de mai 1987. Doc: CPL/CCC (87) 5
- "Déclaration de Florence", Direction de la Presse et de l'information du Conseil de l'Europe, Strasbourg 26 mai 1987. Doc: B (87) 18.
- Recomendación sobre los medios de comunicación europeos, aprobada por la 39ª Sesión de la Asamblea Parlamentaria del C. de E. de 8 de octubre de 1987. Doc: 5.782
- Projet de Rapport sur l'Enjeu Culturel des mass media en Europe, Rapporteur Doris Morf, Commission de Culture et de l'Education de l'Assemblée Parlementaire du Conseil de l'Europe, Strasbourg, 31 août 1987. Doc: AS/Cult (39) 3 rév. FAC39.3R
- Primer Proyecto de CELRM presentada a la CPPLRE. Doc: CPL (22) 4

- Interventions des membres de la CPPLRE lors de la 2e Séance de la XXIIe Session Plénière de la Conférence sur les Langues Regionales ou Minoritaires en Europe. Rapport de M. Kohn. Strasbourg, 22 octobre 1987. Doc: CPL/Cult (22) 16
- Rapport sur les Langues Regionales ou Minoritaires en Europe. Projet de Resolution. Rapporteur Herbert Kohn (RFA). CPPLRE, Strasbourg, 18 janvier 1988. Doc: CPL (23) 8 prov.
- 23ème Session de la Conférence Permanente des Pouvoirs Locaux et Régionaux du Conseil de l'Europe, Service de l'Information du Conseil de l'Europe, Strasbourg 29 Février 1988. Doc: B (88) 8.
- Proyecto de Resolución presentado por la Comisión de Asuntos Culturales y Sociales de la CPPLRE. Ponente H. Kohn. La CELRM figuraba como un anexo. Doc: CPL (23) 8, 1ª Parte
- "Avant-projet de Charte: Responsabilités des collectivités locales et regionales". Commission des Affaires et Sociales de la CPPLRE. Rapporteurs Lluís María de Puig et Modest Prats. Strasbourg, 12 de juin 1985

- Recomendación 1177 de la CPPLRE. Proyecto de Resolución de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos. Ponentes Brincat y Worms. Doc: 6556

- Directiva 474 CPPLRE. Proyecto de Resolución de la Comisión de Cultura y Educación (ponente de Puig) y de la Comisión de Refugiados y Demografía (ponente A. Cucó). Doc: 6562

- Vers une Charte des langues Regionales ou Minoritaires du Conseil de l'Europe, Service de l'Information du Conseil de l'Europe, Strasbourg 12 juin 1989. Doc: I (89) 50

- Firma de la CELRM. MERCATOR nº 4, diciembre 1992, pág. 10

- Firma de la CELRM por España. Diario de Sesiones del Senado de 7 de marzo de 1995, V Legislatura, nº 68, págs. 3542 a 3543

- Texto definitivo de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, con un comentario de Albert Lamarca en Europa de les Nacions, nº 12, Hivern 1991-92, págs. 19 a 25

- "L'Europe retrouve sa vraie dimension culturelle". Conférence des Ministres Européens de la Culture, Service de la Communication du Conseil de l'Europe, 4 de mayo 1990.
Doc: I (90) 33

- Protocolo Adicional a la Convención Europea de Derechos Humanos, aprobado por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en su sesión de 1 de marzo de 1993.
Doc: 6742

- Avis relatif à un protocole additionnel à la Convention Européenne des Droits de l'Homme sur les Droits des Minorités. Rapporteur M. de Puig. Assemblée Parlementaire du Conseil de l'Europe, 1 février 1993.
Doc: 6749

- Comparecencia del ministro español de Asuntos Exteriores, Javier Solana, ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado español. 18 de noviembre 1993. Doc: Diario de Sesiones del Senado. Comisión de Asuntos Exteriores, V Legislatura, Comisiones nº 35, año 1993, págs 4 y 5

- Ratificación por el Congreso de Diputados español del Convenio-Marco para la Protección de las Minorías. Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados de 11 de mayo de 1995. BOCG-Congreso nº 146, pág. 7760

- Proposición de Resolución presentada por John Hume en el PE sobre un Proyecto de Carta para las lenguas y las Culturas minoritarias. Doc: PE 1-436/79
- Proposición de resolución debatida en el pleno del PE el 28 de septiembre de 1979. Doc: PE 1-371/79
- Proposición de Resolución presentada por Joachim Delsass y debatida el 15 de febrero de 1980. Doc: PE 1-790/79
- Resolución John Hume. Doc: PE 410/78
- Résolution sur une Charte Communautaire des Langues et des Cultures Régionales et sur une Charte des Droits des Minorités Ethniques, 16 octobre 1981, n° c, 287/106. Rapporteur Gaetano Arfé. Doc: JOCE: 9 novembre 1981
- Rapport de Gaetano Arfé para la Comisión de 16 de marzo 1981. Doc: PE 1-965/80
- Resolución sobre las Medidas en favor de las Lenguas y las Culturas Minoritarias (11 febrero de 1983). DOCE: 14 marzo 1983. Doc: PE C 68/103
- Proposición de Resolución sobre los Derechos Lingüísticos de Cataluña Norte (1985). Doc: PE 2-1259/84

- Proposición de Resolución sobre la Elaboración de un Derecho Europeo para los Grupos Etnicos (1984). Doc: PE 2-411 84 de 31 de julio 1984
- Proposición de Resolución sobre la Defensa y la Protección de las Lenguas y las Culturas Regionales en la CE (1985). Doc: PE B2-0076/85
- Proposición de Resolución sobre el Reconocimiento de los Derechos de las Minorías y la Revalorización de su Cultura (1985). Doc: PE B2-321-85
- Proposición de Resolución sobre el Hecho de que la Comisión no Haya Actuado según una Resolución sobre una Carta Comunitaria de Lenguas y Culturas Regionales y una Carta de los Derechos de las Minorías Etnicas de 20 de marzo 1986. Doc: PE B2-1514/85
- Proposición de Resolución sobre el Reconocimiento de las Radios Libres (1986). Doc: PE B2-1532/85
- Proposición de Resolución sobre el deseo del Ministro de Bienestar, Salud Pública y Cultura de los Países Bajos de suprimir la Ayuda Concedida al "Algemeen Verbond" (Alianza General Holandesa) y las Consecuencias Nefastas de esta Medida para la Cooperación Cultural Transfronteriza (5 de febrero 1987). Doc: PE B2-890/86

- Proposición de Resolución sobre una Televisión Frisona en Frisia (26 de julio de 1986). Doc: PE B2-1015/86

- Proposición de Resolución sobre la Creación de Institutos de Estudios Lingüísticos para las Lenguas de Poca Difusión (15 de febrero de 1987). Doc: PE B2-1015/86

- Proposición de Resolución del PE sobre los Obstáculos para la Utilización del Catalán en la Universidad y en la Televisión Valencianas (26 de julio de 1987). Doc: B2-1323/86

- Proposición de Resolución sobre la Ayuda a los Institutos y Asociaciones de Estudios Lingüísticos para la Defensa de las Lenguas de Poca Difusión (26 de junio de 1987). Doc: B2-1436/86

- Proposición de Resolución sobre el Carácter Injusto de las Medidas Disciplinarias Tomadas por el Poder Central Francés contra un Funcionario, Mr. Leonetti, por Haber Utilizado Denominaciones Corsas para Nombrar a Personas y Lugares (23 de septiembre de 1989). Doc: B2-853/86

- Proposición de Resolución del PE sobre un Derecho Europeo de los Grupos Etnicos y el Ejercicio de los Derechos Democráticos Fundamentales (17 agosto de 1987). Doc: B2-794/87
- Proposición de Resolución del PE sobre la Integración de las Escuelas Bilingües Franco-Vascas Gestionadas por la Asociación Seaska (26 de junio de 1987). Doc: B2-149/87
- Proposición de Resolución del PE sobre la Promoción de las Lenguas Minoritarias de la CEE (26 de junio de 1987). Doc: B2-291/87
- Documento de trabajo del diputado Kuijpers fechado el 2 de octubre de 1986. Doc: PE 105.139/déf.
- Documento de trabajo de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos Cívicos. Ponente Stauffenberg. Doc: A 2-150/87 de 28 de septiembre de 1987. DOCE: 318 de 30 de noviembre de 1987, pág. 160
- Reglamento nº 1 de la CE. DOCE: L 17 de 6 de octubre de 1958, pág.385
- Acta de Adhesión a la CE de Dinamarca, Gran Bretaña e Irlanda. DOCE: L nº 73 de 23 de marzo de 1972

- Proposición de Resolución sobre los Obstáculos al Uso del Catalán en la Universidad y la TV Estatal Españolas (1985). Ponente X. Rubert de Ventós. Doc: B2-1323/85
- Proposición de Resolución sobre Uso del Catalán en Determinados Ambitos de las Instituciones Europeas. Ponentes J.A. Durán y C. Gasòliba (1987). Doc: B2-217/87
- Proposición de Resolución del PE sobre Uso del Catalán, Euskera y Gallego en la Difusión de los Documentos de Base de la CE (1987). Ponente A. Gutiérrez. Doc: B2-1387/87
- Petición del Parlamento Autónomo de Cataluña para el Uso del Catalán en las Instituciones de la CE (1988). Doc: Petición 113/88
- Petición del Parlamento Autónomo Balear al PE para el Uso del Catalán en las Instituciones de la CE (1989). Doc: Petición 161/89
- Informe elaborado por la Comisión de Peticiones sobre la Situación de las Lenguas en las Comunidades Europeas y la de la Lengua Catalana, 27 de junio de 1990. Ponente Sra. Reding. Doc: A3-169/90

- Debate en el pleno del PE sobre Uso de la Lengua Catalana.
Diario Oficial de Sesiones de 10 y 11 de diciembre de 1990
- Discurso del diputado-ponente Mark Killilea ante el PE en
Defensa de su Informe, 9 de febrero de 1994
- Proposición de Resolución del diputado Elliott sobre Uso de
las Lenguas Minoritarias, 12 de febrero de 1990. Doc:
B3-0016/90
- Proposición de Resolución sobre Promoción y Uso de las
Lenguas Minoritarias, 25 de enero de 1991. Ponente J.
Gangoiti. Doc: B3-2113/90
- Proposición de Resolución del PE sobre Uso de la Lengua Vasca
en los Medios de Comunicación Navarros, 13 de junio
de 1991. Ponente J. M. Bandrés. Doc: B3-0523/91
- Proposición de Resolución del PE sobre la Firma de la Carta
Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, 17
de diciembre de 1992. Ponente Van Hemeldonk. Doc: B3-
1351/92
- Resolución del PE sobre Nuevas Perspectivas de la Acción
Cultural Comunitaria, 21 de enero de 1993. Doc: DOCE,
42 de 15 de febrero de 1993, págs. 153-173

- Informe Killilea. Doc: A3-0042/94
- Anexo I al Informe Killilea. Doc: ES/RR/244/244469 PE 201.963/def.
- Documento Final de la Reunión de Madrid de la CSCE, 1983
- Documento Final de la Conferencia sobre la Dimensión Humana de la CSCE, Copenhague 29 de junio de 1990
- Documento Final de la Conferencia de Viena de la CSCE, 1989
- Documento Final del Simposio de Cracovia sobre Patrimonio Cultural de los Estados Participantes en la CSCE de 7 de junio de 1991
- Documento Final de la Reunión de Expertos de la CSCE sobre Minorías Nacionales, Ginebra 19 de julio de 1991
- Documento Final de la Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno de la CSCE celebrada en Helsinki en 1992
- Moción del Senado español instando al gobierno central a reconocer y promover las lenguas minoritarias co-oficiales. Doc: Diario de Sesiones del Senado de 8 de marzo de 1995, nº 69, págs. 3614 a 3619

- Resolución del PE sobre las Lenguas y Culturas de las Minorías Nacionales y Étnicas de la CE, aprobada el 30 de noviembre de 1987, nº 21
- Informe del Comité de las Regiones "La Réforme Institutionnelle", Bruxelles 1995, 43 págs.
- Informe de la Comisión Europea "Informe de la Comisión para el Grupo de Reflexión", Ed. Oficina de Publicaciones Oficiales de las CCEE, Luxemburgo 1995, pág. 40
- Debate en el pleno del PE sobre el Informe Reding para el uso de la lengua catalana. Doc: Diario de Sesiones del PE del 10 de diciembre de 1990, pág. 12 del texto francés

c) Artículos y Reportajes

- SOLE, Alfons: "El Consell d'Europa critica el bilingüisme com a solució" en Avui de 19 d'octubre de 1980
- SANMARTI, Josep M.: "Europa reconeix els drets de les seves minories culturals" en Canigó de 12 de juliol de 1980, nº 666, pág. 26
- BONADA, Lluís: "Informe del Consell d'Europa a favor de les llengües en minoria" en Avui de 15 de juliol de 1981

- PUIG, Lluís M^a de: "Parlar català a Europa" en Avui de 7 de juny de 1984
- LLERCA, S. J.: "El Consell d'Europa escolta el primer discurs en català" en Avui 17 de maig de 1984
- GOMEZ, Isabel: "El Consejo de Europa estudia medidas para proteger las lenguas minoritarias" La Vanguardia de 15 de abril de 1986, pág. 19
- LUNA, Joaquín: "El Consejo de Europa elaborará un documento para proteger las lenguas de naciones sin Estado", La Vanguardia de 4 de enero de 1985
- PUIG, Lluís M^a de: "Les llengües d'Europa" en El Món, n^o 181, de 11 d'octubre de 1985, pág. 33
- BOSCH, Jordi: "Cap a una carta europea sobre llengües regionals" en Avui 13 de febrer de 1986
- PUIG, Lluís M^a de: "Presentación de la Carta de las Lenguas Regionales o Minoritarias". Conferencia pronunciada en San Sebastián-Donostia en noviembre 1988. Texto mecanografiado

- MERCADER, Jordi: "El Consejo de Europa prepara una Carta sobre los derechos de las lenguas minoritarias" en El País de 3 de marzo de 1986
- PUIG, Lluís M^a de: "Informe provisional sobre la preparació d'un projecte de Carta Europea de les Llengües Regionals i Minoritaries" en Revista de Llengua i Dret, n^o 8, desembre 1986, pág. 79 a 92
- "La Carta Europea de las Lenguas Minoritarias podría desaparecer". Nota de la Agencia EFE de 26 de marzo de 1990
- ARIAS, Juan: "Una Carta Europea defenderá las lenguas minoritarias" en El País de 28 de noviembre de 1991
- ZAMORA, Jordi: "El Consejo de Europa establece los derechos de las minorías nacionales" en La Vanguardia de 2 de febrero de 1993
- FOKKELMAN, Mónica: "El Consejo de Europa deberá regular los derechos de las minorías" en ABC de 10 de octubre de 1993
- CEMBRERO, Ignacio: "La cumbre del Consejo de Europa concluye con un tibio acuerdo sobre las minorías" en El País de 10 de octubre de 1993

- ARGEMI, Aureli: "Europa en recerca dels drets de les minories. O dels pobles?" en ~~Europa de les Nacions~~ n° 20, Hivern 1993-94, pág. 15

- Despacho de la Agencia EFE fechado en Estrasburgo el 10 de noviembre de 1994

- CEMBRERO, Ignacio: "El Parlamento Europeo aprueba una resolución de apoyo a las lenguas minoritarias" en El País de 31 de octubre de 1987, pág. 21

- "El Parlament Europeu debat el suport a les llengües minoritàries" en Avui 30 d'octubre de 1987

- GASÒLIBA, Carles: "El Parlament Europeu i els drets lingüístics". Intervención ante el grupo de Trabajo IV de la ARE. Girona 23/25 d'abril de 1992

- MONTSERRAT, Antoni: "L'aplicació de la Resolució del Parlament Europeu sobre la llengua catalana a les institucions europees" en ~~Revista de Llengua i Dret~~ n° 18, desembre 1992, págs. 67 a 94

- "Le Parlement Européen réaffirme son soutien pour nos langues" en Contact Bulletin Vol. 11, n° 1, Printemps 1994, pag. 2

- FUENTES, Jorge: "El Congreso de Viena de 1989" en Política Exterior Vol.III, nº 9, Invierno 1989, pág. 139 a 157
- LOPEZ DE LATORRE, Salvador: "De Helsinki a París" en Política Exterior Vol. IV, nº 18, 1990, pág. 70
- Despacho de la Agencia "France Presse" de 6 de julio de 1991
- FISCHER, Dietrich: "La guerra por la paz" en El Observador de 2 de marzo de 1993, pág. 18
- "Una CSCE insólita" en El País de 15 de septiembre de 1991
- Despachos de las agencias "Reuter" y EFE de 4 de octubre de 1991
- SKUBISZEWSKI, Krzysztof: "Europa Central y la Unión Europea" en Política Exterior, Vol VIII, nº 39, julio 1994, pág. 20
- VAN DER STOEL, Max: "Prevenir conflictos y construir la paz: un reto para la CSCE" en Revista de la OTAN, agosto 1994, nº 4, pág. 7

- PETSCHEN, Santiago: "Entre la política y el derecho: la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias". Centro de Estudios Constitucionales, Madrid 1989, pág. 133
- SUBIRA, Joan: "Brusel.les accepta en català les queixes dels consumidors europeus" en Avui de 28 de febrero de 1995, pág. 31
- Despacho de la Agencia EFE fechado en Atenas el 29 de diciembre de 1994
- Despacho de la Agencia EFE fechado en Copenhague el 30 de diciembre de 1994

5) ANALISIS DE LA DOCTRINA EUROPEA SOBRE LAS LENGUASa) Bibliografía

- LAPIERRE, Jean-William: Le pouvoir politique et les langues, PUF, Paris 1988, 297 págs.
- MINC, Alain: La Grande Illusion, Ed. Grasset, Paris 1989- -
- SVORONOS, Nicolas: Histoire de la Grèce Moderne, Presses Universitaires de France, Paris 1972, 126 págs.
- CAPOTORTI, F.: Etude des droits des personnes appartenant aux minorités ethniques, religieuses et linguistiques, NNUU, New York, 1979
- ROUGEMONT, Denis de: La Suisse ou l'histoire d'un peuple heureux, Ed. Hachette, Paris 1974, págs. 141-142
- MORGENTHAU, Hans J.: La lucha por el poder y la paz, Ed. Sudamericana, Buenos Aires 1963, pág. 139
- GILES, H.: Language, Ethnicity and Intergroup Relations, Dir. por ---, Academic Press, London/New York 1977

- OREJA, Marcelino: Europa, ¿para qué?, Ed. Plaza y Janés, Barcelona 1987, pág. 205
- MIRA, Joan Francesc: Crítica de la raó pura, València 1984, pág. 17
- BAETENS BEARDSMORE, Hugo: Principis bàsics del bilingüisme, Ed. La Magrana, Barcelona 1989
- ECO, Humberto: La búsqueda de la lengua perfecta, Ed. Crítica, Col. "La Construcción de Europa", Barcelona 1994, págs. 288-293

b) Documentos

- COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES: Document: Les Minorités Lingüistiques dans les Pays de la Communauté Européenne, Office des Publications Officielles des Communautés Européennes, Luxembourg 1986
- Proposición de Resolución del PE sobre la Creación de Institutos de Estudios Lingüísticos para las Minorías Lingüísticas. Doc: B2-1015/86

- Resolución del PE sobre las Lenguas y Culturas de las Minorías Regionales y Etnicas de la CE aprobada el 30 de noviembre de 1987, nº 21
- Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias
- Proposición de Resolución del PE sobre la Elaboración de un Derecho Europeo para los Grupos Etnicos de 31 de julio de 1984
- Documento de Trabajo del PE para una Discusión sobre una Carta Comunitaria de los Grupos Etnicos de 12 de mayo de 1987
- Discurso de Gregorio Salvador en el acto de clausura del X Congreso de Asociaciones de Academias de la Lengua Española, Madrid 29 de abril 1994
- Discurso del presidente de la RFA, Roman Herzog, pronunciado ante el PE el 10 de octubre de 1995. Doc: PE 194.527/ES
- Manifiesto de Bastia o Declaración Final del "Congres International sur le Bilingüisme" celebrado en Bastia entre el 12 y el 15 de abril de 1984, convocado por el Cunsigliu di a Cultura, di l'Educazione e di l'Ambiente de Córcega

- COMMISSION EUROPEENNE: Eurobaromètre: Les xifres clés de l'éducation dans l'Union Européenne, Bruxelles 1994
- Respuesta parlamentaria del gobierno español al senador Francisco Gil-Ortega Rincón con fecha 24 de febrero de 1995. Doc: BOCG-Senado, V Legislatura, Serie I, nº 242, pág. 19
- Decisión del Consejo de la CE sobre la creación del Programa Lingua de 28 de julio de 1989. Doc: DOCE L 239 de 16 de agosto de 1989, pág. 24
- Documento de Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo celebrado en Essen (RFA) los días 9/10 de diciembre de 1994. Doc: SN 300/94 ES, Anexo IV, pág. 22
- PARLAMENTO EUROPEO: "La importancia de Sócrates debe extenderse a su financiación" en Guía de Sesiones, Pleno del 24 al 28 de octubre de 1994. Doc: PE 184.650 y 184.659 ES
- PARLAMENTO EUROPEO: Ecos de la Sesión de marzo de 1995, Doc: PE 188.032/ES pág. 31
- Nota oficial del Ministerio de Educación y Ciencia español de 5 de diciembre de 1994 sobre el Programa Sócrates

- Dotación económica del Programa Sócrates. Doc: A4-36/95
- Declaración final de 18ª Sesión de la Conferencia Permanente de Ministros de Educación del Consejo de Europa, estructurada en 4 resoluciones. Doc: Communiqué de Presse de la Direction de la Communication du Conseil de l'Europe. Madrid 24 de marzo de 1994, págs. 13, 14, 16, 18 y 21
- c) Artículos y Reportajes
 - SALVI, Sergi: Entrevista de Aureli Argemí en Europa de les Nacions, nº 22, Estiu 1994, pág. 8
 - HOBBSAWN, Eric J.: "Etnicitat i nacionalisme a l'Europa actual" en L'Avenc, nº 158, abril 1992, pág. 16
 - HELLER, Agnes: "Pluriculturalismo" en El País de 6 de febrero de 1993, pág. 14
 - HROCH, Miroslav: "Els nacionalismes de les nacions minoritzades", Entrevista de Jordi Bañeres i Marc Leprêtre en Ateneum nº 3, octubre de 1992, págs. 22 y 23

- ECO, Umberto: "Umberto Eco prevé una Europa políglota y hecha de confederaciones étnicas". Entrevista de Peru Egurbide en El País de 19 de diciembre de 1991, pág. 31

- HROCH, Miroslav: Citado por E. J. Hobsbawn en Op. cit., pág. 20

- PROUDHON, P.J.: Citado por J.-W. Lapierre en Op. cit., pág. 41

- BADIA I MARGARIT, Antoni M: "Por favor, un poco de seriedad" en El País de 11 de octubre de 1195, pág. 13

- PETSCHEN, Santiago: "Las lenguas minoritarias" en El País-Temas de Nuestra Epoca de 17 de marzo de 1988, pág. 8

- HIERRO S. PESCADOR, José: "La lengua como herramienta" en El País-Temas de Nuestra Epoca, de 17 de marzo de 1988, pág. 3

- ZVEREFF, John: "Los peligros de la pureza" en La Semana en La Vanguardia de 6 de marzo de 1994, pág. 2

- EYAL, Jonathan: "El problema étnico" en The European, de 30 de abril de 1992. Reproducido en El País el 1 de mayo de 1992, pág. 12

- PETSCHEN, Santiago: "La región como ámbito de identificación" en Afers Internacionals n° 22, Barcelona 1991, pág. 91

- LAPIERRE, J-W / PRUJINER, A.: "Les Conflits Ethnolinguistiques: Un Cadre d'Analyse Socio-Politique" en Cahiers Internationaux de Sociologie, Vol. LXXIX, 1985

- MOSTERIN, Jesús: "La normalización lingüística" en El País de 10 de junio de 1992, pág. 14

- GREGORIO, Salvador: "Contra el romanticismo lingüístico" en El País-Temas de Nuestra Epoca, de 27 de octubre de 1988, pág. 8

- ARGENTE, J.A.: "Un debate político" en El País-Temas de Nuestra Epoca de 27 de octubre de 1988, pág. 8

- FLORES D'ARCAIS, Paolo: "La Europa de los ciudadanos" en El País-Temas de Nuestra Epoca de 2 de octubre de 1992

- ROUGEMONT, Denis de: "La région n'est pas un mini-Etat-nation" en L'Europe des Régions II, Genève 1970, pág. 3

- RAMPINO, Antonella: "¿Qué lengua usaremos?" en Il Europeo de Milán de 2 de mayo de 1992. Publicado en El País de 4 de mayo de 1992, pág. 12

- DI PIETRO, Robert: Entrevista de Alex Rodríguez en El País de 3 de junio de 1991, pág. 30

- SWEENEY, Cathy: "My language is rich; your language is not rich" en El Temps n° 411 de 4 de mayo de 1992, pág. 32-33

- Editorial del diario The European de 20 de febrero de 1992

- CHITI-BATTELLI, Andrea: "Regionalism and Federalism in Europe: A "biunivocal" Connection" en Federalisme, Regionalisme et Droit des Groupes Ethniques en Europe. Hommage a Guy Héraud, Ed. Ethnos 30, Braumüller, Wien 1989, pág. 52-53

- TARSCHYS, Daniel: "Consejo de Europa. Hacia un amplio espacio de seguridad democrática" en Revista de la OTAN, n° 6, diciembre de 1994/1, enero de 1995, pág. 11

- FANCELLI, Agustí: "El lingüista De Mauro cree que Europa debe prepararse par una nueva realidad lingüística" en El País de 9 de febrero de 1989
- WEBER, Raimon: "Europa multicultural, sistemas de valores y normas éticas", Conferencia ante el Congreso del Secretariado Internacional de Profesores Católicos de agosto de 1990, en Revista de Educadores n° 160
- SIGUAN, Miquel: "Educar la lengua y el oído" en El País-Temas de Nuestra Epoca de 27 de octubre de 1988, pág. 6
- ARTIGAL, J.M.: Entrevista de Carles Pastor en El País-Educación de 7 de diciembre de 1993, pág. 8
- SERRAMONA, Jaume: "Bilingüisme i fracàs escolar" en Avui de 25 de agosto de 1987
- LLOPART, Salvador: "Siguán diu que el bilingüisme no afecta la psicologia dels nens" en Avui de 8 de diciembre de 1987, pág. 25
- LAUREN, Christer: Entrevista de Carles Pastor en El País-Educación de 18 de diciembre de 1990, pág. 8
- PASTOR, Carles: Informe sobre el bilingüismo en El País-Educación de 18 de diciembre de 1990

- DIAZ, César: "Cuanto antes mejor" en El País-Educación de 21 de enero de 1992, págs. 1 y 4

- MOLL, Aina: Entrevista de Andreu Manresa en El País-Educación de 30 de abril de 1991, pág. 8

- COLOMER, Josep M^a: "La utilitat del bilingüisme" en L'Avenç nº 144 de enero de 1991, págs. 26 a 34

- BAETENS, Hugo: "La diversidad europea" en El País-Temas de Nuestra Epoca de 27 de octubre de 1988, pág. 6

- PAYRATO, Lluís: "Sabor a mezcla" en El País-Temas de Nuestra Epoca de 27 de octubre de 1988, pág. 3

- MOSTERIN, Jesús: "El sueño de una lengua universal" en El País-Babelia de 6 de noviembre de 1993, pág. 8

- "Cómo hablará Europa. ¿Proliferación cultural o servidumbre?" en Le Monde Diplomatique en Español nº 28 de mayo/junio 1989, pág. 20

- CHITI-BATTELLI, Andrea: "Le problème des langues dans l'Europe unie", Texto fotocopiado sin referencia al original

- REGUANT, Salvador: "Esclavos de Elite" en El País de 22 de septiembre de 1993, pág. 1
- TULLIO DE MAURO: "Un paseo por Babel" en El País-Babelia de 25 de septiembre de 1993, pág. 8
- Despacho de la Agencia "Europa Press" de 30 de diciembre de 1994
- Despacho de la Agencia EFE fechado en Madrid el 7 de marzo de 1995
- ECO, Umberto: Entrevista de Peru Egurbide en El País de 19 de diciembre de 1991, pág, 31
- Despacho de la Agencia Servimedia de 10 de mayo de 1993
- Despacho de la Agencia "Europa Press" de 22 de marzo de 1994
- RODRIGUEZ, Alex: "Dos lenguas extranjeras" en El País-Educación de 7 de febrero de 1989, pág. 3
- RODRIGUEZ, Alex: "La Europa de las lenguas vivas" en El País-Educación de 14 de marzo de 1989, pág. 1
- SIMON SCHUHMAHER, Lioba: "El lento viaje de Erasmus" en El País-Educación de 10 de septiembre de 1991, pág. 2

- Despacho de la Agencia "Europa Press" fechado en Madrid el 4 de julio de 1995
- GONZALEZ, Pedro: Euronews: Una televisión pública para Europa, Ed. Icaria- Antrazyt, 1995, 167 págs.
- ABAD, Ignasi: "Euronews, camí de pioners" en El Temps nº 481 de 6 de septiembre de 1993, págs. 39-41
- FROMENTIN, Bernard: "T. V.: O Capital privado, o muerte" en El Mundo de 21 de octubre de 1994, Suplemento de Comunicación, pág. 3

INDICE

INTRODUCCION	6
------------------------	---

CAPITULO I: LA CREACION DE UNA UNION EUROPEA PLURILINGUE

POR UNOS ESTADOS TENDENTES AL MONOLINGUISMO .	29
1.1: Objetivos y estructura del capítulo	30
1.2: Las lenguas de Estado oficiales	32
1.3: Las lenguas de Estado dentro de la UE	34
1.3.1: Alemania	35
1.3.2: Austria	37
1.3.3: Bélgica	41
1.3.3.1: Un Estado a la medida de su conflicto lingüístico	44
1.3.3.2: La organización de la enseñanza en Bélgica	65
1.3.4: Dinamarca	69
1.3.5: España	70
1.3.6: Finlandia	73
1.3.7: Francia	75
1.3.8: Gran Bretaña	84
1.3.9: Grecia	85
1.3.10: Irlanda	89
1.3.11: Italia	93
1.3.12: Luxemburgo	98
1.3.13: Países Bajos	100
1.3.14: Portugal	101
1.3.15: Suecia	102

1.4: Chipre y Malta, próximos países a ingresar en la UE	103
1.4.1: La lengua en la Constitución de Chipre	104
1.4.2: La lengua en la Constitución de Malta	106
1.5: Noruega	107
1.6: Suiza	108
1.6.1: El peso de las lenguas en el Estado suizo	109
1.6.2: El conflicto lingüístico en el Jura	115
1.7: La evolución lingüística en la Europa Central y Oriental	117
1.7.1: Un nuevo mapa lingüístico	118
1.7.2: La ordenación lingüística en la Constitución soviética de 1977	121
1.7.3: Las reformas de Mikhail Gorbachov	123
1.7.4: Rusia: Las lenguas en la Constitución de 1993	129
1.7.5: Hungría y sus minorías en los Estados vecinos	133
NOTAS FINALES	143

CAPITULO II: LOS ESTADOS EUROPEOS Y SUS MINORIAS

LINGUISTICAS	153
2.1: Objetivos y estructura del capítulo	154
2.2: Los Estados y sus minorías lingüísticas. Grupos	156
2.3: Alemania	160
2.3.1: Frisona	161
2.3.2: Danesa	162
2.3.3: Soraba o eslava	165
2.4: Austria	168
2.4.1: Eslovena	168

2.4.2: Croata	170
2.4.3: Húngara	170
2.5: Bélgica	171
2.5.1: Alemana	171
2.6: Dinamarca	173
2.6.1: Feroesa	174
2.6.2: Groenlandesa	174
2.6.3: Alemana	175
2.7: España	180
2.7.1: Catalana	180
2.7.2: Euskera	190
2.7.3: Gallega	195
2.7.4: Bable	198
2.7.5: Aranese	199
2.7.6: Otras lenguas reconocidas	200
2.8: Finlandia	200
2.8.1: Sueca	200
2.8.2: Sami	203
2.9: Francia	205
2.9.1: Vasca	205
2.9.2: Bretona	208
2.9.3: Catalana	211
2.9.4: Corsa	212
2.9.5: Alsaciana	216
2.9.6: Occitana	218
2.9.7: Flamenca	221
2.10: Gran Bretaña	222

2.10.1: Escocesa	223
2.10.2: Galesa	226
2.10.3: Córnica	232
2.10.4: Gaélica	232
2.11: Grecia	234
2.11.1: Turca	235
2.11.2: Pomaka	237
2.11.3: Macedonia	238
2.11.4: Aroumana	239
2.11.5: Arbanita	240
2.12: Irlanda	240
2.12.1: Gaélica o Irlandesa	241
2.13: Italia	245
2.13.1: Albanesa	247
2.13.2: Alemana	249
2.13.3: Otras minorías alemanas	252
2.13.3.1: Cimbria	252
2.13.3.2: Mochena	252
2.13.3.3: Walser	253
2.13.3.4: Carintia	254
2.13.4: Catalana	255
2.13.5: Croata	256
2.13.6: Francesa	257
2.13.7: Franco-provenzal	259
2.13.8: Ladina	262
2.13.9: Friulana	265
2.13.10: Occitana	266

2.13.11: Sarda	268
2.13.12: Griega	270
2.13.13: Eslovena	272
2.14: Luxemburgo	277
2.14.1: Luxemburguesa	277
2.15: Países Bajos	278
2.15.1: Frisona	278
2.16: Portugal	281
2.16.1: Mirandesa	281
2.17: Suecia	282
2.17.1: Sami	282
2.17.2: Finlandesa	283
2.18: Otros países europeos de referencia: Noruega y	
Suiza	283
2.18.1: Noruega	284
2.18.2: Suiza	286
2.19: Europa Central y Oriental	288
2.19.1: Principales minorías lingüísticas en	
Europa Central y Oriental	288
2.19.2: Grupos de minorías	293
2.19.3: Las minorías étnicas y lingüísticas como	
detonante de la Europa post-soviética	294
2.19.4: Los nuevos Estados y las antiguas minorías	
étnicas y lingüísticas	298
2.19.5: Las nuevas minorías de lengua rusa	301
2.19.6: Las últimas migraciones han retocado el mapa	
lingüístico	306

2.19.7: El variopinto marco legal	308
2.19.8: La protección de los Estados hacia sus minorías nacionales en los países de adopción .	310
2.19.9: Las presiones externas al nuevo orden lingüístico en la Europa Central y Oriental . .	312
NOTAS FINALES	314

CAPITULO III: EL PRINCIPIO DEL CAMBIO. LA CREACION DE UNA UNION EUROPEA PLURILINGÜE	326
3.1: Objetivos y estructura del Capítulo	327

I PARTE: LAS LENGUAS DE ESTADO EN LAS INSTITUCIONES EUROPEAS	334
3.2: Los antecedentes inmediatos: el régimen lingüístico en la comunidad internacional	334
3.3: Las lenguas de Estado oficiales en la UE	338
3.3.1: El derecho comunitario en materia lingüística .	343
3.3.2: El esfuerzo traductor en la UE	347
3.3.2.1: El Proyecto Eurotra	350
3.4: La extensión del principio multilingüe	352
3.4.1: Un Ejército europeo políglota	353

II PARTE: LA PARTICIPACION DE LAS LENGUAS MINORITARIAS EN LAS INSTITUCIONES EUROPEAS	355
3.5: El segundo circuito	355
3.6: El precedente de la I Guerra Mundial: Los Tratados Internacionales	362

3.7: Los primeros reconocimientos de minorías lingüísticas	371
3.8: La regresión bajo los regímenes fascistas	373
3.9: Los años posteriores a la II Guerra Mundial	375
3.10: El debate sobre las minorías lingüísticas en el proceso constituyente italiano	377
3.11: La recuperación de la técnica de los tratados internacionales	379
3.12: La vía al pluralismo lingüístico a través de los derechos humanos	382
3.12.1: Los derechos lingüísticos en el C. de E.	387
3.12.2: La vía de Helsinki a unos derechos lingüísticos pan-europeos	389
3.13: El desarrollo regional, arma política de las minorías lingüísticas	392
3.13.1: Los progresos regionalistas en la década de 1970	393
3.13.2: La región como marco de soluciones lingüísticas	401
3.13.3: La política regional en la CEE a partir del Acta Unica: una interlocución directa	404
3.13.4: Los instrumentos de las regiones: el ARE	406
3.13.5: El Comité de las Regiones de la UE	409
3.14: El derecho de las minorías dentro del proceso de unión pan-europea	411
3.15: Las minorías lingüísticas obtienen su reconocimiento en toda Europa	413

3.16: El Buró Europeo para las Lenguas Minoritarias . . .	417
3.17: Los derechos lingüísticos en la CSCE	421
NOTAS FINALES	424

CAPITULO IV: LA FORMACION DEL CUERPO DOCTRINAL. LAS

DECLARACIONES EUROPEAS SOBRE LAS

MINORIAS LINGÜISTICAS	437
---------------------------------	-----

4.1: Objetivos y estructura del Capítulo	438
--	-----

4.2: Las declaraciones del C. de E.: los primeros documentos	441
---	-----

4.2.1: De la Recomendación 281 al Informe Cirici . . .	443
--	-----

4.2.2: El Informe Cirici: los primeros pasos	445
--	-----

4.2.2.1: La Recomendación 928	450
---	-----

4.2.2.2: La Conferencia "Vivre le Multilinguisme Européen"	453
---	-----

4.2.3: Los preparativos de la CELRM en la CPPLRE: la Audición de Estrasburgo	454
---	-----

4.2.3.1: Los trabajos de la ponencia	458
--	-----

4.2.3.2: El manifiesto de Tours	470
---	-----

4.2.3.3: Los difíciles trámites de la Carta en la CPPLRE: sus seis principios básicos	472
--	-----

4.2.3.4: Las exigencias a los poderes públicos . . .	475
--	-----

4.2.3.5: La Conferencia de Florencia	477
--	-----

4.2.3.6: Las lenguas en los medios de comunicación .	481
--	-----

4.2.3.7: El rechazo del proyecto de la Carta por la CPPLRE	482
---	-----

4.2.3.8: El nuevo proyecto de la Carta	485
--	-----

4.2.3.9: La aprobación definitiva de la Carta en la CPPLRE	489
4.2.3.10: La Carta en la Asamblea Parlamentaria del C. de E.	489
4.2.3.11: La Recomendación 1177	490
4.2.3.12: La Directiva 474	491
4.2.3.13: La Carta en el Comité de Ministros	492
4.2.3.14: El contenido de la Carta del Comité de Ministros	494
4.2.3.15: La Conferencia de Palermo	497
4.2.4: El Protocolo Adicional a la Convención Europea de los Derechos Humanos	498
4.2.4.1: El mandato de los Jefes de Estado y de Gobierno	499
4.2.4.2: El Convenio-Marco aprobado por el Comité de Ministros	501
4.2.4.3: El Convenio-Marco final	502
4.3: El tratamiento de las minorías lingüísticas en el PE: los primeros antecedentes	506
4.3.1: La Resolución Hume	507
4.3.2: La Resolución Arfé	508
4.3.2.1: La resoluciones consecuencia de la Resolución Arfé	511
4.3.2.2: El balance de la Resolución Arfé en la CE .	514
4.3.3: Resolución del PE sobre las lenguas y culturas de las minorías regionales y étnicas de la CE, o Informe Kuijpers	515

4.3.3.1: El preámbulo del Informe Kuijpers	516
4.3.3.2: El contenido del Informe Kuijpers	517
4.3.3.3: Documento de trabajo de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos Cívicos . .	519
4.3.4: El catalán, lengua de la CE	522
4.3.4.1: Los antecedentes del luxemburgués y del irlandés	523
4.3.4.2: La Resolución Reding sobre la situación de las lenguas en la CE y la de la lengua catalana	524
4.3.5: El Informe Killilea	528
4.3.5.1: Los antecedentes	529
4.3.5.2: Los principios del Informe Killilea	531
4.3.5.3: La resolución Killilea	534
4.3.5.4: El Anexo I de la Resolución Killilea: estudio sobre las lenguas y culturas minoritarias de la UE	537
4.4: Las declaraciones de la CSCE: el Acta de Helsinki .	541
4.4.1: Del Acta de Helsinki a la Carta de París . . .	542
4.4.2: La Declaración de Copenhague sobre la Dimensión Humana	546
4.4.2.1: El contenido de la Declaración de Copenhague	548
4.4.3: La Carta de París para una nueva Europa	551
4.4.4: El Simposio de Cracovia sobre el Patrimonio Cultural de la CE	552

4.4.5: El Informe de los Expertos sobre las Minorías	
Nacionales	553
4.4.6: La Declaración de Moscú de octubre de 1991 . .	556
4.4.7: La Declaración de Helsinki de 1992	558
4.4.8: La Declaración de Budapest de 1994	561
NOTAS FINALES	563
CAPITULO V: LOS CAMBIOS EN LOS ESTADOS. LAS MEJORAS CON	
RESPECTO A LAS MINORÍAS LINGÜÍSTICAS	571
5.1: Objetivos y estructura del Capítulo	572
5.2: La confección de un cuerpo doctrinal	573
5.2.1: La CELRM, su punto álgido	575
5.2.2: La unificación doctrinal entre la Europa del Este	
y la del Oeste	575
5.3: La doctrina europea: los derechos humanos de las minorías	
lingüísticas	579
5.3.1: El plurilingüismo, un valor europeo	581
5.3.2: No hay jerarquía de lengua	582
5.3.3: Las dificultades para fijar una lengua europea	
común	583
5.3.4: Lenguas de Estado y lenguas minoritarias . . .	586
5.3.5: Las obligaciones de los poderes públicos	
hacia las minorías	588
5.3.5.1: El papel del Estado	589
5.3.5.2: El papel de los poderes regionales y	
locales	591

5.3.6: La cooperación transfronteriza en materia de lenguas	595
5.3.7: La diferencia entre las minorías lingüísticas territoriales y las emigrantes	597
5.3.8: El plurilingüismo como arma para la tolerancia	599
5.4: La transposición de la doctrina europea a las legislaciones estatales y regionales	599
5.4.1: Consecuencia de estas medidas	605
5.5: Panorama actual de las minorías lingüísticas . . .	606
5.5.1: Balance de la situación	612
5.6: Los intentos de simplificación	616
NOTAS FINALES	621

CAPITULO VI: UN DEBATE ABIERTO SOBRE LA EUROPA

DEL FUTURO	623
6.1: Objetivos y estructura del Capítulo	624
6.2: Un mapa lingüístico complejo	626
6.3: Grandes diferencias inter-lingüísticas	629
6.4: Los grupos lingüísticos	630
6.5: Principio de territorialidad frente al principio de personalidad	631
6.6: La lengua como elemento definidor de las minorías étnicas	632
6.7: La lengua como base de los nacionalismos actuales .	635
6.8: La respuesta de los Estados	640
6.9: Lengua, Sociedad y Estado	644
6.10: El plurilingüismo y la cohesión europea	663
6.10.1: Las culturas regionales son Europa	665

6.10.2: Muchas lenguas para una sola Europa	668
6.10.3: Los valores del bilingüismo	674
6.10.4: El método de la inmersión	678
6.10.5: La incidencia socio-política del bilingüismo .	683
6.11: Soluciones distintas para situaciones diferentes .	685
6.11.1: Una lengua común perfecta	688
6.12: El estudio de idiomas	693
6.12.1: El Programa Lingua	696
6.12.2: El Programa Sócrates	703
6.13: La Conferencia de Madrid de Ministros de Educación	704
6.14: Euronews, televisión europea en cinco lenguas . . .	706
NOTAS FINALES	708
CONCLUSIONES	715
FUENTES Y BIBLIOGRAFIA	735
1) BIBLIOGRAFIA GENERAL	736
2) LOS ESTADOS Y SUS LENGUAS	759
a) Bibliografía	759
b) Documentos	762
c) Artículos y Reportajes	776

3) LAS INSTITUCIONES EUROPEAS, LAS LENGUAS DE ESTADO Y LAS LENGUAS MINORITARIAS	794
a) Bibliografía	794
b) Documentos	795
c) Artículos y Reportajes	809
4) LA DOCTRINA LINGÜÍSTICA DE LAS INSTITUCIONES EUROPEAS	815
a) Bibliografía	815
b) Documentos	815
c) Artículos y Reportajes	828
5) LA DOCTRINA EUROPEA SOBRE LAS LENGUAS	834
a) Bibliografía	834
b) Documentos	835
c) Artículos y Reportajes	838
- INDICE	846